

UNIFICACION DE FUENTES



JURISDICCION FEDERAL SOBRE QUIEBRAS

Y

NUEVAS CÁMARAS DE CIRCUITO

(Encuesta realizada por la Comisión
de Justicia de la H.
Cámara de Diputados de la Nación)

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUP EMA	
Nº. DE C	5652
UBIC..	58
FICHA MATE. BUENOS AIRES	

EST. GRAFICO A. DE MARTINO — RIVADAVIA 1529.

1

1



COMISION DE JUSTICIA

PRESIDENTE

Dr. Roberto Parry

SECRETARIO

José María Martínez

VOCALES

Dr. Fernando de Andreis

Dr. Luis M. Daneri

José T. Olmos

Dr. Raúl F. Oyhanarte

Dr. Herminio J. Quirós

**NOTA PASADA POR LA COMISION A MAGIS-
TRADOS, PROFESORES DE DERECHO Y
ABOGADOS.**

Buenos Aires, agosto 6 de 1920.

Al señor doctor

Por resolución de la comisión de justicia, que presido, me es grato dirigirme a usted para pedirle quiera transmitir su valiosa opinión, si le es posible antes del 31 del corriente, sobre las siguientes cuestiones:

¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital? ¿Qué solución aconseja para resolver este problema?

¿Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyéndola en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?

¿Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito?

¿Qué reformas procesales considera urgentes?

¿Conviene establecer la justicia de paz letrada en la capital federal? ¿Conviene crear cámaras de justicia de paz? ¿Qué indicaciones puede usted formular respecto a la justicia de menor cuantía? (1)

La comisión espera que usted quiera prestar su atención a estos asuntos, colaborando así a la sanción de leyes de innegable importancia.

Saludo a usted con mi consideración más distinguida.

Roberto Parry.

(1) Las contestaciones relativas a la justicia de paz han sido publicadas por separado.

“CONTESTACIONES A LA ENCUESTA”

**Del procurador de la suprema corte de la nación,
Dr. José Nicolás Matienzo**

Buenos Aires, agosto 24 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Con referencia a su atenta circular, me es grato remitirle el adjunto folleto sobre ampliación de la justicia federal, que publiqué en 1912 y que forma uno de los capítulos de un libro “Temas políticos e históricos”.

En él indico varios asuntos que deberían volver a la jurisdicción federal, de acuerdo con la letra y espíritu de la constitución, especialmente los concursos de acreedores, que en los Estados Unidos, en cumplimiento de idéntica cláusula constitucional, se substancian y deciden ante los jueces federales.

Saludo al señor presidente con toda consideración.

José Nicolás Matienzo.

AMPLIACION DE LA JUSTICIA FEDERAL

Los hechos, con su elocuencia abrumadora, han desautorizado las aprensiones que los autores de la revisión constitucional de 1860 manifestaron contra la justicia federal. El espíritu provincialista, que entonces dominaba en el partido gobernante de Buenos Aires y que inspiró las enmiendas puestas a la constitución de 1853, profesaba la teoría de que las autoridades locales eran los defensores natos de los derechos civiles y políticos. De ahí las minuciosas restricciones y trabas con que aquéllos propusieron limitar las facultades de los poderes nacionales, a quienes, sin embargo, vuelven hoy los ojos desde todas las provincias cuantos intereses legítimos buscan amparo fuerte y justo.

La reforma de 1860 debilitó el poder judicial de la nación de varios modos: 1o. confiando a los tribunales de provincia la aplicación ordinaria de los có-

digos nacionales en materia civil, comercial, penal y de minería; 2o. excluyendo de la jurisdicción federal la libertad de imprenta y los recursos de fuerza; 3o. quitando a la corte suprema la decisión de los conflictos entre los distintos poderes públicos de una misma provincia y la de las causas entre una provincia y sus propios vecinos.

Estas atribuciones pasaron a acrecentar la jurisdicción de las provincias, cuyos magistrados quedaron además eximidos de la fiscalización indirecta del gobierno nacional, en virtud de otras enmiendas de orden más general. Me refiero especialmente a dos de éstas: 1o. a la que privó al congreso de examinar las constituciones provinciales a fin de asegurar la administración de justicia y demás condiciones requeridas por la constitución nacional para la garantía federal de las instituciones locales, examen que en Suiza se practica desde 1848 por la asamblea federal respecto de las constituciones de los cantones; 2o. a la que quitó a la cámara de diputados el derecho de acusar ante el senado a los gobernadores de provincia. La eliminación de estos resortes ha permitido que los gobernadores sean de hecho irresponsables, cuando atacan la independencia de los jueces y cuando hacen modificar las constituciones locales con propósitos hostiles a la rectitud de la administración de justicia.

Leyes orgánicas posteriormente dictadas por el congreso han debilitado aún más la justicia federal. La de 14 de septiembre de 1863 le substraigo el conocimiento de los siguientes casos: 1o. de los concursos de acreedores; 2o. de los juicios universales de partición de herencia; 3o. de las causas criminales contra extranjeros o vecinos de otra provincia; 4o. de los pleitos civiles entablados ante un juez de provincia por un extranjero o vecino de otra provincia; 5o. de los pleitos civiles en que el demandado no decline de la jurisdicción provincial elegida por el actor; 6o. de las causas entre un argentino y un extranjero, o entre vecinos de distinta provincia, cuando el derecho disputado ha sido adquirido por cesión; 7o. de los pleitos en que intervienen sociedades o comunidades, cuando alguno de los miembros de ellas carezcan del derecho de invocar el fuero federal, aunque todos los demás lo tuvieran.

La ley de 3 de septiembre de 1878 excluyó de la competencia de los jueces federales todas las causas de "justicia concurrente" (las que sólo corres-

ponden al fuero federal por razón de las personas) cuya cuantía no exceda de quinientos pesos fuertes, cuando la justicia de paz de las provincias tuviera competencia para conocer de ellas. La misma ley estableció la unidad de los juicios universales de acreedores y de sucesión, atribuyendo su conocimiento al juez de la provincia donde el fallido tenga su principal establecimiento o en la que deba abrirse la sucesión según las disposiciones del código civil, que, como se sabe, designa al efecto el último domicilio del causante.

La discusión de esta ley se hizo en un ambiente menos provincialista que el de 1863. Fué iniciada el 11 de julio de 1877 por los diputados Cáceres, Gallo y Barco. La fundó el primero arguyendo la necesidad de disminuir los gastos de los pequeños litigios, que podían decidirse ante los jueces de paz, ahorrando los viajes y costas que requeriría su fallo por los jueces federales residentes en las capitales de provincia. En cuanto a los juicios universales, sólo mencionó los de sucesión. "Es cosa singular, dijo, lo que sucede. Muere un individuo dejando bienes en dos provincias. En una de ellas sus jueces declaran a una persona heredera de los bienes que se encuentran en esa provincia. En la otra, los jueces de ella le niegan la calidad de heredero y declaran a otra persona heredera de sus bienes, y de esa manera tenemos una misma sucesión con distintos herederos que se excluyen, y no hay cómo disminuir esa contienda."

El diputado Pedro Uriburu expuso sus dudas sobre la constitucionalidad del proyecto y sobre los cercenamientos hechos en 1863 a la jurisdicción federal, pero concluyó por acatar los hechos consumados. Otros diputados fueron más terminantes. Los señores Ruiz Moreno y Salas sostuvieron que el congreso carecía de facultad para despojar al poder judicial de su jurisdicción sobre las causas en que fueran parte individuos extranjeros. El diputado Alcorta sostuvo que la pluralidad de quiebras era una consecuencia necesaria de la jurisdicción provincial que se había adoptado para los juicios universales y del principio, aplicado por la jurisprudencia, de que las provincias ocupan entre sí el lugar de países extranjeros, a los efectos de su jurisdicción. Recordó que, en los Estados Unidos, el congreso había establecido la unidad de la quiebra, confando a la justicia federal el conocimiento de

esos juicios, en virtud de su facultad de legislar sobre bancarrotas, que también posee el congreso argentino. El diputado Lagos García opinó en favor del antecedente norteamericano. Por fin, prevaleció la idea de que el congreso puede confiar a la justicia provincial los asuntos que le parezca conveniente eliminar de la competencia de los tribunales nacionales, y el proyecto pasó, convirtiéndose en ley al año siguiente, previa la aprobación del senado, que sólo propuso enmiendas de detalle.

Por su parte, la jurisprudencia de la suprema corte, aplicando la máxima de que la justicia federal es de excepción y debe interpretarse restrictivamente, ha dejado también para los jueces provinciales los pleitos entre extranjeros, aunque éstos sean vecinos de distintas provincias. Los primeros precedentes de esta jurisprudencia remontan a 1864 y fueron establecidos por los mismos jueces que proyectaron la ley de jurisdicción de 1863. Ellos prescindieron, no sólo del significado de la palabra "vecino", sino de la razón que motiva la jurisdicción federal sobre las causas en que es parte un extranjero. "En cuestiones,—ha dicho Alberdi (1),—on que son parte un ministro, un agente diplomático, un cónsul extranjero, habría el mayor peligro en entregar su decisión a un tribunal o juzgado de provincia; porque un error, un capricho, un acto de mala administración judicial de su parte, podría empeñar a toda república en una cuestión internacional. El mismo peligro habría en someter a la justicia de provincia la decisión de los pleitos en que es parte algún súbdito extranjero; pues, como se ha visto en Buenos Aires, durante el gobierno de Rosas, por denegaciones de justicia de la provincia de su mando, se ha visto la república entera empeñada en guerras y bloqueos desastrosos. Sólo una autoridad penetrada de la importancia de su ministerio supremo podría administrar justicia en esos casos sin comprometer la ley y la paz de la república."

Y si se desea una autoridad norteamericana, Hamilton ha dicho en el "Federalista": "La paz del "todo" no debe ser dejada a la disposición de una "parte". La unión será indudablemente responsable hacia las potencias extranjeras de la conducta de

(1) "Derecho público provincial argentino", tomo V de las Obras completas, pág. 22.

sus miembros. Y la responsabilidad de un daño debe siempre ir acompañada de la facultad de prevenirlo. Como la denegación de justicia o su violación por las sentencias judiciales, como por cualquier otro medio, es clasificada con razón entre las justas causas de la guerra, se sigue que los jueces federales deben conocer de "todas las causas en que los ciudadanos de otros países están interesados". Esto es tan esencial a la conservación de la fe pública como a la seguridad de la tranquilidad pública. Puede quizás imaginarse una distinción entre casos regidos por los tratados y el derecho internacional y casos cuya decisión puede fundarse solamente en el derecho local. Puede suponerse que el primer género es propio para la jurisdicción federal y el último para la de los estados. Pero es por lo menos dudoso si una sentencia injusta contra un extranjero, cuando el asunto controvertido se refiere totalmente a la "lex loci", no sería, en caso de no ser reparada, una agresión contra su soberano, del mismo modo que una que violase las estipulaciones de un tratado o la ley general de las naciones. Y una objeción más grave aún contra aquella distinción resultaría de la inmensa dificultad, y tal vez imposibilidad, de un discernimiento práctico entre los casos de una clase y los de la otra. Los casos en que los extranjeros son partes envuelven cuestiones nacionales en tanta proporción, que es muchísimo más seguro y expeditivo remitirlos todos a los tribunales nacionales (1)".

Otra materia en que la jurisprudencia provincialista ha restringido la jurisdicción federal es la de los delitos cometidos por medio de la imprenta, los que, por una interpretación en mi concepto errónea, se suponen abandonados a los tribunales provinciales por el artículo 32 de la constitución, que dice: "El congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal".

Sabido es que uno de los autores de este artículo, introducido en la reforma de 1860, fué Sarmiento. Y bien, el mismo Sarmiento, siendo presidente de la nación, al abrir en 1874 las sesiones del congreso, dedicó un extenso capítulo del mensaje a los abusos de la prensa y con ese motivo precisó el sentido de aquella disposición.

(1) "The Federalist", edición de Lodge, 1892, pág. 403.

"Nuestra constitución,—dijo,—prohíbe al congreso restringir la libertad de imprenta. Pero esta libertad no está, como ninguna otra libertad humana, en oposición y fuera de los límites de las leyes, de manera que todo lo que condenan las leyes ordinarias no entra en la libertad de imprenta, que no es restringida en los casos en que las leyes restringen y condenan acciones o palabras. Nosotros no hemos inventado la lengua que hablamos, ni creado la libertad de la prensa, de manera que por libertad de imprenta hemos de entender y practicar lo que entienden y practican todas las naciones de la tierra que usan aquellas palabras o tienen aquella libertad. El congreso tiene el derecho de legislar sobre los "abusos y los delitos" de la palabra impresa, a no ser que el abuso sea sinónimo de uso legítimo, o la licencia sea la libertad por excelencia. Mi opinión es que los tribunales federales son jueces naturales de los abusos y delitos de imprenta; y puesto que la ley de justicia federal define claramente lo que es sedición e insurrección y designa las penas en que incurren los criminales, su deber es aplicarla en los casos en que la palabra impresa provoque o aconseje la insurrección o la sedición. Otra jurisprudencia traería por resultado quitar al crimen su requisito legal y esencial, que es la intención del que lo comete, y colocarla solamente en el brazo que ejecuta, la responsabilidad que corresponde en su mayor parte al que inspira y provoca el crimen".

Por mi parte, como miembro de la comisión que redactó el proyecto de código penal de 1891, concordé con mis colegas los doctores Norberto Piñero y Rodolfo Rivarola en las siguientes conclusiones: 1o. que la imprenta es un medio de ejecución de delitos comunes, al que deben aplicarse las reglas ordinarias de la represión; 2o. que no hay delitos especiales de imprenta, y toda legislación que reprima expresiones de la palabra impresa que sean ilícitas en la palabra hablada, será siempre una restricción de la libertad de la prensa; 3o. que el congreso puede legislar sobre imprenta para los casos de jurisdicción federal.

Agregaré que mi opinión personal es que el objeto del artículo 32 de la constitución fué tan sólo prevenir la posibilidad de que el congreso, adoptando la equivocada teoría de los abusos de la libertad de imprenta, sometiera la materia íntegra a

la jurisdicción federal, como las materias de patentes de invención, de bancarrotas, de piratería o de comercio marítimo. Pero de ninguna manera se propuso el artículo 32 derogar las reglas de jurisdicción federal establecidas en el artículo 100 y, mucho menos, las que fijan la competencia por razón de las personas; de suerte que los delitos cometidos por medio de la prensa deben ser juzgados por los tribunales nacionales o por los provinciales, según las circunstancias particulares que determinan la competencia. Los delitos contra la nación o contra los ministros diplomáticos y cónsules extranjeros, no pueden ser librados al criterio de los jueces locales, aunque los delinquentes se hayan valido de la prensa para cometerlos. Así lo consideró también en 1864 la suprema corte, en la causa contra D. Benjamín Calvete, acusado de desacato contra el senador D. Martín Piñero (1). En ese caso, la corte declaró que los libelos publicados contra los miembros del congreso por opiniones vertidas en desempeño de sus funciones, son delitos cuyo conocimiento corresponde a la justicia federal. Pero este precedente no ha hecho jurisprudencia. Por el contrario, repetidos fallos posteriores han declarado a la justicia federal incompetente para conocer de los delitos cometidos por medio de la imprenta. Citaré especialmente la causa contra el director de "El Debate", por desacato al presidente de la nación, y la contra don Vicente García Aguilera, por desacato al diputado don Manuel Gorostiza (2).

La ley de reorganización de la justicia federal, dictada en 11 de enero de 1902, no ha modificado la situación del poder judicial de la nación respecto de los provinciales, sino en cuanto ha ampliado la atribución de la corte suprema para decidir las cuestiones de competencia suscitadas entre jueces de distintas provincias o entre jueces locales de la capital y jueces de provincia, extendiéndola a toda clase de causas, pues la ley anterior sólo se refería a los juicios universales de quiebra y de sucesión.

Tal es el estado legal de las cosas. En cuanto al estado real, todas las referidas limitaciones puestas desde 1860 al ejercicio de la justicia nacional han servido en definitiva para favorecer la arbitrarie-

(1) Fallos de la corte suprema, tomo I, pág. 297.

(2) Fallos, tomo 30, pág. 112 y tomo 33, pág. 228.

dad y desamparar el derecho, expuesto a todo, género de incertidumbres en presencia de quince administraciones de justicia diferentes, sin que se haya conseguido realizar el régimen federativo de los Estados Unidos, a cuya imposible imitación se han sacrificado los antecedentes y las necesidades reales de la República Argentina.

Se ha procedido desde 1863 como si la constitución argentina debiera, en esta materia, interpretarse como una simple traducción de la de los Estados Unidos, traducción en la que se hubieran deslizado errores que el intérprete debiera salvar con ayuda de los comentadores norteamericanos.

Y sin embargo, Alberdi había proclamado en todos los tonos lo contrario. "Para disolver la unidad o integridad nacional de la República Argentina,—decía,—basta aplicarle al pie de la letra la constitución de los Estados Unidos, convirtiendo en estados a las que son y fueron provincias de un solo estado... Para falsear y bastardear la constitución nacional de la República Argentina, no hay sino comentarla con los comentarios de la constitución de los Estados Unidos" (1).

Las diferencias de texto entre la constitución argentina y sus modelos no son errores de traducción, sino alteraciones intencionales, introducidas en vista de las condiciones y circunstancias particulares de nuestro país.

Así, el artículo 100 (antes 97), que define la jurisdicción de los tribunales federales, contenía originariamente disposiciones que no ha contenido nunca la sección 2 del artículo tercero de la constitución de los Estados Unidos, en la cual no figuraron jamás los recursos de fuerza ni los conflictos entre poderes provinciales. Y, al contrario, la constitución argentina no prevé el caso de ciudadanos del mismo estado que pretendan tierras en virtud de concesiones hechas por diferentes estados, caso puesto bajo la jurisdicción federal por la mencionada sección 2 de la constitución norteamericana.

Fué también una alteración intencional la supresión de la distinción hecha por la constitución norteamericana entre "casos" y "controversias". En el lenguaje jurídico de los Estados Unidos, la palabra inglesa "case" (caso) es genérica y comprende to-

(1) Alberdi. "Estudios sobre la constitución argentina de 1853". Incluidos en las obras completas, tomo V, pág. 148.

da clase de asunto judicial, mientras que la palabra "controversy" (controversia) se aplica solamente a los asuntos civiles, que en castellano denominamos pleitos. La constitución norteamericana ha puesto bajo la jurisdicción federal todos los "casos" regidos por la constitución, leyes y tratados de la nación, los de almirantazgo y jurisdicción marítima y los referentes a embajadores, ministros diplomáticos y cónsules; pero, en cuanto a los demás asuntos, sólo ha incluido las "controversias" entre dos o más estados, entre un estado y ciudadanos de otro, entre ciudadanos de diferentes estados, entre ciudadanos del mismo estado que pretendan tierras en virtud de concesiones otorgadas por diferentes estados, y entre un estado, o sus ciudadanos, y estados, ciudadanos o súbditos extranjeros. La constitución argentina, más unitaria, reemplazó casos y controversias por una sola palabra, "causas", que comprende todos los asuntos judiciales, sin distinción, y que claramente incluye los asuntos criminales.

Causa, dice Escriche en su popular diccionario de jurisprudencia, es "toda contienda judicial entre partes, o todo asunto que se ventila contradictoriamente y se juzga en un tribunal"; y agrega: "Aunque el nombre de causa es común a los asuntos civiles y criminales, se aplica no obstante más bien a los criminales que a los civiles, usándose preferentemente con respecto a estos el de pleitos". La ley de 1863, restringiendo a los asuntos civiles la jurisdicción federal "*ratione personarum*", y excluyendo los asuntos criminales, alteró, pues, notoriamente el sentido ordinario y técnico del término "causa" empleado por la constitución, haciéndole perder precisamente la acepción más usual.

Otra alteración análoga ha ocurrido con el significado de la palabra "vecino", con que el artículo 100 de la constitución argentina ha reemplazado la palabra "citizen" (ciudadano) de la norteamericana.

Donde la de los Estados Unidos dice: "controversias entre un estado y ciudadanos de otro estado,—entre ciudadanos de diferentes estados,—y entre un estado, o sus ciudadanos, y estados, ciudadanos o súbditos extranjeros",—la constitución argentina dice: "Causas que se susciten entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia, o sus vecinos, contra un estado o ciudadano extranjero".

El sentido que la palabra vecino tenía en la época

de la redacción de la constitución y que aun conserva, lo da el mismo diccionario de legislación y jurisprudencia antes citado. "Vecino. — El que tiene establecido su domicilio en algún pueblo con ánimo de permanecer en él". Concuerda esta definición con el concepto que informa el artículo 12 de la ley de jurisdicción de 1863, que dice así: "La vecindad en una provincia se adquirirá, para los efectos del fuero, por la residencia continua de dos años, o por tener en ella propiedades raíces o un establecimiento de industria o de comercio, o por hallarse establecido de modo que aparezca el ánimo de permanecer".

Se puede, pues, ser vecino sin ser ciudadano: no es la nacionalidad, sino la residencia, el elemento constitutivo de la vecindad. Un extranjero puede avendarse en una provincia sin naturalizarse, sin adquirir la ciudadanía argentina, que es la única ciudadanía que se ejercita en nuestra república. Los constituyentes de 1853 y 1860 no podían hablar de ciudadanía de provincia, porque tal cosa no existía entonces, ni convenía que existiera en esta nación.

Australia, al imitar en el artículo 75 de su constitución las disposiciones del artículo III de la norteamericana, ha procedido de un modo análogo a la Argentina, substituyendo la palabra ciudadano por la de residente. La cláusula australiana dice: "Entre estados, o entre residentes de diferentes estados, o entre un estado y un residente de otro estado". No se dirá que aquí hay error de traducción, puesto que ambos textos se hallan en inglés. Lo que hay es adaptación inteligente, como en la República Argentina.

Es oportuno observar que no son los Estados Unidos el único modelo de forma federativa digno de ser imitado. Ahí están, más próximos a nosotros en población y recursos, el Canadá, Suiza y Australia, con sus respectivas constituciones federales de 1867, 1874 y 1900. Ninguno de esos florecientes y libres pueblos se ha dejado arrastrar por el ejemplo imponente de la gran república de Norte América. Cada uno ha tenido sobre todo en cuenta sus propias necesidades y circunstancias.

El Canadá ha dejado a las provincias la creación y organización de tribunales locales y la legislación sobre procedimientos civiles; pero ha reservado al gobierno federal el nombramiento de todos los jueces, la legislación sobre procedimientos en materia penal y el establecimiento de un tribunal general

de apelación para todo el Canadá, que funciona ahora en Ottawa con el título de corte suprema.

Suiza ha conferido al tribunal federal una jurisdicción parecida a la de nuestra corte suprema; pero le ha atribuido, semejantemente a la constitución argentina de 1853, el conocimiento de todo pleito entre un cantón y un individuo o corporación particular, cuando una de las partes lo pida y el litigio alcance el grado de importancia que determine la legislación federal, y, además, el conocimiento de las reclamaciones por violación de derechos constitucionales de los ciudadanos, todo sin perjuicio de la facultad de la legislación federal para ampliar estas atribuciones y, especialmente, para asegurar la uniformidad de la aplicación de las leyes dictadas en materia de derecho civil y comercial.

En cuanto a Australia, la constitución de 9 de julio de 1900 ha conferido a la alta corte federal jurisdicción de apelación sobre los tribunales superiores de los estados, en los casos en que antes procedía ese recurso para ante el rey de Inglaterra, y jurisdicción originaria o de apelación, según lo determine la ley, en todos los casos regidos por leyes federales, sin excepción, comprendiendo el derecho comercial y el de familia.

En ninguna de estas constituciones se ha rehusado a la judicatura federal el conocimiento de las causas regidas por las leyes federales, anomalía establecida en la reforma argentina de 1860 respecto de leyes tan trascendentales como son las del derecho civil, comercial y penal. Alemania, no obstante contar en su seno con estados poderosos, como los reinos de Prusia, Baviera, Sajonia y Württemberg, ha delegado en el gobierno federal la legislación civil, comercial, penal y de procedimientos judiciales. Se ha dejado a los estados, por regla general, la administración de la justicia ordinaria con sujeción a los códigos nacionales; pero el tribunal imperial que funciona en Leipzig (*Reichsgericht*) puede revisar, en grado de última instancia, las sentencias de los tribunales regionales superiores.

Comentando la organización judicial del imperio alemán, el profesor Laband, después de explicar que las sentencias de los tribunales locales tienen efecto legal en toda la nación (como ocurre en la República Argentina), observa con su habitual criterio jurídico (1):

(1) Laband, "Le droit de l'empire allemand", tomo IV, pág. 200.

"La extensión de la jurisdicción de cada uno de los estados confederados a todo el territorio de la confederación no exige solamente reglas uniformes tocante a la competencia de cada tribunal, sino también una garantía que asegure la uniformidad de interpretación y aplicación de las leyes o reglas jurídicas. En el caso presente, esta garantía no puede consistir sino en la transferencia de la jurisdicción de última instancia al imperio mismo, es decir, en el establecimiento de un tribunal imperial supremo. Aquí, la jurisdicción en cada estado sufre una limitación importante: no sólo es completada, sino dominada por la jurisdicción del imperio. Le falta, en la cúspide, la independencia: acaba en la jurisdicción del imperio y allí solamente encuentra su término final".

No miraron así las cosas los reformadores argentinos de 1860. No fué la serenidad jurídica su rasgo distintivo, como que proyectaron sus enmiendas entre dos batallas, la de Cepeda, que los convocó, y la de Pavón, que los absolvió.

Si ellos consideraron asunto de interés nacional la legislación de la familia, de la propiedad, de los contratos, de las negociaciones mercantiles, de las sucesiones, de los delitos y de las penas, y si creyeron que esa legislación debía ser uniforme para todo el país, no se explica que se desentendieran de su cumplimiento, librándolo a la buena o mala voluntad de los jueces provinciales y a la anarquía de las jurisprudencias de campanario, ya que lo que importa en las leyes no es que se dicten, sino que se cumplan.

En diversas ocasiones se ha puesto de relieve la absurda diversidad de las interpretaciones locales dadas a los códigos de la nación y la arbitraria variedad de los procedimientos, al cabo de los cuales, en vez de una sentencia definitiva largo tiempo esperada, suele obtenerse una declaración de nulidad de todo lo obrado, a fin de que las partes sigan pleiteando hasta el cansancio, la vejez o la muerte. Parece que nadie se atreverá ya a defender estos resultados jurídicos de la *soberanía provincial*, como titulaban los reformadores de 1860 al poder excesivo confluído al caciquismo local.

Y se me ocurre que tampoco ha de pretender nadie que, en los pleitos entre una provincia y sus propios vecinos, estos están más seguros de obtener justicia en los tribunales locales que en los nacionales. Una larga experiencia ha demostrado que los jueces de provincia hacen lo posible para no fallar contra su gobierno, o mejor dicho, contra los deseos del gobernador, salvo escasas y honrosas excepciones.

En publicaciones anteriores (1), he propuesto la idea de reformar la constitución con objeto de devolver a los poderes nacionales las facultades que le cercenó la revisión de 1860. Creo que esa idea o la de una reforma limitada a nacionalizar todas las causas en que sea parte un extranjero o una provincia y a uniformar la aplicación de los códigos civil, comercial y penal, no encontrarían oposiciones tenaces ante un criterio experimental y razonable. Pero es posible que susciten resistencias poderosas en la masa de intereses creados por el funcionamiento del régimen actual.

En este concepto, y mientras la propaganda y la ilustración destruyen esos obstáculos, creo que pudiera darse un gran paso en el sentido de la nacionalización de la justicia con solo derogar las leyes del congreso que, apartándose del texto constitucional, han transferido a los jueces locales atribuciones de carácter federal.

Desde luego, los concursos de acreedores deben ser devueltos a la justicia nacional, como en los Estados Unidos; en primer lugar, porque ellos están regidos por la ley de quiebras o bancarrotas, que es materia federal, excluida del código de comercio por la constitución; y, en segundo lugar, porque la universalidad del juicio atrae cuestiones que interesan a extranjeros y vecinos de distintas provincias.

Los juicios de partición de herencia y las acciones de los acreedores de la sucesión, deben, por razones análogas, ser excluidos de la jurisdicción provincial, siempre que el fuero federal corresponda según el texto de la constitución de la nación, es decir, siempre que el pleito se trabé entre vecinos de distintas provincias o sea parte un extranjero.

Las causas criminales seguidas entre vecinos de distintas provincias o en que sea parte un extranjero, no estando excluidas de la competencia federal por la constitución, deben ser restituidas a ella.

Los delitos cometidos por medio de la imprenta deben ser juzgados por los tribunales federales en los casos en que el delito en sí mismo, prescindiendo del instrumento, cae bajo la jurisdicción federal por razón de la materia o las personas; o, en otros términos, la circunstancia de ser cometido por medio de la imprenta no basta para que un delito sea excluido del fuero federal; o, más brevemente, el instrumento empleado por el delincuente carece de fuero.

En los casos en que intervienen sociedades o co-

(1) Matienzo, "El gobierno representativo federal, págs. 331 a 348.

munidades, la regla debería ser la inversa de la actual; esto es, debería bastar para la procedencia del fuero federal que uno de los litigantes tenga el derecho de acogerse a la jurisdicción nacional, ya que el objeto de este fuero es proteger el derecho contra la posible parcialidad o deficiencia de la justicia de provincia y no hay razón para que esa protección desaparezca cuando otros colitigantes no tengan título a ella.

La prórroga de jurisdicción podría ser suprimida sin inconveniente alguno, tanto más cuanto que hoy se efectúa, en ciertos casos, por la voluntad de una sola de las partes. Es mucho más serio y más sencillo que cada asunto tenga su juez natural e invariable. La corte suprema ya ha declarado improrrogable la jurisdicción federal *ratione materiae*. Falta extender ese principio a la jurisdicción *ratione personarum*.

Y por lo que hace a la jurisprudencia, convendría que la ley le diera rumbos más nacionalistas, estableciendo el principio general de que, en caso de duda, las cuestiones de competencia entre jueces federales y provinciales deban decidirse en favor de los primeros; porque ellos representan la justicia suprema del país, la justicia creada para tutelar los derechos más preciosos y las garantías constitucionales más solemnes, la justicia cuya responsabilidad asume ante el mundo la nación argentina.

He ahí, a mi modo de ver, el procedimiento más prudente para eliminar los vicios criticados en la actual organización de la judicatura y tonificar la institución nacional que se ha conservado más serena y respetable en medio de las contradicciones generales.

José Nicolás Matienzo.

**De los miembros de la cámara federal de Córdoba,
doctores González, Posse y Berduc**

Córdoba, septiembre 14 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

Buenos Aires.

Los que subscriben, miembros de la cámara federal

de Córdoba, habiendo cambiado ideas sobre los puntos materia de la consulta a que se refiere la circular de fecha 10. del corriente, que particularmente recibíramos de esa comisión, y habiendo llegado a idénticas conclusiones a su respecto, nos permitimos evacuarla en un solo informe.

Contestando a la primera pregunta sobre si conviene uniformar los fueros federal y ordinario de los tribunales de la capital, respondemos afirmativamente, porque en nuestro concepto ello es no sólo conveniente, sino que daría fin a una situación que no se explica sino como la supervivencia de un estado de cosas que tuvo su razón de ser cuando la ciudad de Buenos Aires era a la vez capital de la república y parte integrante del territorio de una provincia argentina, en cuya época podían y aún debían existir separadas las jurisdicción federal y la provincial. Hoy, que la capital es simplemente un territorio federal, resulta inconcebible que a diferencia de lo que pasa en otros territorios, puedan coexistir en ella estas dos especies de jurisdicción que en principio, procederían de diversas fuentes de autoridad, porque la jurisdicción federal es en el sistema de la constitución lo opuesto a la jurisdicción de los estados particulares o locales.

Habría por otra parte que recurrir a una ficción injustificable para imaginar que tribunales del mismo origen, es decir nacionales, pudieran ofrecer mayor o menor garantía de rectitud e independencia según que se les denominaran federales o comunes, ya que el fuero federal no implica otra cosa que la garantía que ofrece la intervención de la justicia nacional en ciertos asuntos que por su naturaleza o por las personas que en ellos intervienen, afectan o pueden afectar los intereses generales de la nación.

Esto nos lleva a afirmar que no puede haber inconveniente alguno de orden constitucional para que los jueces de la capital de la república ejerzan a la vez jurisdicción común y federal, y que por el contrario, así debiera establecerse de acuerdo con la misma constitución, que sanciona la unidad del poder judicial como la de los otros poderes de gobierno, disponiendo que él será ejercido por la suprema corte y por los demás tribunales inferiores que el congreso establezca *en el territorio de la república*. (Artículo 94), sin hacer distinción alguna respecto a los territorios nacionales, de lo que se deduce, que allí donde la nación tiene tan sólo jurisdicción restringida como en el territorio de las provincias, su poder judicial también la tendrá, y donde ejerza jurisdicción exclusiva y absoluta como en

los territorios nacionales, la del poder judicial debe tener iguales caracteres, pues de otro modo habría que admitir la coexistencia de dos entidades independientes e irreductibles, de dos poderes judiciales: el uno federal y el otro local.

Sintetizando: En los territorios nacionales no puede existir sino la justicia nacional, cuya jurisdicción exclusiva y universal, abraza tanto el conocimiento de las causas que corresponden a la ordinaria o local en los estados federales, como de aquellas enumeradas en el artículo 100 de la constitución, que son dentro del territorio de los mismos materia de la jurisdicción limitada y de excepción de la justicia federal.

Por lo demás, la cuestión sobre constitucionalidad de la unificación de los fueros, ha sido resuelta afirmativamente por todas las leyes orgánicas de la justicia nacional, como se demuestra en el mensaje que en 8 de junio de 1909 elevara el honorable congreso al entonces presidente de la república doctor José Figueroa Alcorta donde proponía la reforma de la justicia de la capital sobre aquella base. La ley número 1532 de 16 de octubre de 1884 atribuía a los jueces letrados en los territorios nacionales jurisdicción para entender en las causas que según la ley orgánica de los tribunales de la capital corresponden a los jueces de lo civil, comercial, correccional y criminal y también en las de las del fuero federal, jurisdicción que por la ley número 4055 (art. 12) ejercen los mismos jueces y las cámaras federales de La Plata, Córdoba y Paraná de modo que en caso de que aquella unificación se llevara a efecto, no se haría otra cosa que poner a la capital en las mismas condiciones de los demás territorios federales y conformarse a lo dispuesto por el artículo 67, inciso 27 que atribuye al congreso la facultad de legislar exclusivamente en la capital de la república.

Considerando ahora la reforma desde el punto de vista práctico, vemos su conveniencia no solamente en que por ella se evitarían las numerosas y a veces difíciles cuestiones de competencia que hoy se suscitan, lo que simplificaría los trámites judiciales, sino también en la unificación de las leyes de procedimientos y de la jurisprudencia y en la ventaja que habría de dividir el trabajo por razón de la materia y no del fuero, permitiendo a los jueces especializarse en una rama del derecho, lo que hoy no puede suceder con los magistrados del orden federal que deben aplicar todos los códigos y leyes especiales de la nación.

En el deseo de que esta nota llegue a poder de la honorable comisión de justicia dentro del término fijado a la encuesta, nos limitamos en este punto a las consideraciones que preceden, absteniéndonos de emitir opinión sobre la forma en que debiera llevarse a la práctica la nueva organización de justicia en la capital de la república materia sobre la que por otra parte, son los magistrados que allí ejercen su ministerio quienes se encuentran en condiciones de pronunciarse con mayor acierto que nosotros.

Por la razón de urgencia mencionada, la honorable comisión nos excusará, que tan sólo nos ocupemos de una de las más interesantes cuestiones propuestas en su circular — la penúltima — manifestando de paso respecto a la segunda, cuya importancia y dificultad reconocemos, nuestra convicción de que prescindiendo del problema constitucional que ella plantea, el hecho de extender la jurisdicción federal a los juicios de quiebra, concursos de acreedores, causas criminales en las que sean partes argentinos y extranjeros, etc., se traduciría en un enorme aumento de trabajo para los tribunales federales y en la necesidad de recargar pesadamente los gastos de la administración creando nuevas cámaras y numerosos juzgados, lo que no creemos pueda justificar una reforma que en nuestro sentir no es reclamada por una evidente conveniencia pública.

La cuestión a que nos referimos está formulada así: ¿Qué reformas procesales considera urgentes?

Contestamos: La reforma del procedimiento federal en materia civil y comercial, cuya necesidad se hace sentir de día en día con mayor apremio desde hace muchos años, y que bastarían a demostrar las innumerables supresiones, ampliaciones y reformas parciales de que sin método y sin plan alguno ha sido objeto la ley número 50 de 14 de septiembre de 1863.

No proponemos que esa antigua ley excelente en la época que se dictó, sea del todo cambiada, sino que se la modifique de acuerdo a los progresos alcanzados por la ciencia procesal en los cincuenta y siete años que han corrido desde la fecha de su sanción; que se la adapte a las condiciones y necesidades actuales, convirtiéndola en un cuerpo armónico de doctrina que reemplace al abigarrado hacinamiento de leyes tomadas de todas las fuentes que hoy rigen el procedimiento federal y que por su número, por su falta de coordinación y hasta por la diversa forma en que han sido incorporadas al

mismo, resultan de complicada y difícil aplicación, dando con ello motivo al cúmulo de cuestiones de forma que obstaculizan la marcha regular de los juicios, compliquen las resoluciones, retardan y encarecen la justicia.

Hoy nuestra legislación de procedimientos en lo civil y comercial está constituida: 1o. Por la ley número 50 del 63, ampliada con la incorporación de los títulos XIII y XVIII del código de procedimientos civiles de la capital de la república (ley número 3375) y reformada parcialmente en multitud de sus disposiciones por leyes aisladas entre las que podríamos citar: la ley número 514 suprimiendo el título XXVI; las números 935 y 3266 sobre recusación con causa y sin causa, siendo esta última hasta ahora materia de viva controversia sobre si debe aplicarse a los miembros de las cámaras federales o solamente a los de la suprema corte; la número 3094 sobre regulación de honorarios cuyo artículo 3o. ha sido causa de una variada y discordante jurisprudencia; la 3375 modificando el procedimiento de segunda instancia; la número 3649 y 3981 sobre notificaciones y substitución por otros de los artículos 191, 205, 207, 252, 253, 255, 266, 290 y 374; las números 3365 y 6560 sobre nombramiento de peritos; la 4162 sobre suplencias; la número 4550 sobre perención y caducidad de instancia, etc.;

2o. Por el código de procedimiento de la capital de la república que la ley número 3981 declaró supletoria del federal;

3o. Por las leyes que a la época de la sanción de la ley número 50, reglamentaban los procedimientos judiciales, supletorias también de ésta en defecto del código de procedimiento de la capital (ley 3981 citada).

En nuestro concepto bastan estos antecedentes para fundar la necesidad y urgencia de la reforma que indicamos. Ellos muestran por sí solos el estado caótico a que ha llegado nuestra legislación procesal y los graves males e inconvenientes que esta situación comporta y que brevemente hemos señalado.

No creemos que sea necesario abundar en mayores consideraciones sobre un punto respecto al cual entendemos que no hay discrepancia de opiniones en la magistratura y foro de la república.

Dejando así evacuado el informe solicitado, nos es grato saludar al señor presidente con las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Nemesio González. — A. G. Posse.—A. Berduc

**Del vocal de la cámara federal de Paraná, doctor
F. Díaz de Vivar**

Paraná, septiembre 9 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Capital Federal.

Tengo el honor de acusar recibo a sus atentas del 6 de agosto y primero del corriente por las que se me requiere opinión sobre los puntos especificados en ellos, y que se relacionan con las cuestiones de la incumbencia de esa comisión.

Lamento que la premura del tiempo y el recargo del trabajo del tribunal de que formo parte, no me permitan ocuparme con la detención y amplitud que la importancia de las cuestiones incluidas en la encuesta requieren.

Me concretaré por lo tanto a dos de esas preguntas y aún así me veré en la necesidad de exponer escuetamente mi opinión respecto de ellas.

¿Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito?

Me referiré exclusivamente, al contestar este punto, a la jurisdicción territorial de la cámara federal de Paraná.

Ella es enorme. Son dos provincias, Entre Ríos y Corrientes, y tres territorios nacionales, Chaco, Formosa y Misiones, todos grandes y poblados, los que por las leyes 4055 y 7099 están comprendidos en su jurisdicción, con ocho juzgados, tres federales y cinco letrados.

Las comunicaciones son largas y lentas, y forzosamente las apelaciones y consultas, las quejas, etc., tienen que sufrir por tal motivo mayor demora que con la tramitación y resolución de las causas respectivas. El contralor del superior se hace asimismo difícil; las causas graves se aminoran a la distancia y, cosa singular, al contrario, muchas veces se magnifican las pequeñas.

Gran número de resoluciones judiciales, muchas de ellas dictadas con evidente error o injusticia, no son recurridas por horror a las demoras que no está en manos del superior corregirlas, ya que vienen de la lentitud de los trámites marcados por la ley y de las enormes distancias que hay que salvar.

Es claro que los inconvenientes anotados quedarían subsanados con la creación de tribunales superiores en

el lugar del asiento de los respectivos juzgados. Pero, eso no es posible.

¿Se remediaría en algo con la creación de una sola cámara más dentro de la jurisdicción territorial actual de la del Paraná?

Consiguientemente con ello vendría la disminución del trabajo; pero no es eso tan solo lo que por hoy se busca ni lo más urgente, y los otros inconvenientes quedarían en pie, cualquiera sea el asiento del nuevo tribunal.

Quizá todo quedará resuelto con la reforma de la legislación actual y la creación de cámaras que periódicamente se instalarán en donde funcionan los juzgados para resolver por lo menos cierta clase de asuntos de menor importancia o que se refieran sólo a incidente, sin perjuicio de que tuvieran su asiento en lugar determinado.

Creo que en Estados Unidos de Norte América existen.

Entre tanto, pienso que la administración de justicia en los territorios mejoraría considerablemente mediante la visita periódica y obligatoria de uno de los miembros de las cámaras respectivas a los juzgados de su jurisdicción, con facultades amplias que se consignarían en la ley; verdaderas inspecciones con fines de contralor, etc.

Como complemento opino que debe atribuírse mayor amplitud a la superintendencia, por hoy casi nula, que las leyes 4055 y 7099, acuerdan a las cámaras federales, y aún la de la suprema corte a quien, pienso, debe darse facultades para suspender en sus funciones, de oficio o a requisición de las cámaras, a los jueces y demás funcionarios y aún a los camaristas, respecto de los cuales crea la corte que existan causas suficientes para la adopción de tal medida.

Las inspecciones que actualmente hacen o deben hacer los inspectores de justicia no son tales. No están autorizados por la ley sino para revisar expedientes a los efectos fiscales, ni puede estar un juez supeditado a un funcionario que no es siquiera igual a él, porque no tienen las prerrogativas que la constitución acuerda a los jueces. Debe ser esta, atribución y obligación del superior gerárquico.

Para ello, naturalmente, hay que comenzar por aumentar el número de los miembros de las cámaras formadas por tres, hasta cinco, de modo que estando ausentes uno o más de ellos en los casos de inspección, puedan los demás seguir formando tribunal y fallando las causas respectivas. Esas inspecciones (en las que queda-

rían incluidos aún los juzgados de paz) han dado en Entre Ríos un gran resultado y lamento no disponer de mayor tiempo para demostrar esta afirmación.

Con lo que precede queda contestado no sólo el punto relativo a la creación de nuevas cámaras federales, sino en parte al menos el que se sigue en el orden de la encuesta, es decir, la reforma de los procedimientos vigentes.

Mucho habría que decir respecto de estos últimos; pero me concretaré a apuntar la necesidad urgente que existe de que los procedimientos actuales sean unificados, simplificados y aclarados.

Por ejemplo: ocurre que en la actualidad esta cámara debe aplicar en segunda instancia el procedimiento federal (ley 4055), aún en causas que han tenido en primera el procedimiento para la justicia ordinaria y que proceden del Chaco, Formosa y Misiones.

Debe unificarse el procedimiento; no hay razón para que existan varios y aún disposiciones, sobre todo en lo federal, dispersas en muchísimas leyes.

Si esa comisión encontrara aceptable alguna de las ideas esbozadas en la presente, tendría mucho gusto en ampliarla más adelante, con más tiempo.

Dejando así satisfechos en parte los deseos de esa comisión, me complazco en saludar al señor presidente con mi consideración distinguida.

F. Díaz de Vivar.

**Del vocal de la cámara federal de Paraná, doctor
C. B. Pérez Colman**

Paraná, septiembre 14 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Buenos Aires.

Correspondiendo a su atenta circular de fecha 10. del corriente mes, me es grato enviarle mi opinión en lo que respecta a los puntos relacionados con la justicia federal.

1o. La unificación de los fueros federal y ordinario de la capital, afecta en mi sentir nuestro estatuto fun-

damental en todas las disposiciones relativas al régimen político de la capital de la nación y a la organización de la justicia federal.

Creo inútil hacer citas de textos legales y entrar en consideraciones de orden teórico toda vez que esta materia ha sido profusamente estudiada. Me limitaré pues a significar que el celo de los constituyentes por organizar la justicia federal con caracteres propios y exclusivos, los llevó a sancionar a incitación de la convención provincial de Buenos Aires de 1860 el artículo 34 de la constitución que establece: Que los jueces de las cortes federales no podrán serlo a un mismo tiempo de los tribunales de provincia.

Equiparada políticamente la capital federal a una provincia, con sus propias autoridades y representantes ante los poderes del gobierno federal, cómo es posible realizar la unificación de la justicia, ante la disposición del artículo 34 citado?

2o. Creo que no es conveniente aumentar el número de cámaras federales, porque no hay razón ninguna que aconseje tal medida.

Las cámaras federales de La Plata y Paraná son las más recargadas en su labor, por razón de la doble jurisdicción ordinaria y federal que tienen que ejercitar a consecuencia de intervenir como tribunales de apelación en los asuntos provenientes de los territorios nacionales. Sin embargo, todo inconveniente podría obviarse aumentando a cinco los miembros de dichas cámaras, a igual que la de la capital federal.

Por otra parte, debe tenerse presente que de acuerdo con la ley de la materia, en breve tiempo deben erigirse en provincias, los territorios cuya población alcance a la cifra establecida por la ley, de suerte que paulatinamente irán los territorios organizando sus propios tribunales ordinarios, con lo que se descongestionará el trabajo de las cámaras de circuito, cuya jurisdicción se limitará a los asuntos del fuero federal.

Aprovecho esta oportunidad para saludar a usted con la seguridad de mi distinguida consideración.

César B. Pérez Colman.

Del juez federal de La Plata, doctor Clodomiro Zavalía

La Plata, agosto 20 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, en contestación a su comunicación de 6 del corriente, adjuntando las respuestas al cuestionario relativo a la unificación del fuero.

Aprovecho para saludar al señor presidente con toda consideración.

C. Zavalía.

10.

¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital?

Sólo con el propósito de evitar contiendas de competencia convendría la unificación de los fueros; pero si aquellas contiendas pueden evitarse con remedios de índole procesal, — que más adelante he de proponer, — la verdadera conveniencia está en dejar subsistente el sistema judicial en vigencia, según el cual, al lado de la "justicia nacional", creada con un alto pensamiento institucional, puede y debe existir un orden judicial menos importante, en cuanto sólo interviene en los conflictos de derecho privado, en el territorio federalizado, en tanto que a los *jueces de la nación* les queda la tarea de ser "guardianes y mantenedores de la observancia de la constitución", al decir del senador Zapata en 1858. El mismo legislador, — informante en el senado nacional de la ley orgánica de la justicia nacional, — acentuó aun más con las siguientes palabras el importantísimo rol de la misma: "De este modo" — dijo — la justicia federal viene a ser la gran rueda "gubernamental del país, la garantía de todos los derechos, el moderador poderoso y constante... de los "otros dos altos poderes constitucionales". Es esa, en efecto, la tarea primordial de los jueces creados por la constitución, cuyos artículos 100 y 101 limitan sólo a unas pocas cuestiones su intervención. Y no se crea

que esa selección y enumeración es arbitraria. No. Basta para ello tener en cuenta que por sobre el vulgar litigio de derecho civil o comercial existen cuestiones de un interés más general y elevado al que se vinculan el honor de la nación, la seguridad de sus instituciones, el cumplimiento de las leyes militares, la solución de los problemas imprevistos que el progreso general crea y que son materia de "leyes especiales", las necesidades de la navegación y del comercio internacional, el patrimonio fiscal o su autoridad de poder administrador cuando la nación es demandada judicialmente y, sobre todo, la integridad de la constitución, en los casos en que una ley fuese dictada sin una estricta sujeción a la misma, llegados los cuales, los jueces federales, en presencia de la indispensable contienda entre partes, fulminan el deshaucio de la ley, aun sin que aquellas articulen expresamente la inconstitucionalidad. Se concibe, entonces, que cuando existen cuestiones de aquella índole, de tan compleja y delicada contextura, deba existir, también, una especialísima categoría de jueces alejados del común de las controversias judiciales y sólo atentos a esos casos en que la solución trae aparejada con frecuencia graves aspectos de la vida constitucional, que suelen ser a veces trascendentales cuestiones de gobierno.

Planteadas así las cosas, parecería evidente que debiera orientarse la reforma en el sentido de substraer de la competencia federal los pleitos civiles y comerciales entre un extranjero y un argentino y aquellos en que las partes estén domiciliadas en distintas provincias. El designio de los constituyentes de crear una justicia excepcional dotada de la mayor garantía que por esas épocas significaba su origen nacional, — designio que se quedó corto al no entregar la vida de los extranjeros al amparo también de esos jueces (es sabido que las causas criminales no son nunca federales, por razón de la nacionalidad de la víctima), si tuvo su razón de ser en la incipiente de las justicias provinciales, no se explica ya hoy día, así como no resulta tener base, la necesidad de substraer de los jueces locales el conocimiento de los pleitos entre *vecinos* de distintas provincias. Se creía entonces que el habitante de Córdoba, v. gr. encontraría excesivo amparo y parcialidad en los jueces de la misma, llegado el caso de una contienda con un habitante de otra provincia. Pero en los tiempos que corren, en que es tan fácil el control de la opinión pública servido por un intenso intercambio telegráfico y periodístico, no es posible ya que los jueces tuerzan la ley para dar razón al que no la tiene, así como no

habría tampoco el peligro de que, por xenofobia, dejara de protegerse judicialmente al extranjero en trance de litigar con un nativo.

Quiero con todo esto decir que se acentuaría aun más el carácter de la justicia federal substrayéndole *en absoluto* la aplicación del derecho común, aun en esos mencionados casos de distinta vecindad y distinta nacionalidad y en los de bancarrotas (quiebras comerciales y concursos civiles) que, a pesar del precepto constitucional, forman parte hoy día de la codificación común, cuya aplicación hace la justicia local, malgrado el carácter indiscutible de "ley especial del congreso" que debe tener todo lo que se relaciona con las falencias. Pero todo esto significaría la necesidad de una reforma constitucional, procedimiento largo y poco factible, reñido con el concepto práctico y expeditivo que caracteriza los procedimientos de la actual comisión de justicia. Sin reforma de la constitución, con sólo una acertada legislación, pueden salvarse los inconvenientes actuales emergentes de la dualidad de fueros, que han hecho pensar más de una vez en la necesidad de unificarlos.

Con su gran autoridad en la materia, el doctor Matienzo ha señalado alguna vez la tendencia de la legislación y la jurisprudencia a restringir el campo de acción de la justicia federal. El lo deplora, en nombre de un respetable concepto histórico, que mira más a la conveniencia de respetar los propósitos con que los constituyentes de 1853 establecieron el poder judicial de la nación, que a las reales necesidades de la vida institucional contemporánea, en la cual no existe ya el peligro, como antes lo digo, de que la aversión al extranjero o el espíritu de localismo oriente las actividades judiciales. Con ser como soy, un ardiente partidario de fortalecer los poderes de la justicia nacional, sostengo que ello ha de lograrse más fácilmente restringiendo antes que ampliando su radio de acción: la fuerza por la intensidad y no por la extensión. Y así como he de proclamar siempre que cuando está de por medio la integridad de las instituciones nacionales, amenazadas cada vez más por la prédica de ideas subversivas, no deben ser sino los jueces de la nación los que repriman esas actividades desquiclantes, importando poco que se use de la prensa para realizar la propaganda; así como me afirmo, cada vez más, en la creencia de que debe existir un orden especial de jueces para entender en los casos en que el congreso legisla con carácter especial, en los de demandas contra la nación, en los de almirantazgo y jurisdicción marítima,

y en aquellos en que se señale una desviación constitucional,—así creo, también, que el derecho común debe considerarse ajeno a la actividad de semejantes jueces. Debe seguir el régimen actual,—en que ese derecho común se aplica, *sólo por excepción*, en los casos de distinta nacionalidad y distinta vecindad, en pleitos civiles, ello para evitar una reforma constitucional; pero no debe pensarse en dar a los jueces creados por la constitución la tarea vulgar de entender en *toda clase de asuntos*, que eso y no otra cosa importaría la unificación del fuero, es decir, el establecimiento para la capital federal de una sola clase de jueces con tan amplia jurisdicción, que lo mismo serviría para declarar la inconstitucionalidad de una ley que para substanciar un cobro ejecutivo o un desalojo. Habiéndose impuesto en 1860 la doctrina de que la legislación común debe ser aplicada por la justicia local, atribuyéndola sólo por excepción a la justicia federal, en los casos de distinta nacionalidad y distinta vecindad, desaparecidas las causas que determinaron esa excepción, lo natural es que *todo* el derecho común sea aplicado, sin distinción de nacionalidad ni de vecindad, por los jueces ordinarios, quedando a los federales el conocimiento de las cuestiones ajenas al interés privado.

2o.

¿Qué solución aconseja?

Los inconvenientes que nacen del doble fuero,—y sobre la base de que el "federal" debe subsistir con su carácter actual,—pueden corregirse con una acertada reforma de la legislación procesal vigente, anticuada en gran parte y contradictoria por estar articulada en cuerpos aislados, tales como las leyes 27, 44, 48, 50, 927, 935, 1467, 3094, 3375, 3649, 3981, 4128, 5106, 5133, 7055 y 9007 (comunes unas, otras no, a los dos fueros) además de los códigos de procedimientos en lo civil y comercial y criminal, de los cuales el primero es supletorio para la justicia federal en todo aquello que la ley 50 no preve. Fácilmente se concibe lo difícil y pernicioso que resulta el trámite judicial substanciado de acuerdo con un sistema procesal tan fragmentario y disperso; en cuyo caso la única solución posible es la agregación de todas esas aisladas disposiciones a los códigos de procedimientos mencionados, que vendrán a ser así los únicos que han de regir en la capital para los dos fueros y en los juzgados federales de pro-

vincia, desapareciendo de ese modo la anomalía de que los juicios civiles ordinarios v. gr. se substancien actualmente en la capital, dentro del mismo palacio de justicia, conforme a dos sistemas procesales: la ley 50 en los juzgados federales y el código de procedimientos en los tribunales ordinarios.

Debe realizarse una gran compulsa de los fallos de la corte suprema en materia de "competencia" y adoptar los principios de la jurisprudencia que se haya vuelto ya irrevocable, para agregarlos como otros tantos artículos al código de procedimientos "único" (uno en materia civil y otro en lo criminal) que propongo. Así, por ejemplo, en los casos de distinta vecindad debe establecerse que no procede el fuero federal cuando una de las partes es extranjera, que es la interpretación que la corte ha dado a la constitución cuando habla de "vecinos", habiendo originado esta cuestión un sinnúmero de contiendas de competencia que pueden evitarse para el futuro determinando, como digo, clara y expresamente en el código de procedimientos "único", que para que el fuero federal sea procedente, por razón de la diversa vecindad, es indispensable que no concurra la distinta nacionalidad.

Debe, igualmente, especificarse el doble carácter de las autoridades de la nación residentes en el distrito federal para evitar una gran cantidad de contiendas de competencia originadas por la dificultad para determinar los casos en que aquellas obran como autoridad "general" de la nación o como autoridad "local" del distrito federal. En el primer caso debe establecerse que es la justicia federal la competente (en el desalojo de una sucursal de correo v. gr. o en un crimen cometido en un colegio nacional) y en el segundo que lo es la justicia ordinaria de la capital (si el desalojo fuera, por ejemplo, de la casa en que está la inspección de justicia o el crimen se hubiese cometido en una escuela primaria).

El articulado destinado a salvar los inconvenientes actuales, es decir a despejar las dudas tan funestas que nacen acerca del juez a quien ha de acudir, puede hacerse, dentro de los poderes indiscutibles del congreso, en la misma forma empleada en las leyes 48 y 1467, las cuales y las demás que antes he enumerado, deben ser derogadas, salvando sólo aquellas disposiciones que armonicen con el concepto general que se adopte y respondan a

reales exigencias de la vida judicial. Sobre todo el capítulo de "jurisdicción y competencia" de los dos órdenes judiciales que funcionan en la capital federal debe ser prolijamente especificado, previendo el mayor número de situaciones posibles. De esta manera cada uno de aquellos desenvolverá su actividad dentro de un campo de acción perfectamente delimitado; y disminuídas o desaparecidas, en consecuencia, las contiendas de competencia, no habrá motivos para abominar del doble fuero existente, cada uno de los cuales, lo repito, una vez más, tiene roles absolutamente distintos, susceptibles de coexistir.

Y aquí cabe recordar que cuando en 1880 hubo necesidad de reemplazar a los jueces provinciales, que habían tenido hasta entonces a su cargo la aplicación del derecho común, pareció "prima facie" que no había más que ampliar el número de jueces federales; pero apenas se penetró la cuestión, se vió hasta qué punto era un obstáculo el artículo 100 de la constitución, que enumera los "únicos" casos en que los jueces federales pueden intervenir; de modo que, forzosamente, debieron crearse jueces a los cuales fuese posible atribuir, "por medio de una ley", el conocimiento de todas las cuestiones emergentes del derecho privado. Y no se pensó en reformar la constitución para poder ampliar la jurisdicción de los jueces federales, es decir, para que fuesen jueces de derecho común, porque se impuso el convencimiento de que la justicia federal tenía por sobre esa tarea otra muy importante relacionada con el interés institucional de la república.

3o.

¿Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?

Ya he dicho que no conviene ampliar la jurisdicción federal en el terreno del derecho privado. En lo que a las quiebras se refiere, es indiscutible que la constitución ha atribuido su conocimiento a la justicia federal en cuanto substraer esa materia de la codificación general, dándole el carácter de "ley especial del congreso", que sólo dicha justicia federal puede aplicar; y lo ha hecho con el concepto de que la universalidad del juicio atrae cuestiones que interesan a extranjeros y a vecinos de distintas pro-

vincias, es decir, el mismo concepto que lleva a algunos tratadistas a sostener que deben ser de competencia federal los concursos civiles y los juicios sucesorios. Basta consignar que la práctica ha demostrado que no existen inconvenientes 'mayores en que sea la justicia ordinaria la que entienda en materia de quiebras, para convencerse de que la trasgresión constitucional que ello significa se hace en nombre de un indiscutible buen sentido, que es la característica de nuestro pueblo, ese mismo buen sentido que ha determinado otra trasgresión constitucional: la no implantación del juicio por jurados.

Si con motivo de alguna quiebra en que hubiese habido acreedores extranjeros, v. gr., hubiese estado en juego la seriedad de los procedimientos judiciales argentinos, vistos desde Europa o Norte América, entónces sí habría habido razón para alarmarse y para pensar en la necesidad de que sea la justicia federal la que tutele esos derechos.

Si alguna vez se reforma la constitución, la situación puede y debe legalizarse, haciendo desaparecer la cláusula que atribuye a los jueces federales el conocimiento de las quiebras; pero mientras tanto la conveniencia está en respetar la situación actual.

40.

¿Conviene aumentar el número de cámaras federales?

Conviene crear una cámara federal en Tucumán, pues en todo el norte de la república no existe ninguna y aumentar a cinco el número de miembros de la cámara federal de La Plata, dividida en dos salas con un presidente común, que deberán turnarse. Conviene modificar la actual composición de las existentes, haciéndola más racional en cuanto es posible, dada la anomalía que significa una cámara al lado de otra, como las de Paraná y Rosario, creada esta última sin necesidad, sólo por el deseo del foro santafecino de no "depender" de Entre Ríos, para nada, con un espíritu de los viejos tiempos. Y la prueba de que se creó indebidamente esa cámara, es que casi no tiene trabajo.

El interés general estaría mejor servido que ahora, distribuyendo así las provincias:

10.—Círculo. — Cámara de apelación de la capital: Juzgados federales de la capital y juzgados letrados de la Pampa.

2o.—Circuito. — Cámara federal de La Plata: Juzgados federales de La Plata y Bahía Blanca y juzgados letrados de Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro.

3o.—Circuito. — Cámara federal de Paraná: Juzgados federales de Paraná, Concepción de Uruguay, Corrientes y juzgado letrado de Misiones.

4o.—Circuito. — Cámara federal de Rosario: Juzgados federales de Santa Fe, Rosario, y juzgados letrados de Chaco y Formosa.

5o.—Circuito. — Cámara federal de Córdoba: Juzgados federales de Córdoba, Bell Ville, San Luis, Mendoza y San Juan.

6o. Circuito. — Cámara federal de Tucumán: Juzgados federales de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.

De este modo, por lo pronto, se evita, entre otras cosas absurdas, el que la apelación de Jujuy venga a Córdoba, y la de Mendoza a la capital federal.

5o.

¿Qué reformas procesales considera urgentes?

1o.—Que los secretarios de juzgado puedan firmar las providencias de mero trámite y presidir las audiencias "cuando hubiere conformidad de partes".

2o.—Que se organice el ministerio fiscal en su doble carácter de gestor de los intereses pecuniarios de la nación y representante de la vindicta pública, y que los funcionarios de este último carácter se nombren con acuerdo del senado.

3o.—Que la ley 4128, sobre reformas al código de procedimientos en lo civil y comercial de la capital, se aplique en la justicia de los territorios nacionales, y también en los tribunales federales, suprimiendo para esta última justicia solamente las palabras "sin causa" del artículo 4, y "de la capital" del artículo 14.

4o.—Al iniciarse un juicio, en el primer decreto, los jueces señalarán dos días no continuos, en la semana, para que los litigantes concurran a secretaria a notificarse de las providencias de todo carácter y sentencias dictadas con anterioridad.

Desde el día subsiguiente a aquel señalado, a tal efecto, se considerarán notificadas sin más trámite "todas" las resoluciones judiciales incluso las sentencias definitivas y los términos señalados para in-

terponer recursos, principiarán a correr desde ese día. (De esta manera se evitará la situación que crean los litigantes de no muy buena fe que concurren a secretaría, se informan de las resoluciones y con cualquier pretexto se retiran sin notificarse, logrando de esa manera irregular alargar los términos judiciales).

50.—Para que una resolución judicial sea revocada por apelación, se requiere que, por lo menos, haya un voto de mayoría, contadas las opiniones de todos los jueces, incluso el "a quo"; si esa mayoría no existiera se insaculará de la lista un conuez, hasta obtenerla.

60.—En vista de que es frecuente la existencia de jurisprudencias distintas de las cámaras federales, — no existiendo el procedimiento para unificarla que la ley establece para las cámaras civiles de la capital, — convendría establecer un procedimiento según el cual la corte suprema pueda unificar aquella.

70.—Los agentes y procuradores fiscales y defensores de pobres podrán ser reemplazados en caso de impedimento o vacancia por los secretarios letrados, en orden de antigüedad, en los juicios en que no actuaren como secretarios.

Algunas de estas reformas, se señalan, naturalmente, para el caso de que no se adoptare el código de procedimientos "único", a que antes me referí.

Clodomiro Zavalla.

Del juez federal de la capital, doctor Saúl F. Escobar

Buenos Aires, agosto 23 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados, doctor Roberto Parry.

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, remitiéndole las observaciones a continuación consignadas, como respuesta al cuestionario que se sirvió enviarme con fecha 6 del corriente.

Debe considerarse antes que nada, en mi concepto, que el régimen de la administración de justicia

vigente en la capital federal, obedece a un criterio sui géneris en razón de las características que histórica y constitucionalmente hablando ofrece la capital de la república en cuanto es un componente de la Nación Argentina.

La ley número 1029 dictada en Belgrano en septiembre 20 de 1880 contiene en su artículo 7 un mandato que el mismo congreso se impone de organizar en la capital de la república declarada por tal ley, la administración de justicia y a tal fin conviene señalar lo que luego aconteció a este respecto como se expresará en seguida.

La ley 1144 sobre organización de los tribunales de la capital fué sancionada en 6 de diciembre de 1881 después de una discusión prolongada, habiendo tenido origen en un proyecto redactado por los doctores de la Plaza y Rosa designados al efecto por el poder ejecutivo.

La sanción de la ley 1467 ocurrida en septiembre 18 de 1884, tras ardientes debates habidos en la cámara de diputados, debió influir poderosamente en la modificación de la ley 1144, ya que en noviembre 2 de 1886 se dictaba la ley 1893 sobre organización de los tribunales de la capital que rige hasta hoy, bien que con modificaciones introducidas por diversas leyes tales como las que llevan los números 2222, 2860, 3071, 3547, 3670, 7055, 8918, 9078, etc.

Tanto la ley 1144 como la ley 1893, en sus artículos 57 y 103 la primera y 69 y 106 la segunda, han consagrado el mismo principio en cuanto a nombramiento, sueldo, conservación y pérdida del empleo en lo concerniente a los jueces de la justicia ordinaria de la capital.

Cuarenta años de vigencia inalterada tiene dicho principio sin que hasta el día de hoy nadie haya pretendido menoscabarlo sea poder ejecutivo sea poder legislativo. Parece que los componentes de este último hubieran tenido presente las palabras del diputado Pedro Goyena: "abrigo la esperanza de que será siempre respetada (la inamovilidad), porque no puedo creer que el congreso de un país culto, altere en este punto, el texto legal". C. de DD. año 1881, pág. 650, tomo 3.

El desalojo parcial o total de los miembros de la justicia ordinaria de la capital, so pretexto de reorganizaciones proyectadas de un tiempo a esta parte por los poderes ejecutivo y legislativo, es bien posible que no pase de ser un ardiente deseo de candidatos a puestos y no un plan premeditado. La actitud del

poder ejecutivo así lo demuestra al ascender a funcionarios de esa administración de justicia, así como al proponer la provisión de alguna vacante con una dignísima persona, todo lo cual ha merecido el acuerdo del honorable senado que en legal forma prestó.

Sobre el punto, cabe señalarse que la inamovilidad de los jueces de la capital jamás ha estado en peligro hasta el día de hoy a causa de arbitrarios actos de los poderes ejecutivo y legislativo. Nunca se ha dado el caso de una remoción o rebaja de sueldo indebidas, habiéndose observado el temperamento llamado juicio político cuando fué menester.

El agitado punto relativo a la frágil situación en que se hallan los funcionarios de la justicia ordinaria de la capital en cuanto a nombramiento, permanencia, sueldo y remoción, no puede de por sí fundamentar la unificación del fuero.

Los artículos citados de las leyes 1144 y 1893 determinan un régimen análogo al de los artículos 45, 51 y 96 de la constitución, asistiendo sobrada razón al diputado doctor Luis Sáenz Peña cuando decía que a los miembros del poder judicial de la capital "los comprende de lleno *el espíritu* de la constitución respecto de la justicia nacional". C. de DD. año 1881, página 1094, tomo 4.

De lo dicho se sigue que la inamovilidad constitucional y legal es institución incorporada a nuestro régimen judicial nacional, conforme lo tiene establecido la opinión de los tratadistas argentinos y extranjeros, la imposición de la lógica, la tradición nacional y las conveniencias de la administración de justicia.

Cualquiera sea el origen de los jueces de la capital—constitucional o legal,—en rigor de verdad el poder legislativo podría escogitar el medio para hacer desaparecer el número que quisiera. Bastaría se eliminara el cargo del presupuesto, para que desapareciese el funcionario a pesar de la garantía constitucional o legal. El remedio de semejante situación se alcanza con cierta dificultad y no hay duda de que cuando menos sería hartamente complicado, dispendioso, lento, abstruso, novedoso y de consecuencias no muy claramente apreciables aun en campo de hipótesis.

No se diga que el congreso no ha podido reducir a tres los miembros de la suprema corte, a uno los tres jueces federales de la capital o a cinco los treinta y dos jueces de la justicia local.

Pero, "poder hacer" semejante cosa, no significa estar razonablemente facultado para realizarla, pues así ni se afianza la justicia ni se asegura su administración, antes al contrario. Es imperioso recordar entonces que "el poder y la eficacia de todo gobierno dependen de la opinión general y del concepto que inspiran la bondad, la sensatez y la integridad de los gobernantes", como dijo un constitucionalista en nuestro país.

En los cuarenta años de vigencia de las dos leyes de organización de los tribunales de la capital y en los cincuenta y ocho años de funcionamiento normal y definitivo de la justicia federal nacional, jamás se ha suprimido el cargo de un juez en funciones ni se le ha disminuido el sueldo, a pesar de la situación más extraña porque pudiera haber atravesado. Recuérdese lo que ocurría con el juzgado federal de Bell Ville remediado mediante la sanción de la ley 8843.

Bien ha podido decir entonces un inteligente diplomático argentino—el doctor Espil—: "el gobierno en nuestro país está concebido y organizado a base de una confianza razonable en aquellos que dirigen los negocios públicos. Ellos deben tener la facultad de actuar para el bien público y esta facultad no se les hubiera dado nunca si el posible abuso de ella fuera razón suficiente para quitársela".

Se deja pues evidenciado que la "posibilidad" de un desalojo de los jueces de la capital, no es razón suficiente para la unificación del fuero.

Véamos ahora cuáles son los efectos que ésta comportaría en la práctica.

Al decir de sus sostenedores, serían principalmente dos: a) suprimir las cuestiones de competencia; b) uniformar la jurisprudencia.

En cuanto al primero es forzoso convenir que en la práctica no son tan numerosísimos los que se presentan como se cree. La ignorancia de los letrados y procuradores, el descuido de los funcionarios judiciales de todo orden y la chicana, son sus fuentes productoras principales. Sin embargo, una activa vigilancia por parte de los jueces puede sin duda alguna prevenir los efectos de estas cuestiones de competencia de la justicia federal y de la ordinaria, cortando rápidamente las articulaciones planteadas.

Pero, en el supuesto que desaparecieran las cues-

tiones susodichas, siempre quedarían, con fuero unificado o sin unificar, las que se susciten entre juez civil y comercial, entre jueces de la capital y provincias o territorios, entre jueces correccionales, de instrucción y del crimen, las cuestiones por inhibitoria y declinatoria, indebida pero sucesivamente propuestas, etc., etc.

Se advierte, con lo expuesto, que las cuestiones de competencia si bien pueden disminuir, no por ello desaparecerían con la unificación del fuero.

En cuanto al segundo efecto de ella o sea el relativo a uniformar la jurisprudencia, es también forzoso que no lo conseguirá la unificación perseguida.

Dentro del mismo fuero federal, se tienen en funciones cinco cámaras de circuito actualmente, y al decir de Montes de Oca "han destrozado la jurisprudencia nacional en cierta manera en el orden civil y comercial. Felizmente—agrega—se ha mantenido la unidad en los puntos regidos por la constitución y las leyes nacionales, porque respecto a ellos la corte es el tribunal supremo de justicia; pero en todos los otros puntos en que no hay un tribunal superior a las cámaras de circuito, puede decirse que está rota, destrozada, anarquizada, la jurisprudencia de la república... "C. de DD., año 1910, tomo 10., página 587.

Dentro de la misma jurisdicción ordinaria de la capital se observa que los tribunales de distintas competencias encaran los asuntos con diverso criterio,—interrupción de la prescripción, absolución de posiciones, juicios ejecutivos, juicios hipotecarios, pruebas periciales, embargos, remates, corretaje, etc., etc.—sin que pueda conseguir la anhelada unidad de jurisprudencia la disposición contenida en el artículo 6 de la ley 7055.

La unidad de la jurisprudencia no se conseguirá, entonces, con unificar los fueros federal y ordinario de la capital. Para lograrla será menester intervenga un poder judicial regulador con facultad bastante, a cuyo efecto cabe recordarse la iniciativa parlamentaria que figura en el diario de sesiones de la cámara de diputados, fecha agosto 12 del corriente año, no debiendo tampoco descuidarse la conveniencia de implantar una corte de casación dentro de ciertas condiciones.

No tengo tiempo para hacer mérito de las consideraciones que me sugiere el estudio de las discusiones habidas en el congreso previas a la sanción de las leyes

1144, 1467, 1893 y 7055, que dieron margen a que se debatiera con amplitud el punto relacionado con la unificación del fuero en la capital.

Solamente puedo decir que, de esas discusiones surge claramente establecido que es posible llegar a resolver el problema actual con una medida simple en su dispositivo y de gran trascendencia en sus efectos.

Si se quiere entrar de lleno a resolver el problema actual, es evidente que se hace necesario considerar meditadamente una serie de antecedentes legislativos dispersos, cuya ordenación, distribución, y corrección requeriría tiempo de que hoy no se dispone y retardaría de consiguiente la reforma. Me refiero a un gran número de leyes que es indispensable compulsar atribuyendo su conocimiento y aplicación a los jueces, pues de lo contrario reinaría el caos en la administración de justicia de la capital.

Los jueces no están familiarizados con su aplicación y los abogados, procuradores y litigantes tampoco.

Sería, pues, necesario tener en cuenta, las leyes 27, 42, 44, 48, 49, 50, 927, 935, 1190, 1467, 1893, 3094, 3375, 3649, 3952, 3981, 4055, 4162, 4128, 7055, 7099, 8918, etc., que se ocupan de la organización de los tribunales federales y ordinarios de la capital, el procedimiento que observan unos y otros, las atribuciones de cada tribunal colegiado, etc., etc., amén de las acordadas de la suprema corte que tiene dictadas de conformidad a lo prevenido en el artículo 18 de la ley 48.

Además de toda esa revisión, reforma, ordenación y deslinde, sería necesario establecer a qué jueces de la capital correspondería conocer y decidir en los casos en que debiera aplicarse las siguientes leyes, entre otras: ordenanzas y leyes de aduana, derecho marítimo, ciudadanía, marcas de fábrica, patentes de invención, pensiones, jubilaciones, retiros militares, tierras y colonias, servicio militar, correos, telégrafos, expropiación para obras públicas, puertos, ferrocarriles, concesiones, impuestos internos, Banco de la Nación, Banco Hipotecario Nacional, Banco Nacional en liquidación, contabilidad, obras públicas, elecciones nacionales, residencia de extranjeros, inmigración, demandas de y contra la nación, etc., etc.

Se puede advertir que no se trata de una obra fácil y de rápida realización cuando militan factores de la entidad que se deja apuntada.

Pero como todas las cosas tienen remedio, es posi-

ble adelantar que existe un dispositivo capaz de conciliar los extremos de una tendencia y de otra en esto de la unificación del fuero, vale decir, la que lo acepta y la que lo rechaza.

Dicho dispositivo consistiría en atribuir a los jueces de la justicia ordinaria de la capital el conocimiento y decisión de las causas civiles y comerciales en que actualmente intervienen los jueces federales por razón de las personas en cuanto a vecindad y nacionalidad se refiere.

En esta forma se evitarán las enojosas cuestiones de competencia entre la justicia federal y la ordinaria de la capital, las demoras, las chicanas y las eternas murmuraciones acerca del absurdo relacionado con el privilegio brindado a unos jueces con detrimento de otros, no obstante actuar todos en la capital, y tener origen de singular analogía.

Los jueces ordinarios, entenderán por lo tanto, en asuntos en que no hay motivo poderoso para atribuirlo a los jueces federales, ya que unos y otros, ofrecen en la capital idéntica garantía para el extranjero, el argentino y el vecino de una provincia.

La suprema corte tiene virtualmente resuelto el caso en lo concerniente a la constitucionalidad de la ley que adoptase el temperamento que yo propongo.

En efecto; según la suprema corte los tribunales ordinarios de la capital tienen carácter nacional aunque no tengan el de federales y como quiera que aquellos tienen origen en el cuerpo legislativo de la nación, puede el congreso acordarles jurisdicción para entender en algunos de los casos contemplados en el artículo 100 de la constitución. Agrega la suprema corte que los jueces de sección de la capital pueden quedar con atribuciones más limitadas que los restantes establecidos en las provincias, no habiendo en esto nada contrario a la ley fundamental porque los tribunales inferiores de que hablan los artículos 94 y 100 de ella, pueden ser llamados, con independencia del nombre que se les dé, a ejercer funciones diversas del punto de vista de la extensión de la jurisdicción como lo demuestra el establecimiento en Estados Unidos de la *Court of claims* y la *Court of private land claims* con competencia limitada a ciertos casos, comprendidos en el artículo 3 de la sección 2 de la constitución de los Estados Unidos concordante con el artículo 100 de la argentina.

Obsérvese por lo tanto que manteniéndose la división entre jueces federales y jueces ordinarios de

la capital, reconocida por la suprema corte nacional en sus fallos, tomo 30, página 112, tomo 48, página 82, tomo 56, página 312, tomo 65, página 126, tomo 108, página 171, tomo 115, página 15, etc. puede perfectamente unificarse el fuero en forma tal que suprima las cuestiones de competencia entre la justicia federal y la ordinaria de la capital sin que sea necesario desarmar el complicado mecanismo actual que llevaría tiempo considerable, bastando, al efecto, aligerarlo con un retoque pequeño en ciertas piezas de no vital importancia.

Procediendo como lo dejo señalado no se acarrea trastorno alguno en la administración de justicia de la capital y se cumple fielmente el universal precepto de la división del trabajo, respetándose la especialización que supone el régimen actual, vale decir, el conocimiento y decisión de determinado linaje de asuntos por los jueces federales y otra clase de ellos por los jueces ordinarios, ya que es imposible realizar la utopía de que un mismo juez conozca y decida acertada y rápidamente en asuntos civiles, comerciales, correccionales, criminales, de instrucción, contencioso administrativos, marítimos, especiales, etc., etc., todo a la vez.

La solución en mi concepto radicaría en dictar la siguiente ley:

Artículo 1o. Agréguese como segundo párrafo al artículo primero de la ley 1467, lo siguiente: "Sin embargo, cuando haya distinta nacionalidad o vecindad de partes, la causa civil o comercial respectiva será indefectiblemente ventilada ante la justicia nacional ordinaria de la capital si le corresponde por razón territorial".

Artículo 2o. Comuníquese, etc.

Con la adopción del dispositivo que propongo se concilian opiniones encontradas tales como las expuestas durante la discusión de las leyes 1144, 1467, 1893 y 7055, así como se respeta el orden de jurisdicción establecido en las leyes fundamental y orgánicas, se realiza el deseo de la unificación del fuero si bien parcialmente en pro de la mayor rapidez en la administración de justicia de la capital, evitando en parte cuestiones de competencia, se lleva a la práctica el anhelo expresado en mensajes del poder ejecutivo en diversas oportunidades, se respeta la jurisprudencia de la suprema corte, se conserva la división y especialización del trabajo evitándose trastornos para jueces, litigantes y auxiliares si se transformara radicalmente y acaso a la ligera un

sistema que requiere profunda meditación y ardua labor.

Dejó así contestada la primera pregunta.

La segunda pregunta del cuestionario remitido la contesto negativamente. Conviene respetar la jurisprudencia sentada por la suprema corte sobre el particular en numerosos casos entre ellos el del tomo 129, página 181.

Tercera pregunta. El gasto sería considerable sin reportar ventajas que lo compensara. Pienso que no lo aconseja en general la estadística judicial.

Cuarta pregunta. Codificar las numerosas leyes procesales vigentes en lo federal, por ser de primer orden, teniendo como base la ley de procedimientos número 50. Encomendar a los jueces federales la confección de un anteproyecto.

Dejo así en principio contestadas las preguntas del cuestionario enviado, reservándome ampliar cuanto expreso en oportunidad propicia.

Saluda al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados con su mejor consideración.

Saúl M. Escobar.

**Del vocal de la cámara civil de La Plata, doctor
Nestor N. Fernández**

La Plata, agosto 24 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente manifestando concretamente mi opinión sobre los puntos que comprende su circular fecha 6 del corriente, lamentando no poder hacerlo in extenso, dado el escaso tiempo que me dejan las funciones judiciarias que desempeño en esta capital.

1o. Creo conveniente la unificación de los fueros federal y ordinario en la capital de la república, donde no tiene razón de ser esa dualidad que impide la uniformidad de la jurisprudencia, contemplándose actualmente doctrinas contrarias que tanto chocan y desorientan; y porque no se explica esos

diversos fueros dentro de un mismo territorio nacional.

Pero ello debe ser bajo la base de los procedimientos ordinarios que han de reglamentarse; y de la ley orgánica que se dicte.

20. Desaparecida la diversidad de fueros, quedarían comprendidos en la jurisdicción federal, el conocimiento de las quiebras y otros asuntos que hoy corresponden a la justicia ordinaria. De lo contrario, no considero conveniente incluir en lo federal ese conocimiento.

30. La reforma del actual código de procedimientos en lo ordinario de la capital federal, es algo que requiere una inmediata realización, donde deben ser motivo de especial atención los procedimientos sobre ejecuciones hipotecarias, concursos civiles, desalojos, etc.; y los recursos que se acuerden, tendientes a evitar la dilación de los juicios, y asegurar la responsabilidad de los demandantes o sus representantes por las costas en que incurran, única manera de evitar los pleitos inícuos y la chicana profesional.

Los códigos de procedimientos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, y otros no menos adelantados en nuestra república, podrían servir de elementos ilustrativos de gran importancia.

Con este motivo, me es grato saludar al señor presidente, con mi más distinguida consideración.

Néstor N. Fernández.

Del juez federal de Rosario, doctor Manuel Carrillo

Rosario, agosto 30 de 1920.

Señor diputado nacional doctor Roberto Parry, presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Buenos Aires.

Cábeme el honor de responder a su atenta comunicación de fecha 6 del mes que termina, expresando mi modesta opinión sobre las importantes cuestiones compendiadas en el interrogatorio formulado por la comisión que Vd. dignamente preside. Entiendo que no es esta una oportunidad para hacer disertaciones teóricas, sino el caso de ajustarse estrictamente al cuestionario adjunto, cuyos términos precisos, dan la pauta para una contestación igualmente sintética y precisa. En este concepto voy a dar mi parecer.

1a. cuestión. — *Si conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital.* Respondiendo negativamente.

En materia de legislación no considero conveniente innovar, sino cuando una necesidad real exija hacer innovaciones; y en el caso en consulta, esa necesidad no existe, ni nadie la señalará. Dejando las cosas como están, ningún principio se afecta, ni se causa perjuicio público alguno; en tanto que cambiándolas, se deja de lado la constitución, sin obtener ninguna mejora efectiva en la administración de justicia; fin general a que tiende, es claro, toda reforma. Los defectos o deficiencias de que pueda adolecer la administración de justicia de la capital, no radican en la diversidad de los fueros, para que pudiera esperarse que la unificación de estos elimine aquellos, en virtud de la ley de causalidad.

La diversidad de jurisprudencia y las cuestiones sobre competencia, que se suelen mencionar como inconvenientes derivados de la existencia de los dos fueros, a mi juicio no son tales inconvenientes, ni responden al antecedente apuntado; la primera es la exteriorización natural de las divergencias de los criterios individuales, que se producirán siempre, ya que fuera de los postulados de la justicia absoluta, están los desarrollos del derecho positivo que se transforma y aplica por hombres que no pueden ser exactamente idénticos aunque se hayan formado bajo iguales disciplinas intelectuales; y la segunda, las cuestiones de competencia, casi no se producen, como se suscitarían seguramente haciendo la reforma; pues la experiencia, o más bien dicho la jurisprudencia, las ha eliminado de hecho, siendo rarísimos los casos nuevos en que con algún fundamento pueda hacerse controversia sobre este punto.

Dije también que la unificación de los fueros,

implicando la unificación de la justicia en la capital, afecta el régimen de la constitución; de donde deduzco que no podrá realizarse sin la reforma previa de ésta; porque la constitución ha establecido con la mayor claridad que la justicia federal creada directamente por ella es de excepción y distinta de la que instituyan los estados particulares, y de la que el congreso,—como legislatura local de la capital, o en ejercicio de este poder combinado con el amplio de legislación general,—establezca para los territorios nacionales. La capital de la república está equiparada a un estado con todos sus atributos, por lo que le corresponde tener su administración de justicia independiente, a igual que cualquiera de las provincias que integran la nación. El siguiente caso práctico puntualizará mejor que muchos argumentos, la razón de la conclusión insinuada precedentemente; federalizada toda la justicia en la capital, ¿en que tribunal se substanciaría un proceso relacionado con la prensa, con la libertad de imprenta? El art. 32 de la constitución nacional prohíbe al congreso dictar leyes que establezcan sobre dicha materia la jurisdicción federal, y es sabido como se pronunció la suprema corte en el caso de la ley núm. 7029, llamada de defensa social, cuyo artículo 32,—curiosa coincidencia,—declaraba competentes a los jueces federales para entender en los delitos definidos por ella.

La idea fundamental esbozada, que es mi convicción profunda, se apoya en la opinión muy autorizada de constitucionalistas argentinos, entre los que mencionaré en primer término, a los doctores Aristóbulo del Valle y Manuel D. Pizarro, que la sostuvieron en el debate parlamentario de septiembre de 1881, sobre la ley de organización de los tribunales de la capital. Y el doctor Del Valle, como si su autoridad, con ser tanta, no fuera suficiente, invocaba a Kent y a Story, citando de éste un párrafo elocuente (163, Lib. 3o. Cap. 28) y haciendo notar cómo se había resuelto la cuestión en los Estados Unidos cuando se trató del territorio de Wáshington. El doctor Pizarro, ministro de justicia entonces, manifestaba su acuerdo con la doctrina del doctor Del Valle, y sintetizaba su opinión en el párrafo que transcribo a continuación, dada su brevedad: los jueces de que se trata (los de la capital) no son los jueces de la constitución, no son las cortes constitucionales como se llaman en el derecho público norteamericano: son las cortes legislativas, son los tribunales de la ley, no de la constitución;

exactamente,—agregó contestando una interrupción,— como los de cada estado particular.

En 1910 se volvió a tratar incidentalmente en el congreso esta cuestión de la unificación de los fueros y en esa oportunidad, el diputado doctor Manuel Peña, en una tan brillante como nutrida exposición, sostuvo la inconstitucionalidad de la medida; demostrando concluyentemente la diferencia entre la justicia federal y la ordinaria, y la necesidad de mantener distintas y separadas cosas que la constitución quería que así se mantuvieran. El doctor Peña citó las opiniones contrarias a la unificación de fueros, por considerarla inconstitucional, de los doctores Plaza, Rosa, Calvo, Achaval Rodríguez, y Marengo. Es difícil, en consecuencia, que los partidarios de la unificación puedan estar tan en buena compañía como los que pensamos que ella no procede sin previa reforma de la ley fundamental de la nación.

2a. cuestión.—*Si conviene ampliar la jurisdicción federal incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos.*—Respondo también negativamente, en razón de que incluir esos asuntos entre los de la competencia de la justicia federal, importará confundir cosas que deben estar separadas, de acuerdo con la constitución; según lo dejo dicho al responder a la primera (Arts. 67, inciso 11, 100 y 101 de la constitución).

3a. cuestión.—*Si conviene aumentar el número de las cámaras federales de circuito.*—Creo que las existentes llenan perfectamente las necesidades de la administración de la justicia federal, y por consiguiente opino que no debe aumentarse su número. Pero encuentro cierta anomalía que sería oportuno corregir para perfeccionar el sistema, concordándolo mejor con la constitución: me refiero a la jurisdicción mixta, de derecho federal y de derecho común, de que están investidas las que tienen que conocer en grado de apelación de las sentencias de los jueces letrados de los territorios nacionales, como la de La Plata por ejemplo (Art. 17 inciso 2o. de la ley 4055). Para armonizar la situación existente con el principio constitucional que vengo sosteniendo, y hasta para evitar el recargo de trabajo de ese origen que pueden tener algunas de las cámaras federales,—me parece que lo conveniente es crear dos cámaras de justicia nacional para los territorios, independientes y distintas de las federales existentes. La justicia en los territorios nacionales ganaría mucho en todo sentido.

4o. cuestión.—*Qué reformas procesales considero ur-*

gentes.—Todo el código de procedimientos que rige en lo federal (ley núm. 50 y cód. de proc. en lo crim. y correccional), requiere una revisión y la consiguiente reforma que lo actualice y coordine. Diariamente la práctica señala vacíos y deficiencias que es preciso suplir mediante aplicaciones analógicas, en cuanto estas son permitidas, atenta la naturaleza del asunto. Daría demasiada extensión a esta respuesta que he creído deber hacerla con la mayor concisión posible, si me detuviera a enumerar en detalle todas las reformas procesales que considero necesarias; de manera que sólo enunciaré, dentro de un concepto general, los puntos cuya reforma estimo indispensable y urgente.

a) Reducir la duración de los términos judiciales y restringir más aún la concesión de los extraordinarios; por razón de ser esta, unida a la multiplicidad de días feriados, una de las causas por las cuales la justicia no es todo lo rápida que debiera ser.

b) Simplificar los trámites formularios; limitar el número de testigos y calificarlos, para las causas civiles en que esta prueba proceda; reducir a su mínima expresión los interminables juicios llamados verbales (desalijos, interdictos, etc.); suprimir el procedimiento de apremio que pertenece al orden administrativo, no siendo propio de la justicia eso de condenar casi sin oír, bastando para los fines a que responde el juicio ejecutivo común; por cuanto la frondosidad diré así de ciertas tramitaciones, el excesivo número de testigos, muchas veces gentes sin nociones de nada, las extensas actas que es preciso labrar en los juicios verbales, y aquel doble procedimiento ejecutivo, ocasionado a confusiones y nulidades, son otras tantas causas de encarecimiento de la justicia, y concurrentes también a privarla del requisito tan deseable de la rapidez.

En lo correccional y criminal me parece conveniente:

a) Ampliar un poco las facultades de los subprefectos (ley núm. 3445) a fin de que puedan decidir con rapidez aquellos asuntos tan frecuentes en los puertos donde ejercen sus funciones de jefes de policía fluvial o marítima, en que generalmente no hay delito, sino simple infracción a las ordenanzas y reglamentos; no obstante lo cual, se origina un proceso y se priva de su libertad a dos o más personas, por más tiempo del que en rigor les correspondería.

b) Sancionar o reglamentar el procedimiento en

los casos de delitos de contrabando y otros análogos relacionados con las leyes aduaneras.

c) Suprimir en cuanto sea posible en los juicios correccionales comunes el procedimiento verbal y actuado que prescribe el código vigente (artículos 569 y siguientes); porque esta clase de procedimientos en lo correccional, es tan contraproducente y dilatorio, como lo es en lo civil; y sería preferible substituir las respectivas actuaciones por escritos en que se exponga sucintamente lo pertinente.

En la creencia de haber cumplido con un deber, saludo al señor presidente de la comisión de justicia con mi consideración más distinguida.

Manuel Carrillo.

Del juez de comercio de la capital, doctor F. Martín y Herrera

Buenos Aires, agosto 31 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor don Roberto Parry.

En contestación a la atenta nota de fecha 6 del presente, expreso mi opinión respecto de las cuestiones segunda, cuarta y quinta, por ser las únicas que se refieren a materias que he tenido ocasión de observar o de estudiar con algún detenimiento.

Si conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras.

Oreo que debe confiarse a la jurisdicción federal el conocimiento de las quiebras y el de los concursos civiles, en razón de las siguientes consideraciones:

El código de comercio de 1859 fué dictado para la provincia de Buenos Aires, que era en ese entonces un estado unitario; la aplicación de la ley de quiebras instituida por ese código no daba lugar a dificultades en razón del fuero, puesto que no existía más que uno sólo. Adoptado el mismo código como ley nacional en el año 1862 y debiendo regir en todo el territorio de un estado federal que tenía instituida una justicia nacional, fué necesario decidir a

que fuero correspondía entender en los casos ocurientes. Las leyes números 48 y 927, dictadas respectivamente en los años 1862 y 1878, establecieron que los jueces ordinarios de cada provincia tenían jurisdicción para entender en los juicios de quiebra. Reformado el código en el año 1889 y la ley de quiebras en 1902, las nuevas disposiciones tomaron el lugar de las antiguas, manteniéndose, en todo tiempo, las normas ya recordadas respecto de la jurisdicción. La suprema corte de justicia ha decidido de un modo uniforme y constante que esta materia debía regirse por las leyes números 48 y 927.

La constitucionalidad de las leyes que confieren jurisdicción a la justicia provincial u ordinaria en materia de quiebras, ha sido puesta en duda y con muy justas razones. (1).

La constitución nacional (67, inc. 11) confiere al congreso la facultad de dictar el código de comercio y en párrafo aparte, le concede igual facultad respecto de la ley de bancarrotas. Las cuestiones referentes a jurisdicción en causas comerciales en general, están sometidas a los tribunales nacionales o provinciales según que las cosas o las personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones (67, inc. 11), en tanto que en materia de bancarrotas, tratándose de una ley nacional independiente del código de comercio, correspondería entender en las causas ocurientes a la corte suprema y a los tribunales inferiores de la nación, según lo prescribe el artículo 100 de nuestra carta fundamental.

Se ha pretendido encontrar un pleonismo en la cláusula constitucional del artículo 67, sosteniendo que la facultad de dictar un código de comercio implicaba la de legislar sobre bancarrotas (M. A. Montes de Oca, "Lecciones de derecho constitucional", tomo II, página 310, Buenos Aires 1896). Ninguna razón atendible justifica ese aserto. El código de comercio no debe ser confundido con el derecho comercial; el arbitrio de los legisladores determina por lo general las materias que abarca un código; en los

(1) El doctor Agustín N. Matlenzo publicó un excelente estudio sobre esta cuestión, titulado "La ley de quiebras y la justicia federal", en los anales de la facultad de derecho, tomo 50., tercera parte, página 329 y siguientes, 1915. Puede consultarse así mismo; Filemon Posse, "Crítica al código de procedimientos", página 85, Buenos Aires 1902; H. Rivarola, "Exposición y crítica del código penal", tomo II, página 321, Buenos Aires 1890; José N. Matlenzo, "Le Gouvernement Representatif Federal dans la République Argentine", páginas 307 a 309, París 1912; J. C. Cruz y F. Martín y Herrera, "Proyecto de una ley nacional de bancarrotas", introducción, parágrafo II.

Estados Unidos de Norte América es facultad privativa de cada estado la legislación de fondo y de forma en materia comercial y no obstante, la ley de bancarrotas es una ley nacional aplicada por los tribunales federales. En nuestro país debía suceder lo propio desde que la carta fundamental así lo dispone de un modo expreso.

Pero además debemos tener presente que nuestro sistema político exige la distinción constitucional entre código de comercio y ley de bancarrotas. El código de comercio no puede alterar las jurisdicciones locales (67, inc. 11) es decir, que debe legislar cuestiones de fondo y sólo por excepción materias procesales o de forma, en cuanto fueran un complemento indispensable de la ley de fondo. La ley de bancarrotas es en gran parte y por fuerza, una verdadera ley de procedimientos. (1) y de organización de los tribunales y su naturaleza exige que impere del mismo modo en todo el territorio federal; muchas de sus disposiciones alteran o pueden alterar las jurisdicciones locales y esa razón bastaría por sí sola para que la constitución le señalara un lugar aparte y confiara su aplicación a los tribunales de la nación.

La tendencia moderna exige que la ley de bancarrotas sea una verdadera ley de insolvencia, que comprenda en sus disposiciones a toda clase de personas, civiles o comerciantes (2). Una ley de esa naturaleza no podría figurar en un código de comercio; debe ser una ley distinta según lo establece la constitución argentina.

La comisión de la honorable cámara de diputados que proyectó la reforma de 1889 se preguntaba en el párrafo de su informe titulado Faz constitucional, si el derecho de legislar las quiebras por parte de la nación comprendía su fondo y su forma. Desgraciadamente, no dió ninguna contestación a esta pregunta; en el resto del párrafo citado se ocupó de

(1) En la legislación de España y en la del Perú existe una ley de fondo incorporada al código de comercio y una ley distinta que trata del procedimiento de las quiebras.

(2) Es el sistema adoptado en los Estados Unidos: "An act to establish a uniform system of bankruptcy throughout the United States", approved July 1, 1898, amendments approved feb. 5, 1903, June 15, 1906, and June 25, 1919. Véase Franck O. Loveland, "A treatise on the law and proceeding in bankruptcy", página 18, 4a. edición, Cincinnati, 1912. El mensaje del poder ejecutivo de la nación, presentado al congreso el 16 de mayo de 1919, encarece la necesidad de dictar una nueva ley de quiebras que comprenda a civiles y comerciantes.

decidir una cuestión bien distinta, consistente en saber si la facultad de legislar es exclusiva para la nación o concurrente con las provincias. (Villegas y Quesada, proyecto de reformas al código de comercio argentino, página 12, Buenos Aires, 1873). En realidad, la cuestión planteada hubiera llevado a la comisión a decidir que la ley de bancarrotas no podía justificarse dentro de nuestro sistema constitucional, sino adoptando la forma y la jurisdicción expresamente señaladas por la carta fundamental.

En el proyecto de una "Ley nacional de bancarrotas", redactado por el que suscribe en colaboración con el doctor Juan C. Cruz,—se decidían las cuestiones relativas a la jurisdicción, en la siguiente forma:

I. Los juicios de concordato preventivo y de quiebra corresponden a la jurisdicción federal. Deben iniciarse ante el juez de sección de la localidad en que el deudor tuviera el establecimiento principal de sus negocios. Entenderá de las apelaciones, la cámara federal respectiva.

II. En los territorios nacionales conocerán los jueces letrados, interviniendo en las apelaciones la cámara federal que corresponda, de acuerdo con los artículos 12 y 17 de la ley número 4055.

III. En la capital federal serán competentes en todas las causas de concordato preventivo y de quiebra, los jueces de comercio del fuero ordinario, entendiendo en grado de apelación la cámara de apelaciones en lo comercial del mismo fuero. (1)

IV. La corte suprema de justicia, encargada de resolver los conflictos de jurisdicción entre los tribunales de la república, podrá establecer los reglamentos que considere adecuados para el mejor funcionamiento de esta ley.

¿Qué reformas procesales considera urgentes?

a) La instancia única en la jurisdicción mercantil.

En el trámite de los litigios comerciales, se siente que un modo especial la necesidad de obtener una resolución definitiva dentro del más breve plazo; los comerciantes han manifestado siempre su predilección por el juicio de árbitros, que como es bien sabido comporta una sola instancia. Nuestra ley de comercio ha instituído esa forma de decidir en las cuestiones que se suscitaren entre los socios (art. 448 del código de

(1) La excepción consagrada por este artículo respondía a la convicción de que los jueces del llamado fuero ordinario de la capital eran en realidad jueces federales y de que tarde o temprano se dictaría por el congreso una ley que regularizara esta situación.

comercio) de manera que la costumbre y la natural inclinación de los comerciantes y aun la legislación vigente favorecerían grandemente la adopción y el prestigio del sistema de la instancia única.

En nuestro sistema procesal, el verdadero juez es el tribunal de apelación. Por lo pronto es muy fácil llegar hasta él: en la capital basta con una manifestación de voluntad, expresada en el papel sellado de ley, dentro de los términos que prescribe el código de procedimientos. El uso de este derecho ocurre prácticamente en todos los casos y el litigante sabe muy bien que la verdadera sentencia emana del tribunal de apelación.

El tribunal superior resuelve las cuestiones planteadas, con las más amplias facultades; no está obligado a rebatir los argumentos de la sentencia del inferior y muy bien puede acontecer que no los considere siquiera. Si decreta la nulidad de la sentencia por vicios de forma, falla el proceso en primera y única instancia (art. 25 de la ley 4128). Si revoca la sentencia apelada, adopta una decisión sobre el fondo del litigio, en primera y única instancia. En presencia de tales normas es preciso reconocer que la sentencia de primera instancia es un simple proyecto, casi un informe y que si alguna vez adquiere fuerza de cosa juzgada se lo debe a la voluntad de las partes, como puede ocurrir con el escrito de un abogado o de un procurador en los casos de transacción del pleito. En cambio la ley ordena que el juez de primera instancia redacte su sentencia con especial examen de los hechos, haciendo mérito de cada uno de los puntos pertinentes de derecho fijados en la discusión, etc., etc., y de ello resulta que cada magistrado se ve obligado a emplear un tiempo apreciable en disfrazar su proyecto con todas las apariencias de una verdadera sentencia.

El tiempo empleado en esa tarea, que la actual acumulación de causas dilata singularmente, podría economizarse con la remisión inmediata de los autos en estado de sentencia al tribunal superior, el cual resolvería en primera y única instancia. Ninguna garantía procesal quedaría suprimida. Por lo pronto sería absurdo pensar que el tribunal superior necesitara conocer la opinión del juez inferior, para resolver el litigio; un tribunal dotado de grandes facultades, debe tener las aptitudes correspondientes. Antes de trabado el pleito, las partes plantean todas sus cuestiones y alegan en su tiempo respecto del mérito de la prueba. El escrito de expresión de agravios presentado en se-

gunda instancia es motivado por la sentencia que dicta el juez inferior y desaparecida esta, aquel escrito quedaría suprimido. En cuanto a las pruebas que puede ordenar el tribunal superior, la situación no se altera desde que dicha facultad debe ser mantenida.

En definitiva, la supresión de la sentencia de primera instancia, no cambiaría las líneas esenciales del litigio, ni modificaría la naturaleza o las facultades del verdadero juez del pleito.

Para ensayar la implantación obligatoria de este régimen, convendría dar a las partes el derecho opcional respectivo, aun a riesgo de proporcionar a los litigantes interesados en la dilación del juicio, la manera de obtener su propósito por medio de una oposición al acuerdo. El código de procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires, sancionado en enero 13 de 1915, instituyó el sistema de la instancia única y oral a opción del procesado (arts. 221, 267 y siguientes.)

A fin de obtener un vínculo entre el tribunal superior y el magistrado encargado de recibir la prueba y velar por el procedimiento (juez de primera instancia) sería lógico disponer, que este último formara parte del tribunal a los efectos de la sentencia; informaría directamente a los demás miembros del tribunal único sobre las características de la prueba y de ese modo tendrían alguna explicación las disposiciones procesales donde se expresa el propósito de que el juez que decida, sea el mismo juez que examine las pruebas orales.

La instancia única opcional se conforma a las necesidades del juicio ordinario, pero no debiera extenderse hasta las cuestiones susceptibles de ser resueltas por sentencias interlocutorias. En estos casos la única instancia debiera ser obligatoria por mandato de la ley.

El prestigio y la utilidad de los documentos a la orden dependen en gran parte del tiempo que requieran las ejecuciones; las cuestiones que se suscitan en el procedimiento de quiebra, no deben estar sujetas a demoras obtenidas por medio del recurso de apelación; la convocación de acreedores, puede transformarse por virtud de la doble instancia, en una moratoria arbitrariamente obtenida por el deudor, cuando este utiliza hábilmente los recursos de la ley.

El sistema de la instancia única opcional tiene por fin a su favor, la posibilidad de ser implantado por medio de una ley breve y de muy fácil comprensión.

Si se obtuviera como creemos una gran economía

de tiempo, manteniendo iguales garantías para los litigantes, los poderes públicos debían implantar el sistema indicado.

b) La firma de las providencias de mera substanciación.

Convendría reformar el artículo 29 del código de procedimientos, estableciendo que las providencias de mera substanciación fueran firmadas únicamente por el secretario actuario. La intervención del juez debe ocurrir, cada vez que el litigante interponga recursos de reposición, de apelación o de nulidad contra las referidas providencias.

Esta reforma presentaría muchas ventajas; en primer lugar, evitaría el traslado de los autos desde la secretaría hasta el despacho del juez, suprimiendo en muchos casos los trastornos que se siguen a las partes del hecho de no encontrarse en la oficina el expediente respectivo; en segundo lugar, evitaría a los jueces un trabajo material completamente innecesario para el buen orden del juicio; por fin, propendería a acelerar la marcha de los procesos.

c) La firma de los libros de comercio.

Por tratarse de una materia puramente formal me permito incluirla en el interrogatorio referente a cuestiones de procedimiento.

En cumplimiento de lo que expresamente dispone el artículo 53 del código de comercio, un juez de comercio pierde todos los días media hora en firmar la nota que el registro público de comercio pone en la primera página de los libros de los comerciantes; los empleados del registro tienen que abrir cada libro y secar la firma del secretario y repetir, luego, la operación cada vez que el juez vuelve a poner su firma en los libros.

Se trata de una función puramente notarial que debe ser sometida al señor jefe del registro público de comercio.

El referido artículo 53 del código de comercio podría ser también reformado, en lo que respecta al procedimiento adoptado para individualizar el libro y cada una de sus hojas; la disposición legal somete al arbitrio del tribunal superior la forma de "rubricar o sellar" las hojas, pero no lo autoriza a adoptar algún sistema que no consista, precisamente, en la rúbrica o el sello; desde hace mucho tiempo resultó tarea imposible de ser cumplida, la de rubricar por el juez cada una de las hojas de los innumerables libros que se presentan al registro, de modo que se adoptó el pro-

cedimiento de poner un sello de goma que imitara la rúbrica del juez; ese sello no presenta garantía alguna, puesto que está al alcance de cualquier persona hacer otro igual, y rubricar nuevas hojas que podrían substituir a las antiguas, encuadernando de nuevo el libro; los empleados del registro que se dedican empeñosamente a la tarea de poner el sello en cada hoja de los 100 libros que más o menos salen por día, realizan la más inútil e inexplicable de las tareas. Cualquier otro sistema, con un pequeño trabajo, presentaría más garantía que el procedimiento que se sigue en la actualidad.

d) La limitación del número de testigos y de las preguntas de los interrogatorios de testigos y de los pliegos de posiciones.

Se requiere una ley que reglamente y limite el uso de la prueba de testigos; no bastan al efecto las disposiciones de las leyes supletorias, porque los litigantes pretenden que la diversidad de los hechos que desean probar, los obligan a presentar listas de cuarenta o cincuenta testigos. En un expediente que se tramita en la actualidad ante la jurisdicción comercial, han sido presentados por una de las partes, más de ochenta testigos.

Igual abuso se nota en lo que respecta a los interrogatorios y pliegos de posiciones; no es difícil encontrar pliegos de cien, de doscientas y hasta de trescientas posiciones, ni interrogatorios de testigos que pasen de cien preguntas.

El derecho de repreguntar requiere también una reglamentación; algunos letrados hacen interminables las audiencias porque completan en ese acto el pliego de interrogaciones, pretextando que repreguntan al testigo.

Dentro de nuestras costumbres, es necesario que se encuentre en la ley el límite de estos derechos; no es posible confiar al juez, la misión de desechar las pruebas innecesarias, porque toda actividad en ese sentido, es considerada como un juzgamiento anticipado.

e) Los juicios de conciliación.

Muy rara vez los jueces consiguen avenir a las partes; en cambio son frecuentes los acuerdos celebrados ante los secretarios que actúan en los juicios.

La actitud del juez que llama a las partes a los efectos señalados por el art. 64 del código de procedimientos, es por fuerza una actitud muy reserva-

da; no puede decir ninguna palabra que traduzca impresiones sugeridas por la lectura de los autos; las partes a su vez se esfuerzan por mantener o demostrar una gran intransigencia para probar al juez la confianza que tienen en lo que respecta a las acciones o defensas presentadas en el pleito. Es fácil presumir que de una situación semejante no puede surgir un avenimiento que ponga fin al pleito. Sería conveniente establecer en la ley que las partes acudieran ante el juez que precede en el turno al magistrado encargado de dictar sentencia.

La actual acumulación de tareas en el juzgado de comercio que se encuentra a mi cargo, me han impedido contestar más detalladamente las preguntas de la honorable comisión y me han obligado también a demorar la expedición de este informe, por lo cual pido las disculpas del caso.

Saluda al señor presidente con su mayor consideración.

F. Martín y Herrera.

**Del juez de comercio de la capital, doctor Tristán
M. Avellaneda**

Buenos Aires, septiembre 29 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados, doctor Roberto Parry.

Circunstancias notorias han recargado considerablemente, en estos últimos tiempos, las tareas que me impone mi cargo de juez. Me he visto así en el caso de demorar algo la respuesta al cuestionario que usted se ha servido enviarme. Por otra parte, los puntos sobre los cuales se me pide opinión, son complejos, envuelven cuestiones doctrinarias muy discutidas en la cátedra y el libro, y no es fácil abordarlas con eficacia haciéndolas objeto de un análisis ligero. En la imposibilidad, pues, de tratar esas materias con la extensión y en la forma concienzuda y detenida que ellas se merecen, me li-

mitaré a exponer sumariamente algunas reflexiones sugeridas por las diversas preguntas de la encuesta.

Primera pregunta: Considero que la unificación de los fueros federal y ordinario en la justicia de la capital implicaría un verdadero error. Al propósito de realizarla — si es que existe — se oponen serias objeciones, tanto de orden legal como de carácter doctrinario y práctico.

En primer término, la tentativa choca, en mi opinión, con preceptos claros y terminantes de la constitución nacional. La división de los fueros en la capital federal no responde a motivos distintos de aquellos en cuya virtud existe la misma división en las provincias. Es exacto que la constitución, cuando alude a la justicia que cada provincia tiene derecho a darse, habla de tribunales provinciales, de donde parece lógico inferir que la capital de la república, no siendo una provincia, ni estando comprendida en la jurisdicción de ninguna de ellas, no puede tener, sin riesgo de incurrir en un contrasentido, tribunales provinciales, o, empleando una expresión más corriente, justicia ordinaria.

La anomalía es sólo aparente. La justicia ordinaria, que cada estado de la nación tiene derecho a organizar en virtud del poder que le ha sido delegado (art. 50.), no es una creación de nuestra carta constitucional. Es anterior a ésta. Existía desde que existe el país, y los constituyentes no hicieron sino reconocer esa situación de hecho. Así, al formular los artículos referentes al poder judicial, no se ocuparon para nada de la justicia ordinaria, cuya creación y organización es facultad privativa de los estados provinciales, que por otra parte, ya tenían administración de justicia. Nuestros constituyentes se limitaron a crear un organismo judicial nuevo, compuesto de una corte suprema de justicia y tribunales inferiores "que el congreso estableciese en el territorio de la nación" (art. 94), y le fijaron determinadas atribuciones (art. 100). Ese nuevo organismo no vino a suplir al anterior, al que ya existía y funcionaba en todas las provincias y ha seguido existiendo y funcionando con arreglo a las constituciones provinciales. Vino simplemente a llenar una nueva función, impuesta por la organización política que los constituyentes daban al país. Se le atribuyó así una función específica que el artículo 100 determina y precisa.

De modo, pues, que este poder judicial de la nación constituido por los llamados tribunales federa-

les, comporta un fuero de excepción, dentro del cual no cabe sino un número limitado de asuntos, de una índole especial. La otra justicia, la de los tribunales provinciales, es el fuero común; su organización cae en la órbita del poder delegado a cada provincia, porque así lo dispone la constitución; pero su razón de ser no está en la forma de gobierno adoptada por el país, no responde a un determinado sistema de organización política. Nada de eso. Es la justicia que, bajo distintas formas, existe allí donde hay una sociedad organizada.

Pues bien; Buenos Aires se hallaba, al sancionarse la constitución, en iguales condiciones que las demás ciudades del territorio patrio: tenía como todas ellas su justicia ordinaria. Y cuando más tarde fué declarada capital de la república y asiento del gobierno federal, surgió, en rigor, una nueva provincia, cuya existencia y cuyos poderes constitucionales estaban ya previstos y reglados en la constitución.

Es evidente que la ciudad capital de la república no es, dentro de nuestra organización política sino una décima quinta provincia, con los mismos poderes atribuidos a las otras catorce. Tiene un jefe local e inmediato, que es el presidente de la nación (art. 86, párrafo 3 de la constitución nacional). El congreso nacional es su legislatura. Elige directamente sus diputados al congreso lo mismo que las provincias y, como ellas, elige también dos senadores (art. 46). Facultad esta última que completa su perfil neto de estado federal, pues es sabido que los senadores representan a las provincias, en tanto que el pueblo todo de la república tiene en los diputados sus representantes directos e inmediatos.

Ahora bien; si la justicia ordinaria, lo mismo la de la capital que la de las provincias, es anterior a la constitución y su existencia ha sido reconocida por ésta; si la justicia federal es una creación constitucional con un destino definido y un radio de acción preciso, ¿cómo podría llegarse a esa pretendida unificación, sin violentar la ley fundamental del país? ¿Qué querría decir unificar los fueros? La justicia federal no puede ser suprimida, aunque se le niegue objeto, aunque se crea que es un organismo inútil, porque sería menester reformar la constitución. Luego, la unificación tendría que consistir en declarar que la justicia ordinaria de la capital es justicia federal, o más exactamente, en

llamarse en adelante federales a los tribunales que hasta ahora hemos denominado ordinarios. El grave asunto de la unificación de los fueros se convierte entonces en una trivial cuestión de denominaciones.

Pero es que si al juez de comercio o al juez civil de la capital se les considerara como jueces federales, el sistema creado por la constitución quedaría subvertido. Porque la denominación de federales, que tienen los tribunales así llamados entre nosotros, no es arbitraria. Supone, por el contrario, un organismo judicial determinado y provisto de una función específica, diferente de la de los tribunales ordinarios.

Mientras esté en la constitución el art. 100, habrá necesariamente en la capital una justicia federal, lo mismo que en las provincias, y una justicia ordinaria para conocer en todas las cuestiones que no sean las que especifica aquel artículo. Y la primera será siempre un fuero de excepción.

No puede negarse, por otra parte, que este fuero de excepción es necesario. Hay un conjunto de cuestiones estrechamente vinculadas con la vida misma del país y con la situación de este frente a las naciones extranjeras, que requieren jueces dedicados al estudio y dilucidación de las mismas. Son aquellas que enumera el art. 100 de nuestra carta orgánica, y sería de desear que para el mejor desempeño de sus importantísimas tareas, los tribunales federales no extendieran su campo de acción más allá del límite fijado por la constitución. Si no ha ocurrido esto hasta ahora, está en manos del congreso remediar la situación, sin necesidad de recurrir al procedimiento lento y dificultoso de las reformas constitucionales.

Son en verdad deleznales los dos argumentos esgrimidos en pro de la unificación de los fueros. Me refiero a los argumentos que podríamos llamar de carácter práctico: las jurisprudencias contradictorias y la abundancia de cuestiones de competencia. Mientras los jueces tengan el deber de fallar las causas según la ciencia y conciencia de cada uno y mientras en una misma jurisdicción territorial haya más de un juez, las cuestiones de competencia y las jurisprudencias encontradas serán inevitables. Y como no es posible prescindir de aquel principio básico de derecho procesal, ni reducir la administración de justicia de la capital a un juez único, el remedio hay que buscarlo en la creación de una cor-

te de casación, encargada de unificar la jurisprudencia. La actual corte suprema podría llenar esa función, que hoy mismo la desempeña, aunque en los límites sin duda muy limitados del art. 14 de la ley 48 y 6 de la 4055.

La unificación de los fueros federal y ordinario sería, pues, inconveniente e inconstitucional.

Segunda pregunta: Como acabo de expresarlo, no conviene ampliar la jurisdicción federal. La justicia de la nación, como la denominaron los constituyentes, no llenará con verdadera eficacia sus funciones si se le encomienda el conocimiento de asuntos extraños a la índole de la misión que está llamada a desempeñar en la vida del país.

Tercera pregunta: La necesidad de aumentar el número de cámaras federales de circuito ha de ser impuesta por el mayor o menor movimiento de causas en los tribunales existentes en la actualidad. Se trata de una cuestión de estadística, que desde luego tiene su importancia, porque el crecimiento extraordinario del país duplica en pocos años la tarea cotidiana de los jueces, con gran perjuicio de una de las condiciones esenciales de la buena justicia: la celeridad en la substanciación de los pleitos. Carezco de estadísticas a mano que me permitan apreciar la actividad desarrollada por las actuales cámaras de circuito, de modo que debo limitar a lo expuesto mi contestación a esta pregunta.

Cuarta pregunta:

Las reformas procesales urgentes son tan numerosas que me atrevería a sostener la necesidad ineludible de una reforma integral de la legislación sobre la materia. Nuestro código de procedimientos civiles es vetusto, lleno de anacronismos cuya persistencia no tiene excusa, y, en el conjunto de la legislación nacional, está a la zaga de los códigos de algunas provincias. Su excesivo formulismo entorpece lamentablemente la marcha de los juicios, sin que les sea dado a los jueces arbitrar medidas para impedir la lentitud, a veces desesperante de los trámites judiciales. La justicia, si no es rápida, no cumple debidamente la misión que le está encomendada; pues ella no consiste sólo en dar a cada uno lo suyo, sino en darlo sin demoras ni dilaciones: el retardo es ya una injusticia.

No es menos urgente la sanción de un nuevo código de procedimientos en materia criminal, que este a la altura de la época, de las exigencias del país

y, sobre todo, de los progresos de la ciencia penal y de las ciencias afines. Siempre el progreso de la ciencia es más rápido que el de la legislación, pero debe reconocerse que en este caso la enormidad de la diferencia causa verdadera pena. Una ley de procedimientos en lo criminal, que por torpe o atrasada fuera mala, significa un peligro social, una amenaza constante, dirigida sobre todo contra el ciudadano honesto, porque, como dijo con ingenio cierto jurista, si el código penal es para los criminales e interesa especialmente a ellos, el código de procedimientos nos interesa a todos, y particularmente a las personas honradas. El nuestro actual tiene fallas considerables: sabido es que en lo referente a la garantía de la defensa adolece de grandes y peligrosas deficiencias.

Dejo así contestadas las preguntas de la encuesta y aprovecho esta oportunidad para expresar a usted las seguridades de mi consideración distinguida.

Tristán M. Arcillanella.

Del juez en lo civil de la capital, doctor Matías Mackinlay Zaplola y de los secretarios del juzgado a su cargo.

Buenos Aires, agosto 31 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Me es grato dirigirme al señor presidente de la comisión de justicia, contestando la encuesta que se ha servido dirigirme sobre diversos puntos, relativos a reformas en la justicia.

En el poco tiempo que dispongo, por el recargo de trabajo que pesa en estos momentos sobre el juzgado a mi cargo y el corto plazo con que esa comisión necesita su contestación, agregado a la falta de ordenación de los elementos de juicio recojidos en el estudio y en la experiencia, no me ha sido posible aportar sinó algunas conclusiones agregadas a diversos fundamentos en que se apoyan.

Agrego también a mi contestación, la de los secretarios del juzgado, permitiéndome así, hacerlos cooperar con su experiencia diaria en el ejercicio del cargo, al buen propósito de esa comisión.

1ª. — *Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital?*

Comenzaré por apuntar un hecho constatado con rara uniformidad, absteniéndome de sacar ninguna deducción: "Los magistrados federales no son ni han sido partidarios de la unificación de los fueros; los magistrados de la justicia ordinaria son y han sido siempre partidarios de la unificación".

Por mi parte, me decido por la unificación de los fueros federal y ordinario en la capital federal; la considero conveniente, pero no indispensable para el mejoramiento de la justicia, porque con ello no se salvarían sino dificultades de poca importancia, aunque reconozco que todas las que obstaculizan el mejoramiento de la justicia, siempre buscado, no son sino una larga serie de pequeña dificultades.

La unificación de los fueros haría desaparecer las contiendas de competencia en la capital, que han motivado innumerables casos de jurisprudencia de diversos matices y que su proporción da idea de su importancia. Con ello desaparecería también, la incongruencia de dos procedimientos distintos en la substanciación de los juicios y se facilitaría la posibilidad de mantener una jurisprudencia más uniformada.

En mi concepto, la existencia de una justicia ordinaria en la capital federal, equiparada a la justicia local o provincial, es una ficción que no debe subsistir. El distrito federal es eminentemente nacional; no caben dos jurisdicciones y lo que no es nacional o federal dentro de ella, es municipal, por delegación de aquel. Sin desconocer la existencia de un problema constitucional al respecto, encuentro que dentro de la capital federal, la solución estaría en ampliarle, en todo caso, a los jueces federales, la jurisdicción y competencia que ahora tienen, con la de los actuales jueces ordinarios, de modo que reunieran en sí, las atribuciones de la actual justicia federal y ordinaria de la capital, cuyo número, necesariamente, debería ser aumentado con los de la justicia ordinaria, que tendrían que ser investidos del carácter de jueces federales. No puede constitucionalmente aceptarse que sea permitido cercenar la competencia de la justicia federal, ni aún por

leyes, como se ha hecho, por ejemplo, quitándole la de intervenir en los juicios de quiebra; pero no encuentro ningún inconveniente de ese orden para aumentarla. Por otra parte, lo que se ha querido por la constitución nacional, ha sido la existencia de una justicia nacional, dentro de las provincias, para que fuera la única capacitada para intervenir en materias que los tribunales provinciales no fueran suficiente garantía, y así se hacía necesaria la intervención de jueces nacionales, esto es, nombrados y responsables ante la autoridad nacional, y, así Alberdi, (Derecho público provincial argentino. Tomo V, pág. 21, Obras completas), explayándose sobre el mismo tema, decía: "La constitución, las leyes y los decretos del gobierno nacional, los tratados de la república con las naciones extranjeras, son leyes suprema o nacionales, cuya interpretación y aplicación exige una autoridad judicial de carácter y potestad nacionales o supremas, también como esos estatutos. La aplicación de leyes que representan el interés de una nación, no podrá encomendarse, sin grandes peligros de injusticia y parcialidad, a tribunales y juzgados de provincias, sin responsabilidad ante el gobierno nacional, que no los ha nombrado, ni puede remover y sin responsabilidad ante la república, cuya soberanía judicial no ejercen.

Para que las leyes nacionales sean interpretadas imparcialmente, se necesitan jueces del mismo carácter, delegados de toda la nación, no de una provincia, nombrados y costeados por toda la república y responsables, según sus leyes, ante sus autoridades. De aquí la necesidad de una jurisdicción o competencia nacional, fuera de la jurisdicción y competencia de provincia".

Si las consideraciones dadas por el citado publicista, fueron las determinantes de la co-existencia de la justicia federal en el territorio sujeto a la jurisdicción provincial, con la local, ninguna de ellas demuestra que subsistan las causales para su co-existencia dentro del territorio federal, donde no puede desconocerse aún dentro de la ficción legal creada, que la justicia ordinaria no sea también nacional.

2a. — Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?

Contesto que sí, no sólo por razones de conveniencia solamente, como se pregunta, sino especialmente por

razones de constitucionalidad y para no extenderme en fundamentos, me remito a los expuestos sobre este tema por el doctor Agustín Nicolás Matienzo en su erudito trabajo, que con el título de "La ley de quiebras y la justicia federal", fué publicado en la página 329 del tomo V, 3a. parte (2a. serie) de los anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, año 1915.

3a. — *Conviene aumentar el número de cámaras fedepara formarla.*

No tengo opinión al respecto, ni elementos de juicio para formarla.

4a. — *Qué reformas procesales considera urgentes?*

En primer lugar, comenzaré por decir, algo que, aunque es extraño a la pregunta, tiende al mismo propósito: la forma o sistema de los nombramientos de los jueces debiera ser por terna elevada al P. E. por la suprema corte o las cámaras de apelaciones reunidas en pleno y el procedimiento de la remoción de los mismos debiera ser fácil, rápido y por culpa leve. Las reformas procesales que tiendan a dar al juez una libertad de acción dentro de los juicios y no maniatado como aparece hoy ante las partes, como testigo mudo de la tramitación, sin que pueda encauzarlo, ni emitir un concepto sobre el mismo, que luego lo inhabilita para fallar la causa. Los alegatos deben ser orales lo mismo que las sentencias, que deberían ser dictadas de viva voz por el mismo juez, en una audiencia designada al efecto, en presencia de las partes y sus letrados. Limitar a tres el número de miembros de las cámaras de apelaciones para dictar sentencias definitivas; autorizar a los secretarios a despachar con su sola firma todas las providencias de trámite, con recurso ante el juez; — aceptar el procedimiento del taquígrafo para las audiencias; diligenciar las notificaciones por intermedio del correo; reducir la intervención de los fiscales, asesores de menores y representantes del consejo nacional de educación; limitar la extensión de los escritos; limitar el número de los testigos; suprimir la recusación sin causa, suprimir el doble traslado de las cuestiones de puro derecho; no exigibilidad de la previa intimación de pago para los embargos preventivos o definitivos; procedencia de los embargos en todos los casos en que aparezca "prima

facie" la procedencia de la acción que se intenta y en su defecto con fianza suficiente; dar audiencia al demandado en juicio de alimentos, antes de resolver; aceptar que en las obligaciones sin plazo, el juez lo fije con audiencia de la otra parte; no acordar recursos ante el superior en asunto no mayor de mil pesos; decretada la nulidad del procedimiento o de la sentencia por las cámaras de apelaciones, deberán estas seguir entendiendo en los mismos juicios hasta fallarlos en definitiva; ampliar los casos en que procede la acción ejecutiva a las obligaciones de hacer; legislar sobre los juicios hipotecarios, simplificando el procedimiento de ejecución.

Y, por último y correlativa con la reforma del procedimiento constitucional de remoción de los jueces, que permitiese hacerlo con rapidez y sin el pesado engranaje actual y aceptar como suficiente la culpa leve, el aumento del sueldo de los magistrados, que les permitiera dedicar toda su actividad al desempeño de su cargo, con exclusión de cualquier otra función, aún la del profesorado.

Saludo al señor presidente con mi consideración más distinguida.

M. Mackinlay Zapiola.

Buenos Aires, agosto 16 de 1920.

Señores secretarios del juzgado:

Habiéndoseme recabado de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados mi opinión sobre diversos puntos relativos a reformas en la justicia y considerando que ustedes están especialmente habilitados por la experiencia adquirida en el desempeño de sus cargos y sus inteligentes concursos prestados para la buena marcha del juzgado, para dar una opinión valiosa sobre los mismos, solicito de ustedes, quieran contestar al cuestionario recibido que les transcribo a continuación, permitiéndome así, al contestarlas, agregar mi contestación a la de ustedes.

I. ¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital? ¿Qué solución aconseja para resolver este problema?

II. ¿Conviene ampliar la jurisdicción federal in-

cluyendo en ella el conocimiento de la quiebra y otros asuntos?

III. Conviene aumentar el número de las cámaras federales de circuito?

IV. ¿Qué reformas procesales considera urgentes?

M. Mackinlay Zapiola.

Buenos Aires, agosto 31 de 1920.

Señor juez:

Honrado por la confianza que significa la solicitud de U. S., de que instruye la nota precedente, tengo el agrado de contestar a las preguntas del cuestionario transcripto en la misma:

A la primera: Pienso que conviene, y que es también un deber constitucional, la unificación de fueros en la capital de la república. Así lo sostuve, hace diez años, en mi tesis doctoral; y como la experiencia de todo este tiempo no ha hecho sino robustecer mi convencimiento al respecto, me permito acompañarle un ejemplar de aquel trabajo, como mejor respuesta a esta pregunta, por si él pudiera contribuir en algo siquiera al estudio del importante problema legislativo de que se trata. En el capítulo 50., que titulé "Conclusiones", está expresada mi opinión bien claramente acerca de este punto.

A la segunda: Si no se realiza la unificación de fueros, sería un paso hacia ella y también un medio de descongestionar la jurisdicción comercial, ampliar la federal en el sentido que se indica. Constitucionalmente puede hacerse; y como significaría una distribución más equitativa del trabajo, y, por tanto, una mayor regularidad en los procedimientos, creo que convendría la medida que se propone.

A la tercera: Aunque no tengo los datos estadísticos indispensables para una respuesta fundada acerca de esta pregunta, creo por informaciones extraoficiales, que no conviene tal aumento, si bien puede ser necesaria una mejor distribución de los juzgados que corresponden a cada una de las cámaras. Los tribunales federales no se han caracterizado nunca, en ninguna de sus instancias, por el recargo de trabajo que se nota en los de la "justicia ordinaria".

A la cuarta: ¡Muchísimas! Tantas, que es urgente,

impostergable, la reforma de todo el anticuado código de procedimientos en vigencia. La sanción del proyecto formulado en 1910 por la comisión compuesta por los doctores Pedro F. Agote, Ramón Méndez y Manuel A. Montes de Oca, con ligeras modificaciones de detalle, sería un gran paso adelante en la legislación de forma.

Saludo a U. S. muy atentamente.

González Iramain.

El doctor González Iramain, en su tesis doctoral "La unificación de fueros en la capital y en la república." — 1910 —, después de establecer cuál es, según los más autorizados escritores nacionales y americanos y a la vista de nuestros antecedentes históricos, la naturaleza y el rol del poder judicial, estudia su organización actual y refiere los antecedentes más indispensables relativos a la justicia de la capital, transcribiendo las opiniones emitidas en 1881 en la cámara de diputados por el ministro de justicia doctor Pizarro y por los diputados Ruiz de los Llanos y Marengo sobre el problema de la unificación de fueros a que también se refiere el mensaje del poder ejecutivo que lleva fecha de 8 de junio de 1909. Analiza, luego, las opiniones de los doctores Rodolfo Rivarola y Salvador de la Colina y del señor Alejandro Gancedo sobre la unificación de fueros en toda la república y llega a las siguientes conclusiones: 1o. "La unificación de los fueros federal y ordinario o común, debe efectuarse en la capital de la república. 2o. No es posible unificar las jurisdicciones federal y provincial en todo el país, sin una reforma de la constitución, en el sentido de la adopción del sistema unitario de gobierno, y esta no sería conveniente".

Sobre la unificación de fueros en la capital, dice lo siguiente:

Consideraré el asunto en las tres fases distintas que, en mi concepto, él asume: *política, constitucional* y de *conveniencia práctica*; y si demuestro que en ninguna de ellas tiene fundamento la existencia de las dos diversas jurisdicciones en el territorio de la metrópoli argentina, habré probado que es necesaria, legalmente factible y conveniente, la reforma proyectada.

Son conocidas las circunstancias anormales que precedieron a la capitalización de la ciudad de Buenos

Aires en 1880; se sabe cómo los hombres dirigentes de esta provincia se oponían a cederla en propiedad a la nación, para que fuera cabeza de toda la república y las ardientes discusiones que en su legislatura se promovieron, antes de aceptarse la ley de aquel año que la federalizaba; está fresco todavía el recuerdo de la difícil situación de las autoridades nacionales,—que muchos han ridiculizado,—residiendo en una ciudad donde no podían ejercer jurisdicción de ninguna especie y en donde primaban los poderes provinciales; y no se olvida, por fin, que hasta que el célebre congreso de Belgrano votó la ley de capital, y el ilustre presidente Avellaneda tuvo el acierto de promulgarla con su firma, como había tenido el patriótico designio de auspiciarla con su mensaje oficial ante la misma asamblea, el país no quedó definitivamente organizado sobre bases duraderas, ni fué cierta la unión nacional por todos aspirada, como exclusiva fianza de la estabilidad de la república.

Pues bien; los que han explicado por qué este pleito de la capital argentina se prolongó desde 1853 hasta 1880, con todas las alternativas y las instancias que le han caracterizado como una de las jornadas más largas de la historia nacional, lo atribuyen en gran parte al exagerado sentimiento localista de los porteños, que no se resignaban a desprenderse de la ciudad de Buenos Aires, ya entonces orgullo de ellos y hoy justo motivo de envanecimiento de todos los argentinos.

Las leyes no cambian de un solo golpe las tradiciones, por más que ellas se dicten para responder a premiosas exigencias del momento: y si la de 1880 que convirtió en capital de toda la nación a la de la provincia de Buenos Aires, resolvió un urgente problema constitutivo, no podía extirpar aquellos sentimientos que estaban arraigados bien hondo y que solo habrían de desvanecerse con el transcurso de los años, que dió miras más amplias a nuestros hombres de gobierno, y con el crecimiento del país, que hizo imposibles las tentativas separatistas. Convencidos de esta verdad que enuncio, el poder ejecutivo nacional y los miembros del congreso de aquella época, dictaron la ley del 81 organizando los tribunales de la capital, ajustándose a un sistema ecléctico; pues creaban la justicia federal, a la vez que conservaban la ordinaria o común de la provincia, existente desde mucho tiempo atrás, en condescendencia necesaria hacia el estado de las cosas en aquel entonces.

Por eso el ministro doctor Pizarro, en el discurso

que recordé, clasificaba la justicia organizada por el proyecto que defendía ante el congreso, como *sui-géneris*, especial; y decía que la ley por cuya sanción iba a interesar a la cámara de diputados era esencialmente política y su objeto más inmediato, completar la obra de la capitalización de Buenos Aires; que no se buscaba con ella substituir un régimen judicial por otro con el fin de mejorar la rama de la justicia, sino dotar a la república de este importante instrumento de gobierno, con arreglo a las prescripciones de la constitución.

Y así lo juzgaba también el ilustrado ministro de justicia doctor Magnasco en el mensaje a que ya hice referencia, cuando en uno de sus párrafos decía, explicando el asunto bajo su faz histórica: "Realizados al fin los justos anhelos del patriotismo con la adquisición definitiva de este municipio para capital permanente de la nación, el espíritu político entonces debió sentirse cohibido por la anormalidad de las circunstancias en que se operaba la gran transmutación, y fué obra de estadistas contemporizar y restringir prudentemente las consecuencias regionales del suceso para hacer honor al desprendimiento de la provincia cedente, concediendo a la localidad nacionalizada un resto importante de su antigua individualidad y sacrificándose así en cierto modo, por razón de las circunstancias, el aprovechamiento íntegro de aquel último gran triunfo de la unión nacional".

Fueron, pues, circunstancias políticas anormales, la necesidad de conciliar la situación anterior con la que iba a iniciarse, sin producir mayor rozamiento ni cambios bruscos en las cosas y en las instituciones, lo que hizo aceptable para la mayoría de las dos cámaras del congreso y de los centros interesados en esta cuestión, la ley número 1144 de 15 de diciembre de 1881, en la forma como fué combinada por el poder ejecutivo nacional, según lo declara su mismo representante el señor ministro de justicia, al invocarlas como razón suprema, en aquella asamblea a que antes me he referido.

Acepto, hasta cierto punto, que en esa época fuese admisible el establecimiento de las dos jurisdicciones en la forma hoy existente: de la ordinaria o común, a que estaban acostumbrados los habitantes de Buenos Aires, y cuya supresión habría dado quizá margen a serias perturbaciones, y de la federal, ordenada por la constitución. Pero ahora, cuando han desaparecido por completo las causas originarias, cuando aquellos temores y miramientos no tienen ya ninguna

razón de ser, su fundamento político no existe, y los dos fueros deben convertirse en uno solo: el federal.

Aunque nada sea imposible en la evolución de los pueblos y de las sociedades, puede asegurarse que es tan remoto que diríamos quimérico, el peligro de que los porteños vuelvan a disputarnos los derechos conquistados sobre la ciudad de Buenos Aires, convertida desde 1880 en el "patrimonio común de todos los argentinos"; que la capital está definitivamente consolidada por la fuerza de la tradición y de las condiciones económicas, políticas, geográficas y hasta estratégicas, que indican a esta ciudad como la mejor para servir de cabeza de la república, con absolutas ventajas sobre cualquier otra, y que hemos pasado felizmente la edad de los ensayos, entrando resueltos a la de la madurez, en que no serán fáciles los retrocesos a las épocas de luchas intestinas, que pudieran amenazarnos con cambios radicales en el orden interno de la nación.

De los sentimientos localistas que fueron también, es cierto, obstáculos fuertes para muchos acontecimientos y transacciones entre porteños y provincianos, no quedan ya sino rastros imperceptibles, que no pueden constituir barreras para la difusión del espíritu nacionalista, que se siente predominar en múltiples manifestaciones de la vida argentina. Y si en determinados círculos políticos y sociales, todavía se nota preguntar el origen localista cuando alguna cabeza se levanta sobre todas las demás, son efectos de las emulaciones personales, más que de sedimentos de aquella necia prevención, que pudo estar en auge en otros tiempos y que hoy sólo se explica y se anida en inteligencias estrechas y en corazones reducidos.

Los hijos de la última provincia argentina, del pueblo más pobre y de la villa más apartada del interior de la república, encuentran en la capital ya tradicionalmente hospitalaria, la acogida más franca y leal que pueda brindarse; los provincianos, por humildes que sean, no pasan como extraños en Buenos Aires, y los porteños tienen puesto de honor y distinción en cualquier punto del territorio; los primeros gozan en esta ciudad de todas las consideraciones a que les dan derecho la buena conducta y los títulos intelectuales, más que en sus propios terruños, en donde algunas veces se hace todavía hincapié en los blasones de la sangre para no abrirse bien amplias las puertas de la sociedad; y los segundos están garantidos contra todo menosprecio en los círculos más aristocráticos de nuestras provincias. Con diversos y curiosos detalles

podría confirmar mis palabras anteriores; pero, el temor de caer en pueriles comentarios y la convicción de que el concepto que expreso está ya bien formado, me hacen renunciar a dicha idea.

Las razones políticas aquellas de que se hizo mérito en 1881, han desaparecido, pues, en la actualidad; y nada se opone, en este terreno, a la reforma que se intenta.

Bajo el punto de vista constitucional, es igualmente sin fundamento la división de las dos jurisdicciones. Recorriendo todas las cláusulas pertinentes de nuestra ley orgánica, ha de notarse, en efecto, que ella no admite en la república más que dos clases de fueros: el federal y el provincial; exceptuando la justicia de los territorios nacionales, que puede organizarse, como luego demostraré, en forma particular, distinta de las otras, en vista de la amplísima facultad que a su respecto puede ejercer el congreso. Las recordaré, entonces, por su orden de importancia para el objeto que persigo.

El inciso 11 del artículo 67 que determina las atribuciones del congreso dice: "Dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones", etc.; el 17 del mismo: "Establecer "tribunales federales inferiores" a la suprema corte de justicia", etc.; el inciso 5o. del art. 86, que enumera las facultades del poder ejecutivo: "Nombra los magistrados de la corte suprema y de los demás "tribunales federales inferiores", con acuerdo del senado"; el 6o. del mismo: "Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la "jurisdicción federal", etc.; los arts. 34, 45, 62 y todos los comprendidos del 94 al 103, cuya transcripción haría demasiado fatigosa la lectura de este capítulo. Estudiando con detenimiento estas cláusulas constitucionales, se arribará sin esfuerzo a la conclusión de que la ley fundamental argentina, no establece más distinción que entre tribunales federales y provinciales; de donde lógicamente se deduce que, no pudiendo ser los de la capital de la última categoría, son evidentemente federales.

Se robustece aun más este concepto con lo estatuido por el art. 100: "Corresponde a la corte suprema y a los tribunales inferiores de la nación el conocimiento y decisión de todas las causas que

versen sobre puntos regidos por la constitución, y "por las leyes de la nación, con la reserva hecha en el inciso 11 del art. 67". Con esta cláusula se ha querido decir que las leyes nacionales, entre las que están comprendidos los códigos civil, comercial, penal y de minería, deben ser aplicadas por la suprema corte y por los demás tribunales inferiores de la nación, que en cumplimiento de lo ordenado por el art. 67 en su inciso 17, que antes recordé, estableciera el congreso en el territorio de la república; haciendo una sola excepción a favor de las provincias, que aplicarán los mismos códigos, cuando las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Y como las cosas y las personas de la capital federal están,—no cabe duda,—fuera de la jurisdicción de los estados provinciales argentinos, los tribunales federales son los llamados a conocer en todas las causas que versen sobre puntos regidos por la constitución y por las leyes nacionales, ocurridas dentro de sus límites territoriales. Todos los tribunales del distrito federalizado deben desprenderse, pues, de la constitución y tener el carácter de federales.

Los que objetan esta conclusión que dejo sentada, fundan sus argumentaciones en los incisos 14 y 27 del art. 67 que dicen, respectivamente, hablando de las atribuciones del congreso: "Arreglar definitivamente los límites del territorio de la nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y "determinar por una legislación especial la organización y gobierno que deben tener los territorios nacionales" que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias"; y "ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la capital de la nación y sobre los demás lugares adquiridos por compra o cesión en cualquiera de las provincias, para establecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional"; diciendo que en virtud de ellos el congreso está autorizado para crear tribunales y jueces en la capital, que no sean los que la constitución llama inferiores a la suprema corte y como tales dispone sean establecidos.

Se confunde de esta manera a los "territorios nacionales" de que habla el inciso 14, con el "territorio de la capital" a que se refiere el 27; cosa que es inadmisibles, bien comprendida la naturaleza característica de ambas entidades. Los primeros son las porciones de la república que no han llegado

aún a la categoría de provincias y que están fuera de los límites de éstas, constituyendo las actuales gobernaciones nacionales, que dependen en absoluto del poder central; y la segunda, según lo dije en otra oportunidad, es la antigua ciudad de Buenos Aires, erigida en capital de todo el país en 1880 y que nunca fué territorio nacional en el sentido dado a estas palabras por el inciso recordado. En cuanto se refiere a los primeros, el gobierno federal puede organizarlos en la forma que crea conveniente, haciendo uso el congreso de las amplísimas facultades que le acuerda la constitución en el inciso 14 del art. 67, dándoles en consecuencia, si así lo cree necesario, jueces especiales distintos de los federales; en cuanto a la segunda, puede el congreso ejercer, es cierto, una legislación exclusiva; pero la misma que ejerce respecto de las fortalezas, arsenales, almacenes, etc., de la nación, que en manera alguna puede servirle para crear una justicia especial de la naturaleza de la ordinaria o común que hoy funciona, como no puede tampoco darle, no obstante su "exclusiva legislación", un poder ejecutivo distinto, ni una legislatura especial; porque va el inciso 27 del artículo 67, que recordé más arriba. le ha establecido esta última en forma inconfundible, que es el congreso y el inciso 30. del art. 86 ha prescripto, hablando de las atribuciones del presidente de la república: "Es el "jefe inmediato y local" de la capital de la nación".

Y a propósito de este carácter con que inviste al poder ejecutivo nacional nuestra ley suprema, es oportuno poner de relieve, por vía de concordancia al menos, que tan anómala como el establecimiento de la justicia ordinaria o común, es la existencia en la capital de un sistema comunal autónomo, como si el pueblo del distrito federalizado no tuviera ya garantida su participación en el cuerpo legislativo por el derecho que conservó, al igual de los estados provinciales, de elegir sus diputados y senadores al congreso. Se explica en cierto modo, que el presidente de la república delegue en un funcionario que le sea subalterno el ejercicio de sus atribuciones de "jefe inmediato y local de la capital" cuando más no fuera que, obedeciendo al principio y a la necesidad de la división del trabajo, en cuanto se refiere a la materia municipal; pero no se encuentra el fundamento constitucional ni doctrinario de la creación del concejo deliberante y de la autonomía de cuerpo representativo con que se le ha revestido.

En esto nos hemos apartado del modelo norteamericano, que no ha establecido una entidad comunal en la parte del territorio que se federalizó, y también de nuestra propia carta orgánica, que no lo autoriza en ninguna parte.

El doctor Ruiz de los Llanos, que defendía estas ideas en el congreso de 1881, como tuve ocasión de referirlo, dice en un folleto que publicó en 1899 sobre este punto: "No es cierto, por otra parte, que mi tesis esté reñida con la teoría que preconiza Story, citado como autoridad incontrovertible por los que, sin reparar en que la capital de una confederación no puede bajo ningún aspecto constituir uno de los estados confederados, han querido y quieren hacer de esta ciudad una verdadera provincia en lo referente a la administración de justicia". Cita luego la opinión del comentarista norteamericano, transcribiendo el siguiente párrafo: "En presencia de los términos generales de la constitución, "adoptar los reglamentos y medidas convenientes" (esta cláusula de la constitución norteamericana corresponde a la del inciso 14 del artículo 67 de la nuestra), nadie ha disputado al congreso el derecho de crear los "gobiernos de territorios" en toda la extensión de los Estados Unidos, y si se considera la ordenanza de 1787 y colocándose en el punto de vista de los redactores y del pueblo de los estados en aquella época, es imposible dudar de que ese poder ha sido juzgado como indispensable para alcanzar el fin de las cesiones hechas "por los estados al gobierno central". También, a pesar del carácter general y absoluto de la objeción recordada más arriba sobre el sentido de estos términos, y que consiste en decir que el congreso no tiene poder alguno para constituir una corporación, hemos visto que este poder mismo es una consecuencia del de "reglamentar los territorios de los Estados Unidos", y que aún es un medio propio para facilitar su ejercicio".

"La forma de gobierno a establecer en los territorios depende enteramente de la voluntad del congreso. Como tiene el derecho de constituir un gobierno territorial, puede darles los poderes legislativos, judiciales o ejecutivos que crea convenientes; puede dar un poder legislativo general, sometido solamente a las leyes y a la constitución de los Estados Unidos. Si la legislatura territorial ha recibido el poder de crear "los tribunales, estos tribunales son estrictamente territoriales, no son tribunales

constitucionales" investidos de la autoridad judicial definida por la constitución, sino "tribunales legislativos", creados en virtud del derecho de soberanía que pertenece al gobierno nacional, en virtud de la cláusula de la constitución que le da derecho para hacer todos los reglamentos necesarios a la administración de los territorios".

Mejores intérpretes de las disposiciones respectivas de su ley suprema que nuestros legisladores del año 81, — que nos dieron las dos clases de tribunales hoy existentes en la capital de la república, — los estadistas de la Unión Americana organizaron el poder judicial del distrito federalizado, estableciendo una sola jurisdicción, la federal, en la ciudad de Washington; porque habían entendido desde el primer momento en que los estados de Maryland y Virginia cedieron parte de sus territorios para que se hiciera el asiento de las autoridades de la nación, que no podían existir allí órganos de justicia locales por derecho propio, y que los jueces federales debían conocer de los asuntos de ambos fueros, sin las distinciones fundamentales que caracterizan el sistema implantado por la ley argentina del año 1881, ratificada en esta parte por la de 1886 en vigencia. Y aunque haya ciertas diferencias históricas en el proceso de la formación de las dos capitales, la argentina y la americana, puede decirse que ellas no son tales como para explicar el fenómeno de este apartamiento del modelo en cuanto a la organización de la justicia, y que, en todo caso, han desaparecido ya al resolverse el arduo problema de la capital entre nosotros, definitivamente solucionado.

Con éste y con aquél juicio terminante del autorizado comentarista de nuestro modelo constitucional, que piensa que el congreso de su país no puede crear poderes legislativos, judiciales o ejecutivos, sino en los territorios, mas no en la capital de la Unión Americana, que tiene ya por la misma constitución dichos poderes, queda demostrado en forma clara, que no pueden invocarse a este respecto ni los antecedentes norteamericanos para sostenerse la teoría contraria a la de la unificación de fueros en la capital. Y una de nuestras asambleas históricas más célebres, el congreso del Paraná, cuerpo legislativo de la confederación formada por las provincias argentinas, sancionó en 16 de agosto de 1858 la primera ley organizando la justicia en el territorio federalizado, — que era toda la provincia de Entre Ríos, — y declaró federales todos los tribunales

que creaba en ella, porque ésta se había convertido en capital de la república; sin que pueda pensarse que así lo hubiera decidido por una inspiración del momento, porque estaba constituído por las mismas personalidades que cinco años antes habían hecho la constitución nacional, con la clarividencia que es notoria e indiscutible. Por otra parte, el sistema de la unificación de fueros está ya consagrado en la justicia dada por el congreso a los territorios nacionales, en donde los jueces letrados, como se sabe, entienden a la vez que en los asuntos que son propios de la jurisdicción federal, en los que se han atribuido a la ordinaria o común, sin ninguna dificultad; y si esto se ha hecho con ellos que pueden tener la administración de justicia que se le ocurra al congreso darles como mejor, ¿por qué no ha de hacerse igual cosa en la capital, que se encuentra también bajo la jurisdicción nacional y a cuyo respecto la carta orgánica del país no concedió facultades al poder legislativo, para organizarle la doble justicia que ahora tiene?

No concibo el por qué explicativo y satisfactorio. en el terreno institucional y político, del orden de cosas que critico. Sin embargo, la corte suprema de justicia ha consagrado la actual situación a que me vengo refiriendo, con un fallo que se registra en el tomo XXI, 2a. serie, página 128, expedido con motivo de la contienda de competencia suscitada entre el juez federal y el juez del crimen de la capital, para conocer en la causa seguida a don Eusebio Acevedo por delito de desacato y amenazas al presidente de la república, cometido por medio de la prensa, el año 1886. Dice uno de los considerandos de la sentencia del alto tribunal.

"Que la jurisdicción de los jueces federales difiere substancialmente de la de los jueces del territorio de la capital, no obstante ser unos y otros nacionales y proceder su nombramiento del gobierno de la nación; pues los primeros ejercen una jurisdicción de excepción limitada a los casos enumerados en el artículo 100 de la constitución nacional, mientras que los segundos ejercen la jurisdicción ordinaria que el poder legislativo les confiere y que puede éste ampliar o restringir según lo creyere conveniente. Los primeros son propiamente los jueces de la constitución, creados por el artículo 94 de la misma; los segundos son los jueces de la ley, establecidos por el congreso en virtud de la facultad que le acuerda el artículo 67, incisos 14 y 27, para ejer-

cer una legislación exclusiva en la capital y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias".

Aunque sea evidente la autoridad científica de las personalidades que subscriben este fallo, no me parece admisible el aserto que él encierra, cuando afirma ser de excepción la jurisdicción que ejercen los jueces federales de la capital; y pienso que semejante teoría sólo puede sostenerse en cuanto se refiere a los jueces federales de los estados provinciales, en los que se impone la absoluta diferencia entre las dos jurisdicciones, la ordinaria y la federal.

La interpretación gramatical y lógica del mismo artículo 100 que se invoca, así lo confirma, pues no hace ningún distingo cuando determina que a ellos, — a la corte suprema y a los tribunales inferiores de la nación, — corresponde el conocimiento de "todas las causas que versen sobre puntos regidos por la constitución y por las leyes de la nación", etc., y no necesita demostrarse que los códigos civil, comercial, penal y de minería, aplicados por la justicia común, están comprendidos entre las leyes nacionales a que se refiere dicho artículo. En donde los poderes nacionales imperan únicamente, como en la metrópoli argentina, sobreponiéndose a cualquiera otra autoridad provincial; en donde no se explica la existencia del fuero federal como una garantía y un amparo de la misma constitución y en beneficio de los extranjeros en jurisdicciones provinciales, porque ambos están, desde luego, protegidos,—sino como el natural complemento del gobierno nacional, que debe componerse de los tres poderes esenciales, a diferencia de lo que ocurre en las provincias, que reclaman los representantes de la justicia de la nación con aquellos fines y funciones,—no puede decirse, sin grave error, que estos magistrados tengan solamente una competencia de excepción, en la forma que lo pretende la corte suprema: ellos, los jueces federales de la capital de la república y demás tribunales superiores, están habilitados, constitucionalmente, para conocer en todos los juicios, sean universales o singulares, que hoy se reservan, en virtud de leyes del congreso, a la justicia ordinaria.

En cuanto al segundo fundamento constitucional del considerando arriba transcrito, ya demostré an-

teriormente que envuelve también una errónea interpretación de las disposiciones de nuestra ley suprema invocadas en el mismo (1).

Por las consideraciones que anteceden y por otras que no expreso a fin de abreviar en lo posible este trabajo, cuyo tema se presta a largas disertaciones, creo que dentro de los mandatos constitucionales no sólo es posible sino obligatoria la unificación de fueros en la capital.

En el terreno de las conveniencias prácticas, no puede dudarse tampoco de que dicha medida legislativa sería de muchos beneficios para la administración de justicia y de positivas ventajas para todos los que tengan que buscar su amparo en alguna forma. Se suprimirían definitivamente los conflictos de competencia que ahora se producen entre los jueces federales y los ordinarios, disminuyendo así las tareas de los tribunales superiores que tienen que resolverlos; se podría uniformar la jurisprudencia en el orden nacional, lo que hoy es imposible, porque la cámara de apelaciones en lo civil y la en lo comercial, criminal y correccional son tribunales de última instancia, tan independientes de la corte suprema como las cámaras de las provin-

(1) Después de aprobada esta tesis por la facultad, y cuando iba a entregarla a la imprenta, la corte suprema ha resuelto tres conflictos de competencia entre jueces de la capital, y en los fallos respectivos mantiene, en cierto modo, la jurisprudencia que sentó en el de 1886, a que acabo de referirme. Aludo a las sentencias dirimiendo las contiendas de competencia negativa suscitadas, una entre el juez de instrucción doctor Constanzó y el juez federal doctor Horacio Rodríguez Larreta para conocer en los autos: "Teatro Colón. Sumario instruido con motivo del estrago producido en el mismo", y las otras entre el juez del crimen doctor Vázquez y el antedicho juez federal, para entender en las causas instruidas a Simón Radowsky y Pablo Karachinski, por la muerte del coronel Falcón y su secretario Lartigau y por el atentado de la capilla del Carmen, respectivamente.

En estos tres fallos, nuestro más alto tribunal de justicia, da existencia legal, si así puede decirse, a la vigente organización judicial de la capital, con su división en ordinaria y federal. Y lo hace fundándose en el art. 100 y 67 de la constitución, que ya examiné, y en las leyes de jurisdicción y competencia dictadas por el congreso, anteriores y posteriores a esta última. La corte no ha tenido oportunidad, según más informaciones, de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de estas leyes, porque no se hizo nunca ante ella esta cuestión y sabemos que le está vedado expedir decretos de oficio a este respecto; de manera que no puede decirse que haya decidido su juicio sobre el fondo del asunto. Cuando lo haga, en un caso concreto, como tiene que ser, veremos qué resulta de las leyes en que ella misma se apoya ahora, para resolver las cuestiones de competencia y jurisdicción que se le presentan, y entonces recién se conocerá su verdadero criterio acerca del problema de la unificación de fueros en la capital.

cias, cuyos fallos hacen cosa juzgada, no estando ninguna de ellas obligada a tener en cuenta los que dicte la otra; y por fin cesarían en parte la incertidumbre y las vacilaciones que dominan muchas veces a legos y letrados, cuando tienen que recurrir a la justicia de la capital, para saber a qué jueces corresponde presentarse, sin el peligro de una equivocación, siempre gravosa para los litigantes y perjudicial para el abogado.

Con lo que acabo de exponer, contesto en términos generales a los argumentos de los doctores Marenco, Achával Rodríguez y Calvo, que combatieron en 1881, en el seno de la cámara de diputados, la idea del establecimiento de una sola justicia federal en el territorio de la capital, defendida por el doctor Ruiz de los Llanos. Las razones que antes expliqué, dieron a los primeros el triunfo legislativo que perseguían; pero las deficiencias de la actual organización de la justicia y los graves inconvenientes que se oponen a su buen funcionamiento, demuestran que el último estuvo más cerca de la verdad con la tesis sostenida en aquel debate.

En el proyecto de reorganización de los tribunales, sometido a estudio del congreso el año pasado por el poder ejecutivo y que ha de tratarse en las sesiones del presente, no se llega a la unificación de fueros en los términos radicales que sería de desear, porque, se dice en el mensaje respectivo que lleva la firma del actual ministro de justicia, doctor Naón, "un proyecto concebido con esa amplitud, traería aparejados inconvenientes de carácter práctico, que es prudente eludir". Y se explica en conjunto la reforma proyectada en el siguiente párrafo del mismo documento: "El poder ejecutivo entiende que por el adjunto proyecto de ley se inicia francamente la unificación del fuero, suprimiendo el actual inconveniente fundamental de las cuestiones de competencia por razón de la nacionalidad y de la vecindad, dejando en pie la actual armazón judicial, para evitar los trastornos que pudieran suscitarse con una reforma radical, pero dando a todos los jueces de la capital el carácter de federales. De esta manera se habrá conseguido dar un gran paso, sin despertar celos y sin perturbar la marcha de la justicia, en la forma en que hoy se desenvuelve. Los jueces federales existentes seguirán como jueces especiales para conocer en las cuestiones en que por razón de la materia entienden actualmente, y

los demás jueces que se declaran federales conocerán en la generalidad de los asuntos manteniendo la separación existente respecto a la jurisdicción de los jueces civiles y de comercio, criminales y correccionales".

El proyecto antedicho significa, en realidad, un paso decisivo en este problema que desde hace tanto tiempo se plantea, sin que nadie se proponga con empeño resolverlo, y el congreso hará obra buena sancionándolo; más no acierto a comprender cuáles son los inconvenientes que impiden tentar su solución con la requerida amplitud.

Buenos Aires, agosto 31 de 1920.

Señor juez:

Al contestar el pedido de opiniones que U. S. ha recabado por circular pasada a los secretarios, me es grato manifestar a V. S.

1o. — *¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital?*

Mi opinión es afirmativa. Las razones de orden político que han determinado la creación de la justicia nacional frente a la justicia local, han desaparecido. La garantía de la justicia federal determinada por los motivos que sucintamente expresara el doctor Vélez Sársfield en el prólogo del federalista: mantenimiento de una jurisdicción superior que dirimiera conflictos de orden interno entre las justicias de provincias y vecinos de las mismas, para evitar contiendas de otro orden, y además el derecho correlativo al deber de la nación de mantener con respecto a los extranjeros los derechos constitucionales, ya no subsisten.

2o. — *¿Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de la quiebra y otros asuntos?*

Consecuente con la opinión anterior, pienso que no.

3o. — *¿Conviene aumentar el número de las cámaras federales de circuito?*

Es una cuestión de estadística sobre la que no se puede opinar sin conocer los datos numéricos indispensables.

4o. — *¿Qué reformas procesales considera urgentes?*

La ley actual interpretada con criterio amplio satisface todas las necesidades del procedimiento. Las reformas substanciales proyectadas, serían, a mi juicio, contraproducentes. El procedimiento oral que se ha querido establecer tendría el inconveniente de desvirtuarse en la práctica por la imposibilidad material de que el juez presidiera las audiencias como sucede en la actualidad, llegando a desnaturalizarse por esa razón, el trámite verbal y actual de algunos juicios, como sucede en los interdictos. Si alguna reforma podría prosperar con éxito, sería la de dar sanción legal a la práctica diaria de los tribunales, habilitando a los jueces para delegar en los secretarios el procedimiento simplemente de trámite, e intervenir solamente en esa clase de incidencias cuando ellas se hagan contenciosas.

Saludo a V. S. muy atentamente.

Napoleón Paz (hijo).

Señor juez doctor M. Mackinlay Zapiola:

Contesto a V. S. las preguntas que ha tenido a bien dirigirme en su circular del corriente mes:

10. — *¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital?*

Creo que la división actual no tiene razón de ser, sobre todo en cuanto concierne a la competencia por razón de las personas; conviniendo la unificación de los fueros pero siempre que se mantengan los actuales jueces ordinarios con las mismas atribuciones que al momento poseen sin agregarle mayores materias para su juzgamiento, para lo cual opino deben crearse jueces especiales que podrían ser los mismos actuales jueces federales, para resolver las cuestiones que hoy son única y exclusivamente del resorte federal y que deben resolverse de acuerdo con leyes y procedimientos especiales, debiendo la actual cámara federal ser el tribunal de apelación para dichos jueces.

2a. Queda contestada.

3a. Ignoro las necesidades que puedan existir a ese respecto.

40. — *¿Qué reformas procesales considera urgentes?*

a) Las notificaciones por cédula deben reducirse única y exclusivamente y salvo petición expresa de

las partes o de oficio a la demanda, auto de prueba y sentencia.

b) Estas notificaciones así como todas las diligencias de prueba deben ser practicadas por oficinas especiales.

c) Debe establecerse la prioridad en el orden de los embargos para evitar las continuas divergencias que existen a este respecto.

d) Es absolutamente indispensable reformar las disposiciones que rigen la materia de inhibiciones, las que en la actualidad son deplorables y dan motivo a casos de injusticia manifiesta.

e) Los cargos de los escritos deben ser firmados por los empleados que los reciban.

Saluda a S. S. muy atentamente.

Juan José Coronado.

Agosto 31 de 1920.

Señor juez:

Contestando a las preguntas que se ha servido hacerme en la circular que antecede, me permito manifestar lo siguiente:

A la primera: Que es conveniente la unificación de los fueros federal y ordinario en esta capital. Todos ellos podrían ser convertidos en juzgados federales, porque no tiene razón de ser en esta capital esa dualidad de fueros, supuesto que todos los jueces tienen el mismo origen en cuanto a la manera de ser nombrados.

A la segunda: Conviene incluir en lo federal el conocimiento en los juicios de quiebras.

A la tercera: Es conveniente aumentar el número de cámaras federales.

A la cuarta: Entre otras considero convenientes las siguientes reformas: cédulas por correo o creación de un puesto de notificador especial y creando una partida especial de gastos. Que el oficial lo. o el empleado que atienda la ventanilla autorice con su firma los actos que ante él se realicen. Que se notifiquen por cédula solamente los traslados, el auto de apertura a prueba y la sentencia. Los autos de mero trámite debieran ir con la sola firma del secretario. Los interlocutorios en igual forma, pero

con reconsideración para ante el juez. Limitación de la intervención de los ministerios públicos a ciertos y determinados autos en los juicios en que son parte. Limitación del número de testigos en cada juicio. Dios guarde a V. S.

Carlos Guerino.

Señor juez:

Cumplo el honroso encargo de V. S. al someterme al cuestionario precedente, contestando en la siguiente forma:

Primero: Con la unificación de los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital se salvaría la situación anómala en que se encuentran los jueces ordinarios de la capital, ya que, constitucionalmente no pueden ampararse en la inamovilidad mientras dure su buena conducta, que es base fundamental para la independencia del poder judicial. Se evitaría también innumerables cuestiones de competencia que retardan los juicios y complican su tramitación.

No existe por otra parte ninguna razón de orden público que haga necesaria la diferenciación de jueces nombrados para el mismo distrito por las mismas autoridades. Propongo como solución, la más simple: El juez federal en lo criminal será uno de los tantos jueces de sentencia y los dos que actúan en materia civil se convertirán en jueces ordinarios en lo civil. Con la cámara federal se formaría la tercera cámara civil.

Segundo: No tengo opinión formada sobre este punto.

Tercero: Carezco también de base para contestar este tópico, si bien indicaría en caso de que la cámara federal se convierta en ordinaria de la capital, la creación de una cámara federal para las provincias de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) que anteriormente formaban parte de la jurisdicción de la cámara federal de la capital.

Cuarto: Como regla general considero que debe reformarse el código de procedimientos, abreviando los términos y dando a los secretarios de juzgado las atribuciones que tienen en la realidad y poniendo en concordancia dicho código con las necesidades y facilidades de la vida moderna.

Especificando, propongo como reformas más necesarias y fáciles de llevar a la práctica las siguientes:

a) Notificaciones por correo de acuerdo con el proyecto de ley sancionado por el honorable senado de la nación.

b) Trámite sumario del juicio ejecutivo: Después de la intimación de pago al deudor, se convocará a las partes a juicio verbal para que el ejecutado oponga excepciones y en su caso ofrezca su prueba; una vez producida ésta el juez dictará sentencia y siendo procedente la ejecución, en la misma resolución decretará la venta de los bienes embargados, con la base de la contribución directa, tratándose de inmuebles.

c) Sucesiones: Cuando el monto de estas no exceda de cinco mil pesos y los herederos sean descendientes, ascendientes o cónyuges, bastará presentar las partidas habilitantes y publicar edictos por ocho días para que el juez dicte declaratoria y entregue los bienes.

d) Al contestarse la demanda, deberá llamarse a juicio de conciliación en una audiencia próxima, y no pudiendo llegarse a un arreglo se establecerán los puntos sobre los cuales versará la prueba, debiendo desecharse en lo sucesivo las que se ofrezcan y no se refieran a los puntos establecidos.

e) Concursos: equiparar en lo posible los concursos civiles a los comerciales, estableciendo el concordato y la rehabilitación.

Saludo a U. S. muy atentamente.

José C. Miguens.

Agosto 31 de 1920.

Del juez federal de La Rioja, doctor A. M. de la Colina

La Rioja, septiembre 10. de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

Buenos Aires.

Me es grato contestar su nota del 6 del mes pró-

ximo pasado, sobre las cuestiones que en ella me propone, para lo cual reproduzco las preguntas y a continuación de cada una de ellas doy mi parecer.

10.—¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital? ¿Qué solución aconseja para resolver este problema? Estoy en completo desacuerdo con los que piensan que deben reunirse los fueros federal y ordinario en los tribunales de esa capital, porque su separación la encuentro fundada en el texto expreso de la constitución. De la regla general del artículo 94 emanar los tribunales federales en todo el territorio de la nación, y del poder de legislación exclusiva que tiene el congreso, por el artículo 67 incisos 14 y 27 en la capital y territorios nacionales, provienen los tribunales del fuero común u ordinario en la primera. Así lo ha resuelto con toda exactitud en mi concepto la corte suprema de justicia de la nación, en el tomo 30, página 112 de sus fallos y otros. Si bien, según la constitución y jurisprudencia del tribunal citado, tomo 99, página 383, el congreso tiene facultad para unificar los fueros federal y ordinario de la capital y territorios nacionales, no creo serio, ni puede darse importancia al único argumento, que apenas merece tomarlo en cuenta, entre otros, que hacen los partidarios de la unificación, de que con ella se evitan las cuestiones de competencia, que ocasionan jurisprudencia contradictoria, gastos y pérdida de tiempo, porque tales inconvenientes se evitarían con solo establecer reglas claras y precisas que determinen los asuntos que corresponden a uno y otro fuero; prescindiendo de términos generales e indeterminados, como los de la legislación vigente, que dan lugar a discusiones y diversas interpretaciones. Además, la organización de los tribunales de la capital respeta el principio de la división del trabajo que lo hace fecundo y provechoso, de donde resulta que el juez consagrado al manejo de asuntos de una sola naturaleza, adquiere destreza y versación para expedirse con prontitud y eficacia; en tanto que la variedad de causas que trae la unión, lo obligan a diversificar su atención en el estudio de diferentes materias, sin obtener el dominio de ninguna, ni adquirir, por ello, la suficiencia necesaria para resolver con criterio seguro dentro de plazos limitados los asuntos sometidos a su decisión. Pensar lo contrario es separarse por completo de la realidad de las cosas. Así, cuando necesitamos

sancionar leyes o modificarlas, lo primero que hacemos es ocurrir a los que han sobresalido o se han especializado en el asunto sobre que versa la ley objeto de la sanción o reforma. En la vida diaria apelamos a los especialistas para que nos den luces sobre las diversas materias que constituyen el saber humano. ¿Por qué no ha de suceder lo mismo con los jueces? hoy sobre todo que con el incesante y prodigioso adelanto de la ciencia la vida de un hombre es insuficiente para abarcar y conocer con exactitud sus diversas ramas.

2o.—¿Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos? No estoy de acuerdo con los que sostienen que según los artículos 67, inciso 11 y 108 de la constitución, el congreso solo puede legislar especialmente sobre los concursos comerciales, y que por lo prescripto en el artículo 100 de la misma, deben ser incluidos en las causas de jurisdicción federal. De lo dispuesto por los artículos 67, inciso 11 y 108 citados, surge con evidencia, conforme lo ha establecido la corte suprema de justicia de la nación en el tomo 129, página 181 de la colección de sus sentencias, que el congreso tiene facultad discrecional para legislar sobre las quiebras, ya en el carácter de preceptos que tradicionalmente se han considerado como una rama del derecho común, o ya en el de disposiciones especiales, cuando algún motivo o circunstancia particular lo exigiere. Por ahora no veo la razón o motivo singular que demuestre la necesidad o conveniencia de legislar especialmente la quiebra, a no ser que se diese crédito a lo que algunos aseveran, de que la justicia federal ofrece mayores garantías que la provincial, afirmación que no se ha demostrado y que a mi modo de ver es inadmisibles, porque la justicia en las provincias no ha podido substraerse al adelanto que hemos alcanzado y al eficaz contralor de la opinión pública; y no es posible, por meras afirmaciones, llevar a conocimiento de la justicia federal asuntos del género que me ocupa, propios de la legislación común, y por lo mismo, del resorte de la justicia local. Pienso que en vez de ampliarse la jurisdicción federal debe limitarse su intervención a los asuntos que actualmente son de su competencia, excluyendo los que expreso en seguida, pues si se le diese mayor extensión, se la convertiría de jurisdicción de excepción en jurisdicción ordinaria, desnaturalizándola por cierto y

dando lugar a que los tribunales federales en ejercicio de su atribución moderadora la restrinjan. Un ejemplo de esto nos ofrece la corte de justicia nacional, cuando en numerosos fallos, ha excluido de la competencia de los jueces de sección delitos del derecho común que la ley de defensa social número 7.029 somete a su conocimiento. Los asuntos que creo que deben excluirse de su conocimiento, sin dilación, son: el cumplimiento de las leyes del padrón electoral 8130, de elecciones nacionales 8871, de enrolamiento 8129, de servicio militar 4707 y de excepciones del mismo 9686. Las dos primeras, porque la materia sobre que versan, salvo los juicios por violación de las mismas, no corresponden a los tribunales nacionales, cuya misión se limita a administrar justicia en causas o contiendas entre partes, como lo establece el artículo 100 de la constitución; y las citadas leyes, de carácter político y administrativo, no responden a ese propósito, pues su cumplimiento se reduce a alistar ciudadanos para el sufragio, a la designación de los que han de recibir el voto, al escrutinio de la elección y aconsejar su aprobación o desaprobación al juez que por la constitución se ha de pronunciar sobre ella en definitiva. Fuera de la violación del precepto constitucional citado que importa la intervención que se da a la justicia federal en la ejecución de dichas leyes, considero oportuno hacer notar el grave entorpecimiento y retardo del despacho diario del juzgado que ese trabajo ocasiona, por cuanto se hace con empleados que carecen de la preparación necesaria, y el juez tiene que consagrar a él su atención, abandonando sus funciones. La falta de colaboradores inteligentes proviene de la exigua remuneración que se les asigna, pues esto impide ocupar personas con aptitudes suficientes para el servicio de que se trata. La misión política, por otra parte, que dan a los jueces las leyes que me ocupan, perturban seriamente sus funciones, trayendo también por consecuencia la demora de la substanciación y resolución de los juicios; pues se los aleja del ambiente sereno y tranquilo en que se encuentran, indispensable para la meditación y estudio de los asuntos, llevándolos al terreno escabroso de la lucha electoral, en donde por el enardecimiento de las pasiones, son víctimas de denuncias o acusaciones calumniosas de los partidos y de la prensa mal inspirada. La razón que se adujo para poner en manos de los jueces el cumplimiento de las enunciadas leyes, fué la de que, con ello, se evitarían los

fraudes; pero desde la fecha de su vigencia hasta el presente, no obstante esa medida, los fraudes continúan o por lo menos nadie ha demostrado, con estadísticas a la vista, que hayan disminuído: lo que quiere decir que el temperamento adoptado con ese objeto ha sido completamente ineficaz. Finalmente desde que rigen las leyes mencionadas, se viene observando una tendencia perniciosa y de funestas consecuencias para el buen nombre y prestigio de la magistratura federal, cual es, de que cuando se trata de proveer los puestos de funcionarios que deben aplicar las citadas leyes, a designio se busca, no los mejores y los más aptos, como lo exige la constitución y la ley, sino a los que de antemano se sabe que por sus ideas políticas han de responder con toda seguridad a los intereses del partido que trabaja en favor del nombramiento; y cuando los que están en el ejercicio de sus funciones, tienen una orientación política definida, o no tienen ninguna, como debe ser, y por lo mismo, han de aplicar dichas leyes, sin contemplaciones ni miramiento alguno, entonces, o se pretende desalojarlos del puesto, procurando para ello formarles causa bastante, o bien seducirlos con el ascenso. Contra lo dicho puede argüirse que lo mismo o peor ha de suceder si se pone en manos de otros funcionarios la ejecución de las leyes expresadas; pero a eso contesto que, entre esos dos males, debe estarse al menor, que es el de que los inconvenientes apuntados, se produzcan con extraños a la magistratura federal y no con miembros que forman parte de ella, porque dada la naturaleza de su investidura, sin reparo alguno, debe cuidarse solícitamente que mantengan su integridad y decoro. Es pues urgente quitar a los jueces federales la misión política que se les ha confiado con el cumplimiento de las leyes de que se trata. Igualmente debe eliminarse de su conocimiento las infracciones al enrolamiento, servicio en el ejército y excepciones del mismo; porque las transgresiones a esas leyes, que tienen por objeto la organización y disciplina de la fuerza armada de la nación, afectan principalmente a la institución militar y, por ello, deben someterse a los tribunales creados para su conservación y existencia. Magnasco. Introducción al estudio del código de justicia militar. Edición de 1895, página XXVII.

3o.—¿Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito?—Para arribar a resultados prácticos y seguros en la organización del poder judicial de la nación, a objeto de que responda, como es debido,

a los fines de su institución, entiendo que el único modo de resolver con acierto el asunto a que la pregunta se refiere, es el de nombrar una comisión compuesta de magistrados o de abogados experimentados, para que precisen el número de asuntos sobre una materia o varias que un juez, con un personal determinado y en un número de horas también determinado, puede tramitar y resolver en un mes, y según sea el número de causas que se ventilan en cada uno de los juzgados federales de la república, que arroje la estadística, crear tantos tribunales de esa categoría en cada sección, como número de asuntos pueda despachar por año cada uno de ellos, con sujeción a la unidad de labor fijada; procediéndose de la misma manera respecto a las cámaras federales de circuito que se trata de aumentar. La justicia pronta y barata que todos anhelamos, se obtendría por ese medio, y no como algunos tan desacertadamente creen con castigos o correcciones disciplinarias que deprimen. Es una insensatez pensar que con reprensiones o penas puede un magistrado hacer cosas sobrehumanas o maravillosas. El enorme trabajo que pesa sobre los jueces ha llegado en algunos tribunales a lo inconcebible. En la sección de La Plata, por ejemplo, había en 1918, 21.187 expedientes y 57.000 causas por infracción a la ley electoral; y basta el buen sentido para comprender que, tarea tan abrumadora, no puede ser cumplida o desempeñada por un juez por más talento e ilustración que se le suponga.

40. — ¿Qué reformas procesales considera urgentes? Considero urgente la sanción de un código de procedimientos en lo civil y comercial para la justicia federal, tribunales ordinarios de la capital y territorios nacionales, que simplifique la tramitación de los juicios, para su rapidez y disminución de gastos, y que con igual objeto instituya la escritura sólo en partes substanciales de la demanda, contestación, prueba y sentencia, aproximándose así a la oralidad del juicio, con tal que la facilidad de la expedición no afecte el ejercicio de los derechos y la justicia; que limite los recursos; que fije reglas que permitan establecer con seguridad cuando procede la apelación, y no preceptos generales, vagos e indeterminados, como los que contiene la actual legislación, que han dado lugar a diversas apreciaciones y a una abundante jurisprudencia contradictoria; que sus disposiciones guarden relación con las leyes de fondo y sean flexibles, de modo que puedan adaptarse a la naturaleza de cada

derecho o acción que se ponga en ejercicio. En cuanto al procedimiento penal para los aludidos tribunales, estoy de acuerdo con el proyecto presentado en abril de 1913 al poder ejecutivo de la nación por los doctores Pedro F. Agote, Ramón Méndez y M. A. Montes de Oca. Ese proyecto, sin transiciones bruscas, sin alteraciones violentas, dejando que las cosas sigan su desarrollo paulatino y normal, armoniza los principios de la legislación moderna con nuestras modalidades, hábitos tradicionales y progreso, que es a mi juicio el criterio con arreglo al cual se debe legislar en esa materia, por lo que creo que se impone su inmediata sanción.

Dejando contestadas en los términos expuestos cada una de las cuestiones propuestas en la nota que me ha dirigido, me es satisfactorio saludarlo con mi consideración distinguida.

Angel M. de la Colina.

**Del juez de instrucción de la capital, doctor R.
Ortiz de Rozas**

Buenos Aires, septiembre 10. de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados, doctor Roberto Parry.

Con la brevedad que me imponen circunstancias ajenas a mi voluntad, y concretándome a los puntos relacionados con las funciones del cargo que desempeño, tengo el agrado de contestar la nota del señor presidente en la cual solicita mi opinión sobre diversas cuestiones a estudio de esa comisión.

I

¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital?

Estimo que sí. Tal medida evitaría las contiendas de competencia, que tantas perturbaciones traen en la marcha de los asuntos, y serviría eficazmente para el afianzamiento de la justicia ordinaria, con-

siderada equivocadamente por algunos como una simple creación de la ley, cuyas condiciones puede ésta modificar a su arbitrio.

No trataré de demostrar aquí la constitucionalidad de la reforma, porque entiendo que la pregunta a que me refiero la presupone. Me limitaré a decir, que aún admitiendo que ese carácter fuera dudoso, sería un grave y peligroso error decidir la duda en sentido negativo, porque ello importaría afirmar que la constitución hace necesaria la existencia de una justicia nacional, que no forme parte del poder judicial de la nación, y que podría carecer de las garantías fundamentales establecidas para éste.

II

Solución práctica del problema

Se obtendría a mi juicio, mediante:

a) La declaración de que la cámara y los jueces federales de la capital, como las cámaras y jueces de la instancia, ordinarios de la misma, entenderán según su respectiva denominación tanto en los asuntos que expresan el artículo 100 de la constitución y las leyes sobre competencia de la justicia federal, como en los relativos a la aplicación de los códigos y leyes comunes y locales;

b), la atribución de la jurisdicción civil a uno de los actuales juzgados federales, de la comercial a otro, y de la criminal al tercero;

c), la atribución conjunta de la jurisdicción civil y comercial, a las actuales cámaras en lo federal, civil y comercial;

d), la reducción a cinco del número de miembros de la cámara en lo criminal y correccional, y la creación de una nueva cámara de cinco vocales para este ramo, a la que se incorporarían uno de los fiscales y dos de los miembros de la cámara actual, de modo que sólo habría necesidad de designar tres vocales más;

e), la determinación de los magistrados que han de desempeñar en la capital las funciones encomendadas por leyes especiales a miembros de la justicia federal;

f,) la aplicación en primer término por todos los juzgados letrados, cámaras de apelación y funcionarios judiciales correspondientes del distrito, según su ramo y la naturaleza de sus funciones, de las leyes orgánicas y procesales que hoy rigen para los del fuero ordinario, y la observancia subsidiaria de las del mismo

género relativas a la justicia federal, hasta tanto sean revisadas;

g), la disposición de que los recursos para ante la suprema corte de las sentencias pronunciadas por las cámaras de apelación, se acordarán según lo establecido por la ley No. 4055 en las causas del fuero federal, y con arreglo al artículo 14 de la ley No. 48 en las de derecho común;

h), la determinación de que los recursos provenientes de los juzgados de sección de San Luis, Mendoza y San Juan, corresponderán a las cámaras de la capital, según la materia respectiva;

i), la modificación, para acomodarlas a la nueva organización, de las reglas sobre superintendencia, contiendas de competencia, división en salas, actuación en pleno y reemplazo de miembros de las cámaras, determinadas por las leyes números 7055 y 8918.

III

Reformas procesales urgentes

En materia penal, considero que son:

1a. Supresión, con pocas excepciones, de la detención y de la prisión preventiva, por faltas o delitos leves.

El simple buen sentido demuestra que para asegurar la efectividad de las responsabilidades penales no es necesario privar sistemáticamente de su libertad a los presuntos culpables, en hechos de escasa o mediana importancia. Y nadie se impone la pena de ocultación o destierro, para eludir una sanción legal sin verdadera gravedad.

Reconocerlo así y adoptar la medida propuesta, es reducir a su minimum el peligro de la acción represiva anticipada, fundada casi siempre en pruebas incompletas que se considera en ciertos casos como indispensable al interés social.

2a. Limitación de la facultad de detener, la policía, sin orden judicial a los casos en que se trate del cumplimiento de condenas firmes por infracciones de su resorte; o de personas sorprendidas "infraganti" en la ejecución de un delito grave; o de hacer comparecer a los contraventores al sólo objeto de recibirles declaración inmediatamente y constatar de igual modo su identidad y domicilio; o para este último efecto, respecto a presuntos delincuentes de toda clase; o cuando se deba procesar a individuos contra los cuales haya semiplena prueba o indicios vehementes de

culpa, por contravención o delito de cualquier género, y no pueda constatarse su identidad y domicilio.

Responde a la necesidad de evitar detenciones no ajustadas a la ley, frecuentes hoy por exceso de celo o falta de criterio jurídico en la apreciación de las condiciones que justifican la restricción de la libertad individual.

3a. Determinación precisa de la forma y tiempo en que deben recibirse las declaraciones en sumarios policiales o judiciales.

Tiende a evitar a los ciudadanos faltas de consideración o molestias innecesarias, que restan a la autoridad no solamente prestigio y respeto, sino el concurso popular indispensable en la averiguación de los delitos.

4a. Fijación de un término breve, después de la indagatoria, para que los jueces se pronuncien sobre la libertad o la prisión preventiva de los procesados.

La falta de una disposición expresa en este sentido, da lugar a veces al mantenimiento de una situación perjudicial a la defensa de los procesados.

5a. Supresión del derecho de querellarse acordado a los particulares.

La intervención del damnificado, en cuanto se propone obtener el castigo del reo, es innecesaria, toda vez que el ministerio público ejercita sus funciones con ese fin; fomenta el espíritu de venganza, e introduce en los trámites y debates del proceso criminal, los errores y las argucias que ésta sugiere.

6a. Limitación del secreto del sumario.

La reserva de las actuaciones sumariales debe ser excepcional y no general. Demuestra la experiencia que ordinariamente carece de verdadero fundamento, y en cambio puede retardar la oportuna defensa de los procesados, mantiene a éstos en una ignorancia aflictiva sobre la marcha de sus causas, y crea a menudo desconfianzas y celos perjudiciales acerca de los procedimientos de la justicia, por el desconocimiento de sus actos o de los motivos que los determinan.

7a. Substitución del sistema de las pruebas legales, por el de la libre convicción de los jueces, formada dentro de un criterio de prudencia favorable a la libertad.

El temor a los errores judiciales ha creado formas rígidas de apreciación, que chocan frecuentemente con la sana crítica y desvirtúan, a veces de modo manifiesto, los propósitos de la ley penal.

Si se quiere obtener verdaderos progresos en la administración de justicia, deben buscarse por el camino

de la ampliación de sus facultades, con el aumento correlativo de las condiciones de idoneidad, independencia y responsabilidad.

8a. Vista oral y pública de las causas.

Traería al juicio criminal, además de una mayor rapidez, elementos muy apreciables. Para los jueces, impresiones vivas y directas del caso a que se aplica su poder y de las partes que en él actúan; para éstas, garantías y recursos siempre favorables a la verdad; para los auxiliares de la justicia, la influencia poderosa del acto en que más claramente se muestra el valor de su concurso y la alteza de su deber cívico; para todos el control del pueblo, que suscita nobles estímulos y reprime tendencias injustas o antisociales.

9a. Supresión del sobreseimiento provisional.

Durante dieciocho años de ejercicio judicial, he solicitado como fiscal y he pronunciado como juez multitud de sobreseimientos provisorios; sólo recuerdo que en un caso pasara después la causa a plenario, por acumulación de nuevas pruebas. Entre tanto, muchas de las personas afectadas por tales pronunciamientos, y quizás no pocas sin culpabilidad alguna, sufren el desconcepto de tener causa pendiente sin ventaja de ningún género para la sociedad. Pienso que esto me autoriza a recomendar el abandono de la institución.

Casi todas las reformas indicadas, importarían la incorporación a nuestra ley de formas procesales que tienen la consagración de la doctrina y de la experiencia de los países más adelantados. Ellas vienen reclamándose desde hace algunos años por distinguidos magistrados, profesores, abogados y funcionarios nacionales; han sido ya aceptadas por algunas leyes provinciales, y se encuentran propuestas con acierto en el proyecto de código de procedimientos en lo criminal para la justicia federal y ordinaria de la capital, presentado al poder ejecutivo en abril de 1913 por los doctores Méndez, Agote, Montes de Oca y Duffy.

Saludo al señor presidente muy atentamente.

R. Ortiz de Rozas

**Del juez de instrucción de la capital,
doctor J. A. de Oro**

Buenos Aires, 31 de agosto de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, adjuntando la contestación a la encuesta que levanta esa honorable comisión, relativa a la unificación de los fueros federal y ordinario de los tribunales de la capital.

El recargo de trabajo del juzgado que me está confiado me ha impedido ser más extenso y tratar todos los puntos que comprende la encuesta, como hubiera deseado.

Saludo respetuosamente al señor presidente y a sus dignos compañeros de comisión.

José Antonio de Oro.

¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital?

La unificación de los fueros federal y ordinario de la capital de la república no es contraria a las prescripciones de la constitución nacional, en mi opinión, como lo han demostrado primero el doctor Rodolfo Rivarola en su folleto titulado "Justicia de la capital—Unificación de los fueros federal y ordinario", publicado en 1908 y cuyo texto se encuentra inserto como apéndice en la obra del mismo autor "Del régimen federativo al unitario" y posteriormente los fundamentos expuestos en 1909 en el mensaje del entonces presidente de la república, actual miembro de la suprema corte de justicia federal doctor José Figueroa Alcorta, subscripto también por su ministro de justicia e instrucción pública, doctor Rómulo S. Naón, enviado a la honorable cámara de diputados propiciando la reforma, antecedentes a que me remito para evitar repeticiones innecesarias.

Siendo la unificación constitucional es evidente que conviene realizarla por no tener razón de ser esa dualidad de justicia en el mismo territorio evitándose demoras en la tramitación de los asuntos, con la eliminación de las cuestiones de competencia entre tribunales de distinto fuero, que en la actualidad se producen.

¿Qué solución aconseja para resolver el problema?

Como solución, para resolver el problema, aconsejo la sanción de un proyecto de ley análogo al siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo 10.—Reorganízase la administración de justicia del distrito federal bajo la denominación de "justicia de la capital federal", en la forma establecida en la presente ley, reconociéndose, en calidad de jueces de cámara, fiscales, jueces de la instancia y demás funcionarios judiciales de los fueros federal y ordinario, a los existentes actualmente.

Art. 20.—En la capital federal, habrá "tres" cámaras de apelaciones en lo civil, "dos" de lo criminal y correccional, compuestas cada una de un presidente, cuatro vocales y un fiscal, "doce" jueces de lo civil, "seis" de lo comercial, "quince" jueces del crimen, de los cuales diez serán de instrucción y cinco de sentencia y "tres" de lo correccional.

Art. 30.—La jurisdicción de las tres cámaras de apelaciones en lo civil será idéntica y comprenderá todo lo que es de su competencia actualmente, así como también todo lo que era de competencia de la cámara federal de apelaciones en materia civil.

Art. 40.—La jurisdicción de las cámaras de apelaciones en lo comercial, comprenderá todo lo que es actualmente de su competencia, así como también todo lo que era de competencia de la cámara federal de apelaciones en materia comercial.

Art. 50.—La jurisdicción de las cámaras del crimen y correccional de la capital, se extenderá a todo lo que es de su competencia actualmente y a todo lo que era de competencia de la cámara federal de apelaciones en materia criminal, por las leyes anteriormente en vigor.

Art. 60.—La jurisdicción de los jueces de lo civil se extenderá a todo lo que es de su competencia actualmente y a todo lo que era de competencia de los juzgados federales de lo civil. (cartas de ciudadanía, cuestiones relativas al servicio militar, etc.)

Art. 7o.—La jurisdicción de los jueces de lo comercial se extenderá a todo lo que es de su competencia actualmente y a todo lo que era de competencia de los jueces federales de lo comercial. (Asuntos de aduana, marcas de fábrica y de comercio, patentes de invención, etc.)

Art. 8o.—La jurisdicción de los jueces del crimen de la capital se extenderá a todo lo que es de su competencia actualmente y a todo lo que era de competencia del juzgado federal del crimen de la capital, debiendo hacerse los sumarios por los jueces de instrucción y tramitarse el plenario ante los jueces de sentencia.

Art. 9o.—La jurisdicción de los jueces de lo correccional, comprenderá todo lo que es actualmente de su competencia por las leyes en vigor y a las infracciones reprimidas con igual penalidad, sometidas actualmente a la justicia federal.

Art. 10.—Los jueces de las cámaras 1a. y 2a. de lo civil existentes y sus fiscales, con su personal respectivo, constituirán las cámaras 1a. y 2a. de justicia de lo civil de la capital federal.

Art. 11.—Los jueces de la cámara federal de apelaciones y el fiscal de dicha cámara, con su personal respectivo, constituirán la cámara 3a. de justicia en lo civil de la capital federal, salvo el derecho consignado en el art. 12.

Art. 12.—Los jueces de la cámara federal de apelaciones de la capital y su fiscal podrán optar por una sola vez a los cargos vacantes dentro de las cámaras de lo comercial y de lo criminal y correccional de la capital, por presentación que deberán hacer ante el ministerio de justicia, dentro de la semana siguiente a la sanción de la presente ley.

Art. 13.—Los jueces de las cámaras de lo comercial y su fiscal, con su personal respectivo, constituirán la cámara 1a. de justicia en lo comercial de la capital federal.

Art. 14.—Créase la cámara 2a. de justicia en lo comercial de la capital, con igual personal que la cámara de lo comercial.

Art. 15.—Créase tres cargos de jueces de cámara en lo criminal y correccional, los que unidos a los siete jueces de cámara en lo criminal y correccional existentes y sus fiscales, constituirán las cámaras 1a. y 2a. del crimen y de lo correccional a que se refiere al art. 2o., las cuales serán dotadas de igual personal que las cámaras de lo comercial, aprovechando a ese efecto todo el personal existente de

la cámara del crimen y correccional actual. Los magistrados que constituirán la 1a. cámara de lo criminal y correccional, serán determinados por sorteo, entre los existentes.

Art. 16.—Créase una cámara federal de apelaciones, con asiento en la ciudad de San Juan y con igual personal que la cámara federal de Paraná, la cual conocerá en apelación de los asuntos en que hayan intervenido los juzgados federales de San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja y Catamarca.

Art. 17.—Los jueces actuales de lo civil, del crimen, de instrucción y de sentencia y correccionales, constituirán, con su respectivo personal, los juzgados de lo civil, comercial, del crimen, de instrucción y de sentencia y correccionales, organizados por el art. 2o. de la presente ley.

Art. 18.—Los dos jueces federales en lo civil y comercial y el juez federal del crimen de la capital, podrán por una sola vez, dentro de las vacantes de jueces de 1a. instancia existentes (en lo civil, en lo comercial, en lo criminal, de instrucción y de sentencia) o que en adelante se produzcan, sino hubiese vacantes, optar por la que prefieran, debiendo hacer la opción dentro de la semana siguiente a la sanción de la presente ley, por presentación ante el ministerio de justicia, teniendo primacía para la elección de vacante los magistrados por orden de antigüedad.

Art. 19.—El personal de los juzgados de lo civil y comercial y del crimen en lo federal con los aumentos que fueren necesarios para equipararlos a los de los juzgados civiles y del crimen existentes actualmente, constituirán el personal de los dos nuevos juzgados de lo civil y del juzgado del crimen organizado por esta ley.

Art. 20. — Créase un nuevo juzgado de lo comercial con igual personal que los existentes.

Art. 21. — Los procuradores fiscales de los juzgados federales de la capital, pasarán a desempeñar sus funciones como agentes fiscales ante los tribunales que se organizan por esta ley, debiendo ser distribuidos oportunamente por el P. E., uno para los juzgados civiles, otro para los comerciales y el tercero para lo criminal y correccional, con su personal respectivo.

Art. 22. — Los agentes fiscales de los tribunales ordinarios, los asesores, los defensores de pobres y ausentes en lo ordinario y en lo federal, etc. y sus personales respectivos, desempeñarán sus funciones

ante los tribunales que se crean por esta ley, en la materia respectiva.

Art. 23. — La superintendencia general y demás funciones encomendadas por la ley núm. 1893 a la cámara de lo civil, serán ejercidas por las cámaras 1a., 2a. y 3a., conjuntamente, las que se reunirán a ese efecto, sin perjuicio de la superintendencia directa que cada cámara tendrá sobre sus empleados, con facultad de nombrarlos, suspenderlos o exonerarlos y conceder licencia a sus vocales y personal. Cada cámara tendrá además las facultades disciplinarias de dictar apercibimientos o aplicar multas que no excedan de doscientos pesos moneda nacional, a los jueces inferiores y demás funcionarios, por faltas a su consideración o decoro, o por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, comprobada en el expediente en que cada cámara conozca. Las tareas encomendadas a la cámara de lo civil o a su presidente, por las leyes núm. 44, 2860, 4161 y 5098, serán desempeñadas por las tres cámaras, debiendo conocer el tribunal, ante el cual se haya generado el caso.

Art. 24. — En caso de impedimento o recusación de alguno de los miembros de las cámaras en lo civil, será reemplazado por uno de los de las otras cámaras en lo civil, por sorteo; si todos los miembros de ésta estuvieran igualmente impedidos, su reemplazo se hará también por sorteo, con los miembros de las cámaras en lo comercial y de lo criminal y correccional, sucesivamente. En caso de impedimento o recusación de miembros de una cámara de lo comercial, serán reemplazados, siguiendo las mismas reglas, por miembros de la otra cámara de lo comercial, de los de las civiles y de las de lo criminal y correccional. Si el impedimento o recusación afectara a miembros de una cámara criminal y correccional, el reemplazo será comenzado por los miembros de la otra cámara y seguirá con las de las cámaras de lo comercial 1a. y 2a. y por los de las cámaras 1a., 2a. y 3a. en lo civil, sucesivamente.

Art. 25. — En caso de producirse contienda entre dos cámaras, el presidente de la que primero hubiere conocido, las convocará y reunirá en tribunal el cual decidirá por mayoría de votos. Si hubiese empate, se dará intervención a un miembro de otra cámara designado por sorteo.

Igual procedimiento se observará en los casos en que al celebrarse el acuerdo para dictar sentencia

definitiva, cualquiera de las cámaras entendiera que, en cuanto al punto en debate, es conveniente fijar la interpretación de la ley, o de la doctrina aplicable.

Las contiendas de competencia que se susciten entre los jueces de diversa jurisdicción, por razón de la materia, serán resueltas en última instancia por la cámara de que dependa el juez que primero hubiese conocido. Si se tratara de cuestiones entre jueces en lo civil o de lo comercial o de lo criminal o correccional, entenderá la cámara de la materia respectiva a la que corresponda el turno mensual.

Art. 26. — Encomiéndase a una comisión compuesta de tres jueces, la redacción gratuita de un código de procedimientos en lo civil y comercial para la capital federal, que armonice los preceptos constitucionales con los de los códigos de procedimientos existentes y las disposiciones de la presente ley, comisión que deberá presentar su trabajo a la comisión de códigos de la honorable cámara de diputados dentro del plazo de sesenta días de designada.

Art. 27. — Mientras se sanciona el código a que se refiere el art. 26 se aplicará hasta su terminación, a los asuntos en trámite que eran del fuero federal, el código de procedimientos y las leyes especiales bajo cuyo vigor se iniciaron.

Art. 28. — Los asuntos que se iniciaren con posterioridad a la sanción de la presente ley—y mientras no se sancione el código a que se refiere el art. 26—se substanciarán con arreglo al código de procedimientos en lo civil y comercial de los tribunales ordinarios de la capital. En materia penal, regirá el código de procedimientos en vigor por la ley 2372.

Art. 29. — Las cámaras de apelaciones respectivas distribuirán oportunamente para su resolución entre las autoridades judiciales organizadas por esta ley, las causas existentes, en la forma que fuere más conveniente.

Art. 30. — Derégase todo lo que se oponga a la presente ley.

Art. 31. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán tomados de rentas generales, mientras son incluidos en la ley anual de presupuesto.

Art. 32. — Comuníquese al P. E.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

Artículo 10. — Los tribunales que se reorganizan por este proyecto comprenden no sólo lo que era de resorte o materia de la justicia federal, sino también cuestiones ajenas a aquella y que constituyan el objeto de la justicia ordinaria de la capital, por lo que no sería propio designar a esta justicia que ahora se crea con la denominación de "federal", ni tampoco con la de "ordinaria de la capital", siendo más lógico llamarla "justicia de la capital federal", designación genérica que abarca y comprende ambos conceptos.

En cuanto a la segunda parte del art. 10. debe tenerse en cuenta que la constitución nacional, en su art. 94. ha establecido que: "El poder judicial de la nación será ejercido por una corte suprema de justicia *"y por los demás tribunales inferiores que el congreso estableciere en el territorio de la nación"*.

Concordante con este precepto el inciso 17 del art. 67, establece que corresponde al congreso: "Establecer tribunales inferiores a la suprema corte de justicia" y al tratar de las facultades o atribuciones del poder ejecutivo, en el inciso 50. del art. 86 ha establecido que: "Nombra los magistrados de la corte suprema y de los demás tribunales federales inferiores, con acuerdo del senado".

Estas son las únicas disposiciones contenidas en la constitución nacional respecto de los jueces inferiores y en ejercicio de las facultades que ellas confieren se han hecho las diversas designaciones de jueces federales de las provincias y de la capital federal.

La constitución nacional ha establecido además en el inciso 14 del art. 67 al enumerar las atribuciones del congreso, que a éste corresponde: "Determinar por una legislación, especial, la organización, administración y gobierno que deben tener los Territorios Nacionales, que queden fuera de los límites que se asignan a las provincias" y en el inciso 27 del mismo art. 67, que corresponde al congreso: "Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la capital de la nación".

Ejercitando las facultades conferidas por los dos últimos incisos citados el congreso ha organizado el poder judicial de la capital federal.

Como se observa, tanto los jueces federales de la capital, como los jueces del fuero ordinario de la capital, tienen su origen en disposiciones expresas de la constitución nacional aun cuando a los primeros se les llama jueces de la constitución y a los otros jueces de la ley.

Tanto unos como otros, han sido designados por el P. E. de la nación, con acuerdo del senado, gozan de igual remuneración, no pudiendo ser separados de sus cargos sino por sentencia del senado mediante acusación de la cámara de diputados.

No pudiéndoseles, pues, quitar su investidura sinó por el único medio constitucional y legal—el juicio político—debe mantenerseles, siendo por otra parte de buena administración respetar los derechos adquiridos.

Por eso es que debe reconocerse su carácter a todos los funcionarios judiciales de la capital a quienes se refiere con toda generalidad la ley—y desde que tanto los funcionarios de uno como de otro fuero se encuentran en un pie de perfecta igualdad.

La justicia federal es una consecuencia del régimen federativo de gobierno adoptado, pero en la capital federal la administración de justicia debe ser única, como lo es en los territorios nacionales, desde que el congreso tiene facultades constitucionales para ampliar la jurisdicción de los jueces de la capital—acordando de ese modo a todos los que litiguen ante esos tribunales, las garantías especiales que rodean a los que lo hacían ante la justicia federal.

Art. 2o. — Unificando los fueros federal y ordinario se aumentan los asuntos de que conocen actualmente las cámaras 1a. y 2a. de lo civil existentes, en la proporción que importa todos los asuntos federales, civiles. De ahí nace la necesidad de crear la 3a. cámara de apelaciones de lo civil.

La cámara de lo comercial actual está recargada de trabajo. Si a ello se agrega todas las cuestiones relativas a marcas de fábrica y de comercio, patentes de invención, impuestos internos, aduana, etc., de orden comercial, que anteriormente eran resueltas en definitiva por la cámara federal, surge la necesidad de una segunda cámara de apelaciones en lo comercial.

La cámara de lo criminal y correccional está recargada de trabajo, bastando para probarlo tener presente que conoce en apelación actualmente de lo que resuelven en primera instancia los 10 jueces de

instrucción, 4 jueces de sentencia y 3 jueces de lo correccional, total 17 jueces. Si a ello se agrega que en adelante habrá de conocer en todos los asuntos de lo criminal y correccional que antes eran resueltos por la cámara federal se impone la creación de otra cámara que conozca también de estos asuntos.

La organización actual de la cámara de lo criminal y correccional es deficiente. Esta cámara está compuesta de siete jueces dividida en tres salas, compuesta cada una de dos vocales y un presidente común, que lo es el presidente del tribunal.

Basta tener presente el recargo que importa el ejercicio de la presidencia de un tribunal colegiado tan numeroso e importante como la cámara de lo criminal y correccional para darse cuenta que el magistrado que la desempeña no está en condiciones de votar a la par de tres de sus colegas desde que forma parte de las tres salas del tribunal al mismo tiempo. Es ello exigir un esfuerzo superior a lo humanamente exigible, y como consecuencia, o dicho magistrado se agota en un año de esa cuádruple labor que se le reclama, o no puede cumplir con los deberes que le impone un cargo tan pesado y entonces el tribunal colegiado queda reducido a dos miembros solamente en cada asunto.

Debe pues volverse al sistema anterior, a la cámara de cuatro vocales, presidente y un fiscal y como una sola es insuficiente, organizar otra para proporcionar el trabajo.

En cuanto a los juzgados se aumentan dos jueces en lo civil, uno en lo comercial y uno en lo criminal sobre los del fuero ordinario actual teniéndose en cuenta para ello el aumento de causas en que deben conocer en adelante.

Debe tenerse presente que de dichos cuatro jueces, tres ya existen y son: los dos federales de lo civil y comercial y el juez federal del crimen. En definitiva pues se aumenta un solo juzgado y su personal.

Art. 3o., 4o. y 5o. — Estos artículos establecen la jurisdicción respectiva de las cámaras y no requieren mayor explicación.

Los artículos 6o., 7o., 8o. y 9o., reglan la jurisdicción de los respectivos juzgados y no requieren tampoco mayor explicación.

El art. 10, organiza las cámaras 1a. y 2a. de apelaciones en lo civil con los elementos existentes.

El art. 11, transforma la cámara de apelaciones en lo federal en la 3a. cámara de apelaciones en lo civil.

El art. 12, contempla la situación excepcional de los señores jueces de la cámara federal de la capital, los cuales actualmente entienden en materia civil, comercial, criminal y correccional, y les reconoce el derecho, si lo desean, de pasar a formar parte de la nueva cámara de lo comercial o de la 2a. de lo criminal y correccional, si no les agrada permanecer en la 3a. de lo civil a la que directamente pasan según el artículo 11 de la presente ley.

El art. 13, organiza la primera cámara de apelaciones en lo comercial.

El artículo 14, crea la 2a. cámara de apelaciones en lo comercial.

El artículo 15, sienta las bases para la organización de las dos cámaras de lo criminal y correccional.

El artículo 16, prevee quién debe resolver en apelación las causas de los juzgados federales de San Juan, Mendoza, y San Luis, que al desaparecer la cámara federal de la capital, quedan sin tribunal de alzada notando que de la cámara federal de Córdoba dependen ocho juzgados federales, cercena a dicha cámara las provincias también andinas de Rioja y Catamarca, para constituir un grupo de cinco provincias que puede tener su cámara equidistante territorialmente en la ciudad de San Juan. La cámara federal de Córdoba quedaría así algo más aliviada.

El artículo 17, hace la conversión de los juzgados existentes en los organizados por el artículo 9o.

El artículo 18, concede a los señores jueces federales el mismo derecho reconocido a la cámara de ese fuero.

El artículo 19, provee a los aumentos necesarios para la equiparación de los juzgados.

El artículo 20, crea el nuevo juzgado de lo comercial.

El artículo 21, dispone respecto de los procuradores fiscales en lo federal y su conversión en agentes fiscales.

El artículo 22, responde también a la necesidad de convertir todos los funcionarios existentes en funcionarios del nuevo organismo creado por esta ley.

El artículo 23, regla la superintendencia.

El artículo 24, establece que deben reemplazarse los magistrados en casos de impedimento o recusación.

El artículo 25, sienta reglas para decidir las contiendas entre cámaras y entre jueces. Trata igual-

mente de uniformar la jurisprudencia mientras se establece el tribunal de casación.

El artículo 26, encarga la redacción gratuita de un código de procedimientos en lo civil y comercial, a una comisión de jueces, para que armonice los preceptos constitucionales, con los de los códigos de procedimientos existentes y los de la presente ley en un término perentorio de sesenta días, para normalizar cuanto antes la situación anómala a crearse en los primeros tiempos con la unificación, creyendo que los jueces tendrán más facilidad e interés para realizar el trabajo en tan breve plazo.

El artículo 27, respeta la ley procesal bajo cuyo imperio se trabó la "litis contestatio".

El artículo 28, fija el procedimiento a seguir para los asuntos que se inicien en el "interin", desde la sanción de la presente ley hasta la adopción del código a que se refiere el artículo 26.

El artículo 29, autoriza a las cámaras respectivas para la distribución de las causas pendientes.

El artículo 30, deroga todo lo que sea contrario a los preceptos de la presente ley.

El artículo 31, provee a la parte financiera del proyecto de ley.

El artículo 32, es de forma.

**Del juez en lo civil de la capital,
doctor F. M. Klappenbach**

Septiembre 4 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados.

En contestación a su atenta nota del 6 de agosto ppdo., me es grato dirigirme al señor presidente transmitiendo mi opinión sobre las cuestiones que en ella se indican.

I. ¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital?

Sí, por qué la unificación:

a) Evitaría muchas cuestiones de competencia entre la justicia federal y la ordinaria.

b) Permitiría una mejor organización de los tribunales, haciendo posible la distribución del trabajo entre los jueces y cámaras de la capital, teniendo

do en cuenta, solamente la clase de los asuntos y la índole de las disposiciones legales que rigen las cuestiones a resolverse. Ello, a su vez, daría por resultado la especialización de los distintos magistrados en cierta clase de asuntos y de cuestiones y en la aplicación y el estudio de leyes y disposiciones legales determinadas, lo que implicaría ahorro de tiempo y mayor acierto en sus resoluciones. No creo necesario, dada la ilustración de esa comisión, insistir en las ventajas de la división del trabajo y la especialización de las funciones, en la administración de la justicia, como en las demás ramas de la actividad. La cantidad y especialidad siempre crecientes de los asuntos y cuestiones y de la legislación, la imponen en esa rama como en las otras.

c) La distribución del trabajo entre los jueces y camaristas federales y ordinarios de la capital, según su naturaleza y las leyes y disposiciones que rigen las cuestiones, y no según las personas que intervienen o la fecha de entrada de los asuntos, evitaría en gran parte, sino en todo, al atribuir a cada cámara el conocimiento de ciertos y determinados asuntos y la resolución de ciertas y determinadas cuestiones, la inestabilidad y contradicciones de la jurisprudencia.

II. ¿Qué solución aconseja para resolver este problema?

Considerar a los tres jueces en lo federal, los 10 jueces en lo civil, los 4 en lo comercial, los 4 de sentencia en lo criminal, los 3 en lo correccional y los de instrucción de la capital, como jueces de primera instancia de la capital, y distribuir entre ellos el trabajo de administración de justicia en la capital, es decir, los asuntos, teniendo en cuenta, no las personas que intervienen, ni la fecha de su iniciación, ni otras circunstancias arbitrarias, sino la naturaleza de las cuestiones y la especialidad de las disposiciones legales que las rigen.

Las ocupaciones del juzgado no me han permitido estudiar, en el corto tiempo de que para ello he dispuesto, en todos sus detalles, la solución que aconsejo. Para ello hubiera tenido que examinar y comparar las estadísticas de todos los juzgados y otros antecedentes, lo que no me ha sido posible. Me limito, por lo tanto, a indicarla en general, en la seguridad de que esa comisión, con los datos que obran en su poder, y su mayor ilustración, suplirá las deficiencias.

La concreto, sin embargo, hasta donde me es po-

sible, en lo que se refiere a lo que ahora se entien^o de por jurisdicción civil, para que aparezca más comprensible mi pensamiento.

Los diez jueces de primera instancia, que ahora se conocen por jueces en lo civil, conocerían en todos los asuntos regidos por el código civil, y el trabajo, es decir, los asuntos se distribuirían entre ellos, no según su fecha de iniciación, o lo que ahora se llama turno, sino según la naturaleza de las cuestiones a resolver, o la especialidad de las disposiciones del código que las rigen.

Unos conocerían de los asuntos regidos por el libro I del código. Serían jueces de primera instancia en lo personal. Uno de ellos podría ser juez de divorcios, otro de menores, otro de incapaces, etc. Otros conocerían de los asuntos regidos por el libro II. Serían jueces de obligaciones o contratos. Podría haber uno de compra-ventas. Otros, de los asuntos regidos por el libro III: jueces de inmuebles, podría haber uno de hipotecas. Otros de los regidos por el libro IV: jueces de sucesiones. El trabajo entre ellos se subdividiría, en lo posible, según la naturaleza de los asuntos.

Lo mismo se haría en lo comercial. Habría jueces de quiebras, jueces de contratos, etc. Lo mismo en lo federal y criminal.

Respecto de los jueces de instrucción, dada la especialidad de sus tareas, me permito indicar la conveniencia de unificar sus funciones de investigación con las de la policía de investigaciones, lo que ahorraría gastos y evitaría conflictos y desdoblamientos de una misma función.

En cuanto a las cámaras, las consideraría como cámaras de apelaciones, 1a., 2a., 3a., etc.: una entendería en los asuntos regidos por los libros I y IV del código civil, otra en los regidos por los libros II y III, otra en los regidos por el código de comercio y la ley de quiebras, otra en los regidos por la constitución y leyes nacionales y otra en los regidos por el código penal y leyes penales.

Es decir, habría cinco cámaras de apelación de cinco miembros cada una. Quedarían sin ubicación dos camaristas en lo criminal, pero la solución práctica de su situación no sería difícil.

3a. Me refiero a la contestación anterior.

4a. No me considero habilitado para tratar esta cuestión, por carecer de datos y antecedentes al respecto.

V. ¿Qué reformas procesales considera usted urgentes?

Dado el término "urgentes" empleado en la pregunta, he creído deber concretarme a indicar solamente las que la experiencia me ha sugerido en la jurisdicción en que actúo y que son susceptibles de ser llevadas a la práctica sin modificar fundamentalmente el código de procedimientos en lo civil y comercial.

De las que me permito indicar, las principales son:

Artículo 29. Cambiar la palabra "providencias" por "resoluciones". Suprimir "y autorizadas por sus secretarios con la fórmula de ante mí".

No encuentro otra razón que la costumbre para exigir que la firma de los camaristas y jueces sea autenticada por los secretarios. Por otra parte la reforma ha sido ya introducida en el procedimiento federal y no ha dado lugar a inconvenientes.

Cambiar las palabras "si fueren providencias de mera substanciación" por "las demás resoluciones".

Agregar el siguiente párrafo aparte: "Las providencias de mera substanciación serán dictadas y firmadas por los secretarios de cámara o de primera instancia. De ellas podrá apelarse verbalmente y en el término de veinte y cuatro horas ante el presidente de la cámara, cuando sean dictadas por los secretarios de cámara, y ante los jueces, cuando sean dictadas por los secretarios de primera instancia".

Esta reforma tiende simplemente a dar forma legal a lo establecido en la práctica, a ajustar a los hechos, las disposiciones legales. En la realidad de esas prácticas y de esos hechos las providencias de trámite, son dictadas por los secretarios. Los presidentes de cámaras y los jueces no hacen más que firmarlas y generalmente, sin entrar a considerar si proceden o no, porque, por falta de tiempo, u otras causas, delegan la responsabilidad de las substanciación o del trámite en los secretarios. Conviene entonces que legalmente tengan estos una responsabilidad que moralmente ha sido ya delegada en ellos.

En mi juzgado hace ya tiempo que las "vistas a los ministerios públicos", los "agréguese", "hágase saber", "téngase presente" y demás diligencias que el código no dispone sean firmadas por el juez, son practicadas directamente por los secretarios sin más intervención y ello no ha traído en la práctica inconveniente alguno. En cambio ello me ha ahorra-

do unas 50 ó 60 firmas diarias, y a las partes el tiempo que se pierde en traer el expediente al despacho.

Artículo 103. Reemplazar la segunda parte por "o para definitiva si fuere de puro derecho". El nuevo traslado, generalmente, no contribuye a aclarar las cuestiones. En todo caso el juzgado para mejor proveer si lo considerase necesario podría dar "vista a las partes". Ver artículo 57 inciso 3o.

Agregar: "Concluso el pleito para prueba, el juez establecerá claramente las cuestiones sobre las que debe producirse la prueba y citará a las partes para una audiencia próxima, a la que deberá concurrir personalmente a prestar confesión judicial, poner las posiciones que puedan exigir que la contraria absuelva, reconocer los documentos, proponer peritos, y ofrecer toda la prueba que tengan que producir, bajo apercibimiento de que si dejaren de comparecer sin justa causa, la audiencia se celebrará con los que concurran, y de que serán tenidos por confesos, y los documentos por reconocidos, y de que sólo se mandará producir la prueba que ofrezcan en dicha audiencia".

Esta reforma tiende: en primer lugar, a obligar a los jueces a estudiar detenidamente el asunto antes de abrirlo a prueba, lo que puede contribuir a evitar, con tiempo, la continuación de juicios ante juez incompetente, o por litigantes sin personería, o mal iniciados, y, sobre todo, a que los jueces cumplan con la disposición del art. 64, desde que conociendo el asunto le será más fácil proponer soluciones amigables; (1) en segundo lugar, a que antes de abrirse a prueba el juicio queden bien planteados los hechos sobre los que deberá versar, y a evitar se produzca sobre hechos reconocidos al prestar confesión judicial, o absolver posiciones; y en tercer lugar, a apresurar la conclusión del juicio suprimiendo los plazos para ofrecer la prueba.

Art. 637.—Agregar al final "herederos o acreedores. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos "siguientes en cuanto a la citación de los interesados, se anunciará la muerte del causante, llamando "por edictos, que se publicarán en el Boletín Judicial y otro diario, a los que se crean con derecho "a sus bienes, para que dentro de treinta días comparezcan con sus justificativos.

(1) La experiencia del juzgado me ha demostrado que indicando soluciones equitativas para lo cual es necesario conocer bien el asunto, puede arreglarse más del 30 por ciento de los pleitos.

Esta reforma tiende a unificar los juicios llamados de testamentaria, y de ab-intestato no iniciados de oficio. En la práctica se aplican a éste, cuando no es iniciado de oficio, las disposiciones de aquél, en lo que no se oponen a las del título XXIII, supliendo así las deficiencias de este último, que se refiere sólo al ab-intestato iniciado de oficio.

No encuentro, por otra parte, razón para que los trámites de uno y otro sean distintos. Llamados a la herencia los herederos por la ley o el testamento, el inventario, avalúo, administración y partición de la herencia tiene que hacerse en la misma forma en uno y otro caso. Además, la no publicación de edictos, cuando el causante deja testamento, se explica en una pequeña población en donde todos se conocen y en donde es difícil que un heredero o acreedor llegue a ignorar la muerte de un pariente o deudo, pero no en una ciudad populosa y cosmopolita.

Título XXVI.—Considero que debe suprimirse y aplicarse al concurso civil las disposiciones de la ley de quiebras, introduciendo en esta las reformas de detalle necesarias al efecto. No encuentro razón para hacer distinción fundamental entre los deudores no comerciantes y los deudores comerciantes. Estoy, en esto de acuerdo con la tendencia de la legislación moderna de otros países. Mientras no se llegue a esta unificación opino que no hay para qué modificar este título.

Título XXVII.—Considero que debe suprimirse, incluyendo en el título siguiente las disposiciones de aquél, que en este se aplican.

Existiendo jueces y tribunales que deben resolver sobre las cuestiones aplicando las disposiciones legales vigentes, no encuentro ventaja práctica en legislar el procedimiento para que ellas sean resueltas conforme a derecho y con sujeción a formas legales, por los llamados árbitros juris, desde que, si con ello se tiende a obtener una simplificación en el procedimiento, ella puede obtenerse, en juicio, dentro del procedimiento general, de conformidad de partes, y, fuera de juicio, las partes pueden llegar a la solución de sus cuestiones en la forma que crean más conveniente.

El juicio de amigables componedores sí lo creo conveniente, porque ellos pueden proceder sin sujeción a formas legales y dictar sentencia según su saber y entender, lo que indudablemente puede simplificar los procedimientos y contribuir a que las

cuestiones se solucionen con un criterio equitativo.

En este orden de ideas creo que debe mantenerse la disposición del art. 810 agregándole las palabras "pero estos no podrán cobrar honorarios como tales". Para ello habría que derogar la ley 3367 en la parte del art. 3o. que habla de arbitrajes o amigables componedores.

No encuentro razón para que los jueces y camaristas, no cobrando por ello honorarios, no puedan ser amigables componedores. Al contrario, creo que su verdadera misión es llegar a una solución práctica y equitativa de las cuestiones y que para ello están tanto o más habilitados que cualquiera.

Art. 38 y 39.—Reemplazarlos por el siguiente: "Si la notificación hubiere de hacerse en el domicilio de los litigantes se hará por carta certificada con recibo de retorno".

Si esta reforma, ya proyectada, se considera arriesgada, me permito indicar la conveniencia de reemplazar en este artículo la palabra actuario por la palabra "Oficial de justicia", porque considero que los escribientes o auxiliares, muchos de ellos menores de edad, no tienen la suficiente responsabilidad y autoridad para hacer las notificaciones a domicilio.

En este caso, es claro, habría que aumentar a dos o tres el número de los oficiales de justicia en cada juzgado.

Las demás reformas que me permito indicar, siguiendo el orden de los artículos del código, para evitar a esa comisión la tarea de relacionarlos, o son una consecuencia de las anteriores o, de menor importancia.

Art. 23. — En lugar de "por medio de cédula fijada en el domicilio del emplazado" poner "por correo".

Art. 27 inc. segundo. — En lugar de "operaciones de contabilidad muy complicadas" poner "asuntos muy complicados". Para que pueda sacarse el expediente cuando haya que estudiar escrituras extensas y sus antecedentes complicados, y en otros casos análogos.

Art. 30. — Suprimirlo. Ver art. 252.

Art. 31. — Suprimir la segunda parte. Reemplazarla por lo siguiente: "Las partes podrán acreditar su comparencia a la oficina asentando en el expediente su firma al pie de diligencia extendida por el secretario.

Art. 55. — Agregar al final: "o las cámaras de apelación".

Art. 57. Inc. 2o. — Suprimir las palabras "y no resulten probados" para permitir a los jueces poner posiciones de oficio aun antes de abrirse a prueba el juicio, lo que sería un medio de obligar a las partes a concurrir personalmente cuando los jueces crean conveniente llamarlas para tratar de hacerles llegar a un arreglo. Actualmente los jueces carecemos de medios para obligar a esa comparencia, pues las palabras cuya supresión propongo, se han interpretado en el sentido de que el juez no puede exigir confesión judicial antes de la prueba.

Art. 57 inc. 3o. — Suprimir la palabra "pericial" para que puedan correrse vistas. Ver 103.

Art. 76. — En lugar de "El juez"—"se" ver 39.

Art. 77. — Reemplazarlo por "La citación se hará por carta certificada con recibo de retorno. Si no se le encuentra se le volverá a citar en la misma forma". Mantener sólo la última parte.

Art. 83. — Cambiar "nueve" por "seis".

Art. 86. — Cambiar la palabra "solo" de la segunda parte por "no".

Todas las excepciones deben ser de previo pronunciamiento. Sería hacer perder tiempo e incurrir en gastos a los litigantes, permitir que se abra a prueba y se substancie todo un juicio ordinario para que en la sentencia venga a resolverse que el juez era incompetente, o el actor no tenía personería, o había litis pendiente, o defecto en la demanda. El art. 7 de la ley 4128 ha ya establecido esto para la incompetencia y defecto legal. No encuentro razón para no extenderlo a la falta de personería y litis pendiente.

Art. 95, inc. 3o. — Cambiar "de treinta años" por "cuya prueba no requiera entrar en la cuestión de fondo". No afectando al fondo de la cuestión, sería inútil hacer seguir un juicio para declarar en la sentencia prescripta la acción.

Art. 97. — Cambiarlo por "Estas excepciones deben oponerse en forma de artículo previo".

Art. 104. — Anteponer "En dicha audiencia".

Art. 105. — Reemplazarlo por "Si alguna de las partes se opusiere, el juez resolverá lo que crea justo".

Art. 106.—Reemplazar "dentro de 24 horas" por "en el acto".

Art. 108. — Agregar el art. 8 de la ley de reformas.

Art. 114. — 1o. Reemplazar "los diez primeros días, etc." por "de la audiencia del art. 103".

Art. 115. — Reemplazar la primera parte por "El artículo se resolverá en la misma audiencia".

Art. 118. — Agregar después de "pedidas" las palabras "en la audiencia del art. 103".

Art. 121. — Reemplazarlo por "La prueba será recibida por el secretario del juzgado o tribunal, salvo la confesión judicial a prestarse en el caso del art. 103, que será recibido por el juez.

Esta reforma tiende a dar forma legal a lo establecido por la práctica y no puede tener inconvenientes, porque, establecidos por el juez los hechos a probarse y tomadas por este las posiciones en la audiencia del art. 103, la declaración de testigos puede ser tomada por los secretarios.

Arts. 125, 127, 137, 142, 145, 146. Suprimirlos. Ver 103.

Art. 148. — En lugar de "anterior" poner 103. Ver art. 103.

Art. 153. — Suprimirlo. Ver 103.

Art. 154. — En lugar de "Reunidos los litigantes el día señalado", "En la audiencia del art. 103".

Art. 155. — Suprimir "dentro de tercero día".

Art. 157. — Suprimirlo. Ver 155.

Art. 178. — Reemplazarlo por el 26 de la ley 4128.

Art. 181. — Agregar después de "presentarán" las palabras "en la audiencia del art. 103". Ver 103.

Art. 212. — Suprimir "a menos que etc." Ver 103.

Art. 213. — Suprimir "esté" y "mandará". Cambiar "agregar" por "agregará". Ver 29.

Art. 217. — Suprimir "hará relación de la causa que va a fallar". Porque por el art. 103 antes de abrirse a prueba debe plantear las cuestiones a resolver.

Art. 228. — Tres días en lugar de cinco.

Art. 234. — Agregar art. 13 de la ley 4128.

Art. 240. — Introducir la modificación del art. 25 de la ley 4128.

Art. 252. — Suprimirlo. Pudiendo las partes alegar por escrito es innecesario el informe in voce. Por otra parte en la práctica ha caído en desuso.

Art. 253. — Agregar art. 22 ley 4128.

Art. 254. — Suprimirlo. Ver 252.

Art. 263. — Ponerlo de acuerdo con los arts. 82 de la ley de organización de los tribunales.

Art. 265. — Suprimirlo.

Art. 268. — Suprimirlo.

Art. 269. — Reemplazarlo por última parte art. 14 ley 4128.

Títulos V, VI y VII. Suprimirlos.

Art. 480. — Añadir art. 12 ley 4128.

Art. 496. — En lugar de "el juez"—"se". Ver 29.

Art. 510. — Agregar después de "justiprecio" en lugar del actual, lo siguiente: "por el perito que designen las partes, y en caso de no ponerse de acuerdo, por el juez". Con el fin de evitar el gasto de tres peritos.

Art. 511. — En lugar de "dentro del término de cuatro días etc." poner "en el acto de la notificación". Suprimir la segunda parte.

Art. 521. — En lugar de "y el juez así lo proveerá mandando que se pongan" poner "los que se mandarán poner". Ver 29.

Art. 543. — En lugar de "el juez" poner "se", Ver 29.

Art. 545 y 546 lo mismo.

Título XII. En lugar de "De la testamentaria" poner "De los juicios sucesorios".

Art. 596. — En lugar de "El juez ordenará se reciba" poner "se recibirá". Ver 29.

Art. 642. — Agregar después de "administración" y antes "del caudal" las palabras "división y liquidación".

Art. 668. — Suprimir los dos primeros párrafos. Ver 642. Reemplazar "esta" del último párrafo por "la junta del art. 642".

Art. 672. — En lugar de "el juez la mandará poner" "se pondrá". Ver 29.

Art. 674. — En lugar de "el juez"—"se". Ver 29.

Títulos XXIII: Agregar después de ab-intestato "de oficio".

Art. 704. — En vez de "hará que, a presencia suya y del interesado se extienda" poner "se extenderá". Ver 29.

Art. 706. — En lugar de "dispondrá el juez que se cite" poner "se citará". Ver 29.

Me permito agregar las siguientes a la ley de organización de los tribunales en vista de la propuesta al art. 29 del código de procedimientos.

Ley de organización de los tribunales.

Art. 147, 3o. Agregar: "y dictar la providencia de trámite". Suprimirlo. Ver 29 C. de P.

Art. 163, 1o. Agregar: "y dictar las providencias de trámite". 2do. Suprimirlo. Ver 29 C. de P.

Lamentando que las tareas a mi cargo me hayan impedido prestar una atención mayor a las cuestiones propuestas por esa comisión y quedando completamente a su orden para cualquier aclaración o ampliación de fundamentos.

Saluda al señor presidente con su más distinguida consideración.

Fernando M. Klappenbach.

Del defensor de pobres de la justicia federal de la capital doctor J. E. Raffo

Buenos Aires, 3 de septiembre 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

Tengo el agrado de remitir a Vd. el pliego adjunto, en contestación a la comunicación que ha tenido el honor de recibir, con motivo de la encuesta promovida por la comisión que Vd. preside.

Saluda a Vd. con su mayor consideración.

J. Elías Raffo.

Unificación del fuero. — La unificación del fuero es para mí una cuestión de palabras. Los jueces ordinarios o son los jueces de la constitución o no lo son. Si lo son poco importa que se les llame de la justicia ordinaria. En caso contrario, una ley no podría convertirlos en jueces federales, porque éstos tienen su jurisdicción determinada por la constitución, y no podría ser ampliada ni restringida legislativamente. La solución de esta cuestión sólo puede darla la corte suprema.

Hasta aquí, como se ve, el asunto no tiene ninguna importancia para el interés público, aunque puede tenerla para los magistrados que desempeñan la justicia ordinaria, personalmente, por sus propios intereses, cuestión que no merece la menor atención, porque en mi concepto no está demostrada la incon-

veniencia de la amovilidad de los jueces, lo que por otra parte sería más conciliable con el espíritu del gobierno democrático. La perpetuación vitalicia en una función, cualquiera que ella sea, es un resabio monárquico. La ascendibilidad del magistrado destruye la independencia que la inamovilidad pretende garantizar.

Ahora, si por unificación del fuero ordinario y federal, se entiende que todos los jueces en lo civil y comercial conocerían también de todos los asuntos que compete a la justicia federal,—asuntos aduaneros, de marcas, patentes de invención, de almirantazgo, impuestos internos, servicio militar, etc., etcétera... — y éstos de todos los asuntos civiles y comerciales, estaríamos decididamente en contra de la unificación, porque todos los progresos sociales, políticos, comerciales, industriales y científicos en general, se deben precisamente a la especialización del trabajo. Sería llevarnos a la bancarrota judicial, porque no es humanamente posible exigir de un hombre un conocimiento tan amplio de tan distintas ramas del derecho. Si el estado actual de cosas no existiera, lo reclamaríamos subdividiendo aún más la competencia, creando un juzgado dedicado a asuntos de marcas, otro de impuestos internos y aduaneros, otro a asuntos electorales, otros restringiendo la jurisdicción de algunos jueces actuales civiles, al conocimiento exclusivo de asuntos testamentarios, otros a la jurisdicción voluntaria, venias, informaciones, dejando el resto para los asuntos puramente contenciosos.

Las tan sonadas cuestiones de competencia que de ordinario se promueven, alargando la duración de los juicios, principal argumento de los unionistas, se eliminaría totalmente con la siguiente ley: Art. 1o. Derógase la ley No. 1467, del año 1884.

Con resolución tan sencilla quedaría eliminado el problema, y es lo único que, en mi concepto, puede hacer el congreso sin exponerse a una declaración de invalidez de la ley, como ha sucedido a tantas otras dictadas ampliando la jurisdicción de la justicia federal.

Segundo punto: Siendo de naturaleza federal por razón de la materia, los asuntos de quiebras, no puedo emitir opinión sobre la conveniencia de incluirlos entre los de jurisdicción federal, por carecer de datos estadísticos.

Tercer punto: Lo mismo debo decir respecto del contenido de este punto de la encuesta.

Cuarto punto: Toda legislación debe ser cambiada,

tanto substantiva como objetiva, siendo ello urgente. No es posible continuar aplicando una legislación que mira exclusivamente el interés individual, inspirado en el principio en que el individuo es todo y el estado nada. Hoy el derecho no puede descansar sino sobre una amplia concepción de las necesidades o intereses colectivos, respondiendo así al sentimiento de la solidaridad social.

Cada uno de los puntos evacuados, son susceptibles de una profunda dilucidación, que no me ha sido posible hacer, dado el breve tiempo en que se desea reunir las conclusiones de la encuesta, cuya iniciativa ha llegado a mi poder el primero de este mes. Por lo demás, me haría un honor dar la ampliación necesaria a los fundamentos de la contestación sintética—si ello fuera solicitado por la comisión.

Buenos Aires, septiembre 6 de 1920.

Eliás Raffo.

**Del vocal de la cámara federal de Rosario,
doctor J. F. Luna**

Rosario, septiembre 4 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Capital federal.

Tengo el honor de responder a su atenta nota por la que solicita mi opinión sobre las cuestiones que propone referentes a la administración de justicia.

Lo hago complacido, considerando que se debe prestigiar una iniciativa tan plausible, que debería generalizarse, como es la de esta encuesta, que busca recoger y aprovechar las propias experiencias y hacer colaborar y concurrir en la formación de la ley la mayor suma de la opinión ilustrada del país, al mismo tiempo que estimula a los funcionarios y ciudadanos al estudio y meditación de problemas de la vida nacional que a la vez afectan a su misión y a su suerte.

Lamento que el poco tiempo de que dispongo, a causa de mis tareas y el breve término acordado,

no me permita una respuesta más meditada y completa y una mejor exposición de sus fundamentos.

Me referiré a las cuestiones propuestas en orden a la importancia y urgencia que les asigno.

¿Qué reformas procesales considero urgentes?

Entiendo que no se trata de cambio o reforma fundamental de las leyes de organización y procedimientos judiciales.

Tal reforma, que tendría que ser sistematizada, requiere tiempo, discusiones, crítica. No debe ser precipitada.

Creo que debe preferirse, y que de eso sólo se trata ahora, reformas parciales, enmiendas, o agregados, que vayan corrigiendo deficiencias, adaptando mejor la ley a la realidad y creando las instituciones concretas y prácticas que la experiencia aconseje, a los fines de afianzar una justicia que a la vez de eficaz, sea fácil de obtener, como tiene que ser todo elemento primordial de la vida, vale decir, sencilla, económica y rápida.

Omitiré, pues, disquisiciones generales, limitándome a concretar, brevemente, algunos anhelos cuya realización considero urgente y proponer algunas disposiciones sencillas y prácticas, convencido de que cuando estas son acertadas valen más que muchas y amplias declaraciones generales asentadas en las leyes.

1. Reglamentar la forma de nombramiento y promoción de los magistrados judiciales.

Es elemental que una buena justicia depende en gran parte de las calidades de las personas que la administran.

Para su debida selección es indispensable que su designación no dependa del arbitrio o favor de persona o grupo, o de influencias extrañas, a veces perniciosas. Esto es deprimente y desalentador precisamente para los mejores, los más delicados y dignos. Jamás los jueces deben verse obligados a pedir sino a ganar su posición por el mérito, y quien los designa debe hallarse en condición de apreciarlo.

Se ha observado con razón de que no se puede ascender un capitán sino pasado cierto tiempo y previa su calificación por una alta autoridad, lo que no pasa con los jueces, cuando deberían estar más garantidos, por la importancia de su misión y su mayor necesidad de independencia, que es anhelo que surge de la constitución.

Los magistrados judiciales deben tener garantías

análogas y aun mayores a las que tiene un oficial o jefe del ejército.

2. Limitar el trabajo de los jueces y distribuirlo mejor.

No es posible imponer a un juez o tribunal que atienda miles de causas y dicte miles de sentencias en el año. Humana y cumplidamente, no puede producir más de 300 a 400 sentencias que requieran fundamentos estudiados y meditados, aparte de la atención ordinaria del trámite, autos interlocutorios, audiencias, declaraciones, etc. De acuerdo con esto debe limitarse el número de causas que un juzgado o tribunal debe atender; sin perjuicio de la distinción a hacer según la importancia de las causas.

Limitado el trabajo, y sólo así, podrá exigirse estrictamente a los jueces que despachen en tiempo, de lo contrario las sanciones de la ley serán injustas e inútiles.

Además, esa limitación dará al legislador idea precisa de la necesidad de crear nuevos juzgados o tribunales.

Entre tanto los asuntos que excedieren el límite serán sometidos a disposiciones especiales.

"Distribuirlo mejor", porque es sabido que hay jueces que atienden asuntos en número mayor que otros, con el efecto injusto y perjudicial de que un juez laborioso carga con trabajo de los que no lo son, lo que acaba por deprimir su actividad y bajarlo de nivel.

Tratándose de jueces del mismo lugar, debería establecerse el turno por causas o número de causas, o reparticiones periódicas. Tratándose de jueces de distinto lugar o jurisdicción, sería preciso, cuando no es posible una repartición, disminuir, ampliar, o crear jurisdicciones.

3. Conviene establecer en la ley que cuando faltare alguno o algunos de los miembros de un tribunal, por enfermedad, ausencia, impedimento legal, fallecimiento, licencia, o renuncia, la mayoría puede resolver, estando de acuerdo. Pueden exceptuarse asuntos que se consideren graves.

Esto tendría especial importancia para los tribunales de tres miembros, que son muchos, los cuales, cuando falta uno de sus vocales, quedan paralizados. Podría limitarse a ellos la disposición.

Y tendría una importancia especialísima para la cámara federal de Rosario, de la que formo parte.

La falta de una disposición como la que propon-

go, ha sido una de las causas que más han dificultado el trabajo de esta cámara.

Desde su creación entraron a formar parte de ella dos de los jueces federales del circuito, que habían resuelto como tales la mayor parte de las causas en apelación, lo que imponía integrar en la mayoría de los casos. Resultado, que en excusaciones, recusaciones o integraciones, se pasó casi todo el primer año sin poder resolver sino pocos asuntos, fuera de las importantes erogaciones que costó a la nación.

Por otra razón, esta cámara se encuentra en una situación especialísima. Su presidente lo es también de la junta escrutadora nacional que funciona en Santa Fe, capital de la provincia. Cada vez que tienen lugar elecciones, que además de las ordinarias bianuales, y de las presidenciales, ha habido extraordinarias casi todos los años, para llenar vacantes de diputado, el presidente tiene que trasladarse a Santa Fe durante dos meses o más que dura el proceso electoral. Por esta causa en años que ha habido dos elecciones, no se ha podido trabajar con regularidad sino seis meses.

4. Dictar una ley reglamentando la estadística judicial.

La requiere, desde luego, la necesidad de uniformarla.

Actualmente no existe, en realidad, una estadística judicial: no se lleva, o se lleva arbitrariamente, cuando no se altera tendenciosamente; y no preciso encarecer la importancia de ella, importancia que aumenta a medida que pasa el tiempo.

Una buena estadística servirá, por otra parte, para tener debidamente informados a los otros poderes, sobre las necesidades verdaderas de la administración de justicia. Preparará, pues, el advenimiento de reformas más justas y necesarias.

5. El ministerio público, requiere una mejor organización.

Debe separarse la representación del fisco de la representación de la acción pública. Son funciones que no armonizan siempre. La nación debe tener su representante legal, otro la acción pública, y otro los incapaces. Además, donde hay tribunales de primera y segunda instancia, conviene que el mismo fiscal continúe la acción en la segunda. Está mejor informado y permite la unidad de criterio.

6. *Policía judicial.*

Es necesario pensar en dar a los jueces medios de investigación y de acción propios.

Actualmente dependen por completo, no sólo para obrar sino para formar juicio, de la buena voluntad ajena; tienen que ver y oír frecuentemente por ojos y oídos ajenos, lo que los hace ineficaces.

7. Establecer que en la segunda instancia, debe procederse y resolverse análogamente a la primera.

Si se trata de un juicio sumario, sumariamente, si de un arbitraje, resuelto en equidad, debe resolverse en igual forma; porque es incongruente lo que hoy sucede, que un juicio sumario, tenga un trámite escrito y más largo en segunda instancia y un juicio fallado en equidad, deba resolverse con estrictez jurídica.

8. *Conciliación.*

Creo conveniente hacer obligatorio para los jueces de primera instancia la disposición del artículo 64 del código de procedimientos de la capital, respecto a todos los juicios que puedan ser transados, o por lo menos, respecto de los que tienen lugar entre parientes o socios; procurando oír a los mismos interesados antes de abrir a prueba la causa.

9.—*Para facilitar y abreviar el trámite:*

a) *Notificaciones:* Debe fijarse en la ley los días de notificación en la oficina, para lo cual bastará establecer modificando el artículo 31 del código de procedimientos de la capital y la 2a. parte del inciso 1o. del artículo 1o. de la ley 3649, que al efecto los litigantes estarán obligados a concurrir los martes y viernes a la secretaría, consagrando así los días que ha establecido la costumbre, y con ello se ganará mucho en tiempo y facilidad.

Las notificaciones a domicilio tal vez podrían hacerse por correo, certificadas.

b) *Suprimir el informe in voce:* substituyéndolo por una exposición escrita que los litigantes puedan presentar dentro de 5 o 10 días, según se trate de recurso en relación o libre. El informe oral quita tiempo a los tribunales y no ha producido los resultados que se esperaba: en vez de facilitar y abreviar, dificulta y retarda el trámite y la resolución.

Puede establecerse, en consonancia, que en la apelación que deba resolverse sin trámite, las partes pueden presentar una exposición sucinta hasta el tercer día de vencido el término de su emplazamiento.

c) *Establecer la continuidad de los términos*: para todos los casos posibles. Vencido el término de prueba, debe correr el término para alegar, sin necesidad de providencia judicial, siendo a cargo de la parte activar lo necesario, así se le impone también mayor preocupación del asunto. Vencido el del emplazamiento debe correr de igual manera el término para expresar agravios. Lo mismo que vencido el que antecede debe correr el término para dictar sentencia o resolución.

d) *Demanda, contestación y prueba*: Se debe establecer que los hechos en que se funde la demanda deben ser expresados clara y concretamente, "uno a uno", y la contestación referirse a ellos en igual forma; que no se podrá producir prueba sino sobre los hechos articulados; y que la providencia que conceda o deniegue una diligencia probatoria es inapelable, sin perjuicio de que el superior la conceda o no la tome en cuenta, según procediere, al conocer de la causa sobre lo principal.

Nada contribuirá mejor a la buena ordenación del debate judicial y a evitar frecuentes incidencias y apelaciones. Se ganará en orden, tiempo y facilidad, evitando que un mismo juicio vaya al superior repetidas veces y la producción de pruebas impertinentes, que son fuentes inagotables para la chicana.

e) *Debe fijarse término para las diligencias ordenadas para mejor proveer*: El cual no podrá exceder del ordinario de prueba en cada caso.

10.—*Procedimiento en lo criminal*: Pienso que en esta materia conviene esperar la sanción del nuevo código penal, la que, diré de paso, considero indispensable, con modificaciones solamente en cuanto a las penas que aplica que no las creo siempre adecuadas a nuestras necesidades y a concordar ciertas disposiciones con las finalidades que tienen las importantes reformas proyectadas.

¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital?

Descarto la cuestión constitucional, que ha sido ampliamente debatida ajustándose a la pregunta.

Opino que la reforma no produciría ventajas. Evitar incidentes de competencia, relativamente pocos, sería mayor motivo para suprimir la separación de la jurisdicción comercial. La justicia de la capital no ganaría en rapidez ni mejoraría su situación, en cambio se quitaría a la federal las ventajas de su situación. La justicia federal tiene una tradición honrosa en el país y un alto concepto de su misión especial y elevada, lo cual vendría a quedar menoscabado con la reforma. Este inconveniente y los gastos y dificultades que ha de requerir su implantación, no resultarían compensados.

¿Conviene ampliar la jurisdicción federal?

No considero esto de urgencia inmediata, ni reclamado por una necesidad imperiosa. Debería hacerse a medida y en los casos que las necesidades lo requiriesen.

¿Conviene aumentar el número de cámaras federales?

Creo que la cámara federal de La Plata tiene actualmente una jurisdicción muy extensa y se halla excesivamente recargada, y que para remediar esa situación convendría crear una cámara federal en Bahía Blanca, que entienda en las apelaciones del juzgado federal de la sección y de los juzgados de los territorios de la Pampa y demás del sud.

Tengo el honor de saludar al señor presidente con mi mayor consideración.

J. F. Luna.

Del juez federal de Córdoba, doctor J. B. Echegaray

Córdoba, septiembre 5 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

Buenos Aires.

En respuesta al cuestionario de 6 de agosto ppdo. con que he sido honrado por esa honorable comisión,

paso a exponer mi opinión respecto por ahora del primer punto.

Entiendo que la unificación de los fueros federal y ordinario, en los tribunales de la capital, no es una cuestión de conveniencias sino ante todo una cuestión de índole constitucional.

La capital de la república es una de las instituciones políticas más hondamente modificadas en su racional adaptación a las peculiaridades del propio medio histórico, y si al reorganizar su justicia queremos suprimir el riesgo, que parece tentarnos desde años atrás, de modelar una obra refractaria a la nueva estructura creada por nuestros constituyentes, es necesario eliminar en el estudio del problema la ley y el libro norteamericanos. La indudable incongruencia de imaginar en Georgetown, en todo el territorio cedido por Virginia y Maryland para capital de la Unión, la coexistencia de tribunales locales y nacionales, no salva el error de confundir el distrito, sin derecho político alguno, establecido para asiento de aquel gobierno, con la entidad substancial e integral de Buenos Aires en el federalismo argentino.

El carácter atribuído al distrito de Co'umbia no es diferente del que hubiese servido para asentar en su radio de diez millas cuadradas una universidad o cualquiera otra institución federal, que sólo implican y surten un exclusivo imperio; y tal antecedente nos basta para la exacta comprensión de su naturaleza, absolutamente distinta con la de nuestra capital, cuya figura incomparable se revela, desde luego, como un campo separado y propio en el diseño constitucional. Aquella no tiene representantes en el senado ni en la cámara de diputados y carece de un gobierno inmediato y local instituído como atributo aparte del general en el congreso y en el jefe supremo de la nación; no pudiendo, en consecuencia, pensarse a su respecto en una justicia inherente, análoga en su carácter y coextensiva en su alcance, con las ramas legislativa y ejecutiva de su gobierno propio; como que fué Columbia después de las peregrinaciones del congreso por Filadelfia, Princeton y Annápolis el radio señalado en territorio desierto como solar gubernativo por la unión de los estados, ante la falta de todo centro común entre ellos por su senda dependencia durante el coloniaje de la metrópoli británica, y a la inversa de Buenos Aires la ciudad culminante del país a través del virreynato y de la independencia, de la lar-

ga quietud despótica y de las recias conmociones revolucionarias.

La erección de Buenos Aires en distrito federal no ha sido el hecho simplísimo de una nacionalización de su suelo o de una capitalización de su ciudad, y sostenerlo creo que importa suprimir, a la luz de manuales de preceptiva, características fundamentales de la constitución, su parte más genuina, como hecha por la concreta plasticidad de la tierra y del ambiente. Frente a la simetría de lo abstracto puede parecer nuestra capital una creación híbrida dentro del concierto de las provincias, pero cuando se recuerda el ser histórico, político y económico de Buenos Aires, la guerra civil y la disolución nacional, los pactos y alianzas precarios y azarosos, habremos comprobado su máxima gravitación federativa, por su preexistencia anterior a varias provincias y su localidad tradicional, prevalente y superior. Su ciudad y su pueblo al surgir de la constitución como un factor desconocido de las escritas hasta entonces, como un elemento extraño en la teoría de los estados compuestos, consagró una realidad histórica y resolvió para siempre la ecuación política argentina. No es, entonces, el distrito de Columbia, ni ha muerto en su ámbito con la capitalización el principio y la entidad federal, que dejó de encarnarse en formas absolutas y de vaciarse en el molde único de las autonomías. Así es como Buenos Aires, parte de una de las provincias unidas y centro de amparo común, realizó y afianzó la unión nacional, no sustentada como las federaciones simples por la fuerza pura de los pactos, siempre relativos o parciales, sino en la solidaria y soberana voluntad del pueblo entero de la nación.

La constitución, después de haber creado con la capital un distrito local — tan distinto de las provincias, aunque con ellas se equivalga, como diferente de los territorios — no pudo privarle de su justicia también local, y hubo de hacer de la federal, no una justicia solamente interprovincial, vale decir, sin sentido ni rol fuera de sus fronteras, sino que implantó sus tribunales, según lo declara el art. 94. "en el territorio de la nación". La justicia federal interior es para todas nuestras entidades federativas, capital o provincias, y no para los estados y dentro de los estados como la justicia federal de América del Norte. Al especificar su contenido, el art. 100 no incluyó a la justicia de la capital, a esa inmanente de todo lugar, fuente básica del fuero

local, y con la cual se combina sobre cada pulgada del área, como imposición del sistema federativo, la justicia general de la república. La legislación dada por el congreso en su carácter de legislatura particular de la capital, de rico caudal diferencial, unida a la codificada, que aunque única en la nación expresa el derecho propio de cada localidad, pues la atribución para dictarla fué a los efectos de establecer un derecho uniforme en el país, y no uno de índole federal, delimitan la zona jurídica, del fuero de la capital, idéntico al de las provincias en su contenido y extensión. Sancionado en los códigos del congreso, de acuerdo con el primitivo inc. 11 del art. 64, el derecho común de los lugares, holgaba por obvio el agregado del 6o. que ellos "no alterarían las jurisdicciones locales", dado que otra interpretación habría sido, conforme lo reconocían los mismos reformadores, atentatoria al régimen federativo de la carta. El derecho ordinario, el administrativo y el municipal no se habían federalizado, y los códigos quedaban substancialmente extraños "a los puntos regidos por la constitución y por las leyes de la nación", referidos en el art. 97, hoy 100, únicos que forman el derecho federal y su fuero privativo.

Estos principios orientaron la organización de la república, y la han seguido guiando en su vida positiva y en su proceso dinámico. El opuesto antecedente de la ley de justicia nacional dictada por el congreso del Paraná en 1858, atribuyendo a unos mismos jueces ambas jurisdicciones en el territorio federalizado de la capital, fuera de haber sido transitorio, el reflejo de un apremio, quedó desvirtuado por una desviación ocasional de aquellos hombres ilustres: dejaron, a pesar de la evidente incompatibilidad, ocupar cargos a los magistrados federales en las cortes de justicia de la provincia de Entre Ríos, "trastornando todo el orden judicial", como dijera Vélez en la convención de Buenos Aires al motivar el actual art. 34, propuesto por la comisión revisora a raíz de ese repudiado antecedente. En cambio, asume una importancia decisiva en cuanto obra de la propia convención del 53, la circunstancia de haberse sancionado como atributo complementario de la capital, designada en el art. 3o. la ley orgánica para su municipalidad, sobre la base del régimen electivo, y que, según esperaban los constituyentes, "serviría de modelo para las comunas de toda la confederación". Se fundía así uno de los perfiles más altos de la entidad local de la

capital, deprimido durante tanto tiempo por oscuros intereses y todavía no del todo remodelado.

Posteriormente, las leyes del congreso han deslindado ese fuero de la capital al organizar su justicia, y han sabido mantener inalterable el plan lógico en la realidad funcional del sistema. Ninguno de los escasos proyectos opuestos a través de tanto tiempo ha logrado desviar el curso de esa corriente legislativa, afectando el principio constitucional. Sin desmedro de su concepto se ha pedido en numerosas leyes investir de jurisdicción federal a distintas autoridades de la capital o de las provincias—como en la ley número 4161—porque siempre se ha evitado la confusión entre ambos fueros con la reserva del recurso para ante los órganos de su justicia, salvo casos, como los comprendidos en la ley n°. 927, indiferentes para su propósito informativo. Por el hecho de tener un solo origen todos los jueces de la capital, común origen que nos autorizaría, por identidad de razón, a confundir a su vez las leyes generales del congreso con las leyes locales del mismo y los correspondientes actos y decretos del poder ejecutivo, y de cuyo distinto carácter es una necesaria consecuencia la doble jurisdicción, no se podría llegar a desconocer el gobierno independiente de la capital y su jurisdicción amplia y completa en todo lo concerniente a su régimen local, en tanto cuanto no afecte, como la provincial, cuestiones de índole federal. Aún reconocido para sus jueces ordinarios el principio de la inamovilidad que indudablemente les garantiza, dado que la legislación exclusiva y permanente de que emanan, no especial, dislocada ni arbitraria, debe sujetarse al espíritu de la constitución, la diferencia de fueros se seguirá imponiendo, al abarcar el uno las entidades locales en su ser singular e interior—los lugares nacionales o provinciales del país,—y por comprender el otro la soberanía federal en su vida de relación interna y externa.

Al óbice constitucionai de la unificación se agrega la ineficacia a mi entender del medio a emplearse para realizar los plausibles propósitos que la inspiran, esto es: disminuir las cuestiones de competencia y uniformar la jurisprudencia. Ambos problemas se resolverían por las leyes de procedimiento, cuya revisión es una de las exigencias más perentorias del progreso jurídico. Sin esta obra, ya retardada, habrían de seguir las declinatorias e inhibitorias dilatando o esterilizando los pleitos dentro de las diferentes ramas del fuero único o entre jueces de

diversa localidad. En el primer caso las incidencias serían susceptibles de una apreciable limitación si abandonáramos todo perjudicial rigor teórico para sistematizar nuestros hechos en el sentido de la justa conveniencia general: bastaría imponer el carácter de cosa juzgada, y su expresa primacía respecto del orden de las jurisdicciones, al pronunciamiento sobre la competencia, obligatorio en un preciso momento de la primera instancia, dejando así cerrada para los jueces y para las partes con la ejecutoria de este auto, apelable ante un solo tribunal superior de la capital, toda discusión posterior. Una regla análoga dentro de la magistratura federal de la capital; y en cuanto a los conflictos entre jurisdicciones constitucionalmente privativas o exclusivas,— para diferenciarlas de aquellas otras que lo son en virtud de la improrrogabilidad tan absolutamente establecida por nuestros códigos dentro de una misma justicia,—o sea, en cuanto a las cuestiones suscitadas en la capital con jueces provinciales o federales, correspondería, por cierto, su decisión, a la corte suprema. En esta forma, tan conocida en la doctrina y en la legislación, o en otra concordante entre las muchas ofrecidas por la ciencia procesal, tendríamos restringido el abuso de esas dispendiosas contiendas.

El escenario jurídico, de suyo móvil, no puede estar todo entero comprendido en el supuesto legal. Sin la jurisprudencia, que lo ayuda, suple y corrige, el derecho no puede vivir, pero como indispensable instrumento de realización y de progreso debe tener unidad y claridad, darnos en términos ciertos y categóricos el sentido concreto y actual de los códigos. Nosotros carecemos de los órganos adecuados para esta función y vivimos todavía en plena anarquía jurídica. Fuera de la casación constitucional ejercida con tanta sabiduría y prudencia por la corte suprema sobre todos los tribunales de la república, federales, nacionales y provinciales, no tenemos ninguna otra. Considero que en la capital hay que crear un cuerpo semejante y comprensivo de todo su derecho ordinario, que vendría a servir, con el valor teórico y la austeridad moral de sus fallos, para uniformar el derecho común de toda la república. Debiera implantarse también, antes que ninguna otra cámara, una casación de derecho federal, hoy dejado al definitivo y diferente criterio de las existentes, en las materias regidas por las leyes especiales del congreso.

No suprimamos en el azar de las reformas recla-

madras por la fiebre de nuestro desenvolvimiento, instituciones irresistiblemente cimentadas todas en la vida nacional.

Saluda al señor presidente con toda consideración.

Julio B. Echegaray.

**Del juez de sentencia en lo criminal de la capital,
doctor C. M. Martínez**

Buenos Aires, agosto 23 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados.

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente con motivo de la circular que he recibido en la que Vd. solicita a nombre de la comisión que preside, que el infrascripto transmita la opinión que tenga respecto a los puntos que se determinan en esa comunicación.

Lamento que el recargo de trabajo impuesto por la acefalía del juzgado de sentencia, que estuvo a cargo del doctor Serú, me obligue a dar mi opinión en forma general, circunscribiéndome a la primera cuestión, toda vez, que para evacuar las demás, sería necesario que fuera poseedor de antecedentes, que por la naturaleza de las funciones que ejerzo no están a mi inmediato alcance.

Se pregunta: ¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital? ¿Qué solución aconseja para resolver este problema?

Los que convivimos, diré así, con la justicia, y aun aquellos que la necesidad obliga a llegar a sus estrados, ya sea en defensa de intereses propios o de terceros, sin duda alguna tienen que reconocer que es de imperiosa urgencia la unificación del fuero en los tribunales de la capital federal, toda vez que ello importaría la eliminación de uno de los más graves inconvenientes en la pronta solución de los asuntos, con sus perjuicios inherentes, por las cuestiones de competencia que con mucha frecuencia se suscitan entre los magistrados del fuero federal y ordinario.

Esta necesidad de unificación no es del momento, pues ella ha sido señalada desde muchos años atrás, y gobiernos previsores se preocuparon de llevar a la práctica ese mejoramiento institucional, presentando a la honorable cámara de diputados un proyecto en tal sentido.

En efecto; hace once años en junio de 1909 el actual ministro de la suprema corte, entonces presidente de la nación, doctor José Figueroa Alcorta, siendo su ministro de justicia el doctor Rómulo S. Naón, remitieron a la cámara de diputados, un mensaje y proyecto de ley sobre la unificación del fuero en esta capital, y creación de nuevas cámaras y juzgados.

Es sabido que espíritus cavilosos se oponen a la reforma, porque creen que es contraria a la constitución. Sin embargo no es así.

En los fundamentos del mensaje a que he hecho referencia se estudia el punto, dilucidándolo en forma clara e indubitable, para llegar a la conclusión que la unificación del fuero no contraría disposición alguna de nuestra carta fundamental.

La autoridad de los firmantes de ese mensaje, me inhibe considerar el caso, concretándome a reproducir las atinadas observaciones formuladas al respecto. Son las siguientes:

"Sobre este punto — refiriéndose a las observaciones que puedan afectar principios de orden constitucional — se observa una gran uniformidad de opiniones entre los distinguidos publicistas que se han preocupado de estudiarlo especialmente, y el P. E. entiende que no pueden fundarse observaciones a la unificación del fuero en los preceptos de la carta fundamental".

"No hay en ella disposición alguna que limite las facultades del congreso para crear tribunales nacionales en los territorios sobre los cuales legisla exclusivamente".

"El art. 100 de la constitución enumera las causas cuyo conocimiento corresponde a la suprema corte y a los tribunales inferiores de la nación; pero ese artículo no prohíbe que el congreso, al crear los tribunales inferiores que deben existir para dar cumplimiento a esa disposición, les atribuya el conocimiento de todos los demás asuntos no enumerados".

"El art. 101 previene que la corte suprema entenderá originaria y exclusivamente en determinados

asuntos, y que, en otros casos, ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el congreso".

"Esta disposición demuestra que el congreso puede crear excepciones para la jurisdicción apelada de la corte, y con ello queda evidenciado que puede crear también tribunales que entiendan en otros asuntos que los expresamente especificados en la constitución y que no vayan en apelación a la corte suprema".

"Podría objetarse que se afectaría la constitución, si se pretendiera que los asuntos que ella enumera, en su art. 100 correspondieran a los jueces no federales; pero cuando el congreso crea los tribunales inferiores de la nación, de acuerdo con el precepto de la carta fundamental y, además de los asuntos que ella enumera, les amplía su competencia, no cabría racionalmente alegar la inconstitucionalidad".

"Estas ideas han recibido ya consagración legislativa, tanto en la ley de organización de los territorios que crea jueces letrados nacionales con jurisdicción y competencia en los asuntos del fuero federal y del fuero ordinario, cuanto en la ley núm. 4055 sobre creación de cámaras de circunscripción. Esta ley, cumpliendo el art. 101 de la constitución, excluye de la jurisdicción apelada de la suprema corte numerosos asuntos del fuero federal".

"Como antecedente de importancia debe recordarse que la primera ley de organización y competencia de los tribunales federales que sirvió de base y modelo a la que rige hoy, de 1863, fué sancionada por el congreso de Paraná por unanimidad de votos, estableciéndose en ella que los jueces federales de la capital entenderían en toda clase de asuntos".

"En el P. E. y en el congreso de aquella época, actuaban los hombres que habían redactado la constitución nacional; estaba bien fresco el recuerdo de las discusiones a que dió lugar su sanción; todos conocían la intención de sus cláusulas, y, sin embargo, a ninguno de los que intervinieron en la confección y discusión de aquella ley, se le ocurrió que pudiera ni discutirse que los tribunales de la capital no debían ser todos federales. La disposición respectiva fué votada en silencio y sin observación alguna".

"Este antecedente, y la interpretación legislativa a que se ha hecho referencia, eximen al poder ejecutivo de toda otra demostración".

Igualmente diré, glosando este último párrafo del mensaje, que los antecedentes transcritos, me eximen de toda otra demostración, como lo he expresado anteriormente.

Declarado que todos los jueces de la capital son federales, el congreso puede ampliar la jurisdicción de los mismos, incorporándoles el conocimiento de asuntos del hoy fuero federal a los hoy considerados de la justicia ordinaria, y a su vez, de asuntos de esta jurisdicción a los hoy jueces federales.

En esta situación, se pregunta por la comisión de justicia ¿qué solución aconseja para resolver el problema de la unificación?

A mi juicio, la solución es muy sencilla y de aplicación inmediata, pues sólo se trataría de nueva ubicación de varios de los magistrados en actividad, distribución de trabajo y modificación de algunos de los artículos de las leyes procesales vigentes.

El proyecto del ex presidente doctor Figueroa Alcorta, dejaba subsistente el armazón judicial en esa época, que, como es sabido, fué aumentado bajo esa misma presidencia en la proporción que hoy existe, con la sola excepción de la ampliación de la cámara criminal y correccional que se produjo en la presidencia del doctor Sáenz Peña.

Dada la organización actual, con el aumento, considero que se hace más factible la solución de refundir los tribunales de ambos fueros, que no se sostuvo en la oportunidad a que me refiero, aun cuando se consideraba que era la reorganización ideal o científica, manteniéndose, como se ha dicho, la separación de los jueces en la misma forma que hoy existe.

¿Cómo se haría la refundición? Voy a indicarlo.

Existen, como se sabe, en los tribunales de la capital cinco cámaras de apelación, dos en lo civil, una en lo comercial, una en lo federal y una en lo criminal y correccional.

Con excepción de la última que tiene siete miembros y dos fiscales, las demás están constituidas con cinco miembros y un sólo fiscal.

En 1a. instancia hay 34 jueces, 10 civiles, 4 comerciales, 3 federales, 10 de instrucción, 4 de sentencia y 3 correccionales.

Comenzaré por la justicia civil y comercial. Como sostengo la refundición, considero más conveniente que los cinco miembros de la cámara federal — por ser la que menos asuntos ha de tener en

tramitación — y el fiscal de ese tribunal, se incorporen proporcionalmente, es decir, dos en cada una de las hoy llamadas cámaras primera y segunda en lo civil y comercial, las que, en adelante designaré con los nombres de primera cámara federal en lo civil, segunda cámara federal en lo civil, y cámara federal en lo comercial.

En cuanto a la justicia de 1.ª instancia, de los dos jueces en lo civil y comercial en lo federal, uno pasaría a la jurisdicción civil y el otro a la comercial.

¿Cuál sería el inconveniente que en la práctica podría traer la refundición que se indica? A mi juicio ninguno.

En cambio reportaría beneficios de importancia, para el mejoramiento de la justicia, pues aparte de los que resultarían de la reforma en sí, tendríamos que las dos cámaras federales civiles y la comercial podrían constituir cada una dos salas con tres miembros, además del presidente, las que aisladamente fallarían en definitiva los juicios ordinarios, si se observa, que en la práctica lo que es la excepción de acuerdo a lo que prescribe el art. 85 de la ley de organización de los tribunales, resulta la regla, pues es sabido que la mayor parte de esos juicios se resuelven con tribunal de tres, salvo que la parte solicite la integración de aquel.

Si se reformara esa disposición estableciéndose como regla que puede fallarse en tribunal de tres, y como excepción, que se integrara con dos más cuando fuera solicitado por la parte dentro de un breve plazo, suprimiendo así los motivos hoy establecidos, — impedimento o recusación — la importancia de esa reforma sería indiscutible, pues tendería a la mayor rapidez en la solución definitiva de los asuntos, puesto que tendríamos para fallo el doble de tribunales de los que hoy se constituyen en las jurisdicciones civil y comercial.

Se argumentará que al incorporárseles a los jueces federales en lo civil y comercial nuevas materias para su conocimiento — las hoy federales de esa rama del derecho — se aumentaría el trabajo de los mismos. Ello es exacto, pero es de observar que resulta compensado con la incorporación a esas jurisdicciones de un juez federal. A contrario sensu, lo mismo puede decirse con respecto a estos últimos funcionarios.

¿Y estos asuntos de materia federal qué trámite seguirían? El mismo que todos los demás juicios de la ley procesal civil y comercial: todos aquellos que

son de jurisdicción apelada ante la suprema corte, de acuerdo a la constitución y la ley 4055, no morirían, diré así, en 2a. instancia, sino que seguirían hasta el tribunal superior del poder judicial, cumpliendo el precepto constitucional y la ley reglamentaria.

Como los jueces en lo federal — civil y comercial — en la actualidad intervienen además de los asuntos que se determinan en la ley 48, en otros indicados en leyes especiales, como cartas de ciudadanía, excepciones al servicio militar y asuntos del Banco de la Nación, estos últimos pasarían según fueran ellos, a la justicia civil o comercial a que se incorporan, y los demás deberá entender en ellos, el hoy juez federal en lo criminal y correccional, con los que más adelante se indicarán.

También la actual cámara federal interviene en otros asuntos que no son de la jurisdicción de la capital.

En la ley 4055 se establece que la primera circunscripción comprende la capital de la república y las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan (artículo 12) y la cámara federal de apelación debe entender en segunda instancia en todos los casos enumerados en el artículo 3o. de la misma ley, como así lo preceptúa el artículo 16.

Desaparecida la cámara federal de la capital por la incorporación de sus miembros a las hoy cámaras civiles y comerciales, los asuntos que corresponden a la jurisdicción de la capital, pasarán, como se ha dicho, según sea la materia, a las cámaras federales civiles y comerciales y los criminales y correccionales a la así denominada.

En cuanto a las de las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan incorporadas en la primera circunscripción, deberá crearse una cámara de apelación con asiento en una de esas provincias, para intervenir en las apelaciones que por la citada ley 4055 corresponden a la cámara federal de la capital.

Veamos ahora cuál sería la solución que conviene ante la unificación del fuero, con relación al hoy juez federal en lo criminal y correccional y los de la justicia de la misma jurisdicción denominada ordinaria.

Ese juez federal interviene hoy en los juicios criminales y correccionales determinados por la ley 2372 de octubre 17 de 1888 con la jurisdicción establecida en el artículo 3o. de la ley 48, y además, en asuntos de aduana, impuestos internos, marcas

de fábrica y patentes de invención, ley electoral y extradición.

Como se ha establecido antes, a este juez se le incorporarían los asuntos en que entendían los dos jueces federales — las cartas de ciudadanía y excepciones al servicio militar — confirmando la intervención originaria de ese mismo juzgado en todos los asuntos enunciados en el párrafo anterior con excepción de los juicios comunes correccionales y criminales.

Estos últimos procesos, teniendo en cuenta la conveniencia de uniformar el procedimiento, toda vez, que el juez federal lo es al mismo tiempo de instrucción y de sentencia, deberán corresponder a los jueces federales de la hoy jurisdicción ordinaria en lo criminal y correccional, observando el procedimiento vigente, y resuelto el proceso por la cámara federal en lo criminal y correccional, seguirá aquel a la suprema corte si es que el congreso, dentro de sus facultades — artículo 101 de la constitución nacional — mantiene el artículo 40. en la parte pertinente de la ley 48.

Los demás asuntos en que originariamente inter venga el hoy juez federal en lo criminal y correccional, deberán corresponder en apelación a la primera y segunda cámara federal en lo civil, cartas de ciudadanía, excepciones militares y demás que se relacionen con la ley 4707 y 8129, y ley electoral; a la cámara federal en lo comercial, aduana e impuestos internos, cuando se trate de interpretación de las ordenanzas y ley de impuestos y además los asuntos de marca de fábrica y patente de invención, y por último a la cámara federal en lo criminal y correccional, los de extradición y cuando en los asuntos de aduana e impuestos internos haya que imponer pena pecuniaria o corporal, debiendo tenerse presente en todos los casos la jurisdicción apelada ante la suprema corte cuando corresponda.

Este es el plan más práctico, a mi juicio, para llegar a una solución que no perturbará la armonía que resulta del armazón judicial actual, ni perjudicará los intereses públicos y privados, muy de tenerse en cuenta, solución que no es aventurado afirmar, como se ha dicho, admite que entre a regir de inmediato.

Como uno de los jueces en lo federal tiene cuatro secretarios, habría que designar dos y su personal de secretaría para que estuviera en igualdad de condiciones que los actualmente civiles.

La reforma de la justicia de paz, anhelo público en el sentido de establecerla letrada, facilitaría la solución, pues en uno de los proyectos presentados con aquel fin — me refiero al del ex diputado doctor Avellaneda — se establece la incorporación a esa justicia como jueces de paz de secretarios de primera instancia en lo civil en la proporción de uno por cada juzgado, de manera que quedaría reducido a la designación de uno sólo, que podría a mi juicio ser — sin que se altere el servicio público — uno de los que actualmente forman parte del juzgado federal en lo criminal y correccional, teniendo en cuenta que se le reduce el trabajo con la distribución que se hace.

Con respecto al personal de la cámara federal y fiscal de la misma, pasaría a formar parte de las cámaras donde sus miembros se refunden, y tendríamos la justiciera solución de respetar todas las situaciones personales actuales y un beneficio innegable para el erario, porque tan importante reforma sólo ocasionaría el gasto de la creación de la cámara de apelaciones con jurisdicción en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, pudiendo incorporársele Catamarca y La Rioja, reduciendo así a la cuarta circunscripción con asiento en Córdoba que quedaría con esta provincia y las de Tucumán, Salta, Santiago y Jujuy.

Las reformas procesales indicadas, a aceptarse el plan propuesto, quedarían reducidas a la ampliación de las materias en concordancia con dicho plan; y reforma o no, a criterio del honorable congreso, (artículo 101 de la constitución), de los asuntos de jurisdicción apelada ante la corte, hasta que se resuelva la sanción de los códigos de procedimientos en materia civil, comercial y criminal, proyectados en comisión en 1913 por los distinguidos juristas doctores Ramón Méndez, Manuel Augusto Montes de Oca y Pedro F. Agote, con José Luis Duffy como secretario, y que, a juicio del subscrito, son dignos de la atención del poder legislativo.

Con este motivo saluda al señor presidente con su distinguida consideración.

Carlos M. Martínez.

Buenos Aires, septiembre 6 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados:

Tengo el agrado de dirigirme nuevamente al señor presidente, adjuntándole un proyecto que he formulado sobre reformas a la justicia federal y ordinaria de la capital, de acuerdo al plan que proponía en el informe que tuve el honor de remitir al señor presidente el 23 del mes próximo pasado, contestando la encuesta sobre unificación del fuero en la capital.

Ante todo, quiero dejar constancia que en ese informe se ha deslizado un error, pues se establece en él que los actuales jueces en lo comercial son cuatro en vez de cinco, resultando de ahí en el cómputo total uno menos.

Quiero igualmente dejar constancia que una de las razones que omití establecer y que me inclinaban a indicar como más conveniente que fueran los miembros de la cámara federal y su fiscal los que se incorporaran proporcionalmente a las cámaras civiles y comercial, era la de que esos magistrados podían aportar a éstas, que van a intervenir en asuntos del hoy fuero federal, un concurso de valer, por el conocimiento que deberán tener de la jurisprudencia, que es dable suponer, no estarán al tanto de su evolución, los miembros de las últimas cámaras citadas.

En el proyecto que va por separado se suprime de la jurisdicción apelada de la corte, solamente los delitos comunes que corresponden al actual juez federal, con la excepción de los establecidos en el inciso 5o., del art. 4o., que por su naturaleza es conveniente la tercera instancia.

La razón de la exclusión de los determinados asuntos radica en que los mismos se hallan perfectamente garantidos con la intervención del tribunal federal de apelación en lo criminal y correccional, y es por ello que se dejan de jurisdicción apelada los de las cámaras de circuito por estar constituidos con solo tres miembros—incisos 5o. y 6o. del art. 4o.

Se suprime a los miembros de las cámaras federales para la integración de la corte, lo que establecía la ley 4162 e igualmente se suprime la recusación sin causa que determina la ley 3266.

Ni en uno ni otro caso existe una razón que justifique su mantenimiento, en la forma que esas leyes lo establecen.

Se adapta, por último, la intervención de la corte

suprema, en las cuestiones de competencia y superintendencia, a la nueva organización de la justicia federal que se establece en el proyecto.

Se determina que el procedimiento que deben regir en todos los tribunales federales, es el que corresponde para la llamada justicia ordinaria de la capital. Con ello se llega también a la unificación de los procedimientos.

Actualmente en la justicia federal se aplica el código civil y comercial para la capital como supletorio de la ley número 50. Es innegable que aquel es superior al que rige en lo federal, y ello lo demuestra la circunstancia de aplicarse en todo lo que la citada ley 50 no prevé.

La implantación de los procedimientos indicados no puede traer perturbación alguna, puesto que se establece para los casos que se inicien, rigiendo en los de tramitación los de la ley 50.

En lo criminal no hay modificación en los procedimientos por regir en ambos fueros la ley 3508.

Se establece que los actuales jueces federales sigan conociendo en los asuntos que los mismos tienen en tramitación, correspondiéndoles según sea la jurisdicción que van a entender.

Como el propósito es el mejoramiento de la justicia, se incorporan al proyecto disposiciones que tienden a ello, como la de eliminar la recusación sin causa para todos los funcionarios; la de que los secretarios sean abogados, respetando los que actualmente no tienen ese título; y la ampliación de funciones de los mismos, que facilitará la rapidez de los juicios y dará más tiempo al juez, quien podrá dedicarlo a la resolución de los asuntos.

El plazo que se acuerda en el art. 38 puede acortarse, si se cree conveniente, dada la sencillez de la reforma, pues, como ya lo dije, la organización proyectada quedaba reducida a una nueva ubicación de unos cuantos magistrados y distribución de trabajo, quedando, lo demás, establecido en el proyecto adjunto que he creído necesario redactar para completar mi informe anterior.

Si la unificación del fuero y de los procedimientos en lo federal llega a ser una realidad, se habrá dado un gran paso en el mejoramiento de la justicia, ya que el desiderátum de una ideal y científica sería la federalización de la justicia argentina bajo la autoridad del tribunal superior creado por la constitución y con la independencia necesaria para desenvolverse en todo lo que a ella se refiera.

Con este motivo me es grato saludar al señor presidente con mi distinguida consideración.

Carlos M. Martínez.

Reformas a la justicia federal y ordinaria de la capital con motivo del proyecto de unificación del fuero.

Artículo 1o.—El poder judicial de la nación será ejercido:

- 1o. Por la corte suprema de justicia.
- 2o. Por cuatro cámaras federales de apelación en la capital federal.
- 3o. Por cinco cámaras federales de circuito.
- 4o. Por los jueces federales de la capital y de sección de cada una de las provincias.
- 5o. Por los jueces letrados de los territorios nacionales.

CAPITULO I

De la corte suprema

Art. 2o. — La corte suprema de justicia se compondrá de cinco ministros y un procurador general.

Art. 3o. — La corte suprema conocerá originaria y exclusivamente de las causas mencionadas en el artículo 101 de la constitución nacional y artículo 1o. de la ley número 48 de 14 de septiembre de 1863, y en revisión con arreglo al artículo 241 de la ley 50 de la misma fecha.

Art. 4o. — La corte suprema conocerá también en última instancia por apelación y nulidad en las sentencias definitivas de las cámaras federales de apelación de la capital federal y de circuito en los siguientes casos:

- 1o. De las que fueren dictadas en las demandas contra la nación a que se refiere la ley número 3952 de octubre 6 de 1900.
- 2o. De las que recayesen sobre acciones fiscales contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas o por cumpli-

miento de contratos; por defraudación de rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos y en general en todas aquellas causas en que la nación o un recaudador sea parte actora, siempre que el valor disputado excediera de cinco mil pesos. No se comprenden las acciones fiscales por cobro o defraudación de rentas o impuestos que sean exclusivamente para la capital y territorios nacionales y no generales para la nación.

30. De las que recayesen en todas las causas a que dieran lugar los apresamientos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles.
40. De las causas de extradición de criminales reclamados por países extranjeros.
50. De las dictadas en cualquier causa criminal por los delitos de traición, rebelión, sedición y en las de piratería y naufragios cometidos en alta mar a bordo de buques nacionales o por piratas extranjeros.
60. De las dictadas por las cámaras federales de circuito por homicidio, incendio o explosión y todos aquellos casos en que la pena impuesta excediera de diez años de presidio o penitenciaría.

Art. 50. — Conocerá igualmente por apelación la corte suprema en los casos que con arreglo a lo establecido en el artículo 551 del código de procedimientos en lo criminal proceda el recurso de revisión, como también en los recursos que se promovieran por retardo o denegación de justicia en los casos a que se refieren los artículos anteriores.

Art. 60. — La corte suprema conocerá igualmente en grado de apelación, de las sentencias definitivas pronunciadas por las cámaras federales de apelación, por los tribunales superiores de provincias y por los tribunales superiores militares, en los casos previstos por el artículo 14 de la ley 48, de septiembre 14 de 1863.

Art. 70. — Si procediese el recurso del artículo anterior y la sentencia de la cámara o tribunal fuese confirmatoria de las de los juzgados de primera instancia, el apelado podrá solicitar su ejecución, dando fianza de responder de lo que percibiese, si el fallo fuera revocado por la suprema corte.

Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que la hubiere dictado y quedará de hecho cancelada, si la sentencia recurrida fuere confirmada por la

corte suprema. El fisco nacional estará exento de la fianza a que se refiere esta disposición.

Art. 8o. — En los casos en que la corte suprema conozca en grado de apelación, recibido el expediente, se dictará la providencia de autos y las partes podrán, dentro de los diez días comunes e improrrogables, siguientes al de la notificación de esa providencia, presentar una memoria sobre las causas, que se mandará agregar a los autos y sin más trámite quedará la causa conclusa para definitiva.

Art. 9o. — La corte suprema dirimirá las cuestiones de competencia que se susciten:

- a) Entre las cámaras federales de apelación y entre éstas y un juez o tribunal de provincia.
- b) Entre un juez federal de la capital o de sección y un juez o tribunal superior de provincia.
- c) Entre un juez letrado de territorios nacionales y un juez federal de la capital o de sección o un juez o tribunal superior de provincia.
- d) Entre jueces de distintas provincias y entre un tribunal militar y uno de cualquier otra jurisdicción nacional o provincial.

Art. 10. — La corte suprema ejercerá superintendencia sobre las cámaras federales de la capital y de circuito, jueces federales de la capital, de sección, letrados de los territorios nacionales y demás funcionarios de la justicia federal, debiendo dictar los reglamentos convenientes para procurar la mejor administración de justicia.

Art. 11. — La superintendencia de la corte suprema comprende:

- 1o. Velar por el cumplimiento de esos reglamentos e imponer las penas disciplinarias que ellos fijen para los casos de infracción.
- 2o. Exigir se le remita anualmente o en cualquier tiempo una relación de las causas entradas, del número y estado de las pendientes y de las falladas.
- 3o. Imponer a los miembros de las cámaras federales y demás funcionarios de la justicia federal, penas disciplinarias por faltas a la consideración y respeto debidos a la corte o a alguno de sus miembros, por actos ofensivos al decoro de la administración de justicia o por falta o negligencia en el cumplimiento de su deber.

Las penas consistirán en prevenciones, apercibimientos o multas que no excedan de doscientos pesos.

En caso de reincidencia y cuando el abuso, la falta o negligencia fuera grave, la corte suprema la pondrá en conocimiento de la cámara de diputados de la nación, cuando fuesen cometidos por los miembros que ejerzan funciones en los tribunales determinados en los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 10. y los procuradores fiscales de las cámaras.

Cuando fuesen cometidos por los procuradores fiscales de primera instancia, asesores de menores y defensores de menores, pobres y ausentes, los suspenderá solicitando en seguida su exoneración del poder ejecutivo.

Art. 12. — En los casos de recusación, impedimento, vacancia o licencia de alguno de los ministros de la corte suprema, se integrará este tribunal hasta completar el número legal para fallar en el orden siguiente:

- 1o. Con el procurador general.
- 2o. Con los conjuces de la lista de 25 abogados que reunan las condiciones para ser miembros de la misma corte y que ésta formará por insaculación en el mes de diciembre de cada año.

Art. 12 (bis). — Los miembros de la corte suprema de justicia no podrán ser recusados sin causa.

CAPITULO II

De las cámaras federales de apelación

Art. 13. — Habrá cuatro cámaras federales de apelación en la capital de la república compuesta cada una de siete miembros, y cinco cámaras federales de apelación de circuito con tres miembros cada una. La primera de éstas tendrá su asiento en la ciudad de La Plata, la segunda en la ciudad de Paraná, la tercera en la ciudad de Córdoba, la cuarta en la ciudad de y la quinta en la ciudad de Rosario.

La primera circunscripción comprende la provincia de Buenos Aires y los territorios de la Pampa, del Neuquén, del Río Negro, del Chubut, de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La segunda circunscripción comprende las provincias de Entre Ríos, Corrientes y territorios del Chaco, Formosa y Misiones.

La tercera circunscripción comprende las provincias de Córdoba, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y territorio de Los Andes.

La cuarta circunscripción comprende las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja.

La quinta circunscripción comprende la provincia de Santa Fe.

Art. 14. — El ministerio público en 2a. instancia será desempeñado por un funcionario que tendrá el título de procurador fiscal de las cámaras federales de apelación en la capital y en la ciudad de La Plata y Rosario, correspondiendo uno por cada cámara con excepción de la cámara federal en lo criminal y correccional que será desempeñado por dos de esa categoría.

En las cámaras federales de Paraná, Córdoba y dicho cargo lo desempeñará el procurador fiscal ante el juzgado de sección con asiento en aquéllas.

Art. 15. — Las condiciones para ser miembros de las cámaras federales de apelación y procurador fiscal de las mismas, y para su nombramiento, serán las que se requieren para ser miembro de la corte suprema.

Art. 16. — No podrán ser simultáneamente jueces de la misma cámara, los parientes o afines dentro del cuarto grado civil y en caso de afinidad sobreviniente el que la causara abandonará el puesto.

Art. 17. — Cada cámara designará anualmente su presidente y actuará con el secretario o secretarios y demás empleados que fije la ley de presupuesto, a quienes nombra y remueve con justa causa.

Igualmente nombra y remueve a petición del juez los secretarios y demás personal de los juzgados que la misma ley establezca.

Art. 18. — Las cámaras federales conocerán en grado de apelación en segunda instancia en todos los casos enumerados en el art. 4o. de la presente ley.

Art. 19. — Las cámaras federales conocerán en grado de apelación y en última instancia:

1o. De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces federales de la capital y los jueces de sección en las causas de su competencia que no fueren de las enumeradas en el art. 4o. de la presente ley y siempre que el valor cuestionado en las causas civiles y comerciales exceda de quinientos pesos.

2o. De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces letrados de los territorios nacionales aunque fueren dictados en causas criminales y del fuero común.

3o. De los recursos por retardación o denegación de justicia por parte de los jueces federales de la capital, jueces de sección o letrados de los territorios nacionales.

4o. De las consultas que elevaren los jueces letrados de los territorios nacionales en los casos del art. 42 de la ley de organización de dichos territorios.

Art. 20. — Las cámaras federales conocerán de las cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces federales de la capital, entre los jueces de sección, entre los jueces letrados de los territorios nacionales y entre unos y otros.

Art. 21. — En la capital habrá dos cámaras civiles, una comercial y una criminal y correccional y observarán las primeras y la comercial los procedimientos establecidos en el código de procedimientos en materia civil y comercial leyes No. 1893, art. 318 y 4128 y 5106, y la criminal y correccional el código de procedimientos en lo criminal de octubre 17 de 1888 y ley 3508.

Las cámaras federales de circuito observarán en materia civil, comercial, criminal y correccional, los mismos procedimientos establecidos en las leyes citadas.

Art. 22. — En los casos establecidos en el art. 12, la integración de las cámaras federales de la capital se realizará entre los miembros que las constituyen en el siguiente orden:

- 1o. Cámaras civiles entre sí, comercial y criminal.
- 2o. Cámara comercial, civiles y criminal.
- 3o. Cámara criminal, comercial y civiles.
- 4o. Con los indicados en el inciso 2o. del art. 12 citado y en la forma en él establecida.

Art. 23. — En las cámaras federales de circuito se integrarán:

- 1o. Con el procurador fiscal de la cámara.
- 2o. Con el juez o jueces de sección, donde funcione el tribunal.
- 3o. Con los conjueces que en diciembre de cada año insaculará la corte suprema para el siguiente, en número de diez de una lista de abogados que reunan las condiciones para ser miembros titulares, que las mismas cámaras le pasarán al efecto en el mes de noviembre.

Art. 24. — Las cámaras federales de la capital en lo civil y comercial, para juzgar en definitiva en juicio ordinario, podrán constituir tribunal con tres miembros, salvo que las partes pidieran integración con dos más, en cuyo caso deberán solicitarlo den-

tro de los tres días de notificada la constitución de aquél.

Art. 25. — Las cámaras federales dictarán un reglamento interno y lo someterán a la aprobación de la corte suprema.

Art. 26. — Sin perjuicio de la superintendencia de la suprema corte, las cámaras federales de apelación podrán corregir a sus secretarios y demás empleados subalternos con apercibimientos, suspensión sin goce de sueldo por término que no exceda de quince días o multas hasta cien pesos, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, desobediencia o faltas a la consideración y respeto debidos al tribunal o a alguno de sus vocales.

Tendrán también la facultad de corregir con multas que no excedan de cincuenta pesos o prisión que no exceda de ocho días, las faltas de respeto que se cometieran contra su dignidad en los alegatos y audiencias de las causas y las que se cometieran contra su autoridad, obstruyendo el curso de la justicia o en daño de las partes, sin perjuicio de las acciones que del hecho nacieren por daños y perjuicios.

Art. 27. — Las dos cámaras federales civiles y la comercial de la capital, se constituirán con los miembros que actualmente las componen y con la incorporación a razón de dos a cada cámara, de los vocales de la cámara federal de apelación y fiscal de la misma, dejando librada por antigüedad de los mismos la opción a la jurisdicción.

El personal de esta última cámara se distribuirá proporcionalmente entre las tres designadas, de acuerdo a lo que las mismas resuelvan.

Los miembros que forman parte de las cámaras federales de la capital y de circuito de acuerdo a esta ley no podrán ser recusados sin causa, y para constituirse en tribunal las primeras deberán sus miembros prestar previamente juramento ante la corte suprema de desempeñar su cargo de conformidad a lo que prescriben la constitución y las leyes de la nación y los que nombren para la cámara federal de la cuarta circunscripción lo prestarán, por esa vez, ante el gobernador de la provincia donde se establezca el asiento del tribunal de esa circunscripción. Los nuevos miembros que con posterioridad se incorporen jurarán ante el presidente del tribunal.

Art. 28. — Los expedientes que se encuentren en trámite ante la cámara federal de apelación de la capital y de circuito con asiento en Córdoba se distribuirán en la siguiente forma:

10. A las cámaras federales civiles proporcionalmente, los juicios de jurisdicción civil y además cartas de ciudadanía, excepciones militares y demás que se relacionen con las leyes 4707, 8129 y ley electoral.
20. A la cámara federal comercial los juicios de esa jurisdicción con los de impuestos internos y aduana cuando se trate de la interpretación de las ordenanzas y ley de impuestos; marcas de fábrica y patentes de invención.
30. A la cámara federal en lo criminal y correccional los delitos comunes y los juicios de aduana e impuestos internos cuando corresponda pena pecuniaria y corporal.
40. A la cámara de circuito de la cuarta circunscripción que se crea por esta ley los juicios que correspondan a las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan existentes en la cámara federal de esta capital y los de Catamarca y La Rioja de la cámara con asiento en Córdoba.

En los juicios pendientes en la cámara federal de apelación y cámaras de circuito, indicados en los cuatro incisos anteriores en materia civil y comercial se observarán hasta su terminación los procedimientos establecidos para la corte suprema en la ley número 50 de 14 de septiembre de 1863 y leyes especiales y en materia penal el código de procedimientos en lo criminal de la nación.

CAPITULO III

De los jueces federales de la capital

Art. 29. — En la capital federal habrá 35 jueces federales distribuidos en la siguiente forma:

11	Jueces en la jurisdicción civil
6	„ „ „ „ comercial
9	„ „ de instrucción en lo criminal
4	„ „ „ sentencia en lo criminal
2	„ „ „ jurisdicción correccional
1	„ „ „ leyes especiales
1	„ „ „ menores en lo correccional
1	„ „ „ „ de instrucción en lo criminal

Art. 30. — Los juzgados de primera instancia en lo civil lo constituirán los diez jueces en lo civil en actividad con su personal y el juez federal en lo civil y comercial y personal de secretaría correspon-

diente, si por la opción que le corresponderá al juez federal más antiguo eligiere esa jurisdicción. A ese juzgado se aumentará el personal hasta equipararlo a los de los primeros.

Los juzgados de primera instancia en lo comercial lo constituirán los cinco jueces en actividad de esa jurisdicción con su respectivo personal, y el juzgado federal en lo civil y comercial que quedare si la opción que hiciere el más antiguo fuere en lo civil.

Los juzgados de instrucción y de sentencia en lo criminal y los correccionales con su personal permanecerán con su organización actual, como también los jueces de menores en lo correccional y de instrucción criminal.

El juzgado federal de leyes especiales lo constituirá el actual juzgado en lo federal criminal y correccional con su personal a excepción el de una secretaría que pasará a formar parte del undécimo juzgado federal en lo civil.

Art. 21. —En primera instancia el ministerio público será ejercido por funcionarios con el título de procuradores fiscales de primera instancia, defensores y asesores de menores y defensores de pobres y ausentes, con la jurisdicción y competencia establecida por las leyes en vigor para los así titulados y designados por agentes fiscales.

Art. 32. — Los jueces federales de lo civil de la capital conocerán en primera instancia de los asuntos determinados en el artículo 60 de la ley 1893 y además los enunciados en los seis primeros incisos del artículo 2o. de la ley número 48.

Los jueces federales de la capital en lo comercial conocerán en primera instancia de los asuntos determinados en el artículo 62 de la ley 1893 y los enunciados en los últimos cuatro incisos del artículo 2o. de la ley 48.

Los jueces federales del crimen de instrucción y de sentencia, conocerán en primera instancia de las causas establecidas en la ley 2372, 7029 y 9143 y las indicadas en los incisos 1o., 2o., y 4o. del artículo 3o. de la ley 48.

Los jueces federales en lo correccional conocerán en los que por su competencia indica la ley 2372 y las que puedan corresponderles de las citadas en la ley 48.

Los jueces de menores en lo correccional y de instrucción en lo criminal conocerán en los casos establecidos por la ley 10903, y con la jurisdicción y procedimientos que les atribuyan las leyes vigentes.

El juez federal de la capital de leyes especiales conocerá originariamente en todos los asuntos que correspondan a las leyes números 346 y 7029 sobre ciudadanía, 810 y 4933 de aduana, 8130 y 8871 de elecciones nacionales, 1612 y sus correlativas de extradición, 111 y 3973 de patentes de invención y marcas de fábrica y 3764 y correlativos de impuestos internos, y en grado de apelación en los casos determinados en esas mismas leyes, observando los procedimientos que ellas indican.

Art. 33. — Los asuntos de jurisdicción civil que tramitan en la actualidad en los juzgados federales, seguirá entendiendo en ellos hasta su terminación el juez que se incorpore a esa jurisdicción y observará en esos asuntos el procedimiento establecido en la ley número 50. Se procederá igualmente con los asuntos de materia comercial que le correspondarán al juez federal que pase a formar parte de esa jurisdicción.

Art. 34. — Los juicios en tramitación sobre excepciones militares y ciudadanía ante los juzgados federales en lo civil y comercial pasarán al juzgado federal de leyes especiales.

Art. 25. — Los procedimientos que se observarán en los asuntos que se tramitan en la jurisdicción civil, comercial, criminal y correccional de primera instancia en la justicia federal de la capital serán los determinados en el artículo 21 de esta ley.

Art. 36. — Para ser juez de primera instancia se requiere ser ciudadano argentino, tener veinticinco años de edad, haber ejercido en el país la profesión de abogado durante tres años o desempeñado por igual término una magistratura o empleo judicial y conservarán sus empleos, como también los miembros de las cámaras federales de apelación y procuradores fiscales de las mismas, mientras dure su buena conducta, gozando del sueldo que les asigne la ley de presupuesto el que no podrá ser disminuido mientras permanecieren en sus funciones. Ni unos ni otros podrán ser separados de su cargo, sino por sentencia del senado mediante acusación de la cámara de diputados.

Art. 37. — Constituidas las cámaras federales de apelación de la capital, los jueces de primera instancia y funcionarios del ministerio público prestarán, en el tribunal que le corresponda por razón de la jurisdicción, el juramento de desempeñar sus funciones bien y fielmente y de conformidad a lo que prescribe la constitución y las leyes de la nación.

Art. 38. — Los tribunales que se determinan para la capital federal deberán estar constituidos y funcionando de acuerdo a la organización establecida en esta ley dentro de los quince días de promulgada, y de los treinta días la cámara federal de circuito de la cuarta circunscripción.

Art. 39. — En lo sucesivo, para ser secretario de primera instancia se requiere tener título de abogado, y podrán dictar por sí solos las providencias de trámite en la jurisdicción civil y comercial, sin perjuicio de las demás funciones que le están asignadas en el artículo 163 de la ley 1893.

CAPITULO IV

De los jueces federales de sección

Art. 40. — La jurisdicción y competencia de los jueces federales de sección será la determinada en la ley sobre jurisdicción y competencia de los tribunales federales de 14 de septiembre de 1863 y demás leyes especiales dictadas por el honorable congreso.

En los asuntos en la actualidad en trámite observarán hasta su terminación el procedimiento indicado en la ley número 50 y el de las leyes especiales, y desde la promulgación de la presente ley, los que se inicien se regirán por el procedimiento establecido para los tribunales federales de la capital e indicados en los artículos 21 y 35.

Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley, se pagarán de rentas generales hasta su inclusión en la ley de presupuesto.

Art. 42. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Carlos M. Martinez.

Del fiscal federal de La Plata, doctor D. E. Alsina

La Plata, septiembre 8 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

Tengo el agrado de acusar recibo de la atenta nota de esa digna comisión, fecha 6 de agosto, requiriendo opinión, sobre las cuestiones en ella planteadas, que paso a emitir.

1a. cuestión: La diversidad de fueros en el orden judicial, obedece al propósito de una más eficiente organización del cuerpo judicial, que, mediante la división de la materia y la consiguiente especialización, en determinado ramo de la ciencia jurídica, se traduce en un acrecentamiento evidente de "aptitud" y "rapidez", para la función de "administrar justicia".

Cuanto más complicadas sean las relaciones jurídicas, tanto más positiva y benéfica será esa división de fueros. Y como las relaciones jurídicas se multiplican a medida que progresa la humanidad, cada día se afirma más rotundamente, la conveniencia y necesidad de separar los fueros, que aún permanecen "refundidos" en una misma jurisdicción.

Y así como no sería posible "unificar" la legislación de fondo, es decir, hacer "un sólo código" para regir la materia constitucional, administrativa, civil, comercial, penal, minera, militar, eclesiástica, ni ante el sabio precepto de nuestra constitución (artículo 67, inciso 11), ni ante la naturaleza tan peculiar y diferente de cada una de ellas, tampoco lo sería, asignar a cada juez, "un fuero enciclopédico," que como fácilmente se comprende, aparte del enorme cúmulo de conocimiento y experiencia que habría de suponersele, sería tal la confusión a que se prestaría, la "diaria" aplicación de un farrago semejante de leyes, que no podría imaginarse nada más apropiado, para perturbar totalmente la función judicial, ya de por sí "indecisa", como lo revela la constante mutación de la jurisprudencia, y la disparidad de criterio de los superiores tribunales, sobre un mismo caso jurídico. (Ejemplo: la cámara federal de La Plata acuerda excepción del servicio militar al hijo de madre abandonada; la de la capital federal, se la niega).

Si no conviene pues, en general, la "unificación" de los fueros, más o menos compatibles por naturaleza, con mucha mayor razón, está "contraindicada", la "unificación" de fueros que no tienen mayor "afinidad" entre sí, y que requieren "vastos" y "especialísimos" conocimientos, como ocurre precisamente, con el "federal".

Basta leer el artículo 100 de la constitución nacional; las leyes correlativas básicas de la jurisdicción federal, como las números 27; 48; 49; 1467; 3952; 4055; y cualquier colección de "leyes usuales" (todas ellas deficientes e incompletas), para convencerse de la complejidad y progresión ilimitada de la "materia federal".

A este grave inconveniente, hay que añadir, el de la "diversidad de procedimientos", estatuidos por otros tantos "códigos" y "leyes especiales", para la "subsanciación" de las "causas federales", como por ejemplo: el código de procedimientos civiles y criminales de 25 de agosto de 1863 (ley 50); el código supletorio de procedimientos civiles y comerciales de la justicia ordinaria de la capital federal; el código de procedimientos penales de los mismos tribunales; la ley electoral; la ley de expropiación; la ley de demandas contra la nación número 3952; la ley de impuestos internos núm. 3764; la ley de defensa social núm. 7029; la de ciudadanía; la de excepciones del servicio militar; la de prenda agraria.

¿Qué ventajas reportaría, entonces, a la más perfecta administración de justicia, atribuir a los jueces "ordinarios" de la capital de la república el "fuero federal"?

Absolutamente ninguna. Lo que debe "unificarse" es la legislación federal, de "fondo" y de "forma", haciendo un sólo "código" federal con todas las leyes especiales de la nación, y un sólo "código de procedimientos", para el "fuero federal", manteniendo dentro de éste, la más acentuada división de jurisdicción federal civil y contencioso-administrativa; federal comercial; federal criminal y federal correccional, o por lo menos, federal "civil, comercial" y "contencioso-administrativo", y federal "penal (criminal y correccional)".

Opino en consecuencia: que la unificación de los fueros federal y ordinario, es "inconveniente", y que lo que urge con referencia al "fuero federal", es "codificar su legislación", para hacer más sencilla su "aplicación".

2a. cuestión: Por las razones expuestas en la cuestión anterior, es también "inconveniente" la ampliación de la "jurisdicción federal", a otras materias, que no sean las previstas en el artículo 100 de la constitución nacional, entre las cuales, no encuadra a mi juicio, el conocimiento de las "quiebras", pues, no obstante la prescripción del inciso 11 del artículo 67 y 100 de la constitución nacional, la ley de quiebras ha sido incorporada al código de comercio, por el artículo 1543 del mismo código, correspondiendo en consecuencia, su aplicación, a los jueces del fuero común.

3a. cuestión: He sido siempre partidario de la "descentralización" del poder judicial, cuando así lo aconsejan la distancia, población y riqueza de una región territorial, y considero que el actual emplazamiento de las "cámaras federales de circuito", no consulta ese principio, sino "imperfectamente" siendo obra de gobierno, procurar el aumento y distribución de esas cámaras, de acuerdo con las necesidades de la justicia de cada región.

Refiriéndome por ejemplo, a la cámara federal de La Plata, cuya jurisdicción territorial abarca toda la provincia de Buenos Aires, y los territorios de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, basta este solo enunciado para comprender las enormes distancias a que se encuentra aquel tribunal, de los respectivos juzgados, siendo necesario a veces, una semana, para que una causa, en grado de apelación, o un escrito, lleguen a la cámara.

Esto perjudica en alto grado la pronta terminación de los procesos, y es un atentado a la libertad individual, cuando se relaciona con procesos criminales donde existe preso.

Opino en consecuencia, que conviene una más racional distribución, y creación de nuevas cámaras federales de circuito, consultando las necesidades actuales, de una justicia próxima al lugar donde se origina su intervención.

4a. cuestión: Considero urgente la reforma de todas las leyes procesales—comenzando por las contiendas de competencia—que a veces, duran tanto, como toda la substanciación y fallo de las causas.

Esa reforma ha de encaminarse a abreviar los trámites, términos y demás solemnidades actuales; y a convertir en realidad el viejo precepto romano: "Jus suum cuique tribuere".

Las cuestiones jurisdiccionales deben suprimirse,

Siempre que un juez tenga duda sobre su jurisdicción, o que las partes la planteen, deberá elevar sin más trámite la causa al tribunal superior que corresponda, para su decisión, sin substanciación alguna, y en el primer acuerdo, dentro de tercero día, siendo irrecusable su pronunciamiento.

Las excepciones o defensas, deben ser todas opuestas (suprimiendo las dilatorias), al contestar la demanda;—no deben existir alegatos—que en rarísimos casos son sinceros, pues en ellos, cada parte, en vez de llevar al magistrado, la verdad, le presenta una exposición de los autos, acomodada a sus respectivas pretensiones.

Los jueces deben estar autorizados a suplir toda deficiencia o error jurídico, toda omisión en la justificación de los hechos, de oficio, por propia autoridad, asegurando siempre, en sus fallos, la efectividad del derecho, que corresponde a los hechos invocados.

En cuanto al fuero federal, ya he dicho, que se impone codificar las múltiples leyes de procedimientos, existentes, unificándolas en lo posible.

Omito mayores desenvolvimientos, sobre cuestiones, en las cuales, existe ya un estado de conciencia pública, y que la reconocida ilustración de los señores miembros de esa digna comisión, hacen superflua, y no he de terminar sin presentar a ella, como ciudadano amante del buen nombre de mi país, mi más caluroso aplauso, y adhesión a su sana orientación, dedicando todos sus esfuerzos, al afianzamiento de la justicia, que es obra de patriotismo y de cultura.

Saludo al señor presidente con mi más distinguida consideración.

Dalmiro E. Alsina.

Del juez en lo civil de la capital doctor A. Casabal

Buenos Aires, septiembre 13 de 1920.

*Al señor presidente de la comisión de justicia de la
honorable cámara de diputados de la nación, doctor
Roberto Parry.*

La circunstancia de haber estado de turno hasta

el treinta y uno del mes pasado, ha retardado mi contestación. Presento por ello mis excusas al señor presidente, y pídole asimismo que atribuya la forma en que me expediré, exclusivamente a motivos derivados de la brevedad del término que tengo por delante. Por lo demás, el señor presidente ha de considerar que no resulta fácil substraer a las tareas diarias del despacho el tiempo indispensable para fundar debidamente opiniones en asuntos tan graves, tan amplios y tan diversos como los que plantea la circular.

No encuentro que podrían oponerse reparos serios de orden constitucional a la ley que declarara unificados los fueros federal y ordinario en la capital de la república. Y digo, por el contrario, que esa reforma interpretaría mejor el espíritu de la constitución.

Se arguye que el primero es un fuero de excepción, insusceptible de alcanzar a los asuntos regidos por leyes que se refieren al gobierno y administración de la capital, salvo casos taxativamente expresados. Y este modo de ver ha informado las disposiciones contenidas en los artículos 2o. de la ley de 14 de septiembre de 1863, y III de la ley de 1893.

Sin embargo, ante la sola constitución no puede decirse apartado al poder judicial federal de ese conocimiento, porque no lo están los poderes legislativo y ejecutivo. Huelga añadir que la sanción de tal limitación hubiera importado crear un desnivel visible entre los poderes, violatorio del principio de la armonía y de la concordancia, de todo punto necesario para el regular funcionamiento del estado.

La concepción de un poder judicial mutilado frente a los otros dos poderes, investidos de una mayor extensión de atribuciones, no estuvo nunca en el ánimo de nuestros constituyentes. Porque ellos sabían bien que ningún poder debía aparecer colocado por sobre los otros, so pena de un resentimiento profundo en el equilibrio de todo el sistema. Cómo sostenerse, pues, que en tanto que la constitución dió al presidente el rango de jefe local e inmediato de la capital (conf. art. 86: inciso 3o) y al congreso la facultad de ejercer una legislación exclusiva sobre la misma (conf. art. 67, inciso

27), desconociera en el poder judicial facultades correlativas?

Ciertamente que el art. 100 contiene una enumeración de asuntos, pero de tal texto no corresponde derivar restricciones que, no sólo no existen, sino que afectan conceptos fundamentales que informan la economía toda de nuestro régimen constitucional.

Reconózcanse, pues, a los llamados jueces federales las atribuciones a que me refería. Con ello, no se desplaza la garantía directa que la nación se debe y debe a los extranjeros y a las provincias. Y póngase junto a ellos, para participar en las mismas funciones, a los jueces llamados ordinarios, que tienen el mismo origen y están investidos de análogas prerrogativas. Quedaría así centralizada la acción tutelar de la justicia.

La actual dualidad carece de objeto práctico alguno. La reforma, es, a mi modo de ver, oportuna y necesaria.

Oportuna, porque se ha disipado felizmente aquel acre ambiente localista que fué causa de disensiones y de celos. La capital está ya reconocida como el patrimonio común de los argentinos, de tal suerte que la cosa pública en ella pudiera considerarse identificada con la cosa pública de la nación. Los jueces del fuero federal y los del ordinario son remunerados con las rentas nacionales y son responsables ante el mismo tribunal político. Y si no hay, como se ha visto, principio constitucional de orden superior que se oponga, solo resta que el congreso ejercite sin demora la facultad conferida por el art. 100, organizando nuevamente todos los tribunales inferiores con asiento en esta metrópoli, en forma tal que se refleje sobre dichos tribunales aquella unidad indiscutida, sin alterar, por cierto, el orden de las jurisdicciones impuesto por la división del trabajo y por la multiplicidad de las materias.

Necesaria, dije, porque es menester evitar situaciones equívocas y de vacilación que sólo ocasionan desmedro para las autoridades y perjuicio para los intereses de los ciudadanos.

Por de contado, que no me mueven mayormente las dilaciones que suelen ocasionar en el procedimiento las "contiendas" de competencia que a las veces se suscitan entre los magistrados de ambos fueros. Subrayo la palabra contiendas porque descarto en absoluto las articulaciones que a diario, en materia de jurisdicción, promueven los litigantes. Tales articulaciones no quedarían suprimidas por la reforma sino en muy limitado número. Porque ellas perdurarán, aun ante los tribunales afines, mientras exista la mala fe y en tanto que cada uno de dichos tribunales no pueda dedicarse al estudio de la totalidad de los asuntos, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos.

La situaciones a que me refería se provocan debido a la calidad de ciertas leyes que aplican tanto los jueces federales como los ordinarios.

La ley número 10.361, en el art. 77, prescribía categóricamente que todas las acciones emergentes del cumplimiento de la misma debían ventilarse ante la justicia ordinaria de la capital: es decir, autorizaba a esta última para dirimir puntos esencialmente conexos con una ley nacional por excelencia, como es la del papel sellado, y lo hacía sin distingos de ningún genero... Es cierto que la ley número 11006 reforma ese artículo 77, y manda que se ocurra ante la justicia federal o la ordinaria, según la naturaleza del caso...

Pero, cómo interpretar con entera conciencia esta condición? ¿acaso el papel sellado no constituye en todo momento un renglón del cálculo de recursos del presupuesto de la nación? La suprema corte, en decisiones anteriores, estableció que la ley de sellos era mixta, pues participaba de los caracteres de nacional y de local; y a no otra solución pudo arribar el alto tribunal, ante la preexistencia de dos fueros en la capital.

Podría citar otros casos que me sugiere la experiencia diaria; pero, con el indicado, harto queda sin duda perfilada la necesidad de proceder a la solución a que me vengo refiriendo.

La pregunta de la circular que contesto, contiene este otro interrogante: ¿Cuáles son los medios de que debe hacerse uso para dar forma a la unificación?

El congreso tiene en sus carpetas el mensaje y

proyecto de ley que remitiera el poder ejecutivo en junio ocho de mil novecientos nueve, y paréceme que ellos podrían servir de base, siempre que se contemplara el cuadro actual. Por lo demás, he leído publicadas en la prensa diaria, las ilustradas comunicaciones que han dirigido al señor presidente otros magistrados en el mismo sentido. A ellas, en sus lineamientos generales me atengo, por modo que las doy por reproducidas.

Lamentando una vez más haberme visto precisado a expedirme en forma tan concisa, me es grato ofrecer al señor presidente las seguridades de mi más distinguida consideración.

Adolfo Casabal.

**Del juez federal de Santiago del Estero,
doctor J. I. Caceres**

Santiago del Estero, septiembre 15 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados nacional, doctor Roberto Parry.

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente contestando su nota de fecha 10. del corriente recibida en este juzgado recién el día diez del mismo, por cuyo motivo sólo he tenido tiempo para evacuar la contestación a la primera pregunta del interrogatorio referente a la unificación de los fueros federal y ordinario de los tribunales de esa capital, la que remito adjunta a la presente nota.

Saludo al señor presidente con mi consideración distinguida.

J. I. Caceres.

La unificación del fuero federal y ordinario de la capital, haría desaparecer desde luego las controversias originadas con motivo de las contiendas sobre jurisdicción y competencia que a cada momento se producen, y que son una de las tantas fuentes de dilación de los procedimientos y solución de las múlti-

ples cuestiones sujetas a la acción de los tribunales de justicia.

No habría más discusiones sobre si un asunto corresponde a los jueces ordinarios o federales, quedando reducidas las contiendas de competencia en la capital de la república a las que nacen únicamente por razón de la materia entre los distintos jueces creados por la nueva ley que debe sancionarse.

La reforma que se pretende implantar no ofrece dificultad y mucho menos afecta disposición alguna de orden constitucional. Y si estudiamos el origen del establecimiento de la justicia ordinaria llegaremos lógicamente a la conclusión de que ella no tiene razón de existir en la actualidad.

En efecto, la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que pasó a ser capital de la república con motivo de la ley dictada el 27 de septiembre de 1880, la que dejó a cargo de los tribunales de la provincia (artículo 7o.) la administración de justicia de la capital, hasta tanto el congreso proveyera la organización de los tribunales nacionales de la misma, creó de esa manera una jurisdicción nacional como resultado de la federalización del territorio y confirió accidentalmente esta jurisdicción a los tribunales de la provincia, convertidos de esta manera en tribunales nacionales interinos.

Ahora bien, como no se podía concebir la concurrencia de tribunales nacionales y provinciales dentro del distrito federal porque las provincias no ejercen el poder delegado de la nación (artículo 108, constitución nacional), y desde el momento que el congreso legisla de una manera exclusiva para su territorio, dicho estado de cosas no podía durar mucho tiempo, por cuyo motivo y con posterioridad se dictó la ley de organización de dichos tribunales que fué ampliamente discutida en ambas cámaras del congreso y sancionada definitivamente, quedando de esa manera nacionalizada la actual justicia ordinaria que ejercita su actividad en virtud de una jurisdicción propia dentro del distrito federal.

Más adelante su organización sufrió modificaciones por leyes dictadas sucesivamente hasta llegar a su desarrollo y situación actual.

Consignando estos antecedentes, vemos que el establecimiento de la justicia ordinaria, obedeció a la circunstancia de continuar con un orden de cosas anteriormente establecido en la ciudad de Buenos Aires antes de su creación como distrito federal, cuando los tribunales provinciales ejercían su jurisdicción en ma-

terías que eran de su incumbencia independientemente del poder judicial de la nación, ejercida por la suprema corte de justicia y jueces federales que ejercitan su autoridad soberana en virtud de una jurisdicción propia excluyente y exclusiva.

Los jueces ordinarios vinieron a substituir así en virtud de una ley dictada por el congreso a los jueces de la provincia, ejerciendo una autoridad nacional e interviniendo en los mismos asuntos que los antiguos jueces provinciales cuando la ciudad de Buenos Aires era capital de la provincia.

¿Existe actualmente alguna causa que autorice el mantenimiento de esta doble jurisdicción en la capital de la república?

La contestación negativa se impone con todas las dificultades de distinto orden que produce esta dualidad de jurisdicción en el territorio del distrito federal, obstaculizando la marcha de una recta y buena administración de justicia, que requiere, entre una de sus condiciones esenciales, la celeridad en la tramitación de los juicios.

Y esto precisamente no ocurre con la constitución actual de los tribunales de la capital, porque las cuestiones de competencia a que me he referido anteriormente, se producen a cada momento y su resolución definitiva sobre si corresponde el caso al fuero federal u ordinario, hace perder el tiempo suficiente que las partes podrían aprovechar para discutir el fondo de la cuestión que dió lugar a la controversia.

Por otra parte, la constitución nacional ha dividido el gobierno en nacional y provincial de donde nacen también dos clases de jueces que han de administrar justicia con distinta potestad, los primeros con jurisdicción común u ordinaria reservada a las provincias que en su calidad de estados autónomos organizan sus propias instituciones y los segundos con jurisdicción federal creada para mantener el imperio de esa misma constitución, hacer respetar las leyes del congreso y resolver todas las causas en que estén interesados algunos de los poderes delegados por las provincias o en las relaciones jurídicas de éstas o de la nación en su carácter de estado soberano. (Artículos 50., 70., 31, 34, 67, incisos 11, 17 y 27; 94, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 105 y 106 de la constitución nacional.

Esta misma justicia federal cuya competencia nace también por razón de las personas, viene a constituir un privilegio a favor de los extranjeros o de los vecinos de distintas provincias, pero tal circunstancia no tiene razón de existir en la capital de la república des-

de su federalización que trajo como consecuencia la traslación de la justicia provincial a su nueva capital la ciudad de La Plata. De donde se infiere que en el distrito federal no puede haber sino jueces con esta última denominación y que son los únicos creados por la constitución nacional, careciendo por consiguiente de razón de ser la actual justicia del fuero ordinario.

Esto se robustece más aun, cuando al estudiar la constitución de los Estados Unidos que sirvió de modelo a la nuestra, notamos que la jurisdicción por razón de las personas "no fué creada caprichosamente y sin motivo, sino que tiene por origen y fundamento razones de alta trascendencia que el presidente de la corte suprema norteamericana, Mr. Jay, consignó en palabras claras y concisas que han sido repetidas después por los jurisconsultos como la fiel expresión de la política que aconsejó ese género de jurisdicción. Peligro de parcialidad en los jueces de un estado en favor de sus convecinos, cuando litigan con vecinos de otro estado; y cuando la cuestión es, entre ciudadanos y extranjeros, peligro de ser comprometida la responsabilidad de toda la nación por actos de los jueces de una sola de las partes, dando lugar a reclamaciones y complicaciones internacionales, tales son los males que se tuvo en vista evitar por medio de la jurisdicción nacional fundada en la nacionalidad o vecindad de los litigantes". S. C. N. t., 23, página 730.

De acuerdo con este antecedente, se explica perfectamente que en el territorio de cada una de las provincias argentinas concurren la diversidad del fuero y que la justicia nacional sea un privilegio que ampare al extranjero o vecino de distintos estados, para prevenir el peligro de que nos habla el juez Jay, pero como en la capital federal no existe más que una sola jurisdicción, todos los habitantes se encuentran en igualdad de condiciones, desapareciendo por consiguiente la razón del fuero por ese motivo.

De la breve relación de antecedentes consignados, resulta evidente que no hay motivo alguno para que continúe en el distrito federal la justicia ordinaria, debiendo por consiguiente convertirse en federal de acuerdo con una ley que el congreso podría sancionar en virtud de las facultades que le confiere la carta fundamental. Dicha ley conferiría a los nuevos jueces jurisdicción no sólo sobre las cuestiones relativas a la jurisdicción que antes ejercían, sino también a todos los demás asuntos en que correspondía intervenir a la justicia ordinaria suprimida por la nueva ley.

La competencia quedaría circumscripita simplemente

a las cuestiones relativas a la materia que correspondería a los distintos jueces, que serían designados con el nombre de jueces federales en lo civil, comercial, criminal y correccional.

Los tribunales de apelación estarían constituidos por tantas cámaras con la misma denominación, compuestas con el número de miembros que fueran suficientes para la marcha regular de la administración de justicia.

Resumiendo lo anteriormente expuesto, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

Primero: Que la única justicia que nace de la constitución nacional es la federal, y la ordinaria que existe en cada una de las provincias garantida por ella misma.

Segundo: Que la justicia ordinaria de la capital fué creada por una ley del congreso en virtud de las razones a que me he referido.

Tercero: Que no hay razón de ninguna clase que autorice la continuación de ella debiendo dichos tribunales convertirse en federales y

Cuarto: Que el poder ejecutivo nacional, una vez sancionada esa ley, procedería a la designación de los nuevos magistrados de acuerdo con la facultad que le confiere el artículo 86, inciso 5, de la constitución nacional.

Estas son en síntesis las razones que he tenido en vista para aconsejar la unificación del fuero, convirtiendo toda la administración de justicia de la capital en federal.

J. I. Caceres.

Del juez federal de Catamarca, doctor D. Cerezo

Catamarca, septiembre 15 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia, don Roberto Parry.

Buenos Aires.

En contestación a su nota fechada el primero del corriente, remítale mi opinión que es la siguiente:

La historia judicial del país, nos demuestra la con-

veniencia de mantener dividida la justicia en federal o de excepción y simplemente nacional u ordinaria.

La primera como encargada de mantener la observancia de la constitución, tratados con otros países y leyes nacionales estrechamente vinculadas a la seguridad y honor de la nación (artículo 100 de la constitución nacional, leyes del 14 de octubre de 1862, 14 de septiembre de 1863, 3 de septiembre de 1878, 2 de noviembre de 1886, 15 de diciembre de 1891, 18 de septiembre de 1884 y 8 de enero de 1902).

La segunda como encargada de interpretar el derecho común (civil, comercial, penal, minería) y leyes locales dictadas o que dicte el congreso nacional como legislación local.

La federal, con irradiación en toda la república y la nacional sólo en la capital federal y territorios nacionales sometidos al poder inmediato y directo de la nación (artículo 67, incisos 14 y 27 de la constitución nacional).

No se diga que las cuestiones de competencia y la necesidad de uniformar la jurisprudencia, son principios en pugna que bregan por la desaparición de esta división, porque las cuestiones de competencia, con unificación o sin ella, siempre existirán por declinatoria o inhibitoria entre los jueces civiles y comerciales de la capital, provincias y territorios, como también la diversidad de jurisprudencia por el distinto criterio con que muchas veces encaran la misma cuestión los tribunales superiores que funcionan en la república, no ocurriéndoseme pensar en un tribunal único con asiento en la capital, o en cualquier otro punto del territorio, porque ésto importaría la derogación de la ley número 4055, promulgada precisamente porque a la corte suprema de justicia de la nación le resultaba tarea difícil resolver los asuntos elevados en apelación, dentro de los términos establecidos en las leyes respectivas.

Sentada esta premisa, cabe preguntar, cómo pueden subsanarse los inconvenientes que presentan estos dobles fueros sobre cuestiones de competencia y diversidad de jurisprudencia en casos análogos? Sencillamente.

Las cuestiones de competencia se limitarían visiblemente, quitando a la justicia federal el conocimiento de las causas entre argentinos vecinos del lugar en que se suscite el pleito y argentinos de otra provincia, o entre un extranjero y un argentino, en lo que no habría inconveniente, porque ha desaparecido esa supuesta preferencia de los jueces por el vecino de la provincia asiento del juzgado, litigando con un vecino de otra pro-

vincia, o con un extranjero, que sirvió de fundamento a los constituyentes para sancionar la última parte del artículo 100 de la constitución, e inciso 1o., artículo 2o. de la ley número 48. Permitiéndose con esta reforma a los jueces federales, su especialización en las materias de su incumbencia, que ya las tiene bastantes con la constitución, almirantazgo, marítima, leyes aduaneras, militares, electorales, defensa agrícola, impuestos internos, correos y telégrafos, ciudadanía, expropiación, ferrocarrileras en los que afecta a la seguridad del tráfico, etc., amén de los delitos cometidos en lugares sujetos a la exclusiva jurisdicción del gobierno de la nación.

La diversidad de jurisprudencia desaparecería, ampliando el artículo 3o. de la ley número 4055, es decir, reconociéndole a la corte suprema de justicia de la nación, la facultad de conocer en última instancia, por apelación, aquellos casos semejantes resueltos de diverso modo por los tribunales superiores.

Dejemos entonces vivir los tribunales en la forma en que se encuentra dividida su jurisdicción y ocupémonos en corregir los inconvenientes que a diario se producen, unificando el procedimiento federal y ordinario, en un libro donde aparezcan correlacionadas las leyes de aplicación frecuente que actualmente se encuentran aisladas, y que sea el único que rija en la capital y juzgados federales de las provincias.

En lo que a las quiebras se refiere, esta materia escapa a la legislación común, por ser una ley especial dictada por el congreso, y como tal su aplicación corresponde al resorte federal, pero existe la conveniencia de dejar las cosas como están, es decir, dejar las cuestiones que ella encierra a los tribunales ordinarios, precisamente por el fundamento de especialización de aquella, en las ramas de su jurisdicción.

Saludo al señor presidente y por su intermedio a la comisión de justicia que preside, con mi consideración distinguida.

D. Cerezo.

**Del fiscal federal de la capital,
doctor B. García Torres**

Buenos Aires, septiembre 15 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

Tengo el honor de dirigirme al señor diputado acusando recibo de su encuesta-circular de fecha agosto 6 del corriente año, y en contestación a la cual paso a emitir mi opinión sólo sobre las dos primeras preguntas del interrogatorio, debido a que el recargo de mis tareas me imposibilita hacerlo sobre el todo de la consulta, circunstancia que me ha obligado, también, a demorar esta respuesta.

Respecto a la primera pregunta, manifiesto que a mi juicio y mientras se mantenga la actual organización política de la república bajo el sistema de gobierno federal, no habría de ser "constitucional" ni "conveniente" unificar en los mismos jueces las tareas que hoy se ejercen entre los magistrados de la justicia federal y los de la llamada del fuero ordinario de la capital.

No sería "constitucional", por las razones tan acertadamente expuestas ante esa honorable comisión por los señores jueces federales de la capital doctor Saul M. Escobar, de La Plata doctor Clodomiro Zavallía y de Córdoba doctor Julio Echegaray, respuestas a las que me remito por estar en lo pertinente de acuerdo con sus fundamentos. Si en la capital de la república el presidente de la nación es a la vez jefe inmediato y local de ella (constitución art. 86, inc. 3.º), y el congreso ejerce funciones de legislatura estadual (constitución art. 67, inc. 27), preciso es que existan, concordando con estas ficciones legales, jueces para los asuntos nacionales del artículo 100 de la constitución y jueces para el derecho común y la legislación exclusiva al territorio de la capital. Los primeros son, siguiendo la división que Stevens hace de la justicia de Estados Unidos, jueces directos de la constitución y los segundos jueces indirectos de la misma.

No sería "conveniente" la fusión de fueros por una razón de simple división de trabajo. El "derecho federal" abarca hoy innumerables materias y

lo constituyen a más de los códigos comercial, civil y penal para determinados casos, múltiples y variadas leyes. Su aplicación en la práctica de más de 60 años ha originado una copiosa y sabia jurisprudencia, cuyo conocimiento y manejo exige especial dedicación. A su vez el derecho común en sus diversos códigos requiere en los magistrados que lo aplican de ordinario una versación profunda. De ahí que jamás podría redundar en beneficio de la justicia rápida e ilustrada el atribuir a los mismos jueces el conocimiento de causas tan numerosas y tan distintas por su naturaleza y por las leyes aplicables a su decisión.

¿Se concibe que un mismo magistrado pueda con ciencia y conciencia plenas abarcar, por ejemplo, cuestiones de reivindicación, de divorcio, de filiación natural, de sociedades civiles, de separación de bienes matrimoniales, de testamentos, de sucesiones intestadas, de obligaciones contractuales, de concurso de acreedores, de interdictos, de donación, de prenda, de anticresis, de usufructo, de servidumbres, de hipoteca, de tutela, de curatela y otras, y entender a la vez en causas de aduana, de impuestos internos, de excepciones al servicio militar, de cartas de ciudadanía, de demandas de la nación o contra la nación, fundadas en las más variadas leyes y disposiciones administrativas, de ferrocarriles, de obras públicas, de almirantazgo, de jubilaciones civiles y ferroviarias y demás que forman parte del derecho federal? Plantear el interrogante es contestar a mi juicio negativamente.

Y este principio de la división de trabajo deben haberlo tenido muy en cuenta, por cierto, aparte de las razones de orden constitucional, los congresales de 1886 cuando en la ley núm. 1893 de organización integral de los tribunales de la capital de la república han dividido a los jueces en federales, civiles, comerciales, del crimen, correccionales, de instrucción y de menor cuantía. En mi concepto nada exigía, hoy por hoy, alterar esta clasificación de la ley de 1886, ni menos ampliar la jurisdicción federal atribuyéndole el conocimiento de otras causas, pues como lo ha declarado la corte suprema de justicia de la nación aquella jurisdicción es improporcionable, excluyente, excepcional y restrictiva.

Si algunos inconvenientes han podido presentarse en la práctica para la buena tramitación de los litigios, hay que atribuirlo menos a la deficiencia de la ley que a la ignorancia de la ley. El estudio del

derecho federal no se ha cuidado como debía en los programas de nuestras facultades. Recién ahora se nota cierta reacción en esta materia, con lo cual se ha de beneficiar en el futuro la comprensión exacta del porqué de la división de los fueros, ya para contiendas por razón de la materia o ya para causas por razón de las personas.

Saludo al señor diputado con mi más alta consideración.

Benjamin García Torres.

Del diputado nacional, doctor A. de Tomaso

Buenos Aires, agosto 11 de 1920.

Señor doctor R. Parry, presidente de la comisión de justicia.

Señor presidente:

Contesto el cuestionario que me ha sido pasado.

1o. Conviene unificar los fueros.

2o. Creo que no hay necesidad de aumentar las cámaras federales de circuito.

3o. Considero urgente, entre otras reformas procesales, la abolición del secreto del sumario y la mejor reglamentación del procedimiento para los juicios de calumnias e injurias, sobre todo las cometidas por medio de la prensa.

4o. Creo que no debe establecerse la justicia de paz letrada. Es necesario crear cámaras de justicia de paz. Las indicaciones que puedo formular al respecto están contenidas en un amplio proyecto que he entregado al doctor de Andreis, que ha sido redactado consultando oficinas de secretaría de juzgado y de la inspección de justicia.

Saludo muy atentamente al señor presidente.

Antonio de Tomaso.

Del diputado nacional, doctor M. Laurencena

Buenos Aires, agosto 31 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia, doctor R. Parry.

Correspondiendo a su circular del 6 del corriente mes, tengo el agrado de incluirle una breve exposición sobre mis puntos de vista respecto de las reformas que conviene introducir en la organización de la justicia federal y en las leyes que rigen los procedimientos de la misma.

Sintiendo no haber podido prestar una ayuda más eficaz a la comisión de su digna presidencia, porque diversas circunstancias me han impedido dedicar a este asunto el tiempo y la atención que habría deseado, lo saluda con su consideración distinguida su atto. y s. s.

M. Laurencena.

1o. Desaparecida con la federalización de Buenos Aires la razón de orden constitucional que hacía necesaria la dualidad de fueros en su territorio, no tuvo razón de ser su continuación. En consecuencia, pienso que ella debe cesar refundiéndose ambos fueros en el federal.

Esta reforma, sería, por otra parte, de evidente conveniencia, porque haría desaparecer la anarquía de las leyes procesales que hoy se nota, reemplazándolas por un solo código que unificaría el procedimiento con ventaja manifiesta para la dirección de los juicios, que estaría menos expuesta a confusiones en la aplicación de la ley, las que a su vez son ocasionadas a errores y desviaciones perjudiciales para su secuela regular, y para el mismo prestigio de los jueces.

Habría, en una palabra, mayores garantías de acierto en la substanciación de los juicios, y demás está demostrar la importancia que esto tiene, sabido como es, que muchas veces la mayor o menor rapidez y economía en la tramitación de los juicios, y no pocas, el esclarecimiento de la verdad y la

justicia de los fallos, dependen de la forma más o menos ajustada a la ley en que se substancien.

La unificación del procedimiento facilitaría también, sin duda alguna, la uniformidad de la jurisprudencia en lo referente a la interpretación y aplicación de las leyes procesales, y bajo este punto de vista tiene también verdadera importancia la reforma mencionada, siendo como es aquella, una de las fuentes a que jueces y abogados ocurren con más frecuencia, para orientarse en casos dudosos, o para apoyar la doctrina que sostienen sobre la cuestión que se debate.

Yendo más allá en esta materia, paréceme que sería conveniente estudiar también la manera de uniformar las leyes de procedimientos en toda la república, tanto para el fuero nacional como provincial.

Esta idea se enunció hace algún tiempo encontrando favorable acogida en el foro y en la magistratura, pero por distintas circunstancias cayó en olvido después.

Para llegar a este resultado se podía formar un congreso de delegados de la nación y de las provincias, que estudiarían la cuestión y si encontrara conveniente la reforma redactara la ley sometiéndola a la aprobación del congreso y de las legislaturas provinciales.

Este acuerdo entre la nación y las provincias no importa una renuncia de facultades no delegadas por las últimas, puesto que ellas intervendrían en la sanción de la ley que sería aprobada por sus legislaturas, caso idéntico al de adoptar por ley de las mismas, cualquier código o ley de la nación o de otra provincia, que creyese de útil aplicación en la propia.

2o. No veo la conveniencia de extender la jurisdicción de la justicia federal en las provincias a los juicios universales y demás asuntos que corresponden al fuero ordinario según lo dispuesto por la ley número 48 de acuerdo con las prescripciones de la constitución nacional, porque los tribunales de las provincias satisfacen las necesidades de la población y no hay porque suponer que la justicia federal ha de llenar sus funciones con más acierto y laboriosidad que la provincial.

Por otra parte es de temer que el sentimiento de autonomía de los estados provinciales se alarme ante una reforma de esta naturaleza, considerándola como síntoma de una tendencia centralista contraria al espíritu de la constitución que en su art. inc. 11., dice, "que la aplicación de los códigos civil, comercial, penal y de minería corresponden a los tribunales na-

cionales y provinciales, según que las personas o las cosas caigan bajo sus respectivas jurisdicciones", asal-tándome también la duda de si aquella podrá armonizarse con esa prescripción constitucional que así deslinda la competencia de la justicia federal y provincial.

3o. En mi opinión, por ahora no sería necesario aumentar las cámaras de circuito, sino en la provincia de Buenos Aires, donde la única que hoy existe debe encontrarse excesivamente recargada de trabajo por el extenso radio que abarca su jurisdicción territorial, y por la población, comercio e industrias, en ella comprendidos, que forzosamente han de determinar un intenso movimiento judicial, máxime cuando en los territorios nacionales incluidos en aquella, no existe más que la justicia nacional que entiende en toda clase de asuntos.

Las otras cámaras pueden atender sin dificultad los asuntos que van en apelación ante ellas, y algunas como la del Paraná, muy holgadamente.

Por razón del trabajo no se justificaría, pues, por ahora al menos, la creación de nuevas cámaras que exigirían un aumento considerable de gastos, cuando tantos servicios públicos importantísimos reclaman con verdadero apremio mejoras y ampliaciones urgentes, que no pueden hacerse por la situación angustiosa de las finanzas nacionales, que ha inducido al poder ejecutivo a presentar, por una parte el proyecto de empréstito conocido, para cubrir parte de la enorme deuda flotante que pesa sobre el erario público, y por otra el impuesto a la renta en todo el territorio de la nación, que sólo en casos excepcionalmente graves para aquellas, y cuando se han agotado todos los recursos ordinarios, puede crearse sin violar la constitución.

Menos se justificaría por razones de economía o de comodidad de los interesados en los juicios. Lo primero porque con muy raras excepciones ellos se hacen representar por procuraciones, y por consiguiente muy poco puede influir en sus gastos que el tribunal se encuentre en el lugar de su residencia o más o menos distante de ella. Lo segundo porque no interviniendo personalmente y debiendo por lo tanto enterarse de la marcha del juicio por informes de sus representantes, en nada puede afectarles la distancia con la facilidad de comunicaciones que hoy existen, máxime si se tiene en cuenta que en las apelaciones los trámites son muy limitados.

4o. Considero conveniente reformar la ley sobre regulación de honorarios que hoy está sujeta a trá-

mites complicados y morosos, sin ningún beneficio para los interesados.

Al efecto podrían suprimirse los artículos de la ley 3094, del 2o. en adelante, reemplazándolo por el siguiente u otro análogo:

"Los jueces federales y letrados y los tribunales de apelación, regularán los honorarios de los abogados, procuradores, fiscales, defensores y jueces ad hoc, y peritos que intervinieran en los juicios, al dictar sentencia en los contenciosos, y en los sucesorios y concursos antes de practicarse la liquidación. Si en los sucesorios los interesados resuelven separarse del juicio antes de esa oportunidad, por ser todos mayores de edad, cuando ellos o su abogado o procurador lo soliciten".

"De la regulación de 1a. instancia podrá apelarse para ante las cámaras de apelación que resolverán sin ningún trámite el recurso".

"Cuando por la naturaleza del asunto pueda apelarse de las sentencias de las cámaras de apelación para la suprema corte, será apelable también la regulación que aquellas hagan de los trabajos realizados ante las mismas, pero no en los otros casos".

La irrevocabilidad de las regulaciones que practicarán las cámaras cuando no hubiera apelación para la corte, no es un peligro, pues si bien es posible que en algún caso ellas no fueran del todo justas por error de los jueces, esa contingencia—que por otra parte puede ocurrir también en la otra instancia—queda compensada con la más rápida terminación del incidente, cuya morosidad puede ser en muchos casos motivo de mayores perjuicios que el resultante de aquel error, aun en el supuesto de que fuera reparada por el superior.

5o. Pienso que es urgente una revisión de las leyes procesales para introducir las reformas aconsejadas por la doctrina y la práctica, pero esto debe ser materia de un estudio detenido que sólo una comisión de jurisconsultos nombrados especialmente para ese objeto, podría realizar con éxito.

Creo, si que la nueva ley debe tender a simplificar en lo posible los trámites, y a hacer menos rígida su aplicación por los jueces; porque la multiplicidad de aquellos y las dificultades que muchas veces se presentan para practicarlos, puede dar lugar a que un litigante de mala fe impida que los hechos se prueben cumplidamente, y a que la verdad de las cosas no aparezca con claridad; lo segundo, porque sobre la du-

da de que por esa u otra circunstancia no cupiera un pronunciamiento estrictamente legal en un sentido u otro, debe prevalecer la convicción moral que muchas veces ofrece mayores seguridades de un fallo justiciero que la misma prueba legal.

M. Laurencena.

Del diputado nacional, doctor M. Mora y Araujo

Buenos Aires, septiembre 13 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

Presente.

Distinguido señor presidente:

Respondiendo a su atenta comunicación de fecha 10. del corriente, me es grato expresarle en forma sintética la opinión que se ha dignado requerirme sobre las importantes cuestiones a que ella se refiere, observando el orden en que vienen propuestas.

Primera cuestión: Pienso que con la federalización de la ciudad de Buenos Aires como capital de la nación, han desaparecido las razones de orden político y social que antes de producirse ese hecho que selló el largo proceso de la unificación nacional, pudieron justificar la diversidad de fueros en los tribunales de la misma.

Como consecuencia de ese hecho, en la capital no se explica la existencia de otros tribunales que los que emanan del poder federal, ni otro fuero que el fuero federal.

Más aún; pienso que en las provincias no deben existir más tribunales que los creados en virtud de sus respectivas constituciones. En ellas ya no tienen razón de ser esos juzgados federales, que no hacen sino complicar el régimen judicial, desde que han adquirido como estados el grado de cultura política y perfeccionamiento institucional que las coloca en condiciones de ofrecer las garantías de sana e ilustrada justicia que en tiempos lejanos se creyó — acaso con funda-

mento — que el gobierno federal era el único que podía ofrecer.

El problema se resolvería reformando la ley orgánica de los tribunales.

Segunda cuestión: Quedaría resuelta con la primera.

Tercera cuestión: Desaparecería, desde que se suprimiesen los juzgados federales de las provincias.

Pero si se resolviese mantenerlos, considero muy conveniente — podría decir indispensable — aumentar las cámaras de circuito, porque reduciendo sus respectivas jurisdicciones territoriales, llenarían con más eficacia su misión.

Cuarta cuestión: Pienso que es menester:

1o. — Unificar el procedimiento judicial en la república.

2o. — Reformar el procedimiento actual, armonizándolo con los progresos sociales y jurídicos de la época, de acuerdo con las reformas implantadas en otros países de avanzada cultura.

A estos efectos, se podría invitar a las provincias a un congreso interprovincial que se abocara el estudio de la cuestión y proyectase la reforma consultando el régimen de su autonomía. Cabe recordar a este respecto la iniciativa del gobernador de Córdoba, doctor Cárcano, que desgraciadamente no prosperó; pero que tomada por el gobierno nacional, alcanzaría seguramente un resultado más propicio.

Saludo al señor presidente con mi más distinguida consideración.

M. Mora y Araujo.

Del diputado nacional, doctor E. J. Míguez

Octubre 7 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados, doctor Roberto Parry.

Cumplo con emitir la opinión que se ha dignado pedirme en su att. nota del 6 de agosto ppdo.:

I

No conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital:

1o. Por las razones que di al tiempo de fundar el proyecto de ley creando el jurado de enjuiciamiento: disminuir la tarea judicial del honorable congreso, que necesita todo su tiempo para legislar.

2o. Porque conviene fomentar la especialidad en los magistrados, o limitar en lo posible la materia sobre la que están llamados a juzgar: la división del trabajo, que tiene semejanza con la división de los fueros, asegura la rapidez y el perfeccionamiento de la obra compleja.

3o. Porque la mente de los constituyentes, ha sido equiparar la capital a cada uno de los estados particulares. Así resulta de su representación en las dos cámaras, y de convertir al congreso en legislatura local. Y, siendo así, no hay razón para unificar los fueros en la capital, marcando una diferencia básica con la situación obligada de las provincias argentinas.

II

No conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos:

1o. Porque el art. 100 de la constitución especifica con toda claridad, cuáles son las causas propias del fuero federal, y cuida de salvar especialmente las jurisdicciones locales, a que se refiere el inciso 11 del artículo 67; de tal manera que, en materia de aplicación de códigos, sólo pueden apartarse de la vía ordinaria o eludir el conocimiento de los jueces provinciales, los pleitos entre vecinos de diferentes provincias y los que se traben entre nacionales y extranjeros.

2o. Porque, aun cuando así no ruefa, de acuerdo con lo ya expuesto, estimo que conviene fomentar la especialización sin ampliar la materia.

III

Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito. Y, como tuve oportunidad de de-

cirlo, cuando se trató del juzgado en proyecto para Mercedes, entiendo que dificulta la marcha de la justicia, el hecho de que el tribunal de apelación esté lejos del asiento de los juzgados.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires y territorios nacionales, urge el establecimiento de una cámara federal de circuito en la ciudad de Bahía Blanca.

IV

Considero urgente unificar y modernizar las leyes de procedimientos federales, para facilitar su conocimiento y aplicabilidad. Esa es la gran tarea verdaderamente patriótica que la comisión de justicia debe afrontar.

Saludo al señor presidente con mi consideración más distinguida.

E. J. Miguez.

Del profesor de la facultad de derecho, doctor R. Wilmart

Buenos Aires, 15 de agosto de 1920.

Señor doctor don Roberto Parry.

Cámara de diputados

Tengo el honor de contestar sus cinco preguntas que recibí hace tres días.

1. *¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital? ¿Qué solución aconseja para resolver este problema?*

No veo ninguna conveniencia en la reunión de los dos fueros indicados, en unos mismos juzgados de la capital. Son pocos los abogados que tienen preparación en las materias federales y, si se reunieran, la mayor parte de los actuales jueces y camaristas de la capital se verían en dificultades, de las que no saldrían en forma satisfactoria. No veo ninguna conveniencia en suprimir la separación de esos fueros. Cuando un abogado de la capital inicia una demanda, debe, como en una provincia, estudiar si

ella es del fuero común o del federal para ir al juez que corresponde; si no sabe o duda, le parecerá cómodo, "por el momento y superficialmente," el no averiguar ese punto; pero si son muchos los abogados que tienen dudas al respecto y muchos los jueces que deseen no entrar por de pronto a ese terreno ¡cuánto peligro de formar expedientes bo-drios!

2. *¿Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?*

En los Estados Unidos el derecho privado, comprendido ahí en la denominación de "common law", es herencia de Inglaterra, en la cual son herederos "separadamente" cada estado particular y la confederación; las costumbres nuevas y las leyes dictadas por las legislaturas nacen en ellos independientemente y así hay diferencias entre las "leyes de insolvencia" de unos y otros estados particulares. Los constituyentes temieron que algún estado particular dictara disposiciones que, como sucede en algunas naciones, dieran privilegios, en caso de quiebra, a los acreedores domiciliados en él en detrimento de los residentes en otros estados y aun temieron que los jueces de algún "estado" particular entendieran su "common law" como que contuviera tales privilegios. Por eso la constitución de los Estados Unidos acordó poderes al congreso para dictar una "ley de quiebras" para todo el país. Varias veces la ha dictado y abrogado alternativamente: cuando impera una, la aplican los jueces federales (de distrito, de circuito), lo que es natural; y, cuando se abroga, cada estado particular por medio de sus jueces comunes, vuelve a aplicar su derecho sobre insolvencia como parte de su "common law".

Nuestra constitución da al congreso poderes para dictar los códigos (civil, comercial, penal, minería). Mientras el de comercio no hubiese sido sancionado cabía que el congreso hubiese dictado, como ley federal, una ley de quiebra. Pero, dictado ese código para toda la república, desaparece del todo para nosotros el peligro permanente que para su país, vieron los constituyentes estadounidenses. Hoy, pues, esa facultad no tiene objeto, puesto que nuestro código de comercio contiene una legislación completa sobre quiebras, parte esa del código de comercio que puede reformarse sólo por ley del congreso, como cualquiera otra parte de dicho u otro código.

Con todo, si el congreso optase hoy por dictar una ley de quiebras en el sentido del inciso 12 del artículo 67 de la constitución, en vez de tratar la materia dentro del código de comercio, conforme al inciso 11, tocaría a los jueces federales aplicarla "ratione materiæ"; pero no habría en ello conveniencia y sí confusión, tanto más que nuestro derecho admite un concurso civil, bastante análogo al comercial.

Otros asuntos. No veo ninguno.

3. *¿Conviene aumentar el número de las cámaras de circuito?*

No; varias de ellas tienen poco trabajo. Y, dado nuestro sistema de vías férreas que ponen casi a cada capital de provincia en fácil contacto con la de la nación (donde hay abogados de todas las provincias), sería mejor para casi todas las provincias, que todas las cámaras federales de apelación estuvieran en la capital federal; y cuatro bastarían.

4. *¿Qué reformas procesales considera urgentes?*

Muchas, pero indicaré sólo dos:

1o. Establecer el jurado.

2o. Indicar, por medio de una fórmula general, el nombramiento de arbitradores en cualquier forma de juicio, siempre que haya cuentas complicadas o puntos que requieran conocimientos especiales no comprendidos en los jurídicos o en los generales, porque no es justicia sino palo de ciego el encargar a un juez la decisión de una causa extraña a sus conocimientos.

Se trata de garantías, la primera escrita en la constitución y la otra en el reglamento de justicia de 1811, pero también implícitamente reconocida por ella en su artículo 33. El código de procedimientos que rige hoy en la capital la reconoce en su artículo 557, porque, en ese sistema de pequeñas divisiones no sometidas a una división general y sin subdivisiones, pareció ser el lugar donde fuera más adecuado. Dicho artículo 557, dice: "Siempre que las liquidaciones o cuentas a que haya de procederse sean muy complicadas y de lenta y difícil justificación o requieran conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de peritos, amigables compondores".

Naturalmente si la misma complicación y difícil justificación de cuentas o la necesidad de conocimientos especiales se presenta en otra clase o en otro período de juicio, hay la misma razón y la expresión "Siempre que", en lugar de un simple "si"

lo indica. Empero un fallo de una cámara de la capital, interpretando mecánicamente la ubicación y sin percibir su carácter de "derechos y garantías", se negó a aplicarla en la parte del juicio ordinario anterior a la sentencia y hasta dijo que el código procesal había derogado (¿para la capital?) esa garantía del reglamento del año 1811, que es ley nacional en la más amplia acepción de la palabra.

Ese artículo figura en el título XV "De la ejecución de las sentencias", que, además de la ejecución, contiene la tramitación de las liquidaciones que tienen lugar después de aquellas sentencias que aquel las dejan para después y que constituyen como una segunda fase del juicio propiamente dicho. Puesto que siguen la deliberación, las pruebas y los pronunciamientos que determinan el derecho de las partes; son liquidaciones que determinan la medida de los derechos. Si la trabazón de algún juicio ordinario implica unas cuentas sobre las que se abre la prueba y el juez ya ve que son complicadas y de difícil prueba o que la materia exige conocimientos "especiales" ¿por qué no se nombraría ya arbitadores como antes que el legislador porteño colocara la garantía constitucional en ese recodo? La expresión "siempre que" y la otra "liquidaciones o cuentas", que no son (éstas) "liquidaciones", demuestra que ese fallo es tan apartado del texto y su letra como de los principios.

Agregaré otra reforma, de carácter general. Los jueces bien versados en las diversas ramas del derecho se caracterizan por una interpretación superior y libre, como corresponde a un magistrado que, al fallar, ejerce la soberanía popular y no es un mero súbdito del poder legislativo. Los jueces de poca preparación y los abogados que proceden, como si la ley escrita fuese todo el derecho y creen que el juez es mero aplicador textual del derecho escrito, se ciñen a la letra muerta de un artículo tomado aisladamente o a una palabra de él, lo que conduce siempre a injusticias. Convendría que una disposición declarase que el espíritu de justicia, la ciencia jurídica y las ciencias sociales de que ésa es un ramo, son "per se" parte de nuestro derecho y que los textos deben leerse bajo las dos luces de la conciencia y de la ciencia. El jurisconsulto de verdad no necesita esa disposición, pero muchos jueces y abogados, de corto saber y con la consiguiente timidez, aplican a menudo la letra de la ley como "palo de ciego"; prefieren equivocarse diez veces con una

palabra que creen adecuada y no una vez basándose en la ciencia y en la conciencia.

Dispuesto a explicar o ampliar verbalmente, saluda con alta consideración.

s. a. c. y s.

R. Wilmart.

Del exsenador doctor P. Olacheca y Alcorta

Buenos Aires, agosto 15 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor don Roberto Parry.

El día 12 del corriente, llegó a mis manos la nota del señor presidente, en la que se me pide mi opinión sobre los distintos tópicos que abarca aquella comunicación, relativos todos a la organización de la justicia federal y de la de menor cuantía de la capital. Ante todo, agradezco debidamente la honrosa distinción de que se ha dignado hacerme objeto, y paso desde luego a exponer mis ideas sobre los distintos tópicos abarcados.

La cuestión de la unificación del fuero federal y ordinario, ha sido planteada y discutida en diversas oportunidades en el honorable congreso, sin que se haya llegado aún a solución alguna. Sin haber participado en esas discusiones, por no formar parte entonces del poder legislativo, he pensado siempre que dadas las razones de orden institucional y político (de política interna y exterior) que aconsejan la creación de este fuero de excepción que se denomina federal, hay conveniencia en mantener la línea divisoria que la misma carta fundamental del país establece, creando la sabia institución de la justicia federal y la ordinaria de la capital, como en las demás provincias.

Los fundamentos, relativos al equilibrio de los poderes, así nacionales como provinciales, las garantías de orden externo en cuanto al fuero federal, en cierto modo privilegiado para los extranjeros, éstas y otras que derivan de éstas, deben pesar en el ánimo de los legisladores y aconsejarles mantener siempre la justicia federal y la ordinaria de la capital.

Mantenidos separados, los fueros federal y ordinario, la ampliación de los casos que caigan bajo el primero, sólo debe y puede hacerse dentro de los límites fijados por la misma constitución, al enumerar en sus artículos 100 y 101 las causas de jurisdicción federal.

Respecto de las cámaras de apelación, deseo que conste que desde 1882, siendo juez federal de Santiago del Estero, he sido su constante gestor en mis memorias del juzgado federal de aquella sección, que se hallan incluídas en las memorias de los respectivos ministros de justicia de la nación. No sólo aducía razones para la creación de una cámara que recién se verificó en 1902, sino que llegué a formular un proyecto de ley que se halla inserto en la memoria del ministerio de justicia correspondiente al año 1894. Pensé entonces y sigo pensando ahora que la ubicación más conveniente para estas cámaras era la siguiente: Una con asiento en Tucumán que comprendería las provincias de Santiago, Salta, Jujuy y Tucumán; otra en Córdoba que abarcaría las provincias de Catamarca, La Rioja y Córdoba; otra en Mendoza que comprendería las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza; y otra en la capital, o aún dos, para las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Es verdad que ahora existen la de Paraná y la del Rosario; pero es objetable su actual ubicación por razones que no escaparán a los señores de la comisión y que no creo necesario enumerar.

Esta acción descentralizadora de la justicia federal puede ampliarse a medida que las exigencias del buen servicio público lo exijan; pero debe serlo sólo a base de las estadísticas respectivas.

En materia de reformas procesales, habría muchas que enumerar; pero me parece que como lo sostuve en 1895, habría conveniencia en ensayar la creación del juicio por jurados en la capital, con las limitaciones que las circunstancias y el medio ambiente impongan. Dada la prescripción imperativa del artículo 24 de la carta fundamental, pienso que el honorable congreso está en retardo en esta materia.

Por lo demás, es obvio que los códigos de procedimiento, en materia civil, comercial y criminal, vigentes, tienen deficiencias y vacíos que convendría llenar, sancionando, aunque más no fuera que por vía de ensayo, alguno de los varios proyectos pendientes al respecto, en ambas cámaras. No correspondería a una comunicación del carácter de la

presente, descender al análisis de todas y cada una de esas reformas que, por otra parte son más o menos conocidas.

Creiendo dejar así llenados los objetos del pedido del señor presidente de la comisión de justicia y reiterando mi reconocimiento por la distinción recibida, me es grato saludar al señor presidente con toda consideración.

P. Olacchca y Alcorta.

Del doctor Rodolfo Rivarola

Buenos Aires, agosto 16 de 1920.

Señor secretario de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados.

He recibido la circular de fecha 6 del corriente, pidiéndome por encargo de la comisión de justicia, opinión sobre el cuestionario que la misma expresa.

Tengo el agrado de remitirle, con destino a la comisión, los siguientes trabajos que responden al cuestionario, a saber:

1o. Un ejemplar del folleto titulado "La justicia de la capital. Unificación de los fueros federal y ordinario", que responde afirmativamente a la primera cuestión, e implícitamente a la segunda. El mismo folleto explica el origen de este trabajo.

2o. Un proyecto para reforma de recursos ante la corte suprema, inserto en la revista Argentina de Ciencias Políticas, tomo X, número 58, página 428.

3o. Un anteproyecto de administración de justicia penal para la provincia de Buenos Aires, en que se prepara el establecimiento de la oralidad del juicio que se estableció después por el código de procedimientos. (Revista Argentina de Ciencias Políticas, tomo I, número 3, página 428). Se advierte cuanta mayor facilidad habría en organizar la justicia de la capital que la justicia de la provincia. No dispongo de un ejemplar del proyecto definitivo, elaborado con el doctor de la Colina. Tampoco dispongo de un ejemplar de "La justicia en lo criminal"; pero debe hallarse en la biblioteca del congreso.

Las publicaciones que acompaño responden a la primera, segunda y cuarta pregunta.

En cuanto a la tercera, no podría opinar sin datos estadísticos, de que carezco ahora.

Me será siempre grato recibir nuevas órdenes de la comisión.

Saludo a usted muy atentamente.

Rodolfo Rivarola.

LA JUSTICIA DE LA CAPITAL

Unificación de los fueros federal y ordinario

1. ¿Existe alguna regla o principio de la constitución argentina, que impida reunir en una sola administración de justicia en la capital de la república, los tribunales que hoy funcionan como justicia federal y justicia común ordinaria de la misma?

Se discute la constitucionalidad

1. Lo que en verdad se discute, es la "constitucionalidad" de la reunión llamada justicia "federal" de la capital, con la llamada justicia ordinaria de la misma, en un solo cuerpo orgánico de administración de justicia.

La facultad del congreso para dictar leyes para toda la nación, o solo para los territorios y el distrito de la capital, no tiene más limitaciones que las que derivan de la constitución. No podrá decirse, pues, que el congreso no puede organizar una sola justicia para el distrito de la capital, y que debe mantener dos fueros diversos, si la restricción no resulta de algún texto de la constitución, del espíritu de la misma o de la naturaleza del régimen federativo.

Textos de la constitución

2. Conviene referirnos, en primer lugar, a los textos de la constitución, en que aparezca alguna disposición correlativa con el punto que tratamos.

a) El artículo 34 de la constitución dice: "los jueces de las cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia".

Admitamos que se entiende, en el texto, por "cortes", los tribunales y toda clase de jueces federales. Cor-

esta disposición "además de consignar el principio de la separación entre los gobiernos de provincia y el de la nación, se corrigió un grave abuso, porque durante el gobierno de confederación, en el Paraná, los jueces federales estaban en la corte de justicia de la provincia de Entre Ríos; esto trastornaba todo el orden judicial, y la reforma de 1860 agregó el artículo 34". (J. V. González, "Manual de la constitución", página 632).

La interpretación textual del artículo 34, y el antecedente que lo motivó, simplifican y aclaran inmediatamente toda la cuestión. Toda restricción es de interpretación limitada: constituye una excepción que no puede extenderse a más de lo que expresa. La incompatibilidad "única" es la de ser al mismo tiempo juez federal y juez de provincia. No la habría de reunir las dos jurisdicciones, si es que pudieran coexistir en la capital, en unas mismas personas; o sea, en declarar que los mismos jueces conocerán de los asuntos del fuero federal y del fuero ordinario; pues así, en ningún caso son jueces de provincia.

Legislación exclusiva

3. b) El artículo 67, inciso 14, faculta al congreso para "determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias". Esta disposición es concordante con la del inciso 27, que le autoriza para "ejercer una "legislación exclusiva" en todo el territorio de la capital de la nación".

Esta atribución, por la energía del texto que la consagra, no tiene otra limitación que la que resulta de los fines de la constitución, enunciados en las "Declaraciones, derechos y garantías", para la realización de los cuales se ha ordenado las "Autoridades de la nación".

Alguna vez se ha dicho que, en la ejecución de estas atribuciones, el congreso obra como legislatura "local"; pero este es un error común. Más adelante lo demostraré, estableciendo que en tal caso el congreso obra como poder legislativo de la nación.

Por ahora nos basta observar que, de los términos transcritos, no aparece la restricción constitucional que buscamos.

El poder judicial de la nación

4. c) El artículo 94 dice: "El poder judicial de la nación será ejercido por una corte suprema de justicia y por los demás "tribunales inferiores" que el congreso estableciere en el territorio de la nación".

De este artículo, y de los artículos 45 y 96 que repiten las palabras "tribunales inferiores de la nación", podrá resultar la duda sobre si los jueces de la capital son jueces de la constitución o jueces instituidos por una ley del congreso en ejercicio de sus poderes de legislación "exclusiva" sobre el distrito de la capital, y si, en este caso, estarán o no amparados por las garantías de estabilidad e independencia asegurada a los jueces federales. Pero esta no es la cuestión. La ley que atribuya a los jueces del distrito de la capital jurisdicción general para todos los asuntos hoy repartidos en los dos fueros, no podrá entenderse en el sentido de que afecte aquellas garantías de estabilidad e independencia, si por la constitución las tienen".

Artículo 100 y 101 de la constitución

5. d) El artículo 100 determina los casos de competencia de la corte suprema y de los "tribunales inferiores de la nación". El artículo 101 establece todas las seguridades necesarias para que las causas a que se refiere el artículo 100, lleguen hasta la suprema corte, sea originariamente, sea por apelación.

Estos artículos separan las causas del fuero federal de las de jurisdicción provincial. Es una demarcación precisa de aquello que por razones fundamentales que luego podrán ser explicadas, no puede caer nunca bajo la jurisdicción "provincial", pero que nada impide que permanezcan bajo una jurisdicción de tribunales inferiores establecidos por la nación.

Fallo del doctor Veyga

6. Esta materia ha sido tratada en un fallo del doctor Veyga, juez del crimen de la capital, en un caso de aplicación de la ley de elecciones nacionales, con razones que merecen toda atención y están abonadas por antecedentes autorizados.

Dice el fallo a que me refiero:

"La suprema corte de justicia nacional ha establecido, es cierto, una diferencia entre los jueces federales, por una parte y los jueces de la capital y de los territorios nacionales, por la otra (Fallos, tomo XXX,

pág. 112); pero, en esa misma decisión reconoce que tanto los unos como los otros son *tribunales de la nación*, pues en su considerando segundo dice: "La jurisdicción de los jueces federales difiere substancialmente de la de los jueces del territorio de la capital, no obstante *ser unos y otros nacionales* y proceder su nombramiento del gobierno de la nación". No cabe dudar, entonces, que el congreso puede atribuir a la justicia ordinaria local de la capital de la república y a la de los territorios nacionales, la decisión de causas que, según el artículo 100 de la constitución, competen a los tribunales inferiores de la nación. Así lo ha hecho, por lo demás, con los jueces letrados de territorio, sin que se haya declarado nulo el precepto pertinente. El artículo 36 de la ley número 1532 dispone, en efecto: "Los jueces letrados conocerán y resolverán en las causas que en la ley citada en el artículo precedente (ley de diciembre 15 de 1881 sobre organización de los tribunales de la capital), se atribuyen a los jueces en lo civil, comercial, correccional y criminal, y también en las que correspondan al juez federal."

En la capital de la república, en los territorios nacionales y en todos aquellos lugares en que la nación tiene única y exclusiva jurisdicción, los jueces son *todos nacionales*, y no hay jueces federales en el sentido de la constitución, porque falta para ellos la razón de su institución. Las cuestiones entre nacionales y extranjeros, entre vecinos de la capital y de alguna provincia, están todas bajo la garantía de la autoridad de la nación, que ampara igualmente a todos, llámese federal o de la capital el juez. ¿A qué responde, diráse, entonces, la organización de los tribunales de la capital, la creación de los jueces federales, de jueces letrados de varias cortes de justicia? Simplemente a la necesidad de hacer fácil la expedición de los negocios de una ciudad populosa, y posible el ejercicio de las arduas y delicadas funciones de la corte suprema". (Tomo citado, pág. 122), (Fallo del juez doctor Veyga, en la causa seguida por don Enrique Alcántara contra don Miguel Grandoli).

El congreso como legislatura local

7. He dicho antes que es un error que no tiene más autoridad que la que deriva de ser un error común, el de haber supuesto que el congreso, al legislar para el distrito de la capital, *es una legislatura local*, y en consecuencia, la capital un *estado* particular en el gobierno federal. Un autor muy distinguido de derecho

constitucional dice que "el congreso viene a ser la *legislatura de la capital organizada en el gobierno*"; pero, advirtiendo quizás que no era muy exacto el concepto, por más que se halle admitido, agrega: *que es el mismo de la nación*.

Lo único que, exclusivamente, puede decirse, es que el congreso legisla para la capital como *poder legislativo de la nación; no como legislatura local*.

La atribución del congreso para ejercer una legislación exclusiva, corresponde a la sección "Poder legislativo" y a la disposición general del artículo 36: "Un congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la nación y otra de senadores de las provincias y de la capital, será investido del *poder legislativo de la nación*."

El texto no autoriza, pues, la suposición ni la ficción de una legislatura local, ni acto alguno de los enumerados en el artículo 67, que el congreso obre en otra calidad que la del poder legislativo *de la nación*.

La ficción es, por otra parte, contraria a los principios del gobierno representativo. Supone una legislatura local, emanada del voto de entidades o colectividades extrañas a los mismos representados. No se concibe cómo los diputados y senadores de las provincias podrían decirse representantes *locales* del pueblo de la capital, que no ha votado por ellos. Pero, si se renuncia a la ficción y se vuelve a la realidad, se reconocerá en seguida que el congreso, como único poder legislativo *de la nación*, legisla *para toda la nación* y para cualquiera de sus partes, en materia de legislación concurrente con las provincias unas veces, exclusiva y excluyente otras. Los ciudadanos de la capital tienen sus representantes en el congreso, en tanto aquellos son habitantes de la nación, en un territorio de la nación, bajo la jurisdicción exclusiva del gobierno de la nación.

Explicación de Story

8. Si en este punto, como en tantos otros de la constitución argentina, se invocan los antecedentes de la constitución de los Estados Unidos de Norte América, conviene conocer el texto análogo de esta última constitución y la explicación de sus intérpretes más autorizados.

Dice el texto de la sección 8a. del artículo 10.: "Ejercer legislación exclusiva en toda clase de casos en el distrito que por cesión de los estados particulares y aceptación del congreso, sea el asiento del congreso de los Estados Unidos, etc."

Dice Story. ("Comentaries on the Constitution of the United States" No. 1229): "En la enumeración de los poderes del congreso, encontramos que la jurisdicción exclusiva que ejerce sobre tal distrito, tiene que ser en el asiento del gobierno. *Ese poder*, como otros que son especificados, está *conferido al congreso como legislatura de la Unión*, porque si se le despoja de este carácter no puede poseerlo. *En ningún otro carácter puede ser ejercido*. Legislando para el distrito conserva necesariamente el carácter de *legislatura de la Unión*, porque es solamente en ese carácter que la constitución le confiere el poder de legislación exclusiva. No es necesario insistir sobre este punto. La segunda cláusula del artículo 6o. declara que esta constitución y las leyes de los Estados Unidos que sean hechas en consecuencia, deben ser la ley suprema del país; la cláusula que acuerda la jurisdicción exclusiva es, inquestionablemente, una parte de la constitución, y como tal obliga a los Estados Unidos".

Espíritu de la constitución y naturaleza del régimen federativo

9. Del espíritu de la constitución y de la naturaleza del régimen federativo no puede seguirse ninguna conclusión favorable a la subsistencia de una justicia *federal* del distrito de la capital. La justicia federal se concibe como una justicia de excepción, donde tiene razón de existir otra justicia territorial para la aplicación de las leyes en general. Si nos detuviéramos en los orígenes y fundamentos dados para el establecimiento de la justicia federal en los Estados Unidos, aplicados a nuestra organización constitucional, advertiríamos que aquella excepción es lógicamente imposible donde la soberanía, fuente de las leyes aplicables por los jueces, es una sola: la nación.

El procurador de la nación, doctor don Eduardo Costa, lo expresó con la mayor exactitud en la vista citada por el doctor Veyga: "en la capital, y en todos aquellos lugares en que la nación ejerce jurisdicción exclusiva, *no hay sino una sola justicia*, una sola que será desempeñada por aquellos jueces y en aquellas formas que el congreso estableciere". Y con referencia al caso en que disputaban competencia un juez *federal* y un juez *ordinario*, agregaba: "Es, pues, inoficioso, pretender deducir de qué parte está el mejor derecho en este caso, de la diversa naturaleza que atribuye a los jueces que en la capital dividen entre sí la jurisdicción, que nace de la soberanía *única y exclusiva* de la *nación*, en los territorios en que ejerce única y ex-

clusiva autoridad". (Fallos, segunda serie, tomo 21, página 123).

Es preciso reconocer y declarar sinceramente, que nuestra corte suprema de justicia, al apoyarse en las explicaciones de Story, para no aceptar las conclusiones del procurador doctor Costa, no estuvo acertada. Las citas de Story que se encuentran en el fallo de la corte (que corresponden a los párrafos 1325 y 1636, no indicados) son favorables a la conclusión del procurador doctor Costa. Story solo considera el carácter respectivo de lo que llamamos *tribunales federales* y de los *tribunales de territorio*; pero tiene en cuenta que en los territorios, *inclusive el de Colombia*, no existen simultáneamente tribunales federales y tribunales de territorio, pues allí no parece haberse sospechado que fuera necesaria la instalación de tribunales *federales* dentro de territorios *nacionales*; como aquí se ha hecho para la capital.

Discusión en el congreso de 1881

10. Es sabido que esta materia fué discutida en el congreso de 1881 al tratarse la ley de organización de tribunales de la capital.

No es siempre fácil que la improvisación, por lo menos en la forma de una discusión parlamentaria, responda exactamente a lo que con más reposo y más estudio podrían haber pensado los mismos oradores que tomaron parte en ella.

Esta observación se justifica si, después de un estudio detenido de la cuestión, se recorre la discusión de 1881.

En el senado (Diario de Sesiones, pág. 471 y sig.) el doctor del Valle estableció, conforme a la doctrina norteamericana y a los textos análogos de la constitución argentina, que había "una distinción precisa entre el concepto de *jueces inferiores* de que habla en diversos artículos la constitución; y los jueces de los territorios y de la capital, establecidos por ley del congreso, en virtud de poderes de legislación *especial o exclusiva*". El doctor del Valle precisó con toda exactitud la distinción, pero no advirtió que, por las mismas razones que daba y según los mismos autores que citaba en su apoyo, no coexistían en Estados Unidos, en los territorios ni en el *distrito de Colombia*, la justicia llamada federal y la justicia que llamamos común u ordinaria: estas dos justicias sólo se conciben coexistentes en los *estados*; nunca fuera de ellos.

El diputado doctor Marengo refirió también la doctrina de la constitución norteamericana, con

acuerdo en cuanto a exposición, pero se equivocó manifiestamente en cuanto a aplicación al caso que discutía. En la página 634 del Diario de Sesiones se lee la proposición del diputado Ruiz de los Llanos, para que los jueces de la capital conocieran en primera instancia de todos los asuntos del fuero ordinario o común como de los del fuero llamado federal. El diputado Marengo replica con las distinciones fundamentales que median entre estos dos fueros, lee las palabras de Story, invoca a Paschal, recuerda luego el artículo 100 de la Constitución Argentina, y concluye de este último que, no habiéndose comprendido en la enumeración, la justicia de la capital, "el propósito de los constituyentes no fué nunca que la jurisdicción de excepción, que establecía para causas de alta importancia política, hubiera de ejercerse como jurisdicción común y ordinaria en los asuntos que ocurrieren en el territorio de la capital", (pág. 636).

El diputado Marengo olvidaba que toda excepción supone una "regla"; que la regla en el régimen federal, es que la justicia sea administrada por los Estados o provincias, y la excepción de la justicia federal tiene presente esa regla. Donde la soberanía o cuasi soberanía provincial no existe, no existe la regla, y la excepción resulta lógicamente insubsistente como tal excepción. Se dice que la construcción constitucional norteamericana ha sido muy "práctica"; pero leyendo sus expositores y observando su desenvolvimiento, hay que agregar que ha sido muy "lógica": por eso no se les ocurrió nunca a sus autores, que existiera una justicia "federal, de excepción", donde la regla era la exclusiva jurisdicción nacional. Debemos confesar que hemos vivido durante un cuarto de siglo, de este ilogismo de un poder judicial "federal" dentro de la capital de la nación, y sería de ver la impresión que esto podría causar a los juristas norteamericanos si lo supieran. Las voces aisladas, como la del procurador de la nación, doctor Costa, no bastaron para que saliéramos de este error.

No me detengo más en el examen de esa discusión, porque sería fatigoso: el diputado Ruiz de los Llanos que sostuvo la "unidad" de justicia de la capital perdió la ocasión de preguntar a los que le combatían con los textos y los expositores del derecho norteamericano, si en los Estados Unidos ha-

ha cortes "federales" en los territorios y en el "distrito de Colombia" como de excepción a una justicia ordinaria, que juzgara en nombre de otra soberanía. Los que invocaban a Paschal y demás autores, habrían visto al contestar la pregunta, que en casi todos estos (Paschal, núm. 197) se dice cómo están distribuidos los Circuitos y qué Estados comprenden; y habrían advertido que ninguno de aquellos comprende ningún territorio, ni el distrito de Colombia.

Una opinión del poder ejecutivo

11. La cuestión que debatimos fué detenidamente considerada por el poder ejecutivo, según el mensaje del ministro Magnasco de fecha 5 de mayo de 1899, del que transcribo las conclusiones más precisas:

"Tampoco podría decirse sin manifiesta exageración, que el pensamiento de la unificación del fuero es incompatible con el sistema judicial de nuestra ley suprema. Uno y otro caben dentro de la constitución, porque lo único ineludible es la institución de una justicia federal "en territorio de las provincias", como sanción y reflejo del sistema federativo, en el que se enlazan armónicamente la autonomía general y por tanto judicial de éstas, con la soberanía general y por tanto judicial de la nación. La primera es una justicia "ratione loci"; la segunda es una justicia "ratione materiae": sin la una no habría federación, sin la otra no existiría la nación.

"Pero allí donde no obre la razón respetable del territorio autónomo, "ratione loci": allí donde no haya el peligro de afectar el principio federativo: allí donde la localidad no tenga, ni histórica, ni constitucional, ni jurídicamente la fisonomía de una entidad capaz de subscribir o adherir con voluntad propia al pacto de una unión, no habría, sin duda, motivos doctrinarios para mantener la razón excluyente de lugar y la diferencia del "ratione loci" y del "ratione materiae vel naturae", porque el lugar es nacional, el amparo nacional y todo nacional. ¿Qué significación política tendrían en el pacto general semejantes entidades, si de otro modo se las entendiera?... Por otra parte, la institución de la justicia general es, al par que de equilibrio interno, de índole protectora de ciertas relaciones de derecho que se refieren más inmediatamente a la perso-

nalidad exterior de la nación, o lo que es lo mismo, esa justicia es federativa y es nacional, el de nivelación de las autonomías y es para la vida de relación del estado general, o como lo ha dicho la corte suprema: es interprovincial e internacional. Si ello es cierto, ¿qué razón mediaría para repudiar por inconstitucional la fusión, si aquel amparo solo fué creado en beneficio del extranjero en "jurisdicción provincial", porque en jurisdicción nacional ya está "ipso facto" "protegido?".

Estos fundamentos son muy exactos, y en nada los afecta el que la aplicación de tales observaciones no aparecieran en el proyecto a que se referían, en perfecta consecuencia con la verdad que se había así tan claramente expresado.

La explicación norteamericana

12. Para confirmación de lo dicho, pongo estas observaciones bajo la garantía de los textos que a continuación transcribo:

Kent.—Commentaries, etc.

I. 387. "Con respecto al distrito de Colombia y a los distritos territoriales de los Estados Unidos, hay que decir que no son "estados" en el sentido de la constitución y de la organización judicial (Judiciary act) de tal modo que habiliten a un ciudadano de los mismos a demandar a un ciudadano de uno de los Estados ante las cortes federales. Por extraordinario que pueda parecer que las cortes de los estados Unidos, que están abiertas para los extranjeros y para los ciudadanos de cualquier estado, deban quedar cerradas para los habitantes de aquellos distritos, en el concepto de que no sean ciudadanos de un "estado", esto, como observaba la corte sería un punto relativo a la legislación y no a la consideración judicial (a) "...." (a). El término "estado", en el sentido de la constitución se aplica solamente a los miembros de la confederación americana, y no puede extenderse a los territorios de los Estados Unidos".

I. 431. "Con respecto a los vastos territorios pertenecientes a los Estados Unidos, ha asumido sobre ellos el ejercicio de los poderes supremos de soberanía. La constitución ha dado al congreso, y lo han confirmado las decisiones judiciales, poderes de le-

gislación exclusivos e ilimitados. Por la constitución, el congreso quedó investido "para ejercer una legislación exclusiva en todos los casos sobre el distrito, no excediendo de diez millas cuadradas, que pueda llegar a ser, por la cesión de estados particulares y la aceptación del congreso, residencia del gobierno de los Estados Unidos. El distrito de Colombia fué creado con este objeto por cesiones de los Estados de Maryland y de Virginia. La jurisdicción territorial del distrito conocido por distrito de Colombia y que comprende la ciudad de Washington, y extiende su protección municipal a todos los oficiales y agentes de los Estados Unidos, es en extremo importante"...

... "Ni el distrito de Colombia", ni un territorio son "estados" en la intención de la constitución, ni tienen títulos para pedir privilegios asignados a los miembros de la Unión".

Paschal J. M. — La constitución de los Estados Unidos. — Trad. de Quiroga.

p. 449. "Constituir tribunales inferiores a la suprema corte". Los tribunales que se han constituido en virtud de este derecho, son las cortes de distrito y las cortes de circuito... Para ciertos aspectos las cortes de los territorios y del distrito de Colombia pueden considerarse cortes inferiores"...

Cooley T. M. — Principios generales del derecho constitucional en los Estados Unidos de América. — Trad. J. Carrié. — J. Peuser, 1898.

p. 134. "La disposición de la constitución que define los límites del poder judicial, no tiene aplicación a los territorios. Es, por consiguiente, de competencia del congreso, crear cortes para los territorios y conferir sobre ellos, toda la jurisdicción que conceptúe necesaria o conveniente. Estas cortes están facultadas generalmente para ejercer dentro de los territorios, "todos los poderes que dentro de los estados son ejercidos tanto por las cortes federales como por las cortes de estado".

p. 163. "Mientras subsiste la condición territorial, las cortes de territorio ejercen la jurisdicción habitual de "las cortes federales y de estado", bajo la legislación del congreso y del territorio".

Id. p. 87. "Distrito de Colombia..." el congreso

en su carácter de "legislatura de la Unión, asumió el ejercicio de legislar exclusivamente sobre él"... Esta legislación exclusiva sobre un pueblo que no tiene voz en la elección de los legisladores, es inconsistente con el derecho del gobierno propio, sobre cuyo reconocimiento descansan las instituciones americanas, y debe ser mirado, lo mismo que el control sobre los territorios, como una de las excepciones necesarias a las que están sujetos esos mismos principios generales, en su aplicación práctica".

Burgess. Ciencia Política, etc. — Trad. esp.

t. II. p. 175. "Legislación sobre los territorios, distritos y lugares no comprendidos en el sistema federal"... "La facultad legislativa sobre esos lugares, distritos y territorios pertenece al congreso, con exclusión de todo poder legislativo local y "no se halla circunscripta en su ejercicio" a un orden de materias taxativamente determinadas... Jamás se ha puesto en duda que el congreso posee plena y exclusiva facultad legislativa "en el distrito del gobierno general".

p. 372. "Los preceptos de la constitución relativos al poder judicial, no se aplican a aquellas partes de los Estados Unidos que no se hallan sometidas al sistema federal de gobierno. En esas partes, "el congreso tiene plenos poderes para legislar sobre la organización y facultades de los tribunales."

Woodrow Wilson. "L'Etat". Trad. francesa de J. Wilhelm.

n. 1319. "Los tribunales del "Distrito de Colombia", y de los territorios "son tribunales de los Estados Unidos, pero no tribunales federales"; del punto de vista de la jurisdicción tienen el carácter de los tribunales "locales y federales a la vez".

n. 1320. "Los tribunales del territorio y los tribunales del distrito de Colombia no están en manera alguna regidos por las disposiciones de la constitución federal. En cuanto les concierna, el congreso "obra sin limitación alguna".

15. Conclusión

13. La conclusión* de todo esto puedo precisarla en estas dos formas:

1. No hay obstáculo alguno, derivado de la constitución, para reunir en una sola administración de jus-

ticia de la capital, los tribunales que hoy funcionan como dos fueros distintos, uno federal y otro común.

2. La existencia de un "fuero federal" de la capital no está conforme con las razones de una justicia federal (léase el "Federalista" núm. 22), ni tiene explicación como justicia de "excepción", cuando se ejerce en territorio nacional, donde no existe más soberanía que la nacional. Es un contrasentido como interpretación constitucional, sin que alcance a ser una violación en la constitución, pues dentro de la jurisdicción exclusiva del congreso, cabe llamar a ciertos tribunales "justicia federal" o darles cualquier otro nombre.

II ¿Es conveniente la institución de una sola administración de justicia de la capital, en reemplazo del múltiple orden de tribunales hoy existentes?

Inconvenientes de la pluralidad de jurisdicciones

1. En mi opinión, no es sólo conveniente, sino necesaria, la institución de una sola administración de justicia, en reemplazo del triple orden de tribunales existentes hoy: cámaras civil, comercial y criminal y federal. Tengo por manifiesta la necesidad de reunir toda la justicia de la capital en un solo cuerpo orgánico, y eliminado todo obstáculo que se creyera emanado de la constitución, apenas concedo que este punto merezca alguna discusión.

La dispersión de los tribunales en distintas jurisdicciones que no tienen entre sí relaciones de jerarquía, pero que se extienden sobre el mismo territorio, a las mismas personas y cosas, es causa de graves obstáculos para la pronta realización de la justicia y para fijar la interpretación de la ley. Origina, desde luego, los incidentes y las contiendas de competencia que deben excluirse como uno de los peores defectos de toda administración de justicia. Por otro lado, causa la incertidumbre respecto del sentido de la ley, que recibe, como también ha ocurrido con frecuencia, las aplicaciones más opuestas.

La unidad del tribunal supremo es la regla general

2. En general, parece superfluo que deban darse razones que justifiquen la conveniencia de la concentración de la justicia de última instancia en un sólo tribunal superior. La experiencia general ha

establecido esta unión como regla. La pluralidad de tribunales superiores que existe en la capital, es la excepción. Son precisamente las excepciones las que deben fundarse y demostrarse, y no admitirse si la demostración no es completa. En vez de buscar argumentos para demostrar la conveniencia de la unidad, se deben dar para justificar la pluralidad. Fuera de la organización de la justicia de la capital, en nuestro propio país no existe ningún otro ejemplo de esta pluralidad. La justicia federal forma un cuerpo que remata en la autoridad y jerarquía superior de la corte suprema. Las diversas cámaras de apelaciones de la provincia de Buenos Aires, tienen por superior común a la suprema corte de justicia de la provincia. Lo mismo ocurre con los diversos tribunales inferiores de todas las provincias, que se unifican en la administración de justicia de provincia, presidida por un tribunal superior o suprema corte. En la capital, las diversas cámaras podrían establecerse bajo la unidad de la corte suprema nacional, si por otros conceptos, en que no creo necesario detenerme, no apareciesen, como aparecen, dificultades para organizarla en aquel sentido. Pero si, por ahora, no se puede alcanzar a tal organización, por lo menos se puede aspirar al mismo resultado con la creación y organización de una corte de apelaciones de la capital de la república, que desempeñe las funciones de todo tribunal superior.

Paso a ocuparme en particular de los dos inconvenientes más graves que resultan de la pluralidad de tribunales.

Las cuestiones de competencia

3. La pluralidad de tribunales de la misma jerarquía y jurisdicción territorial, y de diversa competencia por razón de la materia es, lo repito, la fuente y causa de incidentes y cuestiones de competencia, por los cuales es necesario seguir un pleito previo, para determinar el juez que debe entender y fallar. No bastaría presentar la observación de que las contiendas de competencia se susciten pocas veces. Los procedimientos ofrecen otras formas para discutir la competencia, y demostraré luego que son frecuentes las excepciones e incidentes de competencia por declinatoria. Pero, suponiendo que no fueran frecuentes, ello no justificaría de ninguna manera que no se aspirara a limitar su número, pues-

to que no debe prescindirse de medio alguno que conduzca a evitar para siempre los incidentes que perturban e impiden la buena y pronta administración de justicia.

Una ley que comience por establecer los tribunales con diversas jurisdicciones crea, por el mismo hecho, la posibilidad de los conflictos e incidentes de competencia. Es la misma ley la que da a los litigantes la ocasión de formar un pleito sobre si el juez puede o no juzgar. Ante un juez local, único con plenitud de jurisdicción, no se concibe la posibilidad de una cuestión de competencia por razón de la materia. Pongo por ejemplo, el caso ante un juez letrado de un territorio nacional. La ley le acuerda toda la jurisdicción de primera instancia, que en la capital de la república está repartida entre jueces en lo federal, civil, comercial, criminal y correccional. Ante él no puede surgir discusión alguna para saber si es competente en un asunto que corresponda a cualquiera de esas materias: es competente en todas.

Aun cuando los litigantes resolvieran resistir toda la sugestión de la mala fe para obstruir la justicia, y dejaran de abusar de los incidentes de incompetencia, los jueces no podrían evitar el pronunciarse expresamente en cada caso sobre ella, como ordenan las leyes, y evitar toda usurpación de una jurisdicción ajena; y tendríamos siempre en pie la posibilidad de las mismas dificultades.

En la práctica, todo demandante necesita aquí, en la capital, proponerse previamente la cuestión de saber ante qué juez llevará la demanda. Es a él a quien interesa en primer lugar evitar las dificultades. Como no aparece en las leyes una perfecta distinción para todos los casos, por razón de la materia, y no es posible apreciar de distinto modo los hechos que pueden caer bajo las distintas disposiciones legales, resulta que, formulada una demanda ante el juez de comercio, el demandado podrá sostener que el asunto es civil; y si el demandante hubiera ocurrido a la jurisdicción civil, muy probablemente el demandado habría sostenido que el asunto era comercial. Del mismo modo, si estudiando el caso, se hubiera llevado la demanda ante la jurisdicción común ordinaria, se habría sostenido la competencia federal o viceversa.

Lo que estos hechos perjudican la buena administración de justicia, no necesita demostración: basta enunciarlos. Lo que probablemente no siempre

se sabe, es todo el perjuicio que causa a los intereses particulares, a los que siempre va unido el interés de las familias, y como conduce a una perfecta denegación de justicia, con olvido de que es la justicia la primera garantía del orden social, su mejor explicación y la que está prometida por las más solemnes de las declaraciones constitucionales.

Tal vez los jueces llamados a juzgar los casos según aparecen en las constancias de autos, no ven tan de cerca como podemos ver los abogados, que deseamos corresponder con nuestra conducta al honor profesional, todas las consecuencias desgraciadas de un sistema que impide el más pronto reconocimiento de los derechos.

Comprobaciones: Justicia federal y justicia ordinaria de la capital

4. En apoyo de lo que digo podría exhibir numerosos casos de que he tenido conocimiento directo por intervención personal, en mi práctica de la profesión. Vienen algunos en este momento a mi recuerdo, y bastará referirme a ellos.

Hace muchos años, un señor Bustin, inglés, que residía en esta ciudad, viajaba en un tranvía que cruzaba una vía de ferrocarril. Las barreras del paso a nivel estaban levantadas, y el coche del tranvía avanzó sobre la vía férrea sin advertir que sobre la misma corría una locomotora. Esta última llevó por delante el coche del tranvía y el señor Bustin resultó con lesiones graves. Por este hecho quiso exigir judicialmente las indemnizaciones a que tenía derecho. Eran entonces muy numerosos los fallos de la cámara civil de la capital, en casos análogos, y parecía indudable la competencia civil. La demanda fué presentada ante el juzgado civil: el juez civil se pronunció de oficio sobre su competencia, al abrir la causa a prueba, y después de dos o tres años de tramitación, que como minimum requiere todo juicio ordinario, la causa fué fallada en primera y segunda instancia en favor del señor Bustin, condenando a la empresa del ferrocarril al pago de indemnizaciones y costas. Notificado el fallo de segunda instancia, la empresa condenada puso recurso para la corte suprema federal, sosteniendo que el caso correspondía a la jurisdicción federal, de la capital, por razón de la materia (aplicación de la ley general de ferrocarriles) y dijo de nulidad de todo lo actuado. Los autos pasaron a la corte federal para la

decisión del recurso, y el pronunciamiento demoró en la corte algunos años, declarándose la nulidad del juicio por el fundamento alegado por la empresa. Fué necesario recomenzar el pleito con todas las dificultades de la prueba que debía producirse después de tanto tiempo de ocurridos los hechos. El pleito no ha sido fallado aun por la justicia federal; el señor Bustín se ausentó para su país convencido de que no se le había hecho justicia, y dejó el encargo de remitírsele el importe de la indemnización, si alguna vez el pleito volvía a fallarse en su favor.

MI tesis de la unidad de toda la justicia del país

5. Este hecho, cuyas circunstancias pueden comprobarse con los actos respectivos, y la posibilidad de que se produzcan otros análogos, importa la revelación de tan graves inconvenientes para la buena justicia en nuestro país, que justifican la tesis que sostengo siempre que la ocasión me lo depara y de la cual, con permiso de los señores de la comisión, deseo dejar constancia en este momento en que debo pronunciarme sobre cuestión de tanta transcendencia como las que aquí tratamos: el afianzamiento de la justicia, prometido en el preámbulo de la constitución, requiere que toda la justicia del país sea nacional, y desaparezca para siempre esta distinción, que se cree necesaria al sistema federal, de los múltiples órdenes de tribunales que impiden la justicia en vez de realizarla.

Otra comprobación

6. En otro caso, la señora C. C. de C. al trasladarse de esta ciudad a otra del interior, entregó su equipaje en la oficina respectiva del ferrocarril. El equipaje se extravió sin que pudiera hallársele más. La damnificada lo reclamó a la compañía y presentó su demanda ante el juzgado de comercio de esta capital, fundándola en las obligaciones que el código de comercio impone a los empresarios de transportes. El juez de comercio declaró su competencia; y también, después de las consiguientes demoras de los procedimientos, la empresa fué condenada al pago de indemnizaciones y costas. Pronunciada la sentencia de segunda instancia la empresa dedujo recurso para ante la corte suprema federal, como en el caso de Bustín, para que se declarase la nulidad de lo actuado por razón de la incompetencia de los tribunales

de la capital para pronunciarse sobre un caso que, además de estar regido por el código de comercio, estaba previsto en la ley general de ferrocarriles. Como en el caso anterior la señora C. de C. ha quedado sin equipaje, sin alhajas, sin sus ropas y las de su familia, y no ha obtenido hasta ahora, después de diez años de pleito, la indemnización que declaró a su favor la cámara de apelaciones de la capital, sólo porque aquí, en la capital de la república, existe también otra justicia llamada federal, que emana de la misma soberanía nacional, del mismo gobierno y del mismo congreso que la justicia de la capital, y para la una no vale el fallo de la otra.

Otra más: cuestión promovida de oficio

7. Recientemente la razón social P. y S., de Milán, se presentó ante un juez de comercio de esta capital pidiendo la ejecución de una sentencia "provisional" contra mis clientes A. F. y Cia., de esta capital. Deseosos en este caso los demandados, de que se definiera rápidamente la demanda de ejecución de sentencia, y se declarara que no podía ejecutarse el fallo dado en un juicio al que no habían sido citados, opusieron derechamente sus defensas, sin discutir la competencia del juez de comercio. Además, invocaron en su apoyo la decisión de un caso análogo resuelto por el mismo juez de comercio, confirmado por la cámara de lo comercial y por la corte suprema federal, sin observación alguna sobre la competencia de los tribunales de la capital. En nuestro caso, ninguna de las dos partes puso en cuestión la competencia; pero el juez de comercio se pronunció de oficio sobre ella, declarando que el asunto correspondía a los juzgados federales, y que en el caso resuelto anteriormente por el mismo no había advertido su propia incompetencia que ahora declaraba. La resolución fué confirmada por la cámara de apelaciones; los actores tuvieron que iniciar de nuevo la ejecución de la sentencia, y el caso no está aun resuelto en la justicia federal.

Otra más: la jurisdicción civil y la jurisdicción comercial

8. Si los tribunales de la capital son tribunales inferiores de la nación, como se sostiene, no puede advertirse cuál sea la razón última que obste a que entiendan en la ejecución de sentencias dictadas

por tribunales extranjeros en cumplimiento de un tratado. La razón se encuentra únicamente cuando se trata de ejecutar la sentencia ante un juez de provincia. Los mismos inconvenientes se manifiestan en la coexistencia de las jurisdicciones en lo civil, y en lo comercial, sin que pueda saberse cuáles son más frecuentes. Recordaré un sólo caso que he considerado siempre muy importante para la parte que demanda pidiendo justicia. A principios de 1899, el doctor Luis María Drago, patrocinando a don M. V., redactó una demanda de rendición de cuentas de una operación que reputó comercial, de la casa de consignaciones de S. y Cía. Los demandados dijeron de incompetencia del juez de comercio porque el asunto era civil, y la discusión previa de este punto originó un verdadero pleito que demoró próximamente dos años en decidirse. No es del caso que me detenga en explicar todos los perjuicios que esa demora ocasionó al demandante, a quien después he atendido profesionalmente. El pleito está aun por decidirse, y debió serlo en el tiempo empleado en discutir la competencia.

Frecuencia con que se producen las cuestiones de competencia

Cualquiera que sea la importancia que se acuerde a estos hechos, quien afirme que se producen pocas veces, sírvase consultar previamente las colecciones de fallos de la cámara de la capital. El tomo 61 de la cámaras de lo comercial contiene el índice de los sumarios de los tomos precedentes. Ninguna palabra ocupa el mayor número de veces el título puesto a las páginas, que la palabra competencia. Son más de treinta las que contienen sumarios de los pronunciamientos dados para decidir incidentes y cuestiones de ese género. Señalo ese índice alfabético como muestra, a fin de que puedan ser consultados con provecho los demás índices de colecciones de fallos.

Las reformas del procedimiento nunca salvarán las dificultades

9. Si la ley debe ser expresión de un orden establecido para dar mayores seguridades y garantías a las personas que le están sometidas, sea que se trate de su vida, de su reputación, de sus bienes, de la tranquilidad de su hogar; es la negación de ta-

les principios toda ley que haga incierta o difícil la justicia.

Para la supresión de cuestiones o incidentes de incompetencia no se pueden buscar simples formas de procedimientos. Para ello no hay más camino que la reforma de la organización de justicia. De nada servirá que las leyes de procedimientos procuren definir con mayor precisión la naturaleza de los juicios, ni aun, que las leyes de fondo y de forma regresen al procedimiento formulista en la enumeración de las acciones (materia mucho más difícil que la reforma de una ley orgánica), si se dejara subsistente la limitación legal de la competencia de cada juez con la obligación ineludible de defender su jurisdicción. Cuanto mayor sea el número de las trabas puestas a la pronta realización de la justicia. Esta proposición no requiere demostrarse por observaciones positivas de la estadística: surge, naturalmente, de un raciocinio sencillo, como la demostración de un teorema de geometría. He recordado antes el caso de los jueces letrados de los territorios nacionales, ante quienes, por ser competentes en todo orden de materias, es absolutamente imposible discutir otra competencia que la de la jurisdicción territorial, que es la que menos dificultades presenta. Tenemos también a la vista la organización de tribunales de la provincia de Buenos Aires, en que la competencia no se divide en comercial o civil, porque para esas materias no hay más que el juez de primera instancia.

Incertidumbre de la jurisprudencia

10. Demostrados los inconvenientes que resultan de la pluralidad de las jurisdicciones en relación a la incertidumbre respecto del juez que debe conocer y fallar un asunto, es fácil advertir la segunda consecuencia perjudicial a que conduce tal organización: la incertidumbre o contradicción de la jurisprudencia como antecedente para la interpretación de la ley.

He expresado en otras ocasiones mi opinión sobre la autoridad de la jurisprudencia, y la fácil tendencia a generalizar con autoridad legislativa las decisiones y a veces los sumarios de los fallos de los tribunales. Tales observaciones y críticas corresponden más bien al abuso que de la jurisprudencia se hace, y al falso concepto que de ella se propaga, que a su eficacia

como hecho positivo y real, en que se manifiesta con vida el abstracto de la ley.

Cualquiera que sea el concepto que se tenga de la jurisprudencia, nadie sostendrá que es útil y conveniente que una misma ley, aplicable a una misma persona y cosas, en un mismo territorio, sea en un mismo momento interpretada en los más opuestos sentidos. No puedo aplicarme ahora al estudio minucioso de las contradicciones manifiestas de los fallos de nuestros tribunales en la interpretación de unas mismas leyes. Escribo, principalmente, para quienes conocen por su práctica este hecho, y que pueden confirmarlo con multitud de casos en su propia experiencia personal. Recuerdo ahora la disidencia entre las dos cámaras de apelaciones de la capital sobre el momento interruptivo de la prescripción liberatoria: para la una la prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda; para la otra sólo se interrumpe con la notificación de la demanda. Tratándose de acciones por indemnización que nacen de los delitos hay dos jurisprudencias igualmente contradictorias sobre la interpretación del mismo artículo del código civil, que he tenido ocasión de exponer poco ha en una breve monografía publicada en la "Revista de Derecho, Historia y Letras: (1) para los tribunales federales, la substanciación del juicio criminal suspende la prescripción de las acciones por indemnización, emergentes del delito; para la cámara de lo civil tal substanciación no obsta a la prescripción. La cámara de lo civil ha estimado el daño moral que la justicia federal no estima. Hasta en la aplicación de las más recientes leyes de procedimientos existe ya la contradicción. En los casos de nulidad de sentencia o violación de formas, la cámara de lo civil, se limita a declarar la nulidad y remitir los asuntos a otro juez; la cámara de lo comercial, declarando la nulidad, falla el pleito. En una cámara se admite el informe "in voce" en los juicios ejecutivos, en otra se niega o se admite en su lugar las memorias escritas, como en los casos de las apelaciones de sentencias que no sean definitivas.

Creo excusado insistir más sobre este punto. El examen detenido y minucioso de las colecciones de jurisprudencia révelarla, sin duda, muchas otras cosas que en este momento ignoro o no recuerdo. Habrá tal

(1) Tomo XXIII, enero 1906.

vez más de una ocasión en que podría preguntarse si son distintas las leyes que rigen para los habitantes de esta capital, según deban aplicarse por los tribunales de la calle Cangallo o por los que ocupan el fragmento del edificio del viejo Cabildo colonial; si es otra sociedad, si son otros hombres, otras costumbres y otras ideas, las que dominan en sitios tan poco distantes uno de otro, y todo bajo la misma soberanía nacional.

Principios que deben regir la división del trabajo judicial

11. La división de la administración de justicia entre jueces de diversa competencia, sobre una misma jurisdicción territorial, no responde a ninguna idea o principio esencialmente "jurídico", pues entonces sería siempre necesaria, y no podría admitirse la existencia de un sólo juez para todo un territorio. Tal división obedece a otros dos principios, ninguno de ellos jurídico, a saber el principio "económico" de la división del trabajo y el principio "científico" de la especialización de los conocimientos.

Si consigo demostrar que estos dos principios pueden ser observados con mayor perfección que el actual, en una nueva organización de los tribunales, habré demostrado, a la vez, la posibilidad de un mejoramiento de nuestra administración de justicia.

Sin perjuicio de que se acepten o no todos los detalles de la organización que concibo, me detendré a exponer las bases generales de una que respondiera a mis observaciones e ideas sobre esa materia.

Digo, en primer lugar, que toda cuestión e incidente de competencia puede, desde luego, evitarse con la declaración de la ley, de que todo juez es juez, y en consecuencia competente en todo orden de materias. Con esta declaración quedan suprimidas de una vez por todas, cualesquiera cuestiones y pleitos previos para fijar la competencia judicial. La fórmula de que todo juez es juez, es la única que obedece al principio jurídico que reclama una autoridad para la aplicación de la ley en las contiendas jurídicas.

No aplicación de tales principios en la justicia federal

12. Al principio económico de la división del trabajo, y a la vez al principio científico de la especialización,

puede llegarse por medios más eficaces que los que hoy existen en esta organización judicial, que apenas o remotamente responde a aquellos, sobre los cuales se cree de buena fe que se halla asentada la organización actual. El menor examen revelará que es casi ilusoria o nula la subordinación de nuestra justicia a tales principios.

En efecto, la justicia federal de la capital, supuesta como justicia de excepción para determinadas materias, es también justicia "común ordinaria" cuando el fuero se causa por razón de las personas o de los lugares. En tal caso solo los juicios universales aparecen excluidos de la justicia federal. En otras palabras, un juez federal es competente para aplicar el código civil, el código de comercio y el código penal, como lo serían respectivamente un juez de lo civil, un juez de comercio, un juez del crimen o un juez de lo correccional de la llamada jurisdicción ordinaria de la capital.

El asiento de jueces federales en la capital ha traído una primera división en primera instancia, con la creación de un juzgado para lo criminal; pero, exceptuada esta última materia, los dos jueces restantes tienen toda la jurisdicción civil y comercial a la vez. Todas las jurisdicciones y competencias se reúnen en la cámara federal, sin división ni especialización alguna; aunque sea de advertir que, por otros conceptos que expondré después, tal amplitud de competencia se encuentra compensada por un número relativamente reducido de asuntos.

No aplicación en la justicia civil, comercial y criminal

13. La cámara de lo civil tiene su competencia para todo orden de asuntos civiles enumerados en el artículo 80 de la ley orgánica. Aparte de la cámara, existen siete juzgados de lo civil que se distribuyen el trabajo por la sola regla del turno periódico. Cada uno de ellos, en consecuencia no especializa materia alguna dentro de la vasta amplitud del código civil.

Se demuestra también por simple raciocinio aritmético que si hubiera dos cámaras para los asuntos civiles en lugar de una, sería posible que cada una de ellas se especializara en una determinada mitad del derecho civil. Del mismo modo se demuestra que si existen siete jueces de lo civil es posible alcanzar hasta una división del derecho civil en siete

partes, en cada una de las cuales adquiriese mayor ciencia, práctica y experiencia cada uno de los siete jueces.

Esta posibilidad demostrada con relación a la justicia en lo civil, puede repetirse con relación a la justicia en lo comercial. Si en lugar de una cámara para lo comercial, criminal y correccional, hubiera dos cámaras, la especialización se facilitaría manifiestamente en lugar de hallarse hoy confiadas a un mismo tribunal materias que guardan entre ellas tan poca analogía. La existencia de cuatro jueces de comercio facilitaría la división de la materia en cuatro partes y su consiguiente especialización.

Respuesta a una objeción posible

12. Expuesta esta idea general debo responder a la objeción que podía creerse pertinente: la división del trabajo y la especialización conducirán de nuevo y con mayores probabilidades a mayor número de cuestiones de competencia. Pero debe suponerse que en mi razonamiento anterior he previsto el medio de evitar semejante consecuencia, y ese medio surge de todo el conjunto del proyecto que he concebido.

La mejor respuesta que puedo dar a la objeción es la de que se suponga un ensayo práctico o de experimentación inmediata de las bases que he formulado. Si del ensayo que se suponga resulta alguna posibilidad de un pleito previo para determinar la competencia del juez, se podrá decir que el remedio no es todavía suficientemente eficaz. Entiendo que el proyecto responde a todo ensayo cuando dispone que, "ningún juez de primera instancia y ninguna sala de la corte podrán excusarse directamente de entender en una demanda o juicio que se presente al primero o llegue en apelación a la segunda", y agrega: "Si antes de proveer creyesen que no les corresponde según la división del despacho, remitirán la causa sin más trámite al presidente de la corte para que decida si les corresponde o no. La decisión del presidente no dará lugar a observación ni reclamo alguno de las partes, del juez o de la sala a quien el presidente la remitiere con su decisión".

La posibilidad de que el juez o sala se niegue a entender en un asunto, queda eliminada con esta disposición. Si se piensa que puede subsistir la posibilidad de que contra todo lo que es de esperarse,

un juez recibiera un asunto que manifiestamente no le corresponde, ese juez o sala habrá incurrido en una mera falta contra la distribución del trabajo; pero no habrá usurpado una jurisdicción ajena, porque ésta sólo emana de la ley y no de la reglamentación que distribuye equitativamente el despacho. Ningún demandado o persona que llegue a intervenir en un juicio aceptado por un juez, podrá negarle competencia ante la explícita declaración del artículo 1.º que les acuerda competencia en todo orden de materias.

Si todavía se cree que este sistema no aleja los peligros de las contiendas e incidentes de competencia con relación al sistema actual, propóngase otro medio que las salve mejor pero no se niegue la necesidad de responder con una reforma de la organización judicial a salvar los graves y manifiestos inconvenientes de la actual organización que acabo de exponer.

Resultados de la estadística judicial

15. La división del trabajo judicial de la capital por un método que responda más equitativamente a la tarea que pesa sobre cada magistrado, tiene en su apoyo una consideración más, que resulta del inmediato examen de las estadísticas judiciales.

Estas últimas no están llevadas ahora con sujeción al método uniforme que requiere toda estadística. Pero con toda su deficiencia ellas demuestran la desproporción del despacho cuando se compara el de las cámaras de apelaciones de la jurisdicción ordinaria con el de la cámara federal de la capital.

Tengo a la vista los cuadros estadísticos correspondientes al año 1904, que me han sido facilitados en el ministerio de justicia. De ellos resulta que la cámara de lo civil dictó en aquel año 401 sentencias definitivas y 1857 interlocutorias, lo que suma 2258 causas despachadas en el año. En el mismo período la cámara de lo criminal, correccional y comercial despachó 852 causas criminales, 607 correccionales y 705 comerciales, lo que suma un total de 2164. La cámara federal resolvió en el mismo tiempo 764 causas. La falta de clasificaciones no permite apreciar exactamente el respectivo trabajo de las cámaras. Se observa así que mientras la cámara de lo civil ha dictado 401 sentencias definitivas y 1857 interlocutorias, aparece en la estadística de la cámara federal que ha dictado 667 sen-

tencias definitivas y sólo 97 interlocutorias, lo que necesitaría de un lado o de otro alguna explicación.

Como dato más sencillo para apreciar el respectivo movimiento de estos tribunales, puede observarse el número total de causas entradas durante el mismo año 1904. Entraron en la cámara federal, procedentes de los juzgados de la capital 501 causas, a las que habría que agregar 37 procedentes de Mendoza, 14 de San Juan y 5 de San Luis, lo que forma un total de 557.

En el mismo período entraron en la cámara de lo civil, 2247 causas y en la cámara de apelaciones en lo criminal, correccional y comercial 2349.

La conclusión general de la comparación de estas cifras es que cada una de las cámaras de jurisdicción ordinaria de la capital recibe y tiene un despacho "cuádruple" del que corresponde a la cámara federal.

La desproporción se demuestra también con otra observación. La cámara de lo civil recibe las apelaciones de siete juzgados civiles de la capital, para cuyo movimiento existen seis secretarías en cada juzgado: en estos juzgados se iniciaron en 1904, 8218 causas; la cámara de lo criminal, correccional y comercial, lo es de apelación de todos los juzgados de primera instancia y de instrucción en las respectivas materias. En estos juzgados se iniciaron en el año, 8835 causas. El total de causas iniciadas en los juzgados federales de la capital, fué de 1907, lo que vuelve a comprobar que la jurisdicción a que se extienden las cámaras ordinarias tiene para cada una de ellas un movimiento que es "cuatro" veces el de la jurisdicción subordinada a la cámara federal.

La cámara federal de la capital tiene jurisdicción para las apelaciones de las provincias de Cuyo; pero ya se ha visto que éstas le han dado en 1904 la entrada de sólo 35 causas. Si se piensa que podría aparecer alguna objeción en cuanto a qué la corte de apelaciones de la capital recibiera las causas procedentes de aquellas provincias, el remedio inmediato estaría en trasladar la jurisdicción apelada de esos juzgados a cualquiera otra de las cámaras federales. No tienen éstas más trabajo que la cámara federal de la capital. La cámara federal de Córdoba, por ejemplo, que sería la más inmediata de aquellas provincias, sólo ha tenido en 1904 una entrada total de 276 causas. La cámara federal de La Plata, que por su ubicación geográfica puede considerarse casi como instalada en la capital tuvo

en aquel año una entrada total de 593 causas. Aunque sea la menos indicada para recibir en apelación las causas de Cuyo, conviene saber que la cámara federal de Paraná tuvo en 1904 la entrada total de 234 causas.

Formación de una jurisprudencia

16. El otro aspecto manifiestamente útil del proyecto es el de aproximar la organización a la uniformidad y mayores garantías en la interpretación de la ley.

Quiero dejar constancia de mi pensamiento sobre toda la extensión que acordaría a la reforma, y los motivos que me han inducido a aceptar transitoriamente la limitación que resulta del proyecto.

He concebido que la presidencia del tribunal tuviera mayor autoridad con más responsabilidad para garantizar la mejor administración de la justicia. He pensado así en la conveniencia de que el presidente fuese nombrado por diez años o durante su buena conducta, directamente por el presidente de la república, con acuerdo del senado. Sus funciones de vigilancia por la mejor administración de la justicia, serían así ejercidas con mayor independencia que las de un presidente directamente emanado del tribunal. He debido ceder a las consideraciones de las dificultades que podrían resultar de la designación en persona que no tuviere toda la ponderación, equidad, discreción o tacto, que tan delicadas funciones requiere. Por otra parte tal presidencia, conveniente del punto de vista en que lo concibo, no es indispensable para los fines capitales de esta reforma. La función que correspondería a tal presidente, de velar por la uniforme interpretación de las leyes, puede desempeñarla sin mayor inconveniente el mismo funcionario que deba su designación a la elección de la corte.

Fuera de los procedimientos internos de la organización del tribunal para mantener cierta uniforme interpretación de las leyes, he pensado en que otros detalles de organización podrían regular la admisión de recursos por inaplicabilidad de ley como están establecidos para ante la corte de la provincia de Buenos Aires, con más o menos restricciones, que serían de considerarse en la reglamentación, partiendo del recurso. He desistido también, ante la consideración de que todo régimen nuevo lleva consigo mayores dificultades de realización práctica cuanto mayores son las reformas que in-

troduce. En este sentido considero conveniente el aplazamiento de este punto para cuando se hubiere normalizado el funcionamiento de la nueva organización que sobre estas bases se estableciere.

Posibilidad de la reforma

17. La reforma tal como está proyectada, aunque fundamental en general, desde cierto punto de vista, no puede presentar mayores dificultades materiales de aplicación, desde que tiene por base los tribunales actuales con su personal y el funcionamiento de las cámaras, y que en cualquiera de los edificios que las cámaras ocuparen, se instalará la presidencia de la corte, donde tendrían lugar las sesiones de la sala de presidentes. No debe olvidarse que esta situación sería provisional, mientras llegare el momento de que todos los tribunales se instalaran definitivamente en el palacio de justicia.

Mayor autoridad efectiva de una corte de apelación

18. Termino estos apuntes con mi impresión de la autoridad efectiva, legal y moral de la justicia superior, parece mayor cuando ella constituye un sólo cuerpo y el sentimiento de respecto que impone no se divide ante la consideración de que con igual jerarquía y grado existen diversos tribunales, cada uno de los cuales puede merecer una estimación distinta, sin que el uno tenga que preocuparse de que el otro mejore.

Por último, muchas veces, entre diversas palabras que expresan una misma cosa, hay alguna que presenta cierto matiz que la distingue de las otras. Propongo que se adopte la designación de "Corte de apelaciones", como más apropiada a la concentración de toda la justicia de la capital que el proyecto establecería.

Esquema de la organización de la justicia única en la capital

(Estas bases son únicamente un esquema de la organización de la justicia única. En las sesiones de la comisión en minoría, presenté la articulación completo del proyecto. Prescindo en ellas de las atribuciones que puedan acordarse al presidente de la corte, a los presidentes de la sala y a la corte plena; de la forma de sus acuerdos: como de otras

disposiciones relativas al juicio de primera instancia, jurisdicción disciplinaria, vigilancia de la administración de justicia, etc.

I. Las cámaras de lo civil, de lo comercial, criminal y correccional y la federal de la capital, aumentadas con tres vocales más y un presidente, constituirán la corte de apelaciones de la capital.

II. La corte de apelaciones se dividirá en cuatro Salas de cuatro jueces cada una, las que se distinguirán con la numeración ordinaria de 1a., 2a., 3a. y 4a. Esta designación no importará preeminencia alguna. Cada Sala designará anualmente su presidente.

La corte reglamentará la distribución del despacho entre las cuatro Salas, cuidando realizarla por orden de materias y consultando la proporcionalidad en el trabajo.

Esta distribución podrá variarse siempre que lo exijan las necesidades del despacho o en periodos determinados.

Todo miembro de una Sala podrá cambiar su cargo con el de otra, con autorización del presidente.

III. El presidente de la corte durará 10 años en el ejercicio del cargo (o será elegido en periodos más breves).

Cuidará de uniformar la interpretación de las leyes en las diversas Salas. Al efecto, celebrará por lo menos un acuerdo por mes con los presidentes de Sala, y siempre que cualquiera de éstos lo solicitare.

Cuando la ley recibiere interpretaciones distintas en las Salas, o cuando resultare de los votos de una Sala, en un caso que se propusiere fallar, una interpretación distinta, la decisión se someterá a la corte plena, que celebrará acuerdo con asistencia de diez miembros por lo menos; y el fallo de la causa será subscripto por todos los que concurrieren. (1)

El debate será oral y la decisión obligará a las Salas para los casos análogos, salvo que promovieren una decisión distinta en otro acuerdo general.

Se formará corte menos plena, con el presidente de Sala, y un vocal de cada Sala, para decidir recurso por violación de formas substanciales en segunda instancia, o por inaplicabilidad de ley o doc-

(1) Dice el artículo 137 de la ley de organización del poder judicial de Alemania. "Si en una cuestión de derecho quisiera una Sala en lo civil separarse de la doctrina establecida anteriormente por otra Sala de igual clase, someterá el conocimiento del asunto a dichas Salas reunidas en pleno. Lo mismo hará en las Salas de lo criminal".

trina legal. (Podrá aplazarse la adopción de estos recursos hasta que funcione normalmente la nueva organización).

IV. Todos los jueces de primera instancia que existen hoy en los distintos fueros de la capital, serán jueces de primera instancia "competentes en todo orden de materias". La corte de apelaciones "distribuirá equitativamente" y en períodos determinados, el despacho de primera instancia, procurando en todo lo posible la especialización de las materias.

Toda dificultad sobre si el conocimiento de una causa corresponde o no a un juez, será decidida sumariamente por el presidente de la corte de apelaciones, sin forma de cuestión de competencia.

El conocimiento de una causa por un juez contra lo dispuesto por la corte, constituirá una falta en el ejercicio de las funciones de aquel, pero no dará lugar a recursos de nulidad, ni a excepciones de incompetencia.

En otra forma:

Ningún juez de primera instancia y ninguna Sala de la corte podrá excusarse directamente de entender en una demanda o juicio que se presente al primero o se lleve en apelación a la segunda.

Si antes de proveer en la misma creyeran que no les corresponde según la división del despacho, remitirán la causa sin más trámite al presidente de la corte para que decida si les corresponde o no. La decisión del presidente no dará lugar a observación ni reclamo alguno del juez o de la Sala que le hubiere enviado la causa, ni del juez o sala a quien el presidente la remitiere con su decisión.

Ejemplo de una distribución posible del despacho, previa consulta de los resultados de la estadística.

SALA 1ª.

a) Juicios relativos a las personas en general, y a los derechos personales en las relaciones de familia (libro I del código civil).

b) Juicios relativos a la sociedad conyugal.

c) Sucesiones.

SALA 2ª.

a) Juicios sobre derechos personales en las relaciones civiles (código civil, libro II, con excepción de los títulos VIII y IX de la sección 2a.).

- b) Juicio sobre contratos comerciales.
- c) Ejecuciones.
- d) Derechos reales.

SALA 3ª.

- a) Concursos civiles y comerciales.
- b) Juicios de derecho marítimo y de aduana.
- c) Demandas contra la nación.
- d) Acciones fiscales contra los particulares y corporaciones.

SALA 4ª.

- a) Criminales y correccionales.
- b) Juicios sobre indemnización de daños por delitos, y por hechos ilícitos que no son delitos.

Nota.—Según la cantidad del despacho a distribuir, cualquiera de las materias asignadas a una Sala podrá pasar a otra que tenga una materia conexa o análoga. No se podría proponer un sistema de proporcionalidad en el despacho a la vez que la posible especialización, si la distribución se fijara por ley.

El ejemplo de la distribución de las Salas sirve para demostrar la posibilidad de la distribución en los juzgados de primera instancia. Cada uno de los incisos de la distribución precedente podría determinar la materia propia de cada juzgado.

Análoga especialización es posible en los juzgados del crimen, comerciales, etc. Cuando el despacho en un orden de estas materias aumentara, mientras disminuya en otro, bastaría una resolución de la corte para volver a la proporcionalidad del trabajo, lo que hoy es legalmente imposible.

Rodolfo Rivarola.

*De la "Revista Argentina de Ciencias Políticas",
año 1, núm. 3, pág. 482-12 de diciembre de 1910.*

Organización y procedimiento de la justicia penal

El autor del trabajo que se publica a continuación, ha sido encargado por el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires, en comisión con los

doctores Salvador de la Colina y Julio N. Rojas, para revisar el proyecto de ley sobre organización y atribuciones de la administración de justicia preparado por el doctor Nicolás A. Avellaneda, por encargo del gobierno anterior.

El autor ha formulado en substitución de la parte pertinente de proyecto del doctor Avellaneda, un ante proyecto sujeto a las modificaciones que le imponga la organización general de la justicia. Piensa que su conocimiento puede ser útil para quien estudie las múltiples leyes orgánicas de justicia penal en todo el país, que esperan la unidad definitiva. Ejemplo de los inconvenientes de la coexistencia de diversas justicias, sea la actual contienda de competencia entre el juez federal y el ordinario de la capital de la nación, sobre quien ha de entender en la aplicación de la ley de seguridad social.

Por último, debe considerarse el anteproyecto que sigue, como un esquema de organización judicial posible no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino en cualquiera de las demás, y en la capital de la nación, con las modificaciones que impusieran las circunstancias locales.

SECCION PRIMERA

De la administración de justicia penal

Capítulo I. De las jurisdicciones en la justicia penal

Artículo 1o.—La justicia penal será administrada:

- a) Por tribunales colegiados de justicia penal.
- b) Por jueces de circunscripción.

Art. 2o. — Corresponderá a los tribunales colegiados de justicia penal, o simplemente llamados tribunales de justicia penal el conocimiento de todas las causas por delitos, no asignados especialmente a otra jurisdicción.

Art. 3o. — Corresponderá a los jueces de circunscripción, el conocimiento y decisión de las causas por faltas y por cualquiera de los delitos siguientes, aisladamente o acumulados:

- 1o. Lesiones leves (ley de reformas, art. 17, capítulo II, inciso 1o.)
- 2o. Disparo de arma de fuego o agresión con otra clase de arma.
- 3o. Detención privada (cód. penal, art. 155 a 157).

- 4o. Substracción de menores (art. 158 a 161).
- 5o. Abandono de niños, salvo el caso del artículo 163 del código penal.
- 6o. Violación de domicilio (art. 165 a 167, código penal).
- 7o. Descubrimiento y revelación de secretos).
- 8o. Estafas y otras defraudaciones, cuando el valor defraudado no excede de quinientos pesos.
- 9o. Hurtos, en el caso del inc. a, art. 32 de la ley de ref.
10. Usurpación.
11. Daños.
12. Atentado y desacato contra la autoridad.
13. Usurpación de autoridad.
14. Delitos contra la salud pública.

Capítulo II. De los tribunales de justicia penal

Art. 4o. — Habrá en cada departamento judicial, un tribunal de justicia penal, compuesto por lo menos de tres jueces y dos secretarios.

Cuando el aumento de las causas lo requiriese, se aumentará el número de jueces a cuatro o más, sin aumentar el número de tribunales de un departamento. Aquellos dividirán su trabajo por reglamentación interna, para formar en cada caso un tribunal de tres miembros.

Si el número de causas de un departamento no requiriese la permanencia de tres jueces de justicia penal, formarán parte del mismo, el juez o los jueces de primera instancia que hubiere en el mismo departamento.

Art. 5o. — Habrá asimismo, en cada departamento judicial:

- a) Dos acusadores fiscales, por lo menos.
- b) Uno o más defensores de pobres.
- c) Dos peritos médicos.

Art. 6o. — Corresponderá al tribunal de justicia penal:

- a) La declaración en única instancia de haber lugar o no a la acusación.
- b) El pronunciamiento en única instancia sobre las cuestiones de hecho propuestas para el fallo, salvo recurso de nulidad.
- c) El pronunciamiento en primera instancia sobre la aplicación del derecho.

- d) La resolución en única instancia de todos los incidentes de la tramitación del proceso.

Art. 7o. — El tribunal celebrará audiencia con cinco miembros al solo efecto de pronunciarse sobre las cuestiones de hecho que se propongan para el fallo, cuando el acusador fiscal pidiera la aplicación de diez años de penitenciaría, o diez años de presidio, u otra pena más grave.

Cuando no hubiere suficiente número de jueces en el tribunal, será integrado a los fines de este artículo, con los jueces de lo civil, y subsidiariamente con abogados de la lista de conjuces. La prestación de este servicio será, para los abogados, carga profesional, obligatoria y gratuita.

Art. 8o. — La presidencia del tribunal de justicia penal será desempeñada por turno anual entre sus miembros. El orden del turno se determinará la primera vez por sorteo.

Art. 9o. Corresponderá al presidente del tribunal:

- a) Representar al mismo para la ejecución de todas sus resoluciones.
- b) Designar las audiencias para la vista pública de las causas.
- c) Tener todas las facultades necesarias para dirigir el debate público de los procesos, y para mantener el orden de la audiencia pública.

Art. 10. Corresponderá individualmente a cualquiera de los jueces del tribunal:

- a) Recibir la denuncia a que se refiere el art. 192, inc. 1, del código de procedimientos, y proveer lo que hubiere lugar en derecho.
- b) Dictar las órdenes de prisión preventiva, según el mérito de los hechos comunicados por el acusador fiscal que la solicite contra un procesado, libro II, tít. XIII y XIV del código de procedimientos, con la salvedad de no importar perjuicio respecto de haber o no lugar a la acusación.
- c) Recibir cualquiera declaración que un procesado espontáneamente solicitare prestar, la cual se agregará al proceso, cuando se refiere a los hechos que lo motivan.
- d) Hacer a los acusadores fiscales las indicaciones que estimare convenientes, para la mejor investigación y celeridad de los sumarios.

Capítulo III. De los acusadores fiscales, defensores de pobres, peritos y secretarios

Art. 11. Corresponderá a los acusadores fiscales y estarán obligados:

- a) A realizar, ordenar y dirigir todas las diligencias del sumario, al solo objeto de fundar en ellas la acusación o pedir el sobreseimiento.
- b) A sostener oralmente ante el tribunal, las acusaciones, en la forma que se expresará en el capítulo V, sección II.

Art. 12. Corresponderá a los defensores de pobres y estarán obligados:

- a) A prestar asistencia profesional, según su conciencia, a los imputados desde el momento en que se dictare el auto de prisión, o antes si aquellos lo pidieren.
- b) A recibir personalmente declaración de sus defendidos, respecto de los hechos que consideren útiles a la defensa, y de las circunstancias personales que al imputado convienen demostrar. Esta declaración se agregará a los autos del proceso, firmada por el defensor y el defendido, cuando este supiere hacerlo. Deberán reservar los hechos que correspondieren al secreto profesional (1).

Art. 13. Los peritos en los juicios criminales recibirán directamente del acusador fiscal las órdenes para las diligencias de su cargo, y atenderán los pedidos que en el mismo sentido les hicieren los defensores de los imputados.

Art. 14. Los acusadores fiscales, los defensores de pobres y los peritos médicos, podrán tener adscriptos a sus respectivas funciones, en número que no pase de cuatro por cada cargo. Los adscriptos auxiliarán a los titulares en sus respectivas funciones, deberán tener el correspondiente título universitario, pero no gozarán de sueldo. Serán candidatos para las carreras judicial, del ministerio público y la pericial, según los servicios que prestaren. A este efecto, los titulares informarán anualmente a la suprema corte.

Art. 15. Los secretarios del tribunal tendrán a su cargo:

- a) Llevar y autorizar el despacho del tribunal y el individual de los jueces del mismo.

(1) El objeto de esta disposición es evitar la negligencia muchas veces conocida de algunos defensores, que no se cuidan de escuchar a sus defendidos sobre los hechos que se le imputan, y les defienden sin haberlos hablado, ni conocido.

- b) Prestar a los acusadores fiscales la cooperación que les requiriesen para la actuación y diligencias del sumario, sin que les sea necesaria la previa autorización del tribunal en cada caso.

Art. 16. Los secretarios podrán tener hasta dos adscritos en las condiciones indicadas en el artículo 14, con aprobación del tribunal, ante el cual los mismos jurarán el fiel desempeño de sus funciones.

SECCION SEGUNDA

De la forma de proceder en el tribunal de justicia penal

Capítulo I. Disposiciones generales

Art. 17. El procedimiento ante la justicia penal será acusatorio. Antes de la sentencia los jueces y el tribunal sólo dispondrán de oficio las diligencias para mejor proveer. Después del fallo, el tribunal dispondrá de oficio todo lo relativo al cumplimiento de la sentencia.

Art. 18. Las declaraciones del imputado y de los testigos y demás pruebas del sumario, sólo tendrán valor para fundar la acusación; en ningún caso constituirán prueba en contra del acusado. Cuando éste último o su defensor aceptaren expresamente las pruebas del sumario, tendrán autoridad definitiva para el fallo, salvo el derecho del tribunal de verificarlas en todo o en parte para mejor proveer.

No tendrán valor absolutorio cuando el acusador fiscal no las hubiere recibido o verificado personalmente.

Art. 19. En todos los casos de acción pública, sea o no dependiente de instancia privada, la acusación será dirigida por el acusador fiscal.

Durante la instrucción del sumario, el querellante particular y el acusado o su defensor podrán pedir al agente fiscal la ejecución de las diligencias de investigación que indicaren por escrito. El agente fiscal las cumplirá o no, dejando constancia en este último caso de los motivos que tuviere para rehusarlas.

Capítulo II. De la instrucción preparatoria de la acusación

Art. 20. Cuando la denuncia se hiciere ante un funcionario de policía, éste enviará en el día, copia de la misma al acusador fiscal.

Art. 21. Cuando la denuncia se hiciere ante un acusador fiscal, éste podrá ordenar directamente a la policía, las diligencias urgentes. La policía cumplirá las órdenes como si emanaran de juez.

Art. 22. Cuando el hecho que motive la instrucción se hubiere cometido fuera del partido, asiento de la autoridad judicial del departamento, el acusador fiscal se trasladará al lugar del hecho por todo el tiempo que requiera la continuación del sumario. Podrá interrumpir su permanencia en el lugar del hecho, cuando de necesidad quedare en suspenso la investigación.

Si en el partido en que se cometió el delito hubiere agente fiscal de circunscripción, éste practicará las diligencias del sumario que le encomendare el acusador y terminadas, las remitirá a este último.

Art. 23. Las detenciones que la policía realizare por orden del acusador fiscal, no eximirán a la misma de la obligación de entregar al detenido al tribunal de justicia penal. Un juez del tribunal recibirá declaración al detenido, y con ella y con los informes que deberá dar el acusador fiscal confirmará la detención, dictando el auto de prisión, u ordenará la libertad del detenido.

Capítulo III. Preparación del sobreseimiento y de la acusación

Art. 24. Cuando el acusador fiscal considere terminadas las diligencias del sumario, lo expresará así en el mismo y pasará las actuaciones al tribunal, junto con todos los objetos materiales de que hubiera tomado posesión, o indicación del lugar en que se hallen depositados, cuando por su naturaleza lo hubiere dispuestó así.

Art. 25. El tribunal examinará el sumario, y con declaración de que no prejuzga sobre el mérito de las constancias del mismo, podrá ordenar la ampliación que estime conveniente. En el mismo acto ordenará en todos los casos el reconocimiento médico del procesado (si antes no se hubiese hecho), en el cual se establecerán las condiciones generales de salud, y especialmente las mentales del mismo. El tribunal no retendrá el sumario por más de seis días en su poder, para proveer la ampliación o el trámite que indica el artículo siguiente.

Art. 26. Examinado el sumario, y en su caso terminada la ampliación, volverá al acusador fiscal, para que en el término de seis días, redacte las conclusiones, que sólo podrán ser: a) estableciendo el mérito para sobreseer; b) acusando.

Art. 27. Si el acusador fiscal aconsejare el sobreseimiento, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 445 a 450 del código de procedimientos. El acusador fiscal no podrá aconsejar el sobreseimiento cuando no hubiere interrogado personalmente al acusado y a los testigos.

Art. 28. Si acusare, la acusación se limitará a determinar, en conclusiones precisas y numeradas:

- 1o. Los hechos punibles que resulten del sumario.
- 2o. La calificación legal de los mismos hechos determinando el delito que constituyan.
- 3o. La participación que en ellos hubieren tenido el procesado, o procesados, si fuesen varios.
- 4o. La cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, y, en su caso, la cosa que haya de ser restituida.
- 5o. La persona o personas que aparezcan responsables de los daños y perjuicios, o de la restitución de la cosa, y el hecho en virtud del cual hubieren contraído esta responsabilidad.
- 6o. La manifestación de las pruebas de que intente valerse, y la lista de testigos y peritos que hayan de declarar a su instancia.

Art. 29. Presentada la acusación fiscal, se comunicará el proceso por tres días al querellante particular, quien presentará sus conclusiones en la forma prevenida por el artículo precedente.

Art. 30. En este estado de la causa, el tribunal declarará si hay lugar o no a acusación, previo informe oral, en audiencia pública, del acusador particular, del querellante, del defensor y del acusado.

Se omitirá esta audiencia cuando la defensa no pidiere la absolución del imputado.

La declaración de no haber lugar a acusación, será con carácter definitivo o provisional, y tendrá el valor de los respectivos sobreseimientos del código de procedimientos.

Art. 31. Si declarase que hay lugar a acusación, el tribunal mandará que los autos permanezcan en secretaría, por un término no mayor de diez días, según la extensión de los mismos, o se entreguen al defensor.

Art. 32. Dentro del término fijado por el tribunal, el defensor indicará las pruebas que hayan de traerse a la audiencia, y los testigos y peritos que deberán ser citados. Presentará tantas copias de esta indicación, cuantas sean las partes que intervengan como acusadores, cuyas copias serán entregadas a estos últimos.

Art. 33. El tribunal examinará las propuestas de pruebas de una y otra parte y ordenará las que estime

convenientes. Respecto de las que fueren denegadas, solo cabrá protesta fundada en las consecuencias jurídicas que importare su omisión, con las cuales podrá fundarse oportunamente los recursos de inconstitucionalidad o inaplicabilidad.

Capítulo IV. Del juicio oral

Art. 34. Realizadas las diligencias ordenadas por el tribunal, éste fijará la audiencia para el juicio oral.

El juicio oral será público, bajo pena de nulidad. Podrá no obstante el tribunal disponer, por auto fundado en razones de utilidad o de orden público, o en el respeto debido a la persona ofendida por el delito, o su familia, que se celebre a puerta cerrada. Lo mismo podrá hacer cuando durante el debate se advirtiere que median aquellas razones para suspender la publicidad del juicio oral; el cual continuará cuando se haya retirado el público.

Art. 35. Abierto el acto, serán leídas en presencia del acusado o acusados, las conclusiones del acusador fiscal y del querellante particular. El presidente del tribunal interrogará al acusado sobre cada uno de los hechos afirmados en aquéllas, para que exprese si los reconoce o los niega. A pedido del acusado o su defensor, se omitirá este trámite.

Art. 36. En seguida el presidente interrogará a los testigos según los pliegos de preguntas que las partes hubieran entregado o presentaren en el acto; y permitirá, en los límites convenientes al orden del debate, que las partes o sus defensores les interroguen directamente. Lo mismo se hará con los peritos.

Art. 37. Abierto el juicio oral continuará durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su conclusión. El tribunal, en auto fundado, podrá suspenderlas cuando lo requiriese alguna cuestión incidental que no pudiese resolverse en el acto, o fuese necesario practicar alguna diligencia fuera del lugar de las sesiones, cuando no compareciere algún testigo cuya declaración se considerare necesaria, o por indisposición de algunos de los jueces, acusador fiscal o defensores.

Capítulo V. de la acusación y defensa oral y de la sentencia

Art. 38. Terminado el examen de las pruebas, el presidente concederá la palabra sucesivamente al acu-

sador fiscal, al querellante particular y al defensor o defensores. Cada uno de ellos entregará en el mismo acto, en hoja firmada, separadamente, las cuestiones sobre las cuales les pide el pronunciamiento expreso del tribunal.

El tribunal podrá proponer la modificación de las cuestiones, y aceptada la modificación propuesta, tendrá el mismo valor que si se hubiera presentado originariamente por las partes.

No aceptada, no habrá lugar al recurso cuando el tribunal se pronuncie sobre ella.

Art. 39. Terminada la acusación y la defensa, el presidente del tribunal concederá la palabra al acusado o acusados para que manifiesten lo que estimen conveniente.

En seguida el presidente declarará concluso el juicio, y, sin levantar la sesión, el tribunal deliberará y votará, en cuarto intermedio, cada una de las cuestiones de hecho, por afirmativa o negativa, con simple enunciación de las pruebas que determinan el voto de cada juez.

Vuelto a la audiencia el tribunal, el secretario dará lectura de los votos sobre cada una de las cuestiones de hecho. Terminada la lectura el presidente citará verbalmente a las partes para que comparezcan en la audiencia que designará con intervalo no mayor de seis días, para darse en ella lectura de los votos sobre las cuestiones de derecho y del fallo definitivo.

Art. 40. El secretario del tribunal extenderá el acta de cada sesión que se celebre, y en ella hará constar sucintamente lo que el presidente o las partes le indicaren tomar nota.

Al terminar la sesión se leerá el acta, haciéndose en ella las rectificaciones que las partes reclamen si el tribunal las estimare procedentes. Las actas se firmarán por los jueces del tribunal, el acusador fiscal y abogados de las partes.

Art. 41. Constituido el tribunal en la audiencia pública fijada, el secretario dará lectura del fallo. En los casos reservados, lo leerá ante el acusador fiscal y los abogados de las partes.

Art. 42. Pasado el sexto día sin que el tribunal pronunciase sentencia, a pedido de cualquiera de las partes, declarará que ha cesado su jurisdicción, y pasará los autos al tribunal más inmediato, el cual anulará el juicio oral y lo abrirá de nuevo. Las costas del nuevo juicio comprendidos los gastos de traslación, serán a cargo de los jueces del primer tribunal. Serán li-

quidadas en la nueva sentencia que se dicte, y se ordenará de oficio, el embargo sobre los sueldos de los jueces causantes del retardo.

De la justicia penal de circunscripción

Art. 43. Los delitos y faltas de competencia de los jueces de circunscripción, serán juzgados con arreglo a las disposiciones del libro VI, títulos I y VII del código de procedimientos, con la excepción del artículo siguiente.

Art. 44. Vencido el término de prueba a que se refiere el artículo 755 del código de procedimientos, el juez señalará audiencia pública entre el quinto y el octavo día, para que comparezcan el agente fiscal, el querellante particular, si lo hubiere, el defensor y el imputado. El juez abrirá la discusión oral de la causa, previa lectura de las piezas de cargo y descargo. Terminada la discusión, acordará la palabra al acusado y hará constar en el acta lo que éste pidiere. De las exposiciones del agente fiscal y del defensor, sólo se hará constar sus conclusiones y peticiones.

R. Rivarola.

De la "Revista Argentina de Ciencias Políticas" año 5, tomo 10, número 53, pág. 428. 12 de julio de 1915.

Reforma de los recursos ante la corte suprema

El colegio de abogados ha iniciado las reuniones semanales para conversar sobre temas de interés profesional y de reformas jurídicas. En la reunión del 17 de junio el presidente del colegio, doctor Norberto Piñero, expresó que las reuniones del año anterior habían sido provechosas y que de ellas habían salido iniciativas y proyectos que han llegado hasta el congreso; que las de este año tendrían sobre las del año anterior, la ventaja de elegirse de antemano por cualquiera de los socios, el tema sobre el cual se hablará; que para esta primera sesión el doctor Rodolfo Rivarola había comunicado el tema anunciado ya en la invitación pasada por secretaría, de los "recursos ante la corte suprema nacional"; y para el jueves próximo se hablaría sobre el juicio de quiebras, presentado por el doctor Coronado. Invitó en seguida al doctor Rivarola a exponer la cuestión.

El doctor Rivarola recordó los antecedentes legislativos sobre organización de la justicia nacional, desde la ley de la confederación, de septiembre de 1858. Demostró que la organización de 1862, mantenida hasta 1902, dió a la corte suprema jurisdicción apelada en toda materia de justicia federal. Así, durante treinta años se tuvo una jurisprudencia federal en toda materia del derecho común (los códigos) controvertida en causas de su competencia. La ley de 1902, al crear las cámaras de apelaciones, les dió competencia definitiva en toda causa de derecho común, y reservó para ante la corte suprema, sólo el recurso llamado extraordinario (casos de constitución y de leyes especiales del congreso), que se dá contra los fallos de los tribunales de provincia.

Criticó esta última solución de la ley de 1902, sosteniendo que en todo fallo de la justicia federal, va siempre implicada la constitución y las leyes que organizan la justicia federal, de modo que lo extraordinario en relación a la justicia de las provincias, es absolutamente ordinario en la justicia nacional. Abundó en otras consideraciones para fundar su concepción de un proyecto de ley por la cual la corte volviere a tener la función reguladora de la unidad de jurisprudencia que tuvo hasta 1902, con positiva influencia indirecta sobre la justicia común ordinaria. Para demostrar la posibilidad de realizarse tal propósito sin echar sobre la corte el peso de los recursos de apelación en todas las causas de justicia federal, leyó un proyecto de recurso de casación con estructura análoga pero simplificada, al recurso de inaplicabilidad de ley que existe en la provincia de Buenos Aires por la constitución de 1873.

Apoyaron el pensamiento y pidieron algunas aclaraciones los doctores Wilmart, Funes, Madero, Raffo y otros. Por último, el doctor Tezanos Pinto manifestó que el pensamiento le era simpático y que tenía motivos de aprobación independientes de los estrictamente jurídicos que habían sido expuestos y a los que prefería llamar "el fundamento social del recurso". Era éste el de la confianza en la justicia que debía resultar en todo fallo de última instancia. Cuando un juez de primera instancia que ha seguido las incidencias de una causa y está interiorizado de su prueba, da un fallo, y una cámara de cinco, y más comúnmente de tres miembros lo revoca, no queda satisfecho el sentimiento de justicia porque la decisión de la cámara si bien de mayor número, puede no ser dada con tanto conocimiento

como la del juez único. La confianza sólo se restablece con el fallo de un tribunal superior y en presencia de una discusión más completa. Si bien cuando el fallo de segunda instancia es confirmatorio, no existe ya tan poderosamente, por lo menos, la misma razón, hay siempre por lo menos, un grande interés social en la análoga aplicación del derecho en casos semejantes y a esto no puede llegarse cuando en una misma organización judicial hay varios tribunales de última instancia. Es indispensable que un tribunal superior tenga cierta igualdad en la aplicación de la ley. Este es el principio, agregó, aceptado y dominante en la organización de justicia, en todas las provincias; por lo menos lo han admitido las más importantes y que han cuidado más en algún momento de organizar bien sus tribunales. La actual organización de la justicia federal constituye así una excepción al principio de la mejor organización judicial. La única razón en favor de tal excepción es la de la suma de trabajo que una tercera instancia haría recaer sobre la corte suprema; y a su juicio esto quedaba evitado en el recurso propuesto por el doctor Rivarola por las limitaciones que prevé así circunscribiéndolo a la inaplicabilidad de la ley como por la fijación de multas que impedirán el abuso del recurso. En vista del asentimiento general y de las ideas expuestas, el presidente doctor Piñero indicó la conveniencia de que una comisión examinara y estudiara la reglamentación del recurso y presentara en la reunión del 31 de este mes un dictamen que sería el tema a tratarse en ese día. A indicación de varios socios presentes fué autorizado el presidente para designar la comisión, y nombró al autor del proyecto y a los doctores Tezanos Pinto y Wilmart.

El proyecto del doctor Rivarola es el siguiente:

Recursos ante la corte suprema de la nación

Artículo 10. — Además de los recursos de apelación y nulidad, admisibles en los casos del artículo 30. de la ley núm. 4055, y del recurso de apelación que establece el artículo 14 de la ley núm. 48, de 14 de septiembre de 1863, y artículos 40., 50., y 60. en la ley número 4055, con la salvedad que aquí se expresa, habrá para ante la corte suprema de justicia de la nación, el recurso ordinario de casación, que reglamenta la presente ley.

Deróganse del art. 60. de la ley núm. 4055, las

palabras: "por las cámaras federales de apelación".

Art. 20. — Procede este recurso contra las sentencias definitivas de las cámaras federales de apelación.

Se entiende sentencia definitiva para los efectos de esta disposición, la que, aun cuando haya recaído sobre un artículo, termine el pleito y haga imposible su continuación.

También se entiende sentencia definitiva, para los mismos efectos, la en que se declare haber, o no haber lugar a oír a un litigante condenado en rebeldía.

En los pleitos posesorios, en los ejecutivos y en todos los demás después de los cuales puede seguirse otro juicio, sobre lo mismo que haya sido objeto de ellos, no se da este recurso.

Art. 30. — El recurso puede fundarse:

10. En que la sentencia se ha dado contra la constitución nacional en cualquiera de sus disposiciones.
20. En que ha violado o aplicado falsa o erróneamente la ley, sea de los códigos generales, sea de las leyes especiales del congreso.

Art. 40. — Se interpondrá dentro de veinte días de notificada la sentencia, directamente ante la corte suprema, por escrito que deberá contener en términos claros y concretos, una relación de la sentencia recurrida, la cita de la constitución o de la ley violadas o aplicadas falsa o erróneamente en la sentencia, y la demostración del derecho que pretende el recurrente.

Art. 50. — Cuando se deduzca en causa civil, el recurrente, al interponerlo, acompañará la constancia de haber depositado en el Banco de la Nación Argentina la suma de quinientos pesos si la sentencia recurrida fuese revocatoria, o reformare la de primera instancia, y de dos mil pesos si fuere confirmatoria.

El depósito se devolverá al recurrente si el éxito del recurso le fuere favorable; en caso contrario lo perderá en favor del consejo nacional de educación.

No se exigirá lo oblación cuando el recurrente sea el ministerio fiscal o pupilar o alguna otra persona que intervenga en el juicio con nombramiento de oficio o por razón de un cargo público.

Art. 60. — En causa criminal sólo procederá el recurso en favor del reo y cuando se le hubiese impuesto pena de penitenciaría, presidio, deportación o muerte.

Art. 7o. — Interpuesto el recurso la corte examinará sin trámite ni substanciación, si el recurrente ha observado los requisitos de los artículos precedentes. En caso negativo desestimaré el recurso y declarará perdido el depósito a beneficio del consejo nacional de educación. En caso afirmativo, ordenará al tribunal apelado que emplace a las partes para que comparezcan ante la corte, y hecho, le remita los autos.

Art. 8o. — Recibida la causa se oirá al procurador de la nación cuando el recurso se refiriese a una cláusula de la constitución o a una ley especial del congreso, o cuando se tratare de un proceso criminal. El procurador se expedirá en el término de veinte días.

Art. 9o. — Recibida la causa, y oído el procurador cuando se tratare de los casos del artículo precedente, la corte llamará autos para sentencia. Dentro de diez días de notificada esta providencia cada parte, podrá presentar una memoria en derecho, limitada a sostener su inteligencia de la constitución o de la ley.

La corte fallará dentro de sesenta días de notificada la providencia de autos.

Art. 10. — Cuando la corte estimare que la sentencia apelada ha violado o aplicado falsa o erróneamente la constitución o la ley, su fallo comprenderá los puntos siguientes:

- 1o. Declaración de la violación o errónea aplicación de la constitución o de la ley.
- 2o. Declaración de la inteligencia correspondiente de la constitución o de la ley y casación del fallo recurrido.
- 3o. Envío a una cámara de apelación distinta de la que hubiese fallado, para que se pronuncie en el pleito según la inteligencia de la constitución o de la ley fijada por la corte.
- 4o. Devolución al recurrente de la suma que hubiese depositado e imposición de costas al contrario si se hubiese opuesto en el recurso.

Art. 11. — Cuando la corte estimare que no ha existido violación ni falsa o errónea aplicación de la constitución o de la ley, lo declarará así desechando el recurso y condenando al apelante en las costas causadas por él. La suma consignada en depósito se aplicará al pago de las costas sin perjuicio de la acción por el saldo, si éstas excedieren la suma depositada. Si su monto fuere inferior a la suma

oblada se pondrá el sobrante a disposición del consejo nacional de educación.

R. Rivarola.

Del doctor E. S. Zeballos

Buenos Aires, agosto 19 de 1920.

Señor doctor Roberto Parry, presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Muy señor mío:

He tenido el honor de recibir su atenta nota del 6 de agosto, adjuntándome un cuestionario sobre la reorganización judicial de la capital.

Agradezco al señor presidente este honroso recuerdo.

Las cuestiones que me somete son de la mayor gravedad, pues no solamente se refieren a la organización, sino a la disciplina.

La tendencia a aumentar tribunales es un punto delicado, cuando se sabe que los nuestros comienzan a trabajar a la 1 p. m. y por regla general terminan a las 5 p. m., mientras que en todas partes del mundo, sin excluir la corte suprema federal de los Estados Unidos, se asiste a las oficinas durante 8 horas consecutivas.

Las reformas procesales son urgentes y no se las encontrará solamente en la modificación de las leyes, sino en un cambio fundamental de las costumbres de la magistratura, cosa difícil o tal vez imposible en el momento actual de nuestra sociedad, en la cual se han aflojado todos los resortes de la buena administración.

Es notorio que nuestra justicia reposa, principalmente en la obra de los secretarios; y que una gran parte de estos desempeñan a la vez otros empleos, de manera que su labor es intensísima y tiene que ser distribuida entre los juzgados y aquellos empleos.

Es muy raro el juez argentino que tiene contacto con el expediente y con los actores en los pleitos; y

en esa forma la justicia está expuesta a gravísimos errores, como lo revela el hecho de que reunidas las cámaras de apelación para unificar la jurisprudencia discordante, a menudo nada unifican en realidad, pues se dividen en dos campos de equilibrada autoridad.

Cuando el juez actúa sobre el expediente, entre las partes litigantes y de un modo especial sobre los testigos, aquí deplorables por regla general, desde que empieza el pleito puede conocer quién tiene la razón, quien obra de mala fe y encaminar con rapidez la solución.

Pero si el juez deja que en el expediente y entre las partes sólo actúen los secretarios y el oficial primero de la oficina, cuando llega la hora de la sentencia prefiere que la proyecte el secretario u oficial, pues él se encuentra en presencia de lo desconocido y complicado.

Estas son indicaciones generales que me permito hacer al señor presidente, no con el fin de contribuir a soluciones, sino de indicar la necesidad de una investigación a fondo sobre cómo se administra justicia entre nosotros, que llevará al congreso el convencimiento de que no es tan urgente la reforma de las leyes, como la de las costumbres judiciales.

Me excusará el señor presidente si no le contesto en forma definida cada una de las cuestiones formuladas. Son tan graves que necesitaría escribir un libro para fundar mi opinión sobre estos cinco capítulos; y en estos momentos me encuentro recargado de quehacer profesional, que me imposibilita de prestar ese nuevo servicio al país.

Haciendo votos por el éxito de los acertados trabajos emprendidos por esa comisión, me es grato renovar al señor presidente, la seguridad de mi mayor consideración.

E. S. Zeballos.

Del doctor P. Calatayud

Buenos Aires, agosto 23 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados:

Contesto concretamente y por su orden las pre-

guntas que contiene su muy atenta fecha 6 del corriente.

a) ¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital? ¿Qué solución aconseja para resolver este problema?

Yo pienso que debe dejarse la justicia federal separada de la del fuero ordinario. Aparte de la especialidad de los asuntos que aquélla debe resolver, y que requiere por lo mismo conocimientos particulares y a veces técnicos, la policromía de las materias que sería consecuencia de la unificación, habría de exigir en los jueces un conocimiento tan vasto y sobre todo tan poliforme que solo podrían ser magistrados competentes los dotados de condiciones extraordinariamente maravillosas. ¿Se imagina la comisión un juez que debe fallar sobre cuestiones de derecho civil, constitucional, comercial; los regidos por leyes electorales y de ciudadanía; los asuntos de derecho marítimo y aduanero; marcas de fábrica, patentes de invención, propiedad literaria; patentes, impuestos, demandas contra la nación, etc., etc. dominando todas y cada una de estas distintas verdaderas especialidades?

Lo que debe unificarse, a mi juicio, entre nosotros son los fueros ordinarios, comercial y civil. El federal mejor es dejarlo como está.

b) ¿Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?

Queda contestada en el punto anterior.

c) ¿Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito?

Actualmente tenemos en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Paraná.

Me parece que convendría aumentar su número. Por ejemplo: una cámara para las provincias de Cuyo; los asuntos de Mendoza vienen a Buenos Aires a fin de ser fallados.

d) ¿Qué reformas procesales considera urgentes?

El establecimiento del juicio por jurados, convirtiendo en realidad la pertinente prescripción constitucional.

Extender a la justicia federal el derecho de recusar sin causa a los miembros de la magistratura que pueden serlo en la justicia ordinaria.

Unificar el fuero comercial y civil.

Como entiendo que las preguntas se refieren a los principios generales, así quedan contestadas, sin

descender al detalle, que de entrar en él haría esta correspondencia interminable.

Saludo a usted con mi más distinguida consideración.

Pablo Calatayud.

**Del profesor de la facultad de derecho,
doctor L. A. Podestá Costa**

Buenos Aires, agosto 23 de 1920.

*Señor doctor Roberto Parry, presidente de la comisión
de justicia de la honorable cámara de diputados de
la nación.*

Tengo el honor de acusar recibo de la atenta nota del señor presidente, en que, por encargo de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, se sirve pedirme mi opinión sobre diversas cuestiones sometidas a su estudio.

Entiendo que al formular dichas preguntas la comisión de justicia se propone realizar una especie de encuesta a fin de observar cuáles son las orientaciones generales que dominan al respecto entre el foro y el profesorado. En este concepto, paso a contestar en forma breve y sintética las preguntas formuladas:

I. Estimo de conveniencia la unificación del fuero federal y ordinario en la capital federal. La dualidad de jurisdicción, que hasta ahora ha subsistido por escrúpulos constitucionales que pueden salvarse, irroga a diario perjuicios y dificultades que deben desaparecer.

II. No creo necesario ampliar la jurisdicción federal incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos. Conviene mantener los juicios de quiebra bajo la jurisdicción de los jueces de comercio, con lo que se asegura la especialización de sus funciones. Los jueces federales tienen ya a su cargo tareas excesivamente múltiples y diversas.

III. La cuestión relativa al aumento de las cámaras federales de circuito depende exclusivamente de la estadística del movimiento judicial, que no tengo a mano. Entiendo que la de La Plata tiene recargo de trabajo. Por lo menos, quizá procedería

una distribución más equitativa de jurisdicciones entre las cámaras existentes.

IV. Procedería afrontar de una vez el problema de una reforma general de nuestros procedimientos judiciales.

En lo civil, para no señalar sino una reforma urgente y práctica, sería útil introducir el sistema de las notificaciones por correo, al cual respondía un proyecto de ley que estuvo por votarse hace pocos años.

La reforma se impone con caracteres imperiosos en lo que respecta al procedimiento penal. En esta materia soy partidario del procedimiento oral ante tribunales colegiados. El procedimiento escrito debe mantenerse en los juicios de carácter civil (con excepción de los de divorcio y otros sobre cuestiones de familia, en que se requiere que el juez pueda formarse una convicción propia "de visu" sobre las partes y la prueba), pero es un anacronismo inexplicable en las causas criminales.

Agradeciendo la deferencia del señor presidente, me es grato presentarle las seguridades de mi consideración más distinguida.

L. A. Podestá Costa.

Del doctor H. C. Rivarola

Buenos Aires, 25 de agosto de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados, doctor Roberto Parry.

Acuso recibo de su nota de fecha 6 del corriente a la que me es grato contestar:

Unificación de fueros: Creo que serán excepcionales las opiniones en contrario; conviene la unificación, es útil, es necesaria. Por un error de interpretación constitucional existe esa doble justicia y es tiempo ya de que desaparezca la anomalía. Como solución entiendo que todos los jueces de la capital (de los tres fueros) deben ser declarados jueces nacionales, cuya declaración deberá ser acompañada con la de la prelación en que deberán apli-

carse los códigos de procedimientos para la capital y las leyes federales de procedimientos.

Pero, al pasar, diré también que entiendo que no sólo conviene la unificación del fuero sino asimismo de la materia: el sistema de la provincia de Buenos Aires en la que los jueces lo son en el fuero civil y comercial ahorra una cantidad de cuestiones de competencia y la justicia y el derecho no se perjudican:

Así pues opino que la justicia de la capital debe ser nacional y dividirse: a) civil y comercial; b) criminal. En cuanto a esta última todos los jueces de lo criminal deberán tener iguales funciones, suprimiendo la división de jueces del crimen, correccionales y de instrucción; sistema también vigente en la provincia.

Jurisdicción federal; ampliación: Queda contestado en la pregunta anterior en lo que se refiere a la capital. Creo que conviene la ampliación también para las provincias, por muchas razones, la primera de las cuales es la de que la ley de quiebras no es un código sino una ley del congreso, cuya aplicación por consiguiente corresponde a los tribunales nacionales.

Cámaras federales: Creo innecesario su aumento y me baso en los datos sobre el número de resoluciones de cada una.

Reformas procesales urgentes: Se requieren muchas; las que cito, sólo son ejemplo y algunas han sido ya proyectadas:

- a) *Tribunal de casación:* Considero útil su implantación.
- b) *Validez de los poderes:* Ocurre muchas veces que se revoca un poder y no llega a conocimiento del mandante, y por lo menos no llega a conocimiento de terceros. Con el tal poder se realizan actos que originan pleitos. De tal origen son también las extrañas declaraciones en las escrituras de que el mandato se "asegura estar en vigencia".

Bien; esto que es grave puede ser fácilmente subsanado: ningún poder tendrá validez mientras no se encuentre inscripto en el registro de mandatos ni dejará de tenerla mientras no se cancele la inscripción; los escribanos al redactar las escrituras y aun los apoderados al presentarse en juicio deberán comprobar la vigencia del mandato,

y el registro de mandatos deberá informar dentro de las 24 horas.

- c) *Notificaciones por correo:* La mitad del tiempo que demora un juicio se debe a las notificaciones, y los "regalos" que los procuradores hacen a los empleados, son también para notificaciones. Sería una excelente reforma la de las notificaciones por correo, con aviso de retorno, en las 24 horas siguientes de dictado el auto. Me refiero sólo a aquellas que necesariamente deban ser hechas en los domicilios de las partes, testigos, etc. no a las que se efectúan por nota en el expediente.
- d) *Arancel de abogados:* Me parece urgente, para evitar injusticias y protestas unas veces de los letrados y otras de los litigantes, como también para reglamentar por así decirlo el arbitrio judicial en esta materia. Creo indispensable que se oiga respecto del arancel al colegio de abogados.
- e) *Dar autoridad legal al colegio de abogados.*

Me es grato saludar al señor presidente con mi consideración distinguida.

Horacio C. Rivarola.

Del doctor F. Plnedo

Buenos Aires, agosto 26 de 1920.

Honorable cámara de diputados (comisión de justicia)
Señor presidente diputado nacional, doctor don Roberto Parry.

Cúmpleme responder al honroso pedido de opinión contenido en la nota circular de esa digna comisión en el corriente mes.

En diferentes ocasiones he manifestado, — algunas veces como diputado en esa honorable cámara, — las consideraciones que me inducen a no intervenir en las cuestiones que tuve a mi cargo como funcionario público.

No obstante, sin entrar de nuevo en la discusión,

puedo decir que siendo ministro de justicia e instrucción pública sostuve la conveniencia y a mi juicio la necesidad, con arreglo a la constitución, de establecer un sólo fuero en los tribunales de la capital. La letra misma del art. 94 y su evidente espíritu, establecen como será ejercido en ella el poder judicial de la nación: — por “una” suprema corte de justicia y por “los demás” tribunales inferiores que el congreso establezca. Las garantías de los artículos 95 y 96, independencia e inamovilidad, comprenden a todos los jueces, aunque algunos de ellos, para el mejor desempeño de sus funciones, se dediquen especialmente por la ley al estudio, conocimiento y resolución de causas de diferente naturaleza.

Recuerdo haber sostenido en aquella época que podrían ser esas causas, las relativas, por ejemplo, a materias internacionales y constitucionales, — a leyes especiales, entre ellas, ferrocarriles, trabajo, empresas que desempeñan servicios públicos; — justicia de menor cuantía; — causas criminales, causas correccionales, juicios de avenimiento o justicia de paz; — y dentro de los códigos civil y comercial (división antigua que quizá deba desaparecer dando lugar a otras más necesarias y útiles por el momento): concursos y quiebras; patentes de invención y marcas de fábrica; testamentarias; tierra pública y territorios nacionales, etc., etc. Lo que en mi opinión no debía ser motivo de fuero especial en la capital, ni declinatorias de jurisdicción, es la condición del demandado con relación al demandante por nacionalidad ni por domicilio personal.

Saludo al señor presidente y por su intermedio a la comisión de justicia, con mi mayor consideración.

Federico Pinedo.

**Del profesor de la facultad de derecho,
doctor J. P. Ramos**

Buenos Aires, agosto 26 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados, doctor don Roberto Parry.

Tengo el agrado de dirigirme a usted contestando su nota circular de agosto 6, en la que me solicita

mi opinión respecto a algunas cuestiones que tiene a estudio esa comisión.

Voy a darla en la forma más sintética posible, porque creo que lo que se desea, en este caso, es un juicio general sobre la materia y no fundamentos especiales que están en la conciencia de todos.

10. ¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital?

Contesto decididamente que no, a esta pregunta.

No soy de los que creen que el congreso no puede dictar una ley extendiendo la jurisdicción federal más allá de las limitaciones impuestas por el artículo 100 de la constitución; pero, considero que esa extensión de jurisdicción sería de todo punto inconveniente.

La justicia federal es de excepción. Ha sido establecida por el texto constitucional para garantizar eficazmente el ejercicio de ciertos derechos. Debe conservar, pues, en todo momento y en todo el país la característica esencial de ser uniforme y de estar asentada en una base que le permita poder cumplir con la necesidad *federal* que determinara su creación. Nació para ser un regulador de la constitución y de las leyes de la nación, en cuanto la una puede ser violada o las otras puedan ser violatorias de ella y para ser aplicada a juicios y a personas determinadas. En consecuencia, por útil que pudiera ser la existencia de un sólo juez y de un sólo fuero, es útil también mantener esa dualidad, porque ella deriva de la esencia misma de nuestra organización federal.

Si la constitución ha dado una sola jurisdicción uniforme en el artículo 100 a toda la justicia nacional, desde la corte suprema hasta los tribunales inferiores, sería atentar contra ella, extender la de los jueces federales de la capital y dejar subsistente la de todos los demás. ¿Por qué ha de ser una cosa el juez federal de Buenos Aires y otra el juez federal de Rosario? ¿Por qué un mismo juez, el de Buenos Aires, ha de tener dos tribunales superiores de apelación, uno la cámara federal, para los asuntos de orden federal del artículo 100, y otro una cámara ordinaria para los asuntos que no fueran de la materia del artículo 100? ¿Y si no hubiera dos cámaras, por qué se unificarían también la actual federal y las de apelaciones, por qué unos asuntos del juez podrían ir hasta la corte suprema y otros a la cámara especial que se formara?

He aquí cuestiones concretas que ninguna ley

podría resolver en forma conveniente para la justicia. Se dice que hay engorrosos litigios de competencia que dificultan la fácil tramitación de los juicios; pero, ¿no los hay también entre jueces del fuero ordinario, civiles y comerciales, o entre jueces de una localidad y jueces de otra? ¿Sería conveniente, entonces, para evitar toda clase de cuestiones de competencia, tener el juez único, que fuera al mismo tiempo federal, civil, comercial, criminal y correccional? Nunca puede ser una razón valedera para fundar una reforma, la simple de que con ella se evitarían esos conflictos. Estos, la mayor parte de las veces, nacen, más del afán de enredar o alargar un asunto, que de la deficiencia de una organización judicial en dos fueros distintos. Si los unificamos a ambos, las cuestiones cambiarán de nombre, pero seguirán siendo "chicanas" en el fondo o ignorancia de la ley. Y ello no se evita dando a un solo juez la jurisdicción del artículo 100 de la constitución y a todos los demás asuntos civiles o comerciales de los pleitos corrientes. Lo que ganaríamos en cuanto a la inexistencia de litigios de competencia lo perderíamos en dispersión inútil de la labor de un magistrado. ¿Cuál de esas dos cosas tiene más valor para negar o para afirmar la conveniencia de la reforma?

2o. ¿Qué solución aconseja para resolver este problema?

Negando la conveniencia de la unificación de los fueros, creo que se evitarían casi todos los males derivados de su dualidad imprescindible, dictándose un código único de procedimientos que fuera aplicado de una manera uniforme por los jueces federales y ordinarios.

Sin embargo, esto no remediará del todo la cuestión. La aplicación de un mismo código por tribunales distintos, produce siempre interpretaciones diferentes que llegan, por lo general, hasta a modificar los alcances y las garantías de la ley, como sucede actualmente con las leyes de fondo y de forma en la aplicación y sentido que les dan, en varios puntos fundamentales, las dos cámaras civiles entre sí y entre ellas y la comercial. Para evitarlo, en parte, sería menester crear una organización entre la cámara federal y las cámaras de apelaciones civiles y comerciales, que permitiera la fijación de criterios uniformes de jurisprudencia y de interpretación.

3o. ¿Conviene aumentar la jurisdicción federal, in-

cluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?

Para cumplir la disposición contenida en el artículo 67, inciso 11 de la constitución y para evitar males graves que suceden en algunas provincias en la importantísima materia de las quiebras, opino que debería ser extendida para estas últimas, la jurisdicción de los jueces federales. Pero, como ello pudiera originar ciertos inconvenientes en la ciudad de Buenos Aires y otras de gran movimiento comercial, a causa de la enorme tarea que significaría para los jueces tener que entender en tantos asuntos, la solución consistiría, quizá, en especializar la tarea de esos magistrados, dando a uno las quiebras y las demás causas comerciales y a otro las civiles y criminales o como fueren.

40. ¿Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito?

No estoy en condiciones de responder a este punto, pues ignoro la importancia concreta de los asuntos y del radio de acción que tienen a su cargo las cámaras actuales.

50. ¿Qué reformas procesales considera urgentes?

La revisión completa de los códigos de procedimientos actuales, en forma que den más amplias atribuciones a los jueces para suprimir o para reprimir, dentro de lo posible, los efectos de la mala fe de ciertos profesionales, que encuentran en la ley actual medios facilísimos para burlarse del derecho ajeno y de la autoridad de los magistrados. La justicia, por definición, debe ser rápida y barata para ser buena y eficaz. Lo demás, depende de la autoridad científica y moral de los jueces. Por esta última razón, opino que un código procesal debe facilitar a los magistrados encargados de la función judicial, los medios necesarios para ir derechamente al fin de dar a cada uno lo que le corresponde en la forma más rápida y económica posible; pero siempre que se pueda, partir de la base de que la atribución sería bien aplicada. ¿Cómo se conseguiría esto? Teniéndose la seguridad de que los jueces son elegidos con el criterio de aquel ministro inglés, que decía: para nombrar un juez, busco un hombre que sea un perfecto caballero; si sabe derecho, mejor. ¿Cómo indicar las reformas más urgentes? Son demasiadas. Explicarlas y fundarlas todas, exigiría un libro o un proyecto de código, muy diferente del actual.

La amplitud de la materia comprendida en los

diversos puntos de la nota que contesto, me impide dar una contestación útil a los fines de la encuesta iniciada por la comisión que usted preside. Por eso, me he limitado a dar simplemente mi opinión, primero, porque creo que otros lo harán mucho mejor que yo y segundo porque entiendo que lo que esa comisión desea es, más que enseñanzas y desarrollo de doctrinas, puntos concretos de vista que le permitan tener una idea de la orientación general de las opiniones consultadas sobre cada una de las cuestiones de la encuesta.

Saludo al señor presidente de la comisión con mi consideración distinguida.

Juan P. Ramos.

Del doctor J. C. Rébora

Buenos Aires, agosto 26 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor don Roberto Parry.

Tengo el honor de acusar recibo de la nota que el señor presidente, con fecha 6 del actual, se ha servido dirigirme, y de responder punto por punto, en cuanto los resultados de mi observación directa lo consienten, al cuestionario que aquélla contiene.

Creo, en primer lugar, que conviene unificar los fueros federal y ordinario de la capital. La reforma está aconsejada por razones de sencillez, de claridad, de orden, de celeridad, que podrían sintetizarse en el concepto de economía. No hay valla constitucional que la resista. El argumento histórico que sirve para justificar la investidura de una magistratura llamada federal al lado de otra llamada ordinaria, o viceversa, nunca fué extremadamente fuerte respecto de la administración de justicia en la capital federal, donde en efecto la cuestión, a medida que las instituciones tomaban carácter, iba quedando definida como una doble jerarquía instituida por la ley con alcances puramente formales; como una creación que no correspondía a ninguna necesidad esencial; como una realidad cuyo contenido se traduce, a fin de cuentas, en un asunto de

precedencias, no bastante significativo para sobreponerse a las razones de economía que invoqué al comienzo. No se diga que la judicatura federal, de 1a. y 2a. instancias, tiene más que la ordinaria de esta capital, la misión de salvaguardar la constitución: todos los jueces deben aplicar, antes que las secundarias, la ley fundamental, y en un conflicto entre éstas y aquéllas, hay que decidir entre la constitución y la ley. La solución que se busca puede ser dada por el poder legislativo sin menoscabo de la inamovilidad de los jueces; y aunque no estoy del todo seguro de haber acertado con la intención del cuestionario, cuando éste pregunta: "qué solución aconseja, etc.", me permito agregar que la unificación del fuero,—reforma orgánica cuya correspondiente dinámica sería la unificación de los procedimientos—puede contemplar en un ancho campo todas las situaciones actuales y todas las perspectivas posibles.

La segunda pregunta, sobre si "conviene ampliar la jurisdicción federal incluyendo en ella el conocimiento de quiebras y otros asuntos", sólo habría requerido contestación, respecto de los tribunales de esta capital, en caso que mi opinión sobre la primera hubiera sido diversa. Respecto de los tribunales de provincia, carezco del caudal de experiencia que sería necesario para que mi opinión pudiera tener algún interés.

Excusándome de contestar la tercera, sobre si "conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito", paso a tratar la cuarta sobre reformas procesales urgentes.

Hay en nuestra administración de justicia un mal que no ha de desaparecer con modificaciones episódicas. Es el mal del expedienteo, de la actuación escrita, de la prueba material. Se advierte en todos quienes tienen que ver con los tribunales, un gran cansancio y un escepticismo inerte, que no permiten esperar resultados saludables sino de la reforma a fondo del propio sistema judicial en la fase orgánica y en la procesal. Hay cuestiones sencillas que tardan años en resolverse, y hay soluciones que parecen girar menos sobre el principio de "dar a cada uno lo suyo", que sobre meros trámites del juicio, los cuales sin embargo han sido ideados para mayor garantía de aquél. No hay derecho para hacer pesar la responsabilidad de estos hechos sobre una parte de los togados, y a nada práctico conduciría distribuirla sobre todos. Mucho podría ganarse instituyendo gradualmente la oralidad del jui-

cio, que me parece, en cambio, conveniente adoptar.

Persuadido de que lo único que interesa a la encuesta es la exposición descarnada de puntos de vista fundamentales, cierro aquí mi respuesta y saludo al señor presidente y por su intermedio a la honorable comisión, con mi consideración más distinguida.

Juan Carlos Rébora.

**Del profesor de la facultad de derecho,
doctor E. Weigel Muñoz**

Buenos Aires, agosto 27 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados.

En respuesta a su atenta y para mí honrosa invitación de fecha 6 del corriente, me apresuro a transmitirle algunas observaciones, en concordancia con el cuestionario incluido en la nota aludida, y que tal vez puedan ser de utilidad a la comisión que usted dignamente preside.

El corto tiempo de que he podido disponer para coordinar mis indicaciones, explica que de ellas más trascienda la experiencia que la erudición, pero la falta de ésta no será sin duda advertida, como quiera que mi modesta colaboración ha de ser juzgada desde un punto de vista práctico, sin que hayan menester de mayores explicaciones los ilustrados miembros de la comisión de justicia.

He aquí, en síntesis, mis opiniones respecto a los puntos consultados:

I.—¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital? ¿Qué solución aconseja para resolver este problema?

El art. 100 de la constitución nacional, tomado de la sección 2, art. 3o. de la constitución de los Estados Unidos, debe interpretarse restrictivamente, por ser "de excepción" la justicia federal, según jurisprudencia constante de la suprema corte de la nación.

Los asuntos cuyo conocimiento compete a la jus-

ticia federal, se hallan taxativamente enumerados en los tres primeros artículos de la ley No. 48.

Los asuntos no comprendidos en dichos artículos, y que no sean del fuero militar, serán del fuero común, o sea de la competencia de los tribunales provinciales, o de los que el congreso, en virtud de lo prescripto en el inc. 27 del art. 67 de la constitución nacional ha organizado para la capital y los territorios federales.

Existe, pues, un impedimento constitucional para la unificación de los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital.

Dicha unificación propendería a eliminar numerosas cuestiones de competencia; pero engendraría otras más graves, mediante recursos de inconstitucionalidad; sin contar con las complicaciones derivadas del distinto trámite, ante los mismos jueces, de los asuntos del fuero federal, y de los del fuero común.

Lo que necesita la justicia federal en la capital es una mejor distribución de los asuntos de la competencia de los jueces de primera instancia.

Con arreglo a la ley No. 48, y según la naturaleza de los asuntos que la misma enumera, debieran existir cinco jueces federales de sección en la capital de la república:

El primero, para conocer en las apelaciones aduaneras y de impuestos internos, causas fiscales sobre cobro de impuestos nacionales, causas de defraudaciones y contrabandos.

El segundo, para conocer en todas las causas de derecho comercial marítimo.

El tercero, para conocer en toda clase de delitos del fuero federal, excepto defraudaciones y contrabandos.

Y los dos restantes para entender en los asuntos civiles y comerciales del fuero federal.

La utilidad de esa distribución, se comprende sin esfuerzo: de ese modo se obtendría más rápido despacho por la especialización del magistrado, y la analogía de los procedimientos en las causas de su respectiva competencia.

En lo tocante a la justicia de los territorios nacionales, recordaré que, en 1894, siendo el infrascripto visitador del territorio del Río Negro, aconsejó al ministerio de justicia la iniciativa de la creación de tribunales viajeros de apelación y superintendencia, idea favorablemente acogida por el entonces procurador general de la nación, doctor Sabiniano Kier, quien consideraba las visitas periódicas de ese

tribunal en las lejanas comarcas del sud, como un medio eficaz de substanciar rápidamente las apelaciones, comprobar "de visu" los defectos de la organización judicial, y reprimir las demasías de los jueces letrados.

II.—¿Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?

Ampliar la competencia de la justicia federal, importaría una reforma del art. 100 de la constitución, que fija los límites de dicha competencia.

Este pensamiento, realizado, tendría mayor eficacia y daría mejores resultados que el de la unificación de fueros; pero debe llegarse ahí por el único camino accesible, que es el de la reforma constitucional.

De ese modo podría obtenerse que, no solamente las quiebras, sino materias de legislación comercial o industrial que pueden comprometer la economía de la nación, y delitos de orden público que perturben la tranquilidad del país, sean juzgados por los tribunales federales.

III.—¿Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito?

El número de cámaras federales de circuito no debe ser aumentado sino tomando en cuenta las estadísticas del movimiento de esos tribunales de apelación.

Mientras las cámaras de menor número de causas no se aproximen, en punto a labor, a las cámaras de mayor movimiento en la actualidad; y mientras en éstas no se advierta que la cantidad de asuntos dificulta su substanciación, no se justificaría el aumento de los tribunales de segunda instancia en lo federal.

Dicho aumento se producirá como una consecuencia del de nuestra densidad demográfica, como quiera que los medios rápidos de comunicación han atenuado el inconveniente de las distancias, el cual forzaba la creación de cámaras de circuito en mayor número de las necesarias según la población.

IV.—¿Qué reformas procesales considera urgentes?

En 1904 se sancionaron, por la legislatura de Buenos Aires, dos códigos de procedimientos: el uno,

de lo contencioso-administrativo, redactado por el doctor Luis V. Varela, en concordancia con los mejores modelos europeos; el otro, de lo civil y comercial, redactado por una comisión de magistrados judiciales.

El estudio parlamentario de ambos códigos, fué encomendado a una comisión de senadores y diputados todos miembros del foro, y dicho estudio contribuyó a que los proyectos fueran aprobados con modificaciones que perfeccionaron los medios prácticos propuestos para obtener la simplificación y celeridad de los juicios.

En el código de procedimientos civiles y comerciales, por ejemplo, se crearon procedimientos especiales y adecuados para ciertos actos de trascendencia legal, como las compulsas de libros comerciales, el depósito judicial de mercancías, la ejecución hipotecaria, la declaración de insania, la prueba de la posesión treintenaria, el desalojo de intrusos, etc.

Además, dentro de los juicios ordinarios y sus incidentes, se fijó un plazo para presentar las listas de testigos, limitándose el número de éstos; se prescribió que las posiciones no podían pedirse sino una vez en cada instancia, y solamente sobre hechos no afirmados o negados categóricamente en la demanda y contestación; y se autorizó a los magistrados para ampliar los interrogatorios de los testigos y de las posiciones a fin de obtener el esclarecimiento de los hechos controvertidos.

Convendría agregar a esas reformas, las siguientes:

Obligación del juez de convocar a las partes antes de abrirse la causa a prueba, para fijar los hechos sobre la que debe aquélla recaer, o para intentar un avenimiento entre las partes.

Autorización para oír los testigos de ambas partes en una sola audiencia pública, con careos, etc., y de la cual se levantaría acta taquigráfica.

Rechazo de oficio de toda demanda en la que "prima facie" se advierta la incompetencia del juzgado, o la falta de personalidad del actor, o deficiente mandato de su procurador.

Simplificar los procedimientos en las causas fiscales y del derecho marítimo.

Crear nuevas formas para la liquidación y bancarrota de bancos y compañías industriales y comerciales.

Y autorizar la división y venta parcial de un in-

mueble hipotecado, cuando sea innecesaria la realización total para cubrir el crédito garantido.

Tengo el agrado de saludar al señor presidente con la expresión de mis mayores consideraciones personales.

B. Wetzel Muñoz.

Del exdiputado doctor S. G. O'Farrell

Buenos Aires, agosto 28 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados, doctor don Roberto Parry.

Señor presidente:

Las notas adjuntas expresan, en forma sumaria, mi opinión sobre las diversas cuestiones propuestas en su nota del 6 del corriente.

Aprovecho esta oportunidad, para subscribirme del señor presidente atto. y S. S.

Santiago G. O'Farrell.

Notas para contestar la consulta de la comisión de justicia de la cámara de diputados

A la 1a. — Sea cualquiera la solución en el terreno doctrinario, la unificación de los fueros comporta dos ventajas prácticas: a) elimina cuestiones de competencia, que recargan inútilmente la labor de los tribunales, dándose el caso de expedientes de desalojo tramitados ante la justicia de paz, que son llevados hasta la suprema corte nacional; b) tiende a suprimir la actual anarquía de la jurisprudencia. (Para ello bastará establecer, por ejemplo, que las resoluciones de "tres" de las cámaras reunidas en tribunal pleno harán jurisprudencia).

La unificación del fuero existe ya de hecho en los territorios nacionales, pues los jueces letrados conocen tanto en las cuestiones de orden común como

en las federales y sus resoluciones de cualquier orden son apelables ante la cámara federal respectiva.

Siendo de creación constitucional los tribunales federales, la unificación tendría necesariamente que producirse en el sentido de declarar federales los actuales tribunales ordinarios.

A la 2a. — Consecuente con lo que queda dicho, sería forzosa la ampliación aludida.

A la 3a. — "Prima facie", distribuida la labor entre las cinco cámaras que resultarían en la capital, no habría por el momento necesidad de aumentar el número de ellas. De todos modos, la mejor solución será sugerida por los datos de la estadística después de un año, a lo menos, de funcionar la nueva organización.

A la 4a. — La ley de enjuiciamiento núm. 50 está evidentemente anticuada, habiendo sido objeto de incompletas adiciones o reformas parciales. Lo práctico es adoptar para todos los tribunales, el código de procedimientos que rige en lo ordinario.

En materia de intervención de los ministerios públicos, convendría adoptar el régimen establecido por el art. 50. de la ley de la provincia de Buenos Aires, promulgada en 2 de septiembre de 1915, que como regla general reemplaza por la notificación las vistas o traslados tantas veces superfluos.

La reforma debería hacerse extensiva a la intervención de los representantes del consejo nacional de educación, que actualmente constituye una grave rémora, pues no rigen para ellos los términos legales.

Santiago G. O'Farrell.

**Del profesor de la facultad de derecho,
doctor F. Cermesoni**

Buenos Aires, agosto 31 de 1920.

*Al señor presidente de la comisión de justicia de la
honorable cámara de diputados de la nación, doctor
don Roberto Parry.*

El doctor Fernando Cermesoni, en su carácter de profesor de las facultades de derecho y de ciencias

económicas de la capital federal, cumple en acusar recibo del cuestionario enviado por el señor presidente, acompañando, al efecto, las observaciones que el mismo le sugiere.

I

¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital? ¿Qué solución aconseja para resolver este problema?

El problema de la unificación de fueros es impostergradable. El régimen existente no condice con los altos principios de justicia. "Es necesario que desaparezcan esas distinciones". El fuero civil, comercial y federal están destinados a "fusionarse en uno solo—la unidad"—característica de toda justicia.

El fuero federal afecta, además, el honor nacional, en cuanto ello presupone la no existencia de la justicia en el fuero ordinario.

Hay una flagrante contradicción, en efecto, cuando se estatuye la procedencia del fuero federal en asuntos en que interviene un extranjero; y se le excluye, en cambio, en los casos criminales en los que la nacionalidad de la víctima no es tenida en cuenta para nada.

Este distingo de fueros ha tenido su razón de ser allá en la época colonial, cuando el cañón de los tiranos se oía desde las puertas de la metrópoli; pero, hoy, dado el estado actual de progreso del país, de la filosofía jurídica, resulta una monstruosidad y contrasentido. El extranjero debe ser juzgado, como lo es en los países civilizados, por los mismos jueces que los nativos de la república, porque la justicia está magistralmente representada por Themis, con la espada y los ojos vendados.

Otro tanto puede afirmarse, respecto de la justicia local que tiene cada provincia, distinta de la federal, o de la nación.

Una justicia administrada por organismos tan diversos, aplicando leyes diferentes, interpretándolas con criterio distinto y ofreciendo una jurisprudencia, donde se notan las soluciones más contradictorias; tal justicia no puede, en manera alguna, constituir la ofrecida por la constitución nacional a todos los habitantes del mundo que quieran radicarse en la Nación Argentina.

Es preciso que la ley sea uniforme, amparada

por la autoridad nacional; que los magistrados reúnan idénticas condiciones, tanto en el territorio de la nación, como en el de las provincias, que sean nombrados del mismo modo y con las mismas garantías.

Es menester, también — como decía el doctor Veyga (1),—que haya una sola jurisprudencia que, arrancando de la suprema corte de justicia de la nación, permita dar la misma inteligencia de la ley —justa y uniforme—en todo el país, poniendo al alcance de los jueces de las diversas localidades un caudal de ilustración que puedan aprovechar en beneficio de la colectividad, dándoles la norma de conducta a que deban ajustarse en el desempeño de tan delicadas funciones. Así—sólo así—podrá decirse que la justicia habrá llegado a ser el sol de la sociedad y el objetivo o finalidad de todo gobierno.

En lo que atañe a los distingos entre el código civil y comercial, puede afirmarse que ello tiende a desaparecer. La filosofía contemporánea así lo afirma. Ya no es exacta la fórmula citada por Portalis en su "Discours préliminaire", que los inmuebles constituyen el dominio del derecho civil, y los muebles el del derecho comercial.

Puesto el código de comercio en parangón con el civil, presenta antinomias marcadas, incompatibles con el concepto unitario de la justicia. ¿Cuáles son estas antinomias?

Considerando—en su conjunto—la institución de las obligaciones, nos ocurre puntualizar varias características fundamentales, a saber: la falta de armonía entre el código civil y el comercial. Este último se ha justificado como ley especial, en vista de determinadas personas y asuntos que, por su naturaleza, exigían soluciones más rápidas.

El código de comercio—he dicho—es una ley de excepción y puesto en parangón con el civil, presenta antinomias marcadas.

Por el código civil, nadie puede crearse pruebas a su favor; por el código de comercio, sucede lo contrario, con los libros de los comerciantes; la obligación "in solidum" entre varios deudores, que no se presume, según el código civil, sino que debe

(1) Dr. Tomás de Veyga. "La reforma de la Justicia Argentina". Buenos Aires, pág. 8 y siguientes. 1910.

expresamente estipularse, se presume siempre por el artículo 585 del código de comercio; el acreedor prendario puede proceder a la venta de la cosa tenida en prenda—en remate—sin intervención judicial, lo que no acontece en el derecho civil. El mandato civil, que se conceptúa gratuito, no se presume tal para el código de comercio; la venta de la cosa ajena—nula para el código civil—es válida para el código de comercio (1); el pacto comisorio que existe en el derecho comercial, no tiene efecto en el derecho civil—artículos 1198 y 1203—salvo estipulación expresa, con excepción del contrato de prenda. Los códigos civiles francés, italiano y alemán, reconocen la eficacia del pacto comisorio (2). Otro tanto podría decirse del concurso civil y comercial. En el primero, toda quita o espera debe ser votada por unanimidad. El segundo sólo exige el voto de los dos tercios. La rehabilitación civil no está legislada con graves perjuicios para los interesados; la comercial, en cambio, es muy amplia. La Excmá cámara en lo civil, en los autos "José María Baca, Concurso", acaba de aplicar—con toda justicia y por analogía—la legislación comercial a la civil, en materia de rehabilitación. La suprema corte nacional sostiene criterio distinto.

Por estos ejemplos, y otros muchos, puede colegirse que el código de comercio representa una ley de privilegio, a favor de los comerciantes.

Mas esta ley no tiene razón de existir, si se considera que—dado el estado de civilización de los pueblos—el desarrollo enorme del comercio e industria, aun los particulares—no comerciantes—deben ampararse en los beneficios de la ley comercial.

El código de comercio constituye una ley de excepción, creada al solo efecto de proteger los intereses de una determinada clase de persona.

Los contrastes con la ley civil son evidentes, si se considera que el menor emancipado, por nuestra ley civil, por subsiguiente matrimonio, no puede gravar, ni enagenar bienes inmuebles y, en cambio,

(1) Otro tanto acontece con las disposiciones de los artículos 475 y 477 del código de comercio, distintas a los preceptos del código civil.

(2) Art. 1184 código francés; art. 1165 código italiano; arts. 325 y 326 código alemán. El art. 1294 del código español estatuye: "La acción de rescisión es subsidiaria: no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo recurso legal para obtener la reparación del perjuicio".

el código de comercio autoriza a los menores emancipados para el ejercicio del comercio, a hipotecar sus bienes inmuebles.

La mujer casada se encuentra en análoga situación. Incapacitada para todos los actos de la vida civil, menos para el derecho mercantil, que le otorga facultad de gravar con hipotecas sus inmuebles, y aún responsabilizar los gananciales de la sociedad conyugal.

Un movimiento importante se ha notado en estos últimos tiempos, consistente en la unificación del derecho civil y comercial. Suiza, ha dictado el código único de las obligaciones, modificado en algunas disposiciones generales por ley del año 1912 (1).

Esta distinción entre el derecho civil y comercial, ha tenido sus razones históricas cuando los comerciantes constituían una clase distinta a los demás ciudadanos, regida por normas, usos y jurisdicción peculiar. La lucha moderna por la vida en su incesante evolución, ha aproximado la esfera de acción de cada una de estas leyes.

Actos de comercio son propios de personas ajenas, o sea de civiles. Los actos de comercio son tales, según nuestro código de comercio, en razón de su naturaleza y en el de las personas que intervienen.

Un documento a la orden, aún firmado por un particular, trae aparejado los efectos de la jurisdicción mercantil art. 8, inc. 4.º del código de comercio)

Un acto comercial para una de las partes, lo es para la otra, aunque se trate de un civil, art. 7 del mismo código.

Las sociedades anónimas son consideradas siempre comerciales, aunque tengan por finalidad relaciones civiles, art. 282 del código de comercio.

A esa forma-tipo, recurren las asociaciones de beneficencia, socorros mutuos, etc. Otro tanto puede afirmarse en materia de seguros.

Y bien: si las relaciones de la vida civil y comercial se confunden y armonizan entre sí, es lógico concluir que "única" ha de ser la ley destinada a reglar sus consecuencias jurídicas. Es, a mérito de ello, que, aplicando estas altas razones de filosofía, se evita que el código civil permanezca estacionario y fosilizado en fórmulas dogmáticas que

(1) Son partidarios del código único de las obligaciones, en materia de contratación, los juristas: Vivante, Zanardelli, Norsa, Bolaffio, Tortori, Perrone, Saffa, Uranga, Tazzoli, Endemann, Thaller, etc.

ninguna ventaja ofrecen en el desenvolvimiento de la vida real.

La mayor parte de los actos de la contratación humana caen en la órbita de acción de la ley comercial. El derecho civil librado a sus propios destinos, cristalizado en normas inadaptables a la vida moderna, constituye un cuerpo cerrado de normas jurídicas que necesita — para su fácil desenvolvimiento — el influjo de los altos principios que orientan el derecho mercantil.

Allí donde la propiedad inmueble no se trasmite por el endoso, tal como acontecería con un documento a la orden, no puede afirmarse haber abandonado el formulismo del derecho romano.

Otro tanto cabe afirmar de la hipoteca, que no presta sino un relativo beneficio, mientras no se la reglamente en forma de obligación abstracta, transmisible por vía de endoso comercial, tal como acontece en legislaciones adelantadas como la alemana, suiza, etc.

A propuesta del guardasigilli, Hon. Gallo, como hace notar Pipia — en Italia, — a mediados del año 1906, fué instituída una comisión especial para reformar la legislación del derecho privado. Esa comisión debía, además, tratar, no sólo de proyectar un código único de las obligaciones en el derecho privado, si que, también, determinar qué normas del derecho comercial debían ser asimiladas por el derecho civil, especificando qué leyes debían quedar legisladas por el código de comercio.

Ch. Lyon-Caen (1) sostiene que estas dos grandes ramas del derecho privado tienden, de más en más, a refundirse en su unidad primitiva.

¿Qué inconvenientes habría en permitir en el código civil el pacto comisorio, la obligación "in solidum", etc.? Evidentemente, ninguno. Como observan — con razón — algunos autores: la relación de cambio y recambio de valores que, al principio, se limitaba tan sólo a los objetos de lujo y a muy pocas mercancías de uso común, proveyendo, en lo demás, cada cual a la producción directa de aque-

(1) Ch. Lyon-Caen. — De l'influence du droit commercial sur le droit civil, depuis 1804. Le code civil, 1804-1904. Livre du centenaire, tomo I, págs. 208 y sigs.

Charles Laurent. — De la fusion du code civil et du droit commercial, París, 1903.

E. Thaller. — De l'attraction exercée par le code civil, et par ses méthodes sur le droit commercial, págs. 225 y sigs.

Le code civil. Livre du centenaire, 1804-1904, tomo I.

llas cosas de que tenía necesidad para el propio consumo; hoy, por efectos de un proceso gradual de especialización y de organización, realizado en el cuerpo de la sociedad, se ha hecho tan general y extendido, de tal modo que constituye el estado normal de ésta (1)

La cesión civil es formulista, y muy lenta en su aplicación. Exige — en muchos casos — escritura pública y la notificación al deudor cedido. La cesión comercial ha simplificado estos trámites con el endoso, en los documentos a la orden, warrants, etcétera.

Las sociedades anónimas donde la responsabilidad es limitada, tienden a extenderse en la órbita de acción del fuero civil, dadas sus evidentes ventajas.

Así, en Francia, la ley del 1.º de agosto de 1893. ha establecido que toda sociedad, cualquiera fuese su objeto, pueda adoptar la forma anónima, o comandita por acciones. Además, establece que todas las sociedades por acciones son comerciales, cualquiera que sea su objeto.

Los actos reputados comerciales por la ley, no son realizados — hoy por hoy — exclusivamente, por los comerciantes, sino por la totalidad de ciudadanos. El código de comercio, en materia de reformas, ha desempeñado el papel útil que ejerciera el "jus gentium".

Es un absurdo mantener en pie, una legislación que es un monopolio y privilegio de pocos. En la actualidad, han desaparecido las razones que justificaban el dualismo de otrora.

El mismo código comercial legisla instituciones que no guardan relación con los comerciantes y nada tienen de mercantiles.

El contrato de transporte, aunque revista el carácter de acto de comercio para el empresario, no lo es para el remitente. Otro tanto, ocurre con el seguro.

Las normas que regulan el contrato entre ausentes y por correspondencia telegráfica, comprenden las relaciones jurídicas del comercio y de la vida común, privada.

Las letras de cambio, cheques, títulos fiduciarios, etc., sirven para los comerciantes y particulares.

(1) D'Aguiar. — Génesis y evolución del derecho civil. Madrid, págs. 708 y sigs.

Piipa U. — Trattato di diritto commerciale, tomo I, págs. 62 y sigs. Torino, 1913.

Ante estas consideraciones, llegamos a la conclusión que el artículo 207 del código de comercio — que comentamos — no sintetiza el estado de la filosofía jurídica contemporánea.

En síntesis, pues, entiendo que la unificación del fuero federal y ordinario debe ser declarada en primer término, de conformidad a los fundamentos dados por el poder ejecutivo en su proyecto presentado ante el honorable congreso, durante la presidencia del doctor José Figueroa Alcorta, siendo ministro de justicia el doctor Rómulo S. Naón, cuyas conclusiones son del dominio público; con este resultado, tratar de obtener la unificación de la jurisdicción civil y comercial, en las materias comunes, haciendo desaparecer las divergencias remarcadas precedentemente. El arcaico y vetusto derecho civil necesita una vigorosa reacción, inspirada en los principios que orientan el derecho mercantil moderno. Sólo así daremos por el suelo con el régimen inmobiliario e hipotecario que perturba toda la economía nacional.

El endoso suplirá a la cesión y el sistema Torrens concluirá con la tradición ridícula de las viejas legislaciones.

II y III CUESTIONES:

¿Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?

¿Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuitos?

Conocida es la cuestión planteada, sosteniendo que las leyes del 63 y 71 son inconstitucionales, porque el congreso no tenía, ni tiene, facultad para entregar a los tribunales provinciales, el conocimiento de los asuntos que, por razón de las personas, competen exclusivamente a la justicia nacional, en mérito a lo dispuesto por el art. 100 de la constitución. (La ley de quiebras y la justicia federal, — doctor Matienzo. Buenos Aires, 1915).

Dadas las conclusiones que formulamos a la pregunta I, sosteniendo la unificación del fuero federal y ordinario, carece de importancia la tesis referida precedentemente.

El aumento de cámaras de circuito, es una necesidad sentida.

IV

¿Qué reformas procesales considera urgentes?

La ley representa el derecho escrito; debe evolucionar, a medida que se transformen las costumbres de los pueblos. Así "las partidas", que tanta importancia han tenido en su tiempo, hoy se recuerdan como un antecedente histórico.

Es evidente que el derecho no puede permanecer cristalizado y herido de parálisis. Si él representa la vida de un pueblo, debe evolucionar y transformarse a medida que las necesidades sociales así lo exigen.

Hay que modificar los códigos, pero no destruir, sin tino, lo que existe, sin saber con qué vamos a reemplazarlo.

Los cambios, en la legislación, deben ser necesarios, para que no se sientan los efectos de las transformaciones bruscas, porque — como decía un convencional francés — "las revoluciones, por la fuerza de proyección, van siempre más allá del término que se habían propuesto".

Nuestro país ha evolucionado y las ideas y costumbres de antaño han sufrido un vuelco fundamental; no podemos seguir viviendo con el procedimiento de la época colonial. La misma España ha adoptado la oralidad del juicio.

La capital federal cuenta con jueces de verdadero prestigio, pero a ellos no les incumbe modificar la ley, desde que son los órganos de la misma; no hacen el derecho, "Jus diciere", sino que lo declaran, "Jus dare".

La idea de transformar el arcaico y confuso régimen de los procedimientos en materia judicial es una preocupación constante de todos los círculos forenses.

El actual código procesal en lo civil y comercial, era el de la provincia. Esta lo ha modificado substancialmente, y nosotros vivimos con un retardo de cien años. Actualmente, los pleitos se eternizan al amparo de la ley que favorece las demoras. Debemos desembarazarnos del procedimiento español, de multitud de cosas superfluas e inconducentes, que, si son buenas, para dar pábulo a los embrollos de los rúbulas deshonestos, no sirven para acelerar las cuestiones judiciales, ni para esclarecer los hechos.

En síntesis, creemos que las reformas a realizarse entre nosotros, pueden reducirse a estos términos:

"De programa máximo", consistentes en la implan-

tación del procedimiento oral, al estilo de los países europeos, y con un código uniforme para toda la república.

"De programa mínimo", ante la imposibilidad de llevar a cabo lo primero, que tienden a suprimir, por lo menos, los errores de que adolecen nuestros códigos.

Veamos:

El procedimiento oral se impone entre nosotros. Los países europeos lo han adoptado, tanto en lo criminal, como en lo civil y comercial.

Las audiencias públicas son las verdaderas encarnaciones de la verdad. La opinión popular se interesa por las defensas, los jueces se ven estimulados por la crítica, favorable o adversa. Es el verdadero procedimiento de la justicia democrática. La justicia del pueblo, para el pueblo.

Los romanos establecieron la oralidad del juicio, con una administración que funcionó bastante bien, a pesar de que los pretores con sus edictos introducían la anarquía en el foro, porque la regla variaba según la opinión de los que publicaban su edicto al entrar en funciones. Durante siete siglos, hubo en Roma una administración de justicia bastante ordenada, a pesar de la incertidumbre que el edicto del pretor introducía en la inteligencia de las leyes.

En algunos países europeos, el proceso de la jurisdicción civil y comercial se instruye por los agentes forenses, por cuyo medio tienen las partes que hacer todas sus gestiones y quienes toman noticia en la secretaría del tribunal, de los documentos que allí se depositan, y de los actos de los litigantes que les es necesario conocer. Los traslados se comunican entre los agentes forenses, y la causa se pone, por medio de ellos, en estado de que el tribunal de primera instancia no tenga que hacer otra cosa que deliberar en presencia de los documentos, y oír los alegatos de las partes, en audiencia pública, el día en que la causa se halle en estado de sentenciarla. Poco se escribe, la mayor parte del procedimiento es verbal, y da el resultado de que se obtenga pronto la determinación judicial.

Con ese procedimiento, fácilmente se comprende cuál debe ser la rapidez del juicio.

Con sobrado fundamento, decía el doctor Tomás de Veyga, en su folleto sobre "La Reforma de la Justicia Argentina": ¿qué razón hay para que los progresos del procedimiento oral no sean aprovechados por la

justicia, con el fin de acelerar la tramitación de los juicios?

“La absolución de posiciones, la declaración de un testigo, la exposición de un perito, todo lo que pasa en la audiencia, no sería anotado en los autos, puesto que el procedimiento verdaderamente oral ninguna actuación requiere. El taquígrafo tomaría nota de todo lo que ocurre en la audiencia, reforzando, si se quiere, por los aparatos fonográficos que revelarían la voz de los testigos y el procesado, las interrupciones y los gestos mismos de unos y de otros, para facilitar a los jueces el recuerdo de todo lo ocurrido en la audiencia, cuando llegue el momento de pronunciar el fallo”.

En la provincia de Buenos Aires, se ha sancionado un código de procedimientos en lo criminal, que honra a la república, y cuyo ejemplo debe ser prontamente imitado. Ese código ha tratado de implantar, en lo posible, el procedimiento oral, que es la savia vivificadora de la justicia.

Otra de las reformas que se impone, es la nacionalización del código de procedimientos. No es posible que cada provincia de acuerdo con las facultades constitucionales, tenga uno distinto.

Sancionemos una ley—que sea la última palabra de la ciencia jurídica—y hagámosla general a todo el país. Así se evitarán las sorpresas de la actualidad, en que una provincia legisla lo que otra prohíbe.

Tomemos un ejemplo para demostrar nuestra tesis. El artículo 474 del código de procedimientos de la capital en lo civil y comercial, establece:

“No conociéndole bienes al deudor, podrá solicitarse contra él inhibición general de vender o gravar sus bienes, lo que quedará sin efecto, tan luego como presentase bienes a embargo o diere caución bastante.”

Este artículo concuerda con el 254, 461, 471 del mismo código, 2123 del código francés, y 225, 226, inciso 6o. de la ley orgánica de los tribunales.

Por el código de Tucumán, lo mismo que por el que regía en Catamarca, el año 1881, no existe inhibición, a semejanza de lo que acontece en España, ley procesal, años 1885 y 1892, y en las repúblicas: Oriental, Bolivia, Perú y Chile.

Las demás provincias legislan como el código de procedimientos de la capital.

San Luis establece que la inhibición se prescribe al año, de modo que el letrado que lo ignore, corre el riesgo de perjudicar a su cliente.

El código procesal de Mendoza legisla sobre cuestiones que afectan a las leyes de fondo y en evidente

contradicción con el artículo 676 del código de comercio, pues permite oponer excepciones que este prohíbe. Además, se dá valor legal a la cuota-litis.

Ante estos inconvenientes, es necesario que, una vez por todas, se nacionalice el código procesal, como asimismo se unifiquen las jurisdicciones nacionales y provinciales, porque, tratándose de un país de inmigración, lo mismo debe ofrecerse una buena justicia a nacionales y extranjeros en la capital que en el más lejano sitio de la república, si ha de cumplirse la promesa constitucional de "afianzar la justicia".

*
* *

Quédanos a tratar, con la brevedad impuesta por estos renglones, la reforma de "programa mínimo", o sea, la que, a falta de las anteriores, procedería—por lo menos—a modificar las fallas del actual código de procedimientos en lo civil, comercial y criminal.

Muchos han sido los proyectos presentados al efecto. Podríamos citar el de los doctores Angel D. Rojas, Rómulo S. Naón, Alcorta y Zeballos, J. Domínguez, F. González, E. Azarola, Rueda, etc. Sin embargo, nada se ha hecho en este sentido.

Un estudio crítico de nuestras leyes procesales, sería el tema de una obra; por ello, nos concretamos a estudiar un caso, el de las excepciones.

La comisión del proyecto de reformas al código de procedimientos en lo civil y comercial de la provincia, ha suprimido la sección relativa a las excepciones perentorias deducidas en forina de artículo previo. En efecto: fundándose en que la cosa juzgada, la transacción y la prescripción de treinta años, son cuestiones cuyo fallo favorable termina el pleito, es inoficioso plantearlas como previas, sobre todo, si han de ser sometidas a un procedimiento tan largo y pesado como el actual. Según el referido proyecto, quedaban subsistentes una sola clase de excepciones que se tramitan rápidamente y se fallan sin alegatos.

Resulta evidente el error de nuestro código, pues expone a los litigantes a seguir dos pleitos sobre una misma cuestión. Así, entablada una demanda de reivindicación, si el demandado opone la prescripción de 36 años y no la prueba, queda vencido. Terminado ese juicio, éste puede hacer revivir el pleito, oponiendo la excepción de 10 o 20 años, o cualquier otra perentoria. De modo que la acción de reivindicación es juzgada dos veces.

Hay otro error fundamental, en el título de las excepciones.

El artículo 86 de nuestro código de procedimientos, después de ordenar que, a un tiempo y en un mismo escrito, el demandado alegue todas las excepciones dilatorias, agrega que, no haciéndolo así, podrá usar de las que no hubiese alegado antes, en la contestación a la demanda, salvo la de incompetencia de jurisdicción y de defecto legal en el modo de proponer la demanda.

De modo que el demandado tiene la ventaja de formar artículo de previo pronunciamiento, deduciendo una o más excepciones dilatorias, y reservarse las que quiera, para oponerlas con la contestación a la demanda. Se desprende que nuestra ley no ha corregido el mal de que adolecía la ley de las partidas que facultaba a poner las excepciones una tras de otras. Por ello, debería obligarse a deducir las excepciones dilatorias, siempre, con el carácter de previas.

Muchas de estas críticas podríamos puntualizarlas, al hacer un estudio detallado de nuestro código, pero la brevedad de estas líneas nos lo impide.

Otro tanto, respecto al código de procedimientos criminales, donde, desde el sumario oculto, todo resulta ridículo y anticuado.

Tales son las reformas que se imponen, si queremos que nuestra república no quede resabiada del progreso general que la actual civilización requiere.

Si deseamos el respeto a las instituciones, la afluencia de la inmigración, el bienestar individual y social, debemos ocuparnos de la justicia, que es—al decir de Platón—el sol de las sociedades y el fundamento de los pueblos.

Dejando expresada mi opinión al cuestionario planteado, cúpleme saludar al señor presidente de la comisión de justicia, con la más alta consideración.

Fernando Cermesoni.

Del doctor G. Wernicke

Buenos Aires, septiembre 2 de 1920

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Me es grato contestar, de un modo sumarisimo, a la pregunta que se digna usted formularme en

la encuesta a que se refiere su circular de fecha 10. del corriente, escusando fundar mi opinión, pues ello me llevaría fuera de los límites de la encuesta, y aumentaría el trabajo de la comisión.

I. Conviene unificar los fueros, estableciendo una sola jurisdicción, en la capital de la república. Todos los jueces son de hecho jueces nacionales, y la actual división, no ampara a nadie, y perjudica a muchos. La solución consiste en suprimir los juzgados federales, transformándolos en tribunales ordinarios de su respectivo carácter, haciendo del tribunal federal en lo criminal; un tribunal del crimen, y no de instrucción.

II. La segunda pregunta, si se refiere a la jurisdicción federal en la capital, ya está contestada. Si se refiere a la de las provincias, donde según disposición constitucional deben mantenerse, creo que no debe en ningún caso ampliarse su jurisdicción. Esto es sólo de excepción, importa una agresión a la soberanía de estado, si bien sancionada por la constitución y justificada por las circunstancias de hecho y de derecho que tuvieran en cuenta los constituyentes, no por ello menos ofensiva para las provincias. Tan argentinos son los funcionarios y magistrados nombrados por el poder ejecutivo nacional como los nombrados por los poderes ejecutivos provinciales, y no hay razón para suponer en los primeros más ilustración e independencia, más garantías para los extranjeros, que en los segundos.

III. Las cámaras federales de circuitos son necesarias, para facilitar la tramitación. No es justo que los asuntos de Mendoza, y San Luis vengan a la capital, con las demoras consiguientes, ni que los de Corrientes vayan al Paraná. Debiera haber en cada provincia a lo menos una cámara de circuito.

IV. No tenemos código de procedimientos. Hay que reformarlo radicalmente, conservando el procedimiento escrito, dando mucho más autoridad a los tribunales, dando lugar a que procedan por propia iniciativa, evitando que los jueces mismos tengan que despachar personalmente escritos de resolución mecánica, en fin, sancionada por ley lo que hoy de hecho existe, y modernizando todo el aparato. No recomiendo volver a seguir las huellas de la provincia de Buenos Aires, aceptando su código, pues se debe y puede hacer algo mejor.

Con mis mejores votos por el éxito de sus patrióticas tareas, saludo al señor presidente con mi consideración más distinguida.

Germán Wernicke.

**Del doctor O. R. Amadeo, exprocurador de la
corte de la provincia de Buenos Aires**

Buenos Aires, septiembre 6 de 1920

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor don Roberto Parry.

Distinguido doctor:

He recibido su atenta nota circular de 10. del corriente; no así la anterior comunicación a que ella se refiere.

Dada la brevedad del término, me limitaré a manifestar que soy partidario de la unificación de fueros en esta capital, omitiendo los fundamentos de esta opinión.

Saluda a usted muy atentamente.

Octavio R. Amadeo.

Del exdiputado doctor A. Robirosa

Buenos Aires, septiembre 6 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor don Roberto Parry.

Contestando la nota del señor presidente que he tenido la honra de recibir, me es grato expresar a usted que en mi opinión y descartando la cuestión constitucional a que puede dar lugar, la unificación de los fueros federal y ordinario de los tribunales de la capital carece de la importancia práctica que se le atribuye.

Las cuestiones de competencia que originan la diversidad de jurisdicciones, no son tan frecuentes como para constituir un serio inconveniente para la justicia y están ampliamente compensadas con otras ventajas derivadas de la organización actual, como ser, la especialización de los magistrados en las materias que les están sometidas.

Si a las causas de que entienden hoy los tribunales ordinarios regidas por los códigos civil, comercial y penal se le agregan las que caen bajo el imperio de las numerosas leyes especiales de que conoce en la actualidad la justicia federal, se complicaría considerablemente la tarea de los jueces con perjuicio de los fines primordiales que están llamados a llenar. Las leyes de aduana, de impuestos internos, de ferrocarriles, de marcas de fábrica y patente de invención, las leyes electorales, las de moneda, el comercio marítimo y muchas otras de la competencia hoy de la justicia federal, verdaderos códigos por su extensión, exigirían para dominarlas largos estudios que recargarían el trabajo ya pesado de los tribunales.

Creo, por consiguiente, que los beneficios de la división de trabajo y especialización que permite el régimen actual, son superiores a las cuestiones de competencia a que da lugar y que son raras en la práctica.

Lo que creo habría conveniencia en uniformar, son las leyes de procedimientos aplicables a los dos fueros, pues no se alcanza la razón de la diversidad de detalles que existen en ambas, como ser diferencia de términos para contestar la demanda, recursos de apelación, recusaciones, pruebas y otras circunstancias, que no alteran los principios fundamentales.

Haciendo extensivo al fuero federal el código de procedimientos que rige en los tribunales ordinarios, que es más moderno y ha sido sucesivamente reformado, pienso que se evitarían muchos inconvenientes, se facilitaría la justicia y se habría llenado la necesidad más sentida en esta materia.

En el año 1905 el poder ejecutivo exteriorizó el propósito que hoy se agita de uniformar los fueros y con ese motivo expresé estas mismas ideas en la honorable cámara de diputados de que formaba parte en esa época, presentando un proyecto unificando los procedimientos, como puede verse en el Diario de Sesiones, tomo 10., página 337 y siguientes. Hoy a pesar del tiempo transcurrido me ratifico en aquel concepto.

En cuanto a otras reformas procesales que me parecían convenientes, tuve también el honor de concretarlas en otro proyecto que se registra en el Diario de Sesiones del año 1904, tomo 10., página 397. El proyecto fué despachado favorablemente varias veces por la comisión respectiva de la honorable cámara, pero ésta absorbida por otras preocupaciones

no llegó a sancionarlo. Creo que hoy subsisten las mismas razones que me indujeron a presentarlo y que no ha perdido su oportunidad.

Lamento que circunstancias momentáneas, ajenas a mi voluntad, me impidan tratar más detenidamente los puntos a que se refiere la comunicación que contesto y quedo muy reconocido por la deferencia que ella significa.

Con este motivo me es grato saludar a usted con mi mayor consideración.

Antonio Robirosa.

**Del profesor de la facultad de derecho,
doctor J. A. García**

Buenos Aires, septiembre 7 de 1920.

*A la honorable comisión de justicia de la cámara de
diputados de la nación.*

Ruego a esa honorable comisión que excuse mi demora en contestar su atenta nota, porque he estado enfermo casi todo el mes de agosto.

Su primer pregunta es así: ¿Conviene unificar los fueros ordinarios y federal en los tribunales de la capital?

Una larga experiencia en ambas jurisdicciones me ha convencido de que esa división del fuero es muy perjudicial, y carece de objeto práctico. No sólo trae distintos espíritus de justicia, que a menudo se contradicen, sino que dilata los juicios, facilitando las excepciones, que son una de las calamidades del procedimiento; y que deben limitarse a lo estrictamente indispensable.

Esa variedad en las opiniones de las dos ramas de la justicia, y esa base tan artificial que las separa, impresionan desfavorablemente al público y le sugieren un cierto menosprecio del derecho y de la justicia. Algún jurisconsulto extranjero, de paso por Buenos Aires, se sorprendía de este artificio que nada justifica, y que sólo demuestra la fuerza con que razonaban en abstracto, dividiendo un peño en dos, los redactores de la constitución.

En tesis general, y sea dicho en reserva, de las

dos justicias, la federal es la más prestigiosa en las provincias. No es el caso de indagar las causas de esta desigualdad, pero el hecho es exacto; y se explica por razones de orden histórico y político. Dada esta base, y no existiendo razones reales para mantener los dos fueros, no me explico que se vacile en proceder a la reforma.

Sobre este punto sería partidario de una medida radical, que sentara de una vez este principio: la única fuente de justicia en la Argentina es el estado nacional. Durante los diez años en los que tuve el honor de ser camarista federal, observaba la tendencia de los vecinos de las provincias a acogerse a nuestro tribunal, en todos los casos en que podían llegar a sus estrados, aunque fuera por caminos travesos.

La justicia federal da la impresión de una mayor garantía. Sus jueces están fuera de la política y no dependen de las influencias locales; ni los presiona el ambiente social con la misma facilidad y eficacia que al magistrado de provincia. Los antiguos, que tenían sabiduría, no tanto de libro, como del conocimiento directo de los hombres, prescribían que se enviaran a las ciudades jueces de otras regiones, para evitar esos peligros.

La segunda pregunta queda contestada en los párrafos anteriores.

La tercera dice: ¿Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito? Esta cuestión es más de estadística que de otras razones. Por el juicio de conjunto que he podido formarme me parece que no es necesario aumentar tribunales.

La cuarta pregunta dice: ¿Qué reformas procesales considera urgentes? En primer lugar la de los procedimientos penales. Creo que debe irse al juicio oral y público de verdad; y con una sola instancia de tribunal colegiado; y una corte de Casación. Dada la ilustración de ese honorable cuerpo excuso entrar en mayores datos. Nuestra justicia es en el hecho algo misteriosa. La sanción social no acompaña siempre las sentencias absolutorias o condenatorias, y más bien permanece indiferente. Ese juicio público transforma en un juez a cada uno de los vecinos, que pueden seguir el movimiento de los procesos, y pronuncian ese fallo moral inapreciable de la conciencia social.

Dejo así contestadas las preguntas que me ha hecho el honor de dirigirme, y aprovecho la oportu-

nidad para saludar con mi mayor consideración a la honorable comisión de justicia.

Juan A. García.

Del doctor R. Clusellas

Buenos Aires, septiembre 7 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados.

Distinguido señor:

Correspondiendo a la deferente invitación de la comisión de justicia que usted dignamente preside, me es honroso dar mi modesta opinión sobre el siguiente punto:

¿Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?

Sobre este punto he hecho un estudio en mi tesis doctoral, titulada "La quiebra de las sociedades", presentada a la Facultad de Derecho en 1917, y en la cual he sostenido que por disposiciones de nuestra constitución, la jurisdicción federal corresponde en los juicios de quiebra. Como creo que puede ser de interés para Vd. conocer los fundamentos legales en que me he apoyado; y tratando dentro de mi modesta esfera de coadyuvar a los altos propósitos que persigue esta comisión de justicia, me he de permitir transcribir los siguientes párrafos de mi tesis:

"Entre nosotros, la ley de quiebras forma parte del código de comercio. La aplicación de la misma corresponde, pues, a los tribunales de comercio y por expresa declaración del artículo 12, inciso 1, de ley número 48 sobre jurisdicción de los tribunales federales conocerá de la misma el juez competente de cada provincia. Por el artículo 2 de la ley número 927 sobre causas de jurisdicción concurrente, se establece que conocerán de los concursos de acreedores los jueces respectivos de aquella provincia en que el fallido tuviere su principal establecimiento al tiempo de la declaración de la

quiebra. De modo, entonces, que por estas disposiciones legales queda expresamente consagrada la jurisdicción competente.

"Sin embargo, sobre este punto hay disposiciones expresas de la constitución nacional, que no han sido tenidas en cuenta por dichas leyes, y por las cuales se consagra, a mi modo de ver, la jurisdicción federal como la competente para los juicios de quiebras.

"Como lo dispone el artículo 100 de la constitución, corresponden a los tribunales inferiores de la nación las causas que versen sobre puntos regidos por las leyes de la nación. Según el artículo 67, inciso 11, corresponde al congreso dictar: 1o. los códigos civil, comercial, penal y de minería, cuya aplicación corresponde a los tribunales federales o provinciales, según cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. 2o. dictar leyes, sobre ciudadanía, "bancarrotas", sobre falsificación de moneda, etc. Por lo tanto según este artículo, las primeras leyes corresponderán a los tribunales provinciales, si caen bajo su jurisdicción; pero las segundas no, porque se trata de leyes de la nación.

"Aparte de estas razones legales, existen otras que abonan en favor de la tesis que sostenemos. Ha dicho Alberdi que "la aplicación de las leyes que representan el interés de toda una nación, no podría encomendarse, a tribunales y juzgados de provincia, sin responsabilidad ante el gobierno nacional, que no los ha nombrado ni puede remover y sin responsabilidad ante la república, cuya soberanía judicial no ejercen".

"Queremos creer, que los tribunales de provincia han de aplicar esta ley con estrictez y rectitud, más el siguiente ejemplo que tomamos de la Liga de Defensa Comercial y que insertamos sin ánimo de herir a nadie, no habla muy a favor de aquella aplicación. El 22 de abril de 1914, se presentó Pablo Posleman, a los tribunales de San Juan pidiendo convocatoria de acreedores. Se fija la junta para el 27 de mayo; pero tiene que postergarse para el 30 de junio. En esta fecha, tampoco se celebra y se señala el 25 de julio para que tenga lugar; pero como hubo errores en la publicación se posterga para el 12 de agosto, y nuevamente, para el 8 de septiembre. Resulta que este era un día de fiesta y se fija para el 29 de septiembre, día que no concurre el juez a su despacho y se fija para el 24 de octubre, que tampoco concurre el juez y al fin, el 17 de noviembre se celebra la junta, consiguiéndose un concordato al 10 o lo a 6, 12 y 18 meses, sin interés y sin garantía. Después de esto no puede quedar ninguna duda".

Dejando de este modo, en parte satisfecho el atento pedido del señor presidente, me complazco en saludarle con mi consideración más distinguida.

Rodolfo Clusellas.

Del doctor E. Reviriego

Buenos Aires, septiembre 8 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

Me complazco en acusar recibo y contestar su atenta nota-circular, sobre la encuesta que realiza esa honorable comisión acerca de varias reformas judiciales.

Altamente honrado por la consulta que se me hace, no he vacilado un instante en cumplir lo que entiendo es un deber de todo profesional en la materia, aportando el concurso de mis modestas opiniones para el estudio de asunto tan importante.

Estas han de ser puramente el fruto de mis observaciones en la práctica profesional y judicial, porque soy de los que creen que el objeto de encuestas semejantes debe ser el resultado que han tenido aquéllas y la compulsu más exacta posible de las condiciones y de los factores del medio ambiente; para la consulta de las enseñanzas doctrinarias y ejemplos extraños, se bastan las comisiones y el parlamento, que tienen a mano bibliotecas enteras.

1o. ¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital?

Pienso que a esta altura de la experiencia hecha, con estudios y proyectos legislativos ampliamente debatidos, no cabe demorar más la unificación de fueros en la capital. Y no sólo deben unificarse los fueros sino también las leyes procesales en materia civil, que no tienen razón de ser distintas. Sólo concibo ventajas con la unidad de jurisdicciones y leyes adjetivas en la metrópoli argentina, porque barrería con la duda, el chicaneo, la contradicción de los fallos, la eternización de los juicios, el encarecimiento de la justicia y demás lamentables consecuencias del régimen en vigor.

2o. ¿Qué solución aconseja para resolver el problema?

De realizarse este gran pensamiento de la unificación local de nuestra justicia, debiera aprovecharse la oportunidad para ensayar otra reforma más honda aun: la implantación de la justicia colegiada de única instancia, organizando con todos los jueces y camaristas actuales, con excepción de los jueces de instrucción, tribunales de cinco magistrados, para fallar las cuestiones de hecho y de derecho, con recurso de casación para ante la suprema corte nacional. El trámite de los asuntos civiles correspondería a uno de los miembros del tribunal, por turno, y la decisión sobre todo incidente o articulación a dos o tres camaristas. Como consecuencia de este cambio, habría que convertir en colegiada y de única instancia a toda la justicia federal de la república, constituyendo con los actuales jueces y camaristas los nuevos tribunales de cinco miembros, en las ciudades donde actualmente funcionan las cámaras federales, y en dos o tres ciudades más, que podrían ser, por ejemplo, Mendoza, Tucumán y alguna de la provincia de Buenos Aires, fuera de La Plata.

Mi larga práctica en la judicatura de Entre Ríos, especialmente, me ha convencido que el sistema de la justicia colegiada es el más conveniente desde todo punto de vista, y, como derivado de él, la instancia única, con la presencia de cinco magistrados, ofrece suficientes garantías de acierto en la solución de las causas. La experiencia de este sistema en nuestro país, bien que limitada al menor número de casos, pero sin la ventaja de la casación que propongo, es prueba irrecusable de su eficacia. Tal ha acontecido cuando la suprema corte nacional, la corte de la provincia de Buenos Aires y los tribunales o cortes superiores de otras provincias, decidieron causas de jurisdicción originaria, siendo parte una provincia, o tratándose de un cónsul o diplomático, o cuando la contienda versaba sobre materia de inconstitucionalidad, o de lo contencioso-administrativo, o en casos de *habeas corpus*, etc.

La reforma a que aludo, facilitarla, además, la gradual implantación de la justicia oral, otra de las conquistas modernas en cuyo rededor se agrupa hoy buen número de los juristas argentinos, y de la que es un plausible ejemplo de ensayo el juicio oral en materia penal en la provincia de Buenos Aires.

Considero también oportuno, aunque en menor grado, aprovechar la unificación de fueros para intentar una más perfecta distribución de materias entre los distintos juzgados o tribunales a reorganizarse, modi-

ficando, en parte, la tradicional división de fueros en lo civil y en lo comercial, y estableciendo, por ejemplo, tribunales de "concursos", que entenderían en todos los juicios de convocatorias, quiebras y concursos civiles, por la afinidad de materia y conveniencia de especializar en ella a magistrados, secretarios y personal subalterno; tribunales de "juicios ejecutivos", competentes para entender en toda clase de ejecuciones, inclusive las de sentencias definitivas por cobro de sumas de dinero y cuyos juicios pasarían a ellos; tribunales de "desalojos e interdictos"; de "leyes especiales y juicios fiscales" (ciudadanía, excepciones militares, enrolamiento, delitos electorales, aduana, impuestos internos, patentes y marcas, leyes obreras), etcétera. Todo estribaría en compulsar previamente cuáles son los negocios que, por su mayor afinidad y proporción de número, convendría atribuir a determinados tribunales. Una clasificación semejante ofrecería, por lo menos, ventaja sobre la clasificación común en lo civil y en lo comercial, más ocasionada a dudas, confusiones y contradicciones, por las dificultades que muchas veces suscita el deslinde neto de ambas jurisdicciones.

3o. ¿Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?

A mi juicio, esto no reportaría ventaja alguna. Expreso mis opiniones del punto de vista práctico, que creo es lo que debe fundamentar, primordialmente, una reforma legislativa de esta índole, y sin rendir mayor tributo a disquisiciones doctrinarias.

4o. ¿Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito?

De no aceptarse una nueva organización judicial como la que preconizo en el punto 2.º, pienso que, por ahora, sólo debiera crearse una nueva cámara en la provincia de Buenos Aires, para descongestionar el enorme cúmulo de asuntos que pesan sobre la cámara de La Plata, la más recargada de todas las actuales, según me he informado.

5o. ¿Qué reformas judiciales considera urgentes?

I.—La primera de todas es dotar bien, dotar generosamente la augusta función del juez. Atribuyo a este medio el secreto más positivo de mejoramiento de nuestra administración de justicia. Pagad bien a los magistrados, y ya veréis cómo, paulatinamente, serán mejores los códigos y más respetados los fallos. La equitativa, la generosa retribución de los jueces operará la selección del personal,

la consagración de los más dignos y de los más aptos, el perfeccionamiento sensible de la justicia argentina. Hasta ahora, los gobiernos y los legisladores han tratado con mezquindad a nuestra justicia, retaceando el valor económico de sus altísimos servicios. Improcedentes comparaciones con cargos ministeriales o legislativos, de suyo fugaces y nunca tan delicados como los de los jueces, sirvieron de norma para tasar esos servicios. Acométase, entonces, con valentía y de una vez, este grave problema, siempre aplazado. Ningún juez nacional debe ganar menos de 2.500 pesos mensuales. Si se crearan los tribunales colegiados de única instancia, el sueldo de los magistrados no debe bajar de 3.000 pesos. Los miembros de la suprema corte argentina debieran tener un sueldo de 4 ó 5.000 pesos mensuales!

II.—Los dos códigos de procedimientos que se aplican en esta capital, y la ley federal de procedimientos, requieren algunas modificaciones urgentes. Las ejecuciones hipotecarias deben abreviarse y simplificarse, si se aspira a la difusión del crédito con garantía de hipoteca; deben precisarse, en base a las soluciones dominantes en nuestra jurisprudencia, las excepciones admisibles en los juicios ejecutivos; introducir la estenografía en la recepción de las declaraciones y audiencias; cambiar el procedimiento para las notificaciones en la ciudad; facilitar a las partes el procedimiento oral en ambas instancias, cuando opten por él; dar más autoridad a los secretarios en las cuestiones de mero trámite; regular más claramente diversos puntos de los juicios de sucesión. En materia criminal, concluir con el retrógrado y peligroso sistema del secreto absoluto del sumario; conferir mayor latitud de apreciación al juez en las pruebas de culpabilidad o inocencia; oralizar más y más en ambas instancias, etc.

Las dos leyes de procedimientos civiles que rigen aquí, deben unificarse, según lo enuncié anteriormente.

III.—Dictar una ley sobre regulación de los honorarios de abogados y procuradores, que atenúe el actual sistema de arbitrio judicial absoluto, y dignifique, con la fijación de límites mínimos y máximos, la profesión del foro. El procedimiento en vigor suscita a diario protestas y fomenta expoliaciones clandestinas y la conducta irregular en el ejercicio de la profesión.

Dejo, así, esbozadas mis opiniones sobre todos los puntos de la encuesta, y, con tal motivo, saludo al

señor presidente, y por su intermedio, a los demás miembros de la comisión, con mi más alta consideración y respeto.

Emilio Reririego.

Del doctor L. Rufo

Buenos Aires, septiembre 8 de 1920.

Señor doctor Roberto Parry, presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Distinguido presidente:

He recibido un ejemplar de la circular que referente a varias reformas en materia procesal ha dirigido la comisión dignamente presidida por usted solicitando la opinión de los profesionales.

He pensado la contestación que debiera dar y he ratificado mi opinión antigua de que la única solución que cabe, más bien la que considero más eficaz, es la de proceder a dictar una nueva ley orgánica del poder judicial en cuanto se refiere a los tribunales nacionales y un código de procedimientos.

En la ley orgánica tendrían cabida todas las reformas referentes a las tres primeras y a la última de las preguntas que se hacen en el cuestionario y en el código de procedimientos todas las relativas a la cuarta pregunta.

La ley orgánica es indispensable para que estén reunidas en un sólo cuerpo todas las disposiciones, hoy diseminadas en multitud de leyes, que legislan la existencia y atribuciones de los tribunales encargados de administrar justicia y en el código de procedimientos se legislaría toda la materia procesal civil, hoy enteramente deficiente y cuyas fallas o enmiendas son tantas que abarcarían en su mencción casi todas las disposiciones que el código actual contiene.

Hecha esta observación de carácter general por cuanto estimo que las reformas aisladas sólo servirían para daño y nunca para provecho, agregaré que a mi juicio debería designarse una comisión de

cuatro o cinco miembros, abogados y jueces de mucha, mucha práctica, quienes redactarían los proyectos dentro de un plazo de un año o un año y medio y los presentarían a la comisión de justicia para que esta a su vez y tomándolos como base los presentara con el informe que juzgase oportuno a la honorable cámara.

A mi ver en la ley orgánica debería desaparecer la distinción entre jueces ordinarios y federales. Todos son nacionales, todos son federales y todos por consiguiente ejercen una misma jurisdicción. La diferencia entre ellos debería determinarse únicamente por la naturaleza de los asuntos cuya resolución se les encomendara: civiles, comerciales, criminales, de marcas y patentes, de aduanas e impuestos internos, marítimos, etc.

Con esta contestación enteramente sincera y agradeciendo en todo lo que vale el recuerdo de mi nombre por la comisión que su digna presidencia, quedo a las órdenes suyas atto. S.

Luis Rufo.

Del doctor J. L. Murature

Buenos Aires, septiembre de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados.

He tenido el honor de recibir la nota del señor presidente, fecha 6 de agosto ppdo., en la cual se sirve recabar mi opinión acerca de diversas cuestiones concernientes al régimen orgánico de los tribunales de la capital.

Los puntos concretos que enuncia esa honorable comisión bosquejan un programa de reformas cuyo interés abona el celo patriótico y la orientación certera con que ha emprendido sus trabajos. Ha de permitirme, sin embargo, el señor presidente, que no me atenga estrictamente a ellos, para manifestar mi juicio con una libertad adecuada a la distinción que comporta su consulta.

Considero que en el estado actual de nuestra justicia ninguna reforma es tan urgente, ni puede producir beneficios tan inmediatos y tan fecundos como

la institución del juicio oral y público, particularmente en los procesos de orden penal. Creo que las formas de organización quedan en segundo plano ante el problema que plantea la subsistencia, ya anacrónica, del procedimiento escrito, tal como lo establece el código vigente. En este concepto, entiendo que los temas posibles de la iniciativa pendiente deben estar subordinados al propósito de incorporar a nuestras leyes esa conquista del derecho procesal; y como su adopción modificaría la estructura de nuestros tribunales, sería necesario referir el estudio de las otras reformas proyectadas a las decisiones que sobre este punto previo se dictasen.

Con el sistema en vigor, los jueces no tienen a su alcance todos los elementos de convicción que un método más racional podría proporcionarles. Aún en el supuesto de que la instrucción logre reunir esclarecimientos completos, éstos llegan hasta el magistrado que ha de pronunciar el fallo sin calor y sin fuerza, sometidos a la rígida uniformidad del expediente. El testigo falso y el testigo intachable, la coartada maliciosa y la excusa legítima, el cargo interesado y la acusación sincera, todas las diligencias de prueba unifican su valor expresivo sin sufrir confrontaciones directas que aquilaten su grado de consistencia. Las eventualidades más corrientes, como el error o la omisión de un secretario, pueden variar substancialmente el sentido de las constancias escritas y ejercer una influencia decisiva sobre los resultados del proceso. El magistrado tiene que proceder a tientas, buscando, no una seguridad precisa e intergiversable, sino una inducción más o menos aproximada a la verdad de los hechos. Le faltan los complementos ilustrativos que suministra el debate público, donde la actitud de cada persona y el acento de cada palabra contribuyen a proyectar un rayo de luz sobre los objetivos de la investigación. Entre el procedimiento oral y el procedimiento escrito media la misma diferencia que entre la visión real de un panorama y su representación gráfica. En aquél, el juez está en aptitud de dominar ínfimos detalles, contrayendo su atención especializada a los que considere más dignos de su interés; en éste no cuenta más que con una reducción sintética, sin medio alguno para ensanchar sus límites o para apreciar sus tonalidades. Nunca se impone con tanto rigor la necesidad de agotar las fuentes informativas como cuando se trata de aplicar sanciones sociales que afectan la libertad y el honor de los hombres. La falibilidad de los tribuna-

les es, por sí misma, demasiado extensa para que se la agrave todavía con fallas remediables de técnica procesal. Y parece evidente que mayores probabilidades de acierto acompañan al magistrado cuando las diligencias de elucidación se desarrollan ante su vista, permitiéndole examinar por separado cada elemento de cargo o de descargo, que cuando se le presenta un resumen esquemático, y muchas veces inexacto, sin facilitarle medios para profundizar por sí mismo el análisis crítico de la prueba.

Me pongo en el caso, al formular estos reparos, de que el juez de sentencia extreme su celo para abarcar en todos sus pormenores los resultados de la instrucción. Pero, a nadie se le oculta que la realidad de esta tarea previa no está acreditada por ninguna garantía fehaciente. Más aún: es fácil que el recargo de trabajo, o una confianza excesiva en su propia suficiencia, o un preconcepto basado en informaciones públicas, no siempre inobjectables, incline al magistrado a contentarse con una lectura superficial para formar su juicio. Es imposible de todo punto conocer el grado de estudio que haya precedido al fallo. El interrogante sólo se despeja en la conciencia del funcionario responsable. Un mal juez puede cometer las mayores ligerezas con la certidumbre de la impunidad. No creo, por cierto, que el elevado nivel moral de nuestra justicia autorice temores fundados en cuanto a semejante peligro. Basta, empero, poner de manifiesto su posibilidad para comprobar la conveniencia de evitarlo, siquiera sea para no dejar ninguna duda en el ánimo de los procesados sobre la justicia de los pronunciamientos penales.

En el juicio oral interviene, con una influencia superior de contralor y de crítica, el tribunal de la opinión, puesto que desaparece la penumbra del procedimiento escrito para ser substituida por la plena luz del debate contradictorio. El sistema vigente no ofrece al público otra información que los fundamentos del fallo. Solamente el magistrado conoce,—y las presenta a través del prisma con que las ha encarado,—las razones determinantes. En cambio, la audiencia pública permite a los extraños formar gradualmente su criterio sobre los hechos discutidos y llegar a conclusiones conscientes antes de que se haya dictado la sentencia. Así los magistrados desempeñan sus funciones a la vista de todos, sintiendo el estímulo y la responsabilidad que les impone esta colaboración indirecta del sentimiento público. Saben que sus fallos están librados

a una sanción moral y colectiva, cuyo auspicio les interesa atraerse. De ahí el carácter genuinamente democrático que asumen los pronunciamientos judiciales con esta forma de procedimiento. Aunque el error o la pasión puedan empañarlos, el márgen queda reducido a un mínimum extremo, puesto que el misterio de las diligencias no les presta ya su indispensable amparo.

La institución del juicio oral y público sería un primer paso para llegar más tarde a la garantía complementaria del jurado, de acuerdo con el pertinente precepto constitucional. Creo que esta última reforma sería prematura mientras la práctica del nuevo procedimiento no hubiera vencido los obstáculos inherentes a toda iniciación. Por ahora podría dejarse a los propios magistrados la función del veredicto, esperando que el perfeccionamiento ulterior del sistema indicase la oportunidad de entregarla a los jurados.

Respecto a la unificación de los fueros en la capital, considero que desde el punto de vista constitucional no puede existir ningún inconveniente para implantarlo. La justicia llamada ordinaria es federal por razón de su origen. No la comprende la dualidad que rige en las provincias, donde una rama de la justicia obra en nombre de los poderes nacionales y la otra en nombre de los poderes locales. La división de las jurisdicciones se determina en la capital por la índole de los asuntos y no por el alcance o la significación del imperio que una u otra ejercen. Ambas son netamente federales, aunque los fueros no estén unificados. Por consiguiente, los calificativos con que se las designa no tienen otra importancia que la de una cuestión de palabras. La distribución de los procesos sería, en definitiva, el efecto único de la reforma. En cuanto al régimen político de la organización judicial subsistiría con todos sus rasgos esenciales. El interés de la iniciativa quedaría, pues, reducido a las aplicaciones de orden práctico en el funcionamiento de los tribunales. ¿Valdría la pena cambiar un sistema que ha estado en vigencia durante cuarenta años sin producir inconvenientes apreciables y al cual se han adaptado a través del tiempo todos los desenvolvimientos de nuestro organismo judicial? Tal es, a mi juicio, el problema que se trataría de resolver. El argumento que más se invoca para preconizar la unificación del fuero se refiere a la conveniencia de suprimir las contiendas jurisdiccionales entre la justicia federal y la ordinaria. A

primera vista es una razón muy valedera. Pero, confrontando antecedentes de práctica forense, se advierte que los conflictos de competencia obedecen más a maniobras dilatorias de defensores habillados que a dificultades efectivas en la interpretación de las leyes. Suprimido este recurso, los litigantes esquivos buscarían en los vericuetos del código otros asideros para suplirlo. Sería imprudente, entonces, ilusionarse demasiado acerca de las virtudes que tendría la reforma para la rapidez y la simplicidad de los procesos. Probablemente no realizaría sino en mínima parte su designio primordial y en cambio crearía todas las contingencias de un ensayo aventurado contra una organización que está afianzada por el testimonio de una larga experiencia. Pesando el pro y el contra, considero que las ventajas posibles de la reforma no alcanzan a asegurar un saldo favorable sobre las del régimen actual, vale decir que no veo razón justificada para afrontar sus eventualidades.

Dejando así contestada la nota del señor presidente, me es grato ofrecerle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

José Luis Murature.

Del doctor J. F. Núñez Lozano

Buenos Aires, septiembre 9 de 1920.

Señor presidente de la honorable comisión de justicia de la cámara de diputados.

Me apresuro a contestar su atenta comunicación, llevando mi grano de arena de aporte a la labor re-constructiva judiciaria, intentada por esa honorable comisión.

1o. *¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital? ¿Qué solución aconseja para resolver el problema?*

La potestad judiciaria en la capital federal es nacida de la soberanía única y exclusiva de la nación, en un territorio en que ejerce única y exclusiva autoridad; luego, pues, conviene unificar los fueros, no existiendo razón constitucional que obstaculice la unidad, ni menos, causa para esa dualidad de jurisdicción en vigencia.

En la capital federal y territorios nacionales, todos los jueces son nacionales, y para resolver los litigios entre nacionales y extranjeros, o entre vecinos de la capital y vecinos de alguna provincia, no hay, ni puede admitirse, sino una sola justicia, amparada y prestigiada por la autoridad de la nación. En el territorio de las provincias, se explica el fuero federal como imposición del principio federativo.

La conveniencia de la unificación emerge lógicamente: a) por la inutilidad real de la justicia federal; b) por la supresión de las cuestiones de competencia; y c) por la economía aparejada por esta medida, sin desmedro de los derechos de nadie, comprobando la estadística de las causas resueltas por los jueces federales su ínfimo porcentaje de labor en relación a los jueces ordinarios.

El problema se resuelve, lisa y llanamente, suprimiendo los juzgados federales existentes; pero, para atenuar lo draconiano de la medida y no vulnerar derechos respetables, tendería el poder ejecutivo que colaborar en la obra de armonización, acatando y consagrando los derechos adquiridos de los magistrados en función, a cuyo fin, se llenarían las vacantes, hoy existentes en la magistratura, con los jueces removidos, a opción de ellos.

20. *¿Conviene ampliar la jurisdicción federal incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?*

No conviene.

En la capital federal y en aquellos territorios en que la nación ejerce jurisdicción exclusiva, no hay, ni puede haber sino una justicia, desempeñada por jueces nacionales, aplicando leyes nacionales y defendiendo, tutelando y garantizando derechos de todos los habitantes, sea cual fuese su nacionalidad.

30. *¿Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito?*

Creo innecesario tal aumento de cámaras federales, máxime, si se suprime el fuero federal en la capital, pues, de hecho, se disminuirá la labor de la existencia.

Convendría ubicarlas mejor, teniendo en cuenta la facilidad de las comunicaciones.

La estadística demuestra que la labor desenvuelta por estas cámaras es inferior a la realizada por las cámaras civiles o comerciales.

40. *¿Qué reformas procesales considera urgentes?*

El juicio oral, en materia criminal, no el jurado, que ahorra tiempo, gastos y tiene más eficacia en el esclarecimiento de los hechos; la abolición del sumario secreto; la implantación de la libertad condicional y de la condena condicional, y, en una palabra, la reforma de los códigos de procedimientos penales y civiles, sobre todo este último, anacrónico, retardado, cristalizado en prácticas rutinarias y morosas.

En el nuevo código, es de imprescindible urgencia, suprimir esas reiteradas vistas a los ministerios públicos que son la quinta rueda del carro de la justicia.

El ministerio fiscal, resabio de la época colonial, tenía la misión de asesorar a los jueces legos, única razón de su creación; hoy, indudablemente, innecesario, por ser sus vistas, en la mayoría de los casos, sin doctrina, rutinarias y sin mérito.

Tales son, en forma sintética esbozadas, las consideraciones asentadas a vuela pluma, sugeridas por las cuestiones planteadas por esa honorable comisión.

Con toda consideración.

J. F. Núñez Lozano.

Del doctor M. Moyano

Buenos Aires, septiembre 9 de 1920.

Señores presidente y miembros de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Distinguidos señores:

Tengo el honor de acusar recibo a la circular-cuestionario que se han servido dirigirme con motivo de los interesantes proyectos sometidos al estudio de esa honorable comisión, siéndome grato cumplir el deber de transmitir en seguida mis impresiones.

Mi larga práctica profesional, me decide a opinar por el mantenimiento del fuero federal, para los casos taxativamente enumerados en la ley de septiembre de 1863 y concordantes posteriores que, como es sabido, tienen su origen en la constitución

nacional; pero no estimo procedente, dar mayores ampliaciones a esta jurisdicción de excepción, invadiendo la de los jueces comunes u ordinarios, extraños a aquella especialidad.

No creo que sea práctico el pensamiento de aumentar el número de cámaras federales, porque no tendrían suficiente trabajo, a mi juicio, y se aumentarían demasiado los gastos sin responder a una necesidad visible. Las estadísticas, rápidamente consultadas, enseñan que las que existen actualmente, llenan bien su tarea, siempre que estén integradas y no se prolonguen las vacantes que ocurren periódicamente. Opino, sí, que los miembros de la judicatura, en general, deben ser bien remunerados, garantiéndoles en esa forma la necesaria tranquilidad de espíritu, en relación a las exigencias de su vida privada y a la independencia que reclame el desempeño de sus delicadas tareas.

Sería una reforma procesal urgente la de que todos los tribunales superiores o de apelación admitan las defensas orales, los informes "in voce" anteriores, que han constituido una garantía indudable para los litigantes. Saben con ese procedimiento que son realmente oídos por sus jueces definitivos en audiencias obligadas.

No creo que la honorable comisión de justicia exija los fundamentos "in extenso" de la opinión que dejo sintetizada en las breves líneas que preceden, porque están suplidos por la ilustración de los miembros que la forman y porque han sido ya expuestos o adelantados, en puntos de coincidencia, por otros colegas que han dado a la publicidad sus informaciones.

Agradecido a la distinción que la consulta envuelve para mí, tengo el honor de saludar a ustedes con mi mayor consideración.

M. Moyano.

Del doctor Tezanos Pinto

Buenos Aires, septiembre 10 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados, doctor Roberto Parry.

Señor:

La demora en contestar a las circulares de 6 de agosto y 10. de septiembre del año en curso, con

que he sido honrado, sólo reconoce por causa el mal estado de mi salud y es por ello, que seré breve en mi respuesta. Contestaré las preguntas en el orden en que vienen formuladas.

Creo que habría conveniencia en unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital, en concepto de poner término a las frecuentes cuestiones sobre competencia.

En tal caso, convendría también mantener la distribución de materias, para obtener la especialización de los jueces.

Esta distribución podría ser: 1o. Asuntos regidos por el código civil; 2o. Asuntos regidos por el código penal; 3o. Asuntos regidos por el código de comercio, menos la parte marítima y 4o. Asuntos regidos por el derecho marítimo y demás leyes de la nación.

En este caso, sería menester establecer una cámara federal, para que entendiera en las apelaciones que hoy vienen a la de la capital, en la ciudad más importante del territorio de su jurisdicción.

Si ha de ser ampliada la jurisdicción federal, considero que debería atribuírsele el conocimiento de los asuntos regidos por el código penal, pues, éste, menos que derecho privado, es una rama importante del derecho público.

Podría también declararse de su competencia los juicios sobre quiebras, ya que el art. 67 de la constitución, al conferir al honorable congreso la facultad de dictar la ley sobre bancarrotas, parece considerar que ésta no está comprendida en el código de comercio.

No conozco la estadística de los asuntos que se llevan a conocimiento de las cámaras de circuito,

Para resolver sobre reformas procesales, habría que resolver previamente lo relativo a la unificación del fuero. Cualquiera que sea la resolución que se adopte en ese particular, considero que la revi-

sación general de los procedimientos, no conviene hacerla por partes, sino construir un todo orgánico y relacionado, trabajo que estimo propio de una comisión especial de tres o cinco personas.

Saludo al señor presidente con mi más respetuosa consideración.

Tezanos Pinto.

Del doctor F. Senillosa

Buenos Aires, septiembre 10 de 1920.

Al señor diputado doctor Roberto Parry, presidente de la comisión de justicia.

Señor presidente:

Honrado, con su circular de septiembre 10., me complace en responder a la encuesta, evacuando sucintamente cada una de las 5 consultas formuladas.

10. — Considero conveniente la unificación de ambos fueros; mas, no sólo en la jurisdicción territorial de la capital de la nación, sino que en la república toda; pues que, consolidada nuestra nacionalidad, rodeada nuestra organización política de los prestigios y respetos que ha sabido inspirar al concierto de las naciones y que ha merecido en el exterior, por más que país de inmigración, no ha menester ya de infundir confianza al extranjero, asignándole para sus juicios y querellas tribunales especiales y de excepción, en pseudo-garantía contra las asechanzas del nativo de la nueva tierra en que se radica; y máxime desde que en la formación y organización de estos juzgados para nada intervienen sus legaciones y consulados, ni ningún otro contralor tienen. Son, pues, hoy día, y por su composición netamente argentina una simple ficción, que a nada conduce, si no es a engañarnos a nosotros mismos, pues que ni los gobiernos de los países de emigración confían para nada en ellos ni los tienen siquiera en cuenta.

Para resolver el problema, estimo prudente, la solución aconsejada por el señor juez doctor Oro, pues que bien consulta legítimos intereses creados, y la bue-

na administración de justicia, con el aditamento empero, que forzosamente fluye de mi respuesta a la siguiente pregunta.

2o. — Se colijé de mi anterior respuesta, que confío en que no sólo no conviene ampliar la jurisdicción federal a los juicios universales, civiles y mercantiles, sino que pienso que debiera restringírsela al conocimiento única y exclusivamente a cuestiones de derecho público, y de lo contencioso-administrativo; tan sólo a los juicios en que la nación, las provincias o las comunas o sus dependencias sean parte; y ya fuere su contendor un particular o institución o corporación u otra entidad jurídica o autoridad, y por cualquier concepto. Al efecto, correspondería modificar las respectivas leyes, de septiembre 14 y octubre del 63 y demás que de ellas derivan o que tienen atinencia con ellas, (v. gr., orgánica de tribunales, de creación de cámaras y juzgados de sección, etc.)

3o. — Lejos de aumentarse el número de cámaras de circuito, ni menos de crearse las cámaras viajeras, surge de la anterior, que debieran reducirse a: tantos jueces de 1a. instancia en lo federal, como provincias más la capital, vale decir 15; una cámara federal, de 2a. instancia, compuesta de tres miembros y conjueces para casos de impedimento, recusación (sólo con causa), o excusación ídem; con asiento en la capital de provincia más céntrica, Córdoba; y la suprema corte, de 5 miembros y también conjueces, en la capital federal, como superior tribunal de 3a. instancia y casación.

4o. — Además de las que implicaría lo dicho, me remito a las propuestas algunos años ha ya, a la comisión especial de reformas procesales designada por la honorable cámara y compuesta por los doctores Montes de Oca, Agote y Méndez. Conceptúo que la tendencia debiera ser hacia la mayor difusión del juicio verbal y actuado, así como a prepararnos al advenimiento del juicio por jurados. Que debiera cometerse a los secretarios las providencias de mero trámite e interlocutorias, sin perjuicio de reclamo verbal e inmediato al juez; aliviando así la inútil tarea material que aquello implica al magistrado, con gran pérdida de tiempo y la consiguiente distracción de su atención de suyo ocupadísima con cuestiones de fondo; y en cambio dejar librado a éste y sólo a éste la absolución de posiciones y las declaraciones de testigos, que debería tomar personalmente, con versión taquigráfica e impresión a máquina; así como la "vista de ojos" o inspec-

ción ocular; y a él y sólo a él también, con todas las responsabilidades inherentes, morales y materiales, las sentencias definitivas y de incidentes que causen gravámen irreparable, o de interlocutorias de artículos de previo y especial pronunciamiento.

Presento al señor diputado presidente los homenajes de mi consideración más distinguida, reiterándome a sus muy gratas órdenes para tales interesantes casos como este.

Su muy atto y S. S.

Felipe Senillosa.

Del doctor A. A. Giordano

Buenos Aires, septiembre 10 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la Nación Argentina, doctor don Roberto Parry.

Señor presidente:

Tengo el agrado de contestar por medio de la presente, su att. nota de fecha 1o. del corriente, en la que por encargo de la comisión que tan dignamente preside, se sirve solicitar mi opinión referente a varias cuestiones contenidas en aquella.

A la primera pregunta: Buenos Aires, capital federal de la república, con el congreso nacional por legislatura local, y presidente de la república por jefe inmediato; no debe tener otros jueces que los emanados directamente de la constitución, los cuales además del conocimiento y decisión en las causas que versen sobre puntos regidos por aquélla, deben de conocer en las causas que versen sobre puntos regidos por los códigos civil, comercial, penal y de minería. Los tribunales federales y ordinarios de la capital, deben pues reorganizarse en una sola administración de justicia.

A la segunda pregunta: He estudiado el anteproyecto del juez doctor José Antonio de Oro y creo que él sería la solución más conveniente de este problema.

A la tercera pregunta: No es posible incluir en

la jurisdicción federal el libro IV del código de comercio, (de las quiebras), pues de acuerdo con el inciso 11 del artículo 67 de la constitución nacional, es ley de fondo cuya aplicación está reservada a los tribunales provinciales.

A la cuarta pregunta: Nuestros códigos procesales, civil y comercial y criminal, son enteramente anticuados si se los compara con los actualmente en vigor en la mayoría de las naciones europeas, los EE. UU. de Norte América y naciones Sudamericanas, tales como la República del Uruguay. Las reformas deben pues ser totales.

Saluda al señor presidente con la mayor consideración.

Antonio A. Giordano.

Del doctor C. Rodríguez Egaña

Buenos Aires, septiembre 10 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados.

Contestando la circular de esa honorable comisión, tengo el agrado de expresar mi opinión sobre los diversos puntos que motivan la encuesta que realiza esa honorable comisión, lo que hago en forma sintética, sin expresar, in extenso, como hubiera deseado hacerlo en cada caso, los fundamentos en que la apoyo, por falta material de tiempo, debido no sólo a mis quehaceres personales, sino también por la circunstancia de tratarse de asuntos, todos ellos de naturaleza compleja, que no me es posible estudiar detenidamente, por la premura del tiempo que se ha fijado para evacuarlos y que no he estudiado por otra parte, con anterioridad, por haber tenido recién conocimiento de que me sería requerida mi opinión, por la circular de fecha 1.º del corriente.

Paso a contestar los puntos que motivan la encuesta. ¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario de los tribunales de la capital? ¿Qué solución aconseja para resolver ese problema?

Considero que no hay ventaja alguna en modifi-

car los fueros federal y ordinario de la capital, y por el contrario entiendo que más bien deben conservarse ambos, pero delimitando a cada uno de ellos prolijamente, su esfera de acción, dictando leyes que adopten definitivamente los principios que la jurisprudencia ha establecido en los diversos casos de dudosa interpretación que le han sido sometidos.

A este respecto comparto la opinión emitida por el señor juez federal doctor Zavalla, que ha sido publicada en el diario "La Nación" de hace algunos días, de que es necesario fortalecer los poderes de la justicia nacional y creo como él, que a ello ha de llegarse más fácilmente, restringiendo el radio de acción de la justicia federal, que ampliándolo — como se insinúa por algunas personas — en una palabra, se hace necesario dar a la justicia federal "la fuerza por la intensidad y no por la extensión".

Es así como entiendo, que sería mucho más acertado — aunque quizás no más fácil — modificar la constitución nacional, en su artículo 100, en la parte que dice: "Corresponde a los tribunales inferiores de la nación, el conocimiento y decisión de las causas, entre los vecinos de diferentes provincias y entre los vecinos de una provincia y ciudadanos extranjeros" substrayendo estos casos a la justicia federal para someterlos a la justicia ordinaria, la que no puede entender actualmente en ellos, no sólo por la disposición constitucional recordada, sino en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, inciso 2.º de la ley núm. 48, de 14 de septiembre de 1863 (sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales) y artículo único de la ley núm. 1467 del 18 de septiembre de 1884, extendiendo el fuero federal a los vecinos de la capital federal, que tratar de unificar ambos fueros haciendo desaparecer a uno de ellos.

A este respecto debe tenerse en cuenta, que muchos de los pleitos que se inician actualmente ante la justicia ordinaria y que dan lugar a las excepciones de incompetencia — que es una de las razones que según creo, puede determinar la unificación de los fueros — se inician ante ella, por el desconocimiento en que se halla el actor, de que el demandado es extranjero o se domicilia en una provincia; circunstancias éstas, muy difíciles de conocer; la primera porque puede tratarse de personas que aunque extranjeras, hayan vivido muchos años en la

capital, casándose en ella y teniendo en ella su familia, lo que trae como consecuencia, el que sean considerados por todos, como ciudadanos argentinos y escapar por lo tanto a la jurisdicción federal y la segunda, por tratarse de personas, que a pesar de vivir con sus familias en la capital, tienen su domicilio real en la provincia, pues en ella viven parte del año y en ella se halla el centro de sus actividades y negocios, escapando también aparentemente por esta circunstancia a la justicia federal.

Estas dos clases de personas, se encuentran legalmente habilitadas para oponer la excepción de incompetencia de jurisdicción, basadas en la distinta nacionalidad o en la distinta vecindad y en la mayoría de los casos hacen uso de su derecho, con el único y exclusivo objeto de retardar la solución definitiva del caso sometido a decisión judicial.

Suprimiendo la intervención de la justicia federal en estos casos, se disminuirá cuando menos esas cuestiones de competencia y se quitará a las partes un recurso para promover articulaciones inconducentes y digo inconducentes, puesto que al demandado, le es indiferente, que intervenga y falle en su asunto el juez federal o el ordinario de la capital, pues ambos le ofrecen la misma garantía de rectitud e imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

Además de la expuesta, hay otra razón de verdadera importancia para sostener que en estos casos, debe entender únicamente la justicia ordinaria y es que en esa forma, se habrá contribuido a hacer desaparecer el privilegio injustificado de que gozan los extranjeros; no diré en perjuicio de los nacionales, puesto, que como ya he dicho ambos fueros presentan en el hecho para los litigantes las mismas garantía de rectitud e imparcialidad de los funcionarios llamados a fallar en el asunto; pero sí, privilegio que redunde en desmedro de la justicia ordinaria, dado que lo único que se consigue con su mantenimiento—que ha podido tener su razón de ser en otras épocas, en las que era un hecho la aversión al extranjero y en las que primaba por sobre todas las cosas un espíritu de localismo — es colocar a la justicia local en condiciones, sino reales, al menos aparentes de inferioridad, con respecto a la federal, lo que resta a aquella parte de su autoridad moral.

Para terminar con respecto a este punto, considero, que no siendo posible, dado lo dispuesto en el artículo 100 de la constitución nacional, quitar en absoluto por medios legales a la justicia federal, el

entender en los asuntos de derecho privado sin recurrir a una modificación de nuestra carta, lo que sería un procedimiento largo y que puede tener sus inconvenientes de carácter político en los momentos actuales, conviene mantener el estado actual de cosas, que se ha venido formando paulatina y progresivamente por la jurisprudencia constante y uniforme de los tribunales nacionales, que han interpretado el precepto constitucional recordado y demás disposiciones de leyes federales, en forma restrictiva, estableciendo — a pesar de la amplitud que tiene la disposición constitucional — que la justicia federal, sólo entiende, "excepcionalmente" en las cuestiones de derecho privado, cuando concurra en ellas la distinta nacionalidad o vecindad de las partes y por "regla general" en todas aquellas cuestiones de índole verdaderamente institucional y ajenas por completo al interés privado; como ser: el cumplimiento de las leyes especiales, las demandas contra la nación, las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, etc., etc.

A ese fin, debe incorporarse al código de procedimientos civiles y comerciales — que puede y debe ser único para ambos fueros — las disposiciones contenidas en las leyes números 27, 42, 44, 48, 50, 927, 935, 1467, 3094, 3375, 3649, 3981, 4128, 5106, 5133, 7065 y 9667 comunes algunas a ambos fueros, para hacer desaparecer la dificultad que se suscita en la práctica para su manejo, por el hecho de hallarse dispersas en cuerpos aislados y agregar además a este código, en un capítulo especial sobre "jurisdicción y competencia" los casos resueltos por la suprema corte. Así, por ejemplo; la circunstancia de ser ambas partes, vecinos de distinta provincia, no es suficiente para justificar el fuero federal, es necesario además que ambas partes sean argentinos (to. 67, pág. 384); para que surta el fuero federal por razón de la distinta vecindad es necesario que el derecho que se disputa pertenezca originariamente y no por cesión o mandato (to. 3, pág. 255); en los casos de cesión es necesario que tanto el cedente como el cesionario se hallen en condiciones de poder demandar al deudor ante la justicia federal (to. 23, pág. 726); no se considera como cesión o mandato a los efectos del fuero federal, el endoso de un pagaré a la orden (to. 44, pág. 63); las sociedades anónimas a los efectos del fuero son consideradas como de nacionalidad argentina y vecinas de la provincia donde tienen su administración (to. 24, pág. 48); en las acciones que se ejercitan so-

lidariamente por más de una persona, es necesario que cada una de ellas tenga individualmente el derecho de ocurrir al fuero federal, para que este sea competente, (to. 27, pág. 329); lo mismo cuando uno de los demandantes es de la misma provincia de los demandados y todos son ciudadanos argentinos, (to. 37, pág. 210); el extranjero que contesta una demanda que se le inicia ante un tribunal de provincia sin oponer declinatoria se entiende que prorroga la jurisdicción (to. 10, pág. 490); no corresponde a la justicia federal las causas entre extranjeros, aunque sean vecinos de distintas provincias, (to. 41, pág. 207); la mujer casada mientras permanezca íntegro el matrimonio, no tiene otro domicilio ni otra nacionalidad que la de su marido, (to. 69, pág. 395); etc., etc.

II. Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?

Ratificando lo que he dicho anteriormente considero, que toda medida que tienda a ampliar la jurisdicción federal, importaría desvirtuar en su esencia la razón de ser de esta misma justicia que ha sido creada con un alto y evidente propósito institucional, el que puede afirmarse y robustecerse restringiendo el campo de acción de la justicia nacional, en lugar de ampliarlo. En lo que respecta especialmente a las quiebras, no me doy exacta cuenta del contenido de la pregunta, desde que es sabido, que si bien actualmente entiende en las quiebras la justicia local, es en virtud de una práctica que ha sido admitida, aun cuando dicha práctica constituye una verdadera transgresión constitucional, dado lo dispuesto en los artículos 100 y 67 inciso 11 de la constitución nacional.

III. Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito?

Es esta una cuestión de hecho, que debe resolverse según mi opinión, teniendo a la vista una estadística prolija de las causas que han sido falladas por las actuales cámaras de circuito en la que se exprese el tiempo medio, que ha mediado entre la apelación concedida y ordenada (o cualquier otro recurso) y el auto de primera instancia "por devuelto hágase saber" por cuanto a mi juicio, el retardo en la administración de justicia, es la principal, por no decir única causa que debe tenerse en cuenta, para aumentar el número de cámaras federales de circuito.

IV. ¿Qué reformas procesales considera urgentes?

Considero de toda urgencia la revisión y modificación del título XXVI del código de procedimientos civiles y comerciales, sobre "concurso de acreedores" reglamentando con toda prolijidad los deberes y obligaciones de los síndicos, para evitar que por negligencia o por desidia de estos, dichos juicios, como sucede en la práctica, se eternicen, con evidente perjuicio para los concursados, que vienen a quedar así en condiciones de verdaderos muertos civiles.

También debe modificarse el título XXVII del juicio de árbitros fijando las reglas procesales a que deben ajustarse los árbitros, para evitar los recursos de nulidad que se producen con mucha frecuencia.

Expresada mi opinión en la forma que dejo expuesta anteriormente a los diversos puntos de la circular de esa honorable comisión, me es grato saludar al señor presidente con mi consideración más distinguida.

C. Rodríguez Egaña.

Del doctor E. Carranza

Buenos Aires, septiembre 11 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor don Roberto Parry.

Contestando su nota del día 10., recabando mi modesta opinión acerca de las reformas judiciales que se imponen en la capital federal, tengo el honor de responder, por su orden:

A)—La unificación de los fueros federal y ordinario, conviene y urge por dos razones fundamentales: 1o., por que es ya tiempo de suprimir esos privilegios odiosos que la motivaron, y 2o., por que sólo sirve actualmente para la chicana, que hace la justicia más morosa, cara y mala que lo que ya es por otros defectos.

B)—La solución más lógica y conveniente es federalizar los tribunales ordinarios, con su personal actual, pero reorganizándolos, en sentido de dar sola-

mente cuatro secretarios a los jueces civiles, a fin de que ellos, y no los secretarios, sean real y efectivamente jueces.

Esta unificación impone una nueva ley procesal que haga los juicios más breves y baratos, y que sancione una efectiva responsabilidad de los jueces, en sus faltas, porque el remedio del juicio político no les basta, como es de pública notoriedad.

C)—La ampliación del fuero sobre quiebras, etc., es consecuencia de la unificación, dejando subsistentes las jurisdicciones civil, comercial y criminal.

D)—No conviene aumentar las cámaras de circuito mientras la labor de los tribunales no lo requiera.

E)—Las reformas procesales deben ser sistemáticas y por tanto no es posible ni procedente indicarlás por partes aisladas.

Saludo al señor presidente con toda consideración.

Ernesto Carranza.

Del doctor R. C. Aldao

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados, diputado doctor Roberto Parry.

He recibido la circular fechada el 6 de agosto próximo pasado, en la que usted, en nombre de la comisión de justicia que preside, ha tenido a bien requerir mi opinión sobre algunas cuestiones relacionadas con los importantes proyectos que esa misma comisión tiene sometidos a su dictamen.

Lamento que circunstancias de orden personal y ajenas a mi mejor voluntad no me permitan contestar a las preguntas formuladas con la extensión que su naturaleza indica; pero no debo omitir mi opinión sobre el punto principal del cuestionario referido y según el cual se investiga sobre la conveniencia de unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de esta capital.

Abrigo la persuasión de que las razones, bien conocidas, que dieron lugar al establecimiento de la doble jurisdicción, ya no existen en esta capital. Y pienso

que esta opinión es la de la gran mayoría, sino todos, los miembros de este foro.

Ruego a usted excusar la forma tan parca en que me encuentro precisado a satisfacer el pedido de usted, en el concepto de que lo hago solamente por no dejar de corresponder, según las circunstancias me lo permiten, a la distinción que se me ha hecho requiriendo mi opinión.

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted con mi consideración más distinguida.

R. C. Aldao.

Del doctor E. Gorlero Pizarro

Buenos Aires, septiembre 13 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

Distinguido señor:

Acuso recibo de la atenta nota enviada por esa comisión en la que tiene la gentileza de solicitar exprese mi opinión sobre todos o algunos de los puntos enumerados en la misma y en contestación a ella, tengo el agrado de remitirle las respuestas pertinentes, que me ha sugerido la experiencia de catorce años de ejercicio en la profesión. Como se trata de cuestiones ampliamente debatidas y esa comisión tendrá en su poder opiniones más autorizadas sobre las mismas, me limitaré a responder concretamente las preguntas formuladas, sin mayores consideraciones ni comentarios.

10. — *¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital?*

La contestación, en mi concepto, no puede ofrecer dificultad ninguna. La existencia de un solo fuero ordinario es una necesidad sentida y un medio para evitar dificultades, entorpecimientos en muchas cuestiones, y roces de jurisdicción, que no responden a nada práctico. En el estado actual de nuestra sociedad, la unificación de fueros en la ca-

pital de la república representaría una ventaja evidente, para la administración de la justicia y para los litigantes de buena fe. Los actuales juzgados federales subsistirán como ordinarios, en las jurisdicciones civil y comercial y la cámara federal, como tribunal de apelación.

20. — *¿Conviene ampliar la Jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?*

Realizándose la unificación de los fueros federal y ordinario, esta pregunta carece de objeto, por lo menos en la capital.

30. — *¿Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito?*

Esta pregunta no me considero en condiciones de contestarla. El aumento de las cámaras federales dependería del trabajo que tienen las que existen actualmente.

40. — *¿Qué reformas procesales considera urgentes?*

En primer término el sistema de notificaciones, para que éstas se realicen en el menor tiempo posible. Y al referirme a notificaciones, no quiero decir que deben circunscribirse a ellas, sino también a las intimaciones de pago y a los embargos. Si estas diligencias se practicaran en un término brevísimo,—a cuyo efecto podrían hacerse o por el correo o por empleados especiales con obligaciones y sanciones terminantes para el caso de demora—se ganaría un tiempo precioso y los asuntos judiciales marcharían con bastante rapidez. Hoy las demoras y entorpecimientos en la secuela de los juicios son ocasionadas especialmente por la forma en que se hacen las notificaciones y el tiempo que necesitan empleados u oficiales de justicia para realizar esas diligencias no tan sólo por exceso de trabajo o negligencia, sino muchas veces por mala fe.

Habría que reformar también, el sistema de los nombramientos de oficio. Estos debían realizarse por sorteo, dentro de una lista en cada profesión o gremio, que hubieran llenado ciertas condiciones de preparación, honorabilidad y un tiempo determinado en el ejercicio de su respectiva profesión.

Los concursados civiles deberían tener también

un sistema de legislación parecido al de los comerciantes, con sus concordatos y adjudicación de bienes. La rehabilitación debería producirse de oficio, después de un cierto tiempo de decretado el concurso y pagado determinado porcentaje a los acreedores.

En los juicios ordinarios debería limitarse el número de testigos a ocho o diez por cada parte.

Dejando así contestado el cuestionario formulado, sólo me resta saludar con mi mayor aprecio al señor presidente y por su intermedio a la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados.

Eudoro Gorlero Pizarro.

Del doctor J. Díaz Arana

Buenos Aires, septiembre 13 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

En contestación a la honrosa consulta de la comisión que usted dignamente preside, cumplo en manifestar:

a) Que considero lógica la unificación de los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital, dado el origen de uno y otro y la identidad de garantías que ofrecen; pero no advierto, en la práctica, que esa unificación sea mayormente necesaria.

En todo caso, deben mantenerse y aún ampliarse las especialidades de los juzgados, por razón de la materia, pues ello contribuiría a la más rápida y acertada administración de justicia.

b) Por esta última razón, no considero conveniente incluir el conocimiento de las quiebras en la jurisdicción federal.

c) En cuanto al aumento de las cámaras de circuito, es asunto que debe resolverse con arreglo a la información estadística correspondiente.

d) Considero urgentes todas las reformas que tiendan a abreviar los procedimientos, como ser las de facultar a los secretarios para firmar providencias de mero trámite, declarar inapelables las regulaciones de menor cuantía, limitar el número de

testigos, fijar estrictamente la intervención de los ministerios públicos y consejo nacional de educación, reprimir con severidad las maniobras dilatorias de los litigantes, etc.

Saludo al señor presidente con mi consideración más distinguida.

J. Díaz Arana.

Del doctor E. Gómez

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados, doctor don Roberto Parry.

Tengo el honor de responder a su atenta nota de fecha primero del corriente, en la que se digna solicitar mi opinión acerca de algunas cuestiones relativas a la administración de justicia.

Pienso que conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital. Nada hay que se oponga a esa unificación. Los textos constitucionales que se invocan por los que sostienen una tesis contraria, no autorizan, en mi concepto, la interpretación que de ellos se hace. Por el imperio de tales textos, lo único ineludible es la institución de una justicia federal "en territorio de las provincias", como lo demostraba, con tanta claridad el mensaje del poder ejecutivo de fecha 5 de mayo de 1899, cuando desempeñaba la cartera de justicia el doctor Osvaldo Magnasco.

La experiencia profesional demuestra que es perjudicial para la buena administración de justicia la subsistencia de ambos fueros en la ciudad de Buenos Aires.

1o. Porque da margen a cuestiones de competencia que dilatan la substanciación de los procesos.

2o. Porque origina verdaderos conflictos en la jurisprudencia. Es notorio que, sobre múltiples cuestiones, el criterio de interpretación de los tribunales ordinarios es fundamentalmente opuesto al de los tribunales federales, y ello, constituye una

verdadera aberración, cuando los fallos se pronuncian en la misma localidad y en la misma casa.

En lo expuesto va implícita mi respuesta negativa a la segunda de las cuestiones planteadas.

Carezco de datos que me autoricen para responder a la tercera pregunta.

En cuanto a las reformas procesales que reputo urgentes, son muchas. Para enumerarlas y fundarlas, aunque se extremara la síntesis, fuera necesario un libro.

La justicia es lenta. Es ésta, su falla fundamental. Conviene sancionar preceptos que hagan efectiva la responsabilidad de los jueces en los casos de manifiesto retardo en el despacho de las causas sometidas a su conocimiento. En la generalidad de los casos, los términos establecidos por la ley de procedimientos, son ilusorios. El de prueba, por ejemplo, que según dicha ley no puede exceder de cuarenta días, se prolonga, casi siempre, por espacio de varios meses. Suele exceder al año. Las audiencias no tienen lugar en los días señalados. Faltan los jueces, o a los jueces les falta tiempo para presidir esas audiencias. Y así se eternizan los juicios. El recurso de queja por denegación o retardo de justicia, no existe, en el hecho. Por lo demás, él se limita al caso en que hayan transcurrido los términos legales para pronunciar sentencia, sin haberla expedido.

En materia penal considero que debe sustituirse el procedimiento escrito por el oral; y el juez único por el tribunal colegiado, de primera y única instancia.

Tenemos un código que sanciona el procedimiento inquisitivo; que proscribe, en absoluto, cuanto signifique publicidad, y que coloca al juez en la imposibilidad de apreciar los hechos por sí mismo, obligándolo a valerse de intermediarios que desnaturalizan su misión y enervan su elevado ministerio.

Fuerbach, decía: "Si la justicia en persona bajase del cielo a la tierra para encarnarse en algún hombre bajo la forma de juez, debiera públicamente y a la luz del día, sentarse en el sillón de los jueces y allí esforzarse por arrancar, si no de sus propios ojos, por no tenerlas, las vendas que le impiden ver claro, al menos de los ojos de los litigantes o de cuantos tuvieran que exponer ante él sus razones, para que con toda seguridad puedan atentamente observar todos los pasos que diere y los actos que realizare. Siempre que la justicia deja de obrar a la vista de todos, aunque en su íntima esencia persista intachable y recta, en la opinión vulgar, sin embargo, pierde muchísimo, si es que no pierde todo. Un tribunal para ser justo no necesita funcionar en público; más, para no parecer injusto, si lo necesita, aún donde fuera manifiesta la justicia de su proceder".

La publicidad y la oralidad del juicio son, desde luego, dos principios que deben incorporarse a nuestro procedimiento penal.

La justicia del crimen es administrada, en forma tal, que el juez no conoce, la mayoría de las veces, al acusado a quien condena o absuelve: y esto, ni aún en los casos más graves. Solicitado el ex juez del crimen doctor Ernesto Madero para que manifestara la íntima impresión que se hubiera formado sobre un sujeto condenado por él a la pena capital, declaró que sólo lo había visto en el momento de la lectura de la sentencia que debía ser ejecutada veinticuatro horas después. "Gayetano Grossi ha sido borrado del libro de los vivos,—decía el doctor Madero,—sin que el juez de sentencia que lo ha condenado, haya estudiado su ser moral"... Confesiones como esta no han menester de comentarios y la valentía con que ella fuera hecha, envuelve la crítica más formidable de que pueda ser objeto el sistema procesal vigente.

Saludo al señor presidente con mi consideración más distinguida.

Eusebio Gómez.

Del doctor A. Pillado Matheu

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, don Roberto Parry.

Al responder, complacido, su atenta nota fechada el 10. del corriente, en que usted se sirve recabar la opinión del infrascripto sobre diversas cuestiones atañedoras a la administración de nuestra justicia, séame permitido expresar que, por razón de obligaciones profesionales ineludibles y absorbentes, me es de todo punto imposible fundar por ahora mis opiniones con la amplitud necesaria y con el acopio de doctrina que fuese menester para sustentarlas formalmente ante esa comisión de su digna presidencia.

Pero, contemplando la obra útil, progresista y altamente patriótica en que se halla empeñada la honorable comisión de justicia, conceptúo deber inexcusable esbozar siquiera opiniones definidas y concretas, asumiendo, con ellas, la parte de responsabilidad que nos concierne a los que actuamos diariamente en el foro de esta capital; todo ello sin perjuicio de colaborar oportunamente con mayor extensión y eficacia en aquella dignísima obra de bien público.

Con las salvedades señaladas, contesto suscritamente la encuesta:

—Es indiscutible la conveniencia, mejor dicho la necesidad imperiosa, de unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital.

Desde que el afianzamiento de la justicia es uno de los principios fundamentales sustentados por la constitución que nos rige, no puede hacerse válidamente el distinguo de "jueces de la constitución" y "jueces de la ley", suspicacia interpretativa que se ha pretendido erigir en axioma jurídico para explicar y sostener la existencia de los tribunales federales. En mi concepto, tanto los magistrados de este fuero como los del ordinario de la capital son verdaderos "jueces de la constitución".

La unificación — en que, por supuesto, no entraría la suprema corte nacional, que ejerce altas funciones de carácter jurídico-político — reportará de inmediato la ventaja de asegurar la más rápida y eficaz tramitación.

tación y solución de los litigios, evitando los perjuicios, trabas y dilaciones que diariamente originan las excepciones sobre incompetencia de jurisdicción. De ello dá sobrada idea la circunstancia conocida de asuntos en que, declarada la competencia del juzgado federal y después de seguirse todos los trámites procesales hasta la sentencia de primera instancia, la cámara de apelación, o la corte en su caso, al fallar en definitiva ha resuelto que el asunto no era de la competencia federal, obligando a los interesados a reiniciar sus acciones ante un tribunal de distinto fuero, con todo el cortejo de perjuicios, gastos y pérdida de tiempo que es fácil acreditar en dos o tres años de trabajo perdido y tal vez de prescripciones operadas.

¿La solución de este problema?

Una ley declarando que la administración de justicia en la capital y en los puntos del territorio donde actualmente existen tribunales federales, se hallará a cargo de tantas cámaras y jueces en lo civil, comercial, del crimen, correccionales y de instrucción como los que fija la ley de presupuesto, designando a todos como federales, o nacionales, por razón del origen de su nombramiento y para diferenciarlos de aquellos que son privativos de las autonomías provinciales. La ley comprendería, así, bajo la misma denominación a las actuales cámaras civiles y federales, a los jueces de primera instancia en lo civil y federal, a los ordinarios del crimen y al federal, etc., de modo que ejerciten sus funciones dentro de la materia que los especializa, regidos por una misma ley de procedimientos en cada orden de su jurisdicción.

Si se unificase el fuero, es claro que el conocimiento de las quiebras quedaría sometido a los jueces en lo comercial, que serían federales por la razón anotada precedentemente.

Opino que conviene aumentar las cámaras federales de circuito, situándolas en forma que consulte las necesidades de cada foro, para lo que es indispensable atender la facilidad de las comunicaciones. Las cámaras actuales podrían suministrar una estadística sobre el número y procedencia de las causas en apelación, las demoras sufridas en su trámite, etc., y agrupar racionalmente los juzgados federales, en relación con ellas y con las que a su juicio debieran crearse para regularizar las actuaciones y abreviar la solución definitiva de los litigios.

En cuanto a las reformas procesales de mayor

urgencia, no es posible enunciarlas en detalle sin dar los fundamentos de cada una, de lo que no encuadra en esta breve síntesis, pero, en términos generales, creo que todas ellas, cualesquiera que fuesen, debieran inspirarse en el propósito de dar mayor libertad de criterio a los magistrados, convirtiéndolos en verdaderos jueces de conciencia y de equidad, como en la magistratura inglesa, y quitándoles el carácter de jueces de derecho que actualmente tienen, instrumentos pasivos de las leyes de forma que se hallan obligados a aplicar mecánicamente. Es así como un juez que honraba a la magistratura argentina se lamentó, en una ocasión, conversando con el infrascripto, de haber tenido que fallar un asunto contra su conciencia y sus convicciones, porque la ley así se lo ordenaba.

Finalizo esta muy breve síntesis de opiniones arraigadas en la tarea profesional, ofreciendo mi modesto concurso a la honorable comisión que tan dignamente preside Vd., en cuanto él pudiera serle de alguna utilidad para el estudio y dilucidación de los puntos que motivan la encuesta formulada.

Saludo a Vd. con distinguida consideración.

A. Pillado Mathcu.

Del doctor F. Durá

Buenos Aires, septiembre 14 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados, doctor don Roberto Parry.

Señor presidente:

Honrado por el pedido de mi opinión profesional en los diversos puntos que comprende la comunicación que he recibido contesto por su orden a cada uno de estos.

1o. ¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital? ¿Qué solución aconseja para resolver ese problema?

A mi juicio no conviene, ni constitucionalmente es posible la unificación del fuero federal con el ordinario en la capital de la república.

El fuero federal se produce, constitucionalmente, cuando es el poder judicial de la nación el que se ejerce (art. 94 de la constitución).

El fuero ordinario entra en acción cuando es el poder judicial local el que está en ejercicio.

Esta diversidad de poderes se produce lo mismo en una provincia argentina que forma parte de la confederación, que en un territorio federalizado; pues las causas que por su materia pertenecen al poder judicial de la nación, enunciadas en el artículo 100 de la constitución, son del fuero de la nación lo mismo en el territorio de una provincia que en la capital federal.

En cambio, todas las causas cuyas materias no se hallan enunciadas en el artículo 100 de la constitución, no son del poder nacional, sino de los poderes judiciales locales; y esto se produce lo mismo en las provincias que en la capital.

La pregunta que se formula, viene, pues, a resolverse en esta otra: conviene que un mismo tribunal ejerza el poder judicial de la nación y simultáneamente el poder judicial local? Y a esto contesto que, a mi juicio, no conviene. Por el contrario, conviene más bien, en obsequio de la mejor justicia, la especialización de las funciones en relación con la especialización de las materias. De estas, las unas son, por su propia naturaleza, materias que afectan al "pactum fœderis", a la relación oficial de la nación con las naciones extranjeras, a puntos regidos por la constitución, por leyes del congreso sobre materias de comunicación (ferrocarriles y telégrafos), interprovincial o internacional (navegación y puertos, aduanas, etc.). Materias que en nada se asemejan a las que versan sobre simples relaciones de orden civil o de derecho penal por infracción de códigos y leyes del derecho común. La especialización judicial de unas, como de otras, no es una desventaja, a mi juicio, sino lo contrario.

Se produce, sin embargo, un problema, al cual se refiere la última parte de la primera pregunta, que dice: ¿Qué solución aconseja?

Creo que en beneficio no de la unificación de fuero, sino precisamente de su mejor separación y de la mejor especialización de materias de uno y otro fuero, convendría hacer una revisión general de todas las leyes, a partir de las de 1863 sobre crímenes y delitos contra la nación y de procedimientos, ferrocarriles, telégrafos, aduanas, etc.; a efecto de devolverle al fuero ordinario o común, muchas cosas

que, sólo por erróneos conceptos, han podido serle atribuidas al fuero federal.

No deseando hacer una demostración demasiado extensa, me limitaré a observar que no se concibe bien por qué razón haya de ser federal el acto delictuoso común en un tren en marcha o un perjuicio cualquiera en una línea telegráfica, u otros hechos menudos en que "ratione loci", que en definitiva no es ninguna razón en el buen concepto del derecho, se da intervención obligada al fuero federal. Una cuestión con las obras de salubridad es de fuero común si versa sobre cosa local en Buenos Aires; y vendría a ser de fuero federal si se refiere a cosas de esa misma dependencia del ejecutivo en las provincias. Puede multiplicarse los casos y ejemplos de cosas que, a mi juicio, deberán ser revisadas y corregidas; pero con muchísima prolijidad y esmero en la revisión tanto de las leyes como de la jurisprudencia, así nacional como extranjera.

Segunda pregunta: ¿Conviene ampliar la jurisdicción federal incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?

Queda implícitamente contestada en la anterior.

Tercera pregunta: ¿Conviene aumentar el número de cámaras federales de circuito?

A mi juicio esto resultaría, después de revisadas las leyes y mejor especializadas las funciones de ambos fueros (revisión que alcanzaría también a las relaciones de uno y otro en todas las provincias) conforme al número y clase de materias y causas que queden correspondiendo al fuero federal.

Por el momento, el aumento de cámaras de circuito sólo podría motivarse en la excesiva aglomeración de causas en alguna de ellas o bien en los perjuicios y demoras que irroguen a los litigantes las grandes distancias hasta los asientos de las respectivas cámaras.

No estoy suficientemente habilitado por el conocimiento de tales hechos para opinar en estos puntos de necesidad o conveniencia actual.

Cuarta pregunta: ¿Qué reformas procesales considera urgentes?

Considero urgente desde luego una reforma que, en la capital, suprima la ley de procedimientos de 1863 y el código vigente en lo civil, haciendo de ambos una sola ley de procedimiento, en lo no criminal para ambos fueros.

Esa reforma es urgentísima; porque la mayor parte

de los defectos que se atribuyen a nuestra administración de justicia dimana de los enormes vicios en el procedimiento judicial. Es poco decir que hay en lo civil tantos códigos de procedimientos como jueces, lo cual elevaría a catorce los códigos; sino que se aproxima mucho más al estado real de las cosas el decir, que hay tantos códigos de procedimientos como secretarías actuarias. Las disposiciones de la ley reciben en cada una de estas las aplicaciones más arbitrarias. Se ha creído que las reglas del procedimiento valen poco o nada; que no afectá su infracción o su buen cumplimiento al fondo justo o injusto de lo que se litiga. En general, todo el procedimiento judicial está viciado de falsedades repugnantes a la buena fe. Se trabaja a base de puras simulaciones. Cuando en las actas se pone: "estando en audiencia su señoría, etc." resulta que en realidad nadie ha visto la cara del juez, y todos saben que este, a lo sumo, está en la casa pero no en el acto. El juez se ocupa, en las horas de despacho, en firmar en barbecho providencias que él no dicta ni confronta con sus actuaciones para ver si han sido bien dictadas por los secretarios.

Tal es, en breve síntesis, el estado actual del procedimiento judicial. Y claro es que urge remediar esto si se quiere sanear la justicia: como puede afirmarse que la justicia no será saneada si el modo de administrarla no es remediado eficazmente.

En la reforma de las leyes del procedimiento judicial, será inevitable comprender, combinadamente, la ley orgánica misma de la justicia de la capital, en todo aquello que tiene de procesal. Podría aun estudiarse la organización misma de la justicia, suprimiendo las cámaras de cinco jueces que son un lujo de magistrados, y una inutilidad real, puesto que en los acuerdos para los fallos uno sólo dicta el fallo y los otros cuatro, en noventa y cinco casos sobre cien, cuando menos, se adhieren al fallo del informante.

En todo caso, para proceder a este género de reformas soy de una opinión enteramente contraria a la designación de comisiones. El código civil, anteriormente el de comercio, el penal, el de procedimiento penal han sido obra de un hombre solo. Es la tradición y la buena tradición, es decir, la eficaz tradición para hacer leyes. La reforma del código de comercio que fué hecha por una comisión, acaso empeoró lo que existía, a cambio de muy pocas adiciones útiles. La obra de uno tiene mayor unidad de criterio jurídico y de plan. Después de hecha, puede y debe ser profusamente circulada y ampliamente consultada y discutida.

La comisión final debe ser el parlamento mismo, teniendo a la vista y a la mano los resultados del debate entre el autor y sus contradictores.

Al presentar al señor presidente las precedentes opiniones sobre los puntos consultados, cuya completa dilucidación exigiría escribir un libro, o más de uno, me es grato presentar igualmente las seguridades de mi consideración y respeto.

Francisco Durá.

Del doctor H. Lafaille

Buenos Aires, septiembre 14 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor don Roberto Parry.

Tengo el honor de informar al señor presidente sobre los puntos que abarca la encuesta con arreglo a las notas, fechas agosto 6 y septiembre 10., que se ha servido dirigirme.

En obsequio a la brevedad habré de limitarme a fijar las conclusiones, y en ciertos casos, a fundarlas someramente.

Primera cuestión

La experiencia demuestra a diario los inconvenientes del doble fuero en la capital. Si en ella ejercen jurisdicción exclusiva las autoridades nacionales, la justicia debe también ser federal.

Aunque para los fines de la representación parlamentaria se la equipare a una provincia, tal consideración no podría extenderse hasta el extremo de crear dos órdenes de tribunales, como si todos ellos no tuvieran el mismo origen, y como si los motivos que han sido parte para substraer determinadas causas al conocimiento de los jueces locales, fueran aplicables a estos otros, designados en la misma forma que la magistratura de la nación.

Esta ficción de la capital-provincia, que debiera limitarse a su verdadero propósito, es la que determina un error de tan graves consecuencias. Por ello es que

en los territorios nacionales se ha llegado a la unificación, y no en la ciudad de Buenos Aires.

Si conviene que en el distrito federal sólo exista un fuero, y si éste ha de ser por fuerza, el de la nación, el procedimiento más práctico sería el de refundir los tribunales de uno y otro orden, declarando que todos ellos son federales en el sentido de la carta fundamental, y habilitados por ende, para entender en todos los juicios que por la ley número 48 no correspondían a los jueces locales.

De tal suerte y con un aumento en el personal de magistrados sería posible crear algunas cámaras y juzgados que son actualmente necesarios.

Segunda cuestión

Considero que, resuelta la primera con el criterio arriba expresado, el punto perdería casi toda su importancia, puesto que no podría plantearse ya respecto de la capital, y si únicamente en cuanto a las provincias.

Además, la organización de los tribunales respectivos, con cámaras alejadas de los jueces de primera instancia, perjudicaría a los litigantes con la necesaria demora en la tramitación de los recursos. Se estimularía considerablemente el obstruccionismo en las quiebras y convocatorias, de suerte que estaríamos peor, sin duda con semejante reforma.

Tercera cuestión

Me inclino al aumento de las cámaras federales de circuito.

Por de pronto sería necesario crear una en Mendoza para las apelaciones de la región de Cuyo, que vienen a la capital. El distrito podría ampliarse con la provincia de La Rioja, a fin de aliviar un tanto al tribunal con asiento en Córdoba.

La jurisdicción territorial de la cámara establecida en La Plata me parece enorme, ya que, sin perjuicio de la provincia de Buenos Aires, comprende todos los territorios del sud. Debiera limitarse a la primera, lo que sería ya bastante, y erigir en cuanto a lo demás, un nuevo tribunal que podría ejercitar con mayor eficacia la superintendencia sobre los jueces de esas apartadas regiones. Mientras las circunstancias, especialmente la facilidad de los transportes no permitieran su instalación en Santa Rosa o Viedma, funcionaría en esta capital.

Entiendo que por el momento, estas dos cámaras salvarían las necesidades del servicio público.

Cuarta cuestión

El principal inconveniente a señalarse en la marcha de los litigios estriba en los hombres, más que en las leyes. Con buenos jueces, un foro depurado y procuradores responsables, podrían subsistir sin grave perjuicio las normas actuales. Es pues, en la designación de los primeros y en la severa vigilancia de los demás, donde en mi concepto está la clave del problema. La institución de colegios de abogados y procuradores con carácter oficial contribuiría seguramente a seleccionar los curiales y a establecer sobre la magistratura un contralor saludable.

La modificación del régimen actual que estimo de mayor urgencia sería la de llegar a un código procesal para toda la república. Sin menoscabo de las autonomías locales, el gobierno nacional podría tal vez lograr tan benéfico resultado, provocando una reunión de delegados provinciales para preparar un anteproyecto. Así se incorporarían a la legislación muchas reformas útiles que rigen hoy tan sólo en una parte del país; tales como las introducidas en el procedimiento penal por la provincia de Buenos Aires, y en el civil por ella y las de Mendoza y Santa Fe. De paso, se obtendría la unificación de los trámites ante la justicia ordinaria y la federal, con evidente beneficio para todos.

Tal es en síntesis, lo que opino sobre los puntos de la encuesta que esa comisión ha tenido la excelente idea de promover, facilitando así al público y en especial a los hombres de ley, el medio de colaborar en las reformas útiles.

Agradecido a esa deferencia, saludo al señor presidente con toda consideración.

Héctor Lafaille.

Del doctor C. M. Vico

Buenos Aires, septiembre 15 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia, doctor Roberto Parry.

Cámara de diputados.

Me es honroso contestar su comunicación del 10. del corriente limpiándome a los temas 10. y 40.

Respecto al primer tema creo que no es conveniente la unificación de los fueros federales y ordinario de la capital. Es verdad que los jueces tienen actualmente el mismo origen y están sometidos a idénticas normas para su remoción y si tales características hubiesen de perdurar habría conveniencia en la unificación. Pero creo que la justicia ordinaria debería someterse por ley, a normas menos solemnes e incómodas que el juicio político para la remoción de su personal y esta consideración me inclina a mantener la división de los fueros atento a que los jueces nacionales tienen establecido en la constitución el procedimiento del juicio político.

Manteniendo los dos fueros debe establecerse con la mayor claridad la jurisdicción de cada uno, eliminando las deficiencias de las leyes vigentes sobre la materia.

Respecto al cuarto tema creo que las leyes procesales deben reconstruirse tendiendo a mayor uniformidad y simplificación. Las medidas de seguridad deben facilitarse eliminando para los embargos todo otro recaudo que no sea la garantía efectiva por caución real o personal suficiente, que preste el embargante, como lo establece el código de procedimientos de Santa Fe, artículo 1005. Los actos judiciales que como los remates pasan fuera de la presencia del juez y no son realizados por funcionarios deben ser controlados por funcionarios que el juez o la ley designen. Debe aumentarse el número de jueces y disminuirse el de secretarios, a fin de que la atención de los asuntos sea más directa por parte de los primeros.

Saludo al señor presidente con toda mi consideración.

Carlos M. Vico.

Del doctor W. Reffino Pereyra

Buenos Aires, septiembre 15 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados, doctor Roberto Parry.

Distinguido señor:

Al acusar recibo de su atenta nota del 10. del corriente, cumplo con el honroso deber de responder a

la respectiva encuesta, lamentando tan sólo el laconismo a que me obliga la falta de tiempo.

10. Entiendo que conviene, para la buena y rápida justicia, unificar los fueros federal y ordinario, en los tribunales de la capital. Se denominarían simplemente jueces de la capital federal; pues no sería jueces ordinarios ni federales; por ser ambas cosas a la vez. No se violaría así la constitución nacional.

20. Para resolver el problema, entiendo que la solución sería: reorganizar la administración de justicia de la capital federal, reconociendo como jueces, camaristas, fiscales y demás funcionarios judiciales, de los fueros federal y ordinario, a los que en la actualidad existen. Habría así el número de cámaras, jueces de primera instancia y demás funcionarios que existen actualmente, sólo variaría su denominación: todos serían jueces, camaristas y demás funcionarios de la capital federal.

30. Reorganizada la justicia de la capital federal, en la forma expresada *up supra*, debería forzosamente entender en las quiebras y en todos los asuntos que entienden actualmente los jueces federales y de la jurisdicción ordinaria.

40. Las estadísticas de la labor de las cámaras de circuito y la misma práctica profesional del subscripto, me revelan que, actualmente, no es necesario ni conviene aumentar su número.

50. Considero urgente reformar substancialmente la legislación procesal federal, para que pueda servir de modelo a todas las provincias. Considero más adelantados y modernos los códigos de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Como reforma de detalle considero que, en un país eminentemente agrícola y ganadero, debiera existir un procedimiento especial para los juicios que versen sobre cereales o ganados. Todo juicio por entrega de cereal, precio, estado de la cosecha, etc., y sobre entrega de bienes muebles en general, no debe seguir el trámite del juicio ordinario, debería ser sumarísimo y actuado. Bastaría que el juez oyese a las partes, nombrase un perito que dictamine, en presencia de las partes, sobre el estado del cereal o del ganado, etc., y el juez podría fallar en el acto. Se evitaría así que millares de pleitos sobre cereales o ganados sean resueltos por las bolsas de comercio, sin las garantías que, desde luego, ofrecen los tribunales. Las cámaras deberían resolver dentro de 24 horas, en grado de apelación, con la prueba de primera instancia.

Dejando así simplemente esbozadas las respuestas,

me es grato saludar a usted y por su intermedio a la honorable comisión de justicia, con mi consideración más distinguida. S. S. S.

W. Reffino Pereyra.

Del doctor D. Antokoletz

Buenos Aires, septiembre 15 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia.

Al recibir la primera comunicación de la honorable comisión que usted preside, hube de contestar inmediatamente a las preguntas que en ella se formulaban. No lo hice porque mi carácter de jefe de sección de un ministerio nacional, mi carácter de funcionario público, no me permite expresar libremente el concepto que tengo del funcionamiento de los tribunales en la capital federal. Ante la insistencia de esa honorable comisión, diré únicamente que la desilusión y la amargura embargan el espíritu de la mayor parte de los letrados del foro bonaerense, pues la justicia en la forma en que se administra, no satisface el sentimiento más elemental de justicia ni de equidad, salvo raras excepciones. ¿Quién se ha tomado la molestia de verificar los errores de hecho y de derecho que diariamente se cometen en los tribunales? ¿Qué recurso material ni moral existe contra el absolutismo, cruel a veces, de las cámaras de apelaciones?

Poco importa a los justiciables que estén separados o unidos los fueros ordinario y federal. Lo que quiere la población es jueces íntegros, de honestidad mental y personal, que no se dejen llevar por el primer impulso, que no traten los litigios con despreocupación, que no se dejen influenciar por ningún fiscal, que estudien personalmente cada causa por trivial que ella parezca, que no conviertan un tribunal colegiado en juzgado unipersonal, como es de práctica actualmente en las cámaras de apelaciones, en que uno de los camaristas toma la palabra y los demás simplemente se adhieren, sin dar mayores explicaciones. Yo creo que es innocuo reformar los códigos vigentes; es preciso elegir jueces que sean jueces de verdad, lo demás no tiene importancia, y la mejor ley tiene puertas

de escape cuando el llamado a aplicarla obra de mala fe. Sí, de mala fe; desgraciadamente existe la mala fe, lo he podido comprobar reiteradamente en 15 años de práctica profesional.

La tradición ha rodeado a los magistrados judiciales de una coraza de intangibilidad y ha colocado en sus propias manos armas para defenderla. En esto el poder judicial se diferencia de los otros dos poderes. En efecto, mientras los actos del poder ejecutivo pasan por el contralor de la oposición y por la censura del periodismo, y que los actos del poder legislativo pasan por el tamiz de la discusión pública en que toman parte numerosos legisladores y en presencia de una barra a veces tumultuosa, y una vez que toman la forma de ley, son analizados, criticados, desmenuzados en las universidades, en las publicaciones de los escritores y hasta en la plaza pública: en cambio los actos del poder judicial escapan al contralor colectivo ofreciendo el ejemplo anacrónico para el derecho público contemporáneo, de emanar de una autoridad que se considera revestida de un carácter casi sagrado e inmaculado. Si un litigante o su abogado se permite poner en duda la sabiduría o el error de un magistrado, queda en el acto fulminado con apercibimiento, con arresto, con separación de la defensa de la causa. Ningún recurso existe en la capital federal contra la ignorancia de los camaristas y jueces, ni contra su mala fe, ni contra su mal humor. Sólo queda abierta la vía del juicio político, pero ¿quién no sabe que éste es un recurso de lujo y en la mayoría de los casos irrisorio? pues siendo hombres de ley, difícilmente dejan huellas propias de profanos. El público y los abogados, procuradores, peritos, etc., están a la merced de los magistrados.

¿Qué importa que el procedimiento sea caro o que sea barato? esto no es lo esencial; tampoco es fundamental que sea breve o largo. Lo que interesa más que todo a los justiciables es obtener justicia y no un simulacro de justicia.

Las últimas incidencias de los tribunales, entre jueces y abogados, no son más que un reflejo del descrédito en que han caído los primeros. El pueblo ha perdido la fe en los tribunales, y aunque el número de pleitos sigue en aumento, esto no quiere decir que se acentúe el prestigio de los magistrados, sino que obedece a razones ajenas a su funcionamiento. De hecho solamente una cierta categoría de abogados trabaja; hay abogados cuya firma es promesa de salir bien, sea cual fuere el mérito de la causa, y otros

que son desahuciados sistemáticamente por sus clientes, porque su firma es mal presagio para el éxito del pleito. Nada digamos del criterio antojadizo con que se regulan los honorarios, en que desaparece toda noción de equidad.

Para remediar este estado de cosas, mucho habría que reformar, y ya que la elección de los magistrados no puede obedecer a normas fijas, en cuanto a la apreciación de sus condiciones de honradez personal y de preparación científica, que al menos exista un sistema de garantías que les impida abusar impunemente de sus atribuciones omnímodas.

En primer lugar, habría que declarar de una manera explícita, la libertad de la crítica forense. Declarar que el litigante, sus abogados, sus apoderados y toda persona del pueblo, pueden criticar libremente los fallos judiciales de cualquier jurisdicción que sean, tanto de palabra como por escrito, siempre que se trate de juicios definitivamente fallados, dejando a salvo a los magistrados el derecho de ejercer la acción de calumnia, en su caso. Esa crítica de los fallos jamás debiera constituir el delito de desacato.

Debe prohibirse que los magistrados judiciales manden tachar las palabras que consideren ofensivas, a no ser que tengan expresiones contrarias a la moral y buenas costumbres. Tachando las palabras, no se puede comprobar si la ofensa ha existido realmente o solamente en la imaginación del juez. Contra toda imposición de medida disciplinaria debe haber un recurso, por nimia que ella sea; además, el juez no puede decretarla sin dar vista al colegio de abogados o de procuradores, si hubiese.

Debe sancionarse una tarifa de los honorarios de abogado, a regir en ausencia de contrato con el cliente; tarifa que establecerá un honorario mínimo de 50 pesos y luego irá aumentando en proporción de un tanto por ciento cuando el valor de la causa, según la demanda, no exceda de 50 mil pesos, y una tarifa decreciente en los pleitos que pasen de esta suma. Y disponer que, a falta de ajuste especial por escrito, el juez ha de regular según tarifa, tanto en el caso de condenación en costas como en los casos en que son causadas por su orden.

Toda designación de oficio en los juicios civiles y comerciales, como en los de otra jurisdicción, se debiera hacer entre los abogados, peritos, martilleros, etc., de la matrícula, por sorteo, con la limitación de que ninguno podrá desempeñar cargos por más de dos veces consecutivas en el espacio de un año judicial.

En cuanto al código de procedimientos vigente en materia civil y comercial, es urgente abandonar el sistema del procedimiento escrito, que se presta al secreto y a las delegaciones de las funciones judiciales en los empleados subalternos. Es preciso adoptar lisa y llanamente el juicio oral y público, pudiendo servir como modelo el sistema actualmente vigente en España. Toda la prueba y la defensa debe producirse en audiencia pública, abierta al público; y declaraciones de testigos y absolución de posiciones y acusaciones fiscales y defensas de abogado, y la sentencia misma, todo realizarse públicamente en una o más audiencias sucesivas, a la luz del día, en gran audiencia, con la mayor solemnidad posible.

En segunda instancia, el recurso debe acordarse en todos los casos libremente, suprimiendo el recurso en relación, y se han de admitir en la segunda instancia toda la prueba nueva que se ofrezca, sin limitación alguna. En ningún caso podrán los jueces ni camaristas negar medidas que se les solicite para mejor proveer, salvo que sea manifiesto el propósito de dilatar el juicio, en cuyo caso deberá la negativa ser fundada. El procedimiento en segunda instancia, será igualmente oral y público, pudiendo las partes hacer todas las defensas que juzgaren oportunas. Ningún abogado podrá ser interrumpido en su exposición, por larga que ésta sea.

Debe existir en materia civil y comercial, como en lo criminal, un recurso de revisión de las sentencias definitivas; cuando aparezcan documentos que estaban extraviados o cuya existencia se ignoraba; recurso que podría deducirse dentro de un término de seis meses. Hace poco se presentó un caso de una sucesión compuesta de una viuda y varios menores, de un modesto patrimonio hereditario, que por haber ignorado la existencia de los recibos del pago, fué condenada en ambas instancias a abonar al actor el precio de edificación de la casa en que habitaban. Hallados por casualidad dichos documentos, cuando estaba ejecutándose el fallo, se opuso en tiempo y forma la excepción de pago; pero el juzgado la desestimó alegando que la sentencia produce novación, y la cámara de apelaciones hizo suyo un dictamen del fiscal, mandando llevar adelante la ejecución de la sentencia, a pesar de constar de una manera indubitable que el precio de la edificación estaba pagado. Y de esta manera las criaturas quedaron sin techo y sin pan. Si hubiera existido un recurso de revisión, tanafía injusticia de despojo, a sabiendas y por medio de la máquina judicial, no se hubiera consumado.

Creo que hace falta, también, el recurso de casación por inaplicabilidad o errónea aplicación de las leyes, a fin de que haya un tribunal superior encargado de velar por la uniformidad de la jurisprudencia. Me parece que nada se opone a que se revista de estas funciones a la suprema corte de justicia nacional, modificando la ley de organización y competencia de los tribunales nacionales en este sentido, sin perjuicio de la competencia que la constitución y las leyes atribuyen a la corte en materia federal e internacional. Podría tomarse como modelo de competencia para este recurso, tal como el punto está reglamentado para la corte de casación de París.

En cuanto a la justicia de instrucción criminal y correccional, es completamente medioeval, con todos sus secretos e inquisiciones, solamente atenuados por la caballeridad innata de ciertos magistrados; porque tal como está organizada, si cayese en manos criminales, podría resultar más delincuente que los reos que está llamada a castigar.

La defensa está completamente coartada. El secreto del sumario ahoga todos los recursos; solamente algunos abogados *habitués* de esta jurisdicción, conocen al dedillo todo cuanto les conviene conocer; los demás defensores se debaten a oscuras, librados al azar de su intuición, y cuando llega el momento de la defensa abierta, ya el mal resulta a veces irreparable. Este estado de cosas, solamente se puede remediar, adoptando las recientes disposiciones de Francia en materia de defensa criminal, y en cuanto al procedimiento, no conozco más que un código verdaderamente en consonancia con la libertad de la defensa prometida por la constitución, a saber: el código de procedimientos criminales de Nueva York.

La publicidad no puede dañar a la sociedad; solamente los delincuentes obran en secreto. El estado no puede emplear esta arma.

Por último, considero que la jurisdicción federal, en un país en que las provincias gozan de autonomía en materia de organización judicial y de procedimientos, es una necesidad desde el punto de vista del tratamiento de los extranjeros, a quienes se brinda así, en cualquier punto del territorio argentino, una jurisdicción nacional, si no les conviene la judicatura provincial; sin olvidar que para suprimir la justicia federal, habría que modificar algunos artículos de la constitución.

Es todo cuanto se me ocurre por el momento respecto al cuestionario sometido a mi consideración, y aunque

como argentino me duele haber tenido que lastimar situaciones creadas, me consuela haber procedido con toda la sinceridad de un hombre de estudio sin pasiones ni ofuscaciones, sino con el ánimo de que la administración de la justicia en esta hermosa capital esté a la altura de la elevada cultura alcanzada por la república en todos los demás órdenes de su vida colectiva.

Saludo al señor presidente con toda consideración.

Daniel Antokoletz.

Del doctor A. Peyrou

Buenos Aires, septiembre 15 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados, doctor Roberto Parry.

Distinguido señor diputado:

Al acusar recibo de su nota del primero del corriente mes, he de informar gustoso y en la medida de mis pocos conocimientos, sobre los puntos indicados a manera de encuesta.

1o. Considero que no deben unificarse los fueros, porque con eso se iría contra el elemental principio que debe primar en toda buena administración de justicia y es que: haciéndose efectiva la división del trabajo, se procure la existencia de jueces realmente especialistas. Es así como debe haber jueces en lo penal, comercial y civil. Las diferentes jurisdicciones y la naturaleza de las materias que corresponden a una y a otra, no pueden escapar a las ventajas que esa división indudablemente tiene que reportar.

2o. Convendría ampliar la jurisdicción federal, encuadrándose dentro de los límites de la constitución de la nación, incluyendo en ella, las bancarrotas, concursos comerciales y civiles, pero para esto es menester la reforma de las leyes especiales que a esos concursos se refieren.

Para las quiebras me permito indicar las consideraciones que hago en el folleto adjunto, bajo el No. 1, cuyas conclusiones merecieron, de la cámara sindical de comercio de esta capital, la especial recomenda-

ción dirigida a la honorable cámara de diputados, según nota de 4 de septiembre de 1915.

Con respecto a los concursos civiles, podría seguirse el mismo procedimiento salvo en lo que es especial a los comerciantes: por ejemplo: con respecto a los libros, etc.

Si no se hicieran esas reformas, la intervención de los jueces federales en los concursos sería impracticable, pues es enorme el número de juzgados que habrían de crearse. Podría citarse lo que sucedería en la provincia de Buenos Aires donde serían indispensables, un juzgado en cada departamento judicial, sin perjuicio de las cámaras que correspondieran.

3o. No tiene antecedentes para formar juicio en relación al número de cámaras de circuito.

4o. En cuanto a las dos últimas preguntas de su nota, me remito al contenido del folleto que acompaño, bajo el número 2. Allí la comisión que usted tan dignamente preside, podrá ver que indico algunas de las muchísimas reformas que son absolutamente necesarias, no sólo con respecto a la justicia ordinaria, sino también a la de menor cuantía.

Al agradecer el alto honor que se me dispensa en la nota que contesto, me es grato saludar al señor presidente con mi consideración más distinguida.

A. Peyrou.

Ministerio fiscal

El ministerio fiscal se ejerce en todos los fueros e instancias judiciales.

En los asuntos penales, procede en representación de la sociedad herida por la ejecución de un acto violatorio de la ley.

En lo civil y comercial, se ha extendido su radio de acción en forma que realmente desnaturaliza la razón de su intervención.

En unos casos, actúa en defensa directa de los intereses del fisco y en otros, pretende una representación social y tutelar del estado que realmente no tiene ni puede tener, no sólo, porque los intereses de esa sociedad y estado no están afectados ni en peligro, sino porque efectivamente lo que se ventila son simplemente intereses privados.

Así abusivamente se extiende la acción del ministerio fiscal, alegándose una necesidad que jamás apa-

rece, dando por resultado la existencia de unos funcionarios, cuya acción siendo ineficaz e innocua, redundando en perjuicio del mismo bien público ya que hace engorroso y tardío el trámite judicial yendo en contra del principio fundamental de que: debe existir justicia pronta y barata.

Es por eso que en mis trabajos publicados en los años de 1914 y 1915, referentes a la reforma de la ley de quiebras vigente, prescindo en el trámite de las quiebras y concordatos, del dictamen fiscal; pues de su intervención no se ha obtenido ventaja alguna, aun cuando es público y notorio que en la absoluta mayoría de los asuntos, sino en todos los que se tramitan y se han tramitado, ateniéndose a los términos de esa ley, se han empleado manejos dolosos.

Si tenemos en cuenta cuáles son los resultados jurídicos y prácticos de la acción de los fiscales en los asuntos civiles, vemos que resulta lo mismo que en los de índole comercial.

Ello ocurre precisamente por el fin y forma del ejercicio de sus funciones.

En los asuntos que corresponden a esos fueros, el fiscal dictamina sobre el pedido que la parte formula y la resolución que el juez ha de dictar, como si éstos no tuviesen el deber de saber tanto o más que esos funcionarios, como han de llenar sus obligaciones.

Lo original del caso, es que esos funcionarios que aconsejan a los jueces, no tienen ni siquiera una categoría equiparada a éstos; por lo que resulta que los inferiores o subalternos aconsejan a sus superiores aun cuando tenga igual título profesional. Sin embargo, ello, no impide también que éstos no tengan en cuenta el dictamen o consejo fiscal.

Como consecuencia de una resolución de esta índole, dictada por el juzgado, aquel funcionario puede apelar de ella. Esta apelación es injustificada, porque es elemental que el recurso se acuerde al que es perjudicado en sus intereses o derechos, lo que no puede ocurrir al fisco o a la sociedad desde que se ventilan intereses privados que no pueden alterar el general y del estado.

Continuando el análisis, llegamos a casos que parecen imposibles que puedan ocurrir. Véase:

Se presenta un documento en secretaría que no está, según el criterio del actuario, extendido de acuerdo con lo que disponen la ley de sellos. In-

mediatamente le pone una nota de "no corresponde" y el juez da vista al fiscal.

A cualquiera se le ocurriría que con ello se puede hacer algo extraordinario o por lo menos algo que justifique el gasto de sellado y el tiempo que se emplea; pero no es así.

El fiscal se limita a decir en la absoluta mayoría de los casos: el documento ha debido extenderse en un sello de tal valor y por tanto tiene una multa de acuerdo con el artículo que cita.

Como el representante del consejo nacional de educación es parte, interviene en el incidente y también en la absoluta mayoría de los casos, repite lo dicho por el fiscal.

Pasado el expediente al despacho del juez, se resuelve recién, de acuerdo con lo que afirmó el secretario, desde que fué él quien opinó primero poniendo la nota y a lo que adhirieron el fiscal y el representante del consejo nacional de educación.

Esto no es todo, porque después de esas opiniones y trámites puede ocurrir que el juez falle en contra de aquéllos.

Creo que más práctico sería que el juez resolviera directamente el punto, sin necesidad de esos dictámenes previos, sin perjuicio del reclamo que pudiera hacer el representante del consejo nacional de educación, cuando la resolución fuera contraria a sus intereses. Estos casos que serían los menos, ni aún así entorpecerían el curso de los juicios como ocurre en la actualidad.

Se dirá, sin duda, que la acción fiscal debe existir para vigilancia del pago de los impuestos; pero ello no implica sino otro error.

Si los impuestos no se abonan, los jueces no deben dar curso a los pedidos y si se adeudan multas, es el representante del consejo nacional de educación el que debe gestionar el pago.

Transformar en esos casos al fiscal en procurador o agente del fisco para el cobro de los impuestos, es precisamente desnaturalizar las funciones que desde el principio se le han atribuido. Para esto, el fisco debe tener otros agentes que dependan directamente del departamento administrativo relativo a la renta e impuestos.

Si se suprime el dictamen fiscal, se verá que no ocurre ningún perjuicio. Un testamento aprobado; una declaratoria judicial de herederos, con o sin dictamen fiscal, no pueden mejorar la situación de los favorecidos ni empeorar la de los herederos ex-

cluidos, desde que ello no les priva de los derechos hereditarios. Así, aun después de declarado válido un testamento y resuelta una declaratoria de herederos, pueden presentarse alegando sus derechos las personas que no aparecen en ellos. Entonces, ¿qué provecho ha traído del dictamen fiscal?

Lo dicho puede extenderse a todos los casos en que el fiscal interviene en los juicios y se tendrá igual conclusión.

Es lógico que la supresión del fiscal no procede en materia penal, porque aquí obra en representación de la sociedad herida por la ejecución de un delito o falta a la ley que debe ser castigada y al actuar no aconseja sino que, como parte directa y fundamental, pide y exige que se aplique la ley castigando al delincuente y a todo aquel que la haya violado. Procede así por necesidad pública.

Ministerio de menores

La acción tutelar del estado que no tiene razón de ser en las funciones especiales de los fiscales en materia civil y comercial, es imprescindible, tratándose de derechos e intereses que correspondan a menores e incapaces.

Así como en los juicios donde sólo están interesadas personas mayores de edad en la plenitud de sus derechos y capacidad, no tiene el estado porqué preocuparse ya que cada uno es dueño de hacer lo que más le plazca, con tal que no ataque derechos de terceros; así también la sociedad y el estado no pueden dejar el manejo de los bienes y derechos de los menores e incapaces a la voluntad de los mayores y capacitados, desde que entonces, estarían expuestos; pues en la mayoría de los casos éstos verían por su propio interés en perjuicio de los derechos e intereses de los que no pueden defenderse solos.

Es, pues, indiscutible que procede la protección del estado en los casos indicados, debiendo agregarse que con respecto a ello no hay ni una sola opinión contraria, lo que no podría ocurrir desde que se trata de algo que es absolutamente necesario.

Lo que se ha discutido con acaloramiento es la forma y extensión de esa acción tutelar, sin que se haya llegado a un punto concreto y definitivo.

Esto ha ocurrido por el infundado temor de ver afectada la autoridad y derechos paternos cuando se protege los derechos e intereses de los menores. Llegando

con ello, precisamente a perjudicar a éstos, sin que honestamente se haya beneficiado a los padres.

Es por eso que se hacen distingos para fijar el límite a la acción tutelar.

Los menores huérfanos de padre y madre son preferidos en la defensa social a los que no lo son.

Un tutor se ve siempre bajo la vigilancia y autoridad del ministerio de menores. En cambio, el padre o la madre, puede decirse que en la mayoría de los casos, proceden con la más entera libertad.

Todo esto, como he dicho, ha traído una gran discusión.

Unos han creído que la fiscalización del ministerio de menores, menoscabaría la autoridad paterna y otros que opinan de igual manera, agregan que nadie podría estar más interesado por el bien de éstos que sus propios padres.

Por último, otros creen que la acción tutelar del ministerio de menores, debe hacerse sentir en toda su extensión, sin que ello importe intentar nada contra la autoridad paterna.

Yo no trepido al colocarme al lado de estos últimos y para ello tengo fundadas razones, adquiridas en la práctica del cargo de asesor de menores que he desempeñado y en el número de años del ejercicio de mi profesión. Todo esto lo he podido corroborar con las manifestaciones de distintos y distinguidos funcionarios que, como yo, han tenido que sostener verdaderas luchas para defender a los menores de los actos de sus propios padres.

Pocas palabras relativas a las diversas situaciones en que suelen encontrarse los menores, creo que serán suficientes, por lo menos, para impedir la réplica de los más recalcitrantes.

No todos los padres son suficientemente preparados e inteligentes para convencerse que producido el fallecimiento de uno de los cónyuges, los bienes de la sociedad conyugal deben dividirse, correspondiendo a los hijos la mitad del haber, sin perjuicio de lo relativo a los bienes propios del causante.

Pues bien, es infinito el número de juicios sucesorios que se inician recién cuando ya es imposible mantener la situación irregular causada por el fallecimiento, porqué en mantenerla está el beneficio que obtiene el cónyuge sobreviviente.

Cuando se promueve el juicio, se inicia también la lucha en que se ven empeñados **algunos** asesores de menores, desgraciadamente no puede decirse que to-

dos, para vigilar el inventario, avalúo, partición y adjudicación de los bienes, desde que en general, el cónyuge supérstite trata de sacar la ventaja del león.

En casos análogos otros asesores de menores, considerando sinceramente que su autoridad y obligación no llega a tanto, se atienen a lo que quieren los padres. Claro está que es aquí donde éstos se des-pachan a su gusto.

Al tratarse este punto no me refiero a esos asesores de menores que son dignos de todos los calificativos porque se escudan en esta última creencia u opinión, para pasarlo bien, sin las molestias de una preocupación más o menos intensa en pro de los sagrados derechos e intereses que deben tutelar.

Los padres que proceden como dejo dicho, tratan de justificar su conducta de distintas maneras.

Por ejemplo, dicen: que todos los bienes e intereses deben estar bajo la libre acción de ellos porque así podrán hacerlos producir más; que formando, realmente un fondo común, serán en definitiva de sus hijos desde que ocurra el fallecimiento del esposo sobreviviente; que los hijos, no habiendo cooperado para formar el haber, deben ser los últimos en usufructuarlos y disponer en propiedad, etc., etc. Se emplean, pues, todos los argumentos para resolver la cuestión egoístamente a su favor.

Para hacer más eficiente el argumento, no dejan de emplear procedimientos realmente dolosos y para no poner de manifiesto sino uno solo, véase:

Resuelve el sobreviviente, quedarse con la mejor y mayor parte de los bienes, dando a los menores los mendrugos ¿qué hace?

Conseguido un tasador complaciente, que lo son casi todos y en ese caso ya lo promenten serlo antes de ser propuestos, con el, se tasan los bienes de manera que los mejores aparezcan con menor valor que el real y efectivo y los otros a la inversa, adjudicándoles mayor valor. De ese modo, equilibrando, llega la partición y adjudicación y así por la tasación adjudícanse, como iguales, valores distintos y el asesor de menores sin mayor preocupación, presta su conformidad a esa división. Esto es, sin perjuicio de que muchas veces se adjudique a los menores "para igualar", créditos incobrables.

Téngase en cuenta la diversidad de bienes y valores que suelen formar el haber en las sucesiones y se verá con qué facilidad se puede maniobrar en la forma que dejo indicada.

Naturalmente, si el cónyuge procediera siempre

correctamente fuera afortunado en el manejo del haber y no se le presentaran circunstancias imprevistas, el interés de los hijos estaría en definitiva no solamente asegurado, sino que al fallecimiento del padre o de la madre, se reintegrarían en el valor de su parte, con todos los aumentos y rentas.

Pero es el caso que al viudo o viuda frecuentemente se les presentan dificultades que pueden ser de resultados fatales.

El sobreviviente contrae segundas nupcias y tiene hijos en este matrimonio y se presenta un punto capital, desde que salta a la vista la injusticia de que fueron víctimas los hijos del primer matrimonio.

Fallecido ese padre o madre, su haber adjudicado en la liquidación del primer matrimonio, tendrá que dividirse entre todos los hijos, del primer y segundo matrimonio y el viudo o viuda de éste.

De ese modo aquéllos entran a dividirse con éstos, lo que debía corresponderles en la primera sucesión y de lo que fueron privados mediante el fraude del sobreviviente en ella.

Supongamos que no haya segundo matrimonio.

Si queda viudo que continúe o niece negocios, su resultado no puede preverse. Si es favorable, bien; pero si es negativo, no siempre es reparable el daño.

Esto que ocurre en infinidad de casos, es perfectamente lógico, desde que como dice un eminente tratadista de derecho comercial: **en el mundo de los negocios, uno no sabe cómo saldrá**, desde que las más de las veces constituye una aventura que en épocas como la actual, más lleva a los desastres que a los triunfos.

Si eso es lo que sucede cuando es el hombre el que maneja y dirige con su experiencia en los asuntos ya puede calcularse lo qué ocurrirá cuando él, es el que fallece. La viuda que casi siempre está alejada de los asuntos y negocios no puede tener mejor resultado que el hombre y tanto es eso que puede calcularse en un porcentaje muy mínimo el de las viudas que conservan el capital adjudicado en la sucesión del esposo.

Ellas, en su inexperiencia, no aciertan en lo que debe hacerse y concluyen muchas veces, entregando la administración de los bienes a personas que no se conforman con una justa remuneración.

Ocurriendo esto, nada más justo y previsor que se empleen medios para poner a cubierto los bienes

de los menores, de la contingencia, de la codicia, mala fe y azares de los negocios como de la inexperiencia de los padres.

Por eso estoy, repito, con los tratadistas cuando consideran que la intervención del ministerio público de menores, no debe limitarse a un simple consejo, sino que debe ser una intervención continua, activa, efectiva y directa.

No veo cuál puede ser la justa razón para limitarse esa acción, considerando la patria potestad como intangible, ya que a los mismos hijos menores se les autoriza a discutir a los padres en ciertas condiciones, como para casarse hasta contra su voluntad.

¿Por qué, entonces, no admiten una vigilancia como la que indico, cuando se trata de los bienes? Admitiéndose el matrimonio de un menor, aun en contra de la voluntad expresa del padre o madre, ¿no se limita al ejercicio de la patria potestad? ¿por qué existen obstáculos para limitar la acción tutelar del estado tratándose de bienes, cuando muchas veces se autoriza el matrimonio en la forma que indico, precisamente, porque se considera que el interés del padre por el usufructo de los bienes del hijo es el que lo mueve a oponerse a ese matrimonio?

No hay razón para distinguos. La tutela del estado debe existir siempre y efizcamente con la misma amplitud, ya que los bienes, en ciertos casos, pueden ser tan sagrados como los derechos, porque si, sin éstos, no es posible vivir, tampoco es posible hacerlos valer sin aquéllos.

Referiré un caso práctico para demostrar lo que puede la acción del ministerio de menores y a lo que suele llevar el proceder de los padres.

Mientras desempeñé el cargo de asesor de menores del Departamento del Norte, provincia de Buenos Aires, desenvolví mi acción en el sentido amplio que he aconsejado, mediante una labor verdaderamente intensa y no me arrepiento de ello. Tengo a mi favor reconocimientos de personas a quienes salvé no sólo derechos, sino también capitales.

Repito, no citaré sino un solo caso, como ejemplo de lo que digo; me refiero al siguiente:

La sucesión de don J. M. Gomendio seguía un juicio sobre reivindicación de un campo a la sucesión de don Juan B. Oliveros. El fallo de 1a. instancia fué favorable a la parte demandante. Apelaron los herederos y el asesor de menores que era yo, como lo hice presente.

El abogado de la parte vencedora, persona muy distinguida, tratando de evitar trámites y ante ese resultado favorable, inició arreglos con los herederos apelantes, consiguiendo que todos retiraran los recursos mediante una pequeña compensación en dinero.

Como yo mantenía el recurso, fué a verme el padre de los menores, suplicándome de todas maneras que hiciera lo mismo, porque según decía, no había abogado que le diera esperanzas y que causándole el juicio gastos, su prosecución, realmente le sería desastrosa.

A pesar de eso, me mantuve firme. Poco después fuí entrevistado por el abogado contrario, que confirmandome el arreglo que había hecho con el padre de los menores y demás herederos, proponía mayor suma de dinero a favor de aquéllos, con tal de llegar a la renuncia del recurso.

No acepté; pues, como era natural, tenía en apoyo de mi actitud fundadas razones que sin dificultad hice conocer a ese letrado. Este, procediendo con una honestidad profesional recomendable, reconoció que la sentencia necesariamente debía ser revocada desde que no aparecía efectivamente la prueba del fundamento de la demanda. Entonces me propuso arreglar, bajo las condiciones que le plantease. Acepté e indiqué que a los menores se les reconociera en propiedad, la séptima parte del campo en litigio, que era lo que por herencia debían recibir sin obligación de pagar costas y gastos, dejando por fin, que la ubicación del lote de campo y fijación de sus linderos lo haría yo en el terreno.

No se habló más del asunto, sino para ir al campo y entregar, después de su deslinde, al padre de los menores en virtud de su derecho como tal, la parte de tierra a que me refiero. Hoy esos menores son dueños de una propiedad especial en todo sentido que no habían conseguido si el asesor de menores hubiese atendido lo que decían e hicieron el padre y los tíos. En cambio, éstos no tienen absolutamente nada.

Este caso que no es aislado, justifica, como ha podido verse, la opinión de los que sostenemos que la intervención del asesor de menores no debe tener un carácter pasivo.

No considero tampoco suficiente, la esperanza de garantía consolidada en el usufructo que los padres tienen de los bienes de sus hijos, para conservarlos, precisamente, por la renta que les dan, desde que son

infinitos los casos en que los padres pierden sus rentas y capitales, sin que el temor de arruinarse los haga más previsores.

Esta cuestión no pueden mantenerla, los que argumentan a base de teorías respetuosas de la voluntad y acción de los buenos padres, desde que fatalmente fracasa en la práctica.

Por último, no veo qué daño puede causar la acción tutelar del ministerio de menores si no se le teme por la intención de proceder mal y sobre todo que ella no va contra los intereses legítimos de nadie, sino precisamente, en beneficio directo de los hijos que debe ser la única aspiración de los padres verdaderamente amantes de estos.

Es menester que haga constar, también, que es absolutamente indispensable preocuparse del caso, porque la forma como se considera que debe intervenir el asesor de menores, no es uniforme en la república; pues mientras en los tribunales de Córdoba, el asesor de menores es parte indispensable en todo, tenemos que en algunos de la provincia de Buenos Aires se ha dispuesto que, correspondiendo el usufructo de los bienes a los padres, éstos deben entrar inmediatamente en posesión de ellos. Así para usufructar el dinero, lo recibe el padre o la madre y lo emplea como crea más conveniente, sin control ni responsabilidad, por lo menos inmediata.

Este caos debe cesar. Debe existir una disposición que, concreta y terminantemente, sea cumplida por los funcionarios; pues, no debe tolerarse en un país bien organizado, que derechos tan sagrados queden en el mayor desamparo.

Con ello no se ofenderá a nadie, lo repito, sino, se herirá a los que pretenden lo ilícito, no respetando lo que es legítimamente de sus hijos.

En ese sentido, los artículos pertinentes del código civil, deben ser ampliados en forma que establezcan una real y efectiva garantía.

Con respecto a las tutelas y curatelas, más adelante me ocuparé en capítulo especial.

Defensores de pobres

Una de las más simpáticas garantías, es la defensa que se le ofrece al pobre en las causas penales.

“Nadie puede ser condenado, sin ser oído”, constituye un axioma; pero... es un axioma que ha quedado, puede decirse, en teoría.

Los pobres no son defendidos ya que es muy raro encontrar un defensor de ellos, que cumpla con su deber. Los que desempeñan ese cargo, lo hacen teniendo en su sueldo una ayuda para sus gastos.

En trabajos anteriores he bregado porque en la provincia de Buenos Aires se modificara la forma de ejercer esas funciones. Lo dicho allí podría repetirlo ahora, desde que si en esa provincia es una vergüenza, no lo es menos en el resto del país.

Esto ocurre, por lo menos, por un concepto erróneo que en la práctica se ha tenido de la importancia de ese cargo.

Realmente, los poderes públicos, lo han tenido y considerado en menos, en algo que no merece mayor atención, como si el pobre pudiera tener menos derecho a las ventajas y beneficios de las leyes, sin perjuicio de que se les aplique todo el rigor de ellas.

Sin embargo, a poco que se reflexione, se verá cuánto daño causa ese estado al prestigio de las instituciones por las injusticias que sufren los desgraciados que están bajo la defensa de esos funcionarios. Esto no obstante, parece que están condenados a seguir en el más cruel desamparo. Para remediar otros males es posible que exista un poco más de actividad, pero para gestionar en defensa del pobre la aplicación justa de la ley, sobra tiempo.

No hay afirmación de los hombres que militan en los partidos políticos que no esté basada en el interés del prestigio de las instituciones, de la realidad de los derechos individuales y generales y sin embargo, es un acontecimiento cuando se levanta una voz para decir que la promesa constitucional de una real y efectiva defensa, del derecho de ser oído, es un mito.

No hay casi manifestación pública de sentimientos altruistas que no tenga éxito, en todo sentido, ya sea como resultado pecuniario, como demostración de sociabilidad y a pesar de ello, no hay quien se preocupe de esos desgraciados que no pocas veces son condenados por falta de un defensor diligente, ocasionando semejante injusticia, la ruína, la destrucción de un hogar.

Existe un partido político que desde que nació, pretendió monopolizar la iniciativa de todo lo que importara beneficios para el pobre, para el obrero, para el desvalido, sin perjuicio de que todo lo que ha hecho o a su nombre se ha gritado, no haya tenido otra finalidad que el zarandeo de las pasiones para atraer elementos electorales. Los que más

necesitan, los privados de la libertad, no merecen ni han merecido mayor consideración; y en tanto el pobre, como todo ser humano, sigue prefiriendo la justicia, la libertad, la seguridad personal, al ofrecimiento del pan de cada día, de menores horas de trabajo, de mayor salario! ¡Sigue queriendo la libertad y la justicia porque en ella y con ella, únicamente, conseguiría lo demás!

Si no hay un defensor que se ocupe con la competencia y diligencia indispensables, el proceso no puede tramitarse con la corrección debida.

El defensor es realmente el responsable del mal resultado de los juicios. No quiero con esto sostener que el juez puede o debe limitar su acción a declarar culpabilidad o inculpabilidad imponiendo o no, las penas; porque ello lo alejaría del terreno de lo justo y humano en que indudablemente debe colocarse. Pero entre la obligación de aportar todos los elementos de juicio tendientes a demostrar la falta de responsabilidad o la necesidad de limitarla para graduar la pena y el punto en que se apoyan los jueces de atenderse a lo alegado y probado, sin perjuicio de medidas para mejor proveer, hay mucha diferencia, siendo más imperioso, importante e inmediato el deber del defensor.

El cargo de defensor de pobres es considerado como subalterno que se da por bien desempeñado con cualquier pequeña atención que en realidad, no importa sino una simulación del cumplimiento del deber. Ellos tienen con su sueldo, lo único que buscaron y también el gobernante que hizo la designación, llenó una *fórmula administrativa*, favoreciendo a un amigo con esa ayuda de costas.

Es natural, entonces, que esa ayuda de costas no pueda darle al nombrado la independencia necesaria para vivir. De allí, la necesidad que tiene de ejercer su profesión, o buscar otros medios de vida.

Por eso he sostenido siempre que el cargo debe ser objeto de atención especial no sólo por parte de los poderes públicos, sino también por la persona que lo desempeña.

Pero para ello se hace necesario un cambio. Es preciso que deje de constituir una canongía, un suplemento de costas o el medio de dar de comer a inútiles, satisfaciendo fines políticos y pequeños intereses.

Para conseguirlo, será suficiente en primer término que el nombrado para el cargo no pueda ejercer la profesión ni ocuparse de otra cosa; que se le

abone un buen sueldo y que el poder ejecutivo tenga mucho cuidado en la designación del candidato, informándose de su competencia y honorabilidad sin perjuicio de la responsabilidad que pueda hacerle efectiva, por el mal desempeño del cargo. Actualmente es tal la irresponsabilidad de hecho que los rodea que parece que fuera una excepción y lo anormal un buen funcionario.

El número de defensores de pobres debe ser suficiente para que el enorme trabajo que demanda la naturaleza de los asuntos, no sea un obstáculo al buen desempeño de sus tareas.

El defensor en esas condiciones no tendría excusa para eludir el cumplimiento de su deber que es muy sagrado, tanto más, cuanto que él, hará efectiva una de las más bellas garantías que pueden ofrecerse al pobre, al obrero: por lo menos, como justa compensación a su contribución de trabajo personal en pro del engrandecimiento del país.

Si a ello se agrega una buena fiscalización, por intermedio de la inspección de justicia, tendremos esperanzas de un buen resultado.

Defensor de ausentes

Otro de los cargos que como el de defensor de pobres se considera como una canongía, es el de defensor de ausentes.

Se le ha dado en la práctica poca importancia a la forma como se desempeñan esas funciones, aun cuando deben ser en realidad de las más delicadas.

Es original: se cree dentro de la organización judicial, al ministerio fiscal, como el más importante, más respetable diré y sin embargo, como lo hemos visto, es completamente inútil, cuando funciona en lo civil y comercial.

En cambio, a la defensa del pobre que tiene en peligro la libertad y hasta el honor, no se le atribuye mayor mérito. Lo mismo ocurre con el defensor de ausentes, que tiene a su guarda, no sólo derechos, sino intereses del que no comparece en juicio porque no sabe que lo llaman o no puede comparecer.

Con el fiscal ocurre otra cosa: aconseja una resolución y el juez resuelve, aceptando o no la indicación. Con eso nada se ha perdido ni se causa daño fundamental.

Con el defensor de ausentes ya es distinto, él no tiene fiscalización; su negligencia puede impor-

tar una conformidad en perjuicio de derechos e intereses que no tienen más defensa que la acción de ese funcionario. El ausente está representado por él en el juicio y como parte de éste, debe atenerse a los fallos, a las resultas de ellos, lo que no podrá discutir ni resistir. De manera, pues, debe conformarse con la honorabilidad, competencia y actividad del funcionario y un resultado malo y pernicioso no tendrá otra compensación o medio de reparación que una acción por daños y perjuicios contra aquél, bien problemática como inocua.

De manera, pues, pienso que, a estos cargos no deben ir sino personas de condiciones especiales y hasta de responsabilidad establecida.

Si bien considero que el defensor de ausentes no debe tener también a su cargo la defensa de pobres, por la especialidad y labor que ésta requiere, creo que no hay razón para que no se ocupe de las designaciones de oficio que hoy desempeñan abogados y otras personas ante los tribunales.

Digo eso, porque las funciones del defensor de pobres no siendo del mismo fuero que las del defensor de ausentes y no teniendo el mismo objeto, puede decirse que casi chocan.

Nombramientos de oficio

Este es un punto que desde hace muchos años preocupa a los que tenemos que actuar en los tribunales, especialmente por el abuso que han cometido los jueces y muchos profesionales.

En otras oportunidades he tratado la cuestión en distintas formas.

Desempeñando el cargo de asesor de menores a que me referí anteriormente, me he dirigido a la suprema corte de justicia de la provincia, pidiéndole que interviniera para que se dictara una ley, estableciendo que la designación en los nombramientos de oficio, únicamente podría hacerse por sorteo de una lista de honestos y competentes profesionales.

Después he reiterado esa manifestación, llegando a sostener en publicaciones que no eran pocos los jueces que pagaban hasta deudas de juego con complacientes nombramientos. Sin embargo, hasta el año ppdo., no había en ese sentido una ley de dicha índole, aún cuando hace más de quince años pregonaba que debía dictarse.

Hoy existe allí una ley que se refiere a la materia y aunque no dará los resultados deseables, es por

lo menos un paso dado, muy digno de tenerlo en cuenta.

Todo lo que se diga es poco, para demostrar la necesidad de un remedio que suprima la inmoralidad a que se ha llegado. Es realmente un comercio, cuando no es algo peor.

Ejerciendo mi profesión, en San Nicolás, fui sorprendido con un nombramiento de oficio, en un juicio civil de regular importancia pecuniaria (1). Debo hacer constar que fué el único con que he sido favorecido y que no lo pedí. Conviene también que haga presente que, en asuntos penales, fui nombrado de oficio defensor de procesados, como lo eran y son otros abogados, cuyos honorarios pagaba el tesoro de la provincia, pero que, deliberadamente jamás, no sólo no he solicitado esos nombramientos sino que aún después de haber desempeñando el deber impuesto por el cargo, no he cobrado ni intentado cobrar ni un centavo como honorarios o retribución por mi trabajo en esas causas.

Pues bien; ante aquel acto de extraordinaria generosidad o si se quiere de sentimiento altruista, como debí interpretarlo en un principio, me presenté a aquel juez, agradeciéndole la designación, manifestándole que haría honor a la confianza que él importaba; pero que llegado el caso no cobraría honorarios, porque entendía como era público que esos nombramientos los jueces debían hacerlo mediante un sorteo. Me aplaudió; pero especialmente y con empeño, me repitió varias veces que debía cobrar.

Terminado el asunto, pedí que todos los fondos fueran entregados a la dirección de escuelas, que era a quien correspondían y reiteré mi agradecimiento al juzgado, como mi renuncia a cobrar honorarios.

Eso no agradó al juez, como me lo hizo saber y su disgusto subió de punto, cuando los diarios de San Nicolás se hicieron eco de mi escrito.

¿Por qué le ocurriría esto al juez? Yo debo suponer una de dos causas: o ese señor perdía con mi renuncia la esperanza de una participación en los honorarios, o bien no conseguía *obligarme* con lo que me daba a ganar, sobre todo, conociendo mi independencia y carácter, lo mismo que la lucha

(1) Juicio sucesorio de José M. Figueroa, tramitado por ante la secretaría número 2 del juzgado en lo civil y comercial de ese departamento.

que había mantenido desde muchos años, fustigando todo acto indebido de los funcionarios judiciales.

Esto que me ocurrió es lo menos que hay en los entretelones de los nombramientos de oficio.

Así tenemos otros casos que considero de mayor gravedad.

Una vez me entrevisté con un juez de 1.ª instancia en lo civil de esta capital y hablando de esos nombramientos, no tuvo reparo en manifestarme que con respecto a ellos no podía proceder con entera libertad, sobre todo en asuntos de importancia, porque antes que se presentara el caso se arreglaban los interesados o más bien dicho, los procuradores y abogados de las partes o bien no llevaban el asunto al juzgado si él previamente no se comprometía a designar a la persona que le indicaba la parte o su representante.

Según el juez, debía aceptarla, porque sino, corría el riesgo de quedarse sin asuntos en el juzgado, lo que le traería mala fama.

Como se vé, el procedimiento adoptado puede tener dos causas: una, manejos interesados e incorrectos de los profesionales o bien una defensa ante el temor de la persona que el juez llegare a nombrar, que considerando el asunto como cosa propia lo tramitara más en su beneficio que en el de los que realmente tengan derecho.

Cualquiera que sea la causa no justifica el procedimiento.

Otros jueces no trepidan en pagar con buenos nombramientos su designación de tales. Otros no dejan de nombrar a los de su círculo. Otros hacen designaciones que saben que serán retribuidas en alguna forma, más o menos directa.

En otros casos la retribución se hace más concreta y que es mejor no decirla.

Lógico es que ese estado imponga un medio que desligue al juez de esa facultad, como un anhelo del público, de los profesionales, y como una medida de moralidad.

Con ese fin, lo primero que aparece es el sorteo, como lo más equitativo, ya que la suerte ha de repartir sin preferencias odiosas.

Como he dicho anteriormente, yo también indicaba ese medio, sin que por ello crea que fuera el único a quien puede habersele ocurrido. Hoy he cambiado de opinión, sin que me moleste decirlo, ni tampoco el cambio.

Pensando en las ventajas e inconvenientes que el sorteo presenta, he llegado a la siguiente conclusión: que si bien se evita que se haga, por lo menos aparentemente, un comercio o favoritismo, no es práctico en la medida que debe serlo y es hasta extraviado.

Aquí es necesario tener presente que la finalidad que hay que perseguir no debe ser la equitativa distribución de los nombramientos, para que produzca un reparto de sus beneficios, traducidos en honorarios, sino el bien por el prestigio de la justicia misma, sin que el resultado de los honorarios a devengarse pueda influir en la corrección y honestidad de la acción de los jueces y de los demás que intervienen.

Así debemos proponer un medio de solución, que tenga por único y fundamental objetivo el buen nombre de las instituciones y no que se limite a buscar reparto de beneficios entre personas que realmente bien ajenos son siempre a las intimidades de los asuntos, sino por el resultado pecuniario que les reporta. Esto último que es la razón de la existencia del mal actual, perduraría, cualquiera que fuera el método que se emplee para suprimirlo, desde que siempre sería el único objetivo.

Debe tenerse presente que los nombramientos de oficio y los honorarios que deben producir, no son ni pueden ser patrimonio privado, ni medio de regalias o indecencias.

Como se ha dicho, ha sido siempre de palpitante interés modificar el estado actual y en este sentido se han presentado al Colegio de abogados de esta capital dos proyectos, uno del doctor Rodríguez Sa. ráchaga y el otro del doctor Enrique Jorge.

Los dos se pronuncian por listas.

La primera dificultad que se presenta es la confección de ella. ¿Con qué criterio se procederá? ¿no considerarán únicamente, rectos y honestos a sus actuales favorecidos, a sus amigos? ¿no sucederá lo que ocurre a las Cámaras de Alepación en lo Comercial, cuando tienen que formar la lista de contadores?

Sin perjuicio de ello, contemos como bien formada la lista. ¿Cómo se harán los sorteos? ¿no ocurrirá lo que ha sucedido en algunos concursos comerciales, que han salido "sorteados" los que el juez o secretario quieren?

A pesar de esto, supongamos que todo está per-

fectamente bien; aún así no creo que está solucionada la cuestión.

Es natural y humano pensar que los nombrados han de tener especialmente en cuenta su interés y beneficio personal, desde que no serán pocos los que trabajarán empeñosamente para hacerse incluir en las listas, precisamente por el lucro que la actuación podría reportarles.

Pues bien; entonces nada más lógico deducir que la actividad y acción en el desempeño del cargo se regulará por la retribución a recibir. De donde tenemos, como solución de un problema matemático: que cuando el asunto sea de importancia, originando el trabajo un buen honorario, el favorecido se preocupará de cultivarlo, y cuando sea de los que "no valen" tampoco "valdrá" la pena de ocuparse, por lo que, si bien no renunciará el cargo, también resultará que la justicia se verá entorpecida, como si la actividad sólo correspondiera a los juicios de rendimiento.

Esto es tan cierto, desde que jamás será posible un procedimiento o acción capaz de impedir el desgano, la ho'gazanería o negligencia por falta del interés que incita una buena recompensa pecuniaria, como también es bien problemático establecer y hacer efectiva una responsabilidad por esa negligencia o mal proceder.

De ello tendríamos, evidentemente, que la única razón de la reforma sería el lucro, repartido entre los de la lista, sin preocuparse del mal que se causaría.

Todo eso fué precisamente la razón fundamental que me hizo desistir de mi adhesión a la idea del sorteo, desde que he pensado que los hombres honestos debemos proponer mejoras en interés general, aún cuando particularmente no siempre nos sean beneficiosas.

El proyecto del doctor Jorge debe ser objeto de otra crítica. En su art. 6o. mantiene el actual medio de designación, con el agravante que aún de esas listas el juez "debe" elegir, según considere el grado de idoneidad de cada uno.

Así, pues, no será suficiente la lista que se elige por el juez de 1a. instancia, según el art. 2o., y que se organiza por la cámara, según el art. 4o., sino que al final de todo es el juez del juicio el que designará.

Con todo ello un mal mayor que el actual.

Hoy los pequeños asuntos, más o menos, se tramitan porque el designado se preocupa, contando que el juez le dará otro mejor, compensando el anterior. Con las reformas propuestas no ocurrirá lo mismo, porque el sorteo es el que resolverá, según el primer proyecto y la designación del juez según el segundo, que no tendrá la libertad actual, por cuanto, de acuerdo con la última parte del art. 60. citado, no se podrá desempeñar más de un cargo al mismo tiempo en el mismo juzgado. Es decir que terminado un buen asunto se le podrá designar para otro bueno. Más o menos es lo que ocurre ahora, menos en la parte que el juez, que da un buen nombramiento, en el acto, pueda dar uno de esos que no "valen".

Teniendo en cuenta todo esto, he llegado a una conclusión que creo resiste con más ventaja toda crítica, si ella cabe y todo temor, porque también la considero la más justa y razonable.

Si el estado y la sociedad cargan con la responsabilidad, por lo menos moral, de lo que resulta en la administración judicial, nada más natural también que tenga en su mano el medio de hacer las cosas de manera que resulte un beneficio en lugar de un mal, no sólo en pro del interés general sino también del privado y todo por su prestigio.

En este sentido, termino: Que los nombramientos de oficio deben ser desempeñados por funcionarios especiales.

Excluyo de ellos las tutelas y curatelas, salvo la limitación que indicaré más adelante.

Para los casos que no hay incompatibilidad con la profesión de abogados, sostengo que deben ser desempeñados por el defensor de ausentes. Estos, por la naturaleza de sus funciones, son los más indicados para suplir la ausencia de la parte, como la ausencia de conformidad de los interesados en el juicio.

Como no hay razón para que el estado no perciba los beneficios que hoy reportan esos nombramientos, serían a su favor las regulaciones que los jueces hicieran con motivo del trabajo de esos defensores. De este modo también tendría una compensación que no dejaría de ser justa, como hoy tampoco se discute que lo sea, la que el particular percibe. Daría ello una fuerte entrada a favor del tesoro, que tanto necesita en la actualidad o bien podría ser destinada, por ejemplo: para mejora-

miento de las cárceles, establecimiento de tribunales para menores, caja de jubilaciones y pensiones, escuelas industriales, etc., etc.

De ese importe de honorarios podría darse una parte a favor del defensor de ausentes, sin perjuicio de su sueldo fijo. Adjudicándose un 10, 15 o 20 por ciento de los honorarios, el funcionario tomaría más empeño, porque el mayor trabajo importa, casi siempre, dar derecho a mayor retribución, ya que no es posible pensar que sin interés pecuniario pueden moverse muchos hombres y sobre todo porque la naturaleza de las funciones a desempeñar no es un obstáculo para ello.

Según fuera el tanto por ciento que se diera al funcionario se regularía el monto del sueldo fijo, en cantidad suficiente como para que le permita una vida cómoda e independiente, desde que no debería autorizársele a ejercer la profesión y ocupar otros puestos.

Para los demás casos se procedería de igual manera. Se nombrarían peritos según las especialidades que fueran necesarias y todos con el porcentaje que he indicado para el defensor de ausentes.

En estos casos tendría que establecerse, en forma especial, cómo y quién practicaría la regulación; pues no es justo, ni posible que un juez pueda apreciar en forma una pericia que practique, por ejemplo, un ingeniero, relativa a un punto de ingeniería, desde que él como abogado no tiene conocimientos científicos para poder valorar la naturaleza de ese trabajo.

La reforma nos presenta otra gran ventaja que siempre es necesario buscar y es la responsabilidad de los que intervienen en los juicios.

Ya hice notar el inconveniente de los actuales nombramientos de oficio o de los que se hicieran según los dos proyectos presentados, no sólo refiriéndose a los pequeños asuntos sino a la irresponsabilidad de los que los desempeñan, ya que la responsabilidad, hasta ahora, es solamente una amenaza lírica.

Pues bien, con el defensor de ausentes y los demás peritos oficiales no ocurrirá lo mismo, desde que el proceder de ellos será controlado por todo el mundo y las incorrecciones, no siendo sino cometidas por un reducido número, necesariamente se harían más evidentes. Esto les crearía por lo menos un ambiente que nadie más que ellos estarían

interesados en hacerlo desaparecer. Llegado el caso sería fácil el correctivo, por lo menos con su eliminación del cargo. El interés de conservarlo, fuera de toda duda, sería el mejor freno regulador.

No creo que lo que propongo sea causa de daño, que deba tenerse en cuenta, desde que los únicos perjudicados serían ese círculo de favorecidos que con su beneficio y monopolio perjudican, en su buen nombre a la justicia. Los demás profesionales no tienen derecho a quejarse, desde que han vivido sin ser nombrados y si ellos consideran esas designaciones como indispensables para satisfacer las necesidades de la vida, demostrarían por lo menos, incapacidad para afrontar la lucha profesional. Más les habría valido entonces, haberse dedicado a cualquier oficio.

No dudo que alguien argumente que aquella comunidad de intereses, entre el estado y el funcionario, no está bien, porque aquél no debe tener sociedades o reparto de utilidades pecuniarias; pero a ello debo contestar: que en otros casos se han establecido, con el beneplácito de todos, sin que la crítica se haya hecho sentir, precisamente, porque al final ese mismo importe ha de ser empleado en gastos que benefician a la sociedad. Puede citarse lo que ocurre con la denuncia de contrabando, violación de las leyes de impuestos, denuncias de tierras vacantes, etc.

Si con ello aseguramos el bien a la sociedad y el beneficio al estado, no debemos trepidar desde que, en definitiva, todo se traduce en bienestar particular.

Tutelas y curatelas

Deliberadamente, he separado las tutelas y curatelas de los nombramientos de oficio, desde que es-timo que a su respecto debemos ir más adelante.

Los derechos e intereses que corresponden a la tutela y curatela son tan importantes que exigen mayor atención y cuidado del que, hasta la fecha, se les ha prestado en nuestro país.

Los nombramientos de tutor y curador son de los más codiciados, desde que son los que "ayudan mejor a vivir".

En general, un nombramiento de esa índole es una canongía que dá facilidades para vivir y mejorar de fortuna, a costa de menores e incapaces.

¡Cuántos han mantenido y mantienen sus familias y hasta sus vicios con el producido sospechoso de administraciones de esta naturaleza!

Es una vergüenza lo que ocurre, tanto mayor cuanto pregonamos de generosidad, altruísmo y justicia.

Por eso es indispensable y urgentísima la acción de los poderes públicos, para modificar el régimen actual. Debe desaparecer la facultad discrecional de los jueces para hacer esos nombramientos y establecerse, en cambio, el consejo de familia, como ocurre en Europa, para que de allí salga el que debe hacerse cargo de la persona y bienes del menor o del incapaz.

No quiero con esto tampoco independizar, en forma absoluta, la tutela y la curatela. Lo que quiero es que la designación se haga, no como ahora, sino teniendo en cuenta los intereses y afectos de los parientes, sin perjuicio de que el asesor de menores proceda en forma activa y efectiva, como lo indicado anteriormente.

Solamente en el caso que el menor o el incapaz no tuvieran parientes, de los autorizados a formar el consejo de familia, se harían cargo de la tutela o curatela el defensor de ausentes, controlando sus actos el asesor de menores.

Esta vigilancia sería suficiente para garantía de los derechos e intereses de los incapaces; una ley, en ese sentido, sería una de las más importantes conquistas institucionales que llevaría la tranquilidad a muchos padres y a muchos hogares.

Como complemento de lo dicho, creo que deben crearse los registros de tutelas y curatelas. Hoy es difícil enterarse de los asuntos de esta índole y de los relacionados con ellos.

Si es conveniente, como he dicho, cambiar el sistema que a ellas se refiere, no dudo que también será necesario su inscripción, para buen orden y vigilancia judicial.

Así opino que, en cada juzgado de primera instancia, debe abrirse un registro a cargo de un secretario, designado expresamente, en el que se anotarían todas, con sus referencias al expediente, donde se haya tramitado y tenido lugar el consejo de familia y la designación del tutor o curador.

Antonio Peyrou.

Del doctor J. J. Britos

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados, doctor Roberto Parry.

Distinguido señor:

Ante todo ofrezco a Vd. mis excusas por la demora con que contesto su atenta nota de fecha 6 de agosto, que se ha servido reiterarme en la del 10. del corriente. Razones, más bien que ajenas, contrarias a mis mejores deseos, han obstado a ello.

Y aún obstan de modo tal, que me veo obligado a contestar las preguntas de la encuesta en forma sumaria.

Las reproduzco a continuación con sus contestaciones respectivas al pie de las mismas:

“¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la Capital? ¿Qué solución aconseja para resolver ese problema?”

Considero incuestionablemente urgente y de resultados prácticos ventajosos, unificar dicha jurisdicción cuando menos en el sentido de que todos los jueces de la capital puedan entender en los asuntos que se susciten entre nacionales y extranjeros, y entre vecinos de la capital y de las provincias. Desaparecería con ello el pretexto para dilatar los juicios, que se funda en la consabida excepción de incompetencia de jurisdicción, ya que han desaparecido también con el tiempo, en lo que se refiere a esta capital, los motivos que autorizaron la dualidad de fueros en la justicia de la misma. Todo esto sin perjuicio de mantener la especialización, que es, a mi ver, una de las condiciones fundamentales, para la buena e ilustrada administración de la justicia.

“¿Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?”

A pesar de los conocidos reparos constituciona-

les, no creo que tal ampliación sea reclamada con justos motivos en esta ciudad.

“¿Qué reformas procesales considera urgentes?”

A) Ante todo y sobretodo — aún cuando no sea procesal en realidad — es indispensable aumentar el número de jueces en forma que, cuando más, sólo actúen con dos secretarías. De otro modo, no es posible exigir que los jueces sean tales, ya que su tarea, en las horas de despacho, debe necesariamente limitarse a la de firmar apresuradamente el que se les lleva.

Se evitaría también con ello el caso verdaderamente lamentable que se presenta hoy en la justicia de comercio de esta capital.

B) Pero si esta reforma no fuera posible, lo son, en cambio, las que me permito indicar a continuación:

- a) Facultar a los secretarios para ordenar las medidas de mero trámite con su sola firma y, con su sola firma, también, subscribir los mandamientos, notas, oficios y exhortos. Con ello la ley reconocería una vieja realidad. Además, se aminora la función mecánica del juez, se simplifica la tarea y se autoriza una rapidez mucho mayor en el despacho diario. Nada obstaría tampoco a que se autorizara a los actuarios para tomar las declaraciones con su sola presencia — salvo las posiciones y aquellas audiencias en que las partes o una de ellas solicitaran la presencia del juez— lo que también es otra realidad, igualmente conocida de todos los que actúan en nuestros tribunales.
- b) Debe autorizarse a los jueces para limitar el número de testigos y el de preguntas en los interrogatorios y pliegos de posiciones, teniendo en cuenta para ello la naturaleza de cada juicio.

De otro modo, la libertad de que gozan actualmente los litigantes sobre el particular, constituye un pretexto frecuente de que se sirven para abultar sin razón los expedientes, cuando no es, además, el sistema indecoroso a que recurren abogados y procuradores, para abultar asimismo an-

te sus clientes, el monto de los respectivos honorarios.

- c) Debe [facultarse a los] oficiales primeros para autorizar las notificaciones que se realizan en secretaría, desde que son ellos quiénes las llevan a cabo. Es ésta otra realidad, cuyo desconocimiento por parte de la ley no es serio que continúe manteniéndose;
- d) En los juicios seguidos en rebeldía, sin que se haya contestado la demanda, ni haya comparecido posteriormente el demandado, debe negarse a éste todo recurso contra las sentencias respectivas, sin perjuicio, naturalmente, de la acción de nulidad, que se fundara, en no habersele hecho las notificaciones en su domicilio y en que se hubieran violado formas sustanciales del procedimiento.

Dejo así contestada escuetamente la atenta nota suya de mi referencia, quedo por completo a sus órdenes y a las de la comisión de su digna presidencia para dar, en su caso, las explicaciones que fuesen necesarias, como complemento de lo que queda expuesto y aprovecho la oportunidad para saludar a Vd. con mi más distinguida consideración.

Juan J. Britos (hijo).

Del doctor E. Lamadrid

Buenos Aires, septiembre 17 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados de la nación, doctor don Roberto Parry.

Por razón de un exceso ocasional de trabajo, propio de mi profesión, no he podido antes de ahora contestar la honrosa nota que el señor presidente se ha servido dirigirme.

Tan brevemente como me es posible, paso a contestar las preguntas contenidas en el interrogatorio acompañado por usted.

1o. Por razones de orden práctico, todo el mundo está conforme en la necesidad de unificar el fuero federal y ordinario en la capital de la república, haciendo federales a todos los jueces para salvar escrúpulos de orden constitucional. La mayor ventaja que, a mi juicio, presenta esta solución es la de permitir la especialización en las causas que se distribuyen entre los jueces. Es decir, que a la subdivisión clásica de los jueces de derecho civil y derecho comercial, correspondería una mayor dentro de cada una de estas divisiones fundamentales. Me refiero, por ejemplo, a jueces especiales para los juicios de quiebra, otros para los asuntos de marcas de fábrica y patentes de invención, otro para las cuestiones aduaneras, otro para pleitos sobre cumplimiento de contrato, otro para juicios sucesorios testados o intestados.

Naturalmente que indico esta subdivisión sólo por vía demostrativa, sin que haya por mi parte hecho un estudio preciso sobre la forma más conveniente de la especialización apuntada.

Debo recordar sin embargo que en algunos países los tribunales superiores tienen la facultad de ampliar la jurisdicción, por razón de la materia, de los jueces inferiores, distribuyendo entre ellos el trabajo en la forma en que lo indican las necesidades del momento. Creo que bastaría establecer en nuestra ley un artículo por el cual se facultara a la suprema corte para que haga una cosa análoga, cada vez que las necesidades del despacho así lo demuestren. En el fondo, esto no es otra cosa que buscar el mejor servicio público, sin contravenir ninguna ley.

2o. Creo que, en efecto, la justicia federal debería conocer en los juicios de quiebra, y no los jueces locales. Por su propia naturaleza, los juicios de quiebra no deben corresponder a los tribunales locales de provincia, son juicios propiamente nacionales, comprenden relaciones de derecho establecidas por todo el país, y aun en el extranjero, como son todas las cuestiones relativas al comercio y al comercio marítimo, este último de legislación netamente federal. Por otra parte, la constitución nacional habla de leyes sobre bancarrota como independientes del código de comercio, lo que la constituiría netamente con un carácter de ley federal.

3o. Ignoro si conviene aumentar el número de cámaras federales. No tengo datos para ello; pero se-

rá necesario crear una cámara para reemplazar a la federal de la capital que ahora está encargada de las apelaciones de las provincias andinas.

40. — Creo que no es conveniente introducir reformas parciales y de detalle en el código de procedimientos vigente. Soy, sin embargo, autor de un proyecto de ley estableciendo que las notificaciones judiciales se harán por correo, proyecto de ley que está despachado favorablemente por el senado y que espera la sanción de la cámara de diputados. Yo concebí esa idea como un medio práctico de dar alguna rapidez al despacho; pero, en realidad, creo que la reforma debe hacerse completa, es decir, encargando a una comisión de abogados competentes que proyecten un nuevo código de procedimientos. Creo que dentro de ese nuevo código de procedimientos, una de las reformas fundamentales será la de suprimir de una vez para siempre la doctrina establecida hasta ahora sobre la admisibilidad de la prueba. Vd. sabe que actualmente los jueces no califican la pertinencia de la prueba sino en la sentencia, salvo algunos casos excepcionales. Eso da lugar a que las partes soliciten y verifiquen una cantidad de pruebas inútiles, puesto que el criterio del juez las desecha después, al dictar sentencia definitiva. Por lo tanto, creo que la prueba debe ser pedida y admitida por el juez "in limine litis", de modo que no se haga absolutamente ninguna prueba inútil. Porque si el juez sabe que necesita para resolver la contienda una prueba pericial o una prueba documental y no una prueba de testigos, no veo porque se haya de molestar a estas personas en los tribunales con pérdida de tiempo y de trabajo, con una prueba que va a resultar completamente inútil.

Entiendo que las breves explicaciones expuestas bastan para expresar mi pensamiento sobre los puntos consultados. La ilustración del señor presidente y demás miembros de la comisión de justicia suplirá seguramente lo que falte en esta exposición.

Saludo al señor presidente con mi más respetuosa consideración.

Esteban Lamadrid.

Del doctor C. Cordero

Buenos Aires, septiembre 15 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, diputado nacional doctor Roberto Parry.

Distinguido señor:

Agradezco profundamente el honor que me ha dispensado la comisión que usted dignamente preside, al solicitar mi opinión sobre los puntos de derecho procesal, consignados en su atenta nota de fecha 31 próximo pasado, y, lamentando que la premura del tiempo me impida considerar en detalle varias razones de orden fundamental, aplicables a las preguntas formuladas, expreso a continuación los comentarios que me sugiere el cuestionario.

Primer punto: No hay razón fundamental alguna que se oponga a la unificación de los fueros, federal y ordinario, en los tribunales de la capital.

Las observaciones de orden constitucional, que a primera vista pueda sugerir tal modificación, son puramente doctrinarias.

Si bien la ciudad de Buenos Aires, tanto por disposiciones constitucionales como por la ley de capitalización de septiembre de 1880, se encuentra equiparada a una provincia, este carácter es sólo relativo y doctrinario. Dos únicos aspectos lo delatan: la representación en el senado y la justicia ordinaria local.

La constitución, el congreso y el poder ejecutivo de la nación, son, respectivamente, carta fundamental, legislatura y gobierno del distrito federal, constituyendo así una provincia *sui generis*, caracterizada en realidad únicamente por su justicia local.

En consecuencia, si su constitución, legislatura y poder ejecutivo, son al mismo tiempo los de la nación, no puede de ningún modo significar una alteración trascendental el que su justicia sea también la federal.

Por estas consideraciones, creo que no hay inconveniente alguno en la unificación de los fueros federal y ordinario, o más bien, en la refundición de este en aquél.

Por el contrario, esta transformación sería de indiscutibles beneficios para la administración ho-

mogénea de la justicia en la capital, tan contradictoria, incongruente y dispersa hoy, debido a la diversidad de criterio que caracteriza en la práctica a ambas jurisdicciones.

Segundo punto: En cuanto a la forma de hacer efectiva dicha unificación, debe ser motivo de especial estudio la reorganización de los tribunales existentes, los que sería menester aumentar más bien que disminuir.

Tercer punto: La comisión de códigos de la honorable cámara de diputados, en su informe sobre la reforma del código de comercio, de agosto de 1889, considerando la faz constitucional de la modificación de la ley de quiebras, y de acuerdo con la opinión de los doctores Quesada y Villegas, sostenía, más o menos, que por la naturaleza misma de tal ley, no había inconveniente constitucional alguno que se opusiera, no ya a que el congreso de la nación legislara sobre quiebras, puesto que por el inciso 11 del artículo 67 de la constitución, es esta atribución exclusiva del mismo, sino a que dictara las reglas de forma, y apoyaban esta opinión en la disposición de la sección VII—4—de la constitución americana.

Al respecto, dice Estrada, que esta facultad de legislar sobre bancarrotas atribuida al congreso por la constitución argentina es "una consecuencia de su poder de reglamentar el comercio" (Curso de Derecho Constitucional, pág. 251, tomo III), y Calvo sostiene, que en la constitución americana la cláusula tiene por objeto evitar que la diversidad de legislación entre los estados comprometa el comercio internacional", aunque Montes de Oca (Derecho Constitucional, pág. 247) encuentre un pleonismo en la disposición del art. 67.

Admitiendo con la comisión reformadora que en el caso de la ley de quiebras, y por la complejidad de las relaciones jurídicas que ésta significa, la legislación nacional sobre la forma o procedimiento no menoscaba las autonomías provinciales, no puede haber tampoco inconveniente alguno en que se amplíe la jurisdicción federal incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras.

Antes bien, por las razones que motivaron, tanto en los Estados Unidos como en nuestro país, las disposiciones especialísimas de ambas constituciones respecto a la bancarrota, está perfectamente fundada la ampliación propuesta.

Cuarto punto: En caso de unificarse el fuero

en la capital, será, naturalmente, imprescindible aumentar las cámaras federales.

Quinto punto: Es urgente, aunque no se lleve a cabo la unificación proyectada, realizar la revisión de las leyes de procedimientos, tanto en lo federal como en lo ordinario, así como particularmente en materia criminal.

Esta reforma deberá ser encomendada a una comisión mixta compuesta de legisladores, jueces, abogados de la matrícula y profesores de la materia, la cual teniendo en cuenta las observaciones que sugiere la práctica, y las que se han formulado en la cátedra, deberá introducir modificaciones fundamentales en la legislación procesal, aligerando las disposiciones actuales, dándoles mayor eficacia y rapidez para el trámite.

En cuanto al procedimiento penal en particular, se imponen dos reformas fundamentales: la necesidad de crear tribunales especiales de ambas instancias, para menores, dando mayor amplitud a la ley No. 10.903; y la institución de jurados en materia de delitos de imprenta, de acuerdo con las disposiciones constitucionales.

Sobre la primera, últimamente se ha dicho lo suficiente, para que sea necesario reproducir aquí los argumentos ampliamente fundados con que la han sostenido los doctores Agote y Coll. En cuanto a la segunda, además de las disposiciones constitucionales, la práctica ha demostrado que muchos delitos de imprenta, quedan sin la sanción por falta del jurado en esa materia.

Sostiene Estrada en su curso de Derecho Constitucional (Tomo I, Cap. VIII, pág. 254) que aún "no se ha llegado en la jurisprudencia argentina a delimitar clara y precisamente los delitos cometidos por medio de la prensa de los delitos de imprenta", y más adelante dice que la falta de jurisprudencia de los tribunales superiores sobre los puntos de derecho constitucional que se versan muy amenudo en los juicios de imprenta, y, por último, el apasionamiento a que éstas contiendas de la libertad de la prensa dan lugar y que son tratadas por personas que en ellas tienen intereses vivísimos, hace que no tengamos una disposición positiva, clara y perentoria, en materia de imprenta, ni siquiera una doctrina generalmente aceptada".

Los reparos opuestos por los doctores Rivarola,

Piñeiro y Matienzo en su proyecto de código penal de 1898, (pág. 18), no son suficientemente convincentes cuando tratan de evitar una legislación en materia de estos delitos, pues, en la práctica, debido al temor de restringir la libertad acordada por la constitución, hechos punibles, según el consenso general, escapan a toda sanción.

Por otra parte, frente al derecho de publicar ideas por la prensa, está el de cada uno de los habitantes del país para ser respetado en lo máspreciado y característico de la persona humana, que en toda sociedad civilizada es la integridad del honor y la dignidad, amparadas expresamente por el art. 19 de la constitución.

Así dice Paschal, (Tomo I, 527 y sigts., pág. 246 y 247, Digesto Constitucional, traducción de Calvo), que la Constitución Americana al establecer la libertad de la prensa, art. I, enmienda de 1789, significa, y no más, que: "todo hombre tendrá un derecho de hablar, escribir y publicar sus opiniones sobre cualquier asunto que fuere, sin ninguna restricción previa, siempre que no perjudique a persona alguna en sus derechos, en su individualidad o en su reputación, etc.", lo que concuerda con los arts. 14 y 19 de nuestra constitución.

Todo lo cual funda indiscutiblemente la necesidad de la institución del jurado en materia de delitos de imprenta.

Saludo al señor presidente con la mayor consideración.

Clodomiro Cordero.

Del doctor E. Sarmiento Lasplur

Buenos Aires, septiembre 16 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación, doctor don Roberto Parry.

Señor:

Una inesperada circunstancia hace que conteste con retardo la nota de esa comisión del 6 de agosto

ppdo., solicitando mi opinión sobre las distintas cuestiones en ella expresadas.

Presento pues mis excusas por tan involuntaria demora y cumplo con el deber de manifestarle que, a mi juicio, conviene unificar los fueros en la capital federal. Creo que a pesar de ello, podría mantenerse el actual estado de cosas, dejando para la competencia exclusiva de los actuales tribunales federales las cuestiones de "almirantazgo y derecho federal", comprendiendo en este último las cuestiones que se refieren a distinta vecindad y aplicación de leyes nacionales. Un fiscal y un defensor pasan a la jurisdicción civil y comercial.

Creo que, por ahora, no hay necesidad de aumentar las cámaras federales. La actividad del juzgado federal de Mendoza, único que ha aumentado considerablemente su labor, podría ser mejor servida si las actuales cámaras federales tuvieran establecidas por la ley disposiciones análogas a las que rigen a las cámaras de apelación de la justicia ordinaria de la capital, en lo que respecta a la forma de pronunciar las sentencias.

No creo que sean urgentes muchas reformas en el procedimiento, para acelerar la marcha de los juicios; bastaría contralorear más la acción de los funcionarios; prohibir, en absoluto, a los fiscales, defensores, asesores y empleados subalternos el ejercicio de la profesión — actualmente la ejercen la mayoría de los funcionarios en lo federal — y obligarles a despachar en el tribunal, en oficinas con igual horario que el de los juzgados y cámaras.

Por último, acordar a los secretarios de actuación, competencia para dirigir la prueba y para resolver los incidentes que se produjeran con apelación para ante el juez y, en muy contados casos, con recurso contra la resolución de éste.

Dejo de lado la consideración de los distintos proyectos, bien conocidos, que existen en la carpeta de la comisión, pues su aplicación podría adaptarse a los enunciados que dejo expuestos en forma tan esquemática, pero, a mi juicio, suficiente.

Renuevo mis excusas; agradezco el honor de que he sido objeto por parte del señor presidente y le presento mi respetuosa consideración.

E. Sarmiento Lasptur.

Del doctor D. Iascano

La Plata, octubre 5 de 1920.

Señor diputado nacional doctor Roberto Parry.

Distinguido señor:

Respondiendo al requerimiento que por su intermedio se ha servido dirigirme la comisión de justicia de la cámara de diputados, me es grato remitirle mi opinión sobre los puntos objeto de la circular.

La concentración del poder judicial de la capital de la república en manos de una sola de las categorías de jueces en ella existentes, constituye una necesidad que se acentúa con caracteres más vivos a medida que transcurre el tiempo. Los reparos de orden constitucional que se han opuesto cuando se ha intentado la reforma, no revisten la importancia que se les atribuye. Más que en la ley fundamental, se funda la oposición en un inmotivado temor de trastornar las cosas si se modifica lo existente. Es, pues, más que todo, la tendencia conservadora engendrada por el fanatismo por la ley, y en gran parte el sin número de "intereses creados" por el orden vigente, lo que constituye el principal valladar con que ha tropezado la iniciativa de modificación.

Basta a este respecto, tener presente que precisamente los que ocupan altas posiciones en la llamada justicia federal, son los que más inconvenientes oponen a la innovación en que, con el aplauso de todos, parece empeñada la comisión de justicia de la cámara de diputados.

Como doctrinariamente no es posible presentar ninguna razón jurídica que impida la modificación, en el territorio de la capital, de las dos categorías de jueces entre los que la ley ha distribuido la jurisdicción; y como tampoco existe ninguna conveniencia práctica en mantener la dualidad de fueros siquiera sea transitoriamente, se ha encontrado un obstáculo insalvable en la constitución nacional, olvidando que precisamente es a la sombra del amplio follaje de su liberalismo, que la ley ha dividido la jurisdicción nacional.

La jurisdicción propiamente dicha, o sea la actividad mediante la cual se procura la satisfacción de los intereses tutelados por el derecho, cuando

por algún motivo no se realice la norma jurídica que las tutela, es una función inherente al estado. Puede decirse que es la manifestación más viva de su soberanía, puesto que sin ella, no es posible la convivencia social. De ahí que no se conciba una organización política de hombres para fines de interés general, como la nación, sin el poder de administrar justicia. Y ese poder no sólo es propio sino exclusivo del estado, porque ya no se admite, bajo ningún concepto, que instituciones o personas distintas del estado instituyan jueces, como ocurría en otras civilizaciones, particularmente en favor de la iglesia.

Ahora bien, la Nación Argentina, como estado independiente y soberano, ha debido considerarse necesariamente armada de la facultad de ejercer la actividad judicial, reconociéndolo así en la constitución. Y como el gobierno nacional emana de la soberanía de todo el pueblo de la nación y no del consentimiento de las provincias consideradas en su capacidad política, se ha elevado la función judicial a la categoría de poder coexistente con el ejecutivo y legislativo. Es así, pues, que la justicia nacional es amplia, completa, en la justicia "ordinaria" de la nación, para expresarnos en términos técnicos del derecho procesal.

En virtud de estos principios jurídicos derivados de nuestro derecho público, se tiene que, cuando los jueces de la nación ejercen sus funciones en territorio sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, son jueces ordinarios de la constitución investidos de la suma del poder judicial y pueden, en principio, conocer de todos los asuntos sin excepción. Es sólo cuando, por razones propias de nuestra organización política, deben ejercer su actividad jurisdiccional en el territorio de las provincias, que su competencia está circumscripita a ciertas y determinadas materias de índole nacional. En los demás casos es amplia.

No se expresa, pues, un concepto rigurosamente exacto cuando se afirma que la justicia nacional es de excepción, dado que no reviste este carácter sino cuando se ejerce en territorios donde el gobierno nacional no tiene jurisdicción exclusiva, como ocurre con los de las provincias que conservan todo el poder no delegado expresamente a la nación. Lo que hay es que unas veces la jurisdicción nacional se ejerce *ratione loci*, (en los territorios nacionales) y otros *ratione materie* en los territorios provinciales). Y esta distinción conviene tenerla muy presente para

el asunto que nos ocupa, porque si la justicia federal fuera siempre de excepción, tal vez podría haber un impedimento de orden legal para refundir los fueros, desde que la competencia de los tribunales de la nación debería quedar reducida, en este caso, a las materias de su especialidad.

Pero si como ya hemos visto, la función judicial es una emanación de la soberanía, bajo nuestro régimen federativo no puede haber más que dos clases de justicia; una nacional y otra provincial como derivación de las soberanías coexistentes en la nación. Cualquier otra categoría de justicia, como la llamada local del distrito federal y territorios nacionales, es una creación artificiosa de la ley que no reconoce fundamento lógico ni jurídico en la constitución. Esto sólo habla en la sección tercera, de la justicia de la nación, porque no podía concebir que en un territorio nacional pudiera haber jueces nacionales y otros ajenos a la jurisdicción federal.

Por eso la justicia de la capital federal, siendo la ordinaria de la nación, tiene competencia para entender en los asuntos de fuero común y en todos los que, por su naturaleza o circunstancias especiales de nuestro régimen federativo, son del resorte nacional. Así lo entendieron los legisladores de 1858, que sancionaron con ligeras modificaciones el proyecto enviado por el presidente Urquiza, el cual proyectó atribuir a "los jueces del territorio federalizado, la jurisdicción federal y la ordinaria de provincia"; y así lo comprendieron también los americanos del norte que, con preceptos constitucionales semejantes a los nuestros, puesto que de ellos los tomamos, han organizado la justicia del distrito de Columbia, otorgando a los jueces jurisdicción amplia para entender en los asuntos del fuero común y los del fuero llamado federal.

Por tanto, si los jueces ordinarios del distrito de la capital de la república son nacionales por razón de su origen, de su nombramiento, de su dependencia, del lugar en que ejercen su jurisdicción y aun de los asuntos que son de su conocimiento, ¿por qué razón no han de tener competencia para entender en la materia atribuida a la justicia llamada federal, que es eminentemente nacional, y que por esa razón se la ha substraído a los jueces provinciales? ¿Acaso a este respecto la constitución ha equiparado el distrito federal a los estados provinciales reconociéndole una soberanía independiente de la

nacional? Pero, ¿no se ha demostrado que en el territorio de la capital impera exclusivamente la soberanía de la nación cuyo carácter de nacional toman todas las instituciones que de ella emanan, como es la justicia?

Se ha querido ver en la enumeración que de las materias de competencia federal hace el art. 100 de la constitución, un impedimento para unificar la justicia de la ciudad de Buenos Aires, sin reparar en que esa enumeración ha sido hecha por oposición a la justicia de las provincias, según resulta de los antecedentes del precepto recordado. La constitución no ha entendido substraer a los jueces de los territorios nacionales los demás asuntos señalados taxativamente en el art. 100, porque la misma reserva del inc. 11 del art. 67, atribuye a la justicia federal facultad para aplicar los códigos civil, penal, comercial, y de minería, "según que las cosas o las personas caigan bajo su jurisdicción". Es decir, que todo depende de que caiga bajo la jurisdicción de la nación, y como el territorio de la capital es nacional, nada obsta para que sus jueces tengan la amplitud del poder judicial para conocer de todos los asuntos y aún de los que son objeto de la reserva.

La institución de los dos fueros en el distrito federal, es así obra de la ley y no de la constitución y puede, en consecuencia, unificarse por otra ley, adoptando el temperamento seguido por la ley núm. 1532 de octubre 16 de 1884 sobre organización de los territorios nacionales, cuyo artículo 26 establece que, "los jueces letrados conocerán y resolverán en las causas, que en la ley citada en el artículo precedente (se refiere a la de 15 de diciembre de 1881 sobre organización de los tribunales de la capital), se atribuye a los jueces en lo civil, comercial, correccional y criminal y también las que correspondan al juez federal". Con igual criterio y con mayor razón, ha debido procederse al organizar la justicia de la capital de la república, puesto que al fin y al cabo, la jurisdicción de la nación sobre los territorios nacionales (las gobernaciones) es transitoria, mientras que la ejercida sobre el distrito federal, es de carácter permanente.

Con una sola clase de jueces, se podría perfectamente llenar la función judicial del distrito de la capital, en toda su extensión, sin desmedro de la constitución nacional y con el agregado de que, de

esta manera, se conformaría la organización de la justicia de Buenos Aires a la unidad de la jurisdicción que, como Benthán lo puso de manifiesto, es uno de los cánones del derecho procesal, y se salvaría uno de los inconvenientes más formidables del actual sistema, originados por la dificultad de dar con el juez competente que ha de entender en un asunto.

No se da a las cuestiones de competencia con el cortejo de declinatorias e inhibitorias, toda la importancia que en sí tienen, porque se desconoce el verdadero concepto del "procedimiento" que, siendo el "medio" de obtener del estado la satisfacción de los intereses tutelados por el derecho, no puede constituir nunca un objeto o motivo de nuevos litigios o contiendas judiciales. La simplicidad de las formas procesales, la brevedad de la litis, es no solo necesaria al comercio jurídico moderno, sino que está en conformidad con la naturaleza ágil, pronta a la concepción, rápida a la ejecución y por así decir, nerviosa de nuestro pensamiento. La pronta solución de los pleitos, pues, es ya un lugar común de la ciencia procesal y no debe olvidarse cuando se trata de organizar una buena administración de justicia.

Dentro de esta corriente de ideas, aspiro a la unificación de los fueros de la capital sin temor alguno de desnaturalizar la justicia federal y sin creer que se le disminuya en importancia al encomendarle "la tarea vulgar de conocer en toda clase de asuntos". No creo en la superioridad o supremacía de los tribunales federales sobre los demás de la nación, porque esa situación de privilegio repugna al espíritu democrático de nuestras instituciones, y me parece que siendo la constitución ley suprema de la nación que debe primar sobre los demás y aplicarse en primer término, todos los jueces sin excepción son sus guardianes y mantenedores, y no exclusivamente los llamados federales, como por error se ha sostenido.

Para llegar prácticamente a la unificación deseada, bastaría con que la ley, haciendo caso omiso de la nomenclatura que hoy existe, organizara la justicia de la capital con los actuales jueces denominados ordinarios y federales, asignándoles competencia para entender en los asuntos del derecho común y en los de la materia especificada en el artículo 100 de la constitución. No habría por qué

declarar "incorporados" los tribunales y magistrados de la justicia ordinaria a la justicia federal, porque habría impropiedad en los términos empleados, desde que importaría reconocer que los incorporados no tenían antes el carácter de federales, vale decir, nacionales, lo que no sería exacto, aparte de que constituiría una contradicción, dado que ningún juez que no sea nacional podría conocer de la materia reservada por la constitución a los jueces de esta clase. Es precisamente porque son nacionales los jueces de la capital, que deben conocer de la materia federal.

En cuanto a la ampliación de la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras, no lo creo de mayor conveniencia práctica. Tal vez de esta manera, la justicia federal se acomodara más a la constitución, porque evidentemente ésta le ha concedido competencia exc'usiva al respecto, en cuanto substraer esa materia de la codificación general, dándole el carácter de ley especial del congreso; pero en los tiempos que corren no militan las razones que informaron la disposición constitucional. Por el carácter universal de las quiebras pudo pensarse que, interesando igualmente a extranjeros y nacionales de las distintas provincias, convenía substraer su conocimiento de los jueces provinciales, quienes tal vez inspiraran sus resoluciones en la adversión al extranjero o en el espíritu de localismo imperante en aquella época, pero que hoy no existe.

El designio de los constituyentes de instituir una justicia que ofreciera mayores garantías que la provincial de entonces, no puede subsistir en la actualidad. Ya nadie piensa seriamente que sea mejor la justicia federal que la ordinaria de provincia. Una y otra tienen la misma organización, exigen las mismas garantías de títulos y aptitudes de parte de los encargados de administrarla, y tienen leyes procesales más o menos análogas; si alguna diferencia existe sobre este último particular, es en ventaja de ciertas leyes procesales de las provincias que, indudablemente, son superiores a las de la justicia federal. Después de todo, choca que nuestra legislación judicial pueda sostenerse sobre base tan delesnable, como es la de que hay en el país una justicia buena y otra arbitraria, si se ha de mantener la dualidad de fueros en la capital, y si debe mantenerse en las provincias mientras no se reforme la

constitución, no se ve la conveniencia de ampliar la competencia de la justicia federal. Lo mismo es que sea ésta y no la ordinaria la que conozca de las quiebras y otros asuntos. Al contrario, quizá convenga mantener las cosas como están, ya que al fin y al cabo, se trata de materia del derecho común, propia de la justicia ordinaria, de la que esta ha conocido durante largo tiempo incorporándola de hecho a su jurisdicción.

La reforma a este respecto, debe ser radical y no limitada a simples retoques de detelle, que sólo servirán para desfigurar el proceso y complicar su organismo, sin cambiarle su personería ni obtener las ventajas que sólo otro tipo bien distinto pueda dar. Debe aprovecharse la justicia de paz, que ha marchado con alguna independencia y en cierto modo alejada de la de mayor cuantía, para afrontar el problema procesal en la forma amplia y decidida que ha menester. De esta manera se conseguirá, por lo menos, ensayar, sin comprometer intereses creados, las instituciones judiciales y procedimientos de los modelos más modernos, que vienen haciendo la felicidad de los pueblos que los han adoptado, y que, no obstante constituir la admiración del resto del mundo, no se intenta trasplantar al país, por temor de que sea planta exótica que no arraigue en nuestro medio.

Otras reformas a la organización y procedimientos judiciales son reclamadas en forma más apremiante. Entre ellas, la de la justicia de paz, que por ser la más vinculada a la masa del pueblo y constituir la justicia de la clase desheredada, merece preferente atención en estos tiempos de reacción proletaria. Es, en verdad, de los pocos asuntos de índole institucional, que ha tenido la virtud, entre nosotros de preocupar a la opinión pública, llegándose hasta incorporar la reforma en los programas de algunos partidos políticos y ser ofrecida sinceramente en forma realizable por los candidatos a las altas esferas del gobierno. Y si no obstante las insistentes iniciativas de los poderes públicos, no se ha llegado a nada concreto, se debe más que todo, a que, contemplándose el problema sólo en uno de sus aspectos, o sea, el referente al personal que ha de administrar la justicia de paz y decidiéndose por la justicia letrada, se ha tropezado con el inconveniente de su financiación.

No basta, pues, con instituir la justicia de paz letrada, cuyas bondades se han proclamado hasta el

cansancio con atinadas razones que huelga reproducir. Es necesario, además, que la justicia sea administrada por tribunales colegiados que decidan en única instancia, en juicio oral y público y tratando de concretar la actividad procesal en el número de audiencias posibles.

Con el tribunal colegiado de única instancia, se conseguirá, sin las demoras y erogaciones que necesariamente ocasiona el pesado mecanismo de los dos grados de jurisdicción, las garantías de la apelación, que no son otras que la de asegurar el acierto de las resoluciones con el mayor estudio que supone la discusión de varios magistrados. No se ve la necesidad de alargar las distancias imponiendo el tránsito por caminos tortuosos, cuando la vía directa se encuentra espedita. Si todas las ventajas de la apelación pueden obtenerse con la institución del tribunal colegiado, si éste puede garantizar a la sociedad en general y a los litigantes en particular, debe adoptarse sin temores, para evitar que los males ya señalados engendren el desprestigio de la administración de justicia. Ahora, su adopción, claro está, lleva consigo la necesidad de introducir la reforma en todo el vasto campo del procedimiento

Debe igualmente implantarse la oralidad del juicio como más conforme a la vida moderna en que la manifestación oral del pensamiento juega un rol tan importante debido a la rapidez de los negocios, la facilidad de las comunicaciones y a la necesidad de resolver las cuestiones de la vida en la forma más breve posible. El proceso oral, en sus formas más genuinas, tiene por condición, la identidad de la persona del juez en las diversas fases del proceso, de tal manera que el mismo tribunal, oye las defensas, recibe las pruebas y produce las sentencias; todo en contacto directo con las partes, los testigos y peritos, lo que lo pone en condiciones de conocer la situación real creada a los litigantes por la cuestión que los divide. Sus ventajas son pues notorias, pero mucho se teme de que no puedan obtenerse entre nosotros debido a defectos o peculiaridades propias de nuestro carácter y ambiente. Sin embargo, nada obsta para que se instituya en la justicia de paz, si quiera sea por vía de ensayo y para que sirva de escuela donde el pueblo y especialmente los curiales hagan el aprendizaje hasta que se connaturalicen con la institución y se aprovechen sus bondades. Entonces habrían visto la necesidad de hacerla extensiva a la justicia de mayor cuantía.

Como en el proceso oral, la audiencia es el campo de acción de las partes y del juez, hay que cuidar de su organización. Muchas veces se ha llegado a desvirtuar el sistema de la oralidad con la multiplicidad de las audiencias, por el peligro que hay de que con el andar del tiempo, el juez pierda la impresión adquirida en su investigación directa y de que se cambie la persona física del juez por muerte, enfermedad, ascenso, etc. Por eso los autores y especialmente Chiovenda, siguiendo al nuevo reglamento austriaco, aconsejan la concentración de la actividad judicial en una sola audiencia o en unas pocas audiencias. Ello se consigue haciendo que en una audiencia previa, se traten y resuelvan todas las cuestiones de forma inclusive la de competencia, en forma definitiva, y que antes de que tenga lugar la segunda audiencia de amplio debate y producción de la prueba, se haya preparado la discusión en forma tal, que las partes y el juez vayan sabiendo los términos precisos de la controversia y los elementos de convicción que en la audiencia se debe producir.

Cuando se hayan palpado los beneficios de este sistema en la justicia de paz, habrá llegado el momento de imponerlo en la de mayor cuantía. Mientras tanto, y dados los inconvenientes que habría para su aplicación inmediata, conviene introducir al procedimiento vigente, las modificaciones que han aconsejado algunos de los que se han ocupado de estas cosas. Entre otras, las siguientes:

1o.—Consentida por las partes, expresa o implícitamente, la competencia del juez que conoce en la causa, se entenderá que hay cosa juzgada al respecto, y no podrá declararse la incompetencia en ningún caso.

2o.—Las notificaciones que, según la ley vigente, corresponde hacer por cédula, deberán efectuarse por el empleado o empleados especial y exclusivamente encargados de ello, dentro de las veinte y cuatro horas de dictada la providencia, bajo pena de veinte pesos de multa a cargo del notificador por cada infracción. La multa deberá hacerse efectiva de oficio por el juez, pasando comunicación a quien corresponda, para que deduzca su importe de los haberes del empleado. Su producido ingresará al fondo del consejo de educación.

3o.—El domicilio legal, una vez constituido en autos, se reputará subsistente para todos los efectos legales mientras los interesados no hayan designado otro, aunque éstos se hubieren mudado de la casa en que se tenía constituido el domicilio y en la que al mismo tiempo vivían, y aunque la casa se encuentre deshabitada. .

A todo el que fijare un domicilio no existente, se le notificará por nota, una vez comprobada la falsedad.

4o.—El ministerio público será desempeñado por una sola clase de funcionarios, con las atribuciones y deberes de los actuales agentes fiscales y asesores de menores, quienes intervendrán en los asuntos en que son parte o representantes legales por mera notificación del auto en que se les llame al juicio y de todas las demás resoluciones que se produzcan a fin de ponerlos en condiciones de hacer las gestiones y pedimentos que crean oportunos.

No será necesaria la intervención del ministerio público en los asuntos en que los padres representan la persona y bienes de sus hijos menores de edad, a menos de tratarse de aquellos actos que para su validez requieren autorización judicial.

5o.—El representante del consejo de educación sólo intervendrá en los juicios sucesorios, para asegurar y percibir el impuesto a la transmisión gratuita de bienes.

6o.—El término de prueba no excederá de treinta días. Dentro de los primeros cinco días de notificado el auto correspondiente, deberá ofrecerse toda la prueba que las partes intenten producir.

7o.—Dentro de los tres primeros días de dictada la providencia de autos para definitiva, las partes, de común acuerdo, podrán renunciar a la sentencia de primera instancia, en cuyo caso, se pasarán los autos al superior para que falle en única instancia y sin más trámite.

8o.—El recurso de apelación contra sentencia definitiva de primera instancia, deberá deducirse y fundarse dentro de los nueve días de notificada ésta. Del escrito correspondiente, que deberá presentarse con copia, se dará traslado a las demás partes, quienes lo evacuarán en el mismo término de nueve días.

Concedido el recurso, se pasarán los autos a la

cámara para que resuelva sin nueva audiencia (se suprime la expresión de agravios), a menos que fuera necesario recibirse la causa a prueba en los casos previstos por el código de procedimientos.

9o.—Deducido un recurso de apelación por alguna persona de las que intervienen en el juicio sin ser parte directa o por persona a quien el juez no le ha reconocido el carácter de parte aunque ésta pretenda serlo, se concederá al sólo efecto devolutivo y se mandará que el apelante presente testimonio de lo pertinente de los autos con las adiciones que el colitigante hiciere y el juez estimare necesarias, y este testimonio será remitido al superior.

10.—Para trabar embargos preventivos o definitivos, no es necesaria la previa intimación de pago, la cual podrá hacerse hasta diez días después de practicado el embargo, que se mandará levantar de oficio si el acreedor no ha conseguido llenar esa formalidad. En este caso o cuando el pago se haga en el acto de la intimación, las costas serán a cargo del acreedor.

11.—Todas las personas que intervienen en los juicios y tienen derecho a hacer fijar su honorario o comisiones, podrán renunciar a la conformidad de parte, en cuyo caso el juez deberá prescindir de ésta y proceder a la regulación sin más trámite.

12.—Queda prohibido a los jueces dictar providencias inútiles o que nada resuelvan, así como llamar autos si no se tratare de sentencias definitivas en juicios ordinarios.

Sin otro particular, salúdalo con su consideración más distinguida S. S. S.

D. Lascano.

Del doctor A. de Vedia

Buenos Aires, octubre 12 de 1920.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Presente.

Señor presidente:

Contesto con atraso la circular de la honorable comisión de justicia, porque he sido detenido en mi

trabajo por razones de índole particular, que no pude salvar oportunamente. Quiero explicar al señor presidente esta circunstancia, rogándole quiera considerarla suficiente para justificar el retardo con que he respondido a la solicitud de que me ocupo.

Saludo al señor presidente y por su intermedio a la honorable comisión de justicia, con mi más alta consideración.

Agustín de Vedia.

a) *¿Conviene unificar los fueros federal y ordinario en los tribunales de la capital?*

Realízase a diario el "afianciamiento" de la justicia en la república, pero poco se avanza en el sentido de perfeccionar la administración judicial y sus procedimientos. Queda en pie para nosotros el postulado de Bentham en cuanto reclama justicia rápida y fácilmente gestionada e impartida. Desde tal punto de observación, ¿cómo no advertir que claman por una reforma del sistema actual, la vida del país, su progreso, la facilidad de las transacciones, el desenvolvimiento de las relaciones civiles y comerciales, la necesidad de mayor eficacia de la acción jurídica y mil manifestaciones más de múltiples y vitales necesidades? ¿Cómo puede permanecer impasible el congreso nacional ante todo ello, contemplando, siquiera, desde las cuestiones de "competencia", a diario promovidas, hasta la fundamental discrepancia de la jurisprudencia, de esa segunda ley, tan fundamental como la ley misma, desde que es el derecho vivo? No se trata de hechos simples de una cuestión trivial. Por eso la encuesta de la comisión de justicia marca una reacción digna de aplauso y acaso sea precursora de una reforma fundamental.

Se trata de hacer frente al cariz más trascendental de esa columna de la organización social, encomendada al poder judicial que al decir de Rawson está encargada de "corregir los errores" de las otras ramas del gobierno, como tiene la misión sencilla, y fundamental de dar a cada cual lo que es suyo, aplicando en todo caso, el conjunto de normas que se llama justicia. "Justicia es una de las cosas, porque mejor, en más endrecadamente se mantiene el mundo. E es así fuente, onde manan todos los

derechos" (Part. 3a. Tít. 1). "Raygada virtud es la justicia, segund dixeron los sabios antiguos, que dura siempre en las voluntades de los omes justos, e da, e comparte a cada uno su derecho egualmente" (Part. cit. ley 1). Valga la cita clásica como admirable síntesis del valor de cuanto se relaciona con las cuestiones sometidas a la decisión del poder legislativo, en la hora presente.

Simplificar, facilitar la obtención de justicia, tales parecen ser los rumboh señalados en el momento actual en presencia de la organización judicial y de la legislación procesal. En ese concepto, ¿a qué título mantener en la capital de la república una jurisdicción ajena a la federal? ¿En qué disposición legal se funda esa dualidad o en qué razón de orden público se apoya? Trayendo a colación, para autorizar la respuesta, el antecedente extranjero, ha de advertirse que en el mundo entero se acentúa la evolución hacia la centralización del poder, de la justicia, de la legislación. Suiza y Alemania nos presentan el ejemplo más vívido, sancionando legislaciones uniformes y centralizando las administraciones judiciales, cuando sus orígenes y sistemas políticos recuerdan federaciones y federalismos de verdad. En América, los Estados Unidos del Norte con una formidable corriente en favor del sistema argentino referente a la legislación sustantiva, — unitaria ésta en virtud de la genial inspiración de los autores de la constitución del 53, — y Venezuela, reconociendo en el congreso federal el derecho de dictar las leyes de procedimientos en sus detalles más insignificantes, nos señalan el mismo fenómeno. Es que conducen a la solución reclamada y la conducen también entre nosotros, las innumerables necesidades de justicia rápida, de legislación única y simple y de jurisprudencia también uniforme y constante.

De nuestra admirable constitución nacional surge aquella solución. ¿A qué complicar la administración de justicia, abandonando para ello la interpretación de la constitución por la constitución misma? En nuestra ley fundamental nada se expresa que pueda dar cabida al fuero ordinario en la capital federal. En ninguna de sus disposiciones se alude a un "poder judicial" que fuera del "provincial" sea otro que el "federal". El art. 34, agregado a las declaraciones por el localismo porteño en la memorable convención del 60, crea la incompatibilidad entre el cargo de miembro de las cortes

provinciales y de juez federal. En ningún caso puede referirse a la administración de la capital o de los territorios nacionales. La disposición recordada prevé el caso de funciones político-judiciales encargadas a personas que ocuparan a la vez cargos en dos administraciones judiciales que podrían tener intereses encontrados. Esa y no otra es la razón del art. 34 y esa fué la situación planteada en el Paraná y contemplada por la convención revisora de la constitución. Si esta consideración no bastara, el hecho de que se nombre a los tribunales de "provincia" ¿no es suficiente?

La única disposición constitucional, pues, que podría parecer respondiendo al propósito de separar el "fuero ordinario" del poder judicial federal no se refiere a la capital de la república. Este criterio se afirma en presencia de la siguiente observación: el poder ejecutivo nacional "es el jefe inmediato y local de la capital de la nación" (Const. Nac. art. 86 inc. 3) y el poder legislativo "ejerce una legislación exclusiva en todo el territorio de la capital de la nación" (Const. Nac. art. 67, inc. 27), ¿por qué el poder judicial federal no ha de ser excluyente también de otra administración de justicia en la "capital de la nación"? Si, como lo concretara un eminente tratadista, "cada gobierno necesita un intérprete de sus leyes" es evidente que ante los tres poderes federales no cabe un cuarto, agregado a nuestra vida institucional como verdadero injerto. El intérprete de la ley ha de ser en la capital "federal" el mismo poder judicial de la constitución nacional. Ello responde al principio, base de la ciencia política y con razón pudo decir Paschal: "En el establecimiento de gobiernos libres, la división entre tres funcionarios diferentes, de los tres poderes del gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ha sido una idea favorita de nuestros hombres de estado".

Nuestro congreso nacional en presencia de las imperiosas exigencias de reforma, de las múltiples necesidades a diario sentidas, y de las atribuciones que le confieren los arts. 67, inc. 27, y 94 de la constitución, debe ajustar la solución a los términos estrictos de la ley fundamental, que, una vez más, darán la oportunidad de satisfacer las verdaderas necesidades. El "fuero ordinario" debe ser suprimido, borrando jurisdicciones al entregarlo al "fuero federal". Ninguna de las cuestiones de "derecho y

equidad" sometidas a éste por el art. 100 de la constitución excluye, siquiera remotante, la competencia hoy atribuida a la justicia ordinaria y por el contrario la mayor confianza que los tribunales federales ofrecieron a los constituyentes cuando se vieron movidos a entregarles el conocimiento de las causas entre vecinos de diversas provincias o entre nativos y extranjeros, bien puede determinar, con todo su anacronismo, a colocar dentro de la jurisdicción federal todos los casos sometidos a los jueces ordinarios. Por lo demás, es evidente que en ningún momento el "caso federal" crearía dificultades al juez civil, comercial o criminal, miembro de la administración federal.

Así pareció entenderlo en cierto momento el poder ejecutivo cuando hizo suyo el proyecto de su ministro, el doctor Luis Ma. Drago, tendiente a obtener que el congreso sometiera a los jueces federales las causas criminales y correccionales en que un extranjero fuera parte, ya que la función de juzgar debe estar a cargo de quien se obliga a responder por ella. La nación, en el caso.

En resumen: nada autoriza la "justicia ordinaria" en la capital federal. Mucho se simplificaría la organización y procedimientos judiciales refundiendo dicho fuero en el fuero federal. Con esa simplificación se alcanzaría una verdadera solución de múltiples problemas y, precisamente, de los de mayor gravedad en todo cuanto se refiere a la justicia. El congreso tiene el "imperium" necesario para hacer la reforma. En consecuencia, en tales condiciones ésta no puede demorarse.

b) *¿Qué solución aconseja para resolver ese problema?*

La refundición inmediata y completa de los distintos fueros. La incorporación de tribunales y magistrados a la justicia federal. La revisión de las distintas disposiciones legales fundadas en la diversidad de fueros.

c) *¿Conviene ampliar la jurisdicción federal, incluyendo en ella el conocimiento de las quiebras y otros asuntos?*

Consecuente con el punto de vista ya enunciado, pienso que sí. Entiendo que nada se opone a ello, mientras se separe de los códigos el asunto someti-

do a la justicia federal, pues el procedimiento contrario crearía la inconstitucionalidad de la ley, ya que la constitución reconoce a los tribunales provinciales el conocimiento de los códigos.

d) *¿Conviene aumentar el número de cámaras de circuito?*

Entiendo que actualmente no es necesario aumentar ese número. Si se introdujeran reformas que ampliaran el número de asuntos sometidos a su competencia, debería estudiarse la cuestión.

e) *¿Qué reformas procesales considera urgentes?*

Me he de referir a la que juzgo más importante. A la que lleve al país a la unificación procesal y luego a la implantación del poder judicial adoptado por la constitución argentina de 1826. Para no repetir la argumentación en que me fundo, me permito elevar a la honorable comisión el trabajo que sobre la cuestión planteada publiqué en 1919.

Agustín de Vedia.

Organización judicial

“Todo gobierno necesita un intérprete de sus leyes”. Por eso nuestra constitución nacional, al fijar a la nación y a las provincias sus gobiernos, aceptó la división tripartita que se impusiera en el mundo para la organización de todos los estados modernos, y creó el poder judicial federal, determinando al propio tiempo la obligación y el derecho que tienen las provincias de mantener y asegurar sus “administraciones de justicia”. La organización judicial de nuestro país reposa, pues, sobre las cláusulas expresas de la constitución nacional y ha respondido al concepto de federalismo que inspiró a los constituyentes de 1853 y 1860. Estos buscaron en los antecedentes constitucionales propios y en los ejemplos que ofrecían los estados extranjeros, el sistema judicial que fuera compatible con el mandato que les dictaban la historia nacional, la voz de los gobiernos locales, las lanzas de los caudillos triunfantes, la letra de los pactos interprovinciales y hasta el mismo acuerdo de San Nicolás, en virtud del cual dictaban la constitución y cuyo artículo 20. decía:

"Que estando todas las provincias en plena libertad y tranquilidad, había llegado el caso previsto en el artículo 16 de dicho tratado (el pacto federal del 4 de enero de 1831) y debía, por consiguiente, reglarse por medio de un congreso general federalista, la administración general del país bajo el sistema federal".

Nuestros constituyentes encontraron en los Estados Unidos de Norte América, en el "único modelo de federación que existe en el mundo" como dijera el miembro informante de la comisión en el congreso del 53, doctor Gorostiaga, el ejemplo que creían digno de imitar al organizar el poder judicial de la república. Crearon la justicia federal e impusieron a las provincias la obligación de organizar la justicia local que integrara sus gobiernos y se rigiera por las leyes procesales que luego podrían y deberían dictar las legislaturas.

En cumplimiento del artículo 50. de la constitución nacional, todas las provincias y la nación han organizado las administraciones de justicia. Se trataba de cumplir el anhelo de los beneméritos constituyentes: "afianzar la justicia", obteniendo con ello la satisfacción de la más evidente necesidad social, la que es la razón de ser de la misma convivencia humana, la que encauza las pasiones, asegura los derechos y garantiza la obra de los gobiernos.

Los Estados Unidos de Norte América, al "organizar" la justicia, como dice el preámbulo de su constitución con más modestia que el nuestro, para el que sólo era necesario "afianzarla",—crearon la justicia federal y no hubo una sola voz que desacatara el pronunciamiento de la ciencia política, que establecía para todo gobierno bien organizado la división en tres poderes. Se sabía que únicamente los gobiernos absolutos reunían en un poder las obligaciones y los derechos de los otros dos. Repugnaba, pues, la fórmula encerrada por Macarel en las siguientes palabras: "Toda justicia emana del rey y se administra en su nombre por jueces que él elige". (Curso de derecho administrativo).

Un eminente tratadista americano dice al respecto: "En el establecimiento de gobiernos libres, la división entre funcionarios diferentes, de los tres poderes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ha sido una idea favorita de nuestros hombres de estado y se ha considerado como un principio importantísimo el de que estos poderes debían ser siempre separados y distintos". Así lo estableció el proyecto de la convención redactora de la constitución, expresando que

era necesario crear un gobierno nacional compuesto de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, planeando, también, las bases de toda la organización del gobierno de los Estados Unidos. Con la organización del poder judicial federal se perseguía el propósito de contribuir a mantener el equilibrio de los poderes, creando a la vez un poder regulador y un organismo capaz de interpretar uniformemente las leyes que dictara el congreso nacional. La 1a. sección del libro III de la constitución norteamericana dice: "El poder judicial de los Estados Unidos residirá en una corte suprema y en los demás tribunales inferiores", y la 2a. sección resume los casos de jurisdicción de ese poder judicial, en las siguientes palabras: "El poder judicial se extenderá a todos los casos en derecho y equidad, que emanen de esta constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados hechos y por hacerse bajo su autoridad; a todos los casos relativos a los embajadores y otros ministros públicos y a los cónsules; a todos los casos de almirantazgo y jurisdicción marítima; a las controversias en que los Estados Unidos sean una de las partes, a las controversias entre dos o más estados, entre un estado y ciudadanos de otro estado, entre ciudadanos de diferentes estados, entre el ciudadano del mismo estado, reclamando tierras por concesión de diferentes estados, y entre un estado o los ciudadanos de éste y estados extranjeros, ciudadanos o súbditos".

Es evidente que el espíritu y la letra de estas disposiciones presentan para la interpretación y estudio de la constitución argentina un valor inestimable. Fueron aquéllas la fuente directa de ésta en la materia que nos ocupa y se buscaron teniendo en cuenta,—lo repito,—que eran los Estados Unidos del Norte el más completo modelo de federación que existía o que, por lo menos, conocían los constituyentes.

Los artículos 94, 100 y 101 son, más que coincidentes, una copia de los textos ya transcritos y sólo para el objeto de este capítulo y para que resalte en forma concluyente lo expuesto, van a continuación: "El poder judicial de la nación será ejercido por una corte suprema de justicia, y por los demás tribunales inferiores que el congreso estableciese en el territorio de la nación". "Corresponde a la corte suprema y a los tribunales inferiores de la nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la constitución, y por las leyes de la nación, con la reserva hecha en el inciso II del artículo 67 (códigos, ley de bancarrotas, etc.); y por los tratados

con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un estado o ciudadano extranjero".

Los constituyentes argentinos resolvieron acaso en la única forma posible el problema que se les presentaba. Fué tan adecuada la solución que, a pesar de la situación política porque atravesó la república desde 1853 hasta 1862, inmediatamente después de sancionada la constitución se pusieron en práctica en sus partes esenciales las disposiciones referentes al poder judicial. La reforma de 1860 no las modificó substancialmente y, salvo la incuria con que se cumplió el mandato de la ley suprema en cuanto disponía la instalación de los "demás tribunales inferiores", el concepto a que respondió la organización del poder judicial federal se afianzó visiblemente. Este respondió patrióticamente, llenando la misión que le fuera encomendada. Cabe en ello la mayor parte a la suprema corte, "la llave maestra de nuestro edificio político", según la expresión de Wáshington al enviar su nombramiento al primer presidente de la corte norteamericana, Mr. John Jay. Este tribunal ha realizado entre nosotros una obra silenciosa y activa en la solución del grave problema de la unidad nacional, contribuyendo a borrar localismos y recelos y afianzándose en el pedestal que la constitución misma le creara.

Para explicar brevemente el fundamento de las cláusulas constitucionales determinantes de la jurisdicción de la justicia federal, he de seguir en sus lineamientos generales el citado artículo 100 de nuestra ley suprema. Me mueve el deseo de demostrar cómo es de sólida y perdurable la doctrina en cuya virtud ha nacido la jurisdicción federal.

Si se dejara a cada provincia la interpretación de la constitución y de todas las leyes de la nación, faltaría al gobierno nacional gran parte del imperium de que ha sido investido y quedarían aquéllas sujetas a las interpretaciones contradictorias de los tribunales provinciales. El doctor Rawson ha precisado con acierto esta función de la justicia federal, diciendo en un debate del senado: "Corresponde al congreso como poder legislativo, al ejecutivo y al judicial, a cada uno en su caso y en el ejercicio

de sus funciones, la interpretación de la constitución. El congreso dicta leyes, y al sancionarlas interpreta la ley fundamental como la entiende; lo mismo sucede con los decretos y todos los actos del poder ejecutivo y con los que son propios del poder judicial, con la sola particularidad en nuestro sistema, de que siendo cada una de las autoridades constituidas responsable, conforme a la ley, por la interpretación que hayan dado, sólo el poder judicial da la interpretación definitiva en los casos que se someten a su fallo, declarando la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y aún de los actos administrativos. Si el congreso infringiere la constitución al dictar una ley, hay un poder que está encargado por la constitución de corregir esos errores".

Las causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros no podrían, tampoco, ser sometidas a las justicias locales, por cuanto la responsabilidad de esos juicios recae gravemente sobre la nación. Los embajadores y ministros dejan el amparo que le ofrece la ficción de la extraterritorialidad para someterse a la decisión de los tribunales del estado ante el cual están acreditados. Lógico es, pues, que éste le ofrezca la mayor garantía y que su resolución lleve tras sí la fuerza toda de la nación. Tratándose de los cónsules y en atención al carácter de agentes comerciales que éstos invisten, el fundamento no es, desde luego, el de la disposición anterior. Ese mismo carácter hace al cónsul siempre extranjero para el país ante el cual desempeña su misión, y si el fuero federal ampara a todo extranjero, debe amparar también a aquél.

Las costas sobre el océano y los ríos navegables han sido declarados nacionales por la constitución y por ello se explica la jurisdicción de los tribunales federales. Lo mismo ocurre en las causas de almirantazgo. Esta es la disposición norteamericana, como puede verse en la transcripción de la pág. 9, y tiene su origen en la corte de almirantazgo creada en Inglaterra para entender en los delitos que se cometen en alta mar. Si bien en este estado los contratos hechos en tierra para ser ejecutados en el mar o hechos en el mar para ser ejecutados en tierra, corresponden a los tribunales ordinarios, la necesidad de reprimir la piratería dió su razón de ser a la corte de almirantazgo. En las repúblicas federales como la nuestra, nada tienen que hacer las provincias en los ríos navegables y en los mares. Por

ello corresponde a la nación la jurisdicción sobre ellos.

En las causas en que la nación sea parte y las que enumera el párrafo final del art. 100, la necesidad de mantener la unión nacional, conservar el equilibrio entre las provincias igualmente autónomas y el deseo de asegurar al extranjero la justicia imparcial, responsable ante toda la nación, han determinado también la jurisdicción de los tribunales federales.

Dejando expresados a grandes rasgos los lineamientos generales de esta cuestión, desde su faz constitucional y aparte las reglamentaciones legales, la jurisprudencia imperante y hasta la discusión doctrinaria, he querido subrayar la circunstancia de que el poder judicial federal descansa sobre inmovibles principios de orden público, y por eso mismo no podrá desaparecer nunca, cualquiera sea la evolución política que el país haya sufrido o sufra. La justicia federal responde a necesidades que nacen de la forma de gobierno que el país ha adoptado y el carácter político que presenta su más alto tribunal lo hace una creación genuinamente americana. El doctor J. Barraquero, en su libro "Espíritu y práctica de la constitución argentina", dice: "Ni en Inglaterra los tribunales de justicia, limitados por los avances de la nobleza y del rey, ni en Francia la suprema corte de casación, tienen analogía con el poder judicial americano. Aquéllos aseguran el estricto cumplimiento de las leyes, pero no se pronuncian sobre su constitucionalidad".

Trataré ahora la forma en que los "Estados" en la federación norteamericana y las provincias entre nosotros respondieron a las disposiciones constitucionales, organizando sus respectivos poderes judiciales. En los Estados Unidos se siguió de cerca la doctrina que hizo triunfar Montesquieu al estudiar la organización política de Inglaterra. Esta doctrina se resume en las siguientes fórmulas: "Cuando los poderes legislativo y ejecutivo están reunidos en una misma persona o cuerpo colegiado, no puede haber libertad, porque pueden surgir temores de que el monarca mismo o senado dicte leyes tiránicas para ejecutarlas de un modo tiránico" y "Si el poder de juzgar se uniere al legislativo, la vida y libertad del súbdito quedarían sujetas a una autoridad arbitraria, porque el juez sería entonces el legislador. Si estuviere unido al poder ejecutivo, el

juez podría proceder con toda la violencia de un opresor". De acuerdo con estos principios se comenzaron en la federación norteamericana los trabajos para la organización de los poderes del gobierno, y es curioso observar que, aun cuando en el orden nacional no se discutían ya, dichos "axiomas políticos" no se llevaron a la práctica en forma clara y precisa con que parecían imponerlos las ideas dominantes en los distintos "Estados".

Al dictarse las constitucionales primitivas de Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, — la patria de los prohombres, — Carolina del Norte y del Sud, Georgia y hasta las de Massachussetts y Nueva York, que hicieron declaraciones en contrario, se olvidó la división tripartita del gobierno y se borró, en algunos claramente, la decantada independencia del poder judicial, en medio de los avances de los otros poderes. Estudiando ese fenómeno político, ha podido decir Madison en "El Federalista", que "No es sino demasiado evidente que en algunos casos el principio fundamental en consideración ha sido violado por la mezcla de poderes y aún por una consideración efectiva de los diferentes poderes, y que en ningún caso se ha dispuesto lo competente para mantener en la práctica la separación delineada sobre el papel". El eminente Jefferson anotó la misma observación en sus "Notas sobre el Estado de Virginia", — del cual fué gobernador, — diciendo: "Todos los poderes del gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, refluyen al cuerpo legislativo".

Tan autónomos fueron desde su origen los distintos "Estados" de la Unión, que, así como Rhode Island y Connecticut llevaron a la república las mismas constituciones que los rigieron durante el coloniaje, todos, desde el primer momento, organizaron sus gobiernos, como acaba de verse, con prescindencia del patrón que sirvió para la elaboración de la definitiva constitución nacional.

Las provincias argentinas ofrecen un ejemplo absolutamente distinto del que presentan los Estados Unidos. Todas las constituciones provinciales vigentes organizaron los gobiernos sobre la base de las disposiciones de la constitución de 1853 y de ella tomaron las características del poder judicial. En todas se prescribe que los miembros del poder judicial son inamovibles, electos por el gobernador con acuerdo del senado o le-

gislatura: que están sujetos al juicio político; que las funciones que ejercen no podrán ser desempeñadas en ningún caso por los otros poderes; que el gobernador, en consecuencia, no podrá jamás "atribuirse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las "fenecidas", etc. Cumpliendo la constitución federal que las rige, todas las provincias han organizado, pues, verdaderos "poderes judiciales". No podría haber sucedido de otro modo y es interesante observar la evolución que la organización judicial ha sufrido en nuestro país de acuerdo con la evolución política que en el mismo se ha operado. Son los extremos de esa evolución la primera constitución provincial, dictada bajo el gobierno de Estanislao López, para Santa Fe, en 1819, y las disposiciones vigentes, a que antes he hecho referencia. Aquella constitución establecía que el gobernador podría "sentenciar, revocar o confirmar en apelación todas las causas civiles y criminales". Algo análogo preceptuaban las constituciones para Corrientes y Córdoba, dictadas en 1821, y más o menos lo mismo las que sucesivamente se dictaron en la época, aunque en casi todas ellas se trazara algo como un ensayo de poder judicial. A propósito de ello, dice el Dr. Juan P. Ramos en "El Derecho público en las provincias argentinas": "La pobreza de aquella vida mediterránea, la carencia de hombres con títulos universitarios o con estudios jurídicos, la instabilidad consiguiente a una política que llegaba en algunas jurisdicciones hasta a exigir que los jueces fueran federales netos, la insuficiencia de los recursos con que se rentaban sus funciones, la dependencia estrecha del poder ejecutivo en que tenían que vivir los magistrados judiciales, a pesar de lo que dijeran en contrario los artículos solemnes de los estatutos, la forma de su elección, que dependía por lo general de la necesidad de satisfacer las exigencias políticas del grupo que mandaba, todo, en una palabra, se conjuraba para que la administración de justicia en las provincias no revistiera los caracteres de un verdadero poder público, base de la adecuada organización del estado".

Ya he estudiado la organización actual de los gobiernos provinciales y he expresado que ella guarda una visible concordancia con el espíritu y la letra de la constitución nacional. Por esa ra-

zón, la justicia está compartida en la República Argentina por el poder judicial federal o nacional "supremo y único", según la expresión de Nicolás Calvo, por los poderes judiciales de cada una de las provincias con jurisdicción dentro de los límites de las mismas y por las administraciones judiciales organizados por el congreso para la capital federal de la república y las 10 gobernaciones nacionales.

Procedimientos judiciales

La organización de los poderes judiciales, a que hago referencia en el capítulo anterior, ha dado origen a las distintas leyes procesales que imperan en la república, de acuerdo con el principio adoptado por la misma en cuanto reserva a las provincias la atribución de reglar el procedimiento.

No por falta de ideas concretas sobre el grave problema de la codificación, de parte de quienes, unitarios o federales, intervinieron en la formación y sanción de la constitución nacional, como lo sostiene más de un comentarista y entre ellos el justamente reputado Arosemena (1), sino precisamente por lo contrario, porque el autor de las "Bases" hizo triunfar la mejor doctrina, la que convenía al país, se reservó al congreso nacional la atribución de dictar los códigos civil, penal, comercial y de minería, las leyes de bancarrotas, sobre falsificación de documentos públicos, establecimiento del juicio por jurados (art. 67, inc. II), forma probatoria y efectos legales de los actos públicos y "procedimientos judiciales" de las provincias (art. 70.). Con ello se unificaba la legislación de fondo, las leyes que Bentham llamara substancias y se dejaba a las provincias, con las únicas excepciones ya indicadas, las leyes adjetivas, las que determinan las normas para la mejor distribución de la justicia y que según el filósofo citado deben tratar de obtener celeridad en la tramitación de los juicios con cuidado, de "no dar a una parte los bienes de la otra sin examen o arruinar a las dos a fuerza de examinar", economía en los gastos, supresión de trabas superfluas y rectitud en los fallos.

Nuestros constituyentes, al inspirarse en las "Bases" de Alberdi, se apartaron en absoluto del mode-

(1) "Estudios constitucionales sobre los gobiernos de América Latina".

lo antes seguido: la constitución norteamericana. En ésta, como lo he dicho, los "Estados" se han reservado el derecho de dictar las leyes de fondo y forma y sólo corresponde al congreso tal atribución en cuanto le ha sido expresamente delegada. La diferencia, pues, entre los fueros federal y locales está profundamente marcada en la letra de la ley suprema y en la vida práctica. Se impuso allí la tradición, y el viejo derecho consuetudinario que había sufrido las transformaciones determinadas por las legislaturas locales, durante la vida colonial, quedó a merced de los nuevos "Estados".

La República Argentina salvó con la decisión de sus constituyentes el gravísimo peligro que surgía de la duda sobre cuál era el mejor sistema que en este punto podía adoptarse. El aislamiento en que vivían las provincias, la escasa difusión de la cultura, la falta de todos los recursos necesarios habrían ocasionado el fracaso del sistema norteamericano con el retroceso del país y el peligroso estancamiento de la vida civil. Los códigos, que significan la segunda constitución, no podían ser reservados a las legislaturas provinciales, algunas de las cuales iban a nacer del movimiento montonero, a salir de los llanos salvajes o de las selvas reservadas al gaucho montaraz. Con todo, no fué fácil la sanción de la cláusula del inciso II del art. 67 de nuestra constitución. La voz que reclamaba a nombre de las autonomías provinciales se escuchó del constituyente Zavalla, quien afirmó que se pretendía falsear la forma de gobierno proclamada por el art. 1.º y que se atacaba las "soberanías" de los "Estados" y su derecho más digno de respeto: el de darse la legislación que creyeran conveniente. La réplica, elocuente y definitiva, quedó a cargo del doctor Gorostiaga. Este sostuvo en primer término que al sancionarse el art. 24, estableciendo que "el congreso promoverá la reforma de la actual legislación", se había resuelto el punto de debate. Agregó que la confusión y el desorden serían grandes si se sancionaba el sistema contrario al propuesto. Las provincias, concluyó, agradecerán la legislación que el congreso les dicte y salvaguardarán con las leyes procesales sus derechos y sus intereses. Con otro motivo había dicho ya el eminente autor de las "Bases": "Una provincia en sí es la impotencia misma y nada hará jamás que no sea "provincial", es decir, pequeño, oscuro, miserable, "provincial", en fin, aunque la provincia se apellide estado".

El convencional Zenteno robusteció la réplica ha-

ciendo un argumento de gran efecto y de indiscutible mérito: las provincias, dijo, van a legislar, en definitiva, por intermedio de sus representantes en el congreso. Y la legislación uniforme responderá, en consecuencia, a todas las necesidades. A todo lo expuesto debe agregarse que en cuanto a las leyes substantivas la herencia era unitaria. Lo fué la legislación española y siguió siéndolo a pesar de la transformación política que todo el país sufrió. Bien dijo Alberdi, en sus "Bases": "La unión argentina constituye nuestro pasado de 200 años y forma la base de nuestra existencia venidera". La política mundial evolucionaba, además, en todas las federaciones hacia el robustecimiento del gobierno central y esa evolución no ha dejado de acentuarse.

Suiza, que nació de una federación de estados, sufrió la influencia de la revolución francesa y con ella recibió algo de la tendencia unitaria. Contra ésta reaccionó después del congreso de Viena, de 1815, para transar con el unitarismo en la constitución de 1848, subordinando la soberanía de los cantones a la soberanía nacional y creando un gobierno central, nacional y fuerte. Alemania ha seguido una evolución análoga y de federación de estados pasó a ser un estado federativo. Ha sancionado la unidad de legislación a pesar de las razones políticas que interponían los reinos y demás entidades autónomas para conservar el derecho de dictar sus leyes.

La evolución en marcha sorprendió a la República Argentina en el supremo instante de su organización institucional y la obra de los convencionales fué digna del amor que pusieron en la tarea emprendida. Todas las repúblicas federales de Centro y Sud América han adoptado el principio de la unificación de la legislación de fondo en su aspecto más fundamental: la codificación del derecho privado. En efecto, Méjico, Venezuela y el Brasil así lo han dispuesto y sus respectivas constituciones disponen expresamente que corresponde al congreso dictar los códigos, civiles comerciales y penales.

Como consecuencia de estas soluciones constitucionales corresponde a las legislaturas locales,—con la única excepción de Venezuela,—la atribución de dictar las leyes de procedimientos.

Sarmiento, para explicar el fundamento de la sanción constitucional que estudió, decía en sus "Comentarios": "Provincias hay que no cuentan

morando en ellas cuatro personas que hayan cursado estudios legales, y en no pocas la judicatura está por necesidad librada al buen sentido, a las inspiraciones de la conciencia, y, a veces, al favor y a los planes políticos. Pero todas estas provincias tienen organizados, por la forma al menos, todos los tribunales, desde el juzgado de paz hasta los jueces supremos". Arosemena, a quien he citado anteriormente, descuidando el antecedente directo del inc. II del art. 67 que comento y del sistema todo adoptado el 53, se pregunta: "De dónde nace, pues, que tanto los federales de la víspera como los del día siguiente han atribuido con facilidad, y casi sin pensarlo la facultad de expedir códigos generales al congreso nacional, despojando a las provincias de lo que era su propio derecho? ¿Por qué han sido los últimos, esto es, los antiguos unitarios, quienes más bien han reivindicado en parte, ya que no la soberanía, la jurisdicción de las provincias casi derogada por la constitución de 1853?"

Ya he expuesto la razón que movió al congreso constituyente a adoptar el sistema que entonces convenía a la forma de gobierno que se adoptaba. Y fué feliz la sanción. Sólo presenta un error para la actualidad y el futuro: el haber dejado a las provincias la atribución de dictar las leyes procesales. ¿En virtud de qué? ¿Qué inspiró tal resolución? Una reclamación del localismo y la creencia generalizada de que la ley procesal debe adaptarse a las diversas exigencias territoriales, distintas según la situación geográfica y la naturaleza del suelo. Con ese criterio, la ley procesal debe ser distinta en la llanura boreal a la indicada para la región andina o para la capital federal. Y bien: si tal concepto fuera el verdadero, no puede negarse que tampoco la ley de fondo podría ser uniforme. En primer lugar, porque el campo abarcado por las leyes sustantivas y adjetivas no puede ser delimitado con precisión ni por la norma jurídica ni por la doctrina, y, en segundo, porque ¿cómo no han de influir en la legislación sobre las personas como seres jurídicos, en las relaciones de familia, en las obligaciones, sobre todo en los contratos, los derechos reales, en la legislación de la prescripción etc., las mismas razones que median para que la ley procesal sea local? Es que no existen esas causas sino en una medida muy limitada. Es que dentro de la ley uniforme cabe la apreciación de esas causas y las

disposiciones de excepción, pertinentes. Por otra parte, el localismo ya no reclama derechos de esa índole. Al contrario, quizás tras de las cesiones hoy de actualidad, de decenas de escuelas provinciales, va un renunciamiento más de la autonomía que caudillos, pueblo y convencionales reclamaron hace medio siglo...

¿Por qué no aprovechar la parte buena de ese abandono del federalismo, de ese avance decidido de la tendencia unitaria? Lo reclama la vida del país, su progreso, la facilidad de las transacciones, el desenvolvimiento de las relaciones civiles y comerciales, la necesidad de mayor eficacia de la acción jurídica, el "afianzamiento" de la justicia, y mil manifestaciones más que tienen su origen en esas mismas necesidades.

Probable unificación del procedimiento dentro del régimen de la constitución vigente

Es evidente que conviene al país la unificación de las leyes de procedimientos. Ya la desaparición de estrechos sentimientos localistas la hacen posible, mientras la reclaman como imperiosa el patriótico deseo de afianzar la justicia y las necesidades a que hago referencia en el último párrafo del capítulo anterior.

Venezuela, como he dicho en la página 33, es única excepción dentro de las repúblicas federales de América en esta materia. La constitución dictada en 1893 establece en el inciso 20 del art. 13, que los "Estados" que forman la unión venezolana se obligan "a organizar sus tribunales y juzgados para la más cumplida administración de justicia y a tener todos una legislación sustantiva, civil, comercial y penal y unas mismas leyes de procedimiento civil y penal".

Sobre la base de la doctrina venezolana debería legislarse en cuestión de tanta transcendencia. El sistema actual produce en nuestro país serios inconvenientes para la rápida decisión de la justicia y permite las diversas interpretaciones, por las legislaturas locales, de principios que tienen su origen en las leyes civiles, comerciales o criminales. Crea, además, el hondo malestar a que ya he hecho referencia.

Por esa razón no ha faltado a la iniciativa incipiente de algunos tratadistas, la iniciativa ofi-

cial tendiente a hacer desaparecer ese malestar por medio de la unificación del derecho procesal. Esa iniciativa oficial se tradujo en el decreto del 19 de diciembre de 1904, firmado por el doctor Manuel Quintana y refrendado por su ministro, el doctor Joaquín V. González.

Presentan un gran interés los considerandos de ese acto del poder ejecutivo nacional y en ellos se hace notar que los diferentes códigos de procedimientos "hacen cada vez más difícil el ejercicio y goce de la condición civil asignada por la constitución a todos los habitantes de la república" y "que producen un excesivo y complicado mecanismo que se traduce en retardos y carestía de la justicia misma, inconvenientes agravados por la diferencia de fueros federal, provincial y mixto y por la posición anormal en que ha venido a colocarse la justicia en el distrito federal de la capital". Se agrega luego que "la diferencia de formas procesales y de garantías a que se halla sujeta la administración de justicia en las distintas provincias, las cuales si bien se hallan contenidas en la forma de gobierno federal establecida por la constitución, ésta misma tuvo ya en vista la necesidad de uniformar las reglas de procedimientos y las instituciones judiciales, en cuanto y en la medida que fuera posible, por consenso de las mismas provincias y del congreso (Constitución Nacional, art. 67, inc. 11 y art. 107) y con esto manifestaban los autores de la constitución, una vez más, el alto espíritu de previsión que es la característica de sus preceptos". Como consecuencia se designaba seis ciudadanos, "cinco abogados y un médico", para que reunidos en comisión proyectaran la unificación del derecho procesal. Probablemente a los cambios políticos experimentados por la república se debe que la iniciativa cayera en el olvido y que la comisión no cumpliera su destino.

Ahora bien: ¿es posible unificar el procedimiento dentro del régimen de la constitución vigente? Nada se opone a ello. Existe una uniformidad de doctrina en los códigos dictados por las provincias y sólo falta para suprimir diferencias suprimibles y para crear una ley única que facilite el desarrollo de la vida jurídica y como consecuencia el de todas las manifestaciones civiles, comerciales y penales, que las provincias hagan efecti-

va la atribución recordada por el decreto de 1904 y que se encierra en el art. 107 de la constitución nacional.

La demostración de que la doctrina que informa a todos los códigos de procedimientos vigentes en la república, es uniforme, resulta de tener presente que casi todos ellos se han inspirado en lo fundamental, en el dictado para lo civil y comercial, por la provincia de Buenos Aires, en el año 1880. Como—, con la diferencia de San Luis y Buenos Aires, cuyos últimos códigos señalan una evidente modificación de principios y un valioso avance en el terreno de los procedimientos criminales,— ha ocurrido lo mismo que en lo civil y comercial en la codificación de los procedimientos penales, especializado este capítulo en el estudio de aquéllos, dejando sentado desde ya que todas las observaciones son aplicables también a éstos.

La provincia de Buenos Aires, al modificar su Código de procedimientos civiles y comerciales en 1905, conservó la doctrina del anterior y la mayor parte de sus disposiciones, introduciendo sólo reformas de detalle. En el distrito federal se aplica el mismo código dictado el 80 para la provincia de Buenos Aires, con las simples reformas y agregados de las leyes 4128 y 4550, sobre perención de instancia. Si bien se puso en vigencia para la capital federal sólo "hasta tanto se dicten por el congreso las que hayan de subrogarles", según lo expresó la ley de 12 de noviembre de 1886, en su art. 318, al organizar los tribunales ordinarios, por mucho tiempo todavía seguirá siendo su ley procesal la que convenía a la provincia de Buenos Aires el año 1880.

La facilidad de la unificación resulta bien clara y da el argumento que anula al pretendido fundamento de la doctrina constitucional que dejó a las provincias la atribución de dictar las leyes procesales, cuando se observa que ese código bonaerense de 1880 se aplica a la capital federal, ciudad de 186 kilómetros cuadrados y de 1.600.000 habitantes, y es, al mismo tiempo, la ley de procedimientos en los territorios nacionales, por haberlo resuelto así la ley de organización de los mismos, de 1884, en su art. 37. La capital federal, el Chaco, Tierra del Fuego, Los Andes, Santa Cruz, tienen, pues, el mismo código de procedimientos civiles y comerciales...

La ley 50, que organiza el procedimiento en lo federal, siendo del año 1863, ha servido de fuente

al código del 80 y tiene con él evidente concordancia y analogía. Por lo demás, este último es ley supletoria de aquélla por disposición legal (ley 3.981, del 31 de mayo de 1901).

Las provincias de Catamarca y San Luis dictaron sus leyes procesales, civiles y comerciales, adoptando hasta para la justicia de paz el código de Buenos Aires, de 1880. Reconocen el mismo origen y son iguales a éste en lo fundamental y detalles, el código de Salta, redactado por el doctor Luis Linares y sancionado en 1905; el de Entre Ríos, con las modificaciones propuestas en 1911 por la comisión del senado local; el de Corrientes, de 1889; el de Santa Fe, modificado en 1914. Han buscado la misma fuente y presentan las mismas características generales, el código de Mendoza, de 1895, redactado por el doctor Angel D. Rojas, y el de Córdoba, sancionado en 1894; el de Tucumán, de 1890; el de Santiago del Estero, que consta de más de 1.300 artículos y que fué dictado en 1907. San Juan, con su código reformado en 1911, y La Rioja, que adoptó en 1894 el proyecto de D. Gaspar Gómez, ofrecen un cuerpo de disposiciones substancialmente iguales al del código de 1880, con la particularidad de que el primero da la impresión de estar destinado a una capital más que a todo el territorio provincial. Como un ejemplo destaco el art. 44 que establece la obligación de evacuar todo traslado en dos días.

El código de La Rioja es el más extenso de todos y su autor declara que ha tomado especialmente del proyecto para Buenos Aires, de los doctores Alcorta y Zeballos, muchas disposiciones que, por cierto, no bastan para señalarlo como original dentro de los demás códigos. Esto lo consigue, en cambio, el código dictado para Jujuy en 1890. En efecto, las reglas de procedimientos que encierra son con escasas diferencias las mismas de los otros códigos, códigos todos parecidos, según lo he expresado y ninguno con diferencias que respondan a distintas escuelas, a diversas doctrinas, a diferentes necesidades, siquiera. Empero, la originalidad de este código está en la ridícula repetición de disposiciones que corresponden a la ley substantiva y que han sido ya dictadas en el código civil. Así entre muchos otros de igual naturaleza, el art. 887 dice: "No se admitirá demanda alguna de divorcio que no esté fundada en alguna de las causales determinadas por el código civil". Luego legisla sobre el depósito

de la esposa durante el juicio de divorcio, repitiendo el artículo de la ley de Matrimonio civil. "Admite" en los juicios de divorcio toda clase de pruebas, etc.

Si en doctrina coinciden todas las leyes de procedimientos dictadas en la república, constitucionalmente ¿es posible la unificación? No solo es posible, sino que como ya lo he recordado, el art. 107 de la constitución nacional da a las provincias el derecho de "celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia". Uno de estos fines debe ser pues la legislación del procedimiento unificado. Cumple a las provincias responder a la previsión de los constituyentes, satisfaciendo al mismo tiempo la más sentida y grave necesidad en la vida jurídica de todo el país. Ese fué el propósito del art. 107, genuinamente argentino, y su autor, Alberdi, lo hizo presente en sus "Bases".

Dando una prueba evidente de que nada obsta a la unificación del derecho procesal, la República Argentina ratificó el "Tratado de derecho procesal" concertado en el congreso de derecho internacional privado, reunido en Montevideo en 1888 y 89. Bien es cierto que es limitado el campo abarcado por ese tratado y que sólo versa sobre los puntos más importantes para las relaciones internacionales: jurisdicción, legalizaciones, cumplimiento de exhortos, fallos y sentencias.

En Europa, de las conferencias de La Haya ha salido un convenio para establecer reglas comunes relativas al procedimiento civil y sobre el mismo motivo llegaron a un tratado España y los Estados Unidos de Norte América. En cambio, las provincias argentinas, aparte de pactos sin ninguna trascendencia, la mayoría reglamentarios de la extradición de criminales y acción policial, sólo presentan un ejemplo de cumplimiento del art. 107 de la constitución. En 1856 las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero celebraron un tratado destinado a establecer un tribunal de justicia común a las provincias signatarias y que fué "aprobado" por el congreso del Paraná de 1857. Se creaba un tribunal de última instancia, con residencia en la ciudad de Tucumán, para entender en las causas civiles y criminales, formado de tantos conjucees como provincias subscribieran el tratado (art. 2o). La disposición que mayor interés presenta como antecedente y originalidad se encierra en su art. 10,

que dice: "No existiendo en el seno de las provincias asociadas, ninguna autoridad que pueda juzgar los actos del tribunal que se establece, se solicitará del soberano congreso de la nación la venia para someter por vía de prórroga de jurisdicción, que se hace desde ahora, las causas de responsabilidad contra los miembros del tribunal a la suprema corte federal".

Ese tratado fué, más que una solución, una expresión de voluntades y como tal quedó. Las provincias unidas que arrancaron al convencional Seguí, en el congreso constituyente, estas palabras: "Desde su independencia nunca fueron sino por una impropiedad de lenguaje, ni provincias unidas, ni confederación, ni república, ni otra cosa (lo diré con franqueza) que 14 pueblos aislados disconformes en todo menos en hacerse la guerra sin misericordia y suicidarse sin repugnancia", ni aun por la necesidad que siempre han sentido y que "aguza el ingenio", han celebrado tratados de la naturaleza del de 1856. Aludiendo a estas necesidades, decía ya Sarmiento en sus "Comentarios de la constitución": "Si exceptuamos a Córdoba y Buenos Aires, no hay una sola provincia que se halle en aptitud de establecer con sus propios elementos una corte de apelaciones y muchas hay, Santiago, San Juan, Catamarca, San Luis, Jujuy, que no pueden fundar un juzgado de letras y que queden abogados para defender a las partes; y aunque en el papel se escribía "habrá una corte" en el hecho resultará que hay un innoble remedo de tribunales superiores". Agrega luego: "Nosotros aconsejaríamos a San Juan asociarse a Mendoza o ambas provincias establecer su corte de apelaciones en Córdoba. Otro tanto pudieran hacer las provincias del norte entre sí, y las del litoral por otro lado, hasta dejar al país dividido en distritos judiciales".

Con mucho que el país haya progresado en todos los órdenes, no puede dejarse de admirar la solución proyectada por el gran ciudadano, así como no puede dejarse de censurar la inercia a que se abandonan las provincias en esta materia, dejando todo al tiempo y al remedio que les llega, tarde o temprano, del gobierno nacional y dejando que transcurran los años sin que una sola contribución efectiva a la obra de la perfecta unidad nacional les sea debida. Acaso llegue antes que su iniciativa la reforma de la constitución nacional en todo cuan-

to la vida del país reclama. Mientras tanto, podría el poder ejecutivo nacional reiterar el decreto de 1904 y llevar a término sus propósitos. La constitución actual lo permite, según ha podido verse, las reales necesidades de mejor justicia lo exigen y las dispersas leyes procesales lo hacen imperioso.

Unificación de jurisdicciones

Con la perfecta unificación de toda la legislación de procedimientos no quedaría resuelto el problema de una manera definitiva, sin embargo. Todo el mal estar a que he aludido tiene causas más profundas que, en resumen ya he estudiado al prohiar en páginas anteriores la unificación del procedimiento. "Si cada estado,—dice un tratadista argentino (1)— ha de tener sus tribunales propios e independientes, con sus leyes orgánicas y de procedimientos, con facultad para entender y hacer ejecutar los códigos de fondo como lo encuentren conveniente, la unidad de legislación que hemos establecido existirá sólo de nombre. En el hecho, cada región con intereses diversos, y tal vez antagónicos entre sí, se regirá por doctrinas que las jurisprudencias locales establezcan. La unidad de legislación concebida como vínculo de unión, se convertirá, al ser aplicada, en elemento de dispersión".

Es necesario hacer desaparecer las distintas jurisdicciones judiciales y para ello se requiere la reforma de la constitución nacional. ¿Qué se perseguirá? El anhelo de todo estado civilizado: alcanzar el imperturbable afianzamiento de la justicia.

"La dispersión de los tribunales, — dice R. Rivarola en su libro "Del régimen federativo al unitario", — en distintas jurisdicciones que no tienen entre sí relaciones de jerarquía, pero que se extienden sobre el mismo territorio, a las mismas personas y cosas, es causa de graves obstáculos para la pronta realización de la justicia y para fijar la interpretación de la ley. Origina, desde luego, los incidentes y las contiendas de competencia que deben excluirse como uno de los peores defectos de toda administración de justicia. Por otro lado, causa la incertidumbre respecto del sentido de la

(1) S. de la Colla. "Derecho y legislación procesal".

ley, que recibe, como también ha ocurrido con frecuencia, las aplicaciones más opuestas.

Y bien: no se trata de detalles más o menos transitorios. Con el sistema actual está trabado el completo desarrollo del país en sus múltiples aspectos. Ya no tienen razón de ser la diversidad de poderes judiciales, federal y provinciales. La absorción de las administraciones judiciales locales por una justicia federal, tiene que recibir su consagración en la primera reforma constitucional que se opere. El más evidente síntoma de la evolución que culminaría en esta reforma, lo ofreció el mensaje del poder ejecutivo nacional, remitiendo al congreso el proyecto del ex ministro de relaciones exteriores, doctor Luis M. Drago, tendiente a someter a la justicia federal el conocimiento de las causas correccionales o criminales en que un extranjero sea parte, ya que, según lo expresa el referido mensaje, la función de juzgar debe estar a cargo de quien se obliga a responder por ella.

En el terreno doctrinario también ha tomado cuerpo la idea de refundir la organización judicial de la república. La planteaba el doctor Julio P. Acuña,—en su carta a "La Montaña", de Catamarca, en 1906, — según el cual la justicia debería ser administrada en todo el país por tribunales cuya organización y procedimientos determinaría el congreso nacional.

El doctor Rivarola, — a quien he citado, — ha sostenido también que en la capital federal deben unificarse las jurisdicciones federal y ordinaria, pues ese ha sido el espíritu de la constitución nacional. Parte de la base de que la única incompatibilidad aparente nace del art. 34 de la constitución nacional, que dice: "Los jueces de las cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincias", y hace constar que no existe tal incompatibilidad y que ese artículo se refiere al principio de separación de los poderes nacional y provincial y fué agregado por la convención de 1860 para evitar trastornos en las administraciones judiciales. Dentro del artículo 94 de nuestra constitución, transcripto en la página 10, y el 27, que autoriza al congreso a "ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la capital de la nación", encuentra la posibilidad de que sea una realidad la unificación de ese dis-

trito, de los fueros federal y ordinario. Este último, en concepto del Dr. Rivarola, no debió ser creado por la ley del congreso, pues no cabe dentro de la constitución.

De la robusta argumentación del Dr. Rivarola nace el convencimiento de que el congreso debe, ajustándose estrictamente a la constitución nacional, volver sobre sus pasos y realizar la ansiada unificación. No terminaría ahí, tampoco, el problema. Como lo he expresado, considero que deben suprimirse las administraciones judiciales de las provincias y reemplazarse con una organización del poder judicial federal, que llene a la vez la función política que le ha sido encomendada a los tribunales superiores de provincia y la misión de distribuir justicia aplicando las leyes dictadas por la nación y las provincias de acuerdo con la atribución de legislar que la constitución les confiere dentro de la delegación de poderes. Es evidente, desde luego, que para que pueda ser un hecho esa organización judicial es ineludible la reforma de la constitución. ¿La aceptaría el país?

Reforma de la constitución para implantar el poder judicial unitario

"Uma sabia constituicao politica nao se deve presumir eterna. Todas as leis sao proficuas, emquanto correspondem as condicoes que vieram regular. Devem todas variar com a evolucao das sociedades a cuja actividades presidem". Así expresaba Assis Brasil (1) la necesidad de que la ley no sea inmutable, que acompañe la evolución del motivo legislado. Nunca más aplicable el concepto que al estudiar nuestra constitución en 1853 y la situación actual de la república. Y ya que debo tratar la reforma de aquella ley de las leyes, llevaré la cuestión al terreno constitucional y trataré de apoyar en argumentos irrefutables la opinión que me he formado sobre la evolución del país en su vida práctica, hacia la tendencia unitaria. En mi concepto, la forma más convincente de probar ese abandono de los principios federales surge del estudio de las relaciones del gobierno nacional en con las provincias. El respeto a la

(1) "Do governo presidencial".

autonomía de éstas y el convencimiento de que era un principio aceptable movió a los convencionales a reservar a las provincias la atribución de organizar sus poderes judiciales y dictar sus leyes de procedimientos. Demostrado que se adoptó un principio que después de medio siglo de vida constitucional ya resulta inapropiado y peligroso, sólo basta saber si por el mismo respeto a la autonomía de las provincias debe mantenerse, a pesar de todo, aquel principio o, si por el contrario, las provincias han hecho renuncia de sus derechos, han perdido el celo con que se protegían. Entonces habrá llegado el momento de la reforma a que aludo.

"Hemos observado, en todos los ejemplos de federaciones antiguas y modernas, la tendencia poderosa de despojar al gobierno general de sus facultades, así como muy ineficaz capacidad por parte de éste para defenderse contra tales despojos", decía Santiago Mádison desde las páginas de "El Federalista", defendiendo la organización federal y la distribución de los poderes adoptada por la constitución de los Estados Unidos de Norte América. La federación argentina es hoy una de las tantas excepciones a la regla que surge de los ejemplos mencionados por el eminente autor, pues si durante medio siglo cada uno de los "estados" que la forman cuidaron con más o menos celo su autonomía y restringieron en toda forma el poder que luego habrían de delegar a la nación, al organizarse ésta los convencionales del 53 consistieron en renunciar a una gran parte del poder que, hasta entonces, juzgaban privativo de las provincias cuyo mandato representaban. Dieron así el primer paso de una notable evolución que, teniendo su origen en el más cerrado federalismo, ha de llegar a asumir todos los caracteres del más estricto unitarismo.

Las renunciaciones parciales a la autonomía que el pasado y la constitución vigente reconocían a las provincias, tienen su más alta manifestación en los avances que, aprovechando interpretaciones arbitrarias de textos expresos de la ley, ha realizado el gobierno nacional sobre cada una de las provincias. Con el sistema político que esa jurisprudencia en materia de "intervenciones federales" ha creado, se burla el precepto legal, se finge un federalismo ridículo, y lo que es peor: "la primera vez que tuviéramos un mal hombre por presidente, tentaríanle de seguro estas favorables circunstancias para

imitar a los Napoleones y hacerse el amo del país" (1).

Si el país no quiere ya el régimen federal que la constitución establece, como lo demuestra la marcada evolución que revela la vida política del mismo y el abandono por las provincias del cuidado de sus autonomías, no deben mantenerse preceptos que han sido dictados para ser observados irrefragablemente. "Si los hechos capitales que reclaman la opinión del país, consisten en el desconocimiento de los gobiernos provinciales por el federal, a lo que se sigue necesariamente las elecciones libres y las situaciones legales y estables, renunciemos desde ya a un federalismo absurdo y adoptemos el régimen unitario que nos permitirá llevar directamente a todas las provincias esa mano benéfica del poder central, encargada de sanarlo todo, como la "mano santa" del personaje popular" (2).

Empecemos, por lo menos, por implantar una organización judicial que ayude, más que acompañe el creciente desarrollo de la república. Nuestro país, ha tenido siempre una pléyade de "hombres guías" que fueron invariablemente superiores al medio en que actuaban. Como un ejemplo traigo el recuerdo de los eminentes estadistas que produjeron la constitución argentina de 1826, malograda con sangrienta injusticia por quienes no querían aceptar el imperio de la ley y del orden. Aquella constitución semi-unitaria, semi-federal, que organizaba en las provincias un "consejo de administración" elegido "popularmente por nombramiento directo", en la misma forma que los diputados al congreso nacional y que disponía para la designación de gobernadores, que estos serían nombrados por el presidente de la república a propuesta en terna del "consejo de administración" creaba un poder judicial absolutamente unitario. El art. 110 decía: "El poder judicial de la república será ejercido por la alta corte de justicia, tribunales superiores y de más juzgados establecidos por la ley". Luego disponía para la designación de los miembros de la corte el nombramiento por el presidente de la república "con noticia y consentimiento del senado". Además con notable espíritu previsor determinaba que se crearía un "tribunal superior", — de segunda instancia, — "en las capitales de aquellas provincias que la le-

(1) Nordhoff "Política de los jóvenes americanos".

(2) Don Agustín de Vedia "Tribuna", 1893.

gislatura (El congreso nacional) juzgue conveniente atendidas las ventajas de su situación geográfica, población y demás circunstancias".

Para la designación de los miembros de los "tribunales superiores" se adoptaba el mejor de todos los sistemas: el nombramiento por el presidente de la república a propuesta en terna de la alta corte de justicia". (Artículo 139).

Considero que atendiendo a la evolución política que el país ha sufrido y a las necesidades actuales y futuras, la solución ideal del problema que hoy plantean los diversos códigos de procedimientos y las diversas jurisdicciones "federal, provincial y mixtas", está en la adopción de la misma organización judicial creada por la constitución de 1826. Con ello se obtendría la simplificación de la administración de justicia y la supresión de las cuestiones sobre competencia y jurisdicción que, en casos por desgracia diarios, prolongan los juicios, arruinan o perjudican a los litigantes y dejan sin que se aplique al fin la rápida sanción que la ley crea. Con esa organización judicial la legislación de fondo única para toda la república, sería bien uniformemente aplicada, sin que quedara a merced de las jurisprudencias varias e inseguras de los tribunales autónomos de provincia y se obtendría, también, una exacta distribución del trabajo. Es un hecho comprobado y anotado que, por lo general, mientras los tribunales provinciales por razón de jurisdicción legal y no por cierto de prestigio, están abarrotados de trabajo, los tribunales federales tienen un movimiento relativamente escaso. Habrían desaparecido entonces las enojosas e irresolubles cuestiones que surgen cuando es difícil precisar el límite de la ley de fondo y el de la ley adjetiva y al hacerse la nación, responsable dentro y fuera de sus límites territoriales de la decisión de sus tribunales judiciales, sería un hecho la garantía de todos los derechos civiles, cuidadosamente amparados por la constitución.

Como una consecuencia de la adopción del sistema de la constitución del año 26, la población no tendría que agruparse en los centros de más segura justicia, sino que ésta, igual para todos ampararía con el mismo celo al extranjero, en las pequeñas poblaciones de provincia, que al argentino en la gran capital de la república.

Proyecto de organización judicial para la república argentina

I.—Suprema corte de justicia. — Exactamente igual a la existente, pero con la superintendencia sobre todos los tribunales inferiores.

II.—Tribunales superiores. — De tres miembros, con la jurisdicción de las actuales cámaras federales y con las que actualmente tienen los supremos tribunales de justicia, en las provincias.

III.—Jueces de sección. — Cuyo número, lo mismo que el de los tribunales superiores, sería fijado de acuerdo con las necesidades reales de cada territorio.

IV.—Jueces de paz y alcaldes. — Designados por los tribunales superiores, con la jurisdicción que actualmente se indica por leyes locales, para la justicia menor.

Todos los cargos serían rentados y sus sueldos, fijos y mantenidos como lo indica la constitución nacional vigente, deberían ser determinados para todos los tribunales inferiores por la suprema corte, de acuerdo con las exigencias de la vida del juez en el territorio en que actuare.

Los impuestos de justicia se dejarían, — en contra de lo que resulta del actual régimen financiero de la constitución, — para el tesoro nacional. Nacería de allí otra ventaja del sistema. La insuficiencia de los recursos provinciales no se traduciría en jueces malos y amovibles y en mala y lenta justicia.

Conclusiones

I.—Debe procederse inmediatamente a la unificación de las leyes de procedimientos.

II.—Debe federalizarse (conviene emplear la palabra) toda la justicia, suprimiendo las administraciones judiciales de las provincias.

III.—Considero que el mejor sistema judicial que puede adoptar la república es el creado por la constitución de 1826.

A. de Vedia.

Del doctor A. N. Matienzo

Buenos Aires, noviembre 4 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados, doctor don Roberto Parry.

En contestación a su nota de agosto 6 del corriente año, sobre reformas a las leyes procesales, tengo el agrado de remitir al señor presidente el adjunto folleto, de que soy autor, y en el que he expuesto mi opinión respecto al punto segundo de la encuesta.

Al expresar al señor presidente mi adhesión a la importante tarea que se ha impuesto, proyectando reformas en materias que hace ya tiempo las reclaman, me es grato ofrecerle las seguridades de mi mayor consideración.

Agustín N. Matienzo.

La ley de quiebras y la justicia federal

Entre las muchas modificaciones que se proyectan para la reforma de la ley de quiebras, ninguna se refiere a los tribunales que deberán entender en esta materia.

Actualmente es la justicia provincial la que tiene su conocimiento, por mandato expreso de dos leyes, que se dictaron en los años de 1863 y 1878. Estas leyes son absolutamente inconstitucionales, siendo menester entonces, modificar la jurisdicción vigente, para entregar a la justicia federal, lo que le corresponde por declaración de la carta fundamental; fuera de que ya es clamor, la protesta contra la justicia tan mala que administran los tribunales de las provincias, salvo muy pocas y honrosas excepciones (1).

(1) No me refiero a la justicia ordinaria de la capital federal, que por la forma de nombramiento de sus magistrados y la localidad en que residen, ha merecido en cierta oportunidad, ser objeto de un proyecto de nacionalización. Pero en cuanto a las provincias, bástenos citar por vía de ejemplo, que en estos momentos, toda la justicia de Mendoza se halla pendiente de un juicio político; la de Santiago del Estero sigue el mismo camino; y que en Buenos Aires, el poder ejecutivo coarta la independencia del poder judicial haciendo los nombramientos de secretarios y demás personal de los juzgados letrados.

Y urge esta reforma, porque dado el carácter inmigratorio de nuestro país, tanto en personas como en capitales, una buena justicia, importaría la realidad de los derechos y garantías que la constitución ofrece a cuantos quieran habitar el suelo argentino, y sería el estimulante de una más provechosa inmigración.

Interésanos ahora, conocer nuestros antecedentes legislativos en esta cuestión de la justicia y las quiebras, que aun cuando no son abundantes, ofrecen la oportunidad de apreciar la poca atención con que los poderes públicos tratan esta clase de problemas.

]

En el año de 1862 se adoptó como ley nacional, el código de comercio que se hallaba vigente en la provincia de Buenos Aires, y cuya última parte legislaba sobre la materia de quiebras.

El artículo 30. de la ley de adopción "autorizaba a los poderes de las provincias para dictar las medidas que convinieren a fin de que todas las disposiciones del código fueran ejecutables, ya que por la composición de sus respectivos tribunales o juzgados mercantiles, podrían no serlo." Los jueces de provincia iban, pues, a conocer en todas las materias del código, inclusive quiebras y derecho marítimo, por no haberse establecido en ese entonces los tribunales de justicia federal, ordenados por la constitución en el artículo 94.

Pero en el mes de octubre del mismo año, se sanciona la ley número 27 (1), que organizó el poder judicial de la nación, tratando en su capítulo 10., artículo 7 del 20. y 20 y 21 del capítulo 30, de la competencia de la suprema corte y de los juzgados de sección.

Era el caso entonces, de que los tribunales provinciales dejaran de actuar en los asuntos que por razón de la materia y de las personas, correspondían a la justicia federal, ya que así lo disponían los artículos 100 y 101 de la constitución y la nueva ley, que no hacía sino repetir las disposiciones de la carta funda-

(1) Esta ley estaba basada en la que se dictó el 6 de septiembre de 1858, durante la presidencia del general Urquiza, con la diferencia que la ley de confederación fué más completa, puesto que creaba también las cámaras de distrito que corresponden a las que actualmente se llaman de circuito.

mental. Sin embargo, no sucedió tal cosa; los tribunales de provincia siguieron entendiendo en ellos, como también en los concursos de acreedores, con el beneplácito de las autoridades nacionales, que aceptaban tal anomalía por razones de estrecho localismo.

Y para confirmar los hechos, y estar de acuerdo con el espíritu de los dirigentes de la época, la suprema corte formuló seis proyectos sobre justicia nacional, so pretexto de aclarar las disposiciones de la ley del año de 1862.

El primero de esos proyectos torció la prescripción constitucional, y fué la base de la interpretación errónea que se dió a algunas de las materias indicadas en el artículo 100. Se le llama la ley 48, ley que confirió a los tribunales de provincia competencia en los concursos universales de acreedores, por medio de su artículo 12, inciso 1o., concebido en estos términos: "En todos los juicios universales de acreedores y participación de herencia, conocerá el juez competente de provincia, cualquiera que fuese la nacionalidad o vecindad de los directamente interesados en ellos, y aunque se deduzcan allí acciones fiscales de la nación."

El artículo pasó sin observación, pero, discutiendo algunas dudas expuestas respecto a otras disposiciones del proyecto, el doctor Benjamín Gorostiaga sentó la siguiente doctrina (1): "El congreso puede perfectamente, decir cuáles sean los asuntos de la competencia federal que decidirán los tribunales de provincia. En estos casos habrá jurisdicción apelada porque está en las facultades prescriptas por la constitución, prefiar las excepciones de esa regla general. Puede, por ejemplo, el congreso determinar que los asuntos que no pasen de tal cantidad, aun cuando por su naturaleza sean de la competencia de los tribunales federales, que queden bajo la jurisdicción de la provincia. Esta es una disposición que existe en la ley orgánica de los Estados Unidos". En esta forma, el doctor Gorostiaga manifestó su opinión favorable al proyecto que tan inconstitucionalmente despojaba de jurisdicción a los tribunales federales. El doctor Quintana desconoció el derecho que se le confería al congreso para someter a la jurisdicción provincial asuntos que por la constitución, correspondían a la jurisdicción nacional.

Tal vez las palabras del doctor Gorostiaga fueron fundamento suficiente para no entrar a discutir la constitucionalidad del artículo sobre los concursos de

(1) Sesión del 5 de agosto de 1863 de la cámara de diputados.

de la que me ocuparé más adelante, y que, como se acreedores: lo que hace necesario analizar esa opinión veré, tuvo mucho éxito y partidarios en la legislación de esta materia.

No obstante las disposiciones terminantes de la ley, la suprema corte de justicia nacional hizo distinciones sutiles entre el juicio de *quiebra ya declarada* y el del *pedido de declaración por un acreedor*, para resolver que: "el juez de comercio era incompetente para conocer en el juicio que un argentino intentara contra un extranjero para hacerle declarar en quiebra, si éste reclama la jurisdicción nacional para juzgar sobre la deuda que demanda el actor" (1).

¿Creyó acaso la corte demasiado fuerte despojar a los extranjeros del derecho que la constitución les acuerda, y por eso declaró de jurisdicción concurrente el pedido de quiebra que en semejantes circunstancias hiciera un acreedor?

Lo cierto es que, para no dejar lugar a dudas ni a interpretaciones judiciales como la que acabo de transcribir, se sancionó en el año de 1878, la ley número 927, adicional a la de jurisdicción federal, proyectada por los diputados Cáceres, Gallo y del Barco (2).

Categorica y exclusivamente dispuso en su artículo segundo que el conocimiento del juicio universal de acreedores, corresponde a los jueces respectivos de aquella provincia en la que el fallido tuviera su principal establecimiento al tiempo de la declaración de quiebra.

Los fundamentos del diputado Cáceres no se refirieron especialmente a este asunto: adujo la necesidad de unificar el juicio de quiebra, y en consecuencia, que un sólo tribunal en el país, entendiera en ellos; declaró que la jurisdicción que la constitución confiere a los tribunales federales es simplemente facultativa para que de allí tome lo que crea conveniente, interpretación que está de acuerdo con la teoría norteamericana que en la ley de 1879 dió a las cortes de circuito jurisdicción en los pleitos que excedieran de 500 dólares, aun cuando las personas fueran de distinta vecindad o extranjeros; agregó que la constitución argentina había copiado literalmente de la de los Estados Unidos, las disposiciones sobre el poder judicial, y que por lo tanto debía darse a sus prescripciones la interpreta-

(1) Fallos de la suprema corte de justicia nacional, tomo X, página 397.

(2) Sesiones de la cámara de diputados, días 11 de julio, 10. y 6 de agosto del año 1877.

ción anterior, que también la enseñaba Kent, y que Gorostiaga había sostenido en la discusión de la ley de 1863.

El diputado Pedro Uriburu expresó sus dudas sobre la constitucionalidad del proyecto, manifestando que la jurisdicción conferida a los tribunales federales en los casos de los artículos 100 y 101 no era meramente facultativa, sino declarativa, pues la constitución determina a todo poder las facultades que tiene y las funciones que debe llenar, por lo que entendía que todos los asuntos que versaran sobre puntos regidos por la constitución tienen necesariamente que ser sometidos a la jurisdicción federal, encontrándose en este caso el juicio de bancarrota.

Y sin embargo, el diputado Uriburu, con tan acertada teoría, "abdicó de su propio juicio para seguir la opinión del doctor Gorostiaga" y votar en favor del proyecto.

Los diputados Martín Ruiz Moreno, Carlos Salas y Luis Lagos García, no estuvieron de acuerdo con los artículos primero y segundo, que mermaban la importancia de la justicia federal, con disposiciones inconstitucionales.

El señor Ruiz Moreno encontraba claros los artículos de la constitución y negó al congreso la facultad que se atribufa para quitar a los tribunales federales el conocimiento de los asuntos en que intervinieran extranjeros. El doctor Salas concordó en opiniones con el diputado anterior, demostrando con los mismos comentaristas citados por el diputado Cáceres, que el congreso no podía despojar al poder judicial de parte alguna, excepto en tribunales inferiores dispuestos y establecidos por él.

El doctor Lagos García recordó el antecedente norteamericano sobre la jurisdicción federal en materia de bancarrota, observando la inconveniencia del artículo segundo que se proyectaba, por el que catorce tribunales superiores de provincia iban a dar resoluciones definitivas en los diversos asuntos de la quiebra, impidiendo la jurisprudencia sobre los puntos dudosos, y la imposibilidad de saber cuál es el derecho de las partes y cuál sería la resolución final en cada caso: no sucede esto en los Estados Unidos, por ser única la jurisdicción que entiende en los concursos de acreedores, es decir, la que deriva de la justicia federal.

El doctor Amancio Alcorta reconoció también que en Norte América la unidad de las quiebras se producía porque la ley había conferido jurisdicción a los tribunales federales, indicando cuál de sus jue-

ces debía conocer en la materia, pero aceptó que el congreso tuviera derecho para conceder jurisdicción a cualquier autoridad y en cualquier forma.

En la cámara de senadores (1), el señor Luis Cortés, miembro de la comisión de legislación, aconsejó la aprobación del proyecto, haciendo suya la opinión del doctor Gorostiaga que sintetizó en las siguientes palabras: "El congreso no está obligado a conferir a los tribunales federales toda la jurisdicción de que habla la constitución, sino que antes bien, puede limitarla, confiriéndole solamente una parte de ella". Expuso los argumentos y antecedentes aducidos en la otra cámara por los partidarios del proyecto, a los que agregó algunas razones de pequeña economía, en favor de los litigantes que debían recorrer grandes distancias para ocurrir a los juzgados de primera instancia. La doctrina sustentada por el doctor Gorostiaga fué la que impuso el proyecto a la cámara, pues el senador Cortés manifestó que sólo en razón de ella, "la ley del año 1863 había podido conferir a los tribunales provinciales jurisdicción en los concursos de acreedores, pues estando reservado al congreso dictar la ley sobre bancarrota, y correspondiendo según la constitución a la justicia federal el conocimiento de los asuntos regidos por las leyes nacionales, se tendría que si los términos de la constitución se hubiesen interpretado en diverso sentido que el expuesto, serían los jueces federales, quienes necesariamente debieran conocer en los juicios de concurso".

Con algunas enmiendas de detalle se sancionó la ley, que subsiste en la actualidad, y por cuya virtud, los tribunales de provincia entienden exclusivamente en los juicios de concurso de acreedores, sin que ya nadie les discuta tal derecho. Estaría demás agregar, que la suprema corte de justicia nacional, uniforme y reiteradamente, fuera del caso ya citado, ha sentado jurisprudencia inconvencible sobre la materia, de acuerdo con las prescripciones respectivas de las leyes de 1863 y 1878.

II

Expuestos estos antecedentes, voy a sostener que las leyes del 63 y 78 son inconstitucionales, porque el congreso no tenía, ni tiene facultad para entregar a los tribunales de provincia, el conocimiento

(1) Sesión del 15 de junio de 1878.

de asuntos que por razón de la materia y por razón de las personas, competen exclusivamente a la justicia nacional, en mérito a lo prescripto por el artículo 100 de la constitución de nuestro país.

Los autores argentinos de derecho constitucional han descuidado completamente el estudio de los problemas que encierra la administración de justicia; no es tema que les interese. Solamente el doctor José Nicolás Matienzo (1), ha señalado estos cercenamientos indebidos al poder judicial de la nación, indicando que con otros asuntos, la materia de quiebras corresponde a la jurisdicción federal; ha puesto de relieve todos los inconvenientes de la justicia provincial y finalmente, ha propuesto el medio de corregir el error que sancionaron tan inconsistentemente los legisladores de aquellos años, y que consistiría en derogar las leyes del 63 y 78.

Fuera de esta opinión, la cuestión no se ha debatido; sin embargo, los hechos consumados se han respetado y hasta defendido; por otra parte, el tiempo, la costumbre y la jurisprudencia han hecho olvidar tanto error, para darles más estabilidad que a las leyes mejor informadas.

Es claro que de esta manera, los defensores deben sostener que la constitución es la equivocada, que las cláusulas constitucionales no han sido adopción inteligente de la constitución de los Estados Unidos, que el espíritu de la nuestra ha sido encerrar la legislación de bancarrotas dentro del código de comercio, y que la reserva del artículo 67, inciso 11o., abarca también a la materia de quiebras; todo esto, sin contar la doctrina del doctor Benjamín Gorostiaga.

Ante un cúmulo tal de argumentos, es indispensable demostrar que la ley de bancarrotas es una ley general para toda la nación, habiendo sido la mente de los constituyentes independizarla del código de comercio y de la reserva del artículo 67, inciso 11o.; que ha habido razones para que la justicia federal conociera de ella, y que el congreso no podía entregarla exclusivamente a los tribunales de provincia.

Para el doctor Montes de Oca (1), no se explica satisfactoriamente que la constitución confiera al congreso la atribución especial de dictar

(1) "Gobierno representativo federal", página 317 y siguientes: "Ampliación de la justicia federal".

(1) Manuel A. Montes de Oca, "Derecho constitucional", página 247 del tomo II.

la ley de bancarrotas, cuando ya le había conferido la más extensa y comprensiva, de dictar el código de comercio: cree que se ha incurrido en un pleonismo, y que esta cláusula no tiene objeto en la constitución argentina, no así en la de los Estados Unidos, donde la atribución de los poderes centrales en cuanto a la bancarrota, importa una restricción bien concedida a la libertad de los estados para dictar sus códigos.

En estas opiniones, el autor citado, confunde a mi modo de ver, los conceptos "código" y "legislación". El concepto de "legislación" es siempre más amplio que el de "código". Comprende no solamente a éste, sino también a todo cuanto se disponga sobre la misma rama del derecho. No es necesario que para que se llame código a un conjunto de disposiciones sistemáticamente ordenadas, deba ese cuerpo de legislación abarcar siempre el mismo número de determinadas materias: Suiza, por ejemplo, tiene un código exclusivamente sobre "obligaciones". De modo, pues, que aún cuando las bancarrotas no estuviesen legisladas en nuestro código de comercio, éste no dejaría por ello, de revestir tal carácter. Si bien es cierto que los constituyentes emplearon ese término, no limitaron su alcance, y en todo caso excluyeron las quiebras, por el solo hecho de disponer especialmente sobre ellas.

Si debiéramos aceptar la opinión del doctor Montes de Oca, la ley de quiebras no podría pertenecer a la justicia federal, por razón de la materia, pero siempre, quedaría entre los asuntos que pueden corresponderle, por razón de las personas.

Pero no es así el espíritu de la constitución: es legislar especialmente sobre la bancarrota, y poco importa que luego el congreso la incluyera en el código, que fué copia del francés, origen de todos los sancionados en los países latinos. Esta inclusión no cambia en nada el aspecto del asunto, puesto que también otras materias fueron encerradas en el mismo código, y sin embargo conservan la jurisdicción que la carta fundamental les ha señalado: es el caso del derecho marítimo.

Obsérvese que Alberdi encareció la necesidad de conferir al congreso nacional poder para "legislar" en materia civil, comercial y penal, sin incurrir en el error de decir códigos. Con la palabra legislar,

abarcaba todo cuanto puede disponerse sobre derecho, y el congreso podía más tarde, por comodidad, designar con el término código a toda la legislación, sin que ésto implicara hacerle perder el carácter de ley especial a la de quiebra, por habersele sometido materialmente a ese título.

En la actualidad, la última parte de nuestro código de comercio legisla sobre bancarrotas; sin embargo, todos la conocen como la ley de quiebras o la ley 4156; independizándola así del cuerpo de legislación en que se le ha colocado, y dándole por consiguiente numeración propia a sus artículos. Pareciera que la práctica ha venido a salvar el error, atribuyéndole la verdadera importancia que la constitución concede a la materia.

En otros países ha sucedido lo mismo: Francia, Italia, Bélgica, España, Grecia, Dinamarca, Suecia, Holanda, Uruguay y Brasil, disponían en sus códigos de comercio sobre la materia que estudiamos pero las frecuentes reformas, por leyes especiales, han acabado por constituir de la bancarrota, una legislación independiente.

En Inglaterra y Estados Unidos la ley de quiebras es también especial, porque la codificación no es el sistema, pero en cambio en Alemania, Austria Hungría, Suiza, Rusia, Noruega y Perú, donde existen los códigos, la bancarrota ha sido legislada enteramente por separado.

Este estado de la legislación moderna hace honor a la constitución argentina, que, ya en el año de 1853 al indicar como facultad especial del congreso la de dictar la ley de bancarrotas para toda la nación (art. 67 inc. 11o.), se había adelantado al progreso de la legislación universal.

Las palabras de Alberdi tuvieron su influencia en esa ocasión: "Si el poder de legislar sobre bancarrotas (inherente a la legislación comercial y penal), no estuviese exclusivamente en manos del gobierno general, cada legislatura de provincia entendería y castigaría, o no, el fraude a su modo. Una provincia indulgente y laxa en su legislación de quiebras sería refugio inviolable de los deudores dolosos pertenecientes a otra. En los tratados de las naciones extranjeras, la república no podría estipular garantías de reciprocidad para guardarse de los efectos de las bancarrotas, ni prevenir las represalias que un estado extranjero tuviese que poner en ejercicio contra la indulgencia hostil

de una provincia de la confederación a su respecto. Un comerciante declarado fraudulento en una provincia, con sólo trasladarse a otra, quedaría rehabilitado". (1).

Al decir solamente de las bancarrotas, y no de las otras materias de la legislación comercial o civil, Alberdi tuvo razón. Las leyes sobre quiebras tienen una importancia suma; con sus disposiciones modifican, alteran, suprimen, suspenden, todos los principios sancionados en los códigos civil y comercial sobre los derechos de las obligaciones y los modos de extinción de las mismas. Es una "ley de excepción", que llegado el caso, cambia todo un régimen normal de las cosas, para someterlo a una legislación que reposa en principios de más humanidad y de más equidad.

Y agréguese a esto, que el carácter progresivo y universal del derecho comercial, sobre todo de las quiebras, si las tomamos en este concepto, impide la codificación de tantas materias, que casi a diario se modifican, dejando en atraso a los códigos, por la movilidad constante de la vida del comercio.

La codificación de disposiciones que responden a un plan único y deliberado y sancionado en un solo acto, tiene el inconveniente, entonces, de oponerse a la adopción inmediata de los principios nuevos de la legislación, adopción, que sólo se obtiene con el sistema de las leyes especiales, que pueden recopilarse y revisarse periódicamente, como ha hecho Bélgica, con su código de comercio revisado, y Estados Unidos con los códigos penal federal de justicia federal.

La legislación por separado, de las bancarrotas, ha tenido, pues, su razón de ser. Los mismos fundamentos que los norteamericanos tuvieron para prestar tanta atención a esta materia pueden aceptarse para sostener nuestra cláusula constitucional.

Story (2), después de analizar los principios generales a que obedece toda ley de quiebras, considera que la razón particular que ha dado al congreso poder para dictar una ley para toda la nación, es la importancia de preservar la armonía, promoviendo

(1) J. B. Alberdi, "Obras completas. Elementos de derecho público provincial argentino", tomo 5, pág. 11.

(2) Story on the constitution, tomo II, p. 1107 y siguientes. 4.ª edición, 1873.

justicia y asegurando la igualdad de derechos y alivios a los ciudadanos de todos los estados. Las diversas legislaciones de éstos cambiarían las condiciones de las personas, porque las preferencias, privilegios y penas nada serían en otra parte. Existe también el peligro de los políticos que consultando sus propios intereses y buscando popularidad, juzgarían las leyes con un estrecho sistema de preferencias locales, en vez de comprender en sus disposiciones a los acreedores de otros estados, para darles una perfecta participación en la fortuna del fallido. En cuanto a la territorialidad de las leyes estatales, agrega Story, que no la tienen más que dentro de sus propios límites, lo que favorecería a los fallidos, no así a los rehabilitados, quienes en unas partes tendrían tal carácter y en otras no. Deben también agregarse las razones poderosas desde el punto de vista del comercio y del crédito, que podrían perjudicarse con las legislaciones diversas, y a veces tan inconsultas, de los diferentes estados. El mismo autor asegura que, uno de los perjuicios que más pesan sobre las situaciones comerciales, manufactureras e intereses agrícolas, en la época en que escribía, era la falta de una ley nacional de quiebras.

Más o menos en el mismo sentido se expresan Kent, Marshall, Pomeroy, Black, Willoughby y Hughes.

Había, pues, motivos de sobra para que la constitución confiriera al congreso nacional poder especial para dictar leyes generales sobre bancarrota, independientes del código de comercio, y no ha habido equivocación de los constituyentes argentinos al establecer una cláusula igual a la de la constitución de los Estados Unidos. La adopción se ha hecho inteligentemente, estimando que las razones que tuvieron los norteamericanos para no entregar a los estados la legislación de quiebras, ni su aplicación por los tribunales locales, existían también en nuestro país, ya que en todas partes del mundo, una buena ley sobre bancarrota, debe obedecer siempre a los mismos principios, y tener la importancia capitalísima que en los Estados Unidos se le ha atribuido.

Tenemos entonces que, la ley de quiebras es una ley nacional con todos los privilegios de las leyes de esta categoría que no están sometidas a reserva alguna. Debemos ahora considerarla por razón de la materia o sea como ley nacional, para establecer

a qué clase de justicia corresponde entender en estas leyes; pero no debemos olvidar que el carácter, la nacionalidad y la distinta vecindad de las partes que intervienen en el juicio de concursos de acreedores, hacen que tengamos en cuenta las personas, que también dan origen a distinta jurisdicción.

Nuestro sistema federativo de gobierno ha tenido necesidad de crear una nueva justicia: la federal o nacional, justicia de la constitución y de las leyes y tratados sancionados bajo su autoridad; esencial para la paz y armonía de la nación, que previene también, las posibles colisiones entre las provincias, y coopera en la obra ordenada y progresiva del gobierno, con la última interpretación de las leyes del país.

Alberdi (1), explicando la necesidad de establecer la justicia federal, escribió las siguientes palabras: "La constitución, las leyes y los decretos del gobierno nacional, los tratados de la república con las naciones extranjeras son leyes supremas o nacionales, cuya interpretación y aplicación exige una autoridad judicial de carácter y potestad nacionales o suprema también como esos estatutos. La aplicación de leyes que representen el interés de toda una nación no podrá encomendarse, sin grandes peligros de injusticia y parcialidad, a tribunales y juzgados de provincia, sin responsabilidad ante el gobierno nacional, que no los ha nombrado ni puede remover, y sin responsabilidad ante la república, cuya soberanía judicial no ejercen".

"Para que las leyes nacionales sean interpretadas imparcialmente, se necesitan jueces del mismo carácter, delegados de toda la nación, no de una provincia, nombrados y costeados por toda la república, y responsables según sus leyes, ante sus autoridades. De aquí, la necesidad de una jurisdicción o competencia nacional, fuera de la jurisdicción y competencia de provincia".

Esto en materia de leyes orgánicas o nacionales y tratados, pero la constitución también indica que la justicia federal entiende en todas las causas en que la nación sea parte, de las causas entre los vecinos de diferentes provincias o de un argentino contra un extranjero.

La experiencia ha demostrado la poca confianza que inspiran los tribunales locales a los extranjeros,

(1) Alberdi, Derecho público provincial argentino, tomo V, página 21. Obras completas.

o a los vecinos de otras provincias. A los vecinos de distinta localidad se les ha tratado como extranjeros o enemigos, aún cuando la constitución trate de garantizar a los habitantes de cada provincia todos los privilegios e inmunidades de ciudadanos en la república entera.

Los extranjeros han sufrido las mismas consecuencias con el agravante de que en esta forma se ha complicado a la nación en cuestiones internacionales, como ha sucedido ya varias veces.

Como los derechos y garantías dependen totalmente del espíritu de los tribunales y de su capacidad para hacer efectivas las declaraciones constitucionales, no es, pues, posible dejar en manos de justicia de tan poca confianza la verdadera interpretación de aquéllas.

Lo mismo ha sucedido en los Estados Unidos, y así lo enseña Curtis (1) al explicar la inclusión de la jurisdicción "*ratione personae*" en el poder judicial de la nación, por cuanto sus casos pueden afectar la paz y la armonía nacional. Y Hamilton en "*El Federalista*" (2), que bien claramente ha dicho: "La paz del "todo" no debe ser dejada a la disposición de una "parte". La Unión será indudablemente responsable hacia las potencias extranjeras de la conducta de sus miembros. Y la responsabilidad de un daño debe siempre ir acompañada de la facultad de prevenirlo. Como la denegación de justicia o su violación por las sentencias judiciales, como por cualquier otro medio, es clasificado con razón entre las justas causas de guerra, se sigue que los jueces federales deben conocer de todas las causas en que los ciudadanos de otros países estén interesados".

Las referencias anteriores son suficientes para justificar la necesidad de que el poder judicial de la nación entienda en dos clases de casos: "por razón de la materia",—constitución, leyes, tratados almirantazgo y derecho marítimo, en los que el objeto del juicio da la jurisdicción, sin tener en cuenta el carácter de las partes; "y por razón de las personas", — nación, provincias, ciudadanos de distinta vecindad, extranjeros, donde el carácter de las partes da la jurisdicción sin referencia al objeto de la causa.

(1) Curtis, "*Historia de la constitución norteamericana*", edición argentina, 1866, páginas 157 y 379, traducción de Cantillo.

(2) Número 80, edición de J. A. Hamilton, 1866.

Pues bien, la constitución argentina ha establecido en el artículo 100 que "corresponde a la suprema corte y a los tribunales inferiores de la nación el conocimiento y decisión de "todas" las causas, que versen sobre puntos regidos por la constitución, "leyes nacionales", con la reserva hecha en inciso 11 del artículo 67 y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; vecinos de diferentes provincias, y entre una provincia o sus vecinos, contra un estado o ciudadano extranjero".

De modo pues, que siendo la ley de quiebras una "ley nacional" pura y simple, de acuerdo con el artículo anterior, corresponde su conocimiento a los tribunales de la nación.

III

Pero como ya hemos visto en la discusión de las leyes del 63 y 78, el congreso aceptó sin limitaciones de especie alguna, que tenía facultades para entregar a los tribunales de provincia, y en la medida que creyera conveniente, el conocimiento de los asuntos indicados por la constitución nacional. Debemos entonces, examinar ahora, la teoría del doctor Gorrostiaga, que nos obliga a tratar varios problemas de la justicia nacional, que han sido ya resueltos por Hamilton, Story, Kent, Washington y Marshall (1).

¿Hasta donde alcanza la jurisdicción federal? ¿Es exclusiva o concurrente? ¿Puede el congreso conferir exclusivamente a los tribunales de provincia alguna parte del poder judicial de la nación? He aquí los asuntos a tratar.

La constitución ha dispuesto en forma imperativa y no facultativa. Si no se la entendiera así, todo el armazón constitucional, derechos, declaraciones y garantías, estarían sujetos al arbitrio del congreso,

(1) Hamilton en el *Federalista*; "Story on the Constitution", página 1637 y siguientes. "Ker's Commentaries", tomo 10., Lecture XVIII; Washington "Chief Justice" en el caso *Houston v. Moore*, citado por Story; John Marshall, "Complete constitutional decisions", anotadas por J. Dillon, ed. 1903.

que con su legislación podría cambiar todos los principios y conceptos de la carta fundamental.

El congreso tiene entonces, obligación de invertir a la suprema corte de justicia y a tribunales inferiores de la nación, de "toda" la jurisdicción conferida por los artículos 100 y 101 de la constitución nacional. Y está categóricamente obligado a crear esos tribunales inferiores de que habla el artículo 94, porque encargar a los tribunales de provincia de los asuntos federales, sería desnaturalizar el propósito constitucional, con todos los graves inconvenientes que ya hemos indicado (1).

Si sucediere que los tribunales locales, incidentalmente conozcan de casos emanados de la constitución y leyes nacionales, el poder judicial de la nación, debe extenderse a ellos, y tener entonces, no jurisdicción originaria, pero si de apelación (2).

Hamilton va más adelante todavía; enseña también que la suprema corte de justicia debe conocer por apelación en los casos de jurisdicción concurrente con los tribunales de los estados, lo que resulta de la constitución misma que, al conferir jurisdicción de apelación a la corte suprema, no ha limitado su acción a los tribunales federales inferiores; sólo considera el objeto de apelación, y no los tribunales de que ha de hacerse. De otro modo, no podría admitirse la jurisdicción concurrente con la justicia local, y ésta debería ser excluida del conocimiento de las materias de interés nacional.

El objeto es que el poder judicial de la nación se extienda a todas las materias federales ya sea en forma de jurisdicción originaria, o de jurisdicción apelada.

Completamente vinculado a este problema ésta es de si la jurisdicción federal es exclusiva o concurrente con la de los tribunales locales.

Hamilton se ha manifestado partidario de la jurisdicción concurrente, porque los tribunales de los estados pueden retener la jurisdicción que tenían, a no ser que se les hubiera privado de ella por alguno de los siguientes medios: 1o. una atribución exclusiva dada en términos fijos a la Unión; 2o. una atribución especial concedida a la Unión y el ejercicio de igual atribución, prohibida a los estados, y 3o.

(1) Alberdi, op. cit. Hamilton id.

(2) Story, caso Martín v. Hunter, op. cit.

concedida a la Unión una atribución con la cual sería incompatible una igual dada a los estados.

Pero según el mismo autor, esta teoría de la jurisdicción concurrente sólo es aplicable a los casos en que los tribunales locales han tenido conocimiento anterior a la adopción de la constitución, lo que no es evidente con relación a aquellos que pueden provenir de ésta y ser peculiares a ella (1).

Hay además, casos derivados de la constitución, leyes nacionales, tratados, almirantazgo, derecho marítimo, y los que se refieren a los embajadores, ministros extranjeros, y cónsules, que por razones de su propia naturaleza, tocan la paz, seguridad y soberanía de la nación; en estos, se justifica bien una jurisdicción exclusiva de los tribunales federales (2).

Story no acepta que los tribunales de los estados puedan poseer ordinariamente una jurisdicción directa en los casos especificados en el párrafo anterior, desde que la jurisdicción de esos tribunales no existía antes de la adopción de la constitución, y no pudo conferirse tampoco, después de sancionada ésta; son casos que afectan los derechos del país y pueden comprometer la soberanía nacional; de ahí que los tribunales federales ordenados y establecidos por la constitución, deban ser investidos de todo el poder judicial, sin que la jurisdicción originaria o apelada pueda ser restringida.

Y para que no haya dudas a este respecto, agregaré la opinión de Marshall, expuesta en el caso *Cohens v. el Estado de Virginia*: "El poder judicial se extiende originariamente a todos los casos enanados de la constitución y leyes de los Estados Unidos, cualesquiera que fueren las partes" (3).

En los demás casos, los tribunales federales conocerán de acuerdo con las excepciones que el congreso puede establecer. Teniendo en cuenta estas interpretaciones, se dictó en los Estados Unidos, la ley judicial del año 1789 que adoptó las dos distinciones. En la primera clase de casos, la jurisdicción no se ha limitado: en la segunda, se la hace depender materialmente del valor que se discute en juicio.

De modo, pues, que el congreso está obligado a dar al poder judicial de la nación toda la juris-

(1) Hamilton, en *El Federalista*, número 82.

(2) Story, caso *Martín v. Hunter*.

(3) John Marshall, op. cit.

dicción que la constitución declara que se extenderá "a todos los casos", — constitución, leyes nacionales, tratados, almirantazgo, derecho marítimo, embajadores, ministros extranjeros y cónsules; — y en los que no puede ser limitado en forma alguna.

Hemos visto que hay casos que justifican la jurisdicción exclusiva de los tribunales federales, y otros que pueden también ser excluidos de la jurisdicción concurrente por facultad que tiene para ello, el congreso de la nación; en este concepto se dictó la ley judicial de 1789 (1).

La conclusión es que la jurisdicción concurrente depende de la voluntad del congreso, y puede ser revocada cuando lo crea bien, en todos los casos en los cuales el sujeto materia puede constitucionalmente ser conocido por los tribunales federales; y sin una disposición en contrario, los tribunales locales retendrán la jurisdicción concurrente en todos los casos en que han tenido jurisdicción originaria sobre la misma materia (2).

Pero para Story, solamente en aquellos casos en que antes de la constitución, los tribunales de los estados poseían jurisdicción independientemente de la autoridad nacional, es que pueden ahora constitucionalmente ejercer una jurisdicción concurrente (3).

De todo lo expuesto, lógico es deducir que el congreso no puede entregar a los tribunales de los estados parte alguna del poder judicial conferido por la constitución al gobierno nacional.

El congreso puede permitir en algunos casos la jurisdicción concurrente, pero los tribunales locales ejercen esa jurisdicción como si fuera conferida por la constitución y leyes de los estados, y nunca derivando de autoridad nacional.

La corte suprema de los Estados Unidos con el juez Story en el caso *Martín v. Hunter* y con el juez *Wáshington* en el caso *Houston v. Moore*, ha resuelto que el "congreso no puede investir parte alguna del poder judicial de la nación, sino en los tribunales ordenados y establecidos por él" (4).

A las mismas conclusiones llegó *Marshall* en el caso *Cohens v. el Estado de Virginia*, donde hizo

(1) Story, sección 1751.

(2) Kent, tomo I, página 400.

(3) Op. cit., tomo I, p. 1751.

(4) Story, op., cit.

un estudio muy completo de la supremacía de los derechos federales (1).

Ahora bien, ¿podía el congreso aceptar la teoría del doctor Gorostiaga para sancionar las leyes del 63 y 78 en la parte que trata de los concursos de acreedores?

Indudablemente, no.

El doctor Gorostiaga estuvo en lo cierto en parte, cuando sostuvo la facultad del congreso para limitar la competencia federal; pero es que en esta forma, sólo pudo referirse a los casos *ratione personae*, y nunca a los *ratione materiae*, que como hemos visto, todos deben necesariamente caer dentro del conocimiento de la justicia federal; de modo, pues, que al enunciar su doctrina en términos generales que abarcaran toda la jurisdicción nacional de que habla la constitución, equivocó los conceptos y las interpretaciones de la ley norteamericana de 1789 y de los comentaristas citados, toda vez que declaran bien categóricamente, que a todos los casos emanados de la constitución, leyes nacionales, tratados, almirantazgo, derecho marítimo, embajadores, ministros extranjeros y cónsules, debe extenderse sin restricción alguna el poder judicial de la nación.

Por otra parte, si la doctrina del doctor Gorostiaga pudo aplicarse únicamente para sancionar un artículo igual al de la ley de los Estados Unidos, limitando desde los 500 pesos la jurisdicción federal en que interviniesen extranjeros, no debió su autor prestar asentimiento para aplicarla al juicio de concurso de acreedores.

Además, indicó el mismo diputado, que en los casos de limitación de jurisdicción, había recurso de apelación ante los tribunales federales, palabras que cayeron completamente en el vacío, desde que no se confirió a la jurisdicción nacional apelación en los juicios de quiebra.

Lo extraño es que el doctor Gorostiaga, más tarde miembro y presidente de la suprema corte de justicia nacional, no rectificara el error en que había caído en el año de 1863, permitiendo que el diputado Uriburu, abdicara de un buen juicio y el senador Cortés incurriese en el mismo error, agravándolo con el absolutismo que imprimió a la tan decantada teoría, cuando a no ser por ésta, había

(1) Marshall, op. cit. página 357.

comprendido bien el espíritu de la constitución en todas las cláusulas concordantes de esta materia.

¿Y que impidió en el año de 1877 a los autores del proyecto de ley, unificar, ya que éste era el único objetivo, los juicios de quiebras en los tribunales federales, en vez de hacerlo en los de provincia, conociendo el antecedente norteamericano que recordaran los diputados Lagos García y Alcorta? Debemos creer que el respeto a los hechos ya consumados en el año de 1863.

Aplicárase ahora los principios de Hámilton a las cláusulas constitucionales del inciso 11o. del artículo 67, completamente con el artículo 108, que confiere exclusivamente al congreso nacional la atribución de dictar la ley de bancarrota y, obtendremos la evidencia de que los tribunales federales son los únicos que pueden conocer en una materia, que en forma expresa se ha excluido de los poderes locales, y se ha delegado al gobierno de la nación.

Con todos los comentaristas citados, y siendo nuestro artículo igualmente categórico al tercero de la constitución de los Estados Unidos, debemos concluir que el congreso no pudo nunca entregar a la justicia ordinaria lo que correspondía a la justicia nacional.

Y obsérvese que en nuestra carta fundamental el inciso 11o. del artículo 67, da una norma de conducta para saber cuándo los casos son de jurisdicción federal o local, y que se ha resuelto en forma definitiva, que la jurisdicción por razón de la materia es improrrogable. Búsquese un caso de sujeto materia federal, sobre que puedan entender los tribunales locales y no se le encontrará: patentes, marcas de fábrica, ciudadanía, falsificación de moneda, etc., etc., no pueden caer nunca bajo la jurisdicción de los tribunales de provincia.

Y aún poniéndolos en el caso más favorable para los legisladores del 63 y 78, si la materia de quiebras fuese una parte integrante del código de comercio, y los constituyentes se hubieran equivocado al disponer sobre la cláusula especial para las bancarrotas, por la misma reserva del inciso 11o. del artículo 67, la jurisdicción tendría que ser federal, cuando interviniesen personas de distinta vecindad y extranjeros, que es la cosa más natural en los concursos de acreedores.

Por último, si la constitución argentina ha copiado literalmente de la constitución norteamericana el artículo 100, razón de más, para que en igualdad

de circunstancias, se acepten las mismas conclusiones.

La ley de los Estados Unidos sobre bancarrotas ha conferido siempre jurisdicción a los tribunales federales; la de 1300 en su sección 2a.; la de 1841 en la 6a. y 16a.; la de 1867 en la 1a.;, 11a. y 49a., y la vigente de 1898 en las secciones 1a. y 2a. La ley inglesa de 1883 también ha conferido estos asuntos a una jurisdicción especial de acuerdo con sus disposiciones de las secciones 92, 93, 94, 95, 99, 100 y 102.

Por demás inconstitucionales y erróneas las leyes estudiadas, el gobierno de la nación debe, velando por sus fueros y atribuciones propias, reivindicar para su poder judicial la jurisdicción exclusiva en materia de bancarrota. Por otra parte, el principal inconveniente de la actual ley de quiebras, consiste en el sistema del voluntarismo, o sea, la omnipotencia de los acreedores en la dirección de la quiebra; para remediarlo se impone la oficialización del juicio de concurso de acreedores, es decir, el derecho de intervención del juez en todos los actos de los acreedores para confirmar, desaprobando o reemplazarlos. Pero si la justicia de provincias es tan mala, la pasividad maliciosa o la parquidad de los jueces empeoraría la situación de las partes. Los autores de la reforma de la ley de quiebras que a sabiendas de este echo, entreguen a los tribunales de provincia tantas facultades, se harían cómplices del despojo a que estarían sometidos acreedores y fallidos.

Los acreedores no residentes en la localidad del tribunal, se encontrarían en condiciones desventajosas para luchar con las influencias que la intimidación y trato dá a los vecinos o residentes. Los tribunales provinciales de apelación se hallarían en el mismo caso.

No ofrece la justicia federal estos inconvenientes; los errores o abusos de los jueces de sección se corrigen o castigan en las cámaras de circuito que generalmente funcionan en otras provincias, y en cambio, brinda el enorme beneficio de la verdadera unificación de interpretaciones judiciales.

En la actualidad, nada se opone ya a la ampliación de la justicia federal. "Los hechos, con su elocuencia abrumadora han desautorizado las apreciaciones que los autores de la revisión constitucional de 1860 manifestaron contra la justicia federal. El espíritu provincialista, que entonces dominaba en el partido gobernante de Buenos Aires y que inspiró

las enmiendas puestas a la constitución de 1853, profesaba la teoría de que las autoridades locales eran los defensores natos de los decretos civiles y políticos. De ahí las minuciosas restricciones y trabas con que aquellos propusieron limitar las facultades de los poderes nacionales, a quienes, sin embargo, vuelven hoy los ojos desde todas las provincias cuantos intereses legítimos buscan amparo fuerte y justo" (1).

Julio de 1915.

Agustín N. Matienzo.

Del doctor F. R. Escobio

Buenos Aires, noviembre 4 de 1920.

Señor presidente de la comisión de justicia de la cámara de diputados de la nación, doctor Roberto Parry.

S/D.

La comisión de justicia me ha hecho el honor de solicitar mi opinión sobre varios puntos, relacionados con la administración de justicia en la capital federal, y me es, por cierto, agradable corresponder a ese requerimiento, en la medida—poco extensa—en que puedo hacerlo.

Vencido con exceso el término fijado a la encuesta, envíole, sin embargo, mi contribución, contando la posibilidad de que no sea demasiado tarde.

Las circunstancias me han obligado a restringir mucho el estudio del asunto, pero no sería difícil ampliarlo hasta el límite conveniente.

Celebrando el motivo, pláceme saludar al señor presidente con la mayor atención.

Félix R. Escobio.

(1) José Nicolás Matienzo. "La ampliación de la justicia federal".

"Pocas, breves y claras: así quisiéramos que fueran las leyes. Corresponderían a esos caracteres de la legislación, jueces discretos y serios, casi libres de dudas jurídicas, no abrumados por el "exceso de trabajo", sino ocupados casi exclusivamente en esclarecer cuestiones de hecho: cómo han ocurrido los hechos. Vemos, en cambio, todo lo contrario".

F. R. E. (1918).

Sin desconocer la importancia que tiene el asunto unificación de fueros y otros especiales, planteados en el cuestionario, me permitiré algunas consideraciones e indicaciones, en vista del fin general que se persigue: mejorar la administración de justicia en la capital federal.

No olvido los intereses, los hábitos y otros factores de resistencia que se oponen y a veces sofocan las tentativas de reforma. Me limito a proponer cosas sencillas y fácilmente aceptables.

La práctica diaria en los tribunales es, sin duda, una fuente de experiencia para legislar en estas materias, pero hay en ella un riesgo: a fuerza de practicar la corruptela, se llega a perder el sentido de la anormalidad. Es necesario, entonces, defenderse contra esa influencia y mirar las cosas un poco desde fuera. Los movimientos de sorpresa del profano suelen ser ilustrativos.

Nuestra administración de justicia contiene una fuerte dosis de ficción.

El juez formula la sentencia—cuando es él quien la formula—sobre un expediente que él no ha formado, ni visto formar y no puede ser de otro modo, porque, de muchos años atrás, el número de asuntos que tiene cada juez es dos o tres veces el de los que puede atender personalmente. De ahí han derivado prácticas de trámite, que casi constituyen una técnica especial, adaptada a las circunstancias, pero extraña a los fines de la institución judicial.

Así, el fallo mejor hecho es una verdad muy convencional. A veces está lejos de ser justo; pero la costumbre nos hace conformes, siempre que la sentencia esté de acuerdo con "las constancias de autos".

En las exposiciones de las partes, las declaraciones de testigos, la absolución de posiciones, dictámenes de peritos, en todo el trámite, *falta la presencia y la iniciativa del juez hacia la determinación y esclarecimiento de la controversia*, y el juicio, movido únicamente por los intereses en pugna, se desarrolla bajo la influencia de factores extraños.

Los testigos, por ejemplo, son examinados conforme a un interrogatorio que formula el interesado, no siempre de buena fe y a veces contando en su favor las prácticas formularias del acto. El secretario lee las preguntas y asienta las respuestas.

El resultado es más o menos fiel, según la inteligencia, atención e imparcialidad del secretario. Pero sucede con frecuencia que él no ha entendido bien las preguntas o es el testigo quien no las ha entendido. Sucede también que el alcance de las respuestas es deficientemente apreciado y el secretario no escribe, exactamente lo que el testigo ha querido decir. Un testigo que conoce los hechos fracasa, a veces, cohibido o desorientado por el formulismo del acto y un testigo falso declara eficazmente.

En condiciones semejantes tiene lugar la prueba de confesión, en la absolución de posiciones. El ponente hace lo posible por arrancar al absolvente declaraciones que perjudiquen su posición en el juicio y se dice, hasta por los jueces, que las posiciones dieron o no resultado, según que el absolvente haya caído en las redes o salido airoso del trance. Este viene a ser muy peligroso para las personas ignorantes, ingenuas o poco vivaces, aunque tengan razón.

En cuanto a la prueba de peritos, basta recordar la exigua proporción de casos en que los informes técnicos coinciden, para comprender que es, en nuestras prácticas, una prueba muy incierta y ficticia.

Así, todas las pruebas y todos los actos del juicio se producen de una manera artificial y mecánica, que pierde de vista su verdadero objeto y así se forma el expediente que el juez sólo toma en sus manos para sentenciar.

Las disposiciones de la ley que se oponen a semejante adaptación de las prácticas procesales, han caído en desuso o reciben muy escasa aplicación. (Véanse los artículos 50, 57, 195, 198, 210 del código de procedimientos, y artículos 72, 92, 106, 108 y 109 de la ley de organización de los tribunales de la capital).

Si se quiere tener mejor justicia, es indispensable

que los jueces reciban y desarrollen personalmente los asuntos, desde su iniciación.

Es necesario que, desde el comienzo, procure el juez determinar exactamente los puntos discutidos; *que vea a las partes y las interroge*, no conforme a un cuestionario más o menos capcioso, preparado por una de ellas, sino libremente, con ánimo de esclarecer los hechos; que haga amplio uso de los careos y de la inspección ocular o examen de libros y papeles; que se asesore con peritos cuando lo crea necesario; que use, en fin, toda medida capaz de esclarecer los hechos, aunque no figure nombrada en la ley; y así, dentro del mismo criterio.

Entonces, se encontraría el juez habilitado para dar una sentencia menos ficticia, más justa.

Y *no hay que temer la arbitrariedad del juez*. Nuestra judicatura mejora sensiblemente y desde que la práctica del sufragio libre ha sacudido la indiferencia pública, existe una indirecta pero eficaz garantía contra el abuso: los nombramientos serán discretos y los jueces aspirarán a adquirir y conservar una buena reputación.

No hay que temer al juez; hay que darle facultades amplias y como consecuencia—eso sí—exigirle un cumplimiento más estricto o imponerle más severas responsabilidades.

Decíamos que los asuntos a cargo de cada juez exceden en mucho el número de los que puede atender. Ilustraremos esta afirmación con cifras estadísticas, correspondientes al año 1919.

JUZGADOS DE COMERCIO DE LA CAPITAL

Los cinco jueces dictaron:	Cada juez dictó (promedio)	
Fallos definitivos	3.209	642
Fallos interlocutorios	7.752	1.550
Suma		2.192

(Las estadísticas de los juzgados de comercio no ofrecen más detalle).

JUZGADOS DE LO CIVIL DE LA CAPITAL

Nueve jueces dictaron	Cada juez dictó (promedio)
Fallos definitivos en juicios ordinarios	957 106
Fallos definitivos en juicios ejecutivos o sumarios . . .	502 56
Declaratorias de herederos .	2.489 277
Regulaciones de honorarios .	10.307 1.146
Autos interlocutorios	36.036 4.004
Decretos de trámite	295.569 32.841
Suma	38.430

Es materialmente imposible que un juez realice o controle personalmente la labor judicial que le atribuyen esas cifras, ni siquiera una parte apreciable de ella; el juez delega necesariamente una gran porción de sus funciones propias.

Siempre me ha parecido grande anormalidad que un juez despache los asuntos de seis secretarías, si ha de hacerlo con eficacia y responsabilidad; la mitad de esa tarea es suficiente para ocupar la actividad común de un magistrado.

Tomo esta mera apreciación, en defecto de datos más precisos, como base para sostener la necesidad de creación de cierto número de juzgados, a fin de que los jueces puedan desempeñar positivamente sus funciones.

En consecuencia, admitiendo la rectificación que un estudio especial pueda indicar, pienso que sería necesario aumentar el personal de justicia, con el fuero ordinario, civil y comercial, de la capital, en doce jueces y seis secretarios para lo civil y para lo comercial cuatro jueces y siete secretarios, más el personal subalterno correspondiente.

Sumado el personal nuevo al existente, tendríamos en total:

- 22 jueces en lo civil
- 66 secretarios en lo civil
- 9 jueces en lo comercial
- 27 secretarios en lo comercial

Aceptando las cifras del presupuesto actual como base de cálculo, el aumento en el número de jueces y secretarios, más el personal subalterno y otros gastos, costaría lo siguiente:

PRESUPUESTO PARA EL NUEVO PERSONAL Y GASTOS ACCESORIOS

		mensual	anual
	\$ m n	\$ m n	\$ m n
12 jueces en lo civil a . .	1.800	21.600	259.200
4 jueces en lo comercial a	1.800	7.200	86.400
6 secretarios en lo civil a	1.000	6.000	72.000
7 secretarios en lo comercial a	1.000	7.000	84.000
16 oficiales de justicia . .	500	8.000	96.000
16 ordenanzas	120	1.920	23.040
Gastos de traslación de			
16 oficiales de justicia . .	27	432	5.184
13 oficiales primeros . . .	500	6.500	78.000
13 auxiliares	200	2.600	31.200
13 escribientes	175	2.275	27.300
Gastos de oficina y publicaciones de 16 juzgados	135	2.160	25.920
Local, luz, fuerza motriz, calefacción, intendentes, etc.		35.000	420.000
Suma .		100.687	1.208.244

Admito que haya motivo para algunos aumentos de sueldos y que éstos y otros renglones eleven el costo total a un millón y medio de pesos.

Ahora, si se acepta, en cuanto al desempeño de la función judicial, el concepto expresado y la consiguiente necesidad de aumentar el personal de jueces, etc., pregunto: ¿se puede disponer de un millón y medio de pesos para realizar las reformas indicadas?

Entiendo que la "falta de fondos" no puede ser objeción", cuando se trata de mejorar la justicia; si no existen, se buscan. No siendo así, paréceme inoficioso plantear el problema, pues no veo que la administración de justicia de la capital, pueda ser sensiblemente mejorada sin gastar más.

Bien sé que no bastaría aumentar el número de jueces, para que las funciones judiciales se ajustaran a las normas expuestas, ni siquiera en los puntos en que la ley actual las establece por disposiciones expresas. Y sería, sin duda, un fracaso agravar considerablemente el costo de la justicia, sin más resultado que un relativo alivio en la tarea del personal. El aumento en el número de jueces debe venir, pues, acompañado con una reforma de las leyes procesales.

Se ha de tener a la vista, no sólo la ley a reformar, sino los hechos a corregir y se procurará, no sólo establecer sólidamente las nuevas reglas, sino *"promover la transformación de las prácticas, dejando suficiente soltura para la mejor y más fácil adaptación"*; que así debe ser y más en esta época.

Unicamente para expresar con mayor precisión cómo concibo la reforma, indicaré en seguida algunos puntos de ella, anotados en la forma de un simple esbozo.

Las audiencias deben ser públicas, de hecho, no sólo por la libertad de acceso al local, sino por la concurrencia efectiva de las personas interesadas en presenciárlas. Muy sencillas disposiciones reglamentarias asegurarían esa preciosa garantía de buena justicia.

El juez intervendrá personalmente en las audiencias y no podrá delegar las funciones, bajo sanción de nulidad, que podrá ser invocada en cualquier estado del juicio, aun por las partes que hubiesen consentido la delegación.

Además de las diligencias de pruebas, tendrán lugar en audiencia y oralmente, la contestación a la demanda, el alegato y el examen de la sentencia de primera instancia.

Disposiciones expresas e inequívocas establecerían la indicativa del juez en todos los momentos del juicio, a fin de determinar, reducir o eliminar la controversia, esclarecer los hechos y dirigir los procedimientos de la manera más conducente.

Se exagera hasta lo absurdo el principio de "no prejuzgar".

Se suprimiría el trámite previo de excepciones, dilatorias o perentorias. No vemos sino ventaja en

que sean opuestas en la misma audiencia de contestación a la demanda, sin que ello excuse de contestarla. El juez resolvería en el acto la excepción o fijaría un breve término para atraer los elementos de juicio necesarios.

Un juicio ordinario no debe durar más de dos meses en primera instancia, ni más de tres para ser fallado en segunda. Los términos actuales pueden ser acortados correlativamente y no sería difícil hacer que los jueces se ajustaran, en cuanto de ellos dependa, a los términos establecidos.

Que haya una comisión de la cámara de diputados, encargada de informar anualmente sobre el funcionamiento de los tribunales de la capital. Para sucerlo, recabaría los datos e informes necesarios y recibiría las denuncias que le fueran presentadas. Se entiende que las funciones de esta comisión se fundan en las facultades de la cámara en materia de juicio político.

Creo que las medidas indicadas traerían una justicia más aproximada a la verdad y más rápida (!), reducirían el número de los pleitos ociosos o mal inspirados y contribuirían a sanear el ambiente judicial.

Buenos Aires, noviembre 5 de 1920.

Félix R. Escobio.

Del fiscal de la capital, doctor A. García Rams

Buenos Aires, junio 14 de 1921.

Al señor presidente de la comisión de justicia de la H. cámara de diputados, doctor don Roberto Parry.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, evacuando las preguntas que se ha dignado dirigirme en su nota que he recibido el 4 del corriente, y dado el breve lapso de tiempo que me otorga para contestarlas, así como el recargo de trabajo que pesa sobre mí, en las tareas de agente fiscal en lo criminal y correccional en los tribunales de

esta capital, me excusan de que no conteste a todas las formuladas, así como también, de que ellas no sean lo suficientemente extensas como hubiera deseado y la importancia del tema lo exige.

Producida la federalización de Buenos Aires, en 1880, era necesario dotar a esta ciudad de tribunales propios, para dar fin a la situación anormal en que se estaba desde 1860, en que las autoridades nacionales eran huéspedes de la provincia de Buenos Aires, en su ciudad capital, donde ejercían jurisdicción los tribunales provinciales.

Haciendo uso el congreso de la facultad otorgada por la constitución nacional, en su artículo 67, inciso 27, la que autoriza a dicho poder a "ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la nación....." dictó en 1881, la ley de organización de los tribunales de la capital, actualmente en vigencia.

En la exposición de motivos que precedía al proyecto de aquella ley y con referencia a la forma de dividir los tribunales, decían los redactores, ".....siendo la capital un distrito puramente federal, y dados los grandes intereses que ella encierra, su población, su comercio y el desenvolvimiento general de sus negocios, ¿cómo podrían dividirse los tribunales?

"La justicia común habría de ser desempeñada por tribunales puramente nacionales, en el orden y forma que los juzgados de sección y suprema corte, actualmente existentes, de modo que esa justicia, común, viniera, a quedar equiparada, con la que ejercen privativamente aquellos tribunales, en virtud de prescripciones de la constitución, o habrían de crearse tribunales ordinarios que, aún cuando de origen federal, por razón de su nombramiento y dependencia, procediesen en la misma esfera que los tribunales comunes de las provincias, sin entorpecer en manera alguna la marcha de los juzgados nacionales?

"Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la justicia nacional, no ha sido creada expresamente para entender en pleitos comunes, aún cuando se trate de ciudades o territorios federales, sino como lo dice Hámilton y lo repite Story, para conocer y dirimir todas aquellas controversias, que

podieran afectar la constitución, las leyes del congreso, los tratados internacionales, la paz del país o las personas o derechos de los residentes extranjeros; las que pudieran versar sobre intereses de ciudadanos de diversos estados o de gestión entre dos o más estados; las que se refieran al comercio y actos marítimos o a las personas investidas con inmunidades como los agentes diplomáticos, cónsules o vicecónsules u otros que la constitución determina.

"De modo, pues, que la jurisdicción de los tribunales nacionales, está circumscripta a todos aquellos casos de justicia eminentemente nacional, sea por razón de las personas o de los actos y cosas sobre que recaiga, y no para la decisión de asuntos comunes, pertenecientes a personas que no se encuentran comprendidas en la razón constitucional de aquellos tribunales, y que deben ser juzgados por jueces ordinarios; y si bien pudiera observarse por las prescripciones de nuestra constitución, y por precedentes de los Estados Unidos, que en los territorios nacionales impera la justicia nacional, tales hechos son meramente transitorios, hasta que esos territorios, entran a formar parte de la nación como estados y a erigirse por leyes propias".

En armonía con estas ideas, la ley referida, estableció la división del fuero, creando la justicia ordinaria que debía funcionar al lado de la justicia federal, en el territorio de la capital.

Es oportuno recordar, porque él constituye un antecedente de importancia, que la primera ley de organización de justicia federal, fué sancionada a iniciativa del P. E. por el congreso de la confederación, reunido en Paraná en 1858, y determinaba por el art. 30, "que son juzgados federales de sección, los de primer instancia, establecidos en el territorio federalizado (se refiere a la provincia de Entre Ríos, federalizada por ley anterior) y demás que se establezcan en las provincias conforme a esta ley", por el art. 33, que "los jueces del territorio federalizado ejercerán, además de la jurisdicción federal, en todos los casos en que no esté atribuida originariamente a las cortes de distrito, la ordinaria de provincia".

Formaban parte tanto en el poder ejecutivo de aquella época, como en el congreso, los hombres que habían participado en los debates a que dió

lugar la sanción de nuestra ley suprema, y sin embargo a ninguno de ellos, se le ocurrió discutir que los tribunales de la capital no podían ser todos federales. Justifican,se, entonces, las palabras del doctor Magnasco cuando decía, refiriéndose a esa, "llama fuertemente la atención, no solamente la autoridad científica de los hombres que elaboraron la ley, sino muy principalmente el hecho singular de que habiéndose empeñado largas y nutridas controversias a propósito de los pormenores más insignificantes del proyecto, la doctrina consignada en los artículos transcritos, (se refiere a los artículos 30 y 33), pasaran en silencio, como la sanción más natural por el voto unánime de las cámaras originaria y revisora....."

En el proyecto de ley elevado por el poder ejecutivo en mayo de 1899, no obstante mantenerse la división del fuero de las frases del mensaje con que aquel se acompañaba, se desprende en forma evidente que en la capital federal, no puede haber sino una sola justicia, constitucional nacional.

Una parte de ese mensaje expresa, "no podría decirse, sin manifiesta exageración que el pensamiento de la unificación del fuero sea incompatible, con el sistema judicial de nuestra ley suprema. Uno y otro caben dentro de la constitución, porque lo único ineludible, es la institución de una justicia federal en territorio de las provincias, como sanción y reflejo del sistema federativo, en el que se enlazan armónicamente la autonomía general y por tanto judicial, con la soberanía general y por tanto judicial de la nación. La primera es una justicia *ratione loci*; la segunda es una justicia *ratione materie*; sin la una no habría federalización, sin la otra no existiría la nación.

"Pero, allí donde no obre la razón respetable del territorio autónomo, *ratione loci*; allí donde no haya el peligro de afectar el principio federativo; allí donde la localidad no tenga, ni histórica ni constitucional, ni jurídicamente, la fisonomía de una entidad capaz de subscribir o adherir con voluntad propia, al pacto de unión, no habría sin duda, motivos doctrinarios para mantener la razón excluyente del lugar y la diferencia del *ratione loci* y del *ratione materiae vel naturae*, porque el lugar es nacional, el amparo nacional y todo nacional".

En junio de 1909 el poder ejecutivo remitió a la cámara de diputados, un mensaje y proyecto de ley

tendiente a la unificación de fueros en esta capital y creación de nuevas cámaras y juzgados, y en los fundamentos del mensaje, se hace un estudio del caso, llegando a la conclusión que la unificación del fuero no es inconstitucional. Las consideraciones aducidas son las siguientes: "Sobre este punto se observa una gran uniformidad de opiniones, entre los distinguidos publicistas que se han preocupado de estudiarlo especialmente, y el poder ejecutivo entiende que no pueden fundarse observaciones a la unificación del fuero, en los preceptos de la carta fundamental.

"No hay en ella, disposición alguna que limite las facultades del congreso, para crear tribunales nacionales en los territorios sobre los cuales legisla exclusivamente.

"El artículo 100 de la constitución, enumera las causas cuyo conocimiento, corresponde a la suprema corte y a los tribunales inferiores de la nación; pero ese artículo no prohíbe, que el congreso, al crear los tribunales inferiores, que deben existir para dar cumplimiento a esa disposición, les atribuya el conocimiento de todos los demás asuntos no enumerados.

"El artículo 101, previene que la corte suprema, entenderá originaria y exclusivamente en determinados asuntos, y que en otros casos ejercerá su jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el congreso.

"Esta disposición demuestra que el congreso, puede crear excepciones para la jurisdicción apelada de la corte, y con ello queda evidenciado que puede crear también tribunales, que entiendan en otros asuntos que los expresamente especificados en la constitución, y que no vayan en apelación a la corte suprema.

"Podría objetarse, que afectaría la constitución, si se pretendiera que los asuntos que ella enumera en su artículo 100, correspondiesen a jueces no federales, pero cuando el congreso crea los tribunales inferiores de la nación, de acuerdo con el precepto de la carta fundamental y además de los asuntos que ella enumera, les amplía su competencia, no cabría racionalmente alegar la incompetencia.

"Estas ideas han recibido ya consagración legislativa, tanto en la ley de organización de los territorios, que crea jueces letrados nacionales, con jurisdicción y competencia en los asuntos del fuero federal y del fuero ordinario, cuanto en la ley núme-

ro 4.055, sobre creación de cámaras de circunscripción. Esta ley cumpliendo el artículo 101 de la constitución, excluye de la jurisdicción apelada de la suprema corte, numerosos asuntos del fuero federal".

Estos antecedentes que he referido desvirtúan los fundamentos de la ley de 1881, y me eximen de toda otra argumentación en pro de la unificación de fueros, que importaría en la práctica, eliminar, uno de los más graves inconvenientes en la pronta solución de los asuntos, como son las cuestiones de competencia que se suscitan entre los jueces del fuero federal y ordinario, así como también se uniformaría la jurisprudencia.

Una vez establecido que todos los jueces de la capital, son federales, se pregunta, ¿qué solución podría darse al problema de la unificación de fueros?

La solución que encuentro más sencilla y que menos trastornos traería aparejada, sería dejando a los actuales tribunales federales, que sigan entendiendo en las mismas causas que la constitución y leyes especiales les encargan, es decir, en las cuestiones ajenas al interés privado y en las de derecho común que sólo intervienen por excepción, como en los casos de distinta nacionalidad y distinta vecindad en pleitos civiles, y en causas criminales, cuando el hecho ocurra en lugares donde la nación ejerza jurisdicción exclusiva y a los actuales tribunales de la justicia ordinaria, que conozcan en los demás juicios de derecho común.

En lo que respecta a las reformas procesales que considero más urgentes, indicaría la reforma de la legislación penal, desde que las causas que exigen esa reforma datan de treinta años atrás, y con el andar del tiempo, ellas se han agravado, en razón de que el código en vigencia, no responde a los modernos adelantos de la ciencia penal ni a las necesidades del país.

Omito hacer otras consideraciones sobre este punto, ampliamente discutido al tratarse en la honorable cámara de diputados, dado que su sanción está pendiente de la resolución del honorable senado.

Esa reforma traerá aparejada la "modificación de la legislación procesal en materia penal" en armonía con las reformas introducidas por la ley de

fondo, desde que, los códigos vigentes, tanto el penal como el de procedimientos, están inspirados en principios de la escuela clásica y el código en discusión en el honorable congreso, reposa en los fundamentos de la escuela positiva.

Otra ley que reclama tanto el foro como los magistrados, es una "ley de ascensos", que establezca a semejanza de la ley orgánica del ejército y armada sus grados en la magistratura, y obligue al poder ejecutivo a respetar esos grados, y a tener en cuenta en las promociones, la competencia, la honradez y la antigüedad en el cargo que desempeñan los magistrados y funcionarios.

También considero indispensable, la existencia de una ley que establezca la "inamovilidad de todos los que forman parte del ministerio fiscal". El ministerio público o fiscal, como lo denomina nuestra ley procesal, está desempeñado en los tribunales federales o territorios nacionales, por el procurador general de la corte suprema y por los procuradores fiscales, y en los tribunales ordinarios del distrito de la capital, lo desempeñan los fiscales de cámara y los agentes fiscales que ejercen sus funciones en los juzgados de primera instancia.

El procurador de la corte suprema, y los fiscales de cámara son nombrados por el poder ejecutivo con acuerdo del senado, y gozan de las mismas garantías que los miembros de la judicatura, sólo pueden ser separados de sus puestos por sentencia del senado, mediante acusación de la cámara de diputados. En cambio los procuradores y agentes fiscales que son nombrados por el poder ejecutivo no son inamovibles.

"Un funcionario dice Manduca, que en interés de la sociedad, impulsa y mueve todo el organismo penal; que lucha con el delito en sus diversas manifestaciones, haciendo caer bajo su esfera de acción todos los rebeldes al principio del orden; que con la mayor publicidad condena y absuelve; que está en continuo contacto con todos los poderes del estado, es ilógico no goce de garantías".

Los representantes del ministerio fiscal, en cuanto ejercen las funciones que les fija la ley procesal, no son agentes del P. E. y por consiguiente no pueden recibir instrucciones de este poder que desvirtúen el libre ejercicio de esas funciones. Admitir una tesis contraria, sería lo mismo que sostener que el presidente de la nación, puede ejercer funciones

judiciales, lo que le está expresamente prohibido por el artículo 95 de la constitución nacional.

"El ministerio público, no es más que la personificación viviente de la justicia y del deber, como lo dice el autor citado, el riguroso y fiel guardador de la libertad y de los derechos de los ciudadanos, el representante de la sociedad y de la ley, que toma por norma su conciencia y los libres dictados de su entendimiento".

Por otra parte, es de hacer notar que la ley procesal, reconoce implícitamente que el ministerio fiscal debe gozar de las mismas garantías que la judicatura, al prescribir que al procurador general de la suprema corte y a los fiscales de cámara, les corresponde el cuidar, de que los encargados de ejercer el ministerio fiscal ante los juzgados, promuevan las gestiones que les correspondan y desempeñen fielmente los demás deberes de su cargo, artículo 116, inciso 3o. y artículo 117 del código de procedimientos en lo criminal y que los agentes fiscales, procuraran la unidad posible en la acción del ministerio, poniéndose de acuerdo con los fiscales de cámara, "sin perjuicio de la independencia de sus opiniones" artículo 126 de la ley orgánica de los tribunales de la capital.

Lamentando no haber podido contestar a todas las preguntas formuladas, saludo al señor presidente con mi consideración más distinguida.

Arturo García Rams

PROYECTOS

Sobre creación de Cámaras Federales
de Apelación

PROYECTO DE LEY

del señor diputado Parry

El senado y cámara de diputados, etcétera:

Artículo 10. — Créase, bajo el régimen de la ley 4055, cinco cámaras federales de apelación, que tendrán su asiento en las ciudades de Bahía Blanca, Mercedes (Buenos Aires), Tucumán, Mendoza y Corrientes y ejercerán, en sus respectivas circunscripciones, la jurisdicción apelada estatuida por dicha ley.

Art. 20. — La circunscripción de las cámaras federales queda fijada en la siguiente forma: la de La Plata comprende los juzgados de La Plata, Chubut y Santa Cruz; la de Mercedes los juzgados de Mercedes y la Pampa; la de Bahía Blanca los de Bahía Blanca, Río Negro y Neuquén; la de Córdoba los de Córdoba, Bell Ville, Ríoja y Catamarca; la de Tucumán los de Tucumán, Santiago, Salta y Jujuy; la de Rosario sus dos juzgados y el de Santa Fe; la de Mendoza los juzgados de Mendoza, San Juan y San Luis; la de Paraná los de Paraná, Concepción del Uruguay y Chaco y la de Corrientes los de Corrientes, Formosa y Misiones.

Art. 30. — Los juicios que, a la vigencia de esta ley, se hallan en tramitación ante alguna cámara federal, serán remitidos a la cámara que corresponda, según la jurisdicción territorial establecida, si hubiera conformidad de partes.

Art. 40. — En las cámaras que por esta ley se crean, el cargo de procurador de cámara será desempeñado por el procurador fiscal del juzgado de sección de la ciudad asiento del tribunal.

Art 50. — Los miembros de las cámaras que se crean, gozarán del sueldo mensual de un mil tres-

cientos pesos cada uno; y tendrá cada cámara un secretario con seiscientos pesos, un ujier con doscientos pesos, tres escribientes con ciento cincuenta pesos cada uno; gastos de oficina y alquiler de casa, doscientos pesos y un ordenanza con cien pesos.

Art. 6o. — Asígnase, por una sola vez, a cada una de las cámaras que se crean, la suma de quince mil pesos para muebles, libros y gastos de instalación.

Art. 7o. — Los sueldos y gastos que demande el cumplimiento de esta ley, se abonarán de rentas generales, con imputación a la misma, hasta tanto sean incluidos en la de Presupuesto.

Art. 8o. — Comuníquese, etc.

Roberto Parry.

Sr. Parry.—Señor presidente:

La ley número 4055, que creó cuatro cámaras de circuito, fué adoptada como un temperamento de transición procurándose salvar la situación existente, a fin de despachar la enorme masa de asuntos paralizados, pero dejando establecido el sistema para que fuera ampliado en el país cuando el congreso lo creyera oportuno. Se dijo entonces que la creación de esas cámaras respondía al propósito de liquidar la situación, echando a la vez las bases del sistema definitivo de la organización judicial del país. (D. de S. 1901, t. 2, p. 431). Razones circunstanciales determinaron al congreso para circunscribir su acción dentro del mínimum de gastos que demandaría la creación de esos tribunales de apelación. Y desde entonces, sólo se ha creado la cámara de Rosario (ley 7099), habiéndose presentado varias iniciativas tendientes a obtener la creación de nuevas cámaras, sin que hayan llegado a merecer sanción legislativa.

En 1910, el diputado Escobar proyectó la creación de la cámara de Bahía Blanca, atribuyéndole jurisdicción sobre los departamentos judiciales de costa sud y sud de la provincia de Buenos Aires y sobre los territorios nacionales de Río Negro, Chubut y Santa Cruz y manteniendo en la jurisdicción de la cámara de La Plata los departamentos judiciales de la capital, centro y norte de la provincia y los territorios de la Pampa y Neuquén. (D. de S.—1910, t. 1 p. 849). Este proyecto fué reproducido, varios años después, por los diputados Isnardi, Riú y

Vergara; pero introduciéndole una modificación en cuanto a la jurisdicción, al establecer que la cámara de Bahía Blanca comprendería los departamentos de costa sud, sud y sudoeste y los territorios de la Pampa, Neuquén y Río Negro. (1918, t. 4 p. 165). Habiendo caducado nuevamente, fué reproducido en las sesiones del presente período por el diputado Isnardi.

En 1910, los diputados Lubary, López y Garrido presentaron un proyecto de creación de la cámara federal en Corrientes, dándole jurisdicción sobre esa provincia y sobre los territorios de Misiones, Formosa y Chaco, (1910, t. 1, p. 911), proyecto que fué reproducido por el diputado González, con la sola diferencia de incluir el territorio del Chaco en la cámara de Paraná, (1918, t. 2, p. 287).

La creación de la cámara federal de Tucumán es una aspiración que se expresó desde que se discutía la ley de creación de las cámaras de circuito, habiéndose expuesto razones muy atendibles que en aquella oportunidad no pudieron tenerse en cuenta, dado el criterio que presidió la sanción de esa ley. (1901, t. 2, p. 510).

En 1918, el diputado Raffo de la Reta presentó un proyecto creando la cámara de Mendoza, a la cual atribuya jurisdicción sobre las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, (1918, t. 2, p. 322). Este proyecto caducó en virtud de la ley Olmedo.

La iniciativa de creación de una cámara de apelaciones en el territorio de la Pampa también es consultada en el proyecto que presento, pues al incluir ese territorio en la circunscripción correspondiente a la cámara a crearse en Mercedes, se consultan mejor los intereses de esa importante región que cuando se proyecta dejarla comprendida en la jurisdicción de La Plata o llevarla a la de Bahía Blanca.

El proyecto que suscribo condensa, pues, las aspiraciones ya manifestadas en numerosas iniciativas parlamentarias precedentes. La creación de nuevas cámaras hará desaparecer las demoras originadas en razón de las distancias a que se encuentran los juzgados de sección de sus respectivos tribunales de apelación. Facilitará también el ejercicio de las facultades de superintendencia que, de acuerdo con la ley 7099, corresponden a las cámaras de circuito. Por otra parte, el funcionamiento regular de la justicia federal sólo podrá obtenerse vigorizando el prin-

cipio de la descentralización, sobre la base de una demarcación territorial que permita distribuir el trabajo proporcionalmente entre todos los juzgados y tribunales de apelación. La actual concentración de varios juzgados como pertenecientes a una misma jurisdicción de apelación, dificulta el ejercicio de los recursos; aleja los asuntos del conocimiento de los abogados que han actuado en primera instancia y que se ven obligados a viajar o a entregar el juicio en grado de apelación a los letrados residentes en la ciudad asiento del tribunal: encarece la justicia; debilita la eficacia de las resoluciones judiciales y por último, pone en evidencia la insuficiencia de las autoridades nacionales para atender las necesidades más premiosas de un territorio tan extenso como el de la República.

La distribución de los juzgados de primera instancia en las respectivas jurisdicciones apeladas, se proyecta de acuerdo con la importancia de la zona comprendida en dichos juzgados, de su población total, del número de extranjeros en ella domiciliados y del número de causas tramitadas por cada uno estadísticos siguientes:

Distribución de la población, según la organización actual:

Cámaras	Población extranjera	Población total
Capital federal.	892.583	2.088.867
La Plata.	787.917	2.274.128
Rosario.	315.941	899.640
Córdoba.	225.359	1.697.078
Paraná.	135.953	891.548

Esta desproporción será corregida con la sanción del proyecto. Hé aquí la distribución de la población, de acuerdo con la jurisdicción territorial que a cada cámara se asigna en el proyecto:

Cámaras	Población extranjera	Población total
Capital federal.	774.845	1.575.814
La Plata.	318.893	856.612
Rosario.	315.941	899.640
Mercedes (Bs. As.).	261.944	805.833
Bahía Blanca.	226.514	675.135
Córdoba.	154.306	882.422

Méndoza.	114.738	513.053
Paraná.	82.359	471.649
Tucumán.	71.053	814.656
Corrientes.	53.594	419.899

Para apreciar la importancia del trabajo realizado por los juzgados comprendidos en la circunscripción de cada una de las cámaras que se proyecta crear, el mejor elemento de juicio es suministrado por las estadísticas publicadas en las memorias del ministerio de justicia. Veamos el número de causas iniciadas durante los últimos años en esos juzgados, sumando los incluídos en cada tribunal de apelación.

Juzgados comprendidos en la cámara de	Causas iniciadas durante los años		
	1916	1917	1918
Capital federal.	8.720	10.461	8.785
Mercedes (Bs. As.). . .	6.021	5.821	7.683
La Plata.	4.853	5.589	6.939
Bahía Blanca.	4.027	3.600	3.537
Rosario.	3.542	4.247	4.588
Mendoza.	2.866	1.991	2.257
Corrientes.	2.757	2.873	3.113
Paraná.	2.645	2.707	3.934
Tucumán.	2.531	3.948	4.630
Córdoba.	2.495	2.650	3.698

Para la confección de este cuadro, ha sido necesario recurrir a simples cálculos en las cifras correspondientes a los juzgados de La Plata y Mercedes, pues este último aún no existe y sólo está proyectada su creación; de modo que el total de los expedientes que en la actualidad se inician ante el juzgado de La Plata ha podido ser reducido en un tercio para suponer que ese tercio correspondería al de Mercedes. En cuanto a la alta cifra de causas que se asigna a la cámara de Mercedes, es explicable con sólo recordar que pertenecerían a su jurisdicción los juzgados letrados del territorio de la Pampa. El dato relativo a la cámara de La Plata, año 1918, es también calculado; porque en la estadística de ese año no se incluían los juicios iniciados en el juzgado nacional del Chubut y ha habido que calcularlos, siguiendo los datos de años anteriores.

Las cifras precedentes demuestran que en los juz-

gados de la capital federal es elevado el número de asuntos; pero en el presente proyecto no se estudia la situación de la cámara de la capital federal; porque ya ha sido contemplada al sancionarse la ley 7055, de 17 de agosto de 1910, aumentando a cinco el número de sus miembros, y porque es un problema de mayor amplitud el referente a la reorganización de los tribunales de la capital. Por último, los juzgados de San Luis, Mendoza y San Juan dejarían de pertenecer a la jurisdicción de la cámara de la capital federal.

Sobre la mayor justicia de la distribución de los juzgados en los tribunales de apelación que se proyectan, dará cabal idea la sola enunciación de la actual jurisdicción territorial de las cámaras de circuito creadas por las leyes 4055 y 7099.

1. — *Cámara de la Capital*: comprende los tres juzgados federales de la capital federal y los de Mendoza, San Luis y San Juan.

2. *Cámara de La Plata*: comprende los juzgados de La Plata, Bahía Blanca, la Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz y Tierra del Fuego.

3. *Cámara de Paraná*: comprende los juzgados de Paraná, Concepción del Uruguay, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

4. *Cámara de Córdoba*: comprende los juzgados de Córdoba, Bell Ville, Tucumán, Santiago, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca.

5. *Cámara de Rosario*: comprende los dos juzgados de Rosario y el de Santa Fe.

La distribución proyectada permite que las cinco cámaras nuevas atiendan las necesidades de la administración de justicia federal, en forma rápida y eficaz.

En cuanto a la faz financiera del proyecto, conviene tener presente la erogación que, en la actualidad, demandan las cinco cámaras existentes. Según el presupuesto que ha estado en vigencia en 1918, sumando los sueldos y los gastos, obtenemos las siguientes sumas:

Cámara Federal de la Capital. . . .	\$ 215.940 m n.
" " " La Plata. . . .	" 133.800 "
" " " Rosario. . . .	" 127.200 "
" " " Córdoba. . . .	" 119.460 "
" " " Paraná. . . .	" 108.540 "
<hr/>	
Total.	\$ 704.940 m n.

Al invertirse estas partidas, se ha hecho una economía de \$ 39.180.17 m/n. (ver memoria del ministerio de hacienda correspondiente a 1918, p. 96); pero la reciente sanción de la ley de presupuesto ha aumentado aún más el importe que debe invertirse en el mantenimiento de estos tribunales de apelación.

Según mi proyecto, cada cámara costaría anualmente la suma de \$ 65.400; de modo que las cinco podrían mantenerse con una erogación anual de pesos 327.000. Las cinco cámaras nuevas costarían al erario menos de la mitad de lo que exige el mantenimiento de las cinco actuales.

—Destínase el proyecto a la comisión de justicia.

PROYECTO DE LEY

del Sr. diputado José Antonio González

El senado y cámara de diputados, etcétera.

Artículo 1o.—Créase en las ciudades de Corrientes, Mendoza y Bahía Blanca, bajo el régimen de la ley 4055, una cámara federal de apelaciones en cada una de ellas, con el personal y asignaciones que establece la ley general de presupuesto para la cámara federal de Paraná.

Art. 2o.— La cámara federal de Corrientes ejercerá la jurisdicción apelada, estatuida por la ley mencionada en el artículo anterior, en la provincia del mismo nombre y los territorios nacionales de Misiones y Formosa.

Art. 3o.—La jurisdicción de la cámara federal de apelaciones de Paraná comprenderá en lo sucesivo la provincia de Entre Ríos y el territorio nacional del Chaco.

Art. 4o.— Los juicios que a la vigencia de esta ley se hallaren en tramitación ante la cámara federal de apelaciones de Paraná, elevados del juzgado federal de Corrientes y de los juzgados letrados de Misiones y Formosa, serán remitidos a la cámara federal de apelaciones de Corrientes.

Art. 5o.— La cámara federal de apelaciones de Mendoza ejercerá su jurisdicción en la provincia del mismo nombre y en las de San Juan y San Luis.

Art. 6o.—Las causas que se hallaren a la sanción de esta ley en la cámara federal de apelaciones de la capital de la república, elevadas de los juzgados federales de Mendoza, San Juan y San Luis, serán remitidas a la cámara federal de apelaciones de Mendoza.

Art. 7o.—La cámara federal de apelaciones de Ba-

hía Blanca ejercerá jurisdicción en los departamentos judiciales que las leyes de la provincia de Buenos Aires denominan costa sud, sud y sudoeste y además de los territorios de la Pampa, Neuquén y Itio Negro.

Art. 80. — La cámara federal de La Plata, ejercerá jurisdicción en los departamentos judiciales que las leyes de la provincia de Buenos Aires denominan capital, centro y norte, y además en los territorios nacionales del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Art. 90. — La cámara federal de apelaciones de La Plata, remitirá a la cámara federal de apelaciones de Bahía Blanca, las causas que a ésta le correspondan.

Art. 10. — Destínase la suma de cuarenta y cinco mil pesos moneda nacional para gastos de instalación y biblioteca de las cámaras mencionadas.

Art. 11. — Los gastos que origine el cumplimiento de la presente ley, se harán de rentas generales y con imputación a la misma, hasta tanto se incluya en la ley general de presupuestos.

Art. 12.—Comuníquese al poder ejecutivo.

*José Antonio González, Víctor M. Molina,
M. Mora y Araujo.*

Sr. González. — Señor presidente:

En la sesión ordinaria del diez y siete de julio de 1898 de la honorable cámara, tuve el honor de presentar un proyecto de ley, sobre creación de una cámara federal de apelaciones en la ciudad de Corrientes, que ejercería la jurisdicción apelada, estatuida por la ley número 4055, en la provincia del mismo nombre y los territorios nacionales de Misiones y Formosa.

Expresé en esa oportunidad, con extensión, los fundamentos en que se basaba esa iniciativa, demostrando que la cámara federal de Paraná tenía una jurisdicción demasiado vasta, constituida por dos importantes provincias y todos los territorios nacionales del norte, y se hallaba inhabilitada, por lo mismo, para resolver las causas en los términos fijados por la ley.

Reproduzco en esta ocasión todos los argumentos que aduje al fundar ese proyecto de ley y que tie-

nen atingencia con el que someto ahora a la consideración de la cámara.

El señor diputado Julio C. Raffo de la Reta presentó en la misma sesión otro proyecto sobre creación de una cámara federal de apelaciones, en la ciudad de Mendoza, con jurisdicción sobre la provincia de ese nombre, San Juan y San Luis.

Los señores diputados Arturo Isnardi, Valentín Vergara y Francisco A. Riú, presentaron otro en la sesión del 10 de septiembre del mismo año, por el que se proponía la creación de una cámara federal en Bahía Blanca, con jurisdicción en los departamentos judiciales que las leyes de la provincia de Buenos Aires denominan costa sud, sud y sudoeste y además en los territorios de la Pampa, Neuquén y Río Negro.

Los diputados mencionados fundamentaron con todo detenimiento y perfecto estudio del medio esas iniciativas parlamentarias.

Permítome referirme, en un todo, a esos fundamentos, para abonar la conveniencia de la creación de las cámaras federales en Mendoza y Bahía Blanca.

Pienso, señor presidente, que una buena justicia, rápida y segura, imbuída de los altos fines que persigue la ley fundamental, constituye una suprema aspiración que debe tratar de satisfacerse en todo el país.

La organización de los tribunales federales deja mucho que desear actualmente.

Los expedientes que se tramitan en los juzgados federales de las lejanas provincias andinas, tienen que seguir una larga peregrinación hasta esta capital para lograr ser resueltos en grado de apelación.

Cosa parecida ocurre con los asuntos de todos los territorios nacionales del sud que dependen de la cámara federal de La Plata, así como con los litigios de los territorios nacionales del norte y la provincia de Corrientes que forman parte de la jurisdicción de la cámara federal de Paraná.

Este proyecto trata de ordenar en una forma más conveniente la justicia federal de apelación y procura servir, así, en sentido práctico, al interés general.

Su pronta sanción por el honorable congreso, importaría un positivo beneficio para la república.

—A la comisión de justicia.

PROYECTO DE LEY

del señor diputado Isnardi

El senado y cámara de diputados, etcétera.

Artículo 1o.—Créase una cámara federal con asiento en la ciudad de Bahía Blanca con el personal y régimen que establece la ley número 4055 y las asignaciones que fija la ley de presupuesto para la cámara federal de la ciudad de La Plata.

Art. 2o.—La cámara federal de Bahía Blanca ejercerá jurisdicción en los departamentos judiciales que las leyes de la provincia de Buenos Aires denominan costa sud, sud y sudoeste, y además en los territorios de la Pampa, Neuquén y Río Negro.

Art. 3o.—La cámara federal de La Plata ejercerá jurisdicción en los departamentos judiciales que las leyes de la provincia de Buenos Aires denominan capital, centro y norte, y además en los territorios nacionales del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Art. 4o.—La cámara federal de La Plata remitirá sin más trámite a la cámara federal de Bahía Blanca las causas que por su jurisdicción a ésta le correspondan.

Art. 5o.—Destínase la suma de 20.000 pesos para los gastos de instalación de esta cámara.

Art. 6o.—Los gastos que exija la ejecución de la presente ley se imputarán a gastos generales, hasta tanto sean incluidos en la ley de presupuesto.

Art. 7o.—Comuníquese etcétera.

Buenos Aires, septiembre 10 de 1918.

Arturo Isnardi. — Francisco A. Riú. — V. Vergara.

Sr. Isnardi. — Señor presidente.

El proyecto que se presenta a la consideración de la honorable cámara no es una novedad.

Se trata de la reproducción del que fué presentado por el diputado Escobar en las sesiones del año 1910, con algunas modificaciones respecto a la jurisdicción que se le confiere al nuevo tribunal.

Al fundar en aquella época su proyecto, decía el mencionado legislador: "Pueden desde luego calcularse los inconvenientes de todo orden que para la expedición de la justicia en definitiva se produjeran, manteniendo como única cámara de apelaciones la de La Plata. Habrá justicia rápida en primera provincia, que nos sorprende a diario me distancia de la cámara en que quedan los juzgados en la actualidad, la creciente población de la primera provincia, que nos sorprende a diario con la elocuencia de la estadística, el movimiento comercial de los numerosos puertos existentes agregados a los que se formarán en Mar del Plata. Quequén, Samborombón, etcétera".

Agréguese a todo esto los progresos crecientes de algunos territorios australes, el desarrollo y multiplicación de las relaciones y de los negocios de la vida civil y comercial destinados a recargar proporcionalmente el trabajo judicial y quedará evidenciado que una sola cámara no puede funcionar con la celeridad deseable, pues tiene que desempeñar una tarea que sobrepasa a la humanamente exigible.

Ahora bien; para demostrar en una forma indiscutible la premiosa necesidad de convertir en ley este proyecto, me concretaré a señalar ligeramente el movimiento de expedientes elevados en apelación el año próximo pasado en las diversas cámaras federales de la república, sin perjuicio de llevar al seno de la comisión de justicia un mayor abastecimiento de datos y antecedentes para que pueda formular un despacho equitativamente favorable.

Según la última memoria presentada por el ministerio de justicia a la honorable cámara, resulta que han entrado en apelación en la cámara federal de la capital 773 expedientes, en la de Paraná 615, en la de Santa Fe 215, en la del Rosario 377, en la de Córdoba 226, y en la de La Plata 997, sin contar los de los territorios del Chubut y Tierra del Fuego, que no constan en la referida memoria.

El promedio de sentencias definitivas dictadas

debe calcularse entre 450 y 500, como puede comprobarse en la memoria ya mencionada. De modo pues, que las cifras precedentes mejor que cualquier otra argumentación contribuyen a demostrar palmariamente que por más laboriosidad que pueda desplegar la cámara federal de La Plata se encuentra en la imposibilidad material de dar plena satisfacción a su tarea, que, como queda evidenciado, no admite comparación con la que corresponde a los demás tribunales colegiados de la justicia federal.

He fijado, señor presidente, como jurisdicción de esta cámara, además de la que le corresponde al juzgado federal de Bahía Blanca, la de los territorios de la Pampa, Neuquén, y Río Negro, por encontrarse ligados directamente por vías de comunicación fáciles y rápidas lo que no ocurre con los territorios del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pues he sabido que estos últimos territorios carecen de comunicación con Bahía Blanca porque la ruta marítima se efectúa desde esos territorios directamente al puerto de Buenos Aires.

Me asiste la seguridad de que este proyecto merecerá la aprobación de la honorable cámara, puesto que él tiende a la consagración de un alto concepto de gobierno, cual es el de mejorar las condiciones de la vida en esas apartadas y nacientes poblaciones, donde es indispensable atraer, por el aliciente de las seguridades y garantías sociales, no sólo el esfuerzo del nativo, sino el trabajo fecundo de la sana inmigración europea, que tienen allí tan vasto campo de acción. Poner la justicia, ha dicho alguien, al alcance de los interesados, y hacer de modo que se administre rápida y económicamente, importa tanto como crearla.

—A la comisión de justicia.

La comisión de justicia despachó, el 2 de agosto, los proyectos de los diputados Parry, González e Isnardi, aconsejando la sanción del primero.

PROYECTO DE LEY

Sobre pronta terminación de las causas

Honorable cámara:

Vuestra comisión de justicia ha estudiado las contestaciones dadas a la encuesta realizada entre los magistrados y profesores, relativa a la organización de tribunales, y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 10. — Las cámaras de apelación de la justicia federal u ordinaria, compuestas de cinco miembros, pueden dictar resoluciones y sentencias por el voto de tres de sus miembros, si entre ellos hubiere conformidad de opiniones. Las cámaras compuestas de tres jueces pueden dictar resoluciones y sentencias por el voto de dos de ellos, si hubiere conformidad de opiniones.

Art. 20. — Durante el mes de julio de cada año, la suprema corte de justicia, las cámaras y jueces federales y las cámaras y jueces de la capital y territorios nacionales, elevarán a la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación una nómina de los expedientes que desde el año anterior se encontraren en estado de sentencia, con expresión de las causas de la demora.

Art. 30. — Las correcciones disciplinarias decretadas contra un magistrado comprendido en el artículo 45 de la constitución, serán comunicadas inmediatamente de consentidas a la comisión de justicia de la honorable cámara de diputados de la nación.

Art. 40. — La forma de intervenir el fiscal, el ase-

sor de menores y el representante del consejo nacional de educación en los asuntos en que sean parte, será la mera notificación del auto en que se les llame a juicio y de las demás resoluciones que se dicten, a fin de ponerles en condiciones de formular las peticiones que consideren pertinentes. Se les correrá vista cuando lo soliciten, lo que podrán hacer en el acto de la notificación, ya sea ésta personal o por medio de cédula dejada en sus despachos, y cuando el fiscal deba formular acusación.

Art. 50. — En caso de excusación o recusación de uno o más de miembros de un tribunal colegiado, se pronunciarán sobre ella los miembros o miembro que quede hábil.

Art. 60. — Las notas, exhortos, oficios o mandamientos expedidos por un tribunal o por un juzgado serán exclusivamente firmados por el secretario respectivo. Las providencias de mero trámite serán dictadas por el secretario, procediendo siempre el recurso de revocatoria ante el juez o tribunal, recurso que será resuelto sin más trámite y sin oír a la contraparte.

Art. 70. — Las notificaciones practicadas en la oficina serán firmadas por el oficial primero de secretaría.

Art. 80. — Se impondrán veinte pesos de multa al ujier, oficial de justicia o empleado que demore 48 horas una notificación por cédula.

Art. 90. — En los juicios civiles y comerciales, se presume que las partes renuncian al fallo de primera instancia si ninguna de ellas hace expresa manifestación en contrario al alegar de bien probado o al oponer o contestar excepciones. En ausencia de tal manifestación, el juez elevará el expediente sin más trámite, y la cámara llamará "autos". Dentro de tercero día de notificada esta providencia, las partes podrán pedir revocatoria, fundada en la existencia de la manifestación contraria a la renuncia de la primera instancia. Podrán igualmente recusar, ofrecer prueba en los casos en que proceda, según el procedimiento de segunda instancia, y exigir, en todos los casos, absolución de posiciones al contrario.

Art. 10. — Los jueces rechazarán de oficio o inapelablemente toda diligencia probatoria que consideren inútil o impertinente, sin perjuicio del derecho de las partes para reclamar cuando el juicio se encuentre en segunda instancia.

Art. 11. — Los pedidos de regulación de honorarios serán resueltos sin trámite alguno. Cuando el honorario sea estimado por el peticionante en menos de un

mil pesos, la resolución será inapelable para ambas partes.

Art. 12. — El procurador que renucie el mandato, deberá expresar, en el mismo acto, el domicilio de su mandante. Si omitiere hacerlo o denunciare un domicilio que no es el verdadero, se le impondrán cien pesos de multa.

Art. 13. — Comuníquese, etc.

Sala de la comisión, septiembre de 1921.

Roberto Parry. — Herminio J. Quirós.
— Luis M. Daneri. — José T. Olmos. — José María Martínez.

—

INDICE

INDICE

	Pág.
Comisión de justicia.....	3
Nota pasada por la comisión a magistrados, profesores de derecho y abogados.....	5

Contestaciones a la encuesta, de los señores:

Dr. José Nicolás Matienzo.....	6
Doctores González, Posse y Berduc.....	19
Dr. F. Díaz de Vivar.....	24
" César B. Pérez Colman.....	26
" Clodomiro Zavallía.....	28
" Saúl M. Escobar.....	36
" Néstor N. Fernández.....	44
" Manuel Carrillo.....	45
" Félix Martín y Herrera.....	50
" Tristán M. Avellaneda.....	58
" Matías Mackinlay Zapiola.....	63
" Nicolás González Iramain.....	68
" Napoleón Paz (hijo).....	82
" Juan José Coronado.....	83
" Carlos Guerino.....	84
" José Miguens.....	85
" Angel M. de la Colina.....	86
" Ricardo Ortíz de Rozas.....	92
" José Antonio de Oro.....	97
" Fernando Klappenbach.....	107
" Elías Raffo.....	117
" J. F. Luna.....	119
" Julio B. Echegaray.....	125
" Carlos M. Martínez.....	131
" Dalmiro E. Alsina.....	152
" Adolfo Casabal.....	155
" J. Y. Cáceres.....	159
" D. Cereso.....	163

Dr. B. García Torres.....	166
" Antonio de Tomaso.....	168
" M. Laurencena.....	169
" Manuel Mora y Araujo.....	173
" Edgardo J. Miguez.....	174
" R. Wilmart.....	176
" P. Olaechea y Alcorta.....	180
" Rodolfo Rivarola.....	182
" Estanislao S. Zeballos.....	228
" Pablo Calatayud.....	229
" L. A. Podestá Costa.....	231
" Horacio C. Rivarola.....	232
" Federico Pinedo.....	234
" Juan P. Ramos.....	235
" Juan Carlos Rébora.....	239
" Ernesto J. Weigel Muñoz.....	241
" Santiago G. O'Farrell.....	245
" Fernando Cermesoni.....	246
" Germán Wernicke.....	258
" Octavio R. Amadeo.....	260
" Antonio Robirosa.....	260
" Juan A. García.....	262
" Rodolfo J. Clusellas.....	264
" Emilio Reviriego.....	266
" Luis Rufo.....	270
" José Luis Murature.....	271
" J. F. Núñez Lozano.....	275
" Manuel Moyano.....	277
" D. Tezanos Pinto.....	278
" Felipe Senillosa.....	280
" Antonio A. Giordano.....	282
" C. Rodríguez Egaña.....	283
" Ernesto Carranza.....	288
" Ricardo C. Aldao.....	289
" Eudoro Gorlero Pizarro.....	290
" Felipe Díaz Arana.....	292
" Eusebio Gómez.....	293
" Arturo Pillado Matheu.....	296
" Francisco Durá.....	298
" Héctor Lafaille.....	302
" Carlos M. Vico.....	304
" W. Reffino Pereyra.....	305
" Daniel Antokoletz.....	307
" Antonio Peyrou.....	312
" Juan J. Britos (hijo).....	335

	Pág.
Dr. Esteban Lamadrid.....	337
" Clodomiro Cordero.....	340
" E. Sarmiento Laspiur.....	343
" David Lascano (hijo).....	345
" Agustín de Vedia.....	355
" Agustín N. Matienzo.....	385
" Félix R. Escobio.....	405
" Arturo García Rams.....	412
 Proyectos sobre creación de cámaras federales de apelación, de los señores diputados:	
Dr. Roberto Parry.....	423
" José Antonio González.....	430
" Arturo Isnardi.....	433
Proyecto sobre pronta terminación de las cau- sas	439